



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO

TESIS DOCTORAL

GOBERNAR EN TIEMPOS DE CONSTITUCIÓN. LOS ORÍGENES DEL
CONSTITUCIONALISMO PROVINCIAL RIOPLATENSE A PARTIR DE LA EXPERIENCIA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (1821-1855)

Autor

Juan Ferrer

Directores

Marta Lorente Sariñena

Alejandro Agüero Nazar

Madrid, 2015

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

I. UN VACÍO, PERO HISTORIOGRÁFICO.....	7
I. MARCO CONTEXTUAL	12

CAPÍTULO I

GÉNESIS Y SANCIÓN DEL REGLAMENTO PROVISORIO DE 1821

I. LA CONSTRUCCIÓN DE UN ¿NUEVO? SUJETO POLÍTICO: LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.	23
I. 1. Juan Bautista Bustos y su proyecto federal	23
I. 2. Repercusión de Arequito en Córdoba: Sustitución del Gobernador.....	26
I. 2. 1. Pueblo, cabildo, representación.....	30
I. 3. Convocatoria a la Provincia. Elecciones y formación de una Asamblea Soberana.....	34
I. 4. Instalación de la Soberana Asamblea	43
I. 4. 1. Algunas cuestiones previas: Atribuciones de la Asamblea y calidad de sus miembros.....	43
I. 4. 2. Declaración de la Independencia de la Provincia.....	48
I. 4. 3. Elección de Gobernador propietario: Juan Bautista Bustos	50
II. EL PROCESO CONSTITUYENTE CORDOBÉS DE 1821	51
II. 1. Los representantes cordobeses y sus poderes para dar una Constitución.....	51
II. 2. Reglamento Provisorio o Constitución Permanente: la provisionalidad como regla....	56
II. 3. Una Comisión para hacer la Constitución: composición y labor	63
II. 3. 1. José Gregorio Baigorri.....	65
II. 3. 2. José Norberto de Allende.....	67
II. 3. 3. Encargar la Constitución.....	70
II. 4. Fin de la labor de la Comisión y elevación de su proyecto.....	71
II. 5. Presentación del proyecto a la Asamblea y sanción del Reglamento Provisorio	74
II. 6. Impugnación de la sanción: ¿Es nula la Constitución?.....	77
II. 7. Promulgación, publicación, difusión y vigencia del Reglamento Provisorio	80

CAPÍTULO II

1821: ¿INGENIERÍA CONSTITUCIONAL?

I. LA DIMENSIÓN TEXTUAL DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL	87
I. 1. El texto del Reglamento	89
I. 1. 1. La estructura de la Constitución.....	93
I. 1. 2. Dos dimensiones: Provincial y Federal.....	96

II. CONSTITUCIONALIZAR UNA VIEJA REPÚBLICA “TEXTUALIZANDO” LA TRADICIÓN.....	99
II. 1. Una república católica	102
II. 1. 1. Patria cristiana. Su impacto en la vigencia de los derechos y las libertades	103
II. 2. Ciudadanía y Sistema Electoral.....	106
II. 2. 1. Ciudadanía.....	107
II. 2. 2. El Sistema electoral	112
II. 2. 2. 1. Antecedentes locales.....	112
II. 2. 2. 2. Disposiciones constitucionales en materia electoral	115
II. 2. 2. 3. Balance sobre el sistema electoral	122
II. 3. Derechos y Garantías.....	124
II. 3. 1. Derechos y ley	129
II. 3. 2. Derechos y justicia	130
II. 3. 3. Derechos y libertades	131
II. 4. Los poderes por su nombre.....	134
II. 4. 1. Poder Legislativo.....	136
II. 4. 2. Poder Ejecutivo y Gobierno	140
II. 4. 2. 1. Antecedentes	140
II. 4. 2. 2. Disposiciones constitucionales	141
II. 4. 3. Poder Judicial y Administración de Justicia.....	145
II. 4. 3. 1. Antecedentes	145
II. 4. 3. 2. Disposiciones constitucionales	146
III. DIMENSIÓN FEDERAL DEL CONSTITUCIONALISMO PROVINCIAL	150

CAPÍTULO III

EL DERROTERO DEL CONSTITUCIONALISMO EN CÓRDOBA (1821-1847)

I. LA CONSTITUCIÓN EN MARCHA. PUESTA EN PLANTA DEL REGLAMENTO PROVISORIO	155
I. 1. ¿Qué dice la Constitución? Interpretación y aplicación del texto constitucional.....	158
I. 2. La dimensión extraordinaria. Constitución y poder político.....	162
II. EL CONGRESO PROVINCIAL, CUERPO SOBERANO DE REPRESENTANTES	170
II. 1. La selección de los representantes, sus prácticas y estatus.....	171
II. 1. 1. Incompatibilidades e inmunidades parlamentarias.....	177
II. 2. El funcionamiento de la Sala de Representantes	183
II. 3. Tensión entre poderes e intermitencias del Congreso	188
III. EL GOBERNADOR, JEFE POLÍTICO DE LA PROVINCIA	195
III. 1. Elección y reelección del Gobernador.....	195
III. 2. El mando de la Provincia en ausencia del Gobernador	203
IV. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UNA FUNCIÓN, VARIOS PODERES	209
IV. 1. Una larga transición hacia la consolidación de un poder del estado	209
IV. 2. La inestable formación del Tribunal de Apelaciones.....	216
IV. 3. La administración de justicia en la campaña. Reforma y confirmación	228

CAPÍTULO IV
REESCRITURAS DE LA CONSTITUCIÓN
¿RENOVACIÓN CONSTITUCIONAL?

I. VIGENCIA DEL TEXTO, VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN	235
I. 1. Reformas aisladas al texto	236
I. 2. Paquetes de reformas	240
I. 2. 1. Primer momento (1826)	240
I. 2. 2. Segundo momento (1830-1832). Reformas y publicación oficial del texto	244
II. EL CÓDIGO CONSTITUCIONAL PROVISORIO DE 1847	246
II. 1. Génesis y Sanción del Código Constitucional Provisorio de 1847	246
II. 1. 1. Necesidad de reforma y debate constituyente	246
II. 1. 2. Revisión del P.E. y publicación(es)	257
II. 2. El nuevo texto. Prácticas hechas Constitución	262
II. 2. 1. Fortalecimiento de la figura del Gobernador	263
II. 2. 2. La exclusión del enemigo político y conservación del orden	266
II. 2. 3. La apoteosis de la soberanía de la Provincia	268
II. 2. 4. Derechos, Garantías y Administración de justicia	271
II. 2. 5. Ciudadanía y sistema electoral	273

CAPÍTULO V
EL HORIZONTE CONFEDERATIVO (1820-1855)

I. CÓRDOBA Y EL RESTO DE LAS PROVINCIAS RIOPLATENSES	277
I. 1. La dimensión federal de la política cordobesa durante la primera mitad del XIX	277
II. CÓRDOBA Y LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA	289
II. 1. Córdoba y el Congreso General Constituyente de Santa Fe	294
II. 1. 2. Los debates sobre el texto de 1853 y su eco en Córdoba	297
II. 2. Relaciones intertextuales entre los documentos cordobeses y el federal de 1853	310
III. LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DE 1855	318
III. 1. La necesaria adaptación de Córdoba a la Constitución de 1853	318
III. 2. La Constitución Provincial de 1855 y su derrotero en el Congreso Nacional	323
III. 3. ¿Un nuevo texto para un nuevo tiempo?	326
CONCLUSIONES	333

ANEXO

Cronología de la historia política del Río de la Plata y Córdoba (1810-1855)	341
Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba de 1821	343
Código Constitucional Provisorio de la Provincia de Córdoba de 1847	373
Constitución para la Provincia de Córdoba de 1855	389

BIBLIOGRAFÍA	403
---------------------------	------------

INTRODUCCIÓN

*“Día llegará, –cuando nosotros y nuestros hijos hayamos desaparecido de la tierra–, en que otros hombres y otras ideas traigan la contribución de sus luces, á iluminar ese abismo de la anarquía y el caudillismo argentinos, sobre todo desde el año XX hasta 1852. Entonces tal vez aparezca justificable lo que hoy se mira como condenable, porque el criterio de la posteridad es siempre más imparcial y desapasionado que el de los contemporáneos ó sus sucesores inmediatos”*¹.

I. UN VACÍO, PERO HISTORIOGRÁFICO

¿Por qué las constituciones provinciales que se sancionaron a partir de 1819, hasta la promulgación de la primera constitución federal en 1853, no forman parte de la historia constitucional argentina? La hipótesis es totalmente intencional. Aclarando un poco su sentido se podrá construir una argumentación despejada de falacias que conduzca hacia la respuesta a la pregunta que dispara esta investigación. Un repaso de las obras de historiografía constitucional argentina por cualquier observador atento arroja como resultado una suerte de “vacío constitucional” en el período 1820-1853². Imagen que apenas resulta matizada, cuando procede, por el análisis de un Congreso General Constituyente que no alcanza a reunirse³; otro que, reunido, sanciona una Constitución que no es aceptada⁴; y unos cuantos pactos interprovinciales que, con mayor o menor discrecionalidad, se seleccionan de un conjunto cuantitativamente más grande⁵. Esta

¹ VARELA, L. (1910) *Historia Constitucional de la República Argentina*, Tomo III, Taller de impresiones oficiales, La Plata, p. 344.

² En una de las más recientes obras de Historia Constitucional argentina, se dice que luego del Congreso rivadaviano de 1824 “... y como consecuencia de los fracasos constantes en consolidar un régimen constitucional estable, la Argentina queda sumida constitucionalmente en un letargo del cual despertará un cuarto de siglo después.”, BIANCHI, A. (2007) *Historia de la Formación Constitucional Argentina (1810-1860)*, Lexis Nexis, Buenos Aires, p. 1.

³ En 1821 el General Juan Bautista Bustos impulsó la reunión de un Congreso Nacional en Córdoba persiguiendo el ansiado objetivo de la organización constitucional. Todo marchaba bien hasta que en enero de 1822 Buenos Aires y las provincias del litoral firmaron en Santa Fe el Tratado del Cuadrilátero y con él la partida de defunción del proyecto de Bustos.

⁴ Entre diciembre de 1824 y agosto de 1827 sesionó en Buenos Aires el Congreso General Constituyente que sancionó, el 5 de diciembre de 1826, una Constitución de factura unitaria rechazada por las provincias.

⁵ La práctica de celebración de pactos o tratados entre las provincias tuvo una amplia difusión a partir de 1820 –aunque hay pactos celebrados anteriormente–. Sin embargo, en las obras de historia constitucional suelen citarse sólo un puñado de ellos, casualmente, los que son aptos para sostener el relato de unos orígenes remotos de la nación argentina, previos a 1810, y la búsqueda por superar el momento de disgregación contingente de una unidad política previa. Como ha dicho SAN MARTINO DE DROMI,

actitud de los historiadores constitucionales no debería llamar la atención si durante esos treinta años no se hubieran sancionado, por las diferentes provincias que integraban una década antes el Virreinato del Río de la Plata, toda una serie de documentos, más y menos complejos, de ingeniería constitucional para la organización jurídico-política del espacio local; como históricamente sucedió⁶.

La perplejidad sobre esta suerte de “ausencia de constitución” durante el período mencionado es mucho más intensa si, dejando de lado las obras específicas dedicadas a la historia constitucional argentina, se revisan los trabajos de Derecho Constitucional del país. En la mayoría de ellos, pese a que se reconoce en la Constitución argentina rasgos de tipo “histórico-tradicional”, se echa de menos una reflexión acerca del proceso histórico que tuvo lugar antes de su sanción⁷. En otros, se hallan mejores y peores referencias a la historia de lo que acabará siendo Argentina realizadas generalmente con un propósito más político que científico: el de afirmar y engrandecer las soluciones constitucionales oportunamente adoptadas, pidiendo prestado a la historia la legitimación que ella es capaz de ofrecer⁸. La metodología y estructura de los tantos párrafos sobre

“Debemos admitir que en lo que a pactos provinciales se refiere existen dos realidades: aquellos conocidos y publicados y aquellos otros, los desconocidos y olvidados. Siempre se ha hecho hincapié en los primeros, léase Cuadrilátero, Benegas, Federal, San Nicolás, San José de Flores. En verdad, ellos tuvieron por objetivo esencial la organización nacional y como protagonista principal a la Provincia de Buenos Aires. Pero reconocemos que hubo un centenar más en los cuales, aunque el tema convocante no fuera la organización e institucionalización de la Nación, existieron otras razones de peso para su suscripción: la paz, la tranquilidad, la defensa, el comercio”, SAN MARTINO DE DROMI, M. (1995) *Formación Constitucional Argentina*, Ciudad argentina, Buenos Aires, p. 82. Por otra parte, el estudio de los pactos interprovinciales en la historiografía argentina no ha explorado densamente las posibilidades que su análisis puede arrojar en lo que a la naturaleza de las entidades que participan en la celebración de esos acuerdos se refiere, como por ejemplo ha realizado para el caso de Nueva Granada GUTIÉRREZ ARDILA, D. (2010) *Un Nuevo Reino. Geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno en Nueva Granada (1808-1816)*, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá.

⁶ Durante el período 1819-1853 se sancionaron en el territorio del ex Virreinato del Río de la Plata, entre Estatutos, Reglamentos y Constituciones provinciales un total de 18 textos —más y menos extensos— y se sometieron a consideración de los órganos correspondientes 7 proyectos de constitución. El detalle de todo este panorama constitucional será analizado más adelante.

⁷ Como señala uno de los constitucionalistas argentinos más respetados del siglo XX respecto de la Constitución Nacional de 1853-60, “Hay que preguntarse, en primer lugar, si en esa constitución formal, codificada y rígida, el contenido ideológico, las valoraciones, las normas, las instituciones, y el sistema de organización en general, son producto de una elaboración puramente racional, o son producto de la tradición histórica. En forma equivalente, hay que formular el interrogante de si el autor de la constitución la planificó como una abstracción de gabinete extrayendo su esquema de un razonamiento puro, o si volcó en su cauce un contenido vital emergente del medio social, de la tradición, de la historia. Nuestra tesis se encamina a demostrar... que la constitución de 1853-60 no fue hija del racionalismo puro ni de una planificación normativa abstracta, sino expresión de un curso peculiar de gestación y composición que aportó al proceso, a las fuentes, y al contenido de aquella constitución, los elementos configurativos y los ingredientes de lugar y de tiempo propios de nuestra comunidad [...] la constitución reconoce y ostenta características fundamentales del *tipo tradicional-historicista*”, BIDART CAMPOS, G. (1976) *Historia Política y Constitucional Argentina*, Tomo I, EDIAR, Buenos Aires, pp. 323-324.

⁸ En el caso de los estudios referidos a la Constitución de Córdoba de 1821, por ejemplo, se ha dicho que “El estudio de esta Constitución no es tenido en cuenta en los tratados de Historia Constitucional, siendo muy superior a las unitarias de 1819 y 1826, que se pretende poner como principales antecedentes argentinos de la del 53, de estructura jurídica totalmente distinta y que siguió la orientación federativa de la Constitución cordobesa”, y al mismo tiempo, “reconoce la pre-existencia de la Nación, al ser el único Estatuto argentino que, antes del 53, determina las funciones de la justicia federal”, DÍAZ DE MOLINA, A.

antecedentes constitucionales o antecedentes históricos, según sea el autor bajo examen, no varían considerablemente: un relato de los acontecimientos de mayo de 1810 resaltando la modernidad del lenguaje político revolucionario, y un catálogo de Decretos, Estatutos, Reglamentos, Proyectos de Constitución y Constituciones fracasadas. Es además un lugar común reconocer el origen –incluso literal– de las disposiciones constitucionales posteriores sin tomar seriamente en cuenta el error que implica analizar una norma o precepto jurídico desprovisto del imaginario jurídico propio del contexto de producción y de atribución de sentido. Generalmente se pasa por alto el ejercicio de atender a la cultura jurídica del mundo donde operó, se lo considera aisladamente y proyecta sobre él significados actuales que jamás podría haber tenido en su momento⁹. Ya habrá oportunidad de reflexionar sobre la metodología más apropiada para la reconstrucción de la historiografía constitucional, volvamos al camino para encontrar una respuesta a la pregunta sobre las primeras constituciones provinciales y el ostracismo al que han sido condenadas en la construcción de la historia constitucional argentina.

Sin entrar todavía en la disputa sobre la calificación que corresponde a esos textos constitucionales de la primera mitad del siglo XIX, la propuesta es que por el momento sólo se retenga la imagen de una historiografía –y una ciencia constitucional– que, puesta a develar el pasado constitucional argentino suelen pasar por alto aquellos documentos provinciales. Las razones sobre esta exclusión pueden ser muchas y de la más variada índole, desde el interés subjetivo del investigador hasta el pragmatismo de maridar aquellas obras con la estructura de los programas de enseñanza de la historia constitucional, pero incluso en estos casos podríamos situarnos un escalón más arriba y preguntar por qué los textos constitucionales provinciales no despiertan tanto interés entre los investigadores o por qué en general los programas de enseñanza no los incluyen en su currículo¹⁰. Sin embargo, existen dos razones que podrían operar como condiciones suficientes justificando esa exclusión: por una lado, la concepción predominante en la tradición histórico-constitucional argentina sobre los orígenes de la nación, y por otro, una precomprensión acerca de los actores que protagonizaron el período y de su actitud – y del resto de autoridades políticas– frente a los textos constitucionales.

(1958) “La Constitución cordobesa de 1821 y su influencia institucional”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Nro. 9, p. 88.

⁹ Para una densa reflexión acerca de la necesidad de contextualizar los preceptos normativos y hallar la razón local de su sentido pueden considerarse los trabajos de muchos autores enrolados en la corriente historiográfica crítica del derecho, por todos, HESPANHA, A. (2002) *Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio*, Tecnos, Madrid.

¹⁰ Los programas de las asignaturas “Historia Constitucional Argentina” e “Historia del Derecho” que han sido relevados, de las diferentes universidades, no incluyen entre sus contenidos el análisis sobre los textos provinciales. En el sentido mencionado, GALVEZ reconoce el condicionamiento de su abordaje del tema en función de las necesidades docentes: “Este libro nació como una exigencia que me impuse al asumir la cátedra de Historia Constitucional, como titular, en la Universidad Argentina de Ciencias Sociales. Trato de ser didáctico porque la dedico a los jóvenes que terminan el ciclo secundario o comienzan el universitario, además del lector común”, GALVEZ, J. (1967) *Revisionismo Histórico Constitucional 1810-1967*, Celcius, Buenos Aires.

En primer lugar, como hace tiempo lo mostraron CHIARAMONTE y BUCHBINDER, la tesis sobre los orígenes remotos de la nación argentina dominó “la Historia Constitucional Argentina y la enseñanza del Derecho Constitucional desde fines del siglo XIX...”; el contenido esencial de esta postura es la defensa de una idea según la cual “la nación se hallaba prefigurada desde tiempos coloniales”¹¹. Se trata de una afirmación postulada en el siglo XIX por quienes serían considerados posteriormente los primeros grandes constructores de la historiografía argentina: Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López¹². Semejante construcción historiográfica fue recogida por los constitucionalistas de finales del ochocientos y reproducida interesada e intencionalmente “a lo largo de todo el siglo XX debido, entre otros factores, a la presunción de su eficacia para cimentar el sentimiento y la idea de nacionalidad”¹³.

Ahora bien, cabría indagar cómo puede haber influido esta particular concepción acerca de los orígenes de la nación en la determinación del objeto de estudio de la historiografía constitucional argentina, excluyendo las constituciones provinciales de la primera mitad del siglo XIX. Es decir, ¿por qué la afirmación de que en los inicios de la vida independiente ya existía una nación argentina –o rioplatense– es una razón para no ocuparse de los textos constituciones provinciales sancionados durante la primera mitad del siglo XIX? La respuesta sigue un esquema de razones encadenadas. Predatar el nacimiento de la nación argentina tiene una consecuencia necesaria: la caída del Gobierno Central en 1820 es un fenómeno que abre un proceso de disgregación de la unidad, un momento político constitucional que debe rápidamente superarse volviendo a unir lo que la violencia desunió. Esta concepción tiene otra consecuencia necesaria: empañar el desarrollo constitucional provincial, ya que la actividad constitucional de las provincias en esta época no tiene la trascendencia que sí debe atribuirse a los pactos interprovinciales celebrados con el objeto de intentar unir lo desunido.

En segundo lugar, la otra de las razones anunciadas como causa de exclusión del fenómeno constitucional provincial en las obras de historiografía argentina, está relacionada con el juicio de valor negativo que durante mucho tiempo calificó a unos “bárbaros” caudillos provinciales. La visión del período como una historia clásica de caudillos, caracterizada por “la ruralización de la política, la violencia como modo de competencia política y el mito del vacío institucional”, ha empañado su comprensión¹⁴. Una corriente de historiadores constitucionalistas emprendió la tarea de reivindicar la

¹¹ CHIARAMONTE, J. y BUCHBINDER, P. (1992) “Provincias, caudillos nación y la historiografía constitucionalista argentina, 1853-1930” en *Anuario del IEHS*, Nro. VII, Tandil. Véase también en esta línea Gabriela TÍO VALLEJO (2004) *Tras las huellas de la Nación: Los pasos perdidos de la historiografía argentina*, Instituto de Investigaciones Históricas Dr. Ramón Leoni Pinto, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.

¹² TÍO VALLEJO, G. (2004) Ob. cit., p. 27.

¹³ CHIARAMONTE y BUCHBINDER, ob. cit., p. 120.

¹⁴ Cfr. GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (2005) “Introducción”, en ídem (comp.), *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, 2ª. ed., Eudeba, Buenos Aires, p. 8. A esa visión clásica, “Alberdi agregó dos atributos: el caudillismo era un gobierno sin ley que se daba en un contexto de debilidad del Estado (...) los Estados provinciales estaban condenados a soportar gobiernos despóticos, no institucionalizados”, ídem, p. 9.

figura de los caudillos, centrada en “la cuestión de la contribución de los caudillos provinciales a la formación del Estado-nación argentino y, en particular, en relación a su organización constitucional”¹⁵. Pese a ello, el mito del “vacío institucional” luego del colapso del gobierno central en 1820, en general, continuó condicionando el análisis histórico y el fenómeno del caudillismo fue una de las explicaciones más corrientes del fracaso de los proyectos de organización constitucional durante la primera mitad del siglo XIX. Toda esta imagen propició la minusvaloración de los procesos de redacción y sanción de textos constitucionales en las distintas provincias. Puesto que las prácticas políticas e institucionales muchas veces sobrepasaban la letra de esas normas constitucionales, se desarrolló la idea de que esos documentos no fueron más que simples “papeles mojados” sin vigencia ni eficacia.

Sin embargo, estas razones han perdido el peso que supieron tener, y hace ya varios años que se viene generalizando la aceptación del carácter mitológico de la afirmación de una nación preexistente y la potencia explicativa de nuevos enfoques acerca de la vida política e institucional en las ciudades, provincias o estados¹⁶. La historiografía, tanto argentina como hispanoamericana, ha superado la perspectiva nacionalista para la explicación del tiempo que siguió a la crisis de la Monarquía Católica, prescindiendo “de la idea de que las naciones conformaban una suerte de embriones que aguardaban solamente el calor de la Ilustración y la revolución para salir a la luz y manifestarse en toda su plenitud”¹⁷. Esta actitud condujo, simultáneamente, a la

¹⁵ Ídem, p. 18. Este esfuerzo correspondió a una serie de profesores de derecho constitucional o historia constitucional que desarrollaron su visión en la Universidad Nacional de La Plata, entre ellos, Luis Varela, Juan González Calderón, y Emilio Ravignani, cfr. BUCHBINDER, P. (2005) “Caudillos y caudillismo: una perspectiva historiográfica”, en GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comp.), *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, 2ª. ed., Eudeba, Buenos Aires, pp. 31-50, p. 43.

¹⁶ En relación con la cuestión de la preexistencia o no de la nación argentina, hay algunos trabajos que problematizan más densamente el asunto y no son tan categóricos a la hora de desechar la idea de los orígenes remotos de la nación. En este sentido, puede consultarse la obra de PALTÍ, E. (2002) *La nación como problema. Los historiadores y la “cuestión nacional”*, FCE, Buenos Aires.

¹⁷ PORTILLO, J. (2010) “Prólogo”, en CALDERÓN, M. y THIBAUD, C., *La Majestad de los Pueblos en la Nueva Granada y Venezuela 1780-1832*, Taurus, Bogotá, p. 17. Las independencias hispanoamericanas se transformaron en un “objeto” de historia. Muchos trabajos son los que han repensado el proceso de independencia a partir de unas nuevas coordenadas temporales y espaciales, obras como la de GUERRA, FRANÇOIS-XAVIER (2000) *Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas*, Mapfre, Madrid, hasta la compilación HÉBRARD, V. y VERDO, G. (2013) (eds.) *Las independencias hispanoamericanas: un objeto de historia*, Casa de Velázquez, Madrid, pasando por trabajos como el de PORTILLO, J. (2006) *Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana*, Fundación Carolina, Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, Marcial Pons, Madrid. El nuevo enfoque que venía desarrollándose hizo surgir a los pueblos como los nuevos protagonistas del proceso, sobre este fenómeno y su importancia ha reflexionado Antonio ANNINO en trabajos como (1994) “Soberanías en lucha”, en ANNINO, A., CASTRO LEIVA, L. y GUERRA, F. () *De los imperios a las naciones: Iberoamérica*, Ibercaja, Zaragoza; (1995) “Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, en ANNINO, A. (coord.), *Historia de las elecciones en Iberoamérica. Siglo XIX*, FCE, Buenos Aires. En el Río de la Plata también se ha repensado el siglo XIX con trabajos como los de CHIARAMONTE, J., que han servido para superar la idea de nación preexistente y revalorizar los espacios locales: (1993) *El mito de los orígenes en la historiografía latinoamericana*, Buenos Aires, Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani/Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras; (1993) “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en CARMAGNANI, M. (comp.), *Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 81-132; (1995a) “¿Provincias o Estados? Los orígenes del federalismo rioplatense”, en GUERRA, F. (dir.)

contextualización del proceso de las independencias en una dimensión atlántica, y a la revalorización de los espacios locales como protagonistas principales del fenómeno puesto que “el proceso que conduce en el tránsito de una prolongada crisis a la conformación de la república arrancó de los pueblos”, elementos basilares del orden político de la Monarquía que había entrado en crisis y protagonistas de la revolución¹⁸.

I. MARCO CONTEXTUAL

Si se acepta el punto de vista de quienes sostienen el carácter mitológico de la afirmación acerca de los orígenes remotos de la nación argentina, y el valor de los pueblos para la comprensión de los procesos de construcción estatales en Hispanoamérica, resulta indicado volver la mirada sobre las experiencias locales en todas sus dimensiones, entre ellas la político-constitucional, para deshilvanar la trama del fenómeno a efectos de su mejor –y más densa– comprensión. Entre finales del XVIII y principios del XIX el mundo occidental asistió a un proceso de cambio decisivo del orden político que ha sido calificado como “revoluciones atlánticas”; en ese contexto, la Monarquía Católica también se sumergió en una profunda crisis política¹⁹.

Iniciada en la primavera europea de 1808 luego de las abdicaciones de Bayona y la cesión de derechos dinásticos a Napoleón Bonaparte, la de la Monarquía Católica fue una crisis imperial que acabó desatando –en un segundo momento– un proceso de constitucionalización en todo el mundo hispano. Si bien el derrotero de este proceso acabó fraguando Estados nacionales tanto en la Península Ibérica como en toda América,

Revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Editorial Complutense, Madrid; (1997) *Ciudades, provincias, estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846)*, Emecé, Buenos Aires. También la obra de PALTÍ, E. ha contribuido en ese sentido: (2003) *La nación como problema. Los historiadores y la “cuestión nacional”*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires; (2007) *El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires. El protagonismo de los pueblos generó precisamente una verdadera disputa de poder en la construcción del nuevo sujeto político, como lo ha demostrado TERNAVASIO, M. (2007) *Gobernar la Revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

¹⁸ PORTILLO, J. (2010) Ob. cit., p. 20. Como ha reflexionado el mismo autor, “¿Quién si no los pueblos podían hacerse con buena lógica cargo de esa soberanía desprotegida? Las naciones al respecto no pintaban nada, a no ser y en forma puramente alegórica, la española como conjunto de todos los pueblos de la monarquía. Los pueblos en cambio, podría también habernos explicado cualquier publicista hispano, constituían los cuerpos políticos esenciales de la monarquía. A diferencia de instituciones como las audiencias, las chancillerías o hasta los mismos Consejos de gobierno de la monarquía, los pueblos eran esenciales y no aleatorios. Que existiera o no el Consejo de Castilla o la Audiencia de México era algo que no modificaba en sí el fundamento de la monarquía pues eran meros instrumentos de gobierno de los que se servía el monarca para cumplir las altas funciones que tenía encomendadas. Los pueblos, sin embargo, eran los únicos cuerpos políticos, las únicas repúblicas en puridad, que existían en la monarquía”, PORTILLO, J. (2004) “Autonomía y Constitución. La historiografía y la crisis atlántica de 1808”, en *Istor*, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Año IV, Nro. 16. Sobre el papel de las ciudades rioplatenses en el proceso que siguió a 1810 debe consultarse el trabajo de VERDO, G. (2012) “Ciudades en revolución: la independencia en el Río de la Plata”, en Encarna GARCIA MONERRIS y Carmen GARCIA MONERRIS (eds.) *Guerra, Revolución y Constitución (1808 y 2008)*, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, pp. 125-147.

¹⁹ Cfr. PORTILLO, J. (2006) Ob. cit.

los primeros pasos se desarrollaron en el ámbito de los espacios locales: los pueblos. Fueron precisamente éstos quienes protagonizaron la resistencia articulando una respuesta perfectamente legal para la situación excepcional en que se encontraba la Monarquía después de la ilegítima –por unilateral– cesión: “el *casus necessitatis*, justificaba no sólo la creación de instituciones de emergencia, como lo eran las juntas, sino también la actuación extraordinaria de asumir el gobierno y proceder a la defensa de la monarquía (...) la idea de haberse formado un depósito de la soberanía de Fernando VII, otorgaba cobertura legal a este proceder y lo alejaba, al tiempo, de su identificación con un acto revolucionario”²⁰. La multiplicación de juntas a lo largo y ancho de todo el territorio de la Monarquía incitó la creación de un cuerpo representativo de todas ellas; así fue como se erigió en el segundo semestre de 1808 la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino a la cual el resto de las juntas territoriales delegaron el depósito de soberanía. Fue en ese ámbito en el que “se produjo la evolución de la crisis que llevó a considerar la necesidad de una solución constitucional a la misma (...) el origen de la crisis no estaba sólo en la invasión imperial francesa sino, ante todo, en la mala constitución de la monarquía por lo que urgía reformarla”; se avanzaba así de una crisis que había comenzado siendo dinástica a otra de independencia de los pueblos para terminar transformándose en una crisis constitucional²¹.

Así fue cómo después de 1810 el Atlántico hispano se convirtió en un “gran laboratorio de experimentación constitucional”²². Se asistió entonces “a un extraordinario momento de imaginación y textualidad constitucional...” en el que “fue común una cierta cultura de la constitución que se conformó tanto por la contemplación, lectura y asimilación de los procesos previos de crisis constitucionales y revoluciones en Norteamérica, Francia y Haití, como de una cultura jurídico política que de manera bastante uniforme se extendía por la geografía hispana a través de universidades, academias y práctica del gobierno”²³.

Desde Cádiz hasta el Río de la Plata, pasando por el amplio espacio neogranadino, el centroamericano o el novohispano, el constitucionalismo temprano en el mundo hispano presentó una serie de rasgos comunes que hicieron de éste una experiencia política singular, entre otros: el nuevo constitucionalismo no derogó el viejo orden jurídico sino que asimiló muchos de sus dispositivos normativos constitucionalizándolos, lo que provocó serias superposiciones y tensiones entre categorías nuevas y viejas que convivieron en los textos y debieron complementarse; la ciudadanía fue entendida como vecindad, reducida a “la adscripción del individuo masculino de determinada edad y con autonomía familiar (es decir, no dependiente de patria potestad ajena) a una parroquia”; el

²⁰ LORENTE, M. (2012c) “Orígenes del constitucionalismo en el mundo hispano”, en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coord.) *Manual de Historia del Derecho*, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 331-362, p. 336.

²¹ Ídem, pp. 337-338.

²² La expresión corresponde a ANNINO, A. y TERNAVASIO, M. (Coords.) (2012) *El laboratorio constitucional iberoamericano: 1807/8-1830*, AHILA-Iberoamericana-Vervuert, Madrid.

²³ LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) *El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico (1808-1826)*, Colección Bicentenario de las Cortes de Cádiz, Congreso de los Diputados, Madrid, pp. 15-16.

estrecho vínculo que unió Religión y Constitución, en el que se destacó “la exclusividad de la religión católica y de sus valores morales como fundamentos del orden social y político”; o el planteo acerca de “cómo articular políticamente los pueblos en la nación ideando distintas formas de federación o de autogobierno de pueblos y provincias”²⁴. Esa unidad del proceso en todo el orbe hispano torna relevante el estudio de los distintos casos particulares, no con el ánimo parroquialista derivado de los relatos patrióticos, si no como indicios que permiten reconstruir el fenómeno global²⁵.

Aquella crisis del orden político de la Monarquía Católica, recién va a manifestarse en el Río de la Plata a partir del mes de mayo de 1810 cuando llegaron al puerto las noticias acerca de la transferencia del depósito de la soberanía realizada por la Junta Suprema al Consejo de Regencia. Dicho traspaso fue percibido como una extralimitación de las facultades de la Junta, motivo por el cual se desató una fuerte discusión y convocatoria a un cabildo abierto en la ciudad de Buenos Aires para decidir sobre la continuidad o no del virrey Cisneros: como había sido nombrado por la Junta, desaparecida ésta habría caducado el mandato de aquél. En el seno de la reunión extraordinaria del Ayuntamiento se enfrentaron dos posturas, una a favor de la continuación del virrey y de toda autoridad nombrada desde la Península, y otra –la que finalmente triunfó– decidiendo su deposición y la retroversión de la soberanía a los pueblos²⁶.

²⁴ LORENTE, M. (2012c) Ob. cit., pp. 359-361. En relación con el último de los rasgos apuntados, como han analizado ANNINO y TERNAVASIO, “la peculiar naturaleza que adoptó la crisis de la monarquía española desató dos procesos de independencia: uno de carácter *vertical* que gradualmente fue quebrando los lazos atlánticos con la metrópoli, y otro de carácter *horizontal*, que también de manera gradual –aunque con derroteros mucho más tortuosos– fue quebrando las estructuras territoriales americanas”, ANNINO, A. Y TERNAVASIO, M. (2012) “Crisis ibéricas y derroteros constitucionales”, en ídem (Coords.) *El laboratorio constitucional iberoamericano: 1807/8-1830*, AHILA-Iberoamericana-Vervuert, Madrid, pp. 15-33, p. 28.

²⁵ En ese sentido, “las miradas de conjunto han sido determinantes para la renovación de la historiografía dedicada al estudio de las revoluciones hispánicas, pues han permitido ensayar en varios contextos interpretaciones que habían sido desarrolladas para casos particulares y, sobre todo, han dado cuenta de la unidad del proceso, con lo que se ha superado el parroquialismo que caracterizó buena parte de los relatos patrióticos”, ÁVILA, A. (2008) “Las revoluciones hispanoamericanas vistas desde el siglo XXI”, en *Revista de Historia Iberoamericana*, Vol. 1, Nro. 1, pp. 4-34.

²⁶ En aquella reunión de la parte “*más sana y principal del vecindario*” del día 22 de mayo de 1810, uno de los principales líderes de la revolución sostuvo la ilegitimidad del Consejo de Regencia y, por ende, del virrey nombrado por éste; el argumento principal era que, por un lado, los poderes de los vocales de la Junta Central eran personalísimos para el gobierno y no podían delegarse, y por otro, no habían concurrido diputados americanos en la elección y establecimiento del Consejo, por lo tanto, se debía deducir la reversión de los derechos de soberanía al pueblo de Buenos Aires. El fiscal de la Audiencia Genaro Villota replicó justificando el accionar de la Junta Central en un estado de urgencia y necesidad que perfectamente podía ser subsanado con el reconocimiento posterior de los pueblos; por otra parte, el pueblo de Buenos Aires no tenía por sí solo derecho a decidir sino en unión con los demás pueblos del virreinato, por lo tanto, correspondía convocarlos para que enviaran representantes a la capital para resolver sobre la mejor conservación de los derechos del soberano, y mientras tanto, debía mantenerse las autoridades constituidas. Otro criollo, Juan José Paso, volvió al argumento del estado de necesidad contra los realistas y defendió la acción exclusiva de Buenos Aires fundado en la urgencia, por lo tanto, debía formarse una junta provisional de gobierno a nombre de Fernando VII e invitar sin demora a los demás pueblos del virreinato, cfr. LEVAGGI, A. (2001) *Manual de Historia del Derecho Argentino*, Tomo III, Depalma, Buenos Aires, pp. 51-55.

Acordado el derecho de los “pueblos”, durante la primera década revolucionaria se sucedieron una serie de gobiernos procurando mantener la unidad del virreinato pero en tensión permanente con las provincias cuyas élites locales se resistían a renunciar parte de la soberanía revertida a sus pueblos. La unidad política se sostuvo –entre otras cosas– gracias al poder de la fuerza, en un contexto de permanente guerra de independencia²⁷. Paralelamente, también ocurrieron algunos intentos frustrados por organizar constitucionalmente al conjunto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sin embargo, “la realidad habría sido la existencia no de un organismo estatal sino de una situación de «provisionalidad permanente», caracterizada por la coexistencia de la soberanía de las ciudades –paulatinamente encaminadas a configurar ámbitos más amplios de soberanía como lo habrían de ser las posteriores nuevas provincias–, con gobiernos rioplatenses no siempre acatados”²⁸.

El primer órgano de gobierno fue una *Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII*, designada el día 25 de mayo de 1810, y conformada exclusivamente por vecinos de Buenos Aires; esta “Primera Junta” dirigió los destinos políticos de los pueblos del ex virreinato apelando a una figura jurídica como la gestión de negocios ajenos hasta que las provincias nombraran y enviaran sus respectivos diputados para formar un órgano representativo de todas ellas²⁹. A medida que fueron llegando a Buenos Aires los diputados de las provincias fueron incorporándose al cuerpo que en el mes de diciembre de 1810 se erigió en *Junta Grande*.

Las dificultades para la gestión de los asuntos públicos entre tantos diputados motivó la concentración del poder en un número más reducido de individuos creándose a partir del 23 de septiembre de 1811 un *Triunvirato* sin desaparición de aquella, que desde entonces pasó a denominarse *Junta Conservadora*. Uno y otro órgano convivieron en tensión poco más de un mes hasta la disolución de la Junta ordenada por el propio Triunvirato en noviembre, y la consecuente expulsión de la ciudad de Buenos Aires de los diputados de las provincias. La política centralista de los miembros del Triunvirato se manifestaba en medidas como la expulsión referida y la supresión de las juntas provinciales que habían sido creadas meses atrás para el gobierno local de los pueblos, reemplazándolas por Gobernadores y delegados elegidos directamente desde la ciudad porteña.

²⁷ La guerra es un fenómeno que no puede dejarse de lado para la comprensión de las desiciones políticas de los actores y el derrotero de la experiencia político-constitucional. Puede consultarse la obra de VERDO, G. (2009) “La guerre constituyente: Río de la Plata, 1810 -1821”, en *Revista de Indias*, vol. LXIX, n° 246, p. 17-44.

²⁸ CHIARAMONTE, J. (1995c) “Acerca del origen del Estado en el Río de la Plata”, en *Anuario IHES*, Nro. 10, pp. 27-50, p. 29.

²⁹ Por medio de una circular emitida por la Primera Junta y dirigida a todos los cabildos rioplatenses, éstos debían enviar un diputado “*por cada ciudad ó villa de las provincias*” quienes habrían de “*irse incorporando en esta junta, conforme y por el orden de su llegada á la capital, para que así se hagan de la parte de confianza pública que conviene al mejor servicio del rey y gobierno de los pueblos*”, Circular del día 27 de mayo de 1810 en PEÑA, D. (1916) *Historia de las Leyes de la Nación Argentina, Enciclopedia Legislativa o Digesto razonado, anotado y concordado en orden cronológico, alfabético y por materias (1810-1916)*, Tomo I, Ed. Ateneo, Buenos Aires, p. 125.

El descontento con la política del Triunvirato, fundamentalmente de parte de la cúpula militar que en más de una ocasión desoyó las órdenes sobre la marcha de la guerra contra los realistas, impulsó una revolución que el 8 de octubre de 1812 obligó a renunciar a los miembros del gobierno constituido; como consecuencia, el cabildo de Buenos Aires nombró un *Segundo Triunvirato* cuya obra de gobierno más recordada fue la convocatoria a las provincias para el envío de diputados a una Asamblea General Constituyente a comienzos del año 1813. Esta fue la primera reunión de ese tipo en el territorio rioplatense; desplegó una intensa tarea legislativa, entre ella, la sustitución del órgano de gobierno colegiado –Triunvirato– por uno unipersonal –Directorio–, pero no alcanzó a cumplir con ninguno de sus dos principales objetivos: declarar la independencia y sancionar una Constitución escrita³⁰. La suerte de los constituyentes quedó sellada desde el momento en que pretendieron trastocar la naturaleza de su representación, desvinculando sus mandatos respecto de sus electores y postulándose como diputados de la nación en general³¹.

Establecido por la Asamblea a finales del mes de enero de 1814, un *Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata* sustituyó al Segundo Triunvirato. En la Península había recuperado el trono Fernando VII y era preciso concentrar el poder en una sola mano para dirigir más eficazmente la guerra contra el ejército realista. Entre enero de 1814 y febrero de 1820 el gobierno estuvo a cargo de los sucesivos Directores Supremos que si bien asumían con un mandato de dos años, la duración efectiva en el cargo estuvo supeditada a los avatares de la guerra, y en total fueron seis³². Sin embargo, durante gran parte del período debió convivir con un Congreso de las Provincias Unidas formado por diputados representantes de la mayor parte de los pueblos rioplatenses, convocados y organizados según un *Estatuto Provisional* sancionado a mediados del año 1815³³. El Congreso comenzó sus sesiones en el mes de marzo de 1816 en la ciudad de

³⁰ Pese a la incapacidad para la sanción de un texto constitucional, circularon por el cuerpo constituyente hasta cuatro proyectos de Constitución: 1) el redactado por la “Sociedad Patriótica”, 2) el preparado por la “Comisión Oficial”, 3) el realizado por la Comisión Permanente a la que fueron girados los dos anteriores, y 4) el proyecto de “Artículos de confederación y perpetua unión entre las provincias...” inspirado en las instrucciones de los diputados de la Banda Oriental. El fracaso en sus dos objetivos principales no impidió que se desarrollara una amplia obra legislativa que incluyó, entre otras cosas, el dictado de la libertad de vientres de esclavas, la supresión de los títulos de nobleza, la supresión de la práctica de la tortura, etc., todas declaraciones que deben ser leídas prestando suma atención a los condicionantes culturales de la época para evitar comprenderlas teleológicamente. Desde este enfoque, véase el trabajo de AGÜERO, A. (2013b) “La Asamblea del año XIII y la dimensión extraordinaria del orden jurídico tradicional. Reflexiones en torno al juramento e instrucciones del cabildo de Córdoba”, en *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, Nro. 13. Disponible en <http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAn13a11>.

³¹ Los miembros de la Asamblea acabaron siendo enjuiciados y condenados tras la caída del Director Supremo Alvear. Una interesante reflexión al respecto en AGÜERO, A. (2013b) Ob. cit.

³² Gervasio Antonio de Posadas (31 de enero de 1814 al 9 de enero de 1815); Carlos María de Alvear (11 de enero al 18 de abril de 1815); Ignacio Álvarez Thomas (21 de abril de 1815 al 16 de abril de 1816); Antonio González Balcarce (16 de abril al 9 de julio de 1816); Juan Martín de Pueyrredón (9 de julio de 1816 al 9 de junio de 1819); y José Rondeau (9 de junio de 1819 al 1 de febrero de 1820).

³³ Según una cláusula del Estatuto, el Director Supremo invitaría “a todas las Ciudades y Villas de las Provincias interiores para el pronto nombramiento de Diputados, que hayan de formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad de Tucumán para que allí acuerden el lugar en que hayan de continuar sus sesiones...” (Cap. I, Art. 30), el texto completo del Estatuto puede consultarse en SAGÜÉS, N.

San Miguel de Tucumán, pero el avance desde el norte de las tropas realistas del Alto Perú obligó a los diputados a decidir el traslado del cuerpo a la ciudad de Buenos Aires en enero de 1817.

Una vez instalado en su nueva sede, coexistió con el Directorio ininterrumpidamente hasta su disolución a mediados de febrero del año 1820. A diferencia de la Asamblea del año XIII que lo precedió, este cuerpo avanzó en la realización de sus objetivos logrando suscribir un acta de *Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sud América* el día 9 de julio del año 1816, y aprobando un primer *Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado [Mandado observar entre tanto se publica la Constitución]* en el año 1817, seguido de una *Constitución de las Provincias Unidas en Sud-América* sancionada el 22 de abril del año 1819. El último de estos textos, corporativo y conservador, adoptó una forma de gobierno de carácter unitario que no cumplió con las expectativas de las provincias y acabó por eso siendo rechazado.

Tanto el Reglamento Provisorio de 1817, como la Constitución unitaria de 1819 y aquél Estatuto Provisional de 1815, son algunos de los primeros ensayos constitucionales rioplatenses que, como se verá en este trabajo, si bien tuvieron efímera o ninguna vigencia formal en su tiempo, influyeron directamente en el espíritu y el diseño institucional de los textos constitucionales provinciales que se discutirían y sancionarían a partir de 1820, e incluso en el texto fundamental para la Confederación argentina del año 1853.

Recapitulando, las tensiones en estos primeros diez años en el Río de la Plata se desarrollaron fundamentalmente en dos frentes: por una parte, hacia la defensa del proceso revolucionario ante los intentos de represión del ejército realista, ámbito en el que las provincias acomunaron esfuerzos para crear y sostener los ejércitos patrios; por otra, en el interior del viejo espacio virreinal, la lucha se desenvolvió entre unos distritos y otros, entre los pueblos subalternos y las capitales o entre parcialidades con visión confederativa y otras que sostuvieron proyectos de organización más centralizados. A medida que los avatares del frente común externo lo permitieron, parte de los ejércitos comenzarían a operar en el frente interno, agudizando las luchas entre caudillos en ese doble proceso de militarización y ruralización de la política, tal como lo caracterizó hace ya tiempo HALPERÍN DONGHI³⁴.

(2006) *Constituciones Iberoamericanas: Argentina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, CD Anexo, pp. 95-128. Pese a la amplia convocatoria, sólo asistieron representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, La Rioja, San Luis, Jujuy, Charcas, Chichas (Alto Perú) y Mizque (Alto Perú). No formaron parte del Congreso las provincias del Litoral que se encontraban bajo la influencia del caudillo oriental José Gervasio Artigas, cfr. BIANCHI, A. (2007) Ob. cit., pp. 77 y ss.

³⁴ La tesis del historiador argentino puede consultarse en algunas de sus obras, como por ejemplo, HALPERÍN DONGHI, T. (2005) *Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla*, Siglo XXI, Buenos Aires; (1982) *Guerra y finanzas en los orígenes del estado argentino (1791-1850)*, Editorial del Belgrano, Buenos Aires.

Hacia finales de la década del '10, la amenaza de invasión que pesaba sobre Buenos Aires por parte de los Gobernadores López y Ramírez obligó al Director Rondeau a solicitar el auxilio de los ejércitos de los Andes y del Norte para doblegar a los caudillos del litoral. El primero de esos ejércitos se negó a acudir porque San Martín, a cargo de las tropas regulares, había decidido iniciar por Chile su plan libertador del Perú; el segundo, inició una marcha ininterrumpida hasta apostarse en Arequito –Santa Fe– en el mes de enero de 1820. Allí, un grupo de soldados al mando de Juan Bautista Bustos, decidieron sublevarse y escindir el ejército³⁵. Con potencia disminuida, el Director enfrentó sin éxito a aquellos caudillos de Santa Fe y Entre Ríos en la cañada de Cepeda; a la derrota en el campo de batalla, siguió la caída del Gobierno Central –Directorio y Congreso– a mediados de febrero de 1820. A partir de este momento, que ha sido calificado de las más disímiles maneras por parte de la historiografía, comenzaría en el territorio rioplatense el “momento de los pueblos”: declaraciones de independencia, desarrollo de la noción de soberanías provinciales, elección de autoridades locales y redacción de constituciones³⁶. La experiencia de Córdoba, impulsada por el mismo Coronel Bustos que encabezó la sublevación del ejército, resulta particularmente útil para la comprensión del fenómeno desde un enfoque político-constitucional³⁷.

³⁵ “El espíritu del Ejército Auxiliar estaba preparado para una sublevación. Había fuertes indicios de que la oficialidad joven ya no apoyaba el Directorio [...] Muchas de las jerarquías mayores del Ejército del Norte, excepto el coronel Bustos, permanecían leales al gobierno central (...) fueron tomados prisioneros por la oficialidad joven todos los jefes de los diversos regimientos que se oponían a la sublevación. El Regimiento de Dragones del que Paz era capitán tenía como jefe al coronel D. Cornelio Zelaya; en la noche del 9 [7] de enero fue tomado prisionero y entregado a una guardia mandada por el teniente Hipólito Basavilbaso. El coronel del Regimiento No. 10 D. Manuel A. Pinto fue arrestado por el capitán don Anselmo Acosta; lo mismo pasó con el que mandaba el No. 2, Coronel graduado D. Bruno Morón, haciéndose cargo de dicho Regimiento el mayor Castro. El coronel mayor graduado Juan Bautista Bustos [Jefe de Estado Mayor]... fue el que encabezó la conspiración, sosteniendo frente al general Francisco de la Cruz que no seguirían haciendo la guerra civil y que se separaba del ejército”, PEÑA, R. (1980) *Juan B. Bustos y el federalismo doctrinario de Córdoba*, Cuadernos de Historia, Junta Provincial de Historia, Córdoba, pp. 22-23.

³⁶ El que sigue, es un catálogo de textos constitucionales provinciales anteriores a la sanción de la Constitución Nacional del año 1853, excluidos los proyectos de constitución que nunca llegaron a sancionarse por las respectivas Salas de Representantes de cada Provincia. Santa Fe: Estatuto Provisorio (1819) y Constitución de la Provincia (1841); Tucumán: Constitución para la Provincia (1820), Estatuto Provincial (1852); Salta: Constitución de Salta y Jujuy (1821); Corrientes: Reglamento Provisorio Constitucional de la Provincia (1821), Constitución Política (1824) y Constitución de la Provincia (1838); Entre Ríos: Estatuto Provisorio Constitucional (1822); Catamarca: Reglamento Constitucional para la nueva Provincia de Catamarca (1823); San Juan: Ley Fundamental o Carta de Mayo (1825); Santiago del Estero: Reglamento de Organización Política (1830); San Luis: Reglamento Provisorio para el Régimen y Gobierno de la Provincia de San Luis (1832); Jujuy: Estatuto Provisorio para el Régimen y Dirección de la Provincia de Jujuy (1835), Estatuto Provincial (1839) y Estatuto Provisorio para la Dirección i Administración de la Provincia de Jujuy (1851); Mendoza, La Rioja y Buenos Aires fueron las únicas tres provincias que no sancionaron ningún documento constitucional durante la primera mitad del siglo XIX. El texto completo de estos documentos constitucionales provinciales puede consultarse en el compendio legislativo elaborado por SAN MARTINO DE DROMI, M. (1994) *Documentos constitucionales argentinos*, Ciudad Argentina, Buenos Aires.

³⁷ A pesar de que el análisis de los textos cordobeses es el objeto de esta investigación, a lo largo del trabajo se irán realizando relaciones intertextuales con el resto de constituciones provinciales rioplatenses –e hispanoamericanas– para corroborar la similitud de las soluciones adoptadas en los distintos espacios políticos, consecuencia lógica de la uniformidad de cultura jurídica en todo el orbe hispano a comienzos del siglo XIX.

La ciudad había sido fundada por el adelantado sevillano Jerónimo Luis de Cabrera el día 6 de julio del año 1573³⁸. Según establecía la práctica anterior a las Ordenanzas sobre descubrimiento nuevo y población promulgada por Felipe II, el territorio estaba fijado por el fundador quien concedió un amplio espacio de cincuenta leguas al sur, cincuenta hacia el oeste (cordón serrano), treinta y seis hacia el norte (el límite estaba dado por las tierras asignadas a la jurisdicción del pueblo Quilloamira), y otras casi cincuenta leguas hacia el este, en dirección al río Paraná³⁹. Tanto en el este como en el sur, la indefinición de los límites territoriales hace más conveniente hablar de un difuso espacio de frontera, inestable e inseguro, escenario de continuos asaltos indígenas por parte de tribus no pacificadas en aquellos márgenes provinciales. A comienzos de la primera mitad del siglo XIX, el territorio gobernado por las autoridades de la ciudad de Córdoba no había variado significativamente ni lo haría durante el resto del período estudiado en esta investigación. Los textos constitucionales asumieron la jurisdicción de la ciudad-campaña (zona rural) sin mayores conflictos; las controversias limítrofes con otras provincias fueron cuestiones que comenzaron a suscitarse durante el último cuarto del siglo XIX en el seno del Congreso de la Nación, autoridad encargada de fijar los límites interprovinciales según la Constitución de 1853⁴⁰.

Centro colonial muy importante, su posición estratégica en el territorio la convirtió en un punto neurálgico de los caminos que conectaban el puerto de Buenos Aires con la región trasandina y el Alto Perú. Fue precisamente esa integración la que condicionó su economía durante todo el período colonial, consolidándose Córdoba como “una región especializada en la cría e invernada de mulas y otros ganados destinados principalmente a abastecer la demanda de los centros mineros altoperuanos”⁴¹. Además, a partir de la segunda mitad del setecientos, Córdoba comenzó a consolidar relaciones de intercambio con otros mercados regionales como Buenos Aires, Chile, Paraguay y el resto de

³⁸ Según consta en el Acta ereccional. Para un mayor detalle véase MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) *La formación histórica de la provincia de Córdoba*, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba.

³⁹ Cfr. AGÜERO, A. (2008a) *Castigar y perdonar cuando conviene a la República. La justicia penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII*, CEPC, Madrid, pp. 61-62; también en LUQUE COLOMBRES, C. (1958) “Los ejidos de Córdoba y la enfiteusis”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Nro. 9, pp. 97-111.

⁴⁰ “Corresponde al Congreso: Inc. 14. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Confederación; fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias”, *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 64, Inc. 14. En el año 1882 el Congreso de la Nación dictó la Ley N° 1.168 que fijó un plazo de dos años, prorrogado por 2 años más por ley 1.447, para que las provincias que tuviesen cuestiones de límites pendientes los solucionen “entre sí amistosamente por medio de arbitraje, mediación, transacción o cualquier otro que juzgasen conveniente”; se facultaba así a los gobiernos provinciales a resolver sus conflictos con la obligación de remitir las actuaciones y las decisiones consensuadas al propio Congreso.

⁴¹ TELL, S. (2008) *Córdoba rural, una sociedad campesina (1750-1850)*, Prometeo Libros, Buenos Aires, pp. 92-93. Además, “durante todo el período colonial Charcas fue el principal mercado consumidor de su producción mular, además de ser un importante consumidor del ganado vacuno en pie que la jurisdicción exportaba (...) desde allí provenían los únicos retornos monetarios de la región, que permitían pagar las importaciones de efectos de Castilla y de productos procedentes de otras regiones del espacio colonial”, ídem.

provincias del interior. La exportación de mulas, aunque constante, sufría los vaivenes del mercado altoperuano y su desempeño estaba estrechamente ligado a la demanda minera en aquella región. Sin embargo, a partir de la primera década del ochocientos se produjo una abrupta caída del volumen comercializable hasta su desaparición en el lustro siguiente⁴².

La cría de ganado, y sus subproductos como la venta de cueros, fue progresivamente sustituyendo a la exportación de mulas como la actividad productiva más importante de la Provincia durante la primera mitad del XIX, sin embargo, las circunstancias del contexto impidieron una gran expansión comercial en el rubro⁴³. Los tejidos de lana representaron un importante segmento de la producción artesanal local, Córdoba exportaba a otras provincias ponchos, frazadas y pellones producidos en la campaña. Sin embargo, a partir de 1800 los problemas políticos internos y el paulatino ingreso de textiles ingleses por el puerto de Buenos Aires provocaron una aguda caída en este sector productivo hasta extinguirse las exportaciones en la segunda mitad del XIX⁴⁴. Por otra parte, la producción agrícola estaba destinada al autoconsumo y abastecimiento del mercado local. La especialización ganadera impidió el desarrollo de cultivos para la facturación de productos agrícolas que fundamentalmente continuaron importándose en la provincia hasta finales de la primera mitad del ochocientos, época en la que comenzó a percibirse una lenta expansión agrícola, minera y ovina⁴⁵.

La historiadora Sonia TELL ha delineado tres ciclos en el sector mercantil cordobés durante el período 1750-1850. Un primer ciclo de expansión mercantil entre 1750 y 1810 con un fuerte aumento del volumen de la balanza comercial de la provincia – Charcas, Buenos Aires, Chile, y otros mercados internos–; seguido de un segundo ciclo de aguda contracción de las exportaciones entre 1810 y 1835 –desaparición de las plazas altoperuanas y paraguayas–; y finalmente un tercer ciclo entre 1835 y 1850 de leve recuperación y continuación de la reestructuración del mercado productivo con crecimiento de las exportaciones volcadas ya al mercado atlántico vía puerto de Buenos Aires que, sin embargo, no alcanzó para “revertir la severa contracción iniciada en los

⁴² El intercambio comercial de mulas disminuyó “notablemente a partir de los acontecimientos revolucionarios de 1809 y llegó a su crisis definitiva en 1814, cuando los envíos de mulas a las ferias de Salta desaparecen completamente de los registros legales de Córdoba”, TELL, S. (2008) Ob. cit., p. 94.

⁴³ En ese sentido, “las existencias de ganado vacuno de la provincia comenzaron a contraerse desde la primera o segunda década del siglo XIX (...) Esta tendencia se acentuó en las décadas de 1830 y 1840, que constituyeron un período de ‘crisis permanente’ para la ganadería regional, donde se conjugaron la terrible sequía de 1828, la asoladora guerra civil de los años 1829-31, un ciclo largo de sequías y epidemias entre 1837 y 1846, la guerra civil de 1840-41 y las periódicas requisas y saqueos de ganado para abastecer a las tropas provinciales”, TELL, S. (2008) Ob. cit., p. 97.

⁴⁴ Cfr. TELL, S. (2008) Ob. cit., pp. 110-111. Por otra parte, “junto a las producciones artesanales principales, había un conjunto de exportaciones menores e irregulares, también de fabricación artesanal, como jabón, tinta, sebo y pieles curtidas, cuyos envíos dependieron de la demanda de Buenos Aires”, ídem. p. 115.

⁴⁵ “Cereales, frutas y legumbres (...) trigo, maíz, cebada, garbanzos, porotos, arvejas, lentejas, fruta seca y desecada, olivo, vid y cultivos de huerta como azafrán y cebollas. Una parte de estos efectos agrícolas se procesaba en grandes establecimientos (especialmente los jesuíticos, pero también en algunos de particulares) permitiendo su circulación a mayor distancia: harinas de trigo y maíz, vino y vinagre se comercializaban en la ciudad de Córdoba y en mercados lejanos...”, TELL, S. (2008) Ob. cit., p. 115.

años 1808-1811 ni resolver completamente el problema de la desmonetización de la economía cordobesa”⁴⁶.

La Provincia mantuvo en el período colonial un estado de superávit fiscal constante, pero a partir de 1810 la situación se invirtió debido al descenso en el volumen de las exportaciones y el aumento de gasto público para el financiamiento de la guerra. Durante los años que se analizan en este trabajo, el balance fiscal se caracterizó, de un lado, por una fuente de ingresos compuesta principalmente por los “impuestos indirectos aplicados al comercio local e interregional, que representaron el 62% de la recaudación en el lapso 1820/29 y el 75% en el período 1830/55”; y de otro, por una “fuente de egresos [compuesta primordialmente por] los gastos militares, que generaron el 61% del gasto público provincial en 1820/29 y el 63% en 1830/55 y sumieron a las finanzas públicas provinciales en una situación de gran precariedad durante todo el período”⁴⁷.

Córdoba tuvo un perfil católico y erudito. Desde finales del año 1697 se erigió en la sede del obispado de Tucumán. Casi un siglo antes, en 1613, se había fundado en la ciudad la cuarta Universidad en territorio americano lo que le permitió consolidarse, a la par de Buenos Aires, en el otro gran centro cultural de la colonia. Con la reorganización dispuesta por los Borbones en la *Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Virreinato de Buenos Aires* del año 1782/3, fue designada capital de intendencia bajo el nuevo esquema comprendiendo además las ciudades de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja⁴⁸. Fiel a su perfil conservador, una vez que llegaron a Córdoba las noticias sobre los sucesos de mayo el cabildo se pronunció por el desconocimiento a la Primera Junta y se organizó una resistencia favorable al gobierno español liderada por un grupo de vecinos notables que, sin embargo, fue rápidamente sofocada por el ejército revolucionario⁴⁹. A partir de entonces, se organizó según las disposiciones emanadas de aquellos gobiernos centrales, aceptando incluso desmembraciones de su territorio como fue el caso de la orden del Segundo Triunvirato fechada el 29 de noviembre de 1813 creando la Gobernación Intendencia de Cuyo compuesta por las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis⁵⁰. Pero las tensiones acabaron siendo insuperables y comenzó su vida autónoma desde que el General Bustos decidió sublevarse al mando del ejército del norte y retornar a la Provincia para iniciar desde allí su proyecto de organización local y nacional.

⁴⁶ TELL, S. (2008) Ob. cit., pp. 134-135.

⁴⁷ Ídem, p. 379.

⁴⁸ Según el Artículo IV de las Modificaciones del 5 de agosto de 1783 a la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata, véase SAN MARTINO DE DROMI, M. (1992) *Intendencias y provincias en la historia argentina*, Editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires, pp. 40-46.

⁴⁹ La contrarrevolución estuvo liderada por “sujetos de la más alta representación social y política” como el Gobernador Gutiérrez de la Concha, el ex Virrey Liniers, el Coronel de milicias Allende, el Oficial Real Moreno, el Obispo Orellana, y el Teniente Gobernador y profesor de la Universidad Rodríguez; quienes fueron alcanzados por el ejército revolucionario en la localidad de Cruz Alta, detenidos y fusilados –salvo el Obispo Orellana, por su estado, quien fue conducido como prisionero y liberado meses más tarde–, cfr. MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) Ob. cit., pp. 38-39.

⁵⁰ SAN MARTINO DE DROMI, M. (1992) Ob. cit., pp. 143 y ss.

La Universidad había permitido el desarrollo de una elite sociocultural con caracteres mucho más conservadores que la “liberal” ciudad portuaria. Factura de dos universitarios locales fue el *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia* sancionado en el mes de enero del año 1821. Este texto, fue uno de los primeros modelos de documentos constitucionales dados en el Río de la Plata durante el período analizado; entre su articulado, contenía toda una serie de disposiciones que posteriormente formaron parte del texto nacional sancionado en el año 1853. Aquella particular cultura quedaría reflejada en las soluciones adoptadas por los actores políticos de la Provincia al momento de redactar la Constitución, y condicionaría su vigencia y puesta en planta durante el resto del período⁵¹.

En el plano de la política local, fueron sucediéndose gobiernos de distinto color político. Desde 1820 hasta 1829 ocupó el Ejecutivo provincial, en dos mandatos, el General Juan Bautista Bustos; fue depuesto en ese año por un Gobernador de otro color político, el unitario General José María Paz; éste, a su vez, fue también derrocado por otras facciones federales que acabaron llevando al gobierno a José Vicente Reynafé en el año 1831, el cual gobernó hasta 1835; en ese año, llegó al poder Manuel “Quebracho” López, un federal vinculado al régimen rosista que se mantuvo al frente del Ejecutivo cordobés durante tres períodos de gobierno⁵². Pero a pesar de todos estos cambios, y no obstante el diferente credo político de las autoridades al mando de la Provincia durante cada uno de esos períodos, los textos y las prácticas constitucionales esenciales se mantuvieron. A contramano de lo que la historiografía generalmente ha afirmado, mostrando los textos constitucionales provinciales como meros papeles ineficaces, aquí se propondrá una lectura alternativa. El argumento central de este trabajo consiste en aseverar que la Constitución –con todas sus dispensas y todas las trasgresiones que sufrió– tuvo la capacidad para generar ciertas prácticas políticas que, como la de la Sala de Representantes, se sostuvieron a lo largo del período, lo cual muestra que la Constitución tuvo algún rol estructurante en la política y el orden jurídico provincial.

⁵¹ Como se verá a lo largo del trabajo, “en todo el territorio del ex virreinato la vida social y política siguió rigiéndose fundamentalmente por la ‘antigua constitución’, es decir, por las normas heredadas del régimen colonial, codificadas tanto en la legislación española como en la de Indias, cuya vigencia como ‘conjunto de pautas legitimadoras de la organización política y de las relaciones entre los pueblos rioplatenses’ en general no fue puesta en duda por los actores políticos de la época”, TELL, S. (2008) Ob. cit., p. 378.

⁵² Como ha señalado AYROLO, si bien el único unitario de todos los Gobernadores del período fue Paz, y el resto estuvo animado por el “espíritu político” del federalismo, es preciso señalar que entre ellos hubo matices, “la inclusión de Juan Bautista Bustos, José Vicente Reynafé y Manuel ‘Quebracho’ López en el mismo signo político no nos permite considerar que entre ellos hubiera acuerdo, igualdad de criterios y de actitudes con respecto a los asuntos del estado”, AYROLO, V. (2007a) *Funcionarios de Dios y de la República: clero y política en la experiencia de las autonomías provinciales*, Ed. Biblos, Buenos Aires, p. 45.

CAPÍTULO I

GÉNESIS Y SANCIÓN DEL REGLAMENTO PROVISORIO DE 1821

I. LA CONSTRUCCIÓN DE UN ¿NUEVO? SUJETO POLÍTICO: LA PROVINCIA DE CÓRDOBA; I. 1. Juan Bautista Bustos y su proyecto federal; I. 2. Repercusión de Arequito en Córdoba: Sustitución del Gobernador; I. 2. 1. Pueblo, cabildo, representación; I. 3. Convocatoria a la Provincia. Elecciones y formación de una Asamblea Soberana; I. 4. Instalación de la Soberana Asamblea; I. 4. 1. Algunas cuestiones previas: Atribuciones de la Asamblea y calidad de sus miembros; I. 4. 2. Declaración de la Independencia de la Provincia; I. 4. 3. Elección de Gobernador propietario: Juan Bautista Bustos; II. EL PROCESO CONSTITUYENTE CORDOBÉS DE 1821; II. 1. Los representantes cordobeses y sus poderes para dar una Constitución; II. 2. Reglamento Provisorio o Constitución Permanente: la provisionalidad como regla; II. 3. Una Comisión para hacer la Constitución: composición y labor; II. 3. 1. José Gregorio Baigorri; II. 3. 2. José Norberto de Allende; II. 3. 3. Encargar la Constitución; II. 4. Fin de la labor de la Comisión y elevación de su proyecto; II. 5. Presentación del proyecto a la Asamblea y sanción del Reglamento Provisorio; II. 6. Impugnación de la sanción: ¿Es nula la Constitución?; II. 7. Promulgación, publicación y difusión del Reglamento Provisorio. Su entrada en vigor; CONCLUSIÓN.

I. LA CONSTRUCCIÓN DE UN ¿NUEVO? SUJETO POLÍTICO: LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

I. 1. Juan Bautista Bustos y su proyecto federal

El rechazo al centralismo pregonado desde Buenos Aires por las sucesivas autoridades de gobierno instaladas desde 1810 había ido cimentando la resistencia y tejiendo lazos de solidaridad entre diferentes líderes provinciales que no estaban dispuestos a ceder su poder de autogobierno en el ámbito jurisdiccional que correspondía a sus ciudades. La unitaria Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica sancionada el 22 de abril de 1819 por el Congreso Constituyente fue derrotada en los cabildos rioplatenses que se opusieron al centralismo, y las tropas del Directorio de José Rondeau fueron vencidas en el campo de batalla en la cañada bonaerense del arroyo de Cepeda¹. Se abrió a partir de entonces un camino de organización política alternativa basado en la idea de que la mejor forma de gobierno, o al menos la única practicable en el Río de la Plata, era la federal. Esta es la senda en la que se encontraba Juan Bautista

¹ La batalla de Cepeda tuvo lugar el 1 de febrero de 1820 en la cañada del arroyo Cepeda al norte de la Provincia de Buenos Aires, en el límite con la de Santa Fe. En la batalla, las tropas de los caudillos del litoral Estanislao López y Francisco Ramírez que respondían a la facción federal liderada por el caudillo oriental José Gervasio Artigas vencieron a las del Directorio, precipitando la disolución del Congreso Constituyente que había sancionado la Constitución un año atrás, lo cual desató una crisis política “sin antecedentes” en el territorio de Buenos Aires. Véase, GOLDMAN, N. (Dir.) (1998) *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, Colección Nueva Historia Argentina, Tomo III, Sudamericana, Buenos Aires.

Bustos quien, desde su llegada a la Ciudad de Córdoba luego de la sublevación de Arequito, comenzó a dar forma a su plan de organización política para el conjunto de las Provincias Unidas.

Con tal fin, los días 7 y 19 de febrero de 1820, lanzó desde su cuartel general sendas circulares a los Gobernadores Intendentes y al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, respectivamente, explicando las razones que lo habían llevado a encabezar el motín en la Posta de Arequito, e invitándolos a enviar diputados para la reunión de un Congreso General con sede en la Provincia de Córdoba. Como bien ha llamado la atención sobre este asunto SEGRETI, la calidad de los destinatarios de las circulares, es decir, la naturaleza de los interlocutores que Bustos consideraba válidos, es un indicio sobre quiénes son para el líder militar cordobés los sujetos políticos a quienes correspondía la edificación del nuevo orden, tomando como base una división del espacio político de matriz federal pero sin lugar para todas las ciudades del ex Virreinato². Como ha demostrado VERDO, “*principal propagateur des idées fédérales et de l'autonomie des provnices, Bustos reste très réservé quant à l'ampleur que doit prendre le mouvement. Son invitation à rallier le nouveau système ne s'adresse en effet qu'aux capitales d'intendance*”³.

En una y otra nota, Bustos comenzaba su mensaje justificando la sublevación que había encabezado un mes atrás como el único camino posible para frenar el autoritarismo de un gobierno central que desconocía y negaba subjetividad política a los pueblos. Afirmaba que “*las facciones que se hán álternado én Buenos Ayres desde el 25 de Mayo de 810, arrebatándose el Gob^{no}. las unas álas otras se creyeron todas sucesoras legítimas del Trono Español Respecto de nosotros, y con un d^{ro}. ilimitado para mandarnos sin éscuchar jamás n^{tra}. voluntad*”⁴. Seguidamente, legitimaba su accionar en la potencia que tenía, según su modo de interpretar la realidad política del territorio, la voluntad e “*incesantes clamores de los Pueblos inclusa esa cap^l.*”⁵. Fueron precisamente esas quejas las que lo llevaron al convencimiento de que sólo se alcanzaría la paz y la libertad evitando la sangrienta guerra civil entre hermanos⁶. Bustos presentaba un proyecto que transitaría una vía distinta de la de la fuerza y la violencia de las armas, el suyo era el único medio para lograr la tan deseada estabilidad política: “*no nos seria jamás honroso,*

² SEGRETI, C. (1982) *El país disuelto, el estallido de 1820 y los esfuerzos organizativos*, Editorial Belgrano, Buenos Aires.

³ VERDO, G. (2006a) *L'indépendance argentine entre cités et nation (1808-1821)*, Publications de la Sorbonne, París, p. 386.

⁴ Circular a los Gobernadores Intendentes de las Provincias Unidas. Tanto ésta como la circular que envía Bustos al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires pueden hallarse en la clásica obra de GARZÓN, I. (1902) *Crónica de Córdoba*, Tomo III, La Minerva, Córdoba, pp. 261-266.

⁵ Circular al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, Ídem, p. 264.

⁶ “*Las ármās de la Patria distraídas del todo de su objeto pral. yá no se éempleaban sino én derramar la Sangre de sus conciudadanos, de los mismos cuyo sudor y trabaxo les ásegurava la subsistencia. ¿Podríamos Yó, ni mis virtuosos compañeros continuar siendo instrum^{tos}. de la destrucción de n^{tros}. hermanos, y desolacion del pais? No Sr. Gobernador: éste há sido él objeto de la gloriosa Revolución del día 9—del p^{do}: salvar la Patria de la desastrosa g^{ra}. intestina én que la habian émbuelto las perfidias manos de los hombres, én quienes depositó su confianza*”, Circular a los Gobernadores Intendentes, Ídem, p. 261.

ni nos haria dignos del Respeto de las Naciones q^e. nos observan él ser unicam^{te}. independientes de los Españoles, viviendo sin Constitucion, sin Leyes, sin gob^{no}. y Tribunales q^e. administren justicia segun éllas, que primen la virtud y castiguen el vicio, ásegurando de todos modos ál ciudadano él goze tranquilo de su seguridad, libertad y propiedades”⁷.

Es por todo esto que se dirigía tanto a Gobernadores como al Cabildo de Buenos Aires con el objeto de convocarlos a la ciudad de Córdoba para la reunión de un Congreso General⁸. Allí los pueblos, en igualdad de condiciones –esto es, con igual número de representantes cada uno sin importar su población⁹–, discutirían y sancionarían las bases fundamentales sobre las que se debía erigir el nuevo edificio político. El diseño propuesto era alternativo al que había sido impulsado en los últimos años por el gobierno central, un modelo que había desconocido los derechos de los sujetos políticos locales, porque “*quieren las Prov^s. éstrechar los vinculos de la Nacion p^r. medio de una confederación q^e. las ponga á cubierto del abuso del poder q^e. tenga una mas q^e. la otra por mas rica, poblada, ó por su localidad mas ventajosa”¹⁰.*

Esta actitud de Bustos le ha valido, según una parte de la historiografía argentina, la calificación de ser uno de los líderes de la pretendida organización político-constitucional durante un período que para otros fue sólo de anarquía, reconociendo que “entre los propósitos más firmes que animaban al jefe de la sublevación de Arequito, estaba el de promover un movimiento tendiente a organizar constitucionalmente el país”¹¹. Comoquiera que sea, y sin entrar a valorar si eran intereses particulares o generales –egoístas o patrióticos– los que impulsaban su acción política, la convocatoria a los pueblos para fijar las bases de un gobierno general da cuenta de una cultura política de fondo sobre la que –y a partir de la cual– se estructura su discurso de conservación y fortalecimiento del autogobierno de las Provincias pero dentro de un todo más grande y contenedor¹². En una nota dirigida al jefe de las fuerzas porteñas apenas unos días después de las dos circulares que se han analizado, Bustos le comentaba que se había puesto “*en comunicación con todas las provincias, incitándolas a un nuevo congreso,*

⁷ Circular a los Gobernadores Intendentes, Ídem, p. 262. En la Circular al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires ratifica la necesidad de alcanzar la organización político-constitucional, “*libre él congreso del influxo de las armas, de la facción, é intriga podrá dár ál Pais la Constitucion de Gob^{no}. q^e. desea*”, Ídem, p. 264.

⁸ “*oirá V.S. clamar con una sola voz á éste Exto. p^r. La pronta Reunion de un Congreso... Reunido en este Pueblo p^r. la primera vez, si V.S. no éncuentra inconv^{te}.*”, Circular a los Gobernadores, Ídem, p. 262. Lo mismo reitera en la nota al Cabildo, “*Para él logro de tan sublime objeto (...) hé convidado a los Xefes de las Prov^s. p^a. q^e. elixan sus Respectivos Representantes, y los dirijan á esta Ciudad*”, Ídem, p. 265.

⁹ “*los Pueblos quieren p^r. causas muy bien fundadas q^e. uno solo sea por la primera vez y p^a. la más pronta expedicion sin considerar su población*”, Circular al Cabildo de Buenos Aires, Ídem, p. 266.

¹⁰ Circular al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, Ídem, p. 266.

¹¹ MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) *La formación histórica de la provincia de Córdoba*, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba, p. 67.

¹² La idea de autogobierno no en el sentido de la política moderna o de las formas democráticas de participación, sino más bien en un sentido propio de la tradición hispana, como “administración de los asuntos locales por los «naturales», «los de la tierra»”, LEMPERIERE, A. (2000) “La representación política del imperio español a finales del antiguo régimen”, en BELLINGERI, M. (coord.) *Dinámicas de antiguo régimen y orden constitucional: representación, justicia y administración en Iberoamérica, siglos XVIII-XIX*, Otto Editore, Torino, pp. 55-76.

*que sin mezclarse en la administración interior de cada una reglase los intereses generales de todas y diese un fuerte impulso a la defensa común (...) entiendo que todas marchan de acuerdo al mismo objeto, que es la federación”*¹³.

Durante las primeras décadas de independencia en los territorios hispanoamericanos, esta manera de pensar el poder, distribuido entre esferas distintas y superpuestas de toma de decisiones y concreción de la acción de gobierno, ha sido muy bien identificada con el concepto de soberanía relativa de los Estados Provinciales¹⁴. Más adelante se indagará el modo en que se tradujo constitucionalmente esta dualidad de esferas de poder y la suerte que tuvo el Congreso convocado por Bustos durante el mes de febrero de 1820. La dimensión “federal” del proyecto del Gobernador cordobés va a estar presente a lo largo de todo su gobierno influyendo y condicionando, en un determinado sentido, el rumbo de su obra político-constitucional en la Provincia. De allí que resulte imprescindible para comprender en toda su complejidad este proceso local, tener en mente esta cuestión y atender, paralelamente, a los acontecimientos que se desarrollan en aquél plano interprovincial¹⁵. Ahora se verá cómo se manifestó aquella dualidad en la dimensión local, es decir, hacia el interior de una de esas unidades políticas: la Provincia de Córdoba.

I. 2. Repercusión de Arequito en Córdoba: Sustitución del Gobernador

Después de la sublevación del Ejército del Norte en la posta de Arequito el 8 de enero de 1820, el Coronel Mayor Juan Bautista Bustos –líder del levantamiento–, intimó al Gobernador Intendente de Córdoba, Don Manuel Antonio de Castro, para que se dignara “*hacer renuncia del gobierno, depositando el mando en ese ilustre Ayuntamiento*”¹⁶. La intención que perseguía el jefe del ejército era que la corporación

¹³ He extraído el fragmento transcrito de la nota de RIVIERE, R. (1958) *El Gobernador Juan Bautista Bustos*, Imprenta de la Universidad, Córdoba, p. 28.

¹⁴ Para una muy buena lectura de esta realidad política, de acuerdo a la matriz tradicional que subyacía en todo el territorio de la Monarquía Católica, y la dimensión del concepto de “soberanía relativa”, se puede consultar la obra de CALDERÓN, M. y THIBAUD, C. (2010) *La Majestad de los Pueblos en la Nueva Granada y Venezuela 1780-1832*, Taurus, Bogotá. Aunque dedicada al espacio del ex Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, sus consideraciones fundadas en la concepción de un imaginario cultural que era común en toda Hispanoamérica son también relevantes para el caso que aquí se estudia. La calidad de “Estados Provinciales” de estos sujetos protagonistas de la reconstrucción del nuevo orden político ha sido muy bien defendida, en varias de sus obras, por CHIARAMONTE, J. (1997) *Ciudades, provincias, estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846)*, Emecé, Buenos Aires; (1995a) “¿Provincias o Estados? Los orígenes del federalismo rioplatense”, en GUERRA, F. (dir.) *Revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español*, Editorial Complutense, Madrid.

¹⁵ En los capítulos que siguen, se abordarán cada una de estas dos dimensiones. En el caso del estudio del texto del Reglamento Provisorio, las normas que hacen referencia a la Provincia y las dirigidas a la federación; más adelante, la posición de la Provincia frente a los diferentes Congresos Generales que se reunieron, el de 1821 en Córdoba y el General Constituyente que sancionó la Constitución en 1826, además del intento frustrado de reunir en la ciudad de Santa Fe una Convención Nacional en el año 1828, la incorporación de Córdoba al Pacto Federal de 1831, y su participación en el Congreso General Constituyente de 1852.

¹⁶ Desde la crisis de 1808, los ayuntamientos habían fungido como “depósitos” del poder político en las más diversas formas; sobre este asunto, véase PORTILLO, J. (2006) *Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana*, Fundación Carolina, Centro de Estudios Hispánicos e

“libremente y sin la menor opresión [nombrara] el Xefe que ha de gobernarla”, es decir, reemplazara al mandatario que había sido designado por el Directorio para que se hiciera cargo de la Provincia un sujeto que comulgara con las ideas federalistas que habían impulsado la sublevación¹⁷. El Sargento Mayor Díaz Colodrero fue el encargado de transmitir verbalmente el sentir de Bustos al Gobernador electo, incluso días antes de la llegada de la nota oficial de éste intimándolo a resignar el mando¹⁸. Su intención era persuadirlo de que el Ejército del Norte respaldaba la independencia de Córdoba del sistema directorial¹⁹.

En consecuencia, Castro convocó extraordinariamente a los miembros del Cabildo la tarde del día 17 de enero de 1820 y les manifestó haber sustentado “la regla de su conducta en dos deberes: 1º ceder a las fuerzas de las circunstancias cuando se le requiriere o por parte del Ilustre Cabildo o por la del señor General en quanto no le era debido retener la autoridad que no podía sostener, y el 2º, conservar hasta aquel

Iberoamericanos, Marcial Pons, Madrid. En la nota que envió oficialmente Bustos a Castro –redactada cuatro días después de la renuncia del Gobernador–, le decía: “Habiéndome encargado del mando del ejército con el noble objeto de evitar la guerra civil entre pueblos hermanos... y estando convencido que el origen de los pasados males es la opresión en que se hallan los Pueblos, me veo en la precisión de decir á V.S. que en el acto que reciba éste se digne hacer renuncia del gobierno, depositando el mando en ese ilustre Ayuntamiento, á quien oficio en esta misma fecha, para que libremente y sin la menor opresión nombre el Xefe que ha de gobernarla, encargando á V.S. muy en particular no haga el menor desórden en los fondos de la Provincia, ni menos alarma alguna que me obligue á deshacerla con la fuerza. – Dios guarde á V.S. muchos años. – Quartel General en el paso de Ferreira, Enero 21 de 1820 – Juan Bautista Bustos”. El texto enviado por el Jefe del Ejército sublevado ha sido extraído de GARZÓN, I. (1901) *Crónica de Córdoba*, Tomo II, La Minerva, Córdoba, p. 4.

¹⁷ Sin expresarlo meridianamente desde el primer momento, y con el aval del derrotero que siguió la vida política de las Provincias Unidas en los meses posteriores a Arequito, se ha dicho que la intención primera de Bustos era hacerse con el mando de la Provincia de Córdoba para emprender desde allí un plan de organización de los Estados rioplatenses bajo el signo federal. En esta línea, por ejemplo, ZINNY, A. (1920) *Historia de los gobernadores de las Provincias Argentinas*, Vol. 3, Córdoba-Tucumán-Santiago del Estero-San Luis, Administración General Vaccaro, Buenos Aires, p. 44: “el levantamiento de Arequito no tenía otro objeto que el de satisfacer la aspiración de Bustos —la de ser nombrado gobernador de Córdoba”, el autor no titubea a la hora de calificar negativamente dicho acontecimiento como el “crimen de Arequito”, p. 45. El General José María Paz, en sus memorias, critica a un Bustos que, unos días después de la Sublevación, ya no podía disimular sus intenciones: “Bustos... solo tenía en vista el gobierno de Córdoba, del que se apoderó para estacionarse definitivamente”, PAZ, J. (1892) *Memorias Póstumas del General José María Paz*, 2da Ed., Imprenta La Discusión, La Plata, p. 368.

¹⁸ Díaz Colodrero le comunicó a Castro que Bustos “lo había enviado aunque sin comunicaciones oficiales por escrito por la priesa, á fin de hacer suspender... qualesquiera proyecto que comprometa el orden por quanto el cambio de la administración de esta Provincia se haría por un efecto de las mismas circunstancias”, SEGRETÍ, C. (1960) *La Gobernación de José Javier Díaz en 1820*, Cuaderno de Historia N° XXXI, Instituto de Estudios Americanistas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, p. 2.

¹⁹ Cfr. SEGRETÍ, C. (1970) *Juan Bautista Bustos en el escenario nacional y provincial*, Ediciones Culturales Cordobesas, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba, p. 146. El Ejército del Norte, también llamado Ejército Auxiliar del Perú, intervino en las disputas internas durante el período 1816-1820 y fue uno de los elementos centrales para asegurar la gobernabilidad del interior; este aspecto ha sido trabajado por MOREA, A. (2012) “El Ejército Auxiliar del Perú y la gobernabilidad del interior, 1816-1820”, en *Prohistoria*, Nro. 18, año XV, pp. 25-48. Sobre el derrotero de muchos de los oficiales de dicho Ejército que incursionaron en la política –como fue el caso de Juan Bautista Bustos–, el mismo autor ha dedicado su tesis doctoral: (2013) *De Militares a Políticos. Los oficiales del Ejército Auxiliar del Perú y la carrera de la revolución, 1816-1831*, Tesis de Doctorado, Programa de Doctorado en Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincias de Buenos Aires, Directora Dra. Valentina Ayrolo, Tandil.

momento la tranquilidad y el orden público”²⁰. Fundado en las consideraciones que acababa de exponer, hizo “*dimisión y depósito del gobierno en todos sus ramos en este Ilustre Ayuntamiento*”²¹. El Cuerpo Capitular cordobés admitió sin objeciones la renuncia del Gobernador Intendente y, hasta tanto se oyera “*la voluntad general de los ciudadanos por la elección de la persona que debía encargarse de tan interesante empleo*”²², se acordó depositar el mando provisoriamente en el Alcalde de 1er voto, Don Carlos del Signo, con el cargo de convocar a un cabildo abierto a fin de llevar a cabo la elección. Pero aquél 17 de enero no sólo se aceptó la renuncia del Gobernador y se nombró provisoriamente a su remplazante. Otro acuerdo de lo más trascendente tuvo lugar en la sala capitular. Envalentonado por los sucesos de Arequito y respaldado por el apoyo que ofrecían las armas del Ejército del Norte, el Ayuntamiento declaró al gobierno de Córdoba independiente del poder central de Buenos Aires, acto que fue ratificado dos meses después por la Soberana Asamblea Provincial²³.

Dos días más tarde de la renuncia de Manuel Antonio de Castro se reunió en la ciudad un cabildo abierto para cumplir con el encargo de nombrar al Jefe de la Provincia. En esta oportunidad, apareció nuevamente en la escena política cordobesa el Coronel José Xavier Díaz. Había sido integrante de la Junta Provincial creada en 1811 de acuerdo al decreto de la Junta de Gobierno instalada en Buenos Aires²⁴, y Gobernador Intendente de

²⁰ Las Actas del Cabildo de Córdoba desde el 1º de enero de 1820 hasta la extinción del cuerpo dispuesta por la Sala de Representantes de la Provincia el 30 de diciembre de 1824, han desaparecido del Archivo Municipal. Sin embargo, el historiador cordobés CARLOS LUQUE COLOMBRES ha descubierto en el Archivo Histórico de la Provincia, en la sección de Gobierno, las Actas comprendidas entre el 4 de mayo de 1821 y el 23 de noviembre de 1823. Además, entre los papeles sueltos del Archivo del Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad Nacional de Córdoba, ha encontrado una copia simple sin firmas autógrafas del acta del 17 de enero de 1820 de la que han sido extraídas las citas transcriptas en el cuerpo del texto. Esta última acta, y las disponibles entre los años 1821-1823, pueden hallarse en la publicación oficial dirigida por Luque Colombres: ARCHIVO MUNICIPAL DE CÓRDOBA (1980) *Actas Capitulares*, Libro quincuagésimo, Imprenta de la Universidad, Córdoba, pp. XI-XIII.

²¹ Ídem, p. XII.

²² Ídem, p. XIII.

²³ Una obra que analiza la trama de los procesos de declaración de independencia en el espacio político hispanoamericano es la de Alfredo ÁVILA, Jordana DYM, Aurora GÓMEZ GALVARRIATO y Erika PANI (dir.) (2013), *Declarando Independencias. Textos fundamentales*, El Colegio de México, México D.F. Esta declaración de la Independencia provincial acordada por el Cabildo abierto –sin perjuicio de lo que determinara la voluntad general– fue aprobada el 18 de marzo de 1820 por la Soberana Asamblea, reunida a tal efecto, donde se encontraba toda la Provincia representada (véase *infra*). El título de “Soberana Asamblea” había comenzado a utilizarse desde 1815 para designar a la junta electoral que debía nombrar los oficios capitulares; se trató de un cuerpo que, sin embargo, excedió su mera función electoral y comenzó a intervenir en una amplia rama de negocios, véase AGÜERO, A. (2012) “La extinción del cabildo en la República de Córdoba, 1815-1824”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, 3ra Serie, Nro. 37, [en línea], disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0524-97672012000300002&lng=es&nrm=iso.

²⁴ El 19 de febrero de 1811 se leyeron en el Cabildo los pliegos enviados por la Exma. Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata “*relativa a que se establezca en esta y demás capitales del Virreynato, una Junta compuesta de cinco individuos, que por aora seran el Presidente o el señor Gobernador Intendente que estubiese nombrado como Presidente, y los quatro colegas que se eligiesen por el pueblo*”, según lo resuleto el día 10 de febrero anterior. Luego de la lectura del documento se ordenó cumplir puntualmente lo previsto y en marzo de ese año se eligieron sus integrantes. José Xavier Díaz y José Norberto de Allende –futuro corredactor del Reglamento Provisorio de 1821, *infra*– fueron dos de los “*quatro colegas...*” (ACTAS CAPITULARES DE CÓRDOBA: 1808-1813 (2010) Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, p. 86). La

Córdoba entre 1814 y 1816 durante el protectorado de José Gervasio Artigas²⁵. Era un sujeto que respondía a la facción de los antiguos federalistas del año '15 que lograron convencerlo en esta oportunidad para que asumiera otra vez el mando de la Provincia²⁶. El ex Gobernador sabía que más temprano que tarde iba a tener que rivalizar con Bustos una vez que el jefe del Ejército hiciera su ingreso triunfal a la ciudad²⁷. Pese a sus temores –luego los acontecimientos le darán la razón– aceptó el desafío, y en aquella reunión extraordinaria en la Sala Capitular del 19 de enero de 1820 se lo designó como Gobernador interino con el “mandato de convocar a la provincia para elegir los representantes que [debían] nombrar gobernador titular”; acto seguido, se procedió una vez más a “la declaración de la Independencia”²⁸.

experiencia duró casi un año hasta que el gobierno central suprimió las juntas provinciales y subalternas, oficio que en Córdoba comunicó el Sargento Mayor del Regimiento N° 2, Don Santiago Carrera, el 17 de enero de 1812, en el mismo acto en que tomó posesión del cargo de Gobernador Intendente de la Provincia (Ídem, p. 96).

²⁵ Un interesante análisis sobre la influencia del General Artigas en los pueblos rioplatenses puede encontrarse en el trabajo de FREGA, A. (2005) “La virtud y el poder. La soberanía particular de los pueblos en el proyecto artiguista”, en GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comp.), *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, 2ª. ed. corregida, Eudeba, Buenos Aires; (2001) “El Artiguismo en la Revolución del Río de la Plata. Algunas líneas de trabajo sobre el Sistema de los pueblos libres”, en FREGA y A. ISLAS (coord.) *Nuevas miradas en torno al Artiguismo*, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la universidad de la República, Montevideo.

²⁶ Durante el primer gobierno de Díaz (1815-1816) se declaró la independencia de la Provincia por vez primera. Según CELESIA, “la declaración de la independencia de Córdoba fue declarada el 17 de abril ya sea en una asamblea popular o por un acto del gobierno, o por los dos, esto es una resolución popular sancionada en Bando por el Gobernador, que es lo más posible”, CELESIA, E. (1932) *Federalismo Argentino. Apuntes Históricos: 1815-1821, Córdoba*, Tomo I, Lib. Cervantes de Julio Suárez, Buenos Aires, p. 92. De acuerdo con SEGRETÍ, C. (1966) “La Independencia de Córdoba en 1815”, *Separata del Cuarto Congreso Internacional de Historia de América*, Tomo II, Buenos Aires, pp. 468-469, “la presión de Artigas obliga a la provincia de Córdoba a declarar su independencia del gobierno de Buenos Aires cortando toda relación con él. Independencia resuelta y declarada por los *apoderados y representantes* del pueblo”, ahora bien, esa Declaración es realizada la noche del día 16 de abril de 1815 y publicada por bando del Gobernador Díaz al día siguiente, es decir, el 17 de abril, fecha a la que Celesia hace referencia como la de la Declaración de la Independencia de la Provincia de Córdoba. En el Bando que he referido, el Gobernador afirma que “*há acordado la Asamblea Provincial la noche de ayer, declara como declara que la provincia de Cordova queda enteramente separada del gobierno de Buenos Ayres y cortada toda relación, bajo de los auspicios, y proteccion del General de los Orientales que se constituye garante de su libertad*”, Ídem, p. 470. Sin embargo, es el mismo Díaz quien unos meses más tarde en un oficio enviado al Director matiza la trascendencia de la declaración: “*querían la unión pero no la dependencia, ellos pues, entendían que con la tal independencia sólo rompían los vínculos de dependencia a la Capital, a la odiada Capital Buenos Aires, pero no se desunían de ella, ni de las demás provincias, subordinaban por último su destino definitivo al futuro Congreso General, a quien reconocían la máxima autoridad, como representante único y genuino de la Supremacía, de la Soberanía Nacional, la que aceptaban con preeminencia plena sobre la llamada independencia, que en concreto, fuera de la pomposidad de las palabras, en el hecho la reducían a una discreta autonomía*”, la comunicación de Díaz puede hallarse en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo I, p. 209.

²⁷ La tarde del 30 de enero de 1820, Bustos ingresó a la ciudad al mando del ejército pronunciado en Arequito, y recibió todas “las muestras más seguras de regocijo popular... todas las clases de la sociedad participaron de las celebraciones que se dedicaron al fausto acontecimiento”, MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) Ob. cit., p. 64.

²⁸ SEGRETÍ, C. (1970) Ob. cit., p. 146.

I. 2. 1. Pueblo, cabildo, representación

No era la primera vez que en Córdoba se recurría a la práctica de convocar al “pueblo” a una reunión pública para que expresara su voluntad en la Sala Capitular de la Ciudad. Según ha sostenido uno de los historiadores que más se ha ocupado del estudio de los cabildos hispanoamericanos, la institución del “cabildo abierto” podía definirse como “la junta que se hace en alguna villa o lugar a son de campaña tañida, para que entren todos los que quisieren del pueblo, por haberse de tratar alguna cosa de importancia u de que pueda resultar algún gravamen que comprehenda a todos; lo cual se ejecuta a fin de que ninguno pueda reclamar después”²⁹. Por su parte, un doctrinario castellano del siglo XVIII –lo cual es indicador de que la práctica hundía sus raíces en la tradición hispana– enseñaba que “*Algún caso tan grave, é importante se podría ofrecer, en que conviniese, para mejor acierto, llamar algunas personas de buen zelo, parecer, y experiencia de fuera del ayuntamiento, que asistan en él al trato, y conferencia del negocio; y en tal caso, no es cosa agena de razón, y de utilidad llamarlos, y que den su voto y parecer...*”³⁰. Con esas características –además de otras propias dadas por las peculiaridades del territorio y gobierno de todo el continente americano– se trasladó y replicó en la América española durante el período colonial³¹.

²⁹ BAYLE, C. (1952) *Los cabildos seculares en la América española*, Sapientia, Madrid, p. 433. Otro trabajo clásico es el de MINVIELLE PORTE PETIT, J. (1952) “Cabildos abiertos en Hispanoamérica”, en *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, Argentina, Vol. XIV, Nros. 72-73. También TAPIA, F. (1966) *El cabildo abierto colonial*, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, hace un intento por encontrar una definición más precisa de la institución: “¿Qué era en realidad el cabildo abierto? Al tratar de definirlo encuentra uno inmediatamente la dificultad de que las leyes de Indias apenas lo mencionan, y en las tres referencias que hemos encontrado, nunca se regulan sus estatutos o se intenta especificar sus atribuciones (...) De todas las descripciones sobre el cabildo abierto que hemos encontrado, nos ha parecido conveniente escoger tres, que pueden considerarse más adecuadas. Por ejemplo, el historiador chileno Julio Alemparte dice que el cabildo abierto ‘era una reunión, con presencia y colaboración del pueblo, o más bien de vecinos calificados, para tratar asuntos graves’ (...) El historiador americano William Pierson... ‘una asamblea extraordinaria, en la que de una forma popular se trataba sobre situaciones y problemas no previstos en las leyes. Por ejemplo, para reclutar tropas, recibir comunicaciones reales de importancia, proclamar nuevos impuestos, etc.’ (...) el historiador uruguayo José Salgado... ‘asistían todos o parte de los vecinos, juntamente con las autoridades de la ciudad, para tratar y decidir sobre puntos de alguna importancia para la misma ciudad’”, pp. 6-7.

³⁰ “(...) y en tal caso, no es cosa agena de razón, y de utilidad llamarlos, y que den su voto y parecer: y aunque esto se usa pocas veces, yo lo he visto, y proveído alguna de voluntad, y gusto de los Regidores; de lo cual el pueblo se satisface mucho, por ver que es deseo, y zelo de acertar: y esto se puede hacer, aunque haya contradicción de la menor parte, según Compostelano, y otros: y aunque Belluga diga, que contradiciéndolo alguno de los Capitulares, no se deben admitir; y esto mismo refieren Ciceron, Budeo, Lanceloto, y otros, que usaban los antiguos Romanos, y los Emperadores, metiendo en el Senado Caballeros, y otras personas supernumerarias, que hubiesen tenido Magistrados, ó otros Varones escogidos de los Censores, para consulta, y consejo de los negocios graves. Y en los Parlamentos de París, y de Tolosa de Francia, entran con los Consejeros los Obispos, que son Pares de Francia, ó presentados por el Rey, según Juan Lucio, y otros. Y de aquí nace lo que hoy se usa en los Pueblos menores, hacer Concejos abiertos”, CASTILLO DE BOBADILLA, J. (1759) *Política para corregidores, y Señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra, y para Jueces eclesiásticos, y Seglares, y de Sacas, Aduanas, y de Residencias, y sus Oficiales; y para Regidores, y Abogados; y del valor de los Corregimientos, y Gobiernos realengos, y de las Órdenes*, Segundo Tomo, Imprenta de Joachin Ibarra, Madrid, pp. 114-115.

³¹ Un trabajo que aborda la relación entre tradición castellana y ciudad colonial es el de AGÜERO, A. (2013c) “Ciudad y poder político en el antiguo régimen. La tradición castellana”, en, TAU ANZOÁTEGUI, V. y AGÜERO, A. (coords.) *El derecho local en la periferia de la Monarquía Hispana. Río de la Plata, Tucumán y Cuyo, siglos XVI-XVIII*, INHIDE, Buenos Aires, pp. 121-184.

Las definiciones no son del todo precisas, pues omiten especificar que la convocatoria se hacía a la parte “*principal y más sana*” del vecindario, “*sanior et maior pars*” según la tradición canónica. En consecuencia, se debe estar advertido para evitar equívocos que podrían conducir a dotar a este tipo de reuniones de cierto carácter democrático. Es que en aquel contexto, el concepto de *pueblo* “conservaba la acepción organicista y corporativa propia de la sociedad del antiguo régimen (...) el pueblo era concebido no en términos atomísticos e igualitarios, sino como un conglomerado de estamentos, corporaciones y territorios, con las correspondientes relaciones propias de una sociedad que consagraba en lo político la desigualdad enraizada en la economía”³². Un somero análisis de las actas de diferentes cabildos abiertos celebrados en Hispanoamérica durante los siglos XVI a XVIII, ha servido para comprender mejor la indefinición sustantiva y adjetiva de este tipo de reuniones ya que, “tanto su convocación, como el tiempo, sitio, forma, frecuencia de las reuniones, asuntos que se trataron, número de asistentes, ninguna de estas cosas estuvo regida por ley sino solamente por el uso de la costumbre”³³. Tal es así, que en las grandes compilaciones normativas mandadas a preparar por los monarcas hispanos apenas se los mencionaba³⁴.

Luego de la crisis imperial en la primera década del ochocientos, la ausencia del titular de la soberanía ocasionó su retroversión a los pueblos, aunque fuera a modo de depósito, lo que promovió la resignificación de los viejos concejos coloniales³⁵. Como ha explicado PORTILLO, la idea de asunción de la soberanía como depósito tenía sus consecuencias políticas y constitucionales directas: “asumir una capacidad de tutela, de uso y administración, pero, al mismo tiempo, implica admitir incapacidad para alterar el ordenamiento”³⁶. Con esa advertencia, los cabildos abiertos adquirieron una potencia y una función en el ámbito político que hasta entonces habían desconocido en el plano

³² CHIARAMONTE, J. (1997) Ob. cit., p. 114.

³³ TAPIA, F. (1966) Ob. cit., p. 83. Respecto de los diferentes asuntos que podían llegar a fundamentar la convocatoria de un cabildo abierto el abanico es tan amplio que no puede establecerse una enumeración taxativa de razones precisas. Este tipo de reuniones sirvió tanto para fundar o trasladar ciudades, elegir algunos cargos oficiales cuando una Cédula Real así lo había permitido para ciertas ciudades, atender algunos casos de carácter religioso –de manera extraordinaria, ya que por lo general este tipo de asuntos se reservaban a los cabildos eclesiásticos–, recaudaciones de dinero –quizá una de las más frecuentes razones de convocatoria de cabildos abiertos en el período colonial–, defensa de la ciudad, construcción de obras de interés para la ciudad, etc. Para un análisis de diferentes casos puede consultarse la misma obra de TAPIA, pp. 15-81.

³⁴ Suele referirse como mención indirecta a los cabildos abiertos la Ley III, Tít. X, Libro IV, de la *Recopilación de leyes de los Reynos de Las Indias* (1680) que establecía que “*Si no se huviere capitulado con los Adelantados de nuevos descubrimientos y poblaciones, que puedan nombrar Justicia y Regimiento, hagan elección de Regidores los vezinos en el número, que al Gobernador pareciere, como no exceda del contenido en las leyes antecedentes*”.

³⁵ La idea de reversión de la soberanía a los pueblos, según la cual “el gobierno de los pueblos, por derecho natural, pertenece a los pueblos mismos [...] remite a un imaginario político y jurídico profundamente enraizado en todo el mundo hispano y más particularmente en América”, GUERRA, F. (1998) “De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía”, en GUERRA, F. y LEMPÉRIÈRE, A. (coord.) *Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX*, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 109-139.

³⁶ PORTILLO, J. (2006) Ob. cit., p. 56.

institucional, esto es, la de ser un medio para legitimar las decisiones más importantes para la vida de las diferentes ciudades³⁷.

De este modo, ante la necesidad de tomar medidas de trascendencia política que estuvieran respaldadas por el consenso de los vecinos del lugar –o el *pueblo*, en el sentido antes apuntado–, comenzó a ser más frecuente que en el período anterior la convocatoria “a la parte más sana y principal del vecindario” según la fórmula de estilo, que no era más que una manera de referirse a “todo lo que significaba algo en la sociedad, el Provisor, los Cabildantes, los funcionarios, prelados de todos los conventos, comerciantes, militares, etc.”³⁸. A lo largo y ancho de todo Hispanoamérica, desde Nueva España hasta el Río de la Plata, pasando por Chile, Perú, Venezuela y Nueva Granada, este tipo de reuniones fueron el instrumento mediante el cual se sentaron las bases para comenzar a edificar el nuevo orden político, además de favorecer la adopción de procedimientos más participativos³⁹. Luego de 1810, las primeras normas que se sancionaron sobre materia electoral en territorio rioplatense, comenzando por el *Reglamento para la formación de Juntas Provinciales y Subordinadas de 1811*, buscaron limitar la participación de los vecinos en aquel tipo de reuniones públicas. En ellas se apelaba a estrategias como la organización de elecciones indirectas para la conformación de los cuerpos de gobierno –lo que a menudo suele ser analizado como el intento por instaurar un nuevo régimen representativo–. Sin embargo, durante la primera década revolucionaria, “el procedimiento de cabildo abierto no desaparece sino que retorna irregularmente en situaciones de crisis política”⁴⁰.

En el caso cordobés, por ejemplo, fue un cabildo abierto el que el 17 de agosto de 1810, reunido de acuerdo a lo consensuado el 13 de agosto anterior, eligió al Deán Gregorio Funes como diputado por Córdoba para “que represente los derechos de esta Ciudad en la Junta Provisional Gubernativa de la Capital de Buenos Ayres”⁴¹. El propio José Xavier Díaz fue elegido Gobernador de la Provincia por un cabildo abierto el 29 de marzo de 1815 en remplazo del General Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, designado por la autoridad del gobierno central, a cargo del Director Supremo Gervasio Antonio de

³⁷ AGÜERO, A. (2012) Ob. cit. Continúa el autor: “Tras la crisis imperial los cabildos actuaron como representantes naturales de las repúblicas y ejercieron, al mismo tiempo, de depositarios del poder soberano que había quedado vacante (...) Si, de acuerdo con la constitución histórica, para las cuestiones ordinarias del gobierno doméstico el regimiento era autosuficiente, en situaciones extraordinarias la costumbre exigía la consulta al cuerpo de la república mediante la convocatoria a los cabildos abiertos”, p. 45.

³⁸ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo I, p. 29.

³⁹ En este sentido, LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) *El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico (1808-1826)*, Colección Bicentenario de las Cortes de Cádiz, Congreso de los Diputados, Madrid, p. 301. Para un estudio del papel de los cabildos luego de la crisis de la Monarquía Católica, véase MOLINA MARTÍNEZ, M (2002) *Los cabildos y la independencia de Iberoamérica*, CEMCI, Granada.

⁴⁰ CHIARAMONTE, J. (1995b) “Vieja y nueva representación: los procesos electorales en Buenos Aires, 1810-1820”, en ANNINO, A. (coord.) *Historia de las Elecciones en Iberoamérica: Siglo XIX, de la formación del espacio político nacional*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, p. 47.

⁴¹ “Sin perdida de momento se proceda á la convocacion de la parte más sana y principal de esta vecindario á la Sala Consistorial... á efecto de que libre y espontáneamente presten sus sufragios para el nombramiento de diputado que represente sus derechos y se persone en la Capital de Buenos Ayres para la asistencia del Congreso General ordenado por la Junta Provisional Gubernativa”, ACTAS CAPITULARES DE CÓRDOBA: 1808-1813 (2010) Ed. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, p. 75.

Posadas⁴²; y a un mes de dicho acontecimiento, fue también un cabildo abierto el que fortaleció su poder eliminando de la escena política provincial a los oponentes del Gobernador, más propensos a la unión con Buenos Aires que con Artigas⁴³. En esa oportunidad, abonando la teoría propuesta del papel legitimador de las decisiones políticas que adquirieron estas reuniones, Díaz manifestó que “no hay expresión más significativa de la libre voluntad de un pueblo, que la voz del mismo”⁴⁴. Aunque conviene insistir nuevamente en la idea ya expresada sobre el sentido de la noción de pueblo, ahora con las palabras de GUERRA, “el pueblo, como principio de legitimidad, es todavía el pueblo muy concreto de la política antigua”⁴⁵.

Otro cabildo abierto, el 26 de agosto de 1815, decidió procesar a un conjunto de capitulares que habían transado con las autoridades de Buenos Aires comprometiendo los intereses del pueblo de Córdoba⁴⁶. Un año más tarde, el 22 de agosto de 1816, se reunió un cabildo abierto impulsado por el jefe de una sublevación, Don Juan Pablo Bulnes, para quien “*Los votos de los Pueblos no pueden demostrarse sinó por una voz viva, y esta solo puede conocerse por medio de un Cabildo abierto*”⁴⁷; en esa reunión se decidió que las tropas sublevadas se alejaran de la Ciudad para que los vecinos pudieran sesionar con mayor libertad y, reunidos nuevamente el 26 de agosto, resolvieron convocar a elecciones en los cuarteles de la Ciudad para la elección de ocho representantes. Ellos, junto al Gobernador, decidieron solicitar a Bulnes que entregara las armas y éste accedió; sin embargo, unos días más tarde, acabó enfrentándose en una batalla armada contra Díaz, forzando su renuncia, poniendo fin a su primer mandato como Gobernador Intendente de la Provincia de Córdoba, y dejando en manos del Congreso reunido en Tucumán la designación del nuevo Gobernador, cargo que recayó en Ambrosio Funes.

⁴² En aquel cabildo abierto del 29 de marzo de 1815 votaron ciento ochenta y seis personas para elegir un nuevo Gobernador, de las cuales noventa y seis lo hicieron a favor de José Xavier Díaz, cfr. CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo I, p. 30. Difiere en este aspecto SEGRETÍ, C. (1966) Ob.cit., pp. 449: “¿Quiénes votan? No todos los asistentes; el privilegio sólo corresponde a 183, sin que pueda saber la causa de la limitación como no sea la pervivencia colonial que restringía la representatividad a los que tenían significación social y económica” y en la nota continúa, “disiento con el escrutinio realizado por este autor [CELESIA, E.]”. El acta capitular recoge, efectivamente, el voto de ciento ochenta y tres vecinos de la ciudad de Córdoba, ARCHIVO MUNICIPAL DE CÓRDOBA (1967), *Actas Capitulares*, Libros cuadragésimo séptimo y cuadragésimo octavo..., pp. 241-246.

⁴³ El 28 de abril de 1815, una “verdadera asonada” comandada por Díaz y sus partidarios reduce a la corporación de Apoderados que había sido diseñada por el cabildo abierto del mes anterior para representar a la Provincia a sólo cinco miembros “amigos del Gobernador”, en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo I, p. 96.

⁴⁴ Estas palabras de Díaz se pueden encontrar en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo I, p. 282.

⁴⁵ GUERRA, F. (1998) Ob. cit., p. 137. Como se irá viendo, fue muy corriente en estos procesos de independencia apelar a la noción de “pueblo” para fundamentar decisiones políticas; para comprender su alcance puede resultar de utilidad el análisis que de distintas acepciones del término construye ROSANVALLÓN, P. (1998) *Le peuple introuvable*, Gallimard, París; hay una edición en castellano (2004) *El pueblo inalcanzable. Historia de la representación democrática en Francia*, Instituto Mora, México.

⁴⁶ Este proceso especial, llevado a cabo ante una comisión nombrada al efecto sin intervención de fiscales ni defensores, culminó con la sentencia dictada el 12 de septiembre de 1815 por la cual se “establece la culpabilidad de los capitulares... y sus cómplices ciudadanos (...) condenando a todos los citados a confinación a distintos puntos dentro de la Provincia”, aunque luego serían indultados por el propio Gobernador, cfr. CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo I, pp. 201-202.

⁴⁷ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo I, p. 278.

Estas corporaciones tenían prácticas deliberativas que por lo general estaban orientadas por la larga tradición del unanimismo⁴⁸. Durante la década que siguió a la revolución, y en los años que vendrían —como se verá más adelante—, aquél sería una característica de los espacios políticos locales en Hispanoamérica. En este sentido, el rechazo al disenso o la invocación genérica al “pueblo” de Córdoba son indicadores que muestran cómo, por debajo de los ensayos electorales indirectos que prosperaron, seguían latiendo con toda operatividad distintas tradiciones propias de una concepción de la representación orgánica y corporativa. Así, prácticas como la aclamación, los aplausos y gritos, o la adhesión espontánea, servían de fundamento para los actos del poder público, tanto para la identificación del derecho como para la legitimación de las autoridades políticas⁴⁹.

I. 3. Convocatoria a la Provincia. Elecciones y formación de una Asamblea Soberana

Díaz asumió el mando interino de la Provincia el día 23 de enero de 1820. Su primer acto de gobierno consistió en comunicar a las demás provincias rioplatenses el “*acontecimiento feliz*” de la declaración de la independencia de Córdoba y su nombramiento provisorio⁵⁰. Sin embargo, su interinato tenía un objeto preciso que había sido fijado por el mismo cabildo abierto que lo había designado: la convocatoria a la Provincia para que, *reunida toda ella*, eligiera a los representantes que, formando un nuevo Cuerpo Provincial, debían nombrar al Gobernador propietario y ratificar todo lo actuado hasta entonces por el Cabildo de la ciudad. Esta integración de la población rural puede ser interpretada como un indicio de cambio en los modos de concebir la representación de la comunidad política. Indirectamente, se estaría impugnando la representatividad del Cabildo —incluso en su modalidad de “abierto”, pero siempre acotado al ámbito de la ciudad—, por falta de representatividad de la zona rural.

Existe en Córdoba un antecedente de este tipo donde se pretendió integrar un cuerpo colegiado para atender los asuntos provinciales. En el seno del cabildo abierto que designó al propio Díaz como Gobernador Intendente en 1815, hubo una propuesta anónima de creación de una Corporación de Apoderados o Representantes en la Provincia⁵¹. La experiencia de este cuerpo indefinido, cuya razón de ser respondía más

⁴⁸ Sobre el unanimismo, puede consultarse MICHAUD-QUENTIN, P. (1970) *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-Age latin*, Librairie philosophique J. Vrin, París.

⁴⁹ El desarrollo de esta idea a partir del ejemplo neogranadino en CALDERÓN, M. y THIBAUD, C. (2010) Ob. cit.

⁵⁰ El Gobernador envió una circular fechada el 25 de enero a Don Estanislao López, a José Gervasio Artigas, y a los Gobernadores de Tucumán y Salta, señores Bernabé Aráoz y Martín Miguel de Güemes; también se dirigió a los Cabildos de Mendoza y La Rioja, Cfr. SEGRETÍ, C. (1960) Ob. cit., pp. 8-9. Incluso se dirigió al General en jefe del Ejército del Perú, Cfr. VERDO, G. (2006a) Ob. cit., p. 377.

⁵¹ Según el acta del cabildo abierto del 30 de marzo de 1815 se escuchó, en la Sala Capitular, “*aclamación general del Pueblo congregado que fué reducida a solicitar ser urgentísimo el nombramiento de un competente número de sugetos de probidad; para evitar la distracción que en estas ocurrencias pueden sufrir todas las clases del Pueblo, orillando sus ocupaciones, sean oydos siempre como sus Apoderados y Representantes sin necesidad de citación general del Pueblo en los Cabildos abiertos... contemplándose suficiente el número de veinte vecinos discretos, se resolvió la pronta elección de ellos... por los Señores*

bien a una maniobra política para balancear fuerzas entre los actores que a un intento por establecer una verdadera representación provincial, fue muy breve. El acto de mayor importancia en que participó, aunque no autónomamente sino en conjunción con el Cabildo de la ciudad, fue aquella primera declaración de independencia el 16 de abril de 1815 –en rigor, una separación del gobierno de Buenos Aires–. Apenas un mes después de haber sido creada, otro cabildo abierto decretó su extinción como tal, transformándose a partir de ese momento en un reducido cuerpo de cinco miembros *amigos del gobernador* designados por él para aconsejarlo en determinados asuntos⁵². Algunos han creído ver en este episodio “una iniciativa democrática por excelencia: la creación de una nueva institución... que es en realidad la primera tentativa de una Junta de Representantes en la Provincia de Córdoba”⁵³. Sin embargo, esta “Junta” participaba de ciertas características que desautorizan una afirmación de ese tipo: debía ser nombrada por el mismo Ayuntamiento y unirse a él cuando así lo estimara conveniente el Gobernador o el Síndico Procurador, que eran los facultados para convocarla o solicitar su convocatoria. En consecuencia, tanto por su composición –veinte vecinos de la Ciudad designados por el Cabildo–, como por sus funciones –que no están especificadas en ningún documento– y su carácter intermitente, dista mucho de ser equiparada a una auténtica Sala de Representantes de la Provincia como la que en 1820 se pretendía reunir.

Lejos de aquélla experiencia efímera que había tenido lugar un lustro atrás, y en cumplimiento de la misión encomendada a menos de un mes de haber sido electo por los vecinos de Córdoba, Díaz redactó y dirigió a todos los habitantes de la campaña una circular fechada el día 15 de febrero⁵⁴. En ella celebraba con júbilo haber llegado “*la justa causa de los Pueblos al termino dichoso por q^e. havían suspirado constantemente, y en que havían trabajado todo el tiempo, y con igual empeño, que por su libertad política, é independencia nacional: es decir al pleno gose de su libertad civil, é independencia provincial*”⁵⁵. Es interesante visualizar cómo para el Gobernador la libertad civil se piensa en términos corporativos, casi como sinónimo de independencia provincial, una concepción más cercana a la libertad de los antiguos que a la del liberalismo decimonónico⁵⁶.

del Ayuntamiento”, ARCHIVO MUNICIPAL DE CÓRDOBA (1967), *Actas Capitulares*, Libros cuadragésimo séptimo y cuadragésimo octavo, Imprenta de la Universidad, Córdoba, pp. 248-249.

⁵² La decisión fue tomada en el cabildo abierto del 28 de abril de 1815. Los cinco “Consejeros” elegidos por el “Supremo Poder Ejecutivo” para subrogar al cuerpo de los apoderados, fueron los ciudadanos Dr. Norberto del Signo, Dr. José Antonio Cabrera, Dr. Miguel Calixto del Corro, Dr. Juan Antonio Saráchaga y Dr. Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, ARCHIVO MUNICIPAL DE CÓRDOBA (1967), *Actas Capitulares*, Libros cuadragésimo séptimo y cuadragésimo octavo..., p. 258.

⁵³ De este tenor es la calificación que hace de la corporación CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo I, p. 53.

⁵⁴ El texto completo de esta circular puede ser consultado en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo II, pp. 182-185. En las líneas que siguen se analizan los puntos más importantes de la misma.

⁵⁵ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo II, p. 183.

⁵⁶ La dicotomía entre los dos tipos de libertades fue planteada en una conferencia clásica por CONSTANT, B. (1820) “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, en *Curso de política constitucional*, Tomo III, Imprenta de la Compañía, Madrid.

A continuación, no podía dejar de reconocer que la razón de encontrarse la Provincia en tan ansiada posición se debía a la hazaña del Ejército Auxiliar del Norte que “*cansado de obedecer ciegamente los caprichos de un Gobierno arbitrario y ambicioso, horrorizado con los males de una guerra civil la más encarnizada, y penetrado sobretudo de la voluntad general de la Nación que abiertamente tendía al federalismo...*”, tuvo la firmeza de cortar “*... de un golpe los lazos que nos ataban a una capital opresora [Buenos Aires], y resolvió sostener con su fuerza los derechos de los pueblos, y hacer que vajo su garantía y protección se establezca de común acuerdo el nuevo sistema de federación y alianza a que tanto aspiran, y que es tan análogo a los diversos climas, carácter y costumbres que tienen las Provincias que componen esta parte de la América*”⁵⁷. Como se puede observar, las invocaciones federales de los protagonistas de esta primera época encuentran mayor fundamento en la tradición de autogobierno colonial que en modelos constitucionales extranjeros.

Luego de aquellas consideraciones preliminares, y “*deseando el Gobierno que esta Provincia, se constituya cuanto antes, y fixe con leyes fundamentales las bases de su independencia*”⁵⁸, lanzaba una amplia convocatoria a elecciones para la conformación de una Asamblea Provincial. Tres importantísimos objetos eran los que, según la nota del Gobernador interino, llenarían la actividad del nuevo Cuerpo y se erigían en la razón principal de su reunión: en primer lugar, el nombramiento del Gobernador que, como titular del cargo, dirigiría los destinos de la Provincia⁵⁹; en segundo lugar, la ratificación por parte de un cuerpo representativo de toda la Provincia de la declaración de la independencia realizada por el cabildo abierto el mes anterior⁶⁰; y por último, el nombramiento –a cargo de los electores– de los integrantes de la primera Legislatura o Asamblea Constituyente Provincial⁶¹. Conviene detenerse un momento en algunos aspectos centrales de esta convocatoria.

La primera cuestión relevante es la consolidación de una práctica, por entonces reciente, que venía a trocar no sólo el *modus operandi* de los procedimientos electorales tradicionales sino también, al menos en el plano discursivo, el *status* de la ciudad y la campaña como dos mitades de un nuevo espacio político emergente: la Provincia⁶². La convocatoria a elecciones a “*toda ella*”, según las palabras del Gobernador, implicaba un

⁵⁷ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo II, pp. 183-184.

⁵⁸ Ídem, p. 184.

⁵⁹ “[1] para la elección del primer Jefe de la Provincia, en cuyo nombramiento debe tener parte toda ella”, Ídem, pp. 184.

⁶⁰ “[2] para la declaración pública y solemne de su independencia provincial”, Ídem, pp. 184.

⁶¹ “[3] para el nombramiento de personas de juicio, probidad, y luces que hayan de componer la Legislatura o Asamblea Constituyente de la Provincia, cuya formación es tan necesaria, y aún toda el alma del nuevo sistema de gobierno que se trata de establecer, por que ella es la que nos ha de dar las leyes fundamentales del gobierno económico y particular de la Provincia y todas las demás que abraza y compone la administración pública”, Ídem, pp. 184.

⁶² Se ha dicho que en las experiencias hispanoamericanas posteriores a la crisis de la Monarquía Católica, los sujetos depositarios de la soberanía vacante, es decir, los pueblos –y más específicamente sus Cabildos– “pretendieron fijar sus tradicionales ámbitos jurisdiccionales de poder transformándolos en espacios políticos contemporáneos”, LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) Ob. cit., p. 87.

cambio cualitativo –aunque no por ello menos importante en el plano cuantitativo– según el cual la soberanía se trasladaba de la Ciudad a la Provincia⁶³. Aún después de 1810 el cabildo había seguido manteniendo su protagonismo como director de la vida política en tanto que representante natural de la ciudad y el ámbito territorial de la campaña o zona rural⁶⁴. Sin embargo, el Estatuto Provisional de 1815 que regulaba el procedimiento según el cual se debían elegir diputados que representaban a las Provincias en el Congreso General Constituyente de Tucumán, fue la primera norma que estableció la realización de elecciones fuera del espacio urbano incorporando la representación de la campaña; desde entonces, el área rural participó de las elecciones.

No se analizarán aquí los avatares de aquella elección para designar representantes ante un cuerpo que no era estrictamente cordobés sino del conjunto de las Provincias Unidas, ni la de cabildantes del año siguiente realizadas a partir de la libre interpretación a que sometieron las autoridades cordobesas las normas del mismo Estatuto Provisional⁶⁵. Basta con apuntar que no fue en 1820 la primera vez que concurrieron a sufragar tanto vecinos de la ciudad como habitantes de la campaña, de allí la calificación como práctica reciente –y no inédita– que comienza a consolidarse como procedimiento para el nombramiento de representantes de todo el nuevo espacio político emergente.

La segunda cuestión que merece consideración es el calificativo de *soberana* que recibe la Asamblea Provincial desde el momento de su reunión. De qué otro modo podría ser un cuerpo con facultades expresas para declarar la independencia e impulsar un proceso constituyente. Sin embargo, llama la atención la limitación de antemano establecida en los poderes de los representantes, condicionamiento que surgía de la indicación expresa dada por el Gobernador de deber expedirse dichos poderes para los

⁶³ Este cambio, para algunos autores, es un proceso que antes de ser el producto de la ampliación territorial implica un «cambio profundo de conformación del sujeto de la soberanía y por consiguiente del régimen representativo», ROLDÁN, D. (2003) “La cuestión de la representación en el origen de la política moderna. Una perspectiva comparada (1770-1830)”, en SÁBATO, H. y LETTIERI, A. (comps.) *La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, p. 41. Sin embargo, como se verá más adelante, es una afirmación que puede matizarse.

⁶⁴ “Dentro del proceso de disolución de la estructura política hispanocolonial y consiguiente desaparición de las tradicionales instituciones, habrá una de ellas, que se identifica con la ciudad, que quedará en pie: el Cabildo. Y en torno a él se definirá un espacio político, la ciudad, que en principio aparece rigiendo todo el sistema de representación”, CHIARAMONTE, J. (1995b) Ob. cit., p. 24.

⁶⁵ Las elecciones para designar los Diputados que representarían a Córdoba en el Congreso de Tucumán donde, en palabras del Gobernador Díaz “*la Soberanía Americana reunida indemnemente... será la que fije las ideas y sistemas de las Provincias Unidas, y establezca la sabia constitución que deba regirnos*”, fueron llevadas a cabo de acuerdo a las normas establecidas por los Capítulos II y III de la Sección V del Estatuto Provisorio de 1815 (véase RAVIGNANI, E. (1939) *Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los textos constitucionales, legislativos y pactos interprovinciales que organizaron políticamente la nación*, Tomo VI, Segunda Parte, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Jacobo Peuser, Buenos Aires, pp. 638-650). En virtud de ellas, y de acuerdo a los resultados que había arrojado el censo más próximo, se resolvió que cinco serían los representantes que enviaría Córdoba. Los días 22 y 24 de agosto se verificaron las elecciones en primer grado y constituida la Junta Electoral por los designados en ellas, el 31 del mismo mes se llevó a cabo en la Ciudad la elección de los Diputados al Congreso. Un análisis detallado del procedimiento electoral de cabildantes, puede consultarse el trabajo que ya citado de AGÜERO, A. (2012) Ob. Cit.

tres objetos que interesaban a la Provincia, explícitamente determinados⁶⁶. Como se analizará más adelante, esta circunstancia generó arduas discusiones entre los integrantes de la Asamblea en dos ocasiones distintas –tanto el día mismo de su instalación, como unos meses más tardes cuando se debatió la posibilidad de comenzar a tratar el asunto de dar a la Provincia una Constitución–. A punto tal llegaron las discrepancias, que en la segunda de ellas se decidió consultar a los poderdantes para interpretar la extensión de las instrucciones recibidas, lo que no puede ser leído de otro modo que como la persistencia –bajo un sistema representativo supuestamente diferente– de un tipo antiguo de representación política basado en la figura del mandato imperativo.

Finalmente, está la cuestión del procedimiento electoral previsto por la circular. Diseñaba un sistema de elección indirecta de los representantes en el ámbito de la campaña, con recepción de sufragios en los distintos niveles administrativos en que estaba dividido el territorio⁶⁷. Resulta útil transcribir el fragmento más significativo de la circular: *“luego de recibir esta la comunique a los varios Pedáneos que contiene el Curato de su residencia, a efecto de que enterados de ella convoque cada uno a su respectivo distrito, y estos elijan un compromisario [1º] que deberá concurrir el lugar de la Parroquia donde reunidos todos en presencia del comisionado, o Juez que allí recida, el Cura, y un vecino honrado después de leyda esta, se abra la acta de elección en que votarán sólo los electores de cada partido del Curato, y concluida que sea se extenderan los poderes en favor de aquel que tenga la pluralidad [2º] (...) en los poderes que se extiendan se autorice plenamente al elegido para... el nombramiento de personas de juicio, providad, y luces que hayan de componer la legislatura ó Asamblea constituyente de la Provincia [3º]”*⁶⁸.

Según los términos de la circular que Díaz envió a los jueces pedáneos con fecha 19 de febrero adjuntando la convocatoria, se fijaba todo el calendario electoral para la

⁶⁶ “se extenderán los poderes en favor de aquel que tenga la pluralidad... debiendo el nombrado personarse en esta inmediatamente y advirtiéndole así mismo que en los poderes que se extiendan se autorice plenamente al elegido para los tres objetos que ahora interesan más...”, CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo II, p. 184. Algunos de los poderes que entregaron a sus representantes los electores de cada curato pueden consultarse en el Archivo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba [en adelante ALPC], papeles digitalizados, CD 1, Tomo 1, f. 099a y ss. A modo de ejemplo, en los poderes emitidos por los Curatos de Tercero Abajo, Río Seco, o los cuarteles 6º y 8º de la ciudad, los compromisarios reunidos no hicieron más que transcribir la parte correspondiente de la convocatoria referida a los tres objetos que, según lo previsto por el Gobernador Díaz, tenía la reunión de la Asamblea.

⁶⁷ En 1820 la jurisdicción de la Provincia de Córdoba estaba compuesta por once divisiones administrativas: la Ciudad, Anejos, Traslarierras, Punilla, Ischilín, Río Seo, Tulumba, Río Segundo, Río Tercero, Calamuchita y Río Cuarto. Tradicionalmente se les denominaba “Curatos” por coincidir en extensión con los espacios de jurisdicción eclesiástica de ese nombre. Desde fines del período colonial esos Curatos eran también llamados “Departamentos”, aunque la antigua costumbre que homologaba la jurisdicción civil con la eclesiástica condicionó a las autoridades que hasta mediados del siglo XIX siguieron utilizando preferentemente la voz “Curato”. Éstos a su vez estaban subdivididos en “pedanías”. Para mayores especificaciones véase CELTON, D. (1996) *Ciudad y campaña en la Córdoba colonial*, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba; Torres, A. (1948) “Organización administrativa de Córdoba; sus antecedentes históricos y legales”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 35, Nros. 3-4, pp. 821-874, julio-octubre.

⁶⁸ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo II, pp. 184.

campana y las Villas de la Provincia⁶⁹. Primero sería el turno de la elección en el ámbito más reducido de las diferentes pedanías, el día 6 de marzo de 1820, de un compromisario en representación de cada una de ellas. Luego, reunidos esos compromisarios en la parroquia que les correspondía —oficiando como autoridades el comisionado o Juez del lugar, el cura y un vecino honrado—, debían votar para el nombramiento a pluralidad de sufragios de un elector por cada Curato; este segundo acto electoral tendría lugar el día 10 de marzo.

Para la Ciudad, diferente era el procedimiento y la fecha en que se celebraría el acto electivo. La circular enviada al Cabildo, fechada el 6 de marzo del mismo año, mandaba a realizar la elección el día 13 de marzo. La Ciudad se dividía en ocho cuarteles que operaban para el caso como la unidad electoral más básica y debía elegirse un vecino en representación de dos cuarteles, de lo que resultaban cuatro electores por la Capital. Éstos se sumarían a los restantes catorce que llegarían desde los once curatos y las tres Villas de la campana. Finalmente, el 15 de marzo, era la fecha fijada para que esos representantes elegidos se encontraran en la Ciudad de Córdoba donde aguardarían la pronta reunión de la Asamblea Provincial.

De la lectura global —en toda su extensión— de los poderes de los representantes, ceñidos a aquellos tres objetos descritos, y del análisis del procedimiento electoral previsto por la convocatoria, se puede comprender una cuestión que normalmente no ha sido bien definida por parte de la historiografía que se ha ocupado de este momento político-constitucional de la Provincia de Córdoba⁷⁰. Existieron dos momentos diferentes y dos cuerpos representativos distintos con objetivos también dispares en el diseño proyectado por el Gobernador Díaz.

El primero de esos momentos fue el de la reunión de una Soberana Asamblea formada por los representantes de cada curato, villas y capital, elegidos indirectamente por un procedimiento de dos grados en la campana y uno en la ciudad. Este cuerpo tenía prefijados sus objetos: elegir al Gobernador titular, declarar la Independencia de la Provincia y nombrar a los integrantes de la Asamblea Constituyente. Inmediatamente después de dicho nombramiento comenzaba el segundo momento del proceso, la reunión de una Asamblea Constituyente formada por los sujetos “*de juicio, probidad, y luces*” designados por la Asamblea Soberana. Al parecer, la noción de poder constituyente se percibía, más que como voluntad representativa del pueblo, como conjunto de notables que conocen las necesidades de un organismo; la calificación del sujeto era lo que lo

⁶⁹ SEGRETÍ recoge las fechas en que debían celebrarse las distintas elecciones según lo ordenado por las circulares de los días 19 de febrero —a los jueces pedáneos de la campana y a los Cabildos de las Villas de La Carlota y Concepción— y 6 de marzo —al Cabildo de la Ciudad—: SEGRETÍ, C. (1970) Ob. cit., p. 147; y (1960) Ob. cit., pp. 34-35. Coincide también en las fechas LOBOS, H. (2011) *Historia de Córdoba*, Tomo IV: La Provincia Autónoma, Ediciones del Copista, Córdoba, p. 29.

⁷⁰ A modo de ejemplo se puede citar a PEÑA, R. (1980) *Juan B. Bustos y el federalismo doctrinario de Córdoba*, Cuadernos de Historia, Junta Provincial de Historia, Córdoba, Argentina. “Esta Sala de Representantes iba a tener también las facultades propias de una Asamblea constituyente, cuyo objeto sería la elección del gobernador, la declaración pública y solemne de la independencia provincial”, p. 47. En realidad, las facultades constituyentes de la Asamblea son sobrevenidas y no estaban previstas en el diseño original del proceso, como demostraré más adelante.

hacía constituyente, antes que su representatividad⁷¹. A ellos, se los debía designar con un único y trascendental objeto también prefijado por la circular del Gobernador: la redacción y sanción de un documento constitucional “y aún toda el alma del nuevo sistema de gobierno que se trata de establecer, porque ella es la que nos ha de dar las leyes fundamentales del gobierno económico y particular de la Provincia y todas las demás que abraza y compone la administración pública”⁷².

Como se puede deducir de todo lo que hasta aquí ha sido expuesto, una de las características más indiscutibles de este proceso político-constitucional, es su complejidad. Se asiste a una convocatoria a los habitantes de la Provincia para que en elecciones directas e indirectas de dos e incluso tres grados, según se mire el procedimiento para la ciudad o para la campaña, designen, escalonadamente, a los integrantes de dos cuerpos sucesivos, con distinto carácter representativo y diferentes objetos prefijados por la convocatoria a cada uno de ellos. No de cualquier tipo de metas políticas se trataba, sino de aquellas tan trascendentes como la elección de Gobernador, la declaración de la Independencia provincial y la sanción de una Constitución; objetos para los cuales cada distrito representado debía conferir poderes expresos a sus representantes.

La dualidad apuntada, de elecciones directas e indirectas, era tal porque los vecinos de la ciudad elegían directamente, reunidos todos los que habitaban en alguno de los ocho cuarteles de la ciudad, a su representante en la Asamblea Soberana. En cambio, los de la zona rural elegían indirectamente, en dos grados, al mismo tipo de representante; primero se reunían en el distrito para la elección de compromisarios que reunidos luego en sus respectivas parroquias eran los encargados de la elección del representante de cada curato. Pero la complejidad puede ir más allá si, pasando de la Asamblea Soberana directa e indirectamente elegida, se atiende al modo de nombrarse los integrantes de la Asamblea Constituyente. En este caso, como los electores miembros de la Soberana Asamblea eran los que debían designar a los sujetos que compondrían la Constituyente, ésta última sería elegida indirectamente, en dos y tres grados, según se consideren los distritos electorales de la ciudad o de la campaña, respectivamente. Por lo tanto, otro de los aspectos que conviene resaltar es el trato desigual que se daba a los vecinos de la capital respecto de los vecinos que habitaban en el ámbito rural.

Un sistema escalonado de elección que se parecía –y no tanto– al modelo gaditano. A diferencia de éste, no se puede hablar de la creación de esferas de gobierno distintas y preeminentes unas de otras⁷³. Se reconocía al curato como unidad electoral a la que llegaban los distintos compromisarios a expresar su voto para el nombramiento de un representante/elector que, reunido junto a los demás en la ciudad, formaría primero la

⁷¹ Esta percepción es coherente con la idea de “constitucionalismo consultivo”, que ha sido trabajada por MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2011) “Constitucionalismo consultivo”, en *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*, Nro. 10, pp. 89-100, y sobre la que se volverá más adelante.

⁷² CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo II, p. 184.

⁷³ Para un enjundioso análisis de las consecuencias que tiene el procedimiento electoral sancionado en la Constitución de la Monarquía Católica de 1812, y cómo los grados en los que se articuló el sufragio sirvió para reconocer esferas de gobierno locales y provinciales, véase LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) Ob. cit., Cap. VIII.

Asamblea Soberana y elegiría después a los miembros del Congreso Provincial, pero no se lo reconocía como esfera de gobierno. La determinación de grados en las elecciones no tiene *per se* un marcado impacto institucional. La Provincia era ante todo una república – así se denominó en la propia Constitución de 1821–, un sujeto político colectivo cuya naturaleza era la de una unidad irreductible. En Cádiz, por su parte, los procedimientos estuvieron dirigidos a un sujeto político que seguía pensándose –y así había sido la imagen de la antigua Monarquía– como una confederación de repúblicas.

Esta circunstancia diferencial, aleja del procedimiento seguido en Córdoba toda una serie de potenciales conflictos entre distintos cuerpos políticos con facultades de gobierno pero, a su vez, mediatiza mucho más la relación entre los sujetos y las autoridades que en definitiva debían guiar los destinos de la comunidad política. Cada uno de los distintos niveles de elección en los que se escalonó el sufragio tuvieron la característica de operar como filtros que fueron purgando y uniformizando las voluntades expresadas, en un sentido que puede ser más fácilmente controlado por los actores políticos del momento⁷⁴. Esto se evidencia en la circular que el Gobernador Díaz envió a los curas de la campaña conminándolos a actuar. Según su parecer, era “obligación de todo ciudadano, y *en especial de los que influyen sobre la multitud*, el ilustrar a los demás sobre las bases y principios del nuevo orden”, agregando más adelante que era “necesario uniformar las ideas acerca del nuevo sistema de gobierno”⁷⁵. Con similares fundamentos, la participación de la Iglesia fue una calidad típica de los procesos constituyentes que se fueron desarrollando durante la primera mitad del Siglo XIX en todo el católico orbe hispano⁷⁶. En ese amplio espacio, y para lo que aquí interesa en su parte americana, “tanto la apuesta por la parroquia cuanto lo que aquí venimos denominando «gradualismo» aseguró que los finalmente seleccionados fueran miembros de las más significativas oligarquías criollas”⁷⁷.

⁷⁴ Un eminente jurista del trienio liberal, RAMÓN SALAS, constitucionalista dedicado al análisis de la norma gaditana, advertía casi contemporáneamente con la realización de estas elecciones en el territorio cordobés que “*las juntas pues de parroquia, y todas las otras electorales se podrian nombrar ellas mismas sus presidentes (...) Tampoco á mi ver deja de tener algun riesgo en los lugares cortos la asistencia del párroco á las juntas parroquiales. ¿Quién no ve la grande influencia que el párroco, acaso la única persona que sabe algo en el pueblo, debe tener sobre el espíritu de sus ignorantes y sencillos parroquianos acostumbrados á dejarse guiar dócilmente por su pastor en los negocios mas importantes de la vida?*”, SALAS, R. (1821) *Lecciones de derecho público constitucional para las escuelas de España*, 2 vol., Imprenta de D. Fermín Villalpando, Madrid, p. 191.

⁷⁵ SEGRETI, C. (1960) Ob. cit., p. 10.

⁷⁶ Sin perjuicio de esta genérica referencia al papel que jugó la religión en un espacio político tradicional como el cordobés durante esta etapa de construcción de un nuevo orden, al analizar el texto de Reglamento Provisorio y los artículos referidos a la Religión se volverá sobre este asunto (Cap. II *infra*). Para una excelente lectura de la importancia que tiene en el espacio cordobés la fusión de religión, Iglesia y política, véase AYROLO, V. (2007a) *Funcionarios de Dios y de la República: clero y política en la experiencia de las autonomías provinciales*, Ed. Biblos, Buenos Aires.

⁷⁷ LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) Ob. cit., pp. 301-302. Allí se analiza, para ejemplificar una característica que es común a los diferentes espacios políticos, el modo en que los textos de las Constituciones de Cundinamarca y Apatzingán diseñan sistemas electorales escalonados que no tienen otra consecuencia que la apuntada.

La situación dispar apuntada entre habitantes de ciudad y campaña se puede observar también en el hecho de que se fijara una representación de tipo territorial, otorgando un representante/elector a cada curato en la campaña y cuatro representantes/electores a la capital, haciéndose abstracción del número de habitantes en uno y otro sitio, lo que hubiera implicado adoptar un tipo de representación proporcional al total de la población. El resultado de tal opción electoral, es la infra y sobrerrepresentación de los habitantes de unos y otros distritos. De acuerdo al censo llevado a cabo dos años después de celebradas estas elecciones, en 1822, se ha comprobado que la Provincia de Córdoba tenía entonces un total estimado de 81.726 habitantes, distribuidos desproporcionalmente entre la ciudad y la campaña⁷⁸. En la Capital y los suburbios habitaban alrededor de 12.901 personas para las cuales se previeron según la circular 4 representantes en la Asamblea Soberana (una proporción de 1 representante por cada 3.225 habitantes); la campaña, en cambio, tenía en aquél entonces unos 68.825 habitantes y sólo 14 representantes en la misma Asamblea (en este caso, una proporción de 1 representante por cada 4.916 habitantes). Incluso dentro del subconjunto de la campaña hubo grandes desigualdades entre unos y otros curatos, por ejemplo, el curato de Tercero Abajo que tenía apenas 1.859 habitantes estuvo (sobre)representado en la Asamblea Soberana por 1 elector, lo mismo que el subrepresentado curato de San Javier que contaba en 1820 con nada más y nada menos que 7.336 habitantes.

Otro dato demográfico interesante para lo que aquí se está analizando es la composición interna de toda esa masa poblacional cordobesa que hasta ahora ha sido considerada sólo como agregación de individuos. Por una parte está su heterogénea integración y las múltiples identidades de grupo basadas en principios étnicos o raciales. Como ha reflejado SEGRETI, “la sociedad cordobesa de la segunda década del siglo XIX está dividida en clases y castas, con las consiguientes distinciones que ellas implican (...) Los blancos... apenas si alcanzan a un 60%, pero en la ciudad su proporción es mucho menor. El resto lo comparten los mestizos, mulatos y negros (...) Entre la gente de color, además, existe la división de libres, manumitidos y esclavos”⁷⁹. Resulta casi una obviedad aclarar que, pese a algunas disposiciones aparentemente liberales sancionadas luego de 1810, es erróneo pensar que entre todos estos sujetos había una igual distribución de derechos políticos. Por otra parte está la cuestión de género. De acuerdo a los estudios sobre la población de la Provincia durante la primera mitad del ochocientos, se puede conocer un dato que si bien podía llegar a intuirse no ha formado parte de los análisis de naturaleza jurídica o constitucional de la región, y es que entre aquéllos más de ochenta mil habitantes el 46,6% eran hombres y el 53,4% mujeres, con lo cual, más de la mitad de la población total carecía de derechos políticos por su condición de género⁸⁰.

⁷⁸ Los datos demográficos han sido tomados de los trabajos de ARCONDO, A. (1998) *La población de Córdoba según los Censos de 1822 y 1832*, Serie de Estudios Nro. 28, Instituto de Economía y Finanzas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba; y ROMANO, S. (2002) *Economía, Sociedad y Poder en Córdoba. Primera mitad del siglo XIX*, Ferreyra Editor, Córdoba.

⁷⁹ SEGRETI, C. (1970) Ob. cit., p. 160.

⁸⁰ Cfr. ROMANO, S. (2002) Ob. cit., p. 359.

Todas estas consideraciones, vienen a demostrar la persistencia en Córdoba de una matriz política tradicional en materia de organización social que se traducía en un específico sistema de elecciones y repercutía en el plano de la representación política. Con todo esto, son evidentes las dificultades para calificar a este procedimiento electoral, como algunos han pretendido, en términos de novedad y modernidad siendo el primero en el que se instauró, para el derecho público rioplatense, el *sufragio universal y obligatorio*⁸¹.

Como se verá más adelante, esta primera Asamblea –no sin arduas discusiones mediante– extendió sus facultades hasta llegar a ocupar un rol coprotagónico en el gobierno de la Provincia. Mutó su naturaleza institucional y se dedicó no sólo a dictar leyes, atender asuntos de gobierno y de administración de justicia, sino que también se arrogó la potestad para discutir y sancionar la primera Constitución de Córdoba; es que tal vez había sido tan bueno el filtro en el proceso de selección para su nombramiento, que al final la Asamblea Electoral era un cuerpo de notables como se pretendía de la Constituyente. Más de un año después de su integración, con el nombramiento de los integrantes del primer Congreso Provincial en abril de 1821 quedó cumplido el último de los objetos para los cuales había sido convocada, cerrándose definitivamente el ciclo electoral diseñado por el Gobernador Interino José Xavier Díaz que hasta aquí ha venido siendo analizando⁸².

I. 4. Instalación de la Soberana Asamblea

I. 4. 1. Algunas cuestiones previas: Atribuciones de la Asamblea y calidad de sus miembros

El 17 de marzo de 1820, José Xavier Díaz anunció por bando que al día siguiente a las nueve de la mañana se reuniría la Asamblea en la sala capitular y que sus sesiones serían públicas⁸³. Tal como estaba previsto, el 18 de marzo concurrieron los representantes elegidos a la Sala Capitular del *Muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciudad*. De los dieciocho diputados que debían asistir en representación de la Provincia –Capital, Villas y Curatos–, se encontraban presentes dieciséis, en representación de trece de los quince distritos electorales en los que se había dividido la

⁸¹ De tal tenor es la afirmación que realiza SEGRETI, C. (1970) Ob. cit., p. 47: “Díaz y sus asesores incorporan al derecho público provincial cordobés el sufragio universal y obligatorio, casi dos años antes que en Buenos Aires. Es universal porque puede votar todo hombre mayor de 20 años; y obligatorio porque quien no lo haga será tenido por indiferente a la dicha y tranquilidad de la provincia, siendo ‘uno de los mayores crímenes en que pueda incurrir un ciudadano respecto de la sociedad a que pertenece’”. En igual sentido lo hace LOBOS, H (2011) *Historia de Córdoba*, Tomo IV: La Provincia Autónoma, Ediciones del Copista, Córdoba, p. 29.

⁸² El análisis de la mutación de esta Asamblea que de un momento a otro pasa a autoidentificarse como Constituyente –no sin una ardua discusión previa e incluso la consulta a los diferentes curatos que habían otorgado los poderes a sus electores–, y el proceso de discusión y sanción del Reglamento Provisorio de la Provincia de Córdoba serán objeto de los epígrafes que siguen. El nombramiento del Congreso Provincial, su instalación y otras actividades de la Asamblea Provincial durante el primer año del Gobierno de Juan Bautista Bustos será objeto de estudio en el Capítulo III (*infra*).

⁸³ SEGRETI, C. (1970) Ob. cit., p. 148

Provincia⁸⁴. La ciudad subalterna de La Rioja, hasta entonces bajo el mando de las autoridades cordobesas, también había recibido una circular por parte del Gobernador Interino, fechada el 4 de febrero de 1820, invitándola a enviar su representación a la Soberana Asamblea. Sin embargo, su cabildo decidió no participar del procedimiento electoral para iniciar su propio derrotero hacia la vida independiente, aprobando el 1º de marzo la separación de Córdoba y su constitución como Provincia autónoma al mando de Francisco Antonio Ortiz de Ocampo⁸⁵.

Poco a poco, con este tipo de acontecimientos, fue definiéndose progresivamente el territorio de las Provincias Unidas, en un proceso guiado por aquel argumento presente desde el principio en el discurso revolucionario, según el cual “la Revolución las ha liberado [a las ciudades con cabildo] del sistema anterior para ponerlas en un mismo estado de igualdad y de *tabula rasa*, desde el punto de vista de la organización política y administrativa. Este argumento... lo esgrime el diputado de Jujuy para provocar una reacción de los pueblos subalternos (es decir, dependientes de las capitales de intendencias)”⁸⁶. En esta línea se inscribe el caso de La Rioja que rechazó la invitación de Díaz, pero también los casos de Santiago del Estero, Catamarca, San Juan y San Luis en contra de sus antiguas capitales⁸⁷.

A diferencia de lo sucedido en otros territorios hispanoamericanos, sin pompa ni ceremonia quedaron abiertas las sesiones de la Asamblea Provincial. De los cordobeses, dos Curatos carecieron de representación el primer día: La Carlota y San Javier. El primero de ellos porque el Doctor Pedro Norberto de la Zerda, electo para el cargo, había demorado la partida desde su morada y se incorporaría unos días más tarde al cuerpo. El

⁸⁴ De acuerdo a las reglas electorales dispuestas, el cuerpo representativo debía estar compuesto de un total de dieciocho miembros distribuidos de la siguiente forma: cuatro representantes por la Capital; uno por cada una de las tres villas que entonces tenía la Provincia: Villa del Rosario (Río Segundo), Villa de la Concepción de Río Cuarto y Villa de La Carlota; y también un representante por cada uno de los once Curatos: Río Tercero Arriba, Río Tercero Abajo, Tulumba, Río Seco, Pocho, Punilla, Santa Rosa, Calamuchita, Ischilín, San Javier y Anejos.

⁸⁵ Cfr. SEGRETÍ, C. (1960) Ob. cit., p. 34. Un preciso estudio del caso de separación riojano y su derrotero, desde “Ciudad” hasta “Provincia autónoma”, puede consultarse en GOLDMAN, N. (1993) “Legalidad y legitimidad en el caudillismo. Juan Facundo Quiroga y La Rioja en el interior rioplatense (1810-1835)”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, Tercera serie, Nro. 7, pp. 31-58. Según la circular enviada, luego de la votación en los respectivos Curatos de La Rioja los representantes electos debían reunirse en el cabildo de esa ciudad y votar por un sujeto para el cargo de Gobernador Intendente. La suma de esos votos más los emitidos en el cabildo de la ciudad de Córdoba serían contabilizados conjuntamente para la determinación del sujeto favorecido para el cargo. Además, aquellos vecinos reunidos en el cabildo riojano debían nombrar un representante para que se incorporara a la Asamblea Provincial. El proceso electoral riojano se llevó adelante, y la reunión en el cabildo de esa ciudad tuvo lugar tal como había sido previsto, pero el resultado final fue completamente diferente. Como se adelantó, el resultado de la votación fue la decisión de cortar el vínculo con Córdoba y erigir allí una nueva Provincia autónoma. La circular y ciertos detalles acerca de aquella reunión pueden consultarse en MELO, C. (1950) *Constituciones de la Provincia de Córdoba*, Imprenta de la Universidad, Córdoba, p. XXVI.

⁸⁶ Cfr. VERDO, G. (2002) “El precio del poder: formas y usos políticos de la representación en la independencia argentina (1810-1821)”, en *Revista de Indias*, Vol. LXII, Nro. 225, pp. 385-408.

⁸⁷ Un buen análisis, en detalle, de este proceso de ruptura entre ciudades capitales y subalternas iniciado en 1820, fundado en el argumento del reconocimiento al autogobierno de los pueblos –como consecuencia de la soberanía retroverdita en ellos–, puede consultarse en la obra de VERDO, G. (2006a) Ob. cit., pp. 386 y ss.

segundo, porque había nombrado como elector/representante al Señor Doctor Juan Antonio Saráchaga, quien ya había sido elegido previamente por la Capital, encargo que había asumido inmediatamente. Esta práctica de designar a un sujeto que residiera en la capital o lugar de reunión del cuerpo hundía sus raíces en la tradición, manteniendo los viejos lazos de representación identitaria. Si bien no puede calificarse como una característica exclusiva de los procesos hispanoamericanos, fue un lugar bastante común durante los primeros años de vida política independiente en el Río de la Plata. La cláusula de sustitución que muchos de los poderes extendidos traían incorporada permitiendo al electo designar a otro sujeto en su lugar, favorecía aún más la preponderancia que la capital y sus hombres –familias de la más alta esfera de la sociedad– tendieron a ejercer sobre todo el espacio político. En el caso de Córdoba, por ejemplo, José Roque Funes designó a Felipe Álvarez para que representara al Curato de Tercero Abajo, y José Saturnino Allende, que había sido nombrado por dos Curatos a la vez, se quedó sólo con la representación de Ischilín y designó a Pedro Juan González como representante de Anejos⁸⁸.

Los integrantes de aquella primera Asamblea Provincial fueron sujetos que ya habían tenido –y luego seguirían teniendo– una importante participación en los asuntos políticos de Córdoba⁸⁹. Entre ellos había ex oficiales del Cabildo, eclesiásticos, miembros en los distintos gobiernos de los últimos años y en la Universidad. De este conjunto de individuos –o de las familias a las que pertenecían– saldrán los futuros integrantes del Congreso Provincial, del Cabildo de la ciudad, de la Cámara de Apelaciones cordobesa y otros órganos de decisión, al menos durante los primeros años de gobierno. Esta circunstancia es un indicador de la existencia de un tipo de política tradicional, cuya mecánica y dinámica estaban más cerca del viejo orden colonial que de una nueva cultura política⁹⁰. La consecuencia de dicha continuidad, fue la permanencia en los espacios de

⁸⁸ MELO, C. (1950) Ob. cit., p. XXVI.

⁸⁹ Según al acta de la sesión del día 18 de marzo de 1820, los representantes “hicieron manifestación, cada uno, de los poderes y actas de elecciones, practicadas por esta Ciudad, Villas y Curatos rurales, y fueron los siguientes: El Sr. Alcalde de 2º Voto Don Julián Martínez; el Doctor Don Juan Antonio Saráchaga, Rector de la Universidad Mayor de San Carlos y Nuestra Señora de Monserrat; Don José Lascano y Don Francisco Bedoya, electos por esta Ciudad; Licenciado Don Juan Prudencio Palacios, por la Capilla de Rodríguez; Don Felipe Alvarez, substituyente del Doctor Don José Roque Funes, por el Río 3º Abajo; Don Gaspar del Corro, por Tulumba; Doctor Don Vicente Agüero, por Río Seco; Don Domingo Malde, por Pocho; Doctor Don Salvador Isasa, por la Punilla; el Señor Alcalde de 1er. Voto Don Carlos Antonio del Signo, por Santa Rosa; Don Felipe Arias, por Calamuchita; Licenciado Don Gerónimo Sarza, por la Villa del Rosario; Doctor Don Marcelino Tisera, por la de Concepción del Río 4º; Doctor Don José Saturnino Allende, por Ischilín, y substituyente de Don Pedro Juan González, por el Curato de los Anejos”, ARCHIVO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (1912) Tomo I, La Minerva, Córdoba, p. 4. Todas las referencias a las Asambleas, acuerdos y sesiones de la Sala de Representantes han sido recogidas del Archivo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Luego de cotejar los libros de copiadoreos allí existentes con la publicación impresa de tales libros y comprobar su exacta correspondencia, he decidido utilizar para las citas esta última edición antes referida, en adelante AHCDC, aclarando el tomo de la colección, la fecha de la sesión de que se trate, y el correspondiente número de página.

⁹⁰ Según GUERRA, F. (1998) Ob. cit., pp. 116-117, “La acción política en el mundo del Antiguo Régimen tiene un aspecto esencialmente grupal (...) una buena parte de esa política tiene por objeto conseguir para sí mismo o para parientes y allegados puestos directivos en los cuerpos, sobre todo en aquellos que pueden producir mayores beneficios, influencia social o dignidad [...] incluso las acciones que pueden parecer

poder de las tradicionales oligarquías criollas, siendo el proceso electoral una nueva herramienta política que “transforma las jerarquías sociales en jerarquías políticas, mecanismo que permite a un régimen notabiliario reproducirse”⁹¹.

Resuelto por la Asamblea que lo más conveniente era comenzar a sesionar de inmediato, reservando la incorporación de los dos diputados que faltaban para cuando se presentasen, el representante por la Capital Juan Antonio Saráchaga planteó una cuestión previa sobre la calificación de los poderes presentados cuya resolución condicionaba la potencia política de la Asamblea. Con estricta lógica literal observó que los poderes de los representantes, tal como se había indicado en la circular de la convocatoria, sólo autorizaban a los representantes a tres puntos prefijados: 1) nombrar gobernador titular; 2) declarar la independencia; y 3) designar a los miembros de la Asamblea Constituyente de la Provincia. En consecuencia –continuando con su razonamiento–, preguntó al Gobernador interino presente en la Sala si “*los poderes debían considerarse ceñidos por las órdenes del Gobierno á que se referían, ó en plenitud para cuanto ocurriese á la Provincia en su absoluta independencia y reasunción de su soberanía*”⁹². Díaz, en una interpretación auténtica de la convocatoria, contestó que su intención no fue limitativa sino simplemente instrumental a efectos de señalar los puntos principales de la reunión⁹³.

Si se afirma que el Gobernador se extralimitó al definir la amplitud de los poderes de los representantes es porque en un espacio político tradicional como aquél, el único sujeto facultado para interpretar la extensión de los términos en los que estaban expresados los poderes otorgados a los representantes/mandatarios, era el cuerpo de compromisarios/mandantes de cada Curato de la Provincia que los había otorgado. Luego los acontecimientos darán la razón a esta interpretación sobre el tipo de representación política vigente en el imaginario de las autoridades cordobesas. Más allá de la primera respuesta del Gobernador interino, cuando meses más tarde se planteó en el seno de la Asamblea la cuestión de dar a la Provincia una Constitución, esta discusión sobre la extensión de los poderes de los representantes volvería a aparecer quedando recién

eminentemente individuales como la búsqueda de favores, honores o cargos, están íntimamente unidas a estrategias de grupo, sobre todo familiares”.

⁹¹ ROMANO, S. (2010) “Las nuevas fuentes de legitimación del poder y sus protagonistas en la configuración del sistema republicano y representativo en la provincia de Córdoba (1821-1855)”, en CÉSAR TCACH (coord.) *Córdoba Bicentenario. Claves de su historia contemporánea*, UNC/CEA, Córdoba, pp. 15-35. En otro trabajo de la misma autora que ya ha sido citado, ROMANO, S. (2002) *Economía, Sociedad y Poder en Córdoba...* cit., puede hallarse un excelente estudio prosopográfico de la Sala de Representantes de la Provincia de Córdoba durante la primera mitad del Siglo XIX que sirve para fundar esta misma línea de argumentación.

⁹² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de marzo de 1820*, p. 5.

⁹³ Es curioso que el propio Gobernador que calificó la amplitud de los poderes de los representantes, considerándolos meramente indicativos y no restringidos a los objetos allí expresados, días después, ante el pedido por parte de la Asamblea de la rendición de cuentas de una contribución extraordinaria que había sido ordenada, argumentó que no era esa una atribución del cuerpo y que tales facultades no figuraban en los poderes de los representantes, CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 145.

definitivamente zanjada una vez que se pronunciaron al respecto los propios poderdantes⁹⁴.

Aclarada –por el momento– la plenitud de los poderes presentados por los representantes, se procedió al nombramiento de las autoridades de la Sala para la dirección y orden de sus deliberaciones⁹⁵. El Gobernador interino José Xavier Díaz se retiró del recinto y comenzó la sesión pública. Antes de entrar a considerar los asuntos para los cuales había sido convocada la Asamblea, el representante por el Curato de Ischilín y Rector del Colegio Seminario del Loreto, Don José Saturnino Allende, planteó una grave acusación en contra de otros tres integrantes del cuerpo y solicitó la designación de un juez para la sustanciación de un juicio público que resolviera los extremos de su denuncia. Indicando una conducta criminal, su intención era que se declarase “*legalmente impedidos para ejercer los poderes de la Provincia en el sistema de su independencia y federación*” a los Señores Don Francisco Bedoya, Don José Lascano y Don Felipe Arias, por estar “*desviados del sistema de la Provincia*” y tratarse de “*verdaderos agentes de Buenos Aires*”⁹⁶.

La Sala decidió, reñida votación mediante, admitir la acusación de Allende y oficial de juez en el particular para resolver la controversia. Luego de la sustanciación de un juicio de carácter privado, donde se examinaron los argumentos de una y otra parte, “*resultó desvanecida la acusación por tres votos que la declararon ser insuficiente, á los acusados dignos de la confianza pública; cinco que graduaron de improbadó el cuerpo del delito, y todos, incluso el acusado, que con respecto á Arias y Lascano, quedaban plenamente satisfechos, discrepando sólo dos votos con respecto á Don Francisco Bedoya, de los cuales el Doctor Isasa dio por bastante una protesta que hiciese en contrario; y Don Pedro González, que suspendía su juicio en orden al mismo; no habiendo votado Don Gaspar del Corro ni el Doctor Agüero, en la causa del ciudadano Bedoya, por recusación que les hizo*”⁹⁷.

Respecto de este controvertido episodio ocurrido durante la primera sesión de la Asamblea Provincial, se ha dicho que la única motivación del representante José Saturnino de Allende era la de eliminar del cuerpo representativo a aquéllos enemigos políticos que podían frenar el triunfo de la facción federalista favorable al Gobernador interino y entregar el mando de la Provincia al cabecilla de la sublevación de Arequito, como finalmente acabó aconteciendo⁹⁸. Más allá de los entretelones, lo significativo que

⁹⁴ Cuando la Asamblea decidió abocarse a la tarea de dar a la Provincia una Constitución surgió nuevamente, en el seno del cuerpo representativo, la duda acerca de la extensión de los poderes de los representantes que la componían, cuestión que se zanjó con la decisión de realizar una consulta a los poderdantes para que se pronunciaran sobre el asunto (ver *infra* el análisis de esta cuestión).

⁹⁵ El resultado fue la elección, en calidad de Presidente de la reunión, del Señor D. Carlos del Signo –Alcalde de 1º Voto– y como Secretario D. Juan Antonio Saráchaga –Rector de la Universidad–.

⁹⁶ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de marzo de 1820*, p. 7.

⁹⁷ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de marzo de 1820*, pp. 7-8.

⁹⁸ En este exacto sentido, se ha afirmado que “el verdadero motivo era excluirlos para asegurar la votación a favor de Díaz”, cfr. PEÑA, R. (1980) *Juan B. Bustos y el federalismo doctrinario de Córdoba*, Cuadernos de Historia, Junta Provincial de Historia, Córdoba, p. 48; y que “la actitud de Allende tiene su explicación en una maniobra política” cfr. SEGRETÍ (1970) Ob. cit., p. 149. Según CELESIA (1932) Ob. cit., Tomo II, p.

conviene resaltar es la progresiva autoidentificación y afirmación del cuerpo representativo como depositario de la soberanía provincial⁹⁹. Asumido esto, nada le impediría calificar la amplitud de los poderes de sus integrantes ni erigirse en juez de los asuntos que podían interferir en la vida y construcción de un nuevo orden político para la Provincia. Esta actitud de la Asamblea fue consolidándose a lo largo de los meses que siguieron a punto tal que será ella misma –en contradicción con el plan previsto originariamente– la que mutando su naturaleza y destino institucional, asumirá el poder constituyente provincial para sancionar, casi un año más tarde de su instalación, el Reglamento Provisorio de la Provincia de Córdoba.

I. 4. 2. Declaración de la Independencia de la Provincia

Despejada la duda en relación con los poderes de los representantes provinciales, desestimada por la Sala la denuncia planteada por uno de sus miembros y admitidos en consecuencia los impugnados para formar parte del cuerpo representativo, el primer acto de esta Asamblea Soberana fue declarar por segunda vez la independencia de la Provincia de Córdoba, el día 18 de marzo del año 1820¹⁰⁰.

En la declaración, la Asamblea reafirmó el movimiento emancipador y expresó la necesidad de las Provincias Unidas de darse una constitución en los siguientes términos:

“Después que el voto general de las provincias de Sud América rompió los vínculos que la unían a la corona de España, reasumiendo en sí los derechos de que el Autor de la Naturaleza dotó al hombre, sólo nos falta en el uso de ellos una constitución liberal que los garantice de toda invasión extraña e interna, que establecida sobre las bases de la igualdad entre provincias y ciudadanos, reposasen tranquilos unas y otros en goce de la vida, libertad y propiedades, que hacen las sumas de sus derechos...”

Más adelante, los representantes cordobeses reprocharon la actitud de los gobiernos precedentes que no tuvieron la sensibilidad necesaria para reconocer cuál era el sentir de los pueblos rioplatenses y cuáles sus aspiraciones de organización constitucional:

190: “si hemos de creer los dichos que han quedado escritos, de hombres de la misma época que se han ocupado de la incidencia, resultaría ser esta una simple escaramusa, con vistas a la elección de Gobernador”, citando unas líneas más adelante los papeles privados del propio Don Ambrosio Funes que respecto del acusador dijo “se le tapó la boca, habiendo pasado la humillación de pedir... que le perdonasen. Su intento era escluirlos por asegurar su votación para Díaz contra Bustos”.

⁹⁹ El proceso de consolidación de la soberanía provincial en Córdoba, cuyo análisis desde su dimensión constitucional forma parte del objeto de este trabajo, ha sido trabajado por VERDO, G. (2014) “L’organisation des souverainetés provinciales dans l’Amérique indépendante: le cas de la république de Córdoba, 1776-1827”, en *Annales HSS*, dossier «Territoire et souveraineté», Vol. 69, Nro. 2, avril-juin 2014, pp. 349-381.

¹⁰⁰ En relación con el hecho de declarar la independencia, además del texto ya citado de ÁVILA, A., DYM, J., GÓMEZ GALVARRIATO, A. y PANI, E. (dir.) (2013) Ob. cit.; véase también DYM, J. (2013) “Declarar la independencia: proclamaciones, actos, decretos y tratados en el mundo iberoamericano (1804-1830)”, en HÉBRARD, V. y VERDO, G. (eds.) *Las independencias hispanoamericanas: un objeto de historia*, Casa de Velázquez, Madrid, pp. 81-99.

“... nuestros diputados enlazando principios con los de la antigua metrópoli y confundiendo unos y otros, no atinaron con el sistema de nuestra verdadera libertad y conveniencias públicas. Así es que no bien fue publicada aquella constitución [la unitaria de 1819] cuando ya sintió sobre sí el peso del desagrado general. Los pueblos celosos de sus derechos y los ciudadanos ilustrados levantaron el grito y las armas hasta derribarla a costa de sangre y todo género de sacrificios”.

Por todo ello, celebraban el alzamiento del Ejército del Norte encabezado por Bustos en la Posta de Arequito, condición habilitante para el reconocimiento del verdadero derecho de los pueblos:

“La firmeza de esta columna [el Ejército del Norte] afianzó la declaración de su independencia, hecha por el M.I.C. de esta ciudad, el 17 de enero; y Nos, los representantes de la provincia, usando de la plenitud de nuestros poderes, la aprobamos y sancionamos, declarando en la forma más solemne: que la soberanía de esta provincia reside en ella misma y por su representación en esta asamblea entre tanto se arregla su constitución; que como tal provincia libre y soberana no reconoce dependencia, ni debe subordinación a otra; que mira como uno de sus principales deberes la fraternidad y unión con todas y las más estrechas relaciones de amistad con ellas, entre tanto reunidas todas en congreso general, ajustan los tratados de una verdadera federación, en paz y en guerra, a que aspira, de conformidad con las demás¹⁰¹”

Como bien se ha observado por quienes han estudiado esta declaración de independencia llevada a cabo por el cuerpo, más que tratarse de un acto inédito sería la confirmación por parte de éste, de la manifestación ya realizada por el Cabildo abierto del día 17 de enero de 1820: la Asamblea *“afianzó la declaración de su independencia, hecha por el M.I.C. de esta ciudad, el 17 de enero; y Nos... la aprobamos y sancionamos”*¹⁰². Esta cuestión no es baladí. La propia Asamblea, que es soberana y reunión de los representantes de toda la Provincia, comenzó su fundamental tarea sin problematizar la estructura del orden político tradicional, y aún más, reconociéndola. En este mismo orden de cosas, resulta significativo el modo en que los representantes, en ejercicio de la soberanía, mandaron a oficiar a viejas autoridades y corporaciones intraprovinciales para el reconocimiento de un acto de la más pura voluntad política como el que acababan de protagonizar¹⁰³.

¹⁰¹ Extractos del Acta de la Declaración de la Independencia de la Provincia de Córdoba, aprobada por la Soberana Asamblea Provincial el día 18 de marzo de 1820. El texto completo de la Declaración puede consultarse en AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de marzo de 1820*, pp. 9-12.

¹⁰² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de marzo de 1820*, p. 11. En el sentido apuntado, RIVIERE, R. (1958) Ob. cit., p. 25; y PEÑA, R. (1980) Ob. cit., p. 47.

¹⁰³ *“... se acordó la declaración de su independencia... mandándose oficiar para su reconocimiento, con copias de ella, al Señor Gobernador Intendente Interino, Director General en Jefe del Ejército; al M.I.C. Justicia y Regimiento de esta Ciudad, y noticiada al Muy V.D. y Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, Provincia y Gobierno del Obispado para que cada uno, por su parte, concurriese á valorizarla en el concepto público con su reconocimiento y demostraciones convenientes”*, Ídem, p. 8.

I. 4. 3. Elección de Gobernador propietario: Juan Bautista Bustos

Dada la situación de inestabilidad y guerra circundantes, el Gobernador interino José Xavier Díaz solicitó a la Soberana Asamblea que se apresurara a nombrar Gobernador propietario. En esa misma sintonía, la corporación decidió llevar a cabo la elección del titular para el puesto antes que continuar con uno interino a efectos de consolidar una situación de estabilidad, propicia para el desarrollo del plan político en ciernes, incoado por la reunión de la representación provincial y la consiguiente declaración de la independencia. En el mismo acto, se acordó también que quien resultara favorecido por la votación asumiría “*con el cargo de jurar en su recepción, recibir, obedecer y hacer guardar las leyes, reglamentos y constitución que ésta corporación sucesivamente le diere*”¹⁰⁴. De la lectura del extracto del acta de la sesión referido, se puede comenzar a vislumbrar aquella “mutación” antes mencionada que irá sufriendo la Asamblea con el paso de los días y las deliberaciones. Si se recuerdan los estrictos términos en los que estaba fijado el objeto de la circular de convocatoria a los habitantes de la Provincia para la elección de representantes, la misión de esta corporación debía agotarse con el nombramiento de la Asamblea Constituyente, verdadera responsable de la sanción de las leyes fundamentales para la Provincia. Sin embargo, la Asamblea reunida para la elección de la Constituyente fue autoidentificándose progresivamente con el cuerpo que debía nombrar –“*constitución que ésta corporación... le diere*”– hasta el punto de considerar innecesario ese paso ulterior previsto en el diseño original, asumiendo *per se* la tarea constituyente.

En la sesión del día siguiente, el 21 de marzo de 1820, superando la división que enfrentaba a los miembros de la Sala entre el apoyo a Bustos y el apoyo José Xavier Díaz, la Asamblea eligió por mayoría de sufragios como Gobernador al Señor Don Juan Bautista Bustos, Coronel Mayor y General en Jefe del Ejército auxiliar¹⁰⁵. El nuevo jefe político de la Provincia juró el cargo un día después de lo previsto, en la sesión del 24 de marzo, de manera categórica: “*Yo, Don Juan Bautista Bustos, prometo bajo mi palabra de honor, proceder fiel y legalmente en el oficio de Gobernador Intendente de esta Provincia, obedeciendo y haciendo obedecer y ejecutar la constitución, leyes y estatutos directivos que emanen y se me comunicarán sucesivamente por esta Asamblea Provincial*”¹⁰⁶. El flamante Gobernador cordobés llegaba al poder con el apoyo de gran parte de las familias más tradicionales de la Provincia, lo que dotó de un alto grado de legitimidad su elección y se tradujo en una fuerte capacidad de acción política que con el correr de los meses se fue consolidando¹⁰⁷.

¹⁰⁴ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 20 de marzo de 1820*, pp. 13-14.

¹⁰⁵ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 21 de marzo de 1820*, pp. 14-16.

¹⁰⁶ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 24 de marzo de 1820*, p.18.

¹⁰⁷ Según el resultado que arroja sus investigaciones, para AYROLO, Bustos “llega al poder gracias a la intervención de la elite tradicional, entendida como todos aquellos que formaron parte del sector dirigente desde la colonia. La intervención de este sector en la elección de Bustos debe vincularse con los beneficios que esperaba obtener, esto es, la permanencia en los lugares del poder”, AYROLO, V. (2007a) Ob. cit., p. 216. Sobre la construcción del poder de ciertos actores políticos es de consulta obligada la obra de HALPERÍN DONGHI, T. (2005) *Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina*

Con la elección de Bustos, la Asamblea cumplió con el segundo de los tres objetos que habían motivado su reunión. Comenzaba para Córdoba una nueva etapa política que la tendría como centro de los esfuerzos organizativos de carácter federal durante los próximos meses, desplazando temporalmente a Buenos Aires del papel protagónico en la construcción del nuevo orden político. El gobierno de Bustos se extenderá durante ocho largos años hasta la derrota frente a las fuerzas del que fuera su subordinado en las tropas del Ejército, el General José María Paz. En todo ese tiempo, trabajará para poner en marcha su proyecto político a nivel federal y provincial. Uno de sus primeros pasos fue la preparación y sanción del texto constitucional.

II. EL PROCESO CONSTITUYENTE CORDOBÉS DE 1821

II. 1. *Los representantes cordobeses y sus poderes para dar una Constitución*

Una vez electo el Gobernador, la Asamblea se abocó a la tarea de dar a la Provincia de Córdoba una Constitución. Sin embargo, algunos representantes parecían no estar plenamente convencidos acerca de la legitimidad de sus poderes para dicha tarea ya que se encontraban expedidos, restringidamente, para tres exactos objetos. En consecuencia, y a moción del Señor Canónigo Magistral Doctor Don Miguel Calixto del Corro, se introdujo la cuestión sobre “*si esta Sala se considera plenamente autorizada, en virtud de los poderes de cada Diputado, para dar por sí misma la Constitución ó Leyes del País, ó para nombrar las personas que han de hacerla*”¹⁰⁸. En igual sentido, el Señor Saráchaga solicitó por su parte que “*suspendiéndose las sesiones, se haga presente al Señor Gobernador la duda suscitada al calificar los poderes sobre las instrucciones del anterior Gobierno y la necesidad que hay de que, instruida mejor la Provincia en la plenitud de sus derechos, delibere la ampliación de poderes á sus Representantes, á cuanto estimen conveniente al bien general*”¹⁰⁹. Arduas discusiones se desarrollaron alrededor de este asunto y el Presidente de la Sala zanjó la cuestión reduciendo las dos mociones a una simple proposición que ofreció a los representantes en los sencillos términos de si, 1) la Sala se hallaba plenamente autorizada, en virtud de los poderes, para nombrar la Asamblea Constituyente, o si 2) se debía consultar a los poderdantes para que fueran ellos quienes lo decidieran. Sujeto el asunto a votación, quedó resuelto que se consultase a los poderdantes por el conducto del Gobierno¹¹⁰.

Tal como aparece planteada la cuestión podría considerarse superflua puesto que, a la luz de la convocatoria, los electos debían estar apoderados para designar la Constituyente. Como se ha visto al momento de analizar los términos de la circular del Gobernador –e incluso se puede deducir de las mociones referidas precedentemente realizadas por del Corro y Saráchaga–, los representantes habían sido elegidos por sus

criolla, Siglo XXI, Buenos Aires; (1982) *Guerra y finanzas en los orígenes del estado argentino (1791-1850)*, Editorial del Belgrano, Buenos Aires.

¹⁰⁸ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 27 de marzo de 1820*, pp. 19-20.

¹⁰⁹ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 28 de marzo de 1820*, p. 22.

¹¹⁰ Ídem, p. 23.

respectivos Curatos, los cuales les habían extendido poderes para el cumplimiento de tres precisos objetos, entre ellos, “*el nombramiento de personas de juicio, providad, y luces que hayan de componer la legislatura ó Asamblea constituyente de la Provincia*”¹¹¹. De tal modo que la Sala, siguiendo la proposición del Presidente, sí se hallaba plenamente autorizada para nombrar la Asamblea Constituyente. Pero no era precisamente ese el motivo sobre el que giraban las mociones presentadas en la Sala, sino dilucidar si la Asamblea, reunida como estaba, podía o no entrar en la discusión de un documento constitucional asumiendo sus miembros unas facultades constituyentes que no derivaban de los poderes que cada uno poseía. En definitiva, si una Asamblea elegida con fines originariamente electorales podía asumir por sí la función de dar una Constitución. Pero el modo en que delimitó la discusión su Presidente retrasó unos meses más la decisión sobre este asunto y habilita a reflexionar sobre el tipo de representación concebida por aquellos primeros diputados cordobeses¹¹².

Como se ha venido apuntando, todo este proceso político llevado a cabo en Córdoba, en el que se observan algunos rasgos de novedad, no puede considerarse todavía como una entrada en el mundo de la política moderna¹¹³. Este asunto relativo a la naturaleza de los representantes en la Asamblea y el potencial político de ésta, calificado en función de los poderes limitados que cada uno de aquéllos ostentaba, se enmarca en este cuadro teñido por el óleo de la tradición. El hipotético paso de un sistema representativo antiguo a otro moderno, es decir, “la introducción del universalismo

¹¹¹ Así era la fórmula indicada por la circular del Gobernador Interino para la extensión de los poderes a los representantes. El texto de la circular, como ya se ha referido, en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo II, p. 184.

¹¹² El texto ya clásico que en su momento renovó el enfoque y los estudios sobre la cuestión de la representación es el de PITKIN, H. (1967) *The Concept of Representation*, UCP, Berkeley/Los Ángeles [Trad. esp.: *El Concepto de Representación*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1985]. Desde la historia del derecho, la obra de COSTA, P. (2006) *Ciudadanía*, Marcial Pons, Madrid, y (2004) “El problema de la representación política: una perspectiva histórica”, en *La representación en el Derecho*, R. del Águila Tejerina (coord.), Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Nro. 8, Madrid, pp. 15-61. Para el caso latinoamericano es de cita obligada la obra de GUERRA, F. X. (1993) “La Metamorfosis de la Representación en el siglo XIX”, en COUFFIGNAL, G. (comp.) *Democracias posibles. El desafío latinoamericano*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires; LEMPERIERE, A. (2000) “La representación política del imperio español a finales del antiguo régimen”, en BELLINGERI, M. (coord.) *Dinámicas de antiguo régimen y orden constitucional: representación, justicia y administración en Iberoamérica, siglos XVIII-XIX*, Otto Editore, Torino, pp. 55-76; y centrándose en el ámbito rioplatense las obras de CHIARAMONTE, J. C. (1997) *Ciudades, provincias, estados: Orígenes de la Nación Argentina*, Ariel, Buenos Aires; (1995b) Ob. cit.; SÁBATO, H. (1999) “Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis del Estado Argentino, 1810-1852”, en SÁBATO, H. (comp.) *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, Fondo de Cultura Económica, México; y TERNAVASIO, M. (coord.) (2011) *Dossier. La representación política en sus orígenes. El Río de la Plata en la primera mitad del Siglo XIX*, Nro. 18. Disponible en <http://historiapolitica.com/dossiers/representacionorigenes/>

¹¹³ Para una contraposición entre las características principales de la política en el nuevo y el viejo orden, la cita obligada es el texto al que ya he hecho referencia de GUERRA, F. (1998) “De la política antigua a la política moderna...”, cit. Últimamente su visión propuesta para el análisis de las revoluciones hispanoamericanas ha venido siendo objetada en varios aspectos: ROMERO, L. (coord.) (2012) *Dossier. François-Xavier Guerra y las “revoluciones hispánicas”. Una controversia reciente*, Nro. 24. Disponible en <http://historiapolitica.com/dossiers/fxguerra/>; en el ámbito rioplatense véase la obra colectiva de PEIRE, J. (comp.) (2007) *Actores, representaciones e imaginarios. Homenaje a François-Xavier Guerra*, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Caseros.

ciudadano”, tendría la consecuencia problemática de hacer “invisible la sociedad real” y anteponerse “a la representación de situaciones, intereses y cuerpos sociales”, un escenario que en esta Córdoba de 1820 resultaba aún un horizonte bastante lejano¹¹⁴.

En un entramado social corporativo como el tradicional, los sujetos participantes del mundo de la política no podían ser unos –aún inexistentes– individuos abstractamente considerados, sino más bien los cuerpos –de muy diversos tipos– que los reunían o aglutinaban. De allí que si había un sujeto que debía ser representado, ese era la corporación. Este hecho natural de la existencia de grupos o corporaciones en el mundo organicista estaba necesariamente unido a otro hecho también natural que derivaba de esa concepción de la sociedad: la existencia de una cabeza, formada por los miembros principales o más dignos de ésta, su *parte más sana y principal*, que era la encargada de representar identitariamente al grupo¹¹⁵. En este contexto, la designación de un sujeto para representar ante cualquier instancia al cuerpo estuvo indisolublemente asociada a la expedición de un poder a favor del representante; una manifestación de la figura jurídica que materializaba el lazo entre el grupo y el individuo: el mandato imperativo. En estos poderes se definían las atribuciones del representante y eran, a la vez, “los instrumentos a través de los cuales los diputados se convierten en apoderados –antiguamente ‘procuradores’– de quienes se los confieren”¹¹⁶. Al delinear de una manera precisa y casuística el ámbito de actuación permitido, existía para los enviados la obligación “de consultar a sus comitentes en caso de que aborden materias no previstas en las instrucciones”¹¹⁷.

El hecho de que los representantes se movieran con poderes y mandato de tipo imperativo no implicaba ninguna novedad institucional, por el contrario, obedecía a la concepción de la representación tradicional que se imponía. Lo que sí resulta paradójico es que se recurriera a esta figura aun cuando no fuera posible identificar sujetos políticos –propriadamente hablando– que fueran poderdantes. Como se adelantó, los Curatos o los cuarteles de la Capital no eran sujetos políticos. Sin embargo, los límites de la cultura jurídica impedían concebir el instrumento de otro modo, aunque la realidad sobre la que se operaba era diferente, precisamente por aquello de la inexistencia de diversos sujetos políticos. Esa inercia en el instrumento del poder refleja que el sistema representativo desvinculado y su clave cultural, esto es la sociedad como suma de individuos, estaba por entonces fuera del imaginario de la elite cordobesa.

Que el tipo de representación ostentado por los integrantes de la Asamblea Soberana cordobesa en plena época independiente reconociera su filiación directa con un

¹¹⁴ ROLDÁN, D. (2003) Ob. cit., p. 30.

¹¹⁵ Sobre representación identitaria, nuevamente el trabajo de COSTA, P. (2004) Ob. cit., y DUSO, G. (2003), *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*, Franco Angeli, Milano.

¹¹⁶ CHIARAMONTE, J. (1995b) Ob. cit., p. 36.

¹¹⁷ GUERRA, F. (1998) Ob. cit., p. 122. Para un pormenorizado análisis sobre el estado de la representación a partir de un caso paradigmático en este momento de transición entre un mundo y otro, momento de construcción de una nueva legitimidad política, es interesante revisar el trabajo de LORENTE, M. (2010) “El Poder y la Memoria de D. Miguel Ramos Arizpe”, en *La Nación y las Españas. Representación y territorio en el constitucionalismo gaditano*, Ediciones UAM, Madrid, Cap. 4, pp. 109-133.

sistema antiguo o tradicional, es algo que puede inferirse a partir de diferentes indicios. No sólo del hecho de que estuviera estructurada a partir de la figura del mandato imperativo, corporizada en un poder expreso con indicación precisa de las atribuciones del mandatario y la consecuente obligación de consultar a los poderdantes cuál debía ser la interpretación correcta –el alcance– de los términos del mandato. También se manifestaba –ese halo tradicional– en otro mecanismo característico de la representación política de aquella cultura jurídica: la sustitución. De acuerdo a de esta práctica frecuente, los representantes elegidos por sufragio en sus respectivas juntas de compromisarios estaban autorizados para delegar sus poderes en otros, sustitutos, quienes resultaban finalmente los encargados de representar al Curato. Como bien ha señalado ROMANO, a partir de un estudio de las prácticas electorales cordobesas durante el período, los sustitutos “generalmente eran figuras reconocidas de la elite urbana... cuyos nombres además se repetían en varios departamentos (es decir, eran electores sustitutos de más de un departamento). Notablemente los curas delegaban en otros curas (...) También era frecuente la delegación de los poderes en familiares”¹¹⁸. Este factor puede considerarse además como un indicador de la integración ciudad-campaña en tanto que por la sustitución, los distritos rurales quedaban representados por una figura residente en la ciudad¹¹⁹. Unos y otros extremos pueden rastrearse en el acontecimiento que los diputados, Gobernador y poderdantes cordobeses protagonizaron en el proceso bajo análisis.

De acuerdo a la resolución votada por la Asamblea, consecuente con la concepción de la representación en la práctica institucional de los cordobeses, el Gobernador Juan Bautista Bustos envió la consulta a las respectivas juntas de compromisarios de cada Curato para que, reunidas en cuerpo, se manifestaran sobre la auténtica inteligencia de los poderes que habían otorgado a sus representantes en relación con la cuestión constituyente. En las respuestas de los poderdantes hay razones para confirmar lo que hasta aquí se ha venido diciendo. El 20 de mayo de 1820 los compromisarios del Curato de Calamuchita manifestaron que “*era su voluntad no sólo deque se llevasen a debido efecto los tres articulos indicados [los tres objetos para los que fue extendido el poder], sino tambien que la Asamblea pueda dictar leyes constitucionales, y politicas, leyes Civiles leyes de Policía, Ordenanzas, y quanto crea necesario para la felicidad desta Provincia*”¹²⁰. Una interpretación de su propia voluntad

¹¹⁸ ROMANO, S. (2010) Ob. cit., p. 31.

¹¹⁹ AGÜERO lo ha descifrado en los siguientes términos, “desde el punto de vista institucional resulta difícil sostener que el proceso de instauración de la nueva asamblea implicó una alteración del tradicional patrón de integración ciudad-campaña que se venía consolidando... desde finales de la época colonial”, AGÜERO, A. (en prensa) “El *constitucionalismo hispano*, la eclosión municipal y la supresión de los cabildos en el Río de la Plata, primera mitad del siglo XIX”, en *El Constitucionalismo Hispánico Temprano*, Centro de Estudios en Historia – Universidad del Externado, Bogotá.

¹²⁰ ALPC, papeles digitalizados, CD 1, Tomo 1, fs. 102a-103a. Luego de algunas consideraciones sobre las características que deberían tener los diputados y otras relacionadas con la renovación de la sala o la inviolabilidad de los mismos, concluyen: “*nosotros los Compromisarios, usando de la facultad que nos han concedido los Vecinos, en virtud de su nombramiento, decimos que damos poder general, cumplido y como sea necesario, en lo incidente y dependiente, al Elector antes nombrado Don Felipe Arias, de suerte, que aunque no vaya expresada alguna clausula, la damos por expresada y su falta no sea suficiente para*

en un sentido extensivo, habilitando a su representante a participar en un cuerpo con verdaderas potestades soberanas, autorizado para protagonizar el proceso constituyente y más.

Similares términos fueron los que utilizaron unos días más tarde los del Curato de Río Segundo, diciendo que en la inteligencia del poder extendido a su representante no se debía suponer la limitación de atribuciones a los puntos indicados sino extenderse “*sin limitación alguna para todo aquello que pida un establecimiento sólido y firme... queda el expresado Diputado en aptitud de conocer del mismo modo que nosotros conoceríamos y resolveríamos en todos aquellos puntos que fuéramos consultados relativos al maior bien y decoro de nuestra Provincia*”¹²¹. Luego de ampliar los poderes –sea por una nueva manifestación de voluntad, o por vía de una interpretación auténtica en ese sentido, que para el caso operaba de la misma manera–, tanto en uno como en otro de los ejemplos traídos a colación se puede hallar aquello de la delegación de poderes que ha sido mencionado: Calamuchita otorgó a su representante la “*facultad de poderlo substituir y nombrar otro*”; y Río Segundo, en unos términos un poco más precisos, le reconoció la potestad de “*substituir este poder con toda plenitud que lo autorizamos en persona de providad e instrucción, y que siendo de su confianza lo será también de la nuestra*”¹²².

Unos meses más tarde, la Sala indagó sobre las respuestas de los Curatos ampliando o restringiendo los poderes que portaban sus representantes para encarar la obra constituyente. Éstas, en general, eran favorables a la mutación de la corporación electoral en Asamblea Constituyente¹²³. Unas, interpretando extensivamente los poderes originarios en un sentido que permitía incorporar a las atribuciones ya definidas la de sancionar un texto constitucional; otras, ampliándolos *ex novo* para habilitar a sus diputados a discutir y sancionar una Constitución. Evaluadas cada una de aquellas contestaciones, se resolvió calificarlos como amplios “*la mayor parte de ellos [sic]*”¹²⁴. A partir de este momento, bisagra para el proceso descrito, ningún obstáculo formal se interponía ya entre los representantes llegados a Córdoba en marzo de 1820 y la formación de la primera Constitución provincial. La mutación había tenido lugar, la Asamblea Soberana se había convertido en Constituyente sin la necesidad de acudir a

invalidar este poder y todo quanto han declarado los Vecinos ser su voluntad, y que deve obrarse en cada cosa y parte con libre administración”.

¹²¹ Ídem, fs. 104a-104r.

¹²² Ídem, fs. 103a y 104r, respectivamente.

¹²³ No todas las respuestas fueron favorables en la misma línea, por ejemplo, los poderdantes de la Capital se negaron rotundamente a ampliar los poderes que habían sido extendidos. La inmediatez de la relación entre los vecinos de la ciudad y su representante en la Asamblea puede ser una de las razones para dicha postura, véase MELO, C. (1950) Ob. cit., p. XXVIII. Tal vez la razón esté en que Bustos gozaba de mayor apoyo en la zona rural que en la ciudad, síntoma de ese proceso de militarización y ruralización del poder tan característico del período, que ha sido descrito por HALPERÍN DONGHI, T. (2005) Ob. cit., pp. 380 y ss.

¹²⁴ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de septiembre de 1820*, pp. 26-28. Resulta llamativo que en la propia acta de la sesión donde esto se resolvió (sesión del 18 de septiembre de 1820) se aclaró que “*la mayor parte*” de los poderes eran los que podían calificarse como amplios para llevar adelante la empresa, lo que equivale a decir que no todos los integrantes de la Asamblea habían sido autorizados a embarcarse en el proceso constituyente de la Provincia. Sin embargo, este detalle no parece de entidad suficiente como para detener a los representantes.

modernas prácticas electorales ni representativas. Al parecer, los mismos sujetos que formaban parte de la Soberana Asamblea Electoral se sentían lo suficientemente probos y juiciosos como para encargarse ellos mismos de dar una Constitución, al final de cuentas, el cuerpo que formaban era tan poco representativo en términos modernos como sí lo era en términos identitarios. El nuevo edificio político se alzaría sobre las bases, y con materiales procedentes de, un orden tradicional, algo que los actores políticos del momento no parecen percibir como incompatible con la tarea que se han propuesto de (re)fundar una república sobre una base constitucional escrita.

II. 2. Reglamento Provisorio o Constitución Permanente: la provisionalidad como regla

Dotada de una nueva legitimidad con fundamento en su asumida calidad de constituyente, la Asamblea abordó de forma preliminar el asunto de qué tipo de legislación convenía a la Provincia y mediante qué procedimientos se habría de sancionar. En la sesión del día 27 de septiembre de 1820, el presidente fijó los términos de la proposición sometida a votación por los diputados de una manera compuesta y compleja. La primera cuestión se reducía a la opción entre dos únicas alternativas sobre el tipo de documento que se iba a sancionar, esto es, “*si la legislación de que era susceptible la Provincia sería una Constitución permanente [A1] ó un Reglamento provisorio [A2]*”¹²⁵. En tanto que la segunda cuestión, presentaba a los diputados también dos alternativas, aunque sólo en principio, ya que de resultar más votada la segunda de las opciones fijadas en la proposición se abría un nuevo dilema a considerar y resolver; se preguntaba “*si debía efectuarse por el nombramiento de una Legislatura independiente de esta Sala [B1], ó por el de una comisión de tres individuos [B2] de dentro [B2a] ó fuera [B2b] de la Sala*” quienes después de realizada su tarea presentarían el documento proyectado al Cuerpo representativo para su sanción¹²⁶.

La discusión sobre estas dos cuestiones debe haber sido acalorada y no del todo pacífica. Desgraciadamente, la concisión de las actas que recogen las discusiones en las sesiones de la Asamblea cordobesa no permite conocer los argumentos vertidos a favor y en contra de una y otra posición¹²⁷. Sin embargo, el hecho de que la resolución sobre ambos puntos propuestos haya sido tomada “*a mayoría de sufragios*”, y no sólo esto, sino que además algunos de los representantes que participaron del debate solicitaran

¹²⁵ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 27 de septiembre de 1820*, p. 36.

¹²⁶ Ídem, p. 36.

¹²⁷ Refiriéndose a las discusiones sobre la sanción de los diferentes capítulos del Reglamento, como veremos más adelante, dice CIMA que “Lamentablemente no tenemos la crónica de los debates que acreditaría el desempeño personal de cada uno, y, por ello debe declararse compartido el honor de la sanción de la Carta de Córdoba de 1821, precursora de la organización nacional, y que se sanciona con el auspicio patriótico y generoso del Gobernador Constitucional de la Provincia, el General Juan Bautista Bustos y la cooperación de la Universidad de Córdoba, que aporta así sus ilustradas luces a través del talento y la consagración de quienes proyectaron el Estatuto” CIMA, A. (1960) “La Constitución de la República Federal de Córdoba”, en *Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, Año XXIV, N° 1-2, Córdoba, p. 86.

expresamente que sus votos en disidencia con la mayoría fueran salvados, son fuertes indicios de la falta de opiniones unánimes en un asunto tan importante como el tratado¹²⁸.

El resultado del debate fue el acuerdo mayoritario a favor de que se sancionara un Reglamento Provisorio para la Provincia [A2] y se nombrara una Comisión compuesta de tres miembros [B2], no necesariamente integrantes de la Sala [B2b], con la misión de redactar el proyecto de Reglamento que luego sería presentado a la Asamblea para su discusión y posterior sanción. Dos asuntos derivados de esta votación merecen especial atención para poder comprender en toda su dimensión algunos extremos del proceso constituyente cordobés, y su producto. Uno es el referido a la denominación con la que se titularía el documento constitucional, lo que podría señalarse como la “cuestión nominal”; el otro, sobre el modo en que se desarrolló el primer tramo del *iter* constituyente, esto es, la designación, composición, labor y presentación de su trabajo por parte de la comisión redactora del Reglamento Provisorio para la Provincia de Córdoba.

La cuestión nominal podría ser uno de los argumentos esgrimidos para calificar –o más bien descalificar– el texto cordobés de 1821. Su carácter de *Reglamento* antes que *Constitución* sería una sencilla, aunque débil, razón por la cual no podría hablarse de documento constitucional. Sin embargo, y más allá de que el análisis de la estructura y el diseño institucional proyectado por el Reglamento que se desarrolla en el capítulo siguiente arroja otros resultados, resulta conveniente reflexionar aquí sobre este punto partiendo del debate llevado a cabo en el seno de la Asamblea. Para ello, es preciso recordar los términos dicotómicos en los que el Presidente de la Sala planteó su proposición: “Constitución *permanente* [A1] o Reglamento *provisorio* [A2]”, no dando lugar a otras combinaciones posibles de los términos, tales como, por ejemplo, Constitución *provisoria* [A3] o Reglamento *permanente* [A4], e incluso proponer otra denominación diferente [AN]. Siendo así las cosas, puede que la cuestión nominal acerca del texto haya sido en parte fruto del modo en que se determinó discursivamente el objeto de una votación que debía efectuarse sencillamente a favor de una u otra alternativa, con exclusión de cualquier otra.

Pese a las experiencias norteamericana y francesa, en aquellas primeras décadas del ochocientos no había arraigado en el Río de la Plata una noción clara de Constitución como norma escrita superior a partir de la cual debía estructurarse sistemáticamente el resto de un ordenamiento jurídico¹²⁹. La utilización del término para designar los textos que condensaban las disposiciones que tendían a institucionalizar la comunidad política y

¹²⁸ En el acta de la sesión consta que “los Señores Don Eduardo Bulnes, Don Narciso Moyano y Don Pedro Juan González, salvaron su voto”, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 27 de septiembre de 1820*, p. 36.

¹²⁹ Sobre la variación en el sentido del término Constitución a finales del setecientos, pasando de un significado eminentemente descriptivo del ordenamiento de una comunidad, a otro normativo, de creación de un ordenamiento futuro, puede consultarse el texto de LORENTE, M. (2012b) “Constitucionalismo Antiguo y Moderno”, en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coords.) *Manual de Historia del Derecho*, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 289-329. También GRIMM, D. (2006) *Constitucionalismo y derechos fundamentales*, Trotta, Madrid; FIORAVANTI, M. (2001) *Constitución: de la antigüedad a nuestros días*, Trotta, Madrid. Para el derrotero del término en el caso específico del Río de la Plata, véase GOLDMAN, N. (2007) “ ‘ en el Río de la Plata (1750-1850)”, en *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, Vol. 9, Nro. 17, pp. 169-186.

a organizar su gobierno, tenía un significado que estaba todavía más próximo a la definición que se podía encontrar en el Diccionario de Autoridades de 1737 que del sentido que se adoptará posteriormente: “*Ordenanza, establecimiento, estatuto, reglas que se hacen y forman para el buen gobierno y dirección de alguna República ò Comunidad. Es del Latino Constitutio que significa esto mismo*”¹³⁰. En este plano, su semejanza con la voz Reglamento, en tanto que “*instrucción por escrito que se da para la dirección ó gobierno de alguna cofa. Lat. Ordo, difpositio*”¹³¹, los torna intercambiables a los efectos que aquí interesan sin que sea de aplicación a este concreto caso la capital distinción entre constitución, ley, reglamento y desarrollo de la potestad reglamentaria que determinará las características básicas del orden jurídico liberal por oposición al tradicional del antiguo régimen¹³².

Un repaso por las fuentes del período autoriza a afirmar que los actores políticos del momento se referían al texto cordobés de 1821 indistintamente como *Constitución*, *Código Provincial*, *Reglamento Provincial*, etc. Cada vez que se puso en jaque alguna disposición del Reglamento, se solicitó por parte de los representantes “mayoría para asuntos constitucionales”¹³³, según lo previsto por el propio texto del reglamento: “*Ningún asunto constitucional quedará sancionado sin la concurrencia de dos tercias partes de sufragios...*”¹³⁴. En el seno del mismo Congreso Provincial existía una comisión especial con la atribución exclusiva de atender a los “negocios constitucionales”¹³⁵. Cuando se sancionó el proyecto de ley referido al término de las sesiones ordinarias durante el receso vacacional de la Sala y se creó una comisión general permanente para atender los negocios provinciales, se discutió si tendría atribuciones en “cuestiones constitucionales”, esto es, para tocar puntos establecidos en el Reglamento Provincial, y la lista continúa¹³⁶.

¹³⁰ Voz *Constitución* según el Diccionario de Autoridades del año 1737. Disponible en la página web de la Real Academia Española: <http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0>. En el mismo sentido es definido el término por el Diccionario de la Real Academia Española de 1817.

¹³¹ Voz *Reglamento* según el Diccionario de Autoridades del año 1737, Ídem.

¹³² El estudio de esta distinción y sus consecuencias en la definición del nuevo orden jurídico están analizadas por GARRIGA, C. (2007b) “Constitución, ley, reglamento: el nacimiento de la potestad reglamentaria en España (1810-1814, 1820-1823)” en GARRIGA, C. y LORENTE, M., *Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 169-258. Un interesante abordaje desde la historia conceptual para comprender el verdadero alcance de los términos políticos más importantes de la experiencia iberoamericana, es el que propone la obra colectiva dirigida por FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. (2009) *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850*, Vol. I, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid; un trabajo similar, por enfoque y coordenadas temporales, aunque circunscrito al Río de la Plata, es el de GOLDMAN, N. (ed.) (2008) *Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850*, Prometeo, Buenos Aires.

¹³³ A modo de ejemplo, AHDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 14 de junio de 1825*, pp. 362-365.

¹³⁴ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba, año 1821, Sistema Presupuesto de una República Federada*, SECC. SEXTA, CAP. XII, Art. 2.

¹³⁵ Así lo establecen los diferentes Reglamentos Interiores de la Sala que se van sancionando para la mejor organización de su trabajo.

¹³⁶ AHDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 10 de enero de 1826*, p. 19.

Con estas consideraciones no se pretende decir, exactamente, que en el lenguaje de quienes ordenaron o diseñaron el texto constitucional no había ningún tipo de distinción entre los dos conceptos aludidos, sino más bien dar cuenta del ámbito –difuso– donde tal identidad podía diferenciarse. Un ámbito que no es el de la ingeniería constitucional –en tanto que organización del poder y libertades, sea del modo que sean– sino más bien el de la precariedad de los documentos por la corta duración prevista desde el inicio, o la problemática delimitación de las facultades de las autoridades que los impulsaban¹³⁷. El texto cordobés asoció esta idea de provisionalidad a la voz Reglamento y reservó la de permanencia a la de Constitución: “*La Provincia de Córdoba es libre, e independiente. Reside esencialmente en ella la Soberanía y le compete el derecho de establecer sus leyes fundamentales por constituciones fijas; y entre tanto por Reglamentos provisorios en cuanto no perjudique los derechos particulares de las demás Provincias, y los generales de la confederación*”¹³⁸.

Por lo tanto, lo que no podía ser casual bajo ninguna circunstancia era la elección del adjetivo con que se calificaría al texto que se iba a redactar: *permanente* o *provisorio*. La provisionalidad fue una característica que compartieron la mayoría de los documentos constitucionales que se sancionaron durante el período de reorganización del espacio político hispanoamericano luego de la crisis y desintegración de la Monarquía Católica. En Nueva Granada, por ejemplo, Antioquía sancionó en junio de 1811 una Constitución Provisional y del otro lado de la cordillera de los Andes la primera constitución chilena fue un Reglamento Provisorio de 1811 perfeccionado al año siguiente bajo el título de Reglamento Constitucional Provisorio¹³⁹. Entre los primeros ensayos constitucionales en el territorio del Río de la Plata suele incluirse el Reglamento Provisional sancionado por la Junta Conservadora el 22 de octubre de 1811 y el Estatuto Provisional que un mes más tarde aprobó el Triunvirato que remplazó a la Junta. En los años 1815 y 1817 se sancionaron dos textos más completos y complejos, un Estatuto y un Reglamento, que llevan los calificativos de provisional y provisorio en su título, respectivamente¹⁴⁰.

Algunos autores han propuesto diferentes explicaciones sobre la provisionalidad de los textos que se sancionaron durante la primera década revolucionaria en el Río de la Plata y el desarrollo consecuente de una manera característica de gobierno. Para VERDO, que propone calificar el fenómeno como un “provisorio”, la provisionalidad debe “ser entendida en relación con el contexto inmediato: se adopta un reglamento provisional

¹³⁷ Una fundamentación de este tipo puede encontrarse en TAU ANZOÁTEGUI, V. y MARTIRÉ, E. (2005) *Manual de Historia de las Instituciones Argentinas*, Séptima Edición Actualizada, Librería Histórica Perrot, Buenos Aires, p. 318.

¹³⁸ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. PRIMERA, CAP. I, Art. 2.

¹³⁹ Un compendio de textos constitucionales hispanoamericanos de la primera mitad del siglo XIX puede consultarse en la página web <http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/constituciones/>; más detallados y minuciosos son los resultados del Proyecto *The Rise of Modern Constitutionalism 1776-1849. Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century Online*, a cargo de HORST DIPPEL, disponibles en <http://www.modern-constitutions.de/>

¹⁴⁰ Los textos completos de estos documentos constitucionales dictados por el gobierno central y todos los demás que aprobaron las provincias rioplatenses hasta la sanción de la Constitución Nacional de 1853 pueden hallarse en SAN MARTINO DE DROMI, M. (1994) *Documentos constitucionales argentinos*, Ciudad Argentina, Buenos Aires.

hasta que la situación con España se esclarezca, que el Rey regrese, se afiance la paz y, en suma, se logren las condiciones necesarias para elaborar una Constitución fija”¹⁴¹. Por otra parte, CHIARAMONTE desarrolla la idea de una contradictoria “provisionalidad permanente” para definir “la naturaleza de la organización política rioplatense subsiguiente a 1810”¹⁴². Con todo, uno de los condicionamientos sería entonces la situación política de inestabilidad y guerra luego de la revolución y su respectiva consecuencia, la imposibilidad de diseñar y sancionar, en esas circunstancias, una obra perfecta e inmutable como debía ser la Constitución¹⁴³.

En este marco, por ejemplo, los diputados cordobeses que representaron a la Provincia en el Congreso que sancionó la Constitución del año 1819 portaban instrucciones de aprobar un texto constitucional de carácter provisorio, y la razón esgrimida era aquella situación de inestabilidad política apuntada. Según el mandato otorgado, se establecía “*que cualesquiera forma de gobierno que se trate de establecer en la nueva constitución que se va a dar, sea solamente bajo la calidad de provisoria hasta tanto esté plenamente libre todo el continente de sud américa, en que los diferentes estados que deben componerlo, avenidos o concertados del modo que corresponda, se fije la constitución permanente que debe regirlos con provecho general de todo el territorio, y particular de cada provincia*”¹⁴⁴.

Estas hipótesis pueden ser parcialmente útiles para explicar también la provisionalidad del Reglamento cordobés. Luego de una década de frustrados intentos por constituir una comunidad política que abarcara todo el territorio del ex Virreinato, las diferentes Provincias del Río de la Plata se embarcaron en una tarea de redacción de textos constitucionales calificados por el mismo adjetivo. En la región litoral, Santa Fe sancionó en 1819 su Estatuto Provisorio, Corrientes hizo lo propio dos años más tarde con el Reglamento Provisorio Constitucional y Entre Ríos en 1822 aprobó un Estatuto Provisorio Constitucional. En Salta vio la luz un Estatuto o Reglamento Provisorio, en 1821. Unos años más tarde, hacia 1830, Santiago del Estero adoptó un Reglamento Provisional, dos años más tarde San Luis redactó un Reglamento Provisorio para el

¹⁴¹ VERDO, G. (2006b) “El dilema constitucional en las Provincias Unidas del Río de la Plata (1810-1819)”, en *Historia Contemporánea*, Nro. 33, p. 522.

¹⁴² CHIARAMONTE, J. (1993) “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en CARMAGNANI, M. (comp.), *Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 81-132, p. 82.

¹⁴³ “El pensamiento iusnaturalista sigue siendo el marco en el cual se arraiga el imaginario constitucional, imponiendo a los constituyentes una exigencia imposible de cumplir: la de hacer una obra perfecta, válida para todos los tiempos, en una época de inestabilidad absoluta y de cambios profundos. Por contraste, los reglamentos y estatutos son admitidos en cuanto provisionales, y sujetos a modificaciones. Pertenecen al orden terrestre, son cambiantes de acuerdo con las contingencias, y por tanto caben perfectamente en el contexto o se adecuan perfectamente al contexto. Aquéllos son las verdaderas herramientas del gobierno y la fuente principal del ordenamiento constitucional del periodo”, Ídem, p. 527. Otro texto de la misma autora en el que incide sobre el mismo tema es VERDO G. (1998) “Le règne du provisoire: l’élaboration constitutionnelle au Río de la Plata (1810-1820)” en LEMPÉRIÈRE, ROLLAND, MARTINEZ, LOMNÉ (dir.), *L’Amérique Latine face aux modèles européens: emprunts, adaptations, refus, XIXe-XXe siècles*, L’Harmattan, París, pp. 79-120.

¹⁴⁴ TORRES, A. (1945) “Antecedentes del Reglamento de 1821”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 32, Nros. 4-5, septiembre-diciembre, p. 1038.

Régimen y Gobierno de la Provincia, y en 1835 Jujuy su Estatuto Provisorio para el Régimen y Dirección de la Provincia¹⁴⁵. La provisionalidad declamada por estos documentos constitucionales vendría también condicionada por la situación de inestabilidad política del momento, esto es, la situación de disolución del gobierno central y los constantes intentos por organizar constitucionalmente al conjunto de las Provincias Unidas, objetivo que no se alcanzaría hasta el período constituyente 1853/60¹⁴⁶.

Los textos provinciales serían provisorios por la sencilla razón de que las comunidades políticas que los sancionaron –las Provincias–, estaban a la espera de una organización de tipo general. Como consecuencia, las disposiciones contenidas en ellos no tenían la naturaleza de placas tectónicas rígidas sino formulaciones que se podrían llegar a vaciar de contenido según fuera el diseño final del texto constitucional que se adoptara para el conjunto¹⁴⁷. Enunciaciones del tipo “*serán atribuciones de la sala de representantes... hasta la sanción de la constitución nacional*” son más que frecuentes en los documentos y relativas, es decir, sujetas al diseño constitucional posterior. Una constitución de carácter “nacional” podía establecer que esas mismas atribuciones corresponderían luego al congreso nacional –por ejemplo: aduanas, comercio exterior, tratados, cartas de ciudadanía, moneda, guerra, etc–. Esta realidad político-constitucional no dejaba otra opción que calificar los textos como provisorios. Las provincias sabían que, en aras de la pretendida unión posterior, deberían renunciar a una porción de su poder y eso reconfiguraría sus propios textos constitucionales. De esta vocación de unidad o anhelo de reunión de un Congreso General que condicionaba la calificación de los documentos sancionados no sería correcto inferir la preexistencia de la nación, ni de un estado federal primigenio, ni nada que derive de un análisis teleológico de la historia constitucional argentina. Entroncada con una idea originaria de soberanía relativa que los impulsaba a recomponer la dualidad que regía en la antigua constitución –entre gobierno

¹⁴⁵ Los textos completos de estas Provincias pueden consultarse en el compendio ya referido de SAN MARTINO DE DROMI (1994) Ob. Cit. Sin embargo, para el caso de Córdoba, el texto que allí se compila no es el originalmente sancionado por la Asamblea Constituyente de 1821, si no el de la publicación oficial que se manda a hacer por el Gobernador Paz en 1832 incluyendo todas las reformas al Reglamento sancionadas en ese período de once años transcurridos. Sobre este asunto volveré más adelante al analizar los avatares del texto constitucional, su publicación y difusión (*infra*).

¹⁴⁶ Si bien el texto nacional para la Confederación argentina se sanciona en el año 1853, existe un amplio consenso en la doctrina argentina en considerar que el ciclo constituyente continúa abierto hasta 1860, año en que Buenos Aires se incorpora a la Confederación y obliga a reformar la Constitución, cfr. BIDART CAMPOS, G. (1973) “Notas sobre el carácter abierto y eficaz del poder constituyente originario en Argentina”, en *Revista de estudios políticos*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Nro. 188, pp. 261-272.

¹⁴⁷ Según SEGRETI, C. (1995) *Federalismo rioplatense y Federalismo Argentino (El federalismo de Córdoba en los comienzos de la época independiente, 1810-1829)*, Centro de Estudios Históricos, Córdoba, pp. 137 y ss., el carácter de provisorio de los textos provinciales durante este período está determinado por la razón de que las constituciones de las provincias debían necesariamente guardar coherencia con la que se sancionase a nivel nacional, y en esto los constituyentes cordobeses, imbuidos por los planes federativos del Gobernador Bustos, tenían su posición tomada. Por su parte, el jurista cordobés DÍAZ DE MOLINA, lo dice en otros términos “*Reglamento Provisorio de Córdoba, provisorio porque la Provincia esperaba ansiosamente, en aquel fecundo año 20, la consolidación de la unión federal*”, DÍAZ DE MOLINA, A. (1958) “La Constitución cordobesa de 1821 y su influencia institucional”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Nro. 9, pp. 84-96, p. 90.

particular de la provincia y un gobierno supremo—, lo que sí era una realidad en el horizonte de expectativa de la mayoría de los actores políticos del período era la idea de agregarse aunque en un modelo de gobierno más parecido al de la confederación.

El caso del Reglamento cordobés es paradigmático por las constantes referencias que hacía al “Congreso general de los estados” cuando aún no existía tal Congreso, y la calificación de “*por ahora*” del diseño de varias de sus instituciones más importantes. Su provisionalidad es patente. Muchas de sus disposiciones tenían la característica de ser potencialmente modificadas por otro texto —para el caso, el de la confederación— que tuviera vigencia simultánea. Podía darse el caso de que la nueva Constitución de los Estados dejara inoperativa una disposición del tipo “la atribución A la desempeñará el órgano provincial P hasta la sanción de la Constitución Nacional”, debido a que la determinación por parte de ésta del órgano nacional al que le correspondería en el nuevo diseño esa atribución cambiaría las cosas, por ejemplo, “*Disponer la organización, armamento y disciplina de las milicias corresponde al Congreso Federal de los Estados; pero siendo necesaria a la seguridad de un estado libre una milicia bien organizada, el Congreso de la Provincia, entre tanto aquel se verifica podrá disponer la organización, armamento y disciplina de un cuerpo de milicia reglada de infantería, o caballería, y sobre el pie de fuerza que estime conveniente*”¹⁴⁸. La nueva constitución podría socavar una disposición del tipo “la atribución B corresponde al órgano provincial P en la medida o bajo las condiciones establecidas por el órgano nacional N”. Una formulación normativa como la que establecía que “*Las atribuciones esenciales del Poder Ejecutivo de la Confederación y las que el voto de las Provincias reunidas en Congreso tuviese a bien refundir en el Gobierno General de los Estados, serán límites del Poder Ejecutivo de este Estado*”, podía modificar sustancialmente la lista de atribuciones y límites a la autoridad que el propio Reglamento contenía de acuerdo a la nueva constitución general¹⁴⁹.

En definitiva, todas las cuestiones de competencias concurrentes o delegadas, la medida de la concurrencia y la delegación o no de las atribuciones, sólo podría ser determinado a través del cotejo de los dos textos constitucionales que repartirían esas atribuciones, y como en el momento de sancionarse los textos constitucionales provinciales no había un texto constitucional nacional contra el cual cotejar los provinciales, es imposible determinar cuantitativa y cualitativamente el reparto de atribuciones; luego, las soluciones dadas por el único texto existente —el provincial— no podían sino ser provisorias hasta la sanción del otro texto, el nacional. Aún más, la vigencia entera de la Constitución provincial se encontraba condicionada a la voluntad del Congreso general. El mismo Reglamento establecía que “*Al Congreso corresponde formar la constitución porque se ha de regir y gobernar la Provincia; examinarla y juzgarla sobre si se opone o no, a la autoridad de la confederación, es privativo del Congreso General de los Estados*”¹⁵⁰. Como se adelantó, esa futura Constitución

¹⁴⁸ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXVIII, Art. 2.

¹⁴⁹ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, Art. 17.

¹⁵⁰ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII, Art. 1.

definitiva que vendría a reemplazar el Reglamento luego de sancionada la Nacional condicionaba el diseño institucional de unos Poderes Legislativo y Judicial que según el texto de 1821 serían ejercidos –“*por ahora*” y “*hasta lo que fijara la Constitución*”–, por un Congreso Provincial y un Tribunal de Apelaciones junto con los demás juzgados ordinarios, respectivamente¹⁵¹.

Como se puede observar, el tenor de las disposiciones del Reglamento da cuenta de la referida provisionalidad del mismo en función de la organización constitucional futura del conjunto de las Provincias Unidas. Caben aquí perfectamente, y apoyan esta explicación, las palabras que el Gobernador Juan Bautista Bustos envió al Cabildo de Buenos Aires con motivo de la preparación del Congreso que pretendía reunir en la Provincia de Córdoba: “*libre él Congreso del influxo de las armas, de la facción, é intriga podrá dár ál Pais la Constitución de Gob^{no}. q^e. desea. Demarcado perfectamte. él Territorio y éstablecidos los límites de los Estados, con quanta quietud y facilidad formarán éstos sus constituciones peculiares, y su legislación económica, gubernativa y judicial...*”¹⁵². La vigencia provisoria del texto constitucional cordobés durará lo que dura la razón de ser provisorio, esto es, la inexistencia de Constitución Federal. Mientras no haya una constitución general para el conjunto de las Provincias, no será necesario sancionar otra Constitución para la Provincia y esta situación se mantuvo casi hasta 1853. Aunque cambien los gobiernos y cada uno tenga colores políticos diferentes, el Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba subsistirá más de 25 años, reformas mediante, organizando la vida política cordobesa. Recién en 1847, bajo el gobierno de Manuel “Quebracho” López se sancionará otro documento constitucional bajo el título de Código Constitucional Provisorio¹⁵³. Sin embargo, en ocasiones se volverá sobre la letra del texto de 1821 restableciendo su vigencia, lo que da cuenta de su prolongada existencia, la dinámica acumulativa y no derogatoria del tracto normativo, así como de una concepción sustancial –no formalista– del ordenamiento jurídico en los orígenes del constitucionalismo provincial cordobés¹⁵⁴.

II. 3. Una Comisión para hacer la Constitución: composición y labor

Resuelta la cuestión relativa al modo en que debía efectuarse el proyecto de Reglamento Provisorio, y habiendo decidido los representantes que sería una Comisión externa compuesta por tres miembros la encargada de la redacción del texto, en la sesión siguiente, la del día 28 de septiembre de 1820, se efectuó el “*nombramiento de los*

¹⁵¹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, Art. 1 y CAP. XVII, Art. 1.

¹⁵² Circular al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, GARZÓN, I. (1902) Ob. cit., Tomo III, p. 264.

¹⁵³ El análisis de esta nueva Constitución, su novedad o no respecto del texto de 1821, está reservado a otra parte del presente trabajo.

¹⁵⁴ El 24 de febrero de 1853 la Sala de Representantes de la Provincia de Córdoba sancionó una ley derogando un artículo del Código Constitucional de 1847 y restableciendo en ese punto la vigencia del Reglamento Provisorio Fundamental (sic) de 1821, *Compilación de leyes, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter público dictadas en la Provincia de Córdoba desde 1810 a 1870*, Tomo I, Imprenta del Estado, Córdoba, 1870, p. 256.

individuos que debían componer la predicha comisión, que lo fueron los Señores Doctores Don José Gregorio Baigorri, Don Norberto Allende y Don Lorenzo Villegas previniendo se comunicase al Poder Ejecutivo esta elección”¹⁵⁵. Esa comunicación se llevó a cabo por nota dirigida a Bustos el día 29 de septiembre para que lo hiciera saber a los designados¹⁵⁶. El Gobernador hizo lo propio mediante una nota del 3 de octubre cuyas últimas líneas transcribe CELESIA: “*espero que acordando el lugar y horas en que hallan de reunirse, procedan sin pérdida de tiempo a prestar sus luces en el trabajo para que han sido llamados por la Representación Provincial*”¹⁵⁷.

Un acontecimiento circunstancial como la designación del Diputado Lorenzo Villegas para integrar, junto a Saturnino Allende, la comisión encargada de realizar las gestiones conducentes a mediar en el conflicto que enfrentaba por ese entonces a los gobiernos de Buenos Aires y Santa Fe –diferendo que terminaría con la firma del Tratado de Benegas–, obligó a la Sala a discutir sobre los avatares de la Comisión recientemente nombrada. Considerando que “*sin leyes no hay Estados*”, se acordó que “*estimándose por suficiente número para los asuntos de urgencia (...) se tenga por bastantemente autorizados para la formación de reglamento, de que están encargados los Señores Diputados Doctores Don Gregorio Baigorri y Don Norberto Allende*”¹⁵⁸. Excluido entonces el Señor Villegas, quedaba autorizada la comisión redactora para realizar su tarea compuesta por los dos miembros restantes, lo que fue comunicado a Bustos¹⁵⁹, y por parte de éste a los designados en la nota del 3 de noviembre¹⁶⁰. Los Doctores Baigorri y Allende eran dos exponentes de la intelectualidad cordobesa y con su nombramiento para la comisión redactora no debutaban en la escena política de la Provincia. Como ha dicho

¹⁵⁵ AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 28 de septiembre de 1820*, p. 38. Algunos autores han mencionado a más personalidades de aquella Córdoba de 1820 como participantes en el proceso de redacción del texto constitucional. Según CIMA, Eduardo Pérez Bulnes habría formado parte también de aquellos trabajos constituyentes, cfr. CIMA, A. (1960) Ob. cit., p. 73. Por otra parte, TORRES cita un artículo de un periódico de 1934 en el que se afirma que Francisco Ignacio Bustos también habría participado en la confección del proyecto, cfr. TORRES, A. (1945) Ob. cit., p. 1051. De todas maneras, la mayor parte de la doctrina y las fuentes que han sido consultadas se refieren exclusivamente a los vecinos Baigorri y Allende.

¹⁵⁶ “/Pongo en conocimiento de V.S. el nombramiento q^e. esta honorable Asamblea ha hecho en sesión de ayer de una comision compuesta de los SS. Dn. José Grego. Baigorri, Dr. D. Lorenzo Villegas, y D. D. Nolberto de Allende; para q^e. formen un reglamento provisorio q^e. debera sancionarse p^r. esta Sala. Lo comunico a V.S. p^a. los fines correspondientes. Dios gu^e. a V.S. ms. as. Sala de Sesiones Sep. 29, de 1820”, el presente y otros oficios relacionados con la formación y sanción del Reglamento Provisorio están recogidos en la obra de SILVA, F. (1931a) “Federalismo del Norte y del Centro en 1820”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 18, Nros. 5-6, julio-agosto, pp. 135-295.

¹⁵⁷ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 10.

¹⁵⁸ AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 30 de octubre de 1820*, p. 50. El representante Don Lorenzo Villegas había sido nombrado por el Gobernador Juan Bautista Bustos el 2 de octubre de 1820, para integrar la comisión que lo llevaría fuera de la ciudad de Córdoba y le impediría avocarse a la tarea de redacción del proyecto del documento constitucional, Cfr. RIVIERE, R. (1958) Ob. cit., p. 33. Según comenta SEGRETÍ, Villegas presionó a Bustos para que lo nombrara en esa comisión mediadora, SEGRETÍ, C. (1995) Ob. cit., p. 137.

¹⁵⁹ “/Con esta f^{ha}. ha sancionado la Sala q^e. p^a. constituir la Prov^a. p^r.medio de un Reglam^{to}. Provisorio. sean suficientes y bastantemte. autorizados los ya electos al indicado fin. SS. DD. D. Grego. Baigorri y Dn. Nolberto Allende. Lo comunico a V.S. a los fines consiguientes. Dios gu^e. a V.S. ms. as. Sala de Sesions. Octubre 31, de 1820”, en SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 211.

¹⁶⁰ Cfr. CELESIA (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 10. En igual sentido SEGRETÍ (1995) Ob. cit., p. 138.

LOBOS, “los encargados de redactar y aprobar el reglamento provisorio provienen de los estratos más altos de la sociedad, lo mismo que los integrantes de los distintos poderes”¹⁶¹. Un pequeño repaso por sus antecedentes biográficos, especialmente enfocado en sus relaciones sociales y participación en asuntos públicos, sirve para comprender mejor el proceso en el que participaron –sus condicionamientos– y fortalecer aquella afirmación¹⁶².

II. 3. 1. José Gregorio Baigorri

Baigorri fue Diputado en la Suprema Asamblea General Constituyente del año 1813 representando a Córdoba –en remplazo de Juan Larrea–, hasta su renuncia a ese Cuerpo en 1815¹⁶³. Había nacido en Córdoba el 12 de marzo de 1778 y cursado sus estudios en la Universidad Mayor de San Carlos de la misma ciudad, obteniendo allí el grado de Doctor en Teología en el año 1802¹⁶⁴. Al año siguiente, el 16 de agosto de 1803,

¹⁶¹ LOBOS (2011) Ob. cit., p. 43. La afirmación de este autor vuelve sobre aquello afirmado respecto del mantenimiento de las oligarquías criollas en los espacios de poder (*supra*), que perfectamente se reproduce en los elogios que CIMA vierte sobre los redactores: “Baigorri y Allende, hombres de ilustres y arraigadas familias de Córdoba, entroncados en las estirpes de los más entusiastas actores de la política local, universitarios, ambos cultores del derecho y humanistas de límpida visión, son los promotores de la sanción de una carta constitucional de tanto valor como lo es la de 1821”, CIMA, A. (1960) Ob. cit., p. 83.

¹⁶² Sobre la importancia de las biografías en los estudios histórico-jurídicos puede consultarse la obra de MARTÍN, S. (2012) “Dilemas metodológicos y percepción histórico-jurídica de la biografía del jurista moderno”, en Esteban Conde Naranjo (ed.), *Vidas por el derecho*, Dykinson, Madrid, pp. 11-58. En la introducción a su investigación doctoral, el jurista peruano RUIZ BALLÓN reflexiona densamente sobre la materia biográfica, una perspectiva que excede las posibilidades de este trabajo: “Para una biografía jurídica nuestra perspectiva ideal sería la de un relato interactivo y complejo, fundado en una pluralidad de relaciones personales e institucionales –más que en el relato de la evolución de las ideas de un personaje–, a partir del cual se pueda comprender algunos aspectos de una vida y las propias bases de la cultura jurídica que con ella aspiramos a reconstruir para comprender. Esa pluralidad de relaciones debería servir para explorar aquellas interacciones que revelen la evolución de los intereses que luego traducen los juristas a lo largo de su vida intelectual. En tal sentido, esos intereses no se revelan solo a partir de las relaciones del biografiado con aquellos imbricados en la construcción del derecho “evidente” o positivo por llamarlo de alguna manera, sino también con la vida de aquellos otros que no perteneciendo al mundo formal del derecho, indudablemente contribuyen de manera decisiva a sustentar su construcción, aunque no se ocupen de expresarlo en doctrinas o en normas jurídicas”, RUIZ BALLÓN, A. (2013) *Pedro Gómez de la Serna (1806-1871). Apuntes para una biografía jurídica*, Dykinson, Madrid, p. 30.

¹⁶³ La elección se llevó a cabo en la sesión del Cabildo de Córdoba del día 17 de noviembre de 1813. ARCHIVO MUNICIPAL DE CÓRDOBA (1967) *Actas capitulares*, Libros cuadragésimo séptimo y cuadragésimo octavo..., pp. 86-89.

¹⁶⁴ Tanto Baigorri como Allende pasaron por los tres cursos de Filosofía y recibieron los tres grados que se otorgaban: Bachiller, a mediados del segundo año; Licenciado, en el tercero; y Maestro en Filosofía o en Artes, terminado el tercer año. Luego transitan por los cuatro cursos de Teología y reciben los tres grados que se otorgaban: Bachiller, Licenciado y Doctor (grado exclusivo para Teología).

Baigorri cursó sus estudios durante doce años. Entre el 4 de marzo de 1790, cuando se matriculó en el primer curso de Gramática (ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, Libro de Matrículas de Gramática, Tomo I, f 208 r), y el 14 de julio de 1802, fecha en la que recibió el grado de Licenciado y Doctor en Teología (AGUNC, Libro de Grados 1, 1670-1805, f 68 r). De acuerdo a los planes de estudio de la época, obtuvo los grados de Bachiller en Artes (1 de diciembre de 1794, AGUNC, Libro de Exámenes de Filosofía 1794-1856, f 7 r), Licenciado en Artes (14 de noviembre de 1796, AGUNC, LEF 1794-1856, f 12 v) y Maestro en Artes (23 de noviembre de 1796, AGUNC, LEF 1794-1856, f 14 v). El grado de Bachiller Licenciado y Maestro en Filosofía lo obtuvo el 8 de diciembre de 1798 (AGUNC, LG 1, 1670-1805, f 61 r).

se ordenó como sacerdote. En 1805 fue designado profesor en la cátedra de Teología del mismo centro donde realizó sus estudios, Universidad que más adelante lo tendría como uno de sus principales protagonistas durante las dos décadas siguientes. El cabildo eclesiástico lo designó en la terna de candidatos para formar el Senado que creaba la Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica sancionada en 1819, pero el texto no fue aceptado por las Provincias y nunca llegó a reunirse el cuerpo representativo¹⁶⁵.

Con el objeto de revisar e introducir las reformas y mejoras más convenientes al plan de estudios que había sido redactado por el Deán Gregorio Funes tres años después de la revolución, el Gobernador Juan Bautista Bustos designó a Baigorri, por decreto del 2 de julio de 1822, como visitador de la Universidad. Durante su visita, no sólo modificó el plan de estudios en 1823 –reforma que se mantendría vigente hasta la nacionalización de la Universidad en 1854–, sino que también impulsó la elaboración de una nueva Constitución de la Universidad con la ayuda de los doctores Juan Antonio Saráchaga y José María Bedoya¹⁶⁶. Su actuación como visitador se prolongó desde finales del mes de julio de 1822 hasta marzo del año 1825. Pero no acabaría allí su aporte a esa casa de estudios ya que en dos oportunidades sería designado como su máxima autoridad. Fue elegido Rector de la Universidad el 8 de diciembre de 1830 y volvió a ocupar esa silla unos años más tarde en remplazo del doctor José Roque Funes¹⁶⁷; durante su mandato se creó la cátedra de Derecho Público que tendría al corredactor del Reglamento Provisorio como uno de sus ilustres conferencistas¹⁶⁸.

Su actividad política no se agotó con la participación en la primera Asamblea Constituyente rioplatense y la redacción del texto constitucional cordobés. En el año 1824 la Sala de Representantes volvió a elegirlo para un cargo de Diputado en representación de Córdoba, esta vez ante el Congreso General Constituyente reunido en Buenos Aires

¹⁶⁵ *Acta del cabildo eclesiástico de Córdoba*, del día 22 de julio de 1819, en RAVIGNANI, E. (1939) *Asambleas Constituyentes Argentinas...* cit., Tomo I, pp. 462-463. La Constitución para las Provincias Unidas de Sudamérica del año 1819 preveía que el Poder Legislativo se expediría por un Congreso Nacional compuesto de dos cámaras, una de Representantes y otra de Senadores (Art. 3), respecto de esta última, se establecía que estuviera formada por los senadores de provincia, tres militares cuya graduación no baje de Coronel Mayor, un senador por cada Universidad, el Director del Estado concluido el tiempo de su gobierno, y *un Obispo y tres eclesiásticos* (Art. 10). El texto completo de la Constitución puede consultarse en SAGÜÉS, N. (2006) *Constituciones Iberoamericanas: Argentina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, CD Anexo, pp. 201-215.

¹⁶⁶ La nota de elevación del proyecto de reforma del plan de estudios de la Universidad de Córdoba, fechada el 2 de enero de 1823, así como el proyecto en sí, el decreto de aprobación de las reformas y su comunicación al Rector de la Universidad, se encuentran publicados en *Compilación de leyes...* cit., pp. 487-498. La actuación de Baigorri en la Universidad ha sido analizada por LLAMOSAS, E. (2015) “La enseñanza jurídica en un contexto de transición: la reforma de José Gregorio Baigorri en la Universidad de Córdoba (1823)”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 49, pp. 97-112. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842015000100004&lng=es&nrm=iso

¹⁶⁷ Existen una única discrepancia en la historiografía local en relación con este dato. Según DÍAZ DE MOLINA, Baigorri “fue tres veces Rector de la Universidad, entre los años 1819 y 1835, reemplazando las dos últimas veces a los doctores Miguel Calixto Corro y José Roque Funes”, cfr. DÍAZ DE MOLINA, A. (1958) Ob. cit., p. 89.

¹⁶⁸ Sobre la creación de la Cátedra de Derecho Público en la Universidad de Córdoba y su posible impacto en la difusión y estudio de la Constitución cordobesa de 1821 corregida por Baigorri se volverá más adelante en este trabajo (*infra*).

entre ese año y 1827 cuya más recordada obra fue la Constitución Unitaria del año '26 rechazada por las provincias¹⁶⁹. Sin embargo, y luego de algunos contratiempos debido a las dificultades que en esa época debió sortear el Congreso Provincial, el mismo cuerpo declaró la caducidad de su mandato¹⁷⁰. En tiempos de los gobiernos provinciales del General José María Paz y José Vicente Reynafé, Baigorri se incorporó a la Legislatura de la Provincia como representante durante varios períodos¹⁷¹. Bajo los nuevos colores políticos su actividad diplomática no se detuvo y fue representante por Córdoba en la reunión de Provincias que celebraron el tratado de la Liga del Interior; el cambio político no implicaba negar su condición de representante natural de la Provincia¹⁷². Ya en tiempos de vigencia de la Constitución Nacional de 1853, la Legislatura de Córdoba volvió a nombrarlo en representación de la Provincia como senador ante el primer Congreso legislativo de la Confederación. Paralelamente a su actividad política y académica llevó una intensa vida eclesiástica, formando parte del Cabildo eclesiástico como canónico de merced y arcediano, y llegando a provisor del obispado en dos períodos¹⁷³. Hacia el final de su vida fue cura Rector de la Catedral y en 1857, a causa del fallecimiento de Monseñor Lascano, preconizado Obispo Diocesano, pero su muerte, acaecida el día 9 de junio de 1858, le impidió recibir la consagración episcopal¹⁷⁴.

II. 3. 2. José Norberto de Allende

El doctor José Norberto de Allende había tenido mucha participación en la vida política cordobesa antes de asumir su misión en la Comisión redactora del proyecto de Reglamento Provisorio en la segunda mitad de 1820. Había nacido en Córdoba el 6 de junio del año 1773 y cursado sus estudios en la Universidad Mayor de San Carlos, recibiendo el grado de Doctor en Teología en 1796¹⁷⁵. Paralelamente a su participación en

¹⁶⁹ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 14 de septiembre de 1824*, p. 253.

¹⁷⁰ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 4 de febrero de 1826*, pp. 41-42.

¹⁷¹ Según el estudio que ha realizado ROMANO sobre la integración de la Sala de representantes de Córdoba, Baigorri ocupó el cargo de diputado provincial en los períodos 1830, 1831, 1833, Cfr. ROMANO, S. (2002) Ob. cit., pp. 361-362.

¹⁷² Cfr. MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) Ob. cit., p. 94 –nota 64 *in fine*–.

¹⁷³ Cfr. AYROLO, V. (2007a) Ob. cit., pp. 202-204 y 237-238.

¹⁷⁴ Los datos utilizados para redactar este bosquejo biográfico del doctor José Gregorio Baigorri han sido extraídos de los papeles existentes en el Archivo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Argentina, en la sección del libro de necrológicas de los integrantes de la Sala desde su instalación. También han sido de muchísima ayuda las breves semblanzas que incorporan en sus obras los autores MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) Ob. cit., p. 84; SEGRETÍ, C. (1995) Ob. cit., p. 137; RIVIERE, R. (1958) Ob. cit., p. 89; PEÑA, R. (1980) Ob. cit., p. 54; y MELO, C. (1942) “La escuela jurídico-política de Córdoba”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 29, Nº 1-4, marzo-junio, p. 96. La información sobre su paso por la Universidad de Córdoba ha sido recogida del ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA con las referencias anotadas. El resto de las fuentes y referencias bibliográficas utilizadas han sido oportunamente consignadas.

¹⁷⁵ Del mismo modo que su compañero de redacción del Reglamento cordobés, Allende pasó nueve años formándose en las aulas de la Universidad de Córdoba. Se matriculó por primera vez el 21 de abril de 1787 en el primer curso de Gramática (AGUNC, Tomo I, LMG, f 206 r). Aprobó los exámenes para obtener los títulos de Bachiller en Artes (13 de diciembre de 1788, AGUNC, LEF 1781-1793, f 47 r), Licenciado en Artes (11 de agosto de 1790, AGUNC, LEF 1781-1793, f 53 v) y Maestro en Artes (6 de diciembre de

la política provincial, desarrolló una exitosa carrera comercial, llegando a ser uno de los más importantes criadores y traficantes de mulas hacia el Alto Perú en la Provincia¹⁷⁶.

A la edad de 38 años fue electo como uno de los cuatro vocales de la Junta Provincial creada en cumplimiento del decreto de 11 de febrero de 1811 dictado por la Junta Grande en Buenos Aires¹⁷⁷. Allende integró la lista de Doctores que el Gobierno de la Provincia de Córdoba envió en 1814 al Gobierno Central solicitando que se les autorizara a ejercer como abogados debido a la escasez de estos profesionales en la ciudad. Al año siguiente pasó a ocupar el cargo de Alcalde de 1er voto durante todo el año 1815¹⁷⁸. Disputó la primera elección para Gobernador realizada en el Cabildo Abierto de 1815¹⁷⁹. Ese mismo año resultó designado para la Comisión especial que debía dictaminar la extensión de la renuncia hecha por el Gobernador Ortiz de Ocampo¹⁸⁰. Fue nombrado elector en varias oportunidades y en representación de diferentes distritos, tanto para la elección de los Diputados cordobeses al Congreso de Tucumán que declaró la independencia en 1816, como para la de representantes en la Asamblea Provincial. Siguiendo las disposiciones del Reglamento Provisorio de las Provincias Unidas sancionado en el año 1817, los Cabildos de las Villas La Carlota y Concepción de Río Cuarto propusieron a José Norberto de Allende como candidato para ocupar el sillón de Gobernador Intendente, puesto para el que finalmente sería designado Don Manuel Antonio de Castro¹⁸¹. Córdoba lo había elegido como Diputado para integrar la Cámara de Representantes de la Nación que había sido creada por el texto constitucional de las Provincias de Sud América de 1819, pero el rechazo ya apuntado del documento por parte de las provincias frustró la instalación de dicha Cámara¹⁸².

La misma Sala de Representantes que lo designó para la Comisión encargada de redactar la primera Constitución de la Provincia lo eligió Síndico Procurador de la Ciudad

1790, LEF 1781-1793, f 56 v). Finalmente recibió los grados de Licenciado en Teología (14 de julio de 1795, AGUNC, LG 1, 1670-1805, f 49 r) y Doctor en Teología (4 de junio de 1796, LG 1, 1670-1805, f 52 r).

¹⁷⁶ Cfr. ROMANO, S. (2002) Ob. cit., p. 276.

¹⁷⁷ Respecto de la formación de esta Junta Provincial, remito a los datos consignados al presentar la nueva aparición en la escena política cordobesa a José Xavier Díaz al momento de ser designado Gobernador Interino por el Cabildo Abierto del día 19 de enero de 1820, otro de los integrantes de la Junta (*supra*).

¹⁷⁸ ARCHIVO MUNICIPAL DE CÓRDOBA (1967), *Actas Capitulares*, Libro cuadragésimo séptimo y cuadragésimo octavo..., pp. 203-208

¹⁷⁹ Ídem, pp. 240-248.

¹⁸⁰ El Gobernador había alegado que su renuncia presentada al Cabildo abierto del 29 de marzo de 1815 se limitaba a la Ciudad, quedando en consecuencia toda la campaña bajo su poder. Sin embargo, el Cabildo, que hasta la asunción de Díaz tenía el mando de la Provincia como Cabildo gobernador, decidió formar una comisión para que dictaminara sobre la renuncia de Ocampo. Esa comisión, que estuvo integrada por José Norberto de Allende y seis miembros más, resolvió: “*que el dicho señor Ocampo, espontaneamente habia hecho absoluta dimision y dexacion voluntaria, no solo de esta capital sino de toda la provincia, sin poder retener parte del gobierno indivisible que havia renunciado de su grado, disponiendo que el pueblo eligiese otro*”, Ídem, p. 249.

¹⁸¹ Cfr. MELO, C. (1950) Ob. cit., p. XXI. De acuerdo al texto constitucional, “*Las elecciones de Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores y Subdelegados de Partido*” se realizaban “*a arbitrio del Supremo Director del Estado de las listas de personas elegibles de dentro, o fuera de la Provincia, que todos los Cabildos*” debían remitir, Reglamento Provisorio de 1817, Secc. V, Cap. I, Art. 1º.

¹⁸² Ídem, p. XXII.

de Córdoba a finales de 1820¹⁸³. Con la instalación del Congreso Provincial creado por el Reglamento Provisorio, fue electo representante para integrar la primera legislatura constitucional, y poco más de un año después firmó la comunicación de disolución del Cuerpo de fecha 22 de junio de 1822¹⁸⁴. En enero de 1823, resultó designado por la junta electoral de la ciudad como alcalde ordinario de primer voto y, como tal, presidente del cabildo¹⁸⁵. Suspendido el Congreso Provincial, los asuntos locales estuvieron dirigidos exclusivamente por el Gobernador Bustos y el Cabildo –presidido por Allende–, quienes redactaron y promulgaron todo un plan de organización de la justicia de la campaña¹⁸⁶. Con la reinstalación del Congreso, volvería a ocupar la silla de representante en la Legislatura provincial en períodos siguientes¹⁸⁷. Durante sus mandatos fueron muy frecuentes sus inasistencias a las sesiones alegando razones de salud, motivo por el cual, las autoridades de la corporación en más de una ocasión lo conminaron formalmente a participar de las deliberaciones. Pese a ello, y dada su dilatada experiencia en los negocios provinciales, llegó a ser Vicepresidente del Congreso antes de su disolución en aquel año de 1822¹⁸⁸. En más de una oportunidad la Sala lo nombró para participar en distintas comisiones, siendo la más importante de ellas, por lo que aquí interesa, su designación como vocal de la Comisión celadora del cumplimiento del Reglamento Provisorio establecida en el último artículo del texto constitucional¹⁸⁹.

Reinstalado el Congreso Provincial en 1824, luego de su disolución y casi dos años de ausencia de Legislatura, Allende estuvo entre los posibles Diputados por Córdoba ante el Congreso General Constituyente que sancionaría la segunda Constitución Unitaria, pero no recibió los votos suficientes para ser nombrado¹⁹⁰. Alejado ya de la vida política de la Provincia, viró su interés hacia la vida académica y desde el 19 de septiembre del año 1836 rigió por unos años los destinos de la Universidad de Córdoba donde había estudiado y sido profesor¹⁹¹. Murió el día 23 de octubre del año 1840¹⁹².

¹⁸³ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 15 de diciembre de 1820*, p. 66.

¹⁸⁴ Su elección como representante en propiedad para integrar el Congreso Provincial, en AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de abril de 1821*, p. 128.

¹⁸⁵ ARCHIVO MUNICIPAL DE CÓRDOBA (1967), *Actas Capitulares*, Libro quincuagésimo..., pp. 8-11.

¹⁸⁶ AGÜERO, A. (2012) Ob. cit.

¹⁸⁷ José Norberto de Allende integró la Sala provincial como representante en los años 1829, 1830 y 1835, cfr. ROMANO, S. (2002) Ob. cit., pp. 361-363.

¹⁸⁸ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 11 de marzo de 1822*, p. 212.

¹⁸⁹ En su parte final, el Reglamento Constitucional establecía: “*El Congreso de la Provincia, nombrará una comisión de tres individuos de su seno, cuyo objeto será velar sobre la observancia de este Reglamento, y dar cuenta al Congreso de las infracciones que notare*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. ÚLTIMO, Art. único. En la sesión del 20 de noviembre de 1821 “... *se tuvo presente lo prevenido en el Reglamento, cap. último, sobre la creación de una Comisión Celadora de su observancia, y en su cumplimiento, pasándose á hacer la elección de los miembros de este cuerpo que la habían de servir, recayó ésta uniformemente en los SS. Dr. Dn. José Norberto de Allende y Licenciado Dn. Andrés de Oliva...*”, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 20 de noviembre de 1821*, p. 188.

¹⁹⁰ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 14 de septiembre de 1824*, p. 253.

¹⁹¹ En su mensaje al Congreso Provincial de 1837, el Gobernador Manuel López reconoció que “*por renuncia que hizo del rectorado el doctor don Francisco Antonio González, y en fuerza de las razones fundamentales que espuso, procedió el ilustre claustro en plenitud de vocales, y eligió al actual rector*”.

II. 3. 3. Encargar la Constitución

Si se mira el proceso de génesis y sanción del Reglamento cordobés a la luz de la experiencia iberoamericana –a uno y otro lado del Atlántico–, es posible comprender ciertos rasgos del momento constituyente, en concreto, la etapa de redacción de la Constitución. Como se ha demostrado en otros estudios, el encargo de la elaboración de los proyectos a reducidas comisiones de expertos –no siempre integrantes de los cuerpos constituyentes–, fue una práctica corriente en el espacio político de la antigua Monarquía Católica¹⁹³. Incluso más, en gran parte de los casos hispanoamericanos la redacción de documentos constitucionales tuvo mucho de “propuesta individual” al punto que se puede llegar a filiar a ciertos textos con determinados sujetos que, naturalmente, eran sujetos reconocidos –*notables*– en sus respectivas comunidades políticas.

Repasando los distintos casos del laboratorio constitucional iberoamericano, se observa que “la constitución de Cundinamarca fue la obra casi exclusiva de Jorge Tadeo Lozano, la de las Provincias Unidas de Venezuela fue redactada por Francisco Javier Ustariz, la del Estado de Antioquía por Jose Manuel Restrepo y Juan del Corral, la de Cartagena por Manuel Benito Rebollo, la de Angostura por Simón Bolívar y la de Cúcuta por una comisión compuesta por José Manuel Restrepo, Vicente Azuero, Luis Mendoza, Diego Fernández Gómez y José Cornelio Valencia”¹⁹⁴. En todas las coordenadas espaciales se replica el fenómeno. El Reglamento Constitucional de 1812 y la Constitución de 1823, en Chile, fueron encomendados a Juan Egaña¹⁹⁵. En Quito el proyecto fue factura de Miguel Antonio Rodríguez, en Guatemala José María Peinado redactó un verdadero proyecto de Constitución, y en el texto de Cádiz participaron sujetos de fuera de las Cortes como Ranz Romanillos aunque también jugaron un papel destacado Diego Muñoz Torrero y Evaristo Pérez de Castro quienes prepararon la redacción de las partes fundamentales de la norma gaditana¹⁹⁶. El territorio rioplatense no es la excepción.

doctor don José Norberto de Allende, cuyas conocidas y respetables calidades ofrecen muchos bienes á este establecimiento”, Documento N°6, Mensaje del Gobernador Manuel López, Córdoba, 1° de mayo de 1837, en FERREYRA, A (1980) Ob. cit., p. 71. La fecha exacta de su nombramiento a cargo de la Casa de estudios la aporta DÍAZ DE MOLINA, A. (1958) Ob. cit., p. 89.

¹⁹² Al igual que para el bosquejo biográfico del doctor Baigorri, hemos extraído los datos de los papeles existentes en el Archivo de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Argentina, en la sección del libro de necrológicas de los integrantes de la Sala desde su instalación. Una breve semblanza de José Norberto de Allende en MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) Ob. cit., p. 84; SEGRETÍ, C. (1995) Ob. cit., p. 137; RIVIERE, R. (1958) Ob. cit., p. 89; y PEÑA, R. (1980) Ob. cit., p. 54. Para su paso por la Universidad se ha consultado el AGUNC. El resto de las fuentes y referencias bibliográficas utilizadas han sido oportunamente citadas.

¹⁹³ Para el análisis de estos rasgos típicos referidos a la redacción de textos constitucionales en el contexto hispanoamericano durante la primera mitad del siglo XIX, es muy apropiado el enfoque de LORENTE, M. Y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) Ob. cit., Cap. Tercero, “Procesos constituyentes y redacción de constitución”, pp. 85-117.

¹⁹⁴ Cfr. Ídem, p. 97. El caso neogranadino puede consultarse en profundidad en la obra de GUTIÉRREZ ARDILA, D. (2010) *Un nuevo reino: geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno en Nueva Granada, 1808-1816*, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá.

¹⁹⁵ BRAVO LIRA, B. (1986) *Historia de las instituciones políticas de Chile e Hispanoamérica*, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile.

¹⁹⁶ LORENTE, M. Y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) Ob. cit., p. 97.

La confección del Estatuto santafecino de 1819 sería obra del Doctor Juan Francisco Seguí; el entrerriano, del Doctor Agrelo; en Santiago del Estero, tanto el Reglamento de Organización Política de 1830 como el Proyecto de Constitución Provincial de 1835 fueron producto del trabajo de Adeodato Gondra –aunque en el primero parece haber colaborado también Pedro Díaz Gallo–; y el primer proyecto sancionado en Jujuy fue obra de la comisión formada por Mariano Santibáñez, Pedro Castañeda y Roque Alvarado¹⁹⁷. En la mayoría de estos ejemplos la redacción del proyecto de Constitución se encargaba a estos sujetos –generalmente juristas– sin mayores indicaciones sobre el contenido del texto¹⁹⁸.

Estos dos aspectos que han sido referidos, dan cuenta de la existencia de una idea de fuerte unidad cultural –sin desconocer la presencia de facciones políticas–, que demarca el campo de actuación de los redactores excluyendo la posibilidad de pensar que ellos podrían llegar a diseñar una estructura muy distinta de la que los propios constituyentes diseñarían. Es que existía una suerte de “esfera de indecidibilidad” y su contenido estaba determinado por lo que podría denominarse la “constitución material” de la república, una noción sustancial u ontológica de orden normativo, con elementos básicos inmutables como, por ejemplo, la Religión Católica¹⁹⁹. Con todo, del análisis del modo en que se escribieron y sancionaron los textos constitucionales tanto en Córdoba como en las demás Provincias rioplatenses, VERDO ha concluido para esta primera parte del período que *“la rédaction de constitutions provinciales n’est donc pas, à cette date, l’indice d’une modernisation politique: loin de faire triompher l’individu comme sujet de la souveraineté, elle sanctionne au contraire le triomphe de la communauté d’Ancien Régime [...] ce sont les peuples eux-mêmes qui en viennent à exercer leurs droits politiques”*²⁰⁰. El texto constitucional, más que el producto de un acuerdo de voluntad política, reflejaba un sustrato cultural común.

II. 4. Fin de la labor de la Comisión y elevación de su proyecto

Tres meses después de la decisión de la Asamblea de sancionar un Reglamento Provisorio, los miembros de la comisión elevaron a Bustos el trabajo confeccionado los primeros días de enero del año 1821. Junto al proyecto acompañaron una nota firmada de puño y letra²⁰¹. En ella daban cuenta de la celeridad con la que, apenas recibido el

¹⁹⁷ PEREIRA PINTO, J. (1965) “Un capítulo del Derecho Público Provincial: El nacimiento de las Provincias y sus primeros Estatutos Constitucionales”, en *Jurisprudencia Argentina*, Serie Moderna, Año XXVII, Nro. 2346, pp. 1-5.

¹⁹⁸ Como se ha visto para el caso cordobés, la única instrucción que se otorgó y quedó fuera de la voluntad de Baigorri y Allende fue la relativa a la denominación del documento. Según la indicación de la Soberana Asamblea el documento sería un “Reglamento Provisorio”.

¹⁹⁹ Sobre la noción de “Constitución material” en la historia del constitucionalismo, véase el trabajo de FIORAVANTI, M. (2010) “Las doctrinas de la constitución en sentido material”, en *Fundamentos. Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional*, Nro. 6, Universidad de Oviedo. Disponible en <http://www.uniovi.es/constitucional/fundamentos/Portada.html>

²⁰⁰ VERDO, G. (2006a) Ob. cit., pp. 397-398.

²⁰¹ El acta de la sesión de la Asamblea del día 15 de enero de 1821, en la que se dió lectura al oficio del Ejecutivo en el que se transcribe el de la Comisión redactora se dice que el oficio de la comisión es del 11

encargo, se habían puesto a trabajar para “poner en planta” el texto que entregaban al Gobernador para su posterior remisión a la Asamblea. Reconocían las dificultades objetivas que en general, abstractamente consideradas, limitaban y condicionaban desfavorablemente una empresa tan compleja y delicada como en la que ellos habían sido embarcados²⁰². Y aunque las asumían estoicamente renunciando a excusarse detrás de ellas de sus faltas o fallos, sí alegaban otra –concreta y ceñida exclusivamente a su contexto–, válida según su parecer para absolverlos de todo cargo: nada más y nada menos que “*la imposibilidad de un plan regular de administración donde todo falta; un defecto de este tamaño no es facilmente suplible por ninguna legislación y mucho menos hasta el punto que provea de un modo conveniente a todos los entables necesarios en una República Federada bien constituida*”²⁰³.

Aproximadamente ocho semanas de trabajo por parte de esta dupla de juristas habían dado como resultado la confección de un proyecto de documento constitucional que la Asamblea de la Provincia debería analizar, discutir y sancionar para dar a Córdoba su primer diseño institucional para el período posterior a la emancipación. Sin embargo, algunos autores han echado un manto de dudas sobre la auténtica coautoría del proyecto del Reglamento Provisorio elaborado por la comisión afirmando que es probable que el texto definitivo que se elevó al Poder Ejecutivo –para que lo girara a la Legislatura– sólo haya sido redactado por Jose Gregorio Baigorri, sin la colaboración de José Norberto de Allende²⁰⁴. La única razón de peso que funda dicha afirmación es extraída de la lectura de un oficio que con fecha 15 de enero de 1822 el propio Baigorri envió al Cabildo de la Ciudad de Córdoba contestando al pedido que se le había hecho para formar un Reglamento que delimitara las atribuciones de la corporación municipal²⁰⁵. En un pasaje de esa nota, Baigorri se refería a la Constitución cordobesa de 1821 como “el Reglamento

de enero, Cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 15 de enero de 1821*, p. 83. La copia de la nota de la Comisión transcrita por SILVA, F. (1931a) Ob. cit., pp. 212-213, también lleva fecha de 11 de enero de 1821. Sin embargo, CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, pp. 11-12, asegura que la fecha de la nota de los redactores del proyecto es el día 10 de enero de 1821. El texto completo de la nota, coincidente en todos sus extremos salvo en el referido a la fecha, puede ser consultado en cualquiera de las dos obras mencionadas.

²⁰² “*Las obras de esta naturaleza es muy difícil presentarlas desde su nacimiento esentas de aquellos defectos á que induce necesariamente lo extenso y complicado de su objeto; y mucho mas, la parte, que toma en élla ése cúmulo de circunstancias nocivas, que llega a concurrir en los Pueblos al tiempo de formarlas*”, SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 212.

²⁰³ Ídem.

²⁰⁴ “Estableciendo por primera vez el proceso de formación del Reglamento, fijamos la situación del Ilmo. Baigorri, de co-redactor de aquel; aunque *luego aclara él mismo ser su redactor real*”, SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 139; “De entre ellos, el doctor Baigorri, que desde noviembre de 1813 a enero de 1815, había sido diputado por Córdoba, a la Soberana Asamblea General Constituyente, *sería el redactor* de la primera Constitución de Córdoba”, MELO, C. (1942) Ob. cit., p. 96. El subrayado en ambas citas es propio. En la misma línea CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 12.; y nuevamente MELO, C. (1950) Ob. cit., p. XXIX.

²⁰⁵ En una nota a pie de página, MELO arguye que pese a lo dispuesto por la Asamblea respecto de los integrantes de la Comisión encargada de redactar el texto constitucional, “El Reglamento fue, sin embargo, redactado por el doctor Baigorri, como lo establece una nota de éste fechada el 15 de enero de 1822 al Cabildo de la Ciudad de Córdoba, en la cual, al excusarse de redactar el reglamento de dicho Cabildo, afirma haber redactado el Reglamento Provisorio de la Provincia de Córdoba de 1821”, MELO, C. (1942) Ob. cit., p. 96.

que *formé* para el régimen de la Provincia”²⁰⁶. A partir de esa conjugación del verbo *formar* por la que optó, se expulsa a José Norberto Allende de la autoría del documento constitucional.

Ahora bien, más allá de la debilidad del argumento que se basa exclusivamente en la manera en que ese término fue utilizado, suponiendo por un momento que es válido, habría que observar cuáles son sus posibles consecuencias. Si es verdad que el Dr. José Gregorio Baigorri fue el único autor del proyecto de Reglamento Provisorio, entonces habría que afirmar también que los miembros de la Comisión redactora no cumplieron con el mandato de la Asamblea Provincial tal como había sido ordenado sin que ello conste en ninguna parte, y más, que faltaron a la verdad cuando ambos –Baigorri y Allende– firmaron el oficio del 11 de enero de 1821 dirigido al Gobernador Bustos acompañando el texto elaborado de acuerdo a su misión. Del mismo modo que se alega a partir del singular –*formé*– en el oficio de Baigorri al Cabildo, cuyo objeto es otro, se puede alegar en contra a partir del plural utilizado en el oficio firmado por los dos que específicamente se refiere al Reglamento Provisorio: “*procedimos a poner en planta el que tenemos el honor de acompañar*” donde reconocen la coautoría²⁰⁷. Por eso resulta más plausible la postura de SEGRETÍ, quien, además de apelar a la honestidad de los redactores, cita otro pasaje de aquel oficio que el primero de ellos envió al Cabildo en el que los demás autores basan su afirmación. Decía más adelante Baigorri que “*Los ardientes deseos de cooperar al bien común de tanto buen ciudadano, el crecido número de hijos ilustrados que hacen el honor del Patrio suelo, haría poco congruente la medida de ceñir esta clase de trabajos a los escasos alcances de uno sólo: debía mirarse como un mal serrar la puerta a todos los provechos que tiene derecho a reportar el público de las luces y talentos de otros*”²⁰⁸.

De estas últimas palabras se puede deducir la concepción de Baigorri acerca de la entidad que tenía la misión de formar un texto de este tipo y la consecuente inconveniencia de llevar adelante una empresa de estas características en soledad, motivo por el cual rechazó el pedido del Cabildo. Si estas razones fueron suficientes para excusarse de realizar un simple reglamento sobre las atribuciones de la corporación de la Ciudad, no resulta extraño pensar que de haberse hallado sólo para formar la primera Constitución de la Provincia –por indisposición, o incluso hasta desinterés de Allende–, lo hubiera manifestado de algún otro modo para salvar la dificultad.

²⁰⁶ El texto íntegro de este oficio de Baigorri al Cabildo de la Ciudad de Córdoba está transcripto en la obra de SILVA, F. (1931b) “Formas federales de Tucumán y Córdoba en 1820”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 18, Nros. 7-8, septiembre-octubre, pp. 217-385. También en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, pp. 12-13.

²⁰⁷ Extracto del oficio ya referido que consta en SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 212.

²⁰⁸ SEGRETÍ, C. (1995) Ob. cit., pp. 138-139. Por su parte, CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 13, también transcribe este pasaje del oficio de Baigorri pero no le asigna ningún tipo de entidad en este asunto de la autoría de la Constitución.

II. 5. Presentación del proyecto a la Asamblea y sanción del Reglamento Provisorio

Elevado el proyecto al Gobernador, el siguiente paso fue someterlo a consideración de la Asamblea para su lectura, discusión y sanción. El día 12 de enero de 1821 Bustos envió dos oficios. Uno tenía como destinatarios a los redactores, felicitándolos y agradeciéndoles el puntual desempeño de su tarea²⁰⁹. El otro iba dirigido a la Legislatura anunciando que la comisión nombrada para la redacción del proyecto había concluido su operación de formar el “*Reglamento Provisorio Constitutivo* (sic)”, acompañando el resultado de su labor. Luego de transcribir para los representantes el oficio firmado por los redactores del texto, recomendaba a la Sala la consideración del “*mérito y servicios que han prestado a la Prov^a. sus autores en el grado en q^e. deven estimarse las obras de esta naturaleza*”²¹⁰.

Reunidos los representantes en la Sala de sesiones, se dio lectura de la nota del Gobernador en la sesión del 15 de enero y al día siguiente comenzaron los preparativos para la consideración del proyecto²¹¹. El presidente de la Sala, Don Francisco Bedoya, planteó una cuestión previa, de orden, a fin de establecer el mecanismo que se debía observar para el tratamiento del texto constitucional. Después de una “*detenida y premeditada discusión*”, los representantes decidieron que el mejor modo de proceder sería la sanción sucesiva por capítulos luego de contemplarse detenidamente cada uno de ellos y considerárselos suficientemente discutidos²¹². Resuelta la cuestión de forma, comenzó en la misma sesión del día 16 de enero la tarea “*con la detención y escrupulosidad que esta gran carta constitutiva demanda*”, de discutir los primeros tres capítulos del Reglamento, quedando al final del día sancionados cada uno de ellos²¹³. En apenas ocho sesiones, repartidas a lo largo de la segunda quincena de enero de 1821, el Cuerpo Constituyente discutió y sancionó los treinta y un Capítulos en los que estaba dividido el proyecto presentado por la comisión²¹⁴.

²⁰⁹ Oficio de Bustos a los Señores José Gregorio Baigorri y José Norberto de Allende, en SILVA, F. (1931b) Ob. cit., pp. 296-297.

²¹⁰ Oficio de Bustos a la Asamblea cordobesa adjuntando el proyecto de Reglamento Provisorio, Ídem, p. 295. La respuesta a este oficio del Gobernador tiene fecha de 18 de enero de 1821, en ella, la Sala dice haber recibido la copia adjunta del Reglamento y no haber podido hasta ese momento hacer más que una ligera lectura “*para satisfacer las ansias con q^e. le esperaba*”. Sin embargo, de la lectura de las sesiones durante las que se discutió y sancionó el texto constitucional puede saberse que para el 18 de enero ya estaban sancionados los primeros cinco Capítulos del mismo, Cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de enero de 1821*, p. 86.

²¹¹ En un claro ejemplo de la falta de materialidad de las instituciones, algo que la situación económica condicionará durante la mayor parte del período, el lugar donde sesionaba la Legislatura era “la casa que perteneciera a don Francisco Vázquez Maceda, en la esquina de las calles Buenos Aires y Entre Ríos”, BISCHOFF, E. (1968) *Historia de Córdoba*, Tomo I, Geminis, Buenos Aires, p. 180.

²¹² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 16 de enero de 1821*, p. 84.

²¹³ Ídem, p. 85.

²¹⁴ En la sesión del 16 de enero, como se ha dicho, se sancionan los capítulos uno a tres, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 16 de enero de 1821*, pp. 84-85; en la del día 17, los capítulos cuatro y cinco, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 17 de enero de 1821*, pp. 85-86; el día 18, los capítulos seis y siete, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de enero de 1821*, pp. 86-87; el día 19, capítulos ocho a diez, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 19 de enero de 1821*, pp. 87-88; el día 20, sólo el capítulo once, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 20 de enero de 1821*, pp. 88-89; el día 23, los capítulos doce a

Fueron trece los representantes que, presididos por Francisco Bedoya, participaron de este breve proceso²¹⁵. El diputado José Julián Martínez, si bien formaba parte de la Sala, no participó de las discusiones debido a que en la sesión del 16 de enero, haciendo lugar a su pedido, se le concedió una licencia temporal para pasar a su hacienda en el campo²¹⁶. Don José Saturnino Allende, sin previo aviso, no se presentó a ninguna de las sesiones constituyentes. Algunos representantes no asistieron a todas las sesiones, como fue el caso de Juan José Espinosa, Francisco Ignacio Bustos, Felipe Arias y Domingo de Malde²¹⁷. Finalmente, cabe resaltar dos casos especialmente paradigmáticos, el de los Señores vocales Carlos del Signo y Lorenzo Recalde, quienes asistieron sólo a una única sesión de discusión y sanción de la Constitución alegando haber presentado oportunamente a sus respectivos comitentes la renuncia a su cargo²¹⁸. La Sala no justificó la actitud de ninguno de ellos ya que consideró que sus renunciaciones al cargo no eran operativas hasta tanto se pronunciaran los respectivos poderdantes, razón por la cual los conminó a comparecer a las sesiones. Este incidente da cuenta, una vez más, de la concepción que operaba en el contexto estudiado sobre la representación.

Dos aspectos materiales condicionan el estudio a fondo de este proceso que llevó a la sanción del Reglamento Provisorio. Por una parte, la brevedad del proceso en sí. Apenas ocho reuniones de los representantes en dos semanas de trabajo en las que no estuvieron exclusivamente abocados a la tarea de discutir y rescribir el texto enviado por la comisión²¹⁹. Entre medio del debate constituyente los representantes también atendieron a cuestiones ordinarias como comunicaciones de diputados que versaban sobre

diecisiete, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 23 de enero de 1821*, pp. 89-90; el 24, capítulos dieciocho a veinte, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 24 de enero de 1821*, pp. 91-92; y finalmente, en la sesión del día 30 de enero de 1821, los restantes capítulos del proyecto bajo examen, veintiuno a treinta más el capítulo último y las disposiciones sobre los tratamientos que habrían de recibir las diferentes autoridades provinciales, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 30 de enero de 1821*, pp. 92-93.

²¹⁵ Del cotejo de las Actas de las sesiones entre los días 16 y 30 de enero, se puede recomponer la Asamblea Constituyente que sanciona el Reglamento Provisorio, a saber: Francisco de Bedoya (Presidente) - Andrés de Oliva (Secretario) - Domingo de Malde - Francisco Ignacio Bustos - José Lascano - José Marcelino Tissera - José Francisco Gigena - José Roque Savid - Carlos del Signo - José Vélez - Felipe Arias - Juan José Espinosa - Lorenzo Recalde, Cfr. AHCDC, Tomo I, pp. 84-93.

²¹⁶ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 16 de enero de 1821*, p. 84.

²¹⁷ Espinosa estuvo ausente la primera sesión de discusión del Reglamento, Ídem, pp. 84-85; Bustos no compareció a la Sala los días 19 y 23, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 19 de enero de 1821*, pp. 87-88 y AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 23 de enero de 1821*, pp. 89-90; Arias estuvo ausente en la sesión del 20 de enero, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 20 de enero de 1821*, pp. 88-89; y Domingo de Malde en la del día 30, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 30 de enero de 1821*, pp. 92-93.

²¹⁸ Carlos del Signo sólo participó de la primera de las sesiones, la del día 16 de enero, y luego se ausentó alegando haber presentado a sus comitentes del Curato de Santa Rosa la renuncia al cargo. Lorenzo Recalde, por su parte, asistió únicamente a la del 30 de enero, sesión en la que se incorporó a la Sala ya que si bien tenía presentada la renuncia ante sus comitentes del Curato de los Anejos, como ésta no había sido todavía contestada por ellos, la Asamblea lo había conminado a incorporarse.

²¹⁹ En este punto es discutible la posición de CIMA cuando, calificando generosamente la actitud de la Sala cordobesa, dice que “no tiene en nuestra historia, correlativamente, más discusión siquiera la Constitución Nacional sancionada en 1853 en Santa Fe, cuyo proyecto se presenta a la Convención Constituyente el 18 de abril y se aprueba el 1º de mayo, después de once sesiones”, CIMA, A. (1960) Ob. cit., p. 74. Si bien desde el comienzo hasta el final del proceso cordobés transcurrieron más días que en el caso de la Confederación, la Constitución de Córdoba se sancionó en tres sesiones menos que la de 1853.

licencias o renunciaciones hechas a sus cargos o nombramientos en comisiones, o incluso la consulta sobre un expediente relativo al pago de dietas adeudadas, asuntos meramente accidentales o incidentales que escapaban a la labor esencial y distraían al cuerpo de su misión fundamental. En este sentido, el proceso puede inscribirse en el contexto señalado para la generalidad del espacio hispanoamericano, dando cuenta –nuevamente– de la comunión de rasgos similares en la cultura política y jurídica de dicho espacio, a saber, “la celeridad con que trataron de concluirse los procesos constituyentes en el constitucionalismo hispano... tiene también que ver con la consideración del texto constitucional como factor de estabilidad y articulación del poder político en un desintegrado escenario político”²²⁰. En consecuencia, dentro de un contexto político convulsionado, condicionado por la inestabilidad que para el caso rioplatense representaba la pérdida de la cohesión que otorgaba la existencia de un gobierno central, la Constitución podía ser utilizada como instrumento de consolidación frente a las demás provincias. En esto Bustos, que al mismo tiempo se encontraba organizando la reunión de un Congreso para el conjunto de las Provincias, tenía un gran interés.

El otro aspecto que entorpece la cabal comprensión de esta historia es la ya revelada brevedad y concisión de las actas de las sesiones durante las cuales se discutió el proyecto de Constitución²²¹. En no más de veinte líneas para cada una de ellas, el contenido se limita a informar someramente sobre los capítulos considerados en el día y –luego de la fórmula casi de rigor “*siendo suficientemente discutidos*”– se asienta su sanción por unanimidad o a pluralidad de sufragios. Cualquier observador ajeno a la labor de la Sala echa de menos los alegatos de los representantes fundando las razones para dar o no su apoyo a tal o cual posición defendida en aquellas “*detenidas*” discusiones. Apenas en un puñado de oportunidades, en las que los representantes salvaron su voto o plantearon una fuerte oposición a la letra del proyecto, se hace mención a sus opiniones. Este es el caso del vocal Don Francisco Ignacio Bustos que en dos ocasiones planteó su disconformidad con la cuestión objeto del debate: en relación con la determinación de la “*Religión del Estado*”, y respecto de la facultad otorgada al Gobernador para expedir cartas de ciudadanía, apuntando en ambas circunstancias que se trataba de atribuciones propias del futuro “*Congreso General*” y por lo tanto fuera del ámbito de consideraciones de la Provincia²²². También el caso del representante Juan José Espinosa que argumentó ser atribución del Gobierno y los Magistrados la privación de otros cultos públicos y privados diferentes a la Religión Católica Apostólica Romana, en lugar de la solución adoptada por el proyecto que otorgaba dicha facultad al Congreso Provincial²²³.

En sintonía con aquella idea apuntada de fuerte unidad cultural y confianza depositada en la pluma de expertos juristas a quienes se encargaba la redacción del

²²⁰ LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) Ob. cit., p. 98.

²²¹ Denunciada al momento de analizar el debate desarrollado en la Legislatura en relación con la denominación del texto, ver *supra*: “II. 2. Reglamento Provisorio o Constitución Permanente: la provisionalidad como regla”.

²²² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 17 de enero de 1821*, p. 85; y AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de enero de 1821*, pp. 86-87, respectivamente.

²²³ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 17 de enero de 1821*, p. 85.

proyecto de Constitución, y pese a puntuales oposiciones a las soluciones adoptadas en tal o cual materia que se pueden inducir de alegatos salvados como los recién apuntados, o del sencillo hecho de que varias de las votaciones se resolvieron por mayoría o por simple pluralidad de sufragios antes que por unanimidad, el texto del proyecto de treinta y un capítulos se aprobó por la Asamblea casi sin sufrir alteraciones. La crónica de los debates sólo recoge cuatro modificaciones a la labor de la comisión compuesta por Baigorri y Allende. Una, relativa a la proporción entre habitantes de la Provincia y representantes para el Congreso Provincial, disminuyendo la representatividad del cuerpo²²⁴. Otras dos, sobre las condiciones para ser elegido representante y Gobernador de la República²²⁵. Finalmente, una cuarta modificación relativa al número de escribanos entre los que se turnaría la pensión de las causas criminales²²⁶.

En definitiva, esta reconstrucción del escenario en el que se desarrolló el proceso de sanción de la primera Constitución de Córdoba parece dar razón al sentir que la Sala manifestó a Bustos con motivo de comunicarle la recepción del proyecto que éste le había remitido para su consideración: “*su exterior prospecto, al paso q^e. demanda un trabajo arduo, y una contracción sin cotejo en los comicionados p^a. su formacⁿ. anuncian à esta Sala muy cortas fatigas p^a. sancionarlo*”²²⁷; síntesis aguda, de propia boca de los protagonistas, de los rasgos peculiares de una cultura político-jurídica que poco a poco se puede ir descifrando.

II. 6. Impugnación de la sanción: ¿Es nula la Constitución?

El de discusión y sanción del Reglamento se presenta, *a priori*, como un proceso pacífico en el cual, tanto la oposición al modo en que se llevó adelante como las opciones que se adoptaron –en detrimento de otras que se descartaron–, no parecieran tener mayor relevancia. Si se considera la oposición a los artículos sobre la determinación de la Religión Católica como Oficial del Estado, y la privación de otros cultos públicos y

²²⁴ Durante la discusión del capítulo 10, «De la Asamblea Electoral», “*se acordó, sobre el artículo 10, que por cada doce mil almas se nombre un representante para el Congreso de la Provincia y que en el segundo punto del artículo 11 donde dice «de la fracción de seis mil almas», se ponga el número de ocho mil*”, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 19 de enero de 1821*, pp. 87-88.

²²⁵ Sobre la consideración del capítulo 11, «De los Representantes», “*resultó que puedan ser elegidos representantes para el Congreso de la Provincia no sólo los que tengan el fondo de dos mil pesos, como lo previene este artículo, sino también todo empleado que disfrute de un compensativo ó rédito equivalente al fondo de dos mil pesos ó profese algún arte liberal con aprobación pública de alguna Universidad*”, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 20 de enero de 1821*, p. 88.

Respecto de la sanción de los artículos del capítulo 14, «Del Poder Ejecutivo», se hace la salvedad de que se aprueban “*con las mismas calidades que se previenen en sesión del 20 de Enero, sobre la elección del Ejecutivo*”, esto es, la habilitación para ser electo a aquéllos que sin poseer los fondos en la norma establecida disfruten de un compensativo o rédito equivalente o profesen algún arte liberal con aprobación pública de alguna Universidad, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 23 de enero de 1821*, p. 90.

²²⁶ Puesto en discusión el capítulo 18, «De los Tribunales de Justicia», se sancionaron por pluralidad sus veintisiete artículos “*expresando en el artículo 3 ser bastante el número que hay de Escribanos para turnar la pensión en éste indicada*”, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 24 de enero de 1821*, pp. 91-92.

²²⁷ Oficio de la Asamblea a Bustos comunicando la recepción del proyecto de Reglamento Provisorio elaborado por la Comisión, en SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 213.

privados que dos eclesiásticos integrantes de la representación provincial embanderaron – los casos referidos *supra* de Bustos y Espinosa–, se puede llegar a saber que al menos un sector de la curia estuvo en desacuerdo con el tratamiento que se dio en la Constitución a una cuestión tan sensible como la Religión. Sin embargo, no existe un pronunciamiento oficial por parte del clero en su conjunto. Tampoco hay panfletos, periódicos, ni crónicas que refieran bullicio o activismo político fuera de la Sala mientras se debatía y sancionaba el proyecto, esto es, no hay indicios que permitan conocer si hubo una intensa actividad de apoyo u oposición, de reflexión acerca de lo que debía o no entrar en un cuerpo textual como el que estaba siendo tratado por la Sala, ni mucho menos sobre el tipo de lenguaje o el sentido de las disposiciones que contenía²²⁸. Por lo tanto, resulta casi imposible intentar reconstruir lo que en términos modernos se podría calificar como el estado de la opinión pública cordobesa durante aquellos días²²⁹.

Apenas un dato –no menor– puede dar cuenta de la existencia de posiciones contrapuestas en el tejido social al tiempo que este proceso constituyente estaba sucediendo. En la sesión en la que se resolvió pasar a Bustos el texto sancionado para su correspondiente promulgación, el representante por el Curato de Río Seco Don Eduardo Bulnes –uno de los personajes políticos de la Provincia–, planteó la cuestión relativa a la supuesta nulidad de todo lo actuado por la Asamblea constituyente y, en consecuencia, la nulidad de la Constitución sancionada²³⁰. Fundamentaba su ataque en una serie de

²²⁸ En Córdoba había habido una imprenta instalada en el Colegio Máximo de Monserrat durante la gestión de los jesuitas pero poco tiempo después de su expulsión –en el año 1767– fue trasladada a Buenos Aires. Recién a finales del año 1823 volverá a instalarse otra, la segunda imprenta cordobesa, en la Universidad. El nacimiento de la prensa periódica provincial puede datarse en esa misma fecha: “El primero en aparecer es *El Investigador*, el 23 de diciembre de 1823, redactado por fray Hipólito Soler y el doctor Estanislao Learte. El 30 de dicho mes y año el doctor Saráchaga da a luz *El Montonero*. Y a éste le siguen *El Filantrópico* y *El Teofilantrópico o el amigo de Dios y de los hombres*, aparecidos el 15 de enero y 16 de marzo de 1824 respectivamente. Fueron redactores del primero Domingo Malde, Sierra y el doctor Francisco Ignacio Bustos y del segundo el doctor José María Bedoya”, SEGRETÍ, C. (1970) Ob. cit., p. 170.

²²⁹ Sobre el modo en que influye –o puede influir– en la construcción de las bases constitucionales del espacio político lo que podríamos considerar *opinión pública*, puede consultarse el trabajo de GOLDMAN, N. (2003) “Formas de Gobierno y Opinión Pública o la disputa por la acepción de las palabras, 1810-1827”, en SÁBATO, H. y LETTIERI, A. (Comp.), *La vida política en la Argentina del Siglo XIX. Armas, votos y voces*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 45-56. También los trabajos de PALTÍ, E. (2007) *El tiempo de la política. Lenguaje e historia en el siglo XIX*, Siglo XXI, Buenos Aires; (2005) *La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX. (Un estudio sobre las formas del discurso político)*, FCE, México. Un estudio más general, por su temática y por su geografía, que trata sobre la concepción tradicional y las mutaciones que en el tránsito a la modernidad se van desarrollando en el ámbito de la esfera pública en Latinoamérica, es de referencia obligada el trabajo de GUERRA, F., LEMPÉRIÈRE, A. y Otros (1998) *Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII y XIX*, Fondo de Cultura Económica, México. Una descripción del caso cordobés, en AYROLO, V. (2006) “Noticias sobre la opinión y la prensa periódica en la Provincia autónoma de Córdoba: 1820-1852”, en *Quinto Sol*, Nro. 10, pp. 13-46.

²³⁰ Eduardo Pérez Bulnes era “un hombre de gran cultura, cuya erudición e inteligencia lo distinguieron entre los prohombres del Congreso de Tucumán. Su patriotismo, prudencia y honorabilidad lo habían hecho merecedor de la gloria incomparable de representar a la provincia en la Asamblea de 1816 y constituir uno de los signatarios del Acta de la Independencia. Bulnes era, pues, un ‘excelente hijo de Córdoba’, que supo ejercer sus servicios con empeñosa energía, ‘en armonía con su honestidad intachable’ y sin otra finalidad que la de beneficiar a su pueblo, intensificando así ‘los quilates y el brillo de sus méritos contraídos ante el mismo’”, PORTELLI, M. (2010) “Universitarios de Córdoba. El centenario de la independencia y la construcción de los relatos históricos locales en la obra de Pablo Cabrera”, en *Revista Electrónica de*

razones que están contenidas en el oficio enviado por él, y que la Legislatura consideró el 5 de febrero de 1821. En primer lugar alegaba que la Honorable Asamblea había quedado comprometida a llamarlo para el caso de sancionar el Reglamento Provisorio, compromiso que finalmente no respetó. En segundo lugar, protestaba de nulidad sobre todo lo actuado basándose en que la Sala había padecido durante el proceso constituyente de un déficit de representación ya que, por una parte, se había omitido llenar los electorados vacantes por la renuncia que habían presentado algunos representantes, y por otra, en las deliberaciones no habían participado el número de representantes que eran necesarios para su validez, esto es, que no había sesionado con quórum suficiente.

Ante semejante acusación, la Sala resolvió en primera instancia corroborar la calidad autoatribuida por Bulnes de representante por el Curato de Río Seco y *“traídas las actas y revisados los poderes se encontró no estar incorporado, en cuya virtud se resolvió, no gozar de la inviolabilidad de Representante y ser audaz la comunicación que, sin asistirle derecho alguno, dice hará á dicho partido”*²³¹. Acto seguido, se declaró completamente falso el resto de acusaciones vertidas, tanto respecto del déficit denunciado, como de no haberse convocado a los electores vacantes o de haberse comprometido a convocar a Bulnes para el caso de llevar adelante el proceso de discusión y sanción del Reglamento Provisorio. A partir de estas razones, se sancionó la formación de una comisión integrada por tres miembros de la Sala para que determinara el modo y forma en que se ejecutaría el castigo de este *“calumniador criminal”*²³².

La resistencia se hizo sentir desde la facción “montonera” opositora al Gobernador Bustos, un grupo de representantes que con sus inasistencias a las sesiones de discusión del proyecto constitucional habían intentado truncar el éxito de la empresa constituyente. Uno de sus máximos referentes, el Señor José Saturnino Allende, llegó a reclamar *“la falta de autoridad en las providencias preliminares tomadas por la comisión encargada del juzgamiento del reo Don Eduardo Bulnes”*²³³. Como era previsible, siendo la misma Sala que acababa de sancionar el Reglamento Provisorio la encargada de juzgar sobre la legitimidad o no del acto que se había impugnado, la denuncia fue desestimada. Con acciones como ésta fue afirmándose progresivamente en el poder el sector favorable al Gobernador, excluyendo de la escena principal –como será característico durante las décadas siguientes– al enemigo político. Un alto grado de tensión y posiciones radicalizadas que queda de manifiesto en los papeles personales que Ambrosio Funes –

Fuentes y Archivos del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, Nro. 1. Disponible en <http://www.refa.org.ar/revista.php?idEdicion=1>. Una semblanza más acabada de Bulnes puede consultarse en CABRERA, P. (1916) *Universitarios de Córdoba. Los del Congreso de Tucumán*, Biblioteca del Tercer Centenario de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.

²³¹ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 5 de febrero de 1821*, pp. 96-97.

²³² Cfr. Ídem, p. 97. La comisión estaría formada por *“los Señores Don Francisco Bedoya, Don José Vélez y Don Domingo Malde”*.

²³³ Allende, no sólo que no asistió a ninguna de las sesiones celebradas entre el 16 y el 30 de enero de 1821 sino que además salvó su voto cuando se decidió enviar el Reglamento sancionado a Bustos, y volvió a hacerlo cuando se resolvió la no incorporación de Bulnes como representante con el consecuente rechazo para el denunciante de la inviolabilidad que el cargo otorgaba. AHCDC, Tomo I, *Acta de las sesiones del 5 y 12 de febrero de 1821*, pp. 96-97 y 100-101.

hermano del Deán Gregorio Funes— redactó en aquéllos días recordando lo acontecido: “[Funes] anota que se le dijo «*que hubo voto para que se le fusilase*». Más adelante, en otra anotación, manifiesta que se mandaron 12 hombres al Totoral a prenderlo y que lo trajeran con grillos, y que el Presidente de la Asamblea, Bedoya, fue quien votó porque lo fusilasen”²³⁴.

II. 7. Promulgación, publicación, difusión y vigencia del Reglamento Provisorio

Sancionado íntegramente el *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba*, el acto siguiente por parte de la Asamblea consistió en comunicar al Gobernador, el día 5 de febrero, que “*sin perdonar sacrificios*” había concluido su tarea de “*dar quanto antes una regla q^e. provisoriam^{te}. dirija la Prov^a. mientras el Congreso Gral. de las unidas arregla el plan q^e. deve regirlas perpetuam^{te}.*”²³⁵. Con la nota, se adjuntaba el texto completo sancionado para su correspondiente promulgación y publicación del modo más solemne posible, Bustos aceptó el texto que le envió la Asamblea y cumplió con lo prevenido en la comunicación de la Legislatura²³⁶.

La técnica utilizada para concluir el procedimiento iniciado más de un año atrás, sería la tradicional práctica de publicar materialmente un “Bando Solemne” comunicando en sí la decisión adoptada y adjuntando una copia del texto sancionado para que la nueva formulación normativa pudiera “*llegar a noticia de todos*”²³⁷. El 20 de febrero el Gobernador firmó el decreto de promulgación y al día siguiente se llevó a cabo la correspondiente publicación²³⁸. Cabe aclarar aquí la corta distancia que existía entre estos dos términos claves que posteriormente adquirirán acepciones específicas bien diferenciadas. En el mundo jurídico pre-contemporáneo, cuyas características comparte en gran medida éste de la transición tal y como se ha ido perfilando en el análisis, publicación y promulgación eran conceptos cercanos al punto que en el lenguaje castellano de la época el primero formaba parte de la definición del segundo, siendo la

²³⁴ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 18.

²³⁵ Oficio de la Asamblea a Bustos comunicando la sanción del Reglamento y adjuntándolo para su publicación, en SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 214.

²³⁶ Según el oficio referido: “*V.S. como igualmente interesado en dar un paso que ciertamente avanza en felicidad del orden público de nuestras circunstancias procurará su mas pronta publicación*”, en SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 214. La actitud de Bustos fue de llana aceptación, a diferencia por ejemplo de su par santafecino, el caudillo Estanislao López, que “había rechazado la Constitución que se le brindara, sustituyéndola por otra de su inspiración personal y factura de su asesor el doctor Juan Francisco Seguí”, RIVIERE, R. (1958) Ob. cit., p. 82.

²³⁷ Decreto de Bustos del 20 de febrero de 1821, en SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 214.

²³⁸ “*/Con esta f^{ha}. [21 de febrero] se ha publicado el Reglamento Provisorio que debe regir la Prov^a. durante la sanción de la constitución gral. q^e. la H. A. se sirvió pasarme en su nota del 5 del presente lo q^e. pongo en noticia de V. S. para su conocim^{to}.*”, Oficio de Bustos a la Honorable Asamblea comunicando la publicación del Reglamento, en SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 206.

diferencia específica de la promulgación, respecto de su género próximo –publicidad–, el carácter de “solemnidad” que rodeaba al acto de dar a conocer una cosa²³⁹.

Sin embargo, el estricto cumplimiento de los procedimientos al uso no quiere decir, necesariamente, que el texto del Reglamento haya llegado a conocimiento de todos con la efectividad que puede tener hoy la publicación de una disposición emanada de autoridad pública, esto es, no puede confundirse publicación con publicidad y difusión. No ocurrió en los hechos y no ocurrió en el derecho, al menos en los términos y con las consecuencias que se atribuyen actualmente a estos actos, con lo cual, este aspecto tiene también incidencia en la comprensión de las características de la entrada en vigencia –o no– de las disposiciones allí contenidas y su impacto en el ámbito del derecho en sentido objetivo.

Consecuente con los presupuestos que ordenaban las relaciones políticas en ese tiempo y ese espacio político, el Gobernador envió a los cuerpos capitulares un oficio adjuntando el Reglamento Provisorio de la Provincia sancionado por la Honorable Asamblea y publicado solemnemente según su indicación, “*para su mejor noticia regimen de los Juzgados de primero y Segundo. Voto y demas fines consiguientes*”²⁴⁰. Indicaba además que se acusara oportunamente recibo del documento y se pasara copia a las demás autoridades obligadas a aplicarlo²⁴¹. Sin embargo, esta comunicación y remisión del texto normativo no se produjo inmediatamente después de promulgada la Constitución ni de manera uniformemente general. Contrasta al respecto de modo notable la celeridad con que se dirigió el oficio en cuestión al Cabildo de la Capital –14 de marzo de 1821–, con la lentitud con que se remitió, más de dos años después, a las Salas Capitulares de Villa Concepción de Río Cuarto –23 de agosto de 1823– y La Carlota –10 de septiembre de 1823– excusándose en esa oportunidad en que “*p^a. el olvido natural no se ha remitido desde su publicación*”²⁴². Como se puede observar, el mecanismo utilizado depositaba en el Gobernador la tarea de promulgar y circular de la norma y, consecuentemente, la de asegurar que las mismas llegasen correctamente, solicitando el mencionado acuse de recibo a sus destinatarios²⁴³. Esta circunstancia tiene relevancia en cuanto a la vigencia formal, entendida aquí como momento a partir del cual comienza a ser obligatoria la observancia de la norma para quien la recibe, y la vigencia material,

²³⁹ De acuerdo al Diccionario de la Academia Real Española al uso en 1803 –y con la misma acepción desde el Diccionario de Autoridades de 1737–, “Promulgar” se define como “*Publicar alguna cosa solemnemente, hacerla saber á todos. Promulgare*”; en tanto que “Publicar”, de acuerdo al mismo cuerpo lexicográfico de 1737, es “*Hacer notória o patente por voz de pregonéro, ú por otros medios, alguna cofa que fe defea venga à noticia de todos. Lat. Publicare, Promulgare*”.

²⁴⁰ Oficio del Gobernador al Ilustre Cabildo de la ciudad de Córdoba, en SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 299.

²⁴¹ “/Que se acuse el recibo y sacandose copia p^a. los dos juzgad^{es}., se archive p^a. su constancia”, ídem.

²⁴² Oficio del Gobernador al Ilustre Cabildo de la Villa de la Concepción de Río Cuarto acompañando copia del Reglamento Provisorio, en Ídem, p. 301. De la comunicación por medio de la cual se acusó recibo del Reglamento por parte de la corporación de La Carlota, con fecha 26 de septiembre de 1823, se deduce que la fecha del envío por parte del Gobernador es la del “10 del q^e. rize”, en Ídem, p. 301.

²⁴³ En la colección de oficios referidos a la formación, envío de ejemplares y vigencia del Reglamento que se ha utilizado, se pueden consultar los respectivos “*acuse de recibo*” que los Cabildos de la Ciudad de Córdoba –16 de marzo de 1821– y Villa La Carlota –26 de septiembre de 1821– enviaron al Gobernador, Ídem, pp. 300-301.

como efectividad o aplicación de la norma que recién a partir de ese momento se conoce. Lejos se está todavía del desarrollo de un principio ficcional como el de la publicidad normativa²⁴⁴.

Otro aspecto que vale la pena considerar, no ya por sus implicancias jurídico-formales como puede pregonarse de los anteriores sino por su relevancia política y social, que ayuda también a colorear el contexto en el que se desarrolló esta historia, es el de la difusión –en su acepción de propagar y divulgar una cosa– del Reglamento Provisorio. La inexistencia ya advertida de periódicos y de imprenta en la Provincia de Córdoba hasta finales del año 1823, imposibilitó que el texto pudiera ser reproducido a gran escala, leído y comentado por parte de la sociedad luego de su sanción. No hay noticia de envío de ejemplares de la Constitución más que la efectuada a los Cabildos del interior provincial y a los Diputados que representaron a Córdoba en el Congreso Constituyente que entre 1825 y 1827 se reunió en Buenos Aires²⁴⁵.

Fue precisamente esta falta de conocimiento del que “*no debiera carecer ni el ultimo de los Ciudadanos*” lo que motivó que en el año 1830, bajo el Gobierno del unitario General José María Paz que había derrocado a Bustos, se impulsara la ordenación y publicación por la prensa del texto constitucional con todas las reformas que se hubieren realizado durante su primera década de vigencia. Incluso más, en el oficio que envió a la Sala de Representantes aconsejaba incorporar al Reglamento las que se consideraran oportunas de acuerdo a las necesidades de la vida política provincial²⁴⁶. Fruto de esta decisión, cuyas consecuencias sustanciales sobre el texto del reglamento serán analizadas más adelante, es que recién se llegó a la primera versión impresa de la Constitución en el año 1832, con todo lo que ello implica para las posibilidades de efectividad durante la primera década de vigencia.

Una deriva más específica de esta cuestión relativa a la divulgación del documento constitucional es la referida a su entrada –o no– a los más reducidos ámbitos académicos para su análisis desde un punto de vista técnico-jurídico. La presencia en Córdoba de una de las casas de altos estudios más antiguas de América, con una larga tradición en la

²⁴⁴ Un revelador estudio sobre la construcción del principio de publicidad normativa partiendo desde una concepción premoderna de la publicación de las normas, aunque limitado al caso español, es el de LORENTE, M. (2001) *La Voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889)*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. Respecto de las circunstancias que rodean la actividad de publicación de las normas en el mundo hispano puede consultarse el *Dossier* dedicado a este tema en el *Anuario de Historia del Derecho Español* (AHDE), Nro 80, año 2010. Para el caso más específico de América antes de las independencias, el artículo que allí se recoge de autoría de TAU ANZOÁTEGUI, V., “Acerca de la elaboración y publicación de la ley en el Derecho Indiano”, pp. 133-156.

²⁴⁵ Bustos cumplió íntegramente con el encargo de la Legislatura y remitió poderes y Constitución al Diputado ante el Congreso General Constituyente Deán Gregorio Funes: “/Se acompaña a V.E. los correspondientes Poderes é instrucciones que la representación de la Prov. Ha tenido a bien, sancionar para los Diputados nombrados D.D. Greg^o. Funes, D.D. Elias Bedoya, y D. Eduardo Bulnes; como tambien uan copia del Reglam^{to}. provisorio de la Provincia”, Oficio de la Asamblea a Bustos de fecha 27 de octubre de 1824, en Silva, F. (1931a) Ob. cit., p 217. El acuse de recibo del texto que llegó semanas más tarde: “Representante p^r. esta Prov. p^a. el Cong^o. Gral. D^{or}. D. Greg^o. Funes – Enero 10, de 1825 – Acusa recibo del Reglam^{to}. Constitucional q^e. rige esta Prov., y q^e. se le remitió con nota de 20, de Dic^{re}. ultimo”, Ídem, p. 218.

²⁴⁶ Oficio del Gobernador a la Honorable Sala de Representantes del día 2 de julio de 1830, Ídem, p. 219.

enseñanza del derecho, invita a pensar que muy probablemente la Constitución de 1821 fuera objeto de estudio en las aulas de la Universidad. Esta hipótesis, *a priori* bastante razonable, encuentra refuerzos en la circunstancia de que uno de los redactores del Reglamento, el Doctor José Gregorio Baigorri, fuera designado como visitador de la Universidad para la evaluación y reforma de su plan de estudios²⁴⁷. El rediseño propuesto mantuvo en líneas generales del método tradicional de enseñanza, la división al uso entre Cátedra de Derecho Civil y Derecho Canónico y la referencia a los clásicos textos para la enseñanza del Derecho Común²⁴⁸. Sin embargo, incorporó también al tercer año del curso de jurisprudencia civil y canónica la enseñanza de “*el derecho patrio ó leyes del Estado, mediante que por ellas, y no por otras, se han de juzgar y sentenciar los pleitos*”²⁴⁹.

Una década más tarde se establecería en la Universidad de Córdoba, por decreto del Gobernador José Vicente Reynafé, una Cátedra de Derecho Público donde “*en el primer año se enseñarán... los elementos de los derechos públicos políticos y de gentes, en el 2º. los del derecho constitucional ú orgánicos con aplicabilidad de los anteriores, y en el 3º. los de economía política, adoptándose para el primer año la obra titulada Espíritu del Derecho, por M. Alberto Tristol [Fritot], para el 2º. el Curso de política, por Benjamin Constan[t], quedando del deber del Catedrático proponer en oportunidad la que crea adoptable para el 3º*”²⁵⁰. El primer profesor encargado de la nueva Cátedra fue el Dr. Santiago Derqui aunque durante sus primeros años tuvo el inestimable apoyo del propio Rector de la Universidad, Dr. José Gregorio Baigorri, quien “se ofreció a dictar desinteresadamente una serie de conferencias sobre las bases fundamentales del Derecho Público” para suplir las dificultades que generaba a los estudiantes el análisis de la obra de Constant²⁵¹. Esta participación de Baigorri en la cátedra de Derecho Público es otro elemento más que permitiría arriesgar la hipótesis de que en sus conferencias podría haber difundido la enseñanza del Reglamento que él mismo había ayudado a redactar, máxime cuando se trataba de una época en la que el texto constitucional –con sus modificaciones– había sido ya impreso.

²⁴⁷ Bustos delega esta misión a Baigorri por Decreto del 2 de julio de 1822 y aprueba medio año después la labor presentada por el clérigo con fecha 9 de enero de 1823, en *Compilación de leyes...* cit., p. 497.

²⁴⁸ “*El primer año, enseñará el catedrático de derecho civil, el primero y segundo libro de Justiniano por los Comentarios de Vinio (...) y el Catedrático de Cánones, el primer tomo de la obra de Devoti. El segundo año enseñará el Catedrático de derecho civil, el tercero y cuarto libro de Justiniano y el de Cánones, el segundo tomo de Devoti...*”, Reforma del Plan de Estudios de la Universidad de Córdoba, en el año 1823, por el Dr. D. José Gregorio Baigorri, en *Compilación de leyes...* cit., pp. 487-498. Véase LLAMOSAS, E. (2015) Ob. cit.

²⁴⁹ Ídem, p. 493.

²⁵⁰ Fragmento del Decreto de 19 de febrero de 1834 ordenando el establecimiento de una Cátedra de Derecho Público en la Universidad de San Carlos, en *Compilación de leyes...* cit., pp. 118-119. Un pormenorizado estudio de este asunto puede consultarse en TORRES, F. (2012) “Creación de la cátedra de derecho público en la Universidad de Córdoba (1834-1841)”, en *Anuario CIJS*, Nro. XIV, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, pp. 719-731. También aborda este asunto la primera parte del trabajo de YANZI FERREIRA, R. (2002) “La enseñanza del derecho público en la Universidad de Córdoba. 1834-1999”, en *Cuadernos de Historia*, Nro 12, Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas “Roberto I. Peña”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, pp. 16-52. Disponible en <http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/institutos/instituto-de-historia-del-derecho/publicaciones>

²⁵¹ MELO, C. (1942) Ob. cit., p. 102.

Sin embargo, pese a todos estos indicios, no se ha podido demostrar que el texto constitucional haya sido objeto de estudio en esas cátedras universitarias. Por el contrario, hay un dato indiciario interesante aportado por autores locales que, reinterpretado para lo que aquí interesa, puede atacar dicha hipótesis: el desconocimiento por parte de Juan Bautista Alberdi, que en 1834 recibió el grado de Bachiller en la Universidad de Córdoba, del texto del Reglamento Provisorio de la Provincia de Córdoba²⁵². Si fuera verdad que el documento constitucional se estudiaba en las aulas cordobesas, entonces, un jurista como Alberdi que cursó estudios de derecho allí debería de haberlo conocido. Sin embargo, en toda su producción literaria posterior, de la más profusa reflexión *iurpublicista* en el territorio, no hay mención a esta Constitución²⁵³.

Otra consideración significativa para concluir con este punto, relativa tanto a la cuestión de la entrada en vigencia de la constitución como a su difusión, tiene que ver con la ausencia de una práctica muy presente en el resto de espacios políticos que pertenecen al mundo cultural donde se desarrolla el modelo del constitucionalismo hispano: el juramento de la Constitución. En este sentido, LORENTE ha demostrado la importancia del juramento en un mundo de matriz religiosa donde el catolicismo más que un dato periférico se presenta como un elemento estructural o constitutivo del orden en muchas de sus dimensiones –político, jurídico y social–²⁵⁴. El hecho de que en el mundo hispano se recurriera a un juramento rodeado de un ceremonial católico es un indicador de que la obligación política era concebida todavía en términos religiosos, con todo el peso que en una sociedad católica tiene esa afirmación. Justamente ese ceremonial también tenía una función de publicidad en el sentido de dar a conocer la norma con un consecuente impacto potencial en sus posibilidades de eficacia. Bien, en el caso cordobés, el Reglamento Provisorio no se juró. No lo hicieron los representantes que lo discutieron después de votarlo, ni las autoridades constituidas luego de recibirlo²⁵⁵. Tampoco lo juraron las distintas corporaciones que formaban la trama social de la Provincia, ni mucho menos ciudadanos reunidos en la plaza pública o en la parroquia luego de la misa. Es que tampoco se organizaron celebraciones, con todo el capital simbólico que ellas reúnen, para festejar la sanción de la norma constitucional²⁵⁶.

²⁵² CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 22; SEGRETÍ, C. (1995) Ob. cit., p. 145.

²⁵³ Con una posición más ideologizada, DÍAZ DE MOLINA denuncia que “el centralismo unitario hizo una total ocultación de la constitución que estudiamos, por lo que hasta Alberdi la ignoraba, pues no la cita en su polémica con Sarmiento” (1958) Ob. cit., p. 88.

²⁵⁴ LORENTE, M. (2007) “El Juramento Constitucional”, en GARRIGA, C. y LORENTE, M., *Cádiz, 1812... cit.*, pp. 73-118. Quizás la obra más importante sobre este asunto es la de PRODI, P. (1992) *Il Sacramento del potere: Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Il Mulino, Bolonia.

²⁵⁵ En Cádiz, por ejemplo, se obligó a los diputados a asistir a la ceremonia de juramento de la Constitución bajo amenaza de ser sancionados si así no lo hacían, cfr. ídem, pp. 85-86. En Córdoba no se hizo lo propio con el Reglamento Provisorio de 1821 pese a que, por ejemplo, sí se había jurado obediencia a la Asamblea del año XIII, véase AGÜERO, A. (2013b) “La Asamblea del año XIII y la dimensión extraordinaria del orden jurídico tradicional. Reflexiones en torno al juramento e instrucciones del cabildo de Córdoba”, en *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, Nro. 13. Disponible en <http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAN13a11>.

²⁵⁶ En el caso santafecino, por ejemplo, el texto coetáneo ordenaba en sus arts. 57 y 58 que las autoridades y corporaciones debían jurar el Estatuto Provisorio, prohibiéndose a cualquiera, en lo sucesivo, ejercer

Toda esta reflexión antecedente sobre la promulgación y publicación del Reglamento Provisorio, y el modo en que la comprensión cabal de tales extremos puede condicionar las afirmaciones practicables respecto de aspectos esenciales desde el punto de vista jurídico como los de vigencia y efectividad de la Constitución, debe estar presente al momento de reflexionar sobre la última de las cuestiones que aquí se tratará: el impacto de la sanción de la norma constitucional en el orden jurídico, o dicho en términos menos problemáticos, su relación con el antiguo derecho en sentido objetivo.

Este aspecto puntual, derivado de la sanción de una norma que se supone debe ser considerada omnicomprendiva y fundamental para el orden jurídico, ha sido cumplidamente estudiado por GARRIGA para el caso de la norma gaditana de 1812 bajo la idea de “efecto derogatorio de la Constitución”²⁵⁷. La cuestión es clave porque indica una determinada concepción cultural en torno a la función de la Constitución como texto. Se liga además con otras categorías peculiares que caracterizaban la estructura casuística del orden jurídico en el mundo premoderno donde el derecho “se manifestaba como orden casi sólo –y como siempre– en el momento de la solución del *caso* (en rigor, único momento de sincronía que admitía aquel orden diacrónico) (...) [por eso] puede decirse que tiene una configuración unitaria (y no diacrónicamente articulada en una sucesión de sistemas), que sólo revela su coherencia en el acto de extraer del derecho la justicia que al caso concierne”²⁵⁸.

Dejando para el desarrollo de los capítulos siguientes las consideraciones sobre la inercia o no de determinadas instituciones o prácticas vigentes en la experiencia jurídica local antes de la sanción del Reglamento, es conveniente alertar de la importancia que tuvo la inclusión en el propio texto cordobés de una cláusula como la siguiente:

*Hasta que la constitución determine la conveniente, subsistirán todos los códigos legislativos, cédulas, Reglamentos y demás disposiciones generales y particulares del antiguo Gobierno Español, que no estén en oposición directa o indirecta con la libertad e independencia de Sud América, ni con este reglamento y demás disposiciones que no sean contrarias a él, libradas por el Gobierno General de las Provincias, desde el veinticinco de Mayo de mil ochocientos diez*²⁵⁹.

Una de las derivaciones lógicas generada por esta decisión que los constituyentes adoptaron es que, como bien ha señalado GARRIGA, “el derecho viejo no derogado (o que

empleo para la Provincia sin haber prestado previamente el mismo juramento, cfr. SAN MARTINO DE DROMI, M. (1994) Ob. cit., p. 1234.

²⁵⁷ GARRIGA, C. (2007a) “Constitución política y orden jurídico: el *efecto derogatorio* de la Constitución de Cádiz”, en GARRIGA, C. y LORENTE, M., *Cádiz, 1812...* cit., pp. 119-168. Comienza el autor designando el campo semántico referido por derogación, “toda alteración del orden jurídico que suponga *dejar sin vigencia* efectiva alguno de sus elementos normativos (formulado del modo que sea), de manera general e indefinida (dejando fuera, por consiguiente, tanto la dispensa como la suspensión). Y esto por cualquier vía o de cualquier modo que acaezca, es decir, expresa o tácitamente, abarcando tanto el *acto* como el *efecto derogatorio*”, p. 122.

²⁵⁸ Ídem, p. 130. Para un estudio de estos aspectos estructurantes del orden jurídico premoderno, véase la obra de TAU ANZOÁTEGUI, V. (1992a) *Casuismo y Sistema*, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires.

²⁵⁹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECCIÓN SEXTA, CAP. XII, ART. 3.

no se percibía como derogado, o sea, incompatible con el nuevo sistema) hubo de ser asumido como propio y pasó a formar parte –aunque sólo fuese *en calidad de por ahora*– del orden constitucional con todas sus consecuencias”; entre ellas, la de dejar en mano de los sujetos que detentaban jurisdicción la tarea de definir artesanalmente, al momento de aplicar el derecho en cada caso concreto, el contenido del orden jurídico²⁶⁰.

Como colofón, este ejercicio de revisión del modo en que se sucedieron los acontecimientos y reflexión densa sobre los aspectos que rodearon y estructuraron el proceso de alumbramiento de la primera Constitución de Córdoba en 1821 –su contexto de producción–, es una dimensión que no puede ser dejada de lado a la hora de abordar el estudio de su génesis y sanción, para luego entrar al de su literal conformación, y de su puesta en planta en los años que siguieron. De un modo más explícito, favorece un análisis que desnuda la alteridad de aquél mundo en transición y ayuda a evitar la retroproyección de categorías contemporáneas que conducirían al grave error de resignificar el acto constituyente en cuestión como el momento fundacional de un orden completamente nuevo, tanto en el plano político como social, modificando la concepción que los operadores jurídicos tenían acerca del derecho, sus principios que le daban estructura y lo legitimaban, su modo de crearse, interpretarse y aplicarse. Esto no quiere decir en absoluto que la sanción del Reglamento Provisorio careciera por completo de toda relevancia, sobre todo si se considera el contexto histórico en el que se produjo, pero invita a problematizar las interpretaciones intemporales y a buscar nuevos elementos para comprender los orígenes del constitucionalismo local en su especificidad.

²⁶⁰ GARRIGA, C. (2007a) Ob. cit., p. 158.

CAPÍTULO II

1821: ¿INGENIERÍA CONSTITUCIONAL?

I. LA DIMENSIÓN TEXTUAL DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL; I. 1. El texto del reglamento; I. 1. 1. Su estructura; I. 1. 2. Dos dimensiones: Provincial y Federal; II. CONSTITUCIONALIZAR UNA VIEJA REPÚBLICA “TEXTUALIZANDO” LA TRADICIÓN; II.1. Una república católica; II.1.1. Patria cristiana. Su impacto en la vigencia de los derechos y las libertades; II. 2. Ciudadanía y Sistema Electoral; II. 2. 1. Ciudadanía; II. 2. 2. El Sistema Electoral; II. 2. 2. 1. Antecedentes locales; II. 2. 2. 2. Disposiciones constitucionales en materia electoral; II. 2. 2. 2. 1. Elecciones para el Congreso Provincial; II. 2. 2. 2. 2. Elecciones para los Cabildos; II. 2. 2. 3. Balance sobre el sistema electoral; II. 3. Derechos y Garantías; II. 3. 1 Derechos y ley; II. 3. 2. Derechos y justicia; II. 3. 3. Derechos y libertades; II. 4. Los Poderes por su nombre; II. 4. 1. Poder Legislativo; II. 4. 2. Poder Ejecutivo y Gobierno; II. 4. 2. 1. Antecedentes; II. 4. 2. 2. Disposiciones constitucionales; II. 4. 3. Poder Judicial y Administración de Justicia; II. 4. 3. 1. Antecedentes; II. 4. 3. 2. Disposiciones constitucionales; III. LA DIMENSIÓN FEDERAL DEL CONSTITUCIONALISMO PROVINCIAL.

I. LA DIMENSIÓN TEXTUAL DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL

“Creo sumamente operativas para el historiador del derecho (...) la distinción, que no por más simple es menos trascendental, entre norma y formulación de norma, entendiendo por ésta ‘una expresión lingüística y la norma como significado de esa expresión’, que se concreta en un contenido de significado preceptivo y presupone siempre una labor hermenéutica: una norma es una formulación normativa interpretada por los llamados a cumplirla. El derecho no es, sino que está en la formulación normativa, de donde sólo sus destinatarios están capacitados para extraerlo. Como regla de conducta, la norma no existe con independencia del llamado a cumplirla: no es derecho lo que quienquiera pueda leer en un texto normativo cualquiera, sino sólo –y todo, mientras no sea rechazado por mecanismos internos al propio orden– lo que entienden quienes deben cumplirlo (por tener la norma como razón para actuar)”¹.

Tratar de entender cabalmente el impacto que pudo llegar a tener en la geografía rioplatense la sanción en Asambleas provinciales de una serie de documentos constitucionales obliga al investigador a leer cuidadosamente esos textos en su contexto advirtiendo la posible existencia de diferentes niveles de análisis. El plano superficial de lo que efectivamente se dice con vocación normativa, el poroso ámbito del *desiderátum*, proyecto político de futuro u horizonte de expectativas de los actores, y el

¹ GARRIGA, C. (2010) “Continuidad y cambio del orden jurídico”, en GARRIGA, C. (coord.) *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, Centro de Investigación y docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, México, pp. 59-106, p. 60.

omnicomprensivo campo de la cultura jurídica de base que subyace, y confiere sentido a formulaciones y expectativas. Así las cosas, es conveniente optar por un cierto tipo de acercamiento metodológico que, implícita o explícitamente, imponga la tarea de reconstruir las categorías discursivas de los protagonistas de un determinado contexto para dotarlas de significado, es decir, adscribir a los conceptos utilizados el campo semántico que ellos mismos pudieron imputarles, con el objeto de intentar recuperar el sentido *local* -en su dimensión espacial (geográfica) pero también temporal (histórica)- de los hechos institucionales que se pretenden comprender². Por otra parte, si se acepta que la interpretación de la formulación hace a la norma, la extensión de un estándar de lenguaje normativo -en este caso constitucional-, no autoriza a concluir que exista también un estándar de derechos, ni que los individuos de una comunidad política concreta gozan necesariamente de los mismos derechos que otros de una comunidad política diferente, por más que incluyan en su ordenamiento jurídico una formulación normativa expresada en los mismos términos.

Sin embargo, el recorrido analítico no debe agotarse en esta premisa. Además de las condiciones culturales desde las cuales se piensa e interpreta el nuevo lenguaje político de los derechos y las libertades, es necesario reconstruir el mapa del sistema institucional que hace posible -o no- la realización de los valores que inspiran el orden político-jurídico. Durante el período que siguió a la quiebra del imperio hispánico a partir de 1808, en esta amplia geografía “la irrupción de nuevos discursos políticos no se acompañó con el diseño de nuevas instituciones que sirvieran para ponerlos en planta, sino que por el contrario se mantuvieron los antiguos dispositivos institucionales, los cuales, a su vez, distorsionaron el significado de conceptos recién nacidos tales como constitución, derechos y garantías individuales o separación de poderes”³. Esta dificultad agregada para el estudio del primer constitucionalismo en España y América obliga a doblar la tarea de investigación, por un lado, abordando cada texto constitucional en su conjunto sin seleccionar ciertas disposiciones abstraídas de su contexto -cultural y textual-; y por otro, revisando el modo en que cada constitución fue practicada. Sólo así se podrá recorrer la senda hacia “un nivel de comprensión de la historia constitucional de mayor densidad, poniendo de relieve el carácter contingente de los significados y la consecuente necesidad de asumir y elucidar la forma en que arduamente han sido contruidos aquellos que actualmente les adjudicamos”⁴.

² El desarrollo de las premisas sobre las que se construye un enfoque metodológico como el aquí adoptado puede consultarse, entre otras obras, en la de HESPANHA, A. (2002) *Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio*, Tecnos, Madrid.

³ LORENTE, M. (2012a) “Límites, logros e intersecciones entre historia política e historia jurídica”, en *PolHis*, Año 5, Nro. 10, Segundo Semestre, p. 28. Disponible en <http://historiapolitica.com/boletin10/>

⁴ AGÜERO, A. (2011a) “Tradición jurídica y derecho local en época constitucional: El “Reglamento para la Administración de justicia y policía en la campaña” de Córdoba, 1856”, en *Revista de Historia del Derecho*, Nro. 41, INHIDE, pp. 1-43, p. 43. Disponible online en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issueoc&pid=1853-178420110001&lng=es&nrm=iso.

Como la de la mayoría de los textos provinciales o estatales que después de 1808 fueron sancionados por los pueblos en todo el continente americano, la lectura del *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba* del año 1821, ha sido soslayada o distorsionada. Condicionados por la perspectiva nacionalista, historiadores y constitucionalistas construyeron sus relatos a partir de dos grandes estrategias que consistieron, o bien, en eludir los diferentes documentos provinciales, o bien, en hacer una lectura apologética de ellos, distorsionada por los lastres interpretativos que provoca la mediación de una historiografía anacrónica⁵. Frente a ello, se propone la lectura perspicaz e ingenua, pero con la ingenuidad con la que pudieron leerlos sus contemporáneos⁶. Dejando para más adelante la reflexión acerca de qué fue de la vida del texto cordobés, este capítulo está dedicado al análisis de sus disposiciones a partir de aquellas premisas metodológicas apuntadas.

1. 1. El texto del Reglamento

Antes de comenzar el análisis textual del documento constitucional cordobés, es preciso identificar el propio texto, es decir, qué conjunto de formulaciones normativas serán objeto de atención: la historia del texto⁷. Esta afirmación puede parecer –y con algo de razón– banal, sin embargo no lo es, dado que el problema viene de la mano de aquello que ya se dijo acerca de la publicación del texto de 1821. Como el cuerpo textual sancionado por la Asamblea Constituyente no se incluyó en ningún diario o boletín oficial fácilmente reproducible, la única alternativa para el investigador consiste en acudir al archivo provincial en busca del ejemplar firmado por los representantes; sin embargo, esa copia original ha desaparecido de los archivos cordobeses. Durante muchos años, los investigadores que se acercaron al Reglamento Provisorio con fines analíticos utilizaron el texto incorporado en una publicación oficial del año 1870: la *Compilación de leyes, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter*

⁵ CLAVERO, B. (2012b) “Gracia y derecho. Entre localización, recepción y globalización (lectura coral de las vísperas constitucionales de António Hespanha)”, en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Nro. XLI, pp. 675-763.

⁶ Sobre la noción de *lectura perspicaz* de las fuentes, véase HESPANHA, A. (2002) Ob. cit., p. 41. Por su parte, Bartolomé Clavero trae un buen ejemplo de la única ingenuidad posible en la lectura de los textos jurídicos. Leyendo una disposición del *Código Negro* de 1789 sobre el trato debido entre esclavos y esclavistas reflexiona: “Eufemismo sin más puede parecernos hoy esta referencia a patronos y capataces esclavistas como *padres de familia* para el esclavo o la esclava, mas entonces no lo resultaba en absoluto. Aquello no era mera retórica ni simple cháchara. Tampoco, por supuesto, se estaba describiendo una práctica, lo que es otro asunto. Estaban reiterándose unos principios cuya función no se reducía a la de prestar legitimación, fuerte o débil que resultase. Entendamos el papel de aquél derecho cuando venía a ponerse por escrito. No leamos aquellas *leyes* ingenuamente o hagámoslo con la ingenuidad de entonces. Registraban normas que no dependían de la textualización. Su misma fuerza derivaba de otras instancias”, CLAVERO, B. (2006) “Bioko, 1837-1876: Constitucionalismo de Europa en África, derecho internacional consuetudinario del trabajo mediante”, en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Nro. XXXV, pp. 429-556.

⁷ Sobre la importancia de la historia de los textos para la rama de la historia que se ocupa del derecho, véase HESPANHA, A. (1990) “Una historia de textos”, en TOMÁS Y VALIENTE, F. y OTROS, *Sexo barroco y otras transgresiones premodernas*, Alianza Universidad, Madrid, pp. 187-196.

público dictadas en la Provincia de Córdoba desde 1810 a 1870 que también tiene, a su vez, su propia historia. En esta obra, ya se daba cuenta del mal estado de conservación de los papeles públicos en Córdoba desde 1810 en adelante⁸.

La referida compilación de 1870 puede ser vista como una respuesta local al proceso de codificación nacional, en defensa de gran parte del orden jurídico preconstitucional cordobés. El día 27 de septiembre de 1869 la Honorable Asamblea Provincial sancionó una ley que ordenaba realizar una “[Art. 1] *Compilación oficial de todas las Leyes, Acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia, Ordenanzas Municipales y demás Decretos y Resoluciones generales de los poderes públicos de la Provincia... desde el año mil ochocientos diez hasta la fecha*”; a tales efectos se mandaba a designar un comisionado especial por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia para que confeccionara el trabajo [Art. 2] bajo la inmediata inspección del Gobierno; finalmente, la impresión y publicación de dicha compilación se haría “*previo un decreto declarativo de la autenticidad de los documentos* [Art. 3]”⁹. Puesta en su contexto, la iniciativa podría ser interpretada como una defensa del derecho local frente al proyecto de unificación legislativa nacional, asumiendo gran parte del orden jurídico preconstitucional cordobés.

El resultado del trabajo encomendado a los señores Sebastián Samper y Saturnino Funes, previo decreto teniendo por auténticos los documentos allí recopilados, fue publicado en 1870 por la Imprenta del Estado como “*Compilación de leyes, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter público dictadas en la Provincia de Córdoba desde 1810 a 1870*”¹⁰. En ella se incluyó el texto del “Reglamento provisorio de la Provincia para el régimen de las Autoridades de ella expedido el 30 de enero de 1821”¹¹. La versión del Reglamento Provisorio utilizada por

⁸ En la nota de elevación del primer gran trabajo de compilación de la legislación de la Provincia llevado a cabo por una comisión especial nombrada al efecto, los encargados del trabajo reconocen que “si en los primeros años de 1810 adelante, se nota alguna deficiencia en la compilación practicada, es debida, á nuestro juicio, al completo abandono en que han estado anteriormente los archivos públicos, de donde han desaparecido muchísimos documentos de importancia que hoy no es posible encontrar ni aun en poder de particulares; aunque por otra parte, es natural creer, que esa misma deficiencia debe provenir también de los constantes y repetidos trastornos que agitaron al país y no dieron tiempo á los Gobiernos de esa época para dotar á la Provincia con disposiciones de un interés permanente...”. *Compilación de leyes, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter público dictadas en la Provincia de Córdoba desde 1810 a 1870*, Tomo I, Imprenta del Estado, Córdoba, 1870, pp. 4-5.

⁹ Ídem, p. 3.

¹⁰ Decreto de 4 de julio de 1870: “*El Poder Ejecutivo de la Provincia. Estando ya terminada y recibida por el Gobierno de mano de los comisionados nombrados al efecto, la Compilación Oficial de los documentos de que habla la ley de Septiembre 27 de 1869, y hallándose constatada la autenticidad de ellos. Acuerda y decreta: Art. 1º. Ténganse por auténticos los documentos ya citados y hágase por la Imprenta del Estado, una edición de ellos Oficial en número de quinientos ejemplares, debiendo encabezarse esta edición con el presente Decreto y la Ley de 27 de Septiembre de 1869*”. Ídem, p. 5.

¹¹ Ídem, pp. 465-487. Dicha inclusión del Reglamento Provisorio de 1821 en la compilación –junto a otros textos constitucionales que posteriormente se habían sancionado como el Código Constitucional Provisorio del año 1847– es ilustrativa de toda una concepción acumulativa del ordenamiento jurídico precontemporáneo: “En el orden tradicional viejas normas y nuevas leyes formaban un cuerpo diacrónico, en el que cada ley se añadía a las anteriores, sobre las que como posterior en principio y sin eliminarlas prevalecía, como último eslabón en la cadena de la tradición”, GARRIGA, C. (2012) “Legislación y códigos”,

los compiladores fue la publicada oficialmente por la Imprenta de la Universidad en diciembre del año 1832. Unas décadas más tarde, apenas comenzado el siglo XX, otra publicación oficial reunió todas las “*Constituciones de la Provincia de Córdoba desde 1821 hasta 1900*” y como era de esperar, también allí se recogió una copia del primer documento constitucional de la Provincia, donde volvía a reproducirse el texto incluido en la *Compilación* oficial de 1870, por lo tanto, el texto del Reglamento publicado en 1832¹².

Toda esta historia de textos, sobre publicaciones oficiales y versiones auténticas de la primera Constitución de la Provincia tiene una importancia fundamental para la fijación del texto sobre el que se realiza el análisis de las formulaciones normativas en ella contenidas. La razón de dicha trascendencia es que la versión de 1832 utilizada en ambos casos incluía, como se tendrá oportunidad de demostrar más adelante, las muchas y variadas reformas que el texto original sancionado por la Asamblea había ido sufriendo desde su promulgación en 1821 hasta la fecha en que esa primera publicación oficial tuvo lugar.

En la década del treinta del siglo pasado, con apenas un año de diferencia entre una y otra, aparecieron dos obras que cambiaron definitivamente la historia de los orígenes constitucionales de la Provincia de Córdoba. En 1931 SILVA publicó un artículo en la Revista de la Universidad de Córdoba llamado “Federalismo del Norte y del Centro en 1820”, y al año siguiente, CELESIA hizo lo propio con sus tres volúmenes de “Federalismo Argentino. Apuntes históricos: 1815-1821, Córdoba”¹³. Tanto en uno como en otro trabajo se incorporó por primera vez una copia de todos los artículos del Reglamento Provisorio cordobés tomada, no ya de la publicación de 1832 como había sido usual en las ediciones anteriores, sino del ejemplar que oficialmente el Gobierno de la Provincia de Córdoba había enviado a su representante en Buenos Aires ante el Congreso General Constituyente de 1824-1827, el Deán Gregorio Funes¹⁴. Salvo excepciones, a partir de entonces todas las ediciones posteriores y los trabajos de investigación que se han realizado sobre el documento constitucional utilizan como

en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coord.) *Manual de Historia del Derecho*, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 407-449, p. 426.

¹² *Constituciones de la Provincia de Córdoba desde 1821 hasta 1900*, La Moderna, Córdoba, 1901.

¹³ SILVA, F. (1931a) “Federalismo del Norte y del Centro en 1820”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 18, Nros. 5-6, julio-agosto, pp. 135-295; CELESIA, E. (1932) *Federalismo Argentino. Apuntes Históricos: 1815-1821, Córdoba*, 3 Vol., Lib. Cervantes de Julio Suárez, Buenos Aires. La versión que este autor incorpora del Reglamento Provisorio de la Provincia de Córdoba se encuentra en el Tomo III de su obra, pp. 353-412.

¹⁴ Un artículo de las instrucciones votadas por la Sala para los Diputados cordobeses ante el Congreso General establecía explícitamente el envío de una copia del Reglamento a cada uno de ellos, Art. 11 de las Instrucciones, AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 10 de septiembre de 1824*, p. 250. En cumplimiento de esa orden, se envió un ejemplar del Reglamento y días más tarde, como ya se mencionó, Funes acusó recibo, cfr. SILVA, F. (1931a) Ob. cit., p. 218.

versión auténtica del Reglamento Constitucional de Córdoba la ofrecida por los autores citados¹⁵.

En el año 1950 el jurista cordobés CARLOS MELO publicó un cuidado trabajo titulado *Constituciones de la Provincia de Córdoba*. Uno de los objetos principales de la obra consistió en cotejar las versiones del Reglamento impresas en el año 1832 con la incorporada en la obra de CELESIA, comparando a su vez ambas transcripciones con las reformas al texto constitucional que se encuentran en las actas de las sesiones de la Sala de Representantes de la Provincia de Córdoba entre los años 1821 y 1847. Esta obra vino a reforzar la verosimilitud de la versión publicada en el Tomo III de *Federalismo Argentino*¹⁶.

Otra cuestión ligada con la determinación del texto auténtico del Reglamento Constitucional cordobés tiene que ver con el título con que denominaron originalmente dicho documento. Las distintas versiones que han circulado de esta primera Constitución están encabezadas, correlativamente, por diferentes encabezados. Las publicaciones oficiales de 1832, 1870 y 1901 hablan del “*Reglamento Provisorio de la Provincia para el régimen de las Autoridades de ella espedido el 30 de Enero de 1821*”, coincidencia lógica si se recuerda que en realidad las dos segundas no hacen más que reproducir la primera. Por otra parte, en el ejemplar enviado al diputado Deán Gregorio Funes en 1824, texto a partir del cual se ha reconstruido la versión más verosímil del documento sancionado por los constituyentes, se dice “*Reglamento provisorio para el régimen y administración de la Provincia de Córdoba, año 1821*”, a lo que se agrega inmediatamente como subtítulo “*Sistema Presupuesto de una República Federada*”¹⁷. Más allá de las razones anteriormente expuestas según las cuales esta última versión del

¹⁵ En una vasta obra que recoge una gran cantidad de documentos constitucionales rioplatenses de carácter provincial y “nacional” hasta 1860, SAN MARTINO DE DROMI, incorpora una copia del texto cordobés tomado de la publicación oficial de 1832: “*Reglamento Provisorio de la Provincia de Córdoba para el régimen de las autoridades de ella*, espedido el 30 de Enero de 1821, Córdoba, Imprenta de la Universidad, 1832”, SAN MARTINO DE DROMI, M. (1994) *Documentos constitucionales argentinos*, Ciudad Argentina, Buenos Aires, pp. 701-735. Algunos autores utilizan esta versión, como es el caso, por ejemplo, de VERDO, G. (2006a) *L'indépendance argentine entre cités et nation (1808-1821)*, Publications de la Sorbonne, París, p. 393.

¹⁶ Allí hace referencia a los textos utilizados como fuente para la reconstrucción de las disposiciones del Reglamento de 1821 y sus reformas: “Los textos del Reglamento Provisorio del 30 de enero de 1821 y sus reformas proceden de la valiosa obra del Dr. Ernesto H. Celesia «Federalismo Argentino – Córdoba», completados con los de la «Compilación de Leyes, Decretos, Acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia», del «Archivo de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba» y de las «Constituciones de la Provincia de Córdoba desde 1821 hasta 1900», publicación oficial hecha en Córdoba en 1901”, MELO, C. (1950) *Constituciones de la Provincia de Córdoba*, Imprenta de la Universidad, Córdoba, p. V.

¹⁷ Según CELESIA, “sería necesario encontrar los originales del proyecto para saber cómo la titularon sus autores, aunque es fácil, dados los antecedentes, deducir que el encabezamiento del testimonio enviado al Deán Funes, entonces Diputado de Córdoba ante el Congreso Nacional, el 20 de diciembre de 1824, es el verdadero”, CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, pp. 28-29. Cabe destacar que el envío se produjo tan sólo 10 días antes de la reforma a la Constitución provocada por la ley de extinción de los cabildos que derogó los capítulos del Reglamento Provisorio que a ellos se referían. Las reformas y otras reescrituras del texto constitucional de 1821 serán analizadas *infra* en el Cap. IV de este trabajo “Reescrituras de la Constitución ¿Renovación constitucional?”.

texto constitucional cordobés es la más apropiada como objeto de análisis textual, por aquello de no incorporar las reformas al documento ocurridas en el intervalo 1821-1832, también resulta útil la fijación del encabezado que en ella se efectúa. Considerando conjuntamente los dos extremos que lo componen, título y subtítulo, revela su naturaleza de Constitución bidimensional, pensada para un Estado Provincial que no renunciaba a incorporarse a un todo mayor a partir de una determinada opción política sobre la forma en que la Provincia –o las provincias– y ese otro sujeto político “general” debían distribuir sus atribuciones.

1. 1. 1. La estructura de la Constitución

El *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba, año 1821, Sistema Presupuesto de una República Federada*, como la mayoría de las Constituciones escritas desde 1789 en adelante, por un lado, recogía preceptos indicativos de derechos cuya garantía se declamaba mediante el diseño de algunos mecanismos institucionales o la formulación de ciertos principios generales con tal fin; por otro, incorporaba disposiciones que enumeraban las atribuciones y campo de actuación de diferentes órganos de la Provincia a los que se denominaba de una manera explícita como Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial¹⁸. Este diseño a grandes rasgos bipartito del texto –pese a la existencia de una serie de disposiciones periféricas a aquellos dos bloques *materialmente constitucionales*¹⁹–, sería suficiente para sortear el rasero eminentemente formal contenido en el célebre artículo dieciséis de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789²⁰. Sin embargo, a poco andar los artículos del Reglamento Provisorio y hacer una lectura completa y coherente del texto, es difícil suscribir el ingreso de Córdoba a un mundo político-constitucional prefigurado por los derechos individuales²¹.

¹⁸ La adopción del esquema trino de poderes será oportunamente analizada –y problematizada– *infra* en el epígrafe: “II. 4. Los poderes por su nombre”.

¹⁹ Para un análisis de la noción de normas *materialmente constitucionales* puede consultarse, entre otros, GUASTINI, R. (2001) *Estudios de Teoría Constitucional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, p. 33. Edición en formato PDF disponible online en la página web <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=22>

²⁰ “Art. 16. *Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution*”, *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789*. Disponible en la página web oficial del gobierno francés <http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>

²¹ Respecto de la tradicional distinción entre parte orgánica y parte dogmática de la Constitución, es interesante la siguiente reflexión del jurista CRUZ VILLALÓN: “Las «Declaraciones», en efecto, no son sólo «declaraciones de derechos», sino que las mismas incluyen el diseño básico de la estructura del Estado. A la vista de ello, y en particular del caso francés, hace algunos años me referí a la «Declaración de Derechos» como una «Constitución de urgencia». Hoy prefiero utilizar un verbo al que ha recurrido nuestro Tribunal Constitucional y decir que la «Declaración de Derechos» prefigura la Constitución en su conjunto. En efecto, de los dieciséis artículos de los que consta la Declaración de Virginia, ocho están dedicados al diseño de la estructura política del Estado y sólo los restantes a los derechos individuales. Algo muy semejante ocurre con la Declaración francesa. Este dato, que nunca se ha destacado lo suficiente, pone de manifiesto algo a mi entender fundamental: que tanto los derechos del hombre en sociedad como la

La Constitución cordobesa estaba estructurada en ocho secciones, treinta y un capítulos y doscientos ochenta artículos²². Algunos autores al momento de hacer un plano de la estructura del Reglamento han llegado a poner en duda que la división del documento en secciones fuera una opción de los primeros constituyentes. Así, por ejemplo, CELESIA ha dicho que “La división en secciones... no debe ser del texto original, pues no responde en la forma que aparece hecha al propósito que deben cumplir, esto es, la separación de materias [...] no obedece la división en secciones, a ningún orden determinado... en el estudio y discusión del Reglamento, como resulta de las actas de la Asamblea, fue tratado por capítulos y en ningún momento se mencionan las secciones”²³. Sin embargo, del hecho de que la división en secciones no respondiera a un criterio taxonómico fácilmente inducible –temático, cuantitativo, etc.–, como aquella clasificación de los animales que Borges imagina en la enciclopedia china *Emporio celestial de conocimientos benévolos*, no se sigue necesariamente que la división no haya sido incluida en el texto original²⁴.

Pese a la razonabilidad de los argumentos utilizados para atacar la presencia de secciones en el documento original, hay una realidad incontrastable que no surge ya de la simple lectura del texto “auténtico”, sino de la actividad de los representantes en el Congreso Provincial. En las múltiples menciones a la Constitución cordobesa que se pueden hallar en las actas de las sesiones de la Sala de Representantes de la Provincia, es usual que la referencia respete una estructura del tipo “sección *n*, capítulo *n*, artículo *n*”; lo mismo ocurre en otras normas sancionadas en los años siguientes como el *Reglamento*

estructura política de la sociedad son parte, expresión y consecuencia del pacto social, de tal modo que ambos elementos de la Declaración se vinculan por igual a los «derechos naturales». A partir de la Declaración no cabe hacer diferencias cualitativas entre «parte dogmática» y «parte orgánica», para entendernos. Dicho de otro modo: los derechos del hombre en sociedad no son más «iusnaturales» que el Estado”, CRUZ VILLALÓN, P. (1989) “Formación y evolución de los derechos fundamentales”, en *Revista Española de Derecho Constitucional* Año 9. Nro. 25.

Una interesante construcción modélica de las características principales de los constitucionalismos francés y norteamericano es la que enseña FIORAVANTI, M. (1996) *Los Derechos Fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones*, Trotta, Madrid, pp. 56-75. Para un análisis menos abstracto y más consciente del modo en que los acontecimientos fueron moldeando las distintas opciones constitucionales, véase LORENTE, M. (2012b) “Constitucionalismo Antiguo y Moderno”, en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coords.) Ob. cit., pp. 289-329.

²² El conteo de doscientos ochenta artículos que refiero difiere de otros ya propuestos por algunos autores como CIMA, A. (1960) “La Constitución de la República Federal de Córdoba”, en *Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, Año XXIV, N° 1-2, Córdoba, p. 79. La razón de este desfasaje puede tener causa en que el Capítulo XXV del Reglamento que regulaba las atribuciones de los cabildos contiene un total de catorce puntos que el autor mencionado califica como incisos y no incorpora a su numeración.

²³ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, pp. 30-31.

²⁴ “Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula *Emporio celestial de conocimientos benévolos*. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas”, BORGES, J. L. (1952) “El idioma analítico de John Wilkins”, en *Otras Inquisiciones*, Sur, Buenos Aires.

para la administración de justicia en la campaña de Córdoba del año 1823²⁵. También el Gobernador Bustos cuando se dirigió a la Honorable Sala de Representantes para comunicar la conclusión de su primer mandato como jefe de la Provincia dijo: “*Hoy se cumple el término designado por el Reglamento de la Provincia, Sección 5ª, Cap. 14, Art. 17...*”²⁶. Estas afirmaciones aportan a la cuestión un fuerte indicio que apoya la tesis sobre la originalidad de las secciones.

Cada sección, innominada, comprendía un número desigual de capítulos nominados dentro de los cuales la numeración de los artículos correspondientes al mismo comenzaba y concluía en él, es decir, la numeración de los doscientos ochenta artículos no era progresiva. La primera de las secciones incluía a los capítulos sobre “La Provincia de Córdoba y sus Derechos”, los “Derechos que competen al hombre en sociedad” y los “Deberes del hombre en sociedad”. La segunda trataba sobre los “Deberes del cuerpo Social” y “De la Religión”. La sección tercera reunía los capítulos “De la ciudadanía” y “Prerrogativas del ciudadano”. La cuarta se refería tanto a “Los modos de perderse y suspenderse la Ciudadanía”, como al sistema electoral previsto por la Constitución para la designación de los Representantes: “De la elección de Representantes para el Congreso de la Provincia - Asambleas Primarias” y “De la Asamblea Electoral”. La quinta de las secciones sólo trataba acerca “De los Representantes”. La sexta, donde se mencionaban los diferentes poderes de la República, contenía los capítulos “Del Poder Legislativo” y “Atribuciones del Congreso”; “Del Poder Ejecutivo”, “Atribuciones del Poder Ejecutivo” y “Límites del Poder Ejecutivo”; finalmente, un capítulo “Del Poder Judicial”. La sección séptima incorporaba disposiciones “De los Tribunales de Justicia”, “De la Administración de Justicia” en general y “De la Administración de Justicia en lo Civil”. La última y octava sección era la más extensa y variada, con capítulos acerca “De la Administración de Justicia en lo Criminal”, un capítulo innominado sobre la competencia del “Poder Judicial de los Estados”, “Declaración de Derechos”, “Elecciones de los Cabildos”, otro capítulo sin nombre sobre las competencias de los Ayuntamientos, “Del Ministerio de Hacienda”, “Del Juzgado de Comercio”, “De las Milicias Nacionales” y “De las Milicias Cívicas”, un tercer capítulo sin nombre sobre los fines del Estado, y finalmente, un capítulo último que mandaba a formar una Comisión encargada de velar sobre la observancia del Reglamento. En un apartado posterior, inmediatamente después del

²⁵ A título meramente ilustrativo basta con solo ejemplo –aunque hay muchos más– ya que, de no existir la división en secciones mencionada, jamás podría la Sala referirse a ella, ARCHIVO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (1912) Tomo I, La Minerva, Córdoba, *Acta de la sesión del 25 de agosto de 1821*, p. 165: “... con presencia de las actas de la Asamblea Electoral y facultad que atribuye el art. 12 cap. 1º sesión (sic) 4ª del Reglamento Provisorio, fué ratificada y aprobada en bastante forma la elección...”. El *Reglamento para la Administración de Justicia en la Campaña de Córdoba de 1823* puede consultarse en *Compilación de leyes...* cit., pp. 516-523

²⁶ El oficio de fecha 21 de febrero de 1824 puede consultarse en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 181.

capítulo último y antes de la lista de representantes que participaron en la sanción del texto, se establecía el tratamiento que recibirían las distintas autoridades de la Provincia²⁷.

Un simple vistazo a este listado genera varios interrogantes acerca del criterio ordenador del lenguaje de los constituyentes. Así, por ejemplo, para un observador actual podría resultar extraño que un capítulo como el octavo que regulaba aspectos relacionados con la ciudadanía, los modos en que ésta podía perderse o suspenderse, no se halle en la sección que, exclusivamente, contenía dos capítulos sobre la ciudadanía y las prerrogativas del ciudadano, y en cambio se incorporara en una sección diferente junto a otros capítulos dedicados a los mecanismos de selección de los representantes; extrañeza que, sin embargo, se disipa al tener en cuenta que el sistema electoral diseñado por el Reglamento estaba construido sobre una específica noción de ciudadano. Del mismo modo podría objetarse la conveniencia de haber incluido un capítulo sobre declaración de derechos en la última sección del texto junto a cuestiones tan dispares como las atribuciones de los ayuntamientos o la organización del ministerio de hacienda, en lugar de haberlo añadido a la sección primera en la que se declaraban los derechos y deberes del hombre en sociedad²⁸. Más allá de observaciones de este tipo, de técnica legislativa aunque indicadoras de concepciones culturales, así estaba configurada la estructura externa, el esqueleto, del Reglamento Constitucional de la Provincia de Córdoba del año 1821. Un documento sancionado por y para un organismo social corporativo, una *república* como la cordobesa de aquella época. La localización de los cuatro primeros capítulos con explícitas referencias al “Cuerpo Social” en ese lugar no era banal; en ese sentido, no deja de ser significativo que la primera expresión de derechos en sentido subjetivo estuviera vinculada a la Provincia.

I. 1. 2. Dos dimensiones: Provincial y Federal

Desde un punto de vista diferente, hay otro criterio que permitiría hablar de dos dimensiones distintas dentro del texto del Reglamento Provisorio. Este criterio es el que define la existencia de dos esferas de gobierno. Del mismo modo que en el plano de la acción política Bustos buscaba organizar su administración interior y, a la vez, reunir un Congreso General de las Provincias Unidas para dar al conjunto de estados una forma más estable y solidaria de gobierno, en el plano constitucional el Reglamento que se sancionó el 30 de enero de 1821 recogía preceptos destinados a ordenar uno y otro ámbito. Por un lado, el del conjunto de los estados sobre la base de una “*confederación*” y, por otro lado, el de la Provincia “*libre e independiente*” en la que “*reside*

²⁷ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba, año 1821, Sistema Presupuesto de una República Federada, TRATAMIENTOS.

²⁸ CIMA hace hincapié en esta distribución caótica de los distintos capítulos del Reglamento Provisorio y ensaya algunas alternativas posibles diciendo cuál podría haber sido una mejor ubicación de algunos de ellos, sin embargo reconoce que “La crítica a la Técnica de los redactores no amengua el valor de la obra...”, CIMA, A. (1960) Ob. cit., pp. 77-79.

esencialmente... la Soberanía”²⁹. La denominación completa del documento constitucional representó una verdadera toma de posición que anunció los dos niveles de organización del poder que estaban presentes en el proyecto político de los constituyentes cordobeses: *Reglamento Provisorio para el régimen y administración de la Provincia de Córdoba* [primer nivel] *Sistema presupuesto el de una república federada* [segundo nivel]³⁰.

En la historiografía política argentina hoy dominante ha cobrado fuerza una corriente que, resignificando algunos términos del lenguaje político de acuerdo al sentido que los mismos habrían tenido en su contexto histórico, ha postulado el modelo de la confederación como el más propicio para entender el complejo período rioplatense de la primera mitad del siglo XIX y la auténtica naturaleza de los sujetos políticos que lo protagonizaron: los estados provinciales³¹. Sin entrar a discutir por el momento esta tesis, es pertinente indagar qué tipo de estructura sugiere la Constitución cordobesa, sin pretender acomodarla a uno –confederación– u otro –federación– modelo teórico preconcebido. La opción por uno u otro a la hora de realizar la calificación dejaría de lado la singularidad del diseño cordobés propuesto, sin que la actitud de resaltar cada una de sus especificidades sea entendida como el alegato a favor de un parroquialismo preferiblemente evitable. La redacción de unas determinadas formulaciones normativas en un momento concreto, distribuyendo facultades entre distintas esferas de gobierno – creadas y por crear–, y su inclusión en un texto constitucional como el Reglamento Provisorio de 1821, autoriza sólo a imaginar el tipo de proyecto político esbozado por los constituyentes cordobeses, un elemento más para la tarea de afrontar el estudio de un período rioplatense cuya naturaleza política resulta de difícil definición. El análisis

²⁹ Según el artículo 2º del Capítulo I del Reglamento Provisorio “*La Provincia de Córdoba es libre, e independiente. Reside esencialmente en ella la Soberanía y le compete el derecho de establecer sus leyes fundamentales por constituciones fijas; y entre tanto por Reglamentos provisorios en cuanto no perjudique los derechos particulares de las demás Provincias*”. El Estatuto Provisorio Constitucional entrerriano del año 1822 también reconocía a la provincia como “*parte integrante de las provincias unidas del río de la plata [formando] con todas una sola nación*” (Secc. 1, Art. 2); la Constitución para la Provincia de Tucumán de 1820 declaraba a la Provincia “*libre e independiente, unida sí con las demás que componen la Nación Americana del Sud, y entretanto el Congreso general de ella determine la forma de gobierno establece por medio de sus Diputados para su interior administrativo la Constitución*” (Preámbulo); el Estatuto Provisorio Constitucional correntino de 1821, al establecer las atribuciones del Poder Legislativo provincial, dejaba fuera de su alcance “*todo aquello que haya, ó pueda corresponder al Cuerpo ó Estado general de la Federación nacional*” (Secc. Tercera, Art. 3).

³⁰ Este es el encabezado de la versión del Reglamento que encontró CELESIA (1932) Ob. cit., Tomo III, entre los papeles de Ambrosio Funes y que ha sido recogida y avalada posteriormente por otros investigadores –como por ejemplo, MELO, C. (1950) Ob. cit.– ante la ausencia del documento original y la falta de publicaciones impresas hasta 1832.

³¹ Reflexionando explícitamente sobre esta cuestión, CHIARAMONTE reconoce la ambigüedad del término “federación” en ese contexto: CHIARAMONTE, J. (1995a) “¿Provincias o Estados?: Los orígenes del federalismo rioplatense”, en GUERRA, F. (dir.) *Revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español*, Editorial Complutense, Madrid; también (1993) “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en CARMAGNANI, M. (comp.), *Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 81-132. El mismo autor desarrolla su tesis con mayor detalle en (1997) *Ciudades, provincias, estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846)*, Emecé, Buenos Aires.

debería transitar equilibradamente entre posiciones extremas como las que propugnan el paroxismo de afirmar que en aquella Córdoba de la primera mitad del XIX estaba la solución definitiva que la Argentina acabaría adoptando a partir de 1853, por un lado, y la completa subestimación de la ingeniería constitucional cordobesa sancionada en 1821, por otro.

Sin duda, los cordobeses que redactaron y discutieron la primera Constitución de la Provincia compartían con otros actores hispanoamericanos un imaginario jurídico-político tradicional, propio de la antigua cultura de la Monarquía Católica. No obstante, a ello hay que añadir que tuvieron en su escritorio la “solución norteamericana”, en la medida en que pudieron leer y utilizar selectivamente los textos de la Constitución de Filadelfia del año 1787, de algunos estados de aquella unión y otros ejemplos más cercanos influidos por aquellos documentos³². Calificar sin más su predicado “federalismo” como “confederacionismo” en función de las posibilidades que brindaba el lenguaje de la teoría política del momento –un momento que no era ya el de la inexistencia de la solución norteamericana– podría suponer un error de similar naturaleza que el que se pretende evitar al rechazar un “imposible” federalismo rioplatense. El análisis de las disposiciones incluidas en el Reglamento Provisorio, con las precauciones apuntadas, puede ayudar a bosquejar mejor el campo semántico referido con los términos utilizados por sus autores que adscribir un determinado significado *a priori* como consecuencia de la textura que caracterizaba su cultura política. El derrotero seguido por las provincias –o estados provinciales– en los años posteriores, y la definición del proceso que iniciaron algunos de esos estados a partir de la firma del pacto federal en el año 1831 es un objeto de estudio diferente al propuesto en este apartado que focaliza su atención en la práctica política o, si se prefiere, constitucional.

La calificación de los distintos tipos de procesos políticos federales en función de la mayor centralización o descentralización que proyectan, es un punto de partida para el análisis que presupone ciertas premisas que deben ser explicitadas y puntualizadas para evitar errores de interpretación. En este aspecto resulta útil la distinción entre dos

³² Se ha encontrado en el catálogo de obras de la Universidad de aquel momento el texto de THOMAS PAINE, *La independencia de la costa firme justificada...* en su versión de 1811 publicada en Caracas y traducida por el venezolano Manuel García de la Sena, en la que se incorporaban muchas de las constituciones estatales norteamericanas sancionadas durante el período 1776-1780. En un reciente trabajo se revisa la importancia de esta traducción para el constitucionalismo hispanoamericano: ECHEVERRI, A. (2013) “La independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha, en traducción de Manuel García de Sena (1811)”, en *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-independencia-de-la-costa-firme-justificada-por-thomas-pain-e-treinta-anos-ha-en-traduccion-de-manuel-garcia-sena-1811/>; similar esfuerzo había sido realizado a mediados del siglo pasado por GRASES, P. y HARKNESS, A. (1953) *Manuel García de Sena y la Independencia de Hispanoamérica*, Secretaría General de la Décima Conferencia Interamericana, Caracas. Por su parte, José María ROSA reconoce la influencia de este texto en Alberdi y los constituyentes rioplatenses en ROSA, J. (1984) *El fetiche de la Constitución*, Ave Fénix, Buenos Aires.

Además, había muchos ejemplos de textos constitucionales hispanoamericanos previos que hacían opción por una solución política indirectamente influida por la norteamericana como es el caso de las Constituciones venezolanas y neogranadinas de la primera década que siguió a 1810.

modelos de federalismo: por agregación y por desagregación³³. Si se acepta como premisa la existencia de una unidad política, la adopción de criterios de descentralización y atribución de determinadas facultades a espacios de aquella unidad, puede ser considerada como un proceso de federalización por desagregación. Por el contrario, si se acepta como punto de partida la inexistencia de una unidad política y la objetividad de espacios locales soberanos, los acuerdos y pactos tendientes a la construcción de un sujeto político que los agrupe y la distribución de facultades entre dos esferas diferentes de gobierno, sería un proceso político de federalización por agregación. Es precisamente en este exacto sentido que la afirmación, casi obvia, de que el punto de vista del observador condiciona fuertemente la imagen que se hace del objeto observado, cobra relevancia.

Más adelante se analizará cómo ha sido enfocado este proceso y con qué resultados por parte de la historiografía y los constitucionalistas en Argentina. Pese a que el diseño constitucional proyectado contiene una necesaria –aunque implícita– lectura del pasado y una fuerte –y explícita– intención de regular el futuro, de lo que se trata aquí es de figurar el diseño que los constituyentes cordobeses propusieron como alternativa para el plan de organización constitucional: un deber ser plasmado en el texto –horizonte de expectativas–, y no una descripción de un tipo y modo de ser efectivo.

II. CONSTITUCIONALIZAR UNA VIEJA REPÚBLICA “TEXTUALIZANDO” LA TRADICIÓN

El artículo primero de la Constitución de 1821 definía a la Provincia de Córdoba como “*la reunión de todos sus habitantes nacidos o avecindados dentro de los linderos que demarcan actualmente su territorio*”³⁴. A diferencia de otros textos constitucionales de la región, relativamente coetáneos, los constituyentes no incorporaron a la definición ningún dato, siquiera indiciario, que permitiera trazar coordenadas espaciales en un mapa a fin de delimitar una concreta geografía³⁵. Por el contrario, optaron por un criterio que

³³ La noción sigue el camino inaugurado por FRIEDRICH, C. (1968) *The Trends of Federalism in Theory and Practice*, The Pall Hall Press, Londres.

³⁴ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. PRIMERA, CAP. I, ART. 1º.

³⁵ Un exhaustivo detalle del espacio geográfico que comprende la Provincia, por ejemplo, en la Constitución de Cartagena de Indias del año 1812 que en su artículo 5 del Título II establece: “*Los límites de su territorio, cuya integridad, garantida por el artículo 6 del Acta federal, lo es también por esta Constitución, son a saber: el mar Atlántico por el norte y poniente; por el oriente, el río Magdalena desde sus bocas hasta su confluencia con el de San Bartolomé, incluidas la isla de Morales formadas por aquél, y la de Quimbay enfrente de la Villa de Mompo; quedando para el examen y declaración del Congreso del Reino, la propiedad de otras islas formadas por el mismo Magdalena, y adjudicadas exclusivamente a una de las provincias colindantes por leyes hechas sin pleno conocimiento de causa, sin audiencia de partes, y tal vez contra las indicaciones de la naturaleza. Por el mediodía, el río dicho de San Bartolomé hasta sus cabeceras, la cresta de las montañas de Guamocó, una línea tirada desde ésta por los siete grados treinta minutos norte a las cabeceras del río Sucio, y este mismo río hasta su entrada en el Atrato; y por el poniente y mediodía el dicho Atrato hasta su salida al mar en el golfo del Darién, y el golfo mismo, comprendiéndose la isla de la Tortuguilla, la nombrada Fuerte, las de San Bernardo y del Rosario, situadas todas en las inmediaciones de la costa occidental de este Estado; quedando así separado por el río Magdalena de las provincias de Santa María, Pamplona y Socorro, que están al oriente; por el de San Bartolomé, montañas de Guamocó y línea indicada, de la de Antioquia que está al mediodía; por el río*”

podría calificarse aquí como “subjetivo” en la medida en que giró alrededor de la comunidad de personas que componían la entidad política, el *populus* que formaba el cuerpo político. Tal criterio remite, en algún sentido, a los primeros artículos de la Constitución gaditana de 1812 que definían a la nación española como la reunión de los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, una definición que, sin embargo, no conducía a una concepción de la comunidad política como mera asociación de individuos sin mayores calificativos³⁶. Agudamente, VERDO ha propuesto esta comparación entre los dos primeros artículos de la Constitución de Córdoba y los que estaban en la norma constitucional gaditana de 1812; en ambos textos se trataría de un intento por definir el espacio de su soberanía: “*les deux premier articles de la Constitution de Córdoba retrouvent ainsi des accents proches de la Constitution de Cadix pour définir son espace de souveraineté, qu'en toute rigueur il faudrait qualifier de «nation»*”³⁷. Sin embargo, pese a la posible reminiscencia gaditana, en Córdoba había conciencia de la diferencia entre un nivel provincial y otro nacional, por ello, no se habló ni se pretendió hablar de “Nación” cordobesa, término complejo que carecía aún del significado político que lo caracterizaría desde la difusión en el Río de la Plata del romanticismo y del principio de nacionalidad al promediar la década de 1830³⁸.

El Reglamento Provisorio de 1821 tampoco contenía disposiciones referidas a la organización administrativa del territorio, con lo cual habría que aceptar que la estructura de la Provincia continuaba diseñada en los mismos términos en los que estaba establecida

Sucio, de la del Chocó, que está también por el sur; y por el Atrato, de la del Darién, que está al poniente”, disponible en <http://modern-constitutions.de/CO-CA-1812-06-14-es-e.html>.

En el espacio rioplatense, por ejemplo, el Estatuto Provisorio Constitucional de Entre Ríos del año 1822 establecía que “*El territorio del estado será por ahora todo lo comprendido entre los dos grandes ríos Paraná y Uruguay, tirando por el norte hasta el arroyo Guaiquiraró, sobre la costa oriental del primero; y de allí cortando para el nordeste, hasta el Mocoretá, sobre la costa occidental del Uruguay; salvo el derecho exclusivo del congreso general para ampliar, ó restringir estos límites, según más conveniente parezca*” (Secc. 1, Art. 3). La Constitución de Tucumán del año 1820 si bien no refería explícitamente los límites del territorio provincial, sí establecía como atribución del Congreso “*Demarcar el territorio de la Provincia, y fijar los límites de sus pueblos...*” (Secc. Segunda, Cap. Tercero, Art. 1, Inc. 16).

³⁶ En los primeros artículos de la Constitución de Cádiz del año 1812 se define a la nación española como “*la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios*” (Artículo 1º), que se complementa con el texto del artículo 5º “*Son españoles. Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas...*”.

³⁷ VERDO, G. (2006a) Ob. cit., p. 393.

³⁸ Sobre la irrupción de nuevas corrientes de pensamiento en el Río de la Plata véase TAU ANZOÁTEGUI, V. (1977) *Las Ideas Jurídicas en Argentina (Siglos XIX - XX)*, Editorial Perrot, Buenos Aires; TERÁN, O. (2008) *Historia de las ideas en la Argentina: diez lecciones iniciales, 1810-1980*, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires. En particular, para el proceso de construcción de la “Nación”, son útiles los trabajos de GARAVAGLIA, J. (2007) *Construir el Estado, Inventar la Nación: el Río de La Plata, Siglos XVIII- XIX*, Prometeo Libros, Buenos Aires; y WASSERMAN, F. (1997) “La generación de 1837 y el proceso de construcción de la identidad nacional argentina”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, Tercera serie, Nro. 15, Buenos Aires. Sobre la resignificación del término “Nación” y otros políticos en el período, GOLDMAN, N. (ed.) (2008) *Lenguaje y revolución: conceptos políticos clave en el Río de La Plata*, Prometeo Libros, Buenos Aires. Un repaso historiográfico acerca de este concepto político clave, en TÍO VALLEJO, G. (2004) *Tras las huellas de la nación: Los pasos perdidos de la historiografía argentina*, Instituto de Investigaciones Históricas “Dr. Ramón Leoni Pinto”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán.

hasta la sanción del texto constitucional³⁹. A diferencia de otras experiencias constitucionales donde al menos desde el plano discursivo se bosquejó un plan de irrupción en la historia estableciendo, por ejemplo, la división del territorio en “*Departamentos, Cantones y Distritos*” para continuar con el detalle pormenorizado de los pueblos que formaban cada una de esas divisiones administrativas –Constitución de Caracas de 1812⁴⁰–; la ausencia de un pronunciamiento explícito sobre el asunto en el Reglamento cordobés constitucionalizó la tradicional estructura política de ciudad-campaña⁴¹. A ella sólo se añadieron escasas referencias a la circunscripción eclesiástica de los Curatos y la existencia de dos pequeñas villas, del Rosario y de la Concepción, con sus respectivos cabildos⁴².

A lo largo de los capítulos siguientes el Reglamento Provisorio de 1821 se dedicaba a establecer las bases a partir de las cuales se estructuraba la comunidad política cordobesa, qué posición ocupaba la religión en la Provincia, cuáles eran los requisitos para la consideración de ciudadanos de los habitantes de Córdoba, cuál el procedimiento para la realización de elecciones tendientes a la selección de los ciudadanos que ocuparían los diferentes cargos de gobierno de la República, la formulación genérica de todo un catálogo de derechos, deberes y garantías de los habitantes pero también del cuerpo social y, finalmente, reglas sobre la organización de los distintos órganos de gobierno con especial detalle en todo el ámbito vinculado directamente con la administración de justicia.

³⁹ Al año siguiente de la sanción del Reglamento Provisorio cordobés, en 1822, la Provincia de Entre Ríos en su Estatuto Provisorio Constitucional adicionó un apéndice que contenía un “Plan y División de los Departamentos de la Provincia de Entre Ríos”, donde se establecieron los Departamentos principales de *Paraná y Uruguay*, con sus respectivos Departamentos subalternos y las autoridades que residirían en cada uno de ellos.

⁴⁰ Capítulo Segundo, Artículos 2-23. El texto completo de la Constitución está disponible en [http:// modernconstitutions.de/VE-CA-1812-01-31-es-e.html](http://modernconstitutions.de/VE-CA-1812-01-31-es-e.html).

⁴¹ Dicho silencio no necesariamente respondía a que el tema del territorio fuera algo que escapara a la voluntad de los constituyentes, como ha marcado LORENTE, “la «unidad» de cualesquiera territorios no fue considerada en ningún caso como un elemento indisponible... fue justamente la consolidación de los diferentes territorios –esencialmente provinciales– el objetivo principal que pretendieron alcanzar las Cartas constitucionales americanas”, LORENTE, M. (2013) “De las leyes fundamentales de la Monarquía Católica a las constituciones hispánicas, también católicas”, en HÉBRARD, V. y VERDO, G. (eds.) *Las independencias hispanoamericanas: un objeto de historia*, Casa de Velázquez, Madrid. Sobre las transformaciones en el modo en que se percibía el espacio en el Antiguo y Nuevo Régimen, véase HESPANHA, A. (1993c) “El espacio político”, en ídem, *La gracia del derecho: Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 85-121. Varios estudios han abordado la cuestión del territorio en Hispanoamérica luego de las independencias: para el Río de la Plata, VERDO, G. (2006a) Ob. cit.; (2006b) “El dilema constitucional en las Provincias Unidas del Río de la Plata (1810-1819)”, en *Historia Contemporánea*, Nro. 33; para el territorio venezolano puede consultarse HEBRARD, V. (1996) *Le Venezuela indépendant. Une nation par le discours. 1808-1830*, L’Harmattan, Paris; y para el de Ecuador, MORELLI, F. (2005) *Territorio o nación. Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

⁴² *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXIV: el artículo 1º hablaba de la Ciudad de Córdoba y “*Villas de su pertenencia...*”, y más adelante, el artículo 10, dejaba en manos del Congreso Provincial la deliberación sobre la posibilidad de establecer nuevos Ayuntamientos en aquellos lugares donde, por su vecindario y proporciones, se estimara conveniente.

II. 1. Una república católica

Desde hace algún tiempo, la historiografía preocupada por el primer constitucionalismo hispánico viene definiéndolo como “católico”, dada la preponderancia que ocupaba la Religión en las bases de la cultura jurídica y política en la que se desarrollaron los procesos de constitucionalización iniciados en todo el mundo hispano luego de la crisis del año 1808⁴³. Pues bien, en la medida en que el caso cordobés se insertó dentro de tal contexto, es pertinente comenzar el análisis del texto por las disposiciones relativas a la Religión. Y es que del mismo modo que en la Constitución gaditana de 1812 y todas las constituciones hispanoamericanas del período, en el Reglamento Provisorio de 1821 se reconoció a la Religión Católica, Apostólica, Romana, “única verdadera”, como la Religión del Estado provincial⁴⁴. La defensa de la Religión “Santa del Estado”, “su protección, conservación, pureza e inviolabilidad”, se erigía como uno de los “primeros deberes de la representación del Estado, y de todos sus Magistrados”⁴⁵.

⁴³ Para comprender la noción de “constitucionalismo católico” puede consultarse, entre otros, el trabajo de LORENTE, M. (2013) Ob. cit.; CLAVERO, B. (1991) “Vocación católica y advocación siciliana de la constitución española de 1812”, en ROMANO, A. (a cura di.) *Alle origini del costituzionalismo europeo*, Presso l’Accademia, Messina, pp. 11-56; CLAVERO, B. (2012a) “El momento constitucional de una república católica (Cádiz entre Nueva Granada y Nueva Zelanda)”, en *Revista española de Derecho Constitucional*, Nro. 96, pp. 329-344.; CLAVERO, B. (2013) “Cádiz 1812: Antropología e historiografía del individuo como sujeto de constitución”, en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Nro. XLII, pp. 201-279; PORTILLO, J. (1998) *La nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Laboratorio di Storia Costituzionale Antoine Barnave, Manduria; PORTILLO, J. (2007) “De la Monarquía Católica a la Nación de los católicos”, en *Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, Nro. 17, UCM/CEPC/UNED, pp. 17-35; ALONSO, G. (2009) “Ciudadanía católica: identidad, exclusión y conflicto en la experiencia liberal hispana”, en MOLINA, F. (coord.) *Extranjeros en el pasado. Nuevos historiadores de la España contemporánea*, Universidad del País Vasco, Bilbao. La provincia de Córdoba, como república católica, ha sido caracterizada por Valentina AYROLO en su tesis doctoral dirigida por François-Xavier Guerra y Nicole Lemaitre: “Córdoba: une république catholique. Haut Clergé, gouvernement et politique dans la Province de Córdoba. De l’Indépendance à la Confédération 1810-1852”, leída en la Universidad Paris I, Panthéon- Sorbonne, París, en el mes de enero de 2003.

⁴⁴ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEGUNDA, CAP. V, ART. 1º. Desde la norma gaditana de 1812 (Cap. II, Artículo 12º), pasando por las constituciones anteriores y posteriores a ella de los distintos territorios de Nueva España, Centroamérica, Nueva Granada y Venezuela, todos estos textos contienen similar disposición. En el caso del Río de la Plata, los primeros ensayos constitucionales desde 1810 hasta la frustrada Constitución de 1819 también lo establecen en similares términos. Las constituciones provinciales coetáneas a la cordobesa de 1821 son explícitas en su reconocimiento de la Religión Católica como la oficial del estado: Constitución de Tucumán de 1820 (Secc. Primera, Art. Único); Estatuto Provisorio de Santa Fe de 1819 (Secc. I, Art. 1); Reglamento Provisorio Constitucional de Corrientes de 1821 (Secc. Primera, Arts. 1-4).

Un aspecto interesante que también ayuda a entender el proyecto de los constituyentes cordobeses en materia de diseño de esferas de gobierno separadas con atribuciones exclusivas de cada una es el argumento con el cual el representante Francisco Ignacio Bustos salvó su voto sobre este artículo en el debate constituyente fundándose en que fijar la Religión del Estado era una atribución del Congreso General y no de cada uno de los Estados Provinciales, AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 17 de enero de 1821*, p. 85.

⁴⁵ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEGUNDA, CAP. V, ART. 1º. Durante el debate constituyente, el representante clérigo Juan José de Espinosa argumentó que el deber

El texto cordobés fue más allá que otros documentos constitucionales producidos en el mismo tiempo y espacio ya que incorporó dos aspectos que radicalizaron la posición de la Provincia frente a la Religión. En primer lugar, una disposición de fuerte matriz tradicional, que fue atacada por su benevolencia en el debate constituyente, que consagraba la intolerancia religiosa excluyendo del territorio de la Provincia tanto el ejercicio de cualquier “*otro culto público*” como la “*enseñanza de doctrina contraria a la de Jesu-Cristo*”⁴⁶. En segundo lugar, el reconocimiento de la valencia normativa de la Religión –reproducción del canon constitucional católico–, castigándose la inobservancia del deber de respeto al culto público como “*una violación de las leyes fundamentales del Estado*”⁴⁷. Sin embargo, la importancia de la Religión Católica Apostólica Romana no se agota en el simple –aunque trascendente– hecho de haberse establecido en el Reglamento Provisorio como la *única y verdadera* de la Provincia. Como elemento central de su cultura política impregnaba el imaginario de la comunidad y condicionaba la interpretación de las formulaciones normativas de la Constitución a partir de su precisa cosmovisión. Por otra parte, en tanto que fundamento del orden jurídico-político tenía además una consecuencia trascendental en materia de derechos: blindar al propio sistema de posibles interpretaciones que vieran en la Religión como derecho la proclamación implícita del derecho a la tolerancia⁴⁸.

II. 1. 1. *Patria cristiana. Su impacto en la vigencia de los derechos y las libertades*

La lectura del Reglamento Provisorio cordobés devuelve la imagen de aquella Córdoba católica que se erigió como una de las más fuertes defensoras del protagonismo de la Religión en el proceso de fijación de las bases para la construcción de la comunidad

corresponde principalmente al Gobierno y los Magistrados, y no a la Representación, por lo tanto, salvó su voto, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 17 de enero de 1821*, p. 85.

⁴⁶ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEGUNDA, CAP. V, ART. 1º. Aquí nuevamente manifiesta su opinión contraria el diputado Espinosa ya que considera que para una defensa férrea de la Religión Católica no sólo deben de privarse otros cultos *públicos*, sino también otros cultos *privados*, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 17 de enero de 1821*, p. 85.

⁴⁷ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEGUNDA, CAP. V, ART. 2º. Esta disposición se encuentra, muy similarmente redactada, en las Constituciones de los territorios neogranadinos y, naturalmente, dentro de las fronteras del antiguo virreinato del Río de la Plata: Es el caso de Catamarca (Reglamento Constitucional de la Nueva Provincia de Catamarca de 1823, Cap. 4, Arts. 35-39); Corrientes (Reglamento Provisorio Constitucional de Corrientes de 1821, Secc. Primera, Art. 5, “*sacrílega violación de las Leyes Fundamentales de la Provincia*”, y Constitución Política de la Provincia, Sección 1, Arts. 1-5); San Juan (Proyecto de Constitución de 1827, Arts. 1-2); Santa Fe (Estatuto Provisorio de 1819, Secc. 1º, Arts. 1-2 “*El que contraviene al artículo 1º, será reputado enemigo del país, por la violación de sus primeros fundamentales*”); San Luis en su Reglamento Provisorio de 1832 no habla de violación a las leyes fundamentales del país pero sí castiga con dureza el atentado de cualquier persona contra la Religión Católica Apostólica Romana, castigo que podrá ser impuesto por la autoridad política o eclesiástica, y si se tratare de una persona extraña de la Provincia, entonces se le mandará salir de ella inmediatamente (Cap. 1, Art. 1). En el caso de las Constituciones de los estados mexicanos sancionadas a partir de 1824 se puede observar la opción por la fórmula utilizada en el Cádiz de las Cortes de 1812, la protección de la Religión se garantizará “*... por leyes sabias y justas*”.

⁴⁸ Cfr. PORTILLO, J. (2010) “La Constitución en el Atlántico Hispano, 1808-1824”, en *Fundamentos*, Nro. 6. Disponible en http://www.unioviedo.es/constitucional/fundamentos/sexta/pdfs/03_portillo.pdf

política a partir de un nuevo principio de legitimación. El énfasis en la consolidación de la moral católica a través de herramientas novedosas para su cultura jurídica como una Constitución escrita es una actitud muy al tono con la percepción que de la Provincia tenían tanto sus propios habitantes como aquellos observadores externos que la miraban desde otras latitudes y resaltaban la íntima unión entre Religión católica y política, entre eclesiásticos y autoridades públicas, formando una verdadera “amalgama político religiosa”⁴⁹. La participación prevalente en política de un “clero demasiado celoso y de regulares prófugos, seductores y resentidos”, decía un periódico porteño de la época, dificultaba el progreso “en un pueblo donde la reforma de un abuso se llama herejía y la libertad civil, licencia, desmoralización, anarquía...”⁵⁰. La opción constitucional cordobesa en materia de Religión no hacía otra cosa que recoger el sentido de “patria”, sentimiento general de las familias de esa república⁵¹.

Si la Religión condicionaba la interpretación de todo el orden jurídico, el sentido atribuible a un artículo tan importante para la comprensión y extensión de los derechos del hombre en sociedad, como el que establecía cuál era el límite moral al ejercicio de esos derechos, dependía de toda una serie de presupuestos culturales que operaban en la lectura hecha por aquellos a quienes estaba destinado. La incorporación en el texto constitucional de un mandato bíblico tal como “*Haz siempre a los otros todo el bien que quisieras recibir de ellos; no hagas a otro lo que no quieras que te hiciese*”, no podía tener la misma valencia en un contexto católico de intolerancia religiosa como el hispanoamericano, que en un contexto revolucionario como el francés de 1793 en el que si bien se incorporaba una disposición redactada en similares términos, “... *sa limite morale [de la libertad] est dans cette maxime: Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait*”, a renglón seguido se declaraba el derecho al ejercicio de libre de cualquier culto⁵².

⁴⁹ KING, J. (1921) *Veinticuatro años en la República Argentina*, Vaccaro, Buenos Aires, p. 104. Este viajero norteamericano fue un testigo privilegiado de la vida civil, política y militar del período durante los años 1817 y 1841.

⁵⁰ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 253.

⁵¹ “Tal vez quien sintetice mejor el pensamiento de una gran parte de la elite cordobesa sea el presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros. Para él, la Iglesia y la patria estaban íntimamente unidas y por lo tanto debían permanecer aliadas tal como lo estaban el cuerpo y el alma... tenían un papel rector en la organización social. Para Castro Barros, la patria era la encargada de la comodidad temporal de los hombres. Debía organizar la sociedad civil proporcionando a los individuos la seguridad, la propiedad de sus bienes, la libertad, bien diferenciada del libertinaje, y la igualdad ante la ley. A la Iglesia le correspondía guiar a los hombres para lograr la vida eterna. Ambos objetivos constituían las partes de un proceso único... religión y patria no podían disociarse”, AYROLO, V. (2007a) *Funcionarios de Dios y de la República: clero y política en la experiencia de las autonomías provinciales*, Ed. Biblos, Buenos Aires, p.225. Véase también ENTIN, G. (2013) “El patriotismo americano en el siglo XVIII. Ambigüedades de un discurso político hispánico”, en HÉBRARD, V. y VERDO, G. (eds.) Ob. cit., pp. 19-33.

⁵² Varios textos hispanoamericanos coetáneos al cordobés incluyeron la misma disposición: Constitución de Popayán (Nueva Granada) de 1814, Sección Tercera, Capítulo Primero, Artículo 189: “*Como los derechos de los unos, son relativamente el principio de los deberes para con los otros, debe imprimirse en el corazón de todo ciudadano la máxima que consagran la religión y la naturaleza: haz siempre a los otros todo el bien que quisieras recibir de ellos. No hagas a otros lo que no quisieras que te hiciesen*”, disponible en <http://modern-constitutions.de/CO-PO-1814-05-xx-es-e.html>. Los mismos dos principios son recogidos en

Se trata de un principio evangélico juridificado por una cultura como la del derecho común, construida sobre una antropología católica en la edad media⁵³. Sin embargo, las consecuencias de su interpretación no podían ser las mismas, porque se concebía de manera distinta al derecho y al sujeto. Una cosa era el contexto cordobés de 1821 y otra muy distinta el contexto francés de finales del setecientos después de una revolución que se proponía derribar los presupuestos de aquella cultura y resignificar las categorías a partir de las cuales las nociones de derecho y sujeto eran construidas. Más allá de esta posible filiación entre dos textos similares, aunque normativamente disímiles según la óptica desde la que se los interprete, la Religión estuvo también presente en la estructura sobre la cual se intentó reconstruir la nueva comunidad política. Un caso paradigmático donde esta imbricación entre política y religión puede reconocerse es el modo en que se articuló la nueva legitimación de la política a partir de ciertos instrumentos de corte tradicional. No se trata aquí de sorprenderse con el modo en que los actores políticos desarrollaron sus prácticas “institucionales”, en definitiva también los miembros de la Asamblea Nacional francesa que sacudieron el orden habían sido convocados y elegidos según los mecanismos antiguos de reunión de los *états généraux*, y ni qué hablar de las prácticas de los revolucionarios norteamericanos que fundaron su accionar con un fuerte discurso historicista⁵⁴. La propuesta consiste en reflexionar sobre el peso que determinadas decisiones adoptadas pudieron tener en el proceso, como la de interiorizar una estructura “administrativa” bosquejada por la Iglesia, dividida en Curatos y Parroquias, además del protagonismo reservado para los curas en el procedimiento de

la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, Capítulo Octavo, Sección Tercera, Artículo 193: “*Los derechos de los otros son el límite moral de los nuestros y el principio de nuestros deberes relativamente a los demás individuos del Cuerpo Social. Ellos reposan sobre dos principios que la naturaleza ha grabado en todos los corazones, a saber: «Haz siempre a los otros el bien que quisieras recibir de ellos. No hagas a otro lo que no quisieras que se te hiciese»*”, disponible en <http://modern-constitutions.de/VE-00-1811-12-21-es-e.html>.

Del otro lado del Atlántico, el artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano que antecedió a la Constitución francesa de 1793 establecía: “*La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait*”. Y el artículo siguiente de la misma Declaración: “*Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits...*”), disponible en <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-lafrance/constitution-du-24-juin-1793.5084.html>.

⁵³ En las Siete Partidas se puede encontrar el precepto: Partida Primera, Título I (*Que fabla de las leyes*), Ley X (*A quién tienen pro las leyes*): “*Pro muy grande es á maravilla el que aducen las leyes á los homes: ca ellas les muestran conocer á Dios, et conociéndolo, en qué manera deben amarlo et temerlo. Otrosi les muestran conocer sus señores et sus mayores naturales, et en qué manera les deben ser obedientes et leales. Et aun sin todo esto muestranles conocer á sí mesmos, en como sepan traer su hacienda cuerdamente, faciendo bien et guardándose de facer mal. Otrosi muéstranles como se amen unos á otros, queriendo el uno para el otro su derecho, guardándose de non facer lo que non querria que á él feciesen. Ca en conociendo et guardando bien estas cosas viven derechamente, et en folgura et en paz, et aprovechanse cada uno de lo suyo, et han sabor dello, et enriquecen las gentes, et amochiguase el pueblo, et acrecientase el señorío, et refrenase la maldat et esfuerzase la bondat. Et por todas estas razones dan carrera al home porque haya bien en este mundo et en el otro*”.

⁵⁴ FIORAVANTI, M. (1996) Ob. cit.

selección de los nombres que ocuparían, directa o indirectamente, los distintos espacios institucionalizados de poder. El diseño del sistema electoral, como se verá seguidamente, giró en torno a esos elementos.

Disposiciones de este tenor evidencian el contenido de la “decisión política fundamental” adoptada por los constituyentes cordobeses, decisión “relativa al conjunto de principios supremos que caracterizan a cualquier ordenamiento”⁵⁵. La proyección política y jurídica de su apuesta colocaba a la Religión en el epicentro del orden constituido por el Reglamento Provisorio y elevaba su discurso a la categoría de clave de interpretación del resto del lenguaje normativo en que se expresaban los derechos, las libertades y las facultades de las autoridades políticas. Como se ha dicho para este mismo contexto, “la disciplina social de la religión no se limitaba entonces al campo espiritual [si no que] imponía normas y valores, así como una representación del mundo donde la justicia cumplía un papel esencial de conservación de un orden preestablecido”⁵⁶.

II. 2. Ciudadanía y Sistema Electoral

Pocas disposiciones son tan relevantes para el observador externo que busca comprender el modo en el que el derecho articula las relaciones de poder entre los habitantes de una particular comunidad política como los preceptos encargados de establecer quiénes y bajo qué condiciones son ciudadanos y cuál es el mecanismo de selección de los participantes del juego político. El Reglamento Provisorio de la Provincia de Córdoba dedicó varios capítulos a regular la ciudadanía, los modos en que esta se perdía o suspendía, y el complejo sistema electoral a partir del cual se debían elegir los representantes al Congreso Provincial, encargados a su vez de nombrar al titular del Gobierno a quien se le atribuyó la responsabilidad de designar a los integrantes del Tribunal de Justicia. De modo que la determinación de la base humana de la comunidad política, más o menos extensa de acuerdo a las exclusiones que estos capítulos consolidaron, dependió de las disposiciones sancionadas en estas materias y su cabal comprensión exige un acercamiento al contexto sociocultural que estuvieron destinadas a regular⁵⁷.

⁵⁵ GUASTINI, R. (2001) *Estudios de Teoría Constitucional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, p. 44. Disponible online en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=22>

⁵⁶ AGÜERO, A. (2010b) “La justicia penal en tiempos de transición. La república de Córdoba, 1785-1850”, en GARRIGA, C. (Coord.) *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, Centro de Investigación y docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, México, pp. 267-305, p. 282.

⁵⁷ Como ha afirmado FRADERA, “la ciudadanía y la capacidad de representación -dos cuestiones que van asociadas pero que no deben confundirse- no adquiere su significado preciso sino dentro de una estructura social, con sus jerarquías propias y sus divisiones heredadas, en el marco de unas convenciones culturales que califican el formalismo de las reglas del juego político. Dicho de otra manera: no pueden ser comprendidas fuera o al margen de las situaciones locales, al margen en su especificidad”, FRADERA, J. (2008) “La Nación desde los márgenes (ciudadanía y formas de exclusión en los imperios)”, en *Revista Illes i imperis*, Nro. 10/11, pp. 9-30, p. 20.

II. 2. 1. Ciudadanía

El tratamiento de la ciudadanía comenzaba en la Constitución con un artículo que pareciera instaurar una solución bastante general: “*Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado es ciudadano, pero no entrará en el goce y ejercicio de este derecho hasta que haya cumplido veinticinco años de edad, o sea emancipado y a más reuna las calidades que en sus respectivos lugares se expresarán en este Reglamento*”⁵⁸. Sin embargo, la calidad de hombre *libre* y el modo abierto en que estaba redactada la formulación normativa, minaba aquella generalidad *a priori* percibida, restringiendo la extensión del derecho al sufragio activo y pasivo en función de determinadas e indeterminadas “*calidades*” de cada sujeto. La noción de ciudadano como “hombre libre y vecindado” ya había sido asumida por el constitucionalismo gaditano y era una de las hendiduras por las que intervenía “implícita pero pesantemente la religión, pues, como es bien sabido, la vecindad únicamente podía entenderse en su dimensión parroquial”⁵⁹.

También sustanciales eran las exclusiones establecidas, por un lado, para las mujeres, los dependientes domésticos y los esclavos, y por otro, para los afrodescendientes. En el primero de estos casos, una serie de seres humanos permanecieron en el ámbito de lo doméstico bajo el dominio del padre de familia y fueron invisibilizados por este primer constitucionalismo al punto que en algunos casos ni siquiera fueron mencionados en el texto constitucional⁶⁰. Apenas tangencialmente el diseño pudo referirse a ellos detrás de las categorías *almas* o *habitantes* “para

⁵⁸ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEGUNDA, CAP. VI, ART. 1º. El mismo principio general contenían la mayoría de las constituciones provinciales rioplatenses: Reglamento Provisorio Constitucional de Corrientes del año 1821 (Secc. Segunda, Art. 1º); Estatuto Provisorio Constitucional entrerriano de 1822 (Secc. 12); en términos mucho más vagos y generales lo establecía el Estatuto Provisorio santafecino de 1819, “*Todo americano, es ciudadano*” (Secc. Segunda, Art. 3); la Constitución de Tucumán de 1820 no contenía una sección específica dedicada al asunto de la ciudadanía y recogía el principio general en la materia entre los *Derechos Particulares*: “*Todo hombre libre que haya nacido, y resida en el territorio de la Provincia será ciudadano, pero no podrá ejercer su ciudadanía á menos que tenga veinte y cuatro años cumplidos, ó se halle emancipado por su oficio, estado, etc.*” (Secc. Cuarta, Cap. Segundo, Art. 2).

⁵⁹ “El vecino (...) es el feligrés, el hijo de la Iglesia, que cumple con los ritos y ritmos de la vida religiosa en un ámbito local a la vista y conocimiento de la comunidad”, PORTILLO, J. (2007) Ob. cit., p. 23.

⁶⁰ Para el estudio de la dimensión doméstica en el territorio rioplatense es ineludible la remisión a la obra de la historiadora tucumana Romina ZAMORA (2012) “La economía y su proyección para el justo gobierno de la república. San Miguel de Tucumán durante el siglo XVIII”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 44. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-17842012000200009&script=sci_arttext; también su tesis doctoral en la Universidad Nacional de La Plata, *San Miguel de Tucumán, 1750-1812. La construcción social del espacio físico, de sociabilidad y de poder*. Un análisis del caso concreto de Córdoba, especialmente desde su dimensión económica, en la obra de TELL, S. (2008) *Córdoba rural, una sociedad campesina (1750-1850)*, Prometeo Libros, Buenos Aires.

Otro trabajo sobre la misma problemática en el Río de la Plata es el de CAULA, E. (2010) “Trama de lealtades en torno al gobierno de la casa durante el proceso de disolución del orden colonial en el Río de la Plata”, en IMIZCOZ BEUNZA, J. M Y OLIVERI KORTA O, (eds.) *Economía Doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen*, Editorial Silex Universidad, Madrid.

contabilizarse a efectos de asignar representación a parroquias, partidos o provincias, pero, por lo demás, el género masculino y la asumida suposición de estar hablando sólo de libres e independientes hacía absolutamente innecesaria mayor especificación ni presencia”⁶¹. En el segundo caso, el de los nacidos en el país cuyos mayores hubieran sido originarios de África, se establecieron subclasificaciones, con consecuencias distintas para cada caso, en dos diferentes categorías según el grado de parentesco que los separara de sus ascendientes esclavos⁶². Como ha planteado FRADERA para la experiencia gaditana, “el ejercicio de los derechos inherentes a la ciudadanía (...) se piensa en el marco de proyecciones sociales que derivan de la estructura de la sociedad de fines de siglo XVIII. En función de ellas y del etnocentrismo compartido por las élites europeas en ambos lados del Atlántico, resultaba muy difícil imaginar que los indios y las castas pardas fuesen percibidos como elementos activos en la sociedad política que las nuevas reglas se proponían alumbrar”⁶³.

El mutismo constitucional respecto de los indios es un indicador de su “otredad” para los armadores del orden político. Como en el resto de provincias rioplatenses, la relación entre las autoridades cordobesas y los pueblos de indios se entablaba a nivel diplomático⁶⁴. Por otra parte, ese mismo silencio se tradujo también en la constitucionalización de una visión monolítica de la ciudadanía que propugnó una suerte de “integración forzada” (“slam inclusión”) de ciertos pueblos de indios en el seno de los nuevos Estados constitucionales a un nivel atomista, o sea, en tanto que conjuntos de individuos y no de pueblos. Es decir, se trataba de consagrar la ficción de que estos pueblos se integraban en condiciones de estricta igualdad en una comunidad política unitaria dominada, de hecho, social e ideológicamente por un solo sector (generalmente minoritario) de la población, es decir, la minoría criolla”⁶⁵. Esta estrategia institucional

⁶¹ LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) *El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico (1808-1826)*, Colección Bicentenario de las Cortes de Cádiz, Congreso de los Diputados, Madrid, p. 177. Como se ha analizado respecto de la experiencia constitucional de Cádiz, “si en ningún momento el texto gaditano hacía empleo del vocablo *hombre* para comprender a la mujer y si ésta, exclusión de la ciudadanía mediante, no cabía que se incluyera en el término *individuo*, el integrante de Nación, ¿qué palabra utiliza Cádiz para referirse a seres humanos más en general de verse en la necesidad? Hela: *almas*”, CLAVERO, B. (2013) Ob. cit.

⁶² “Los nacidos en el país que sean originarios de Africa por cualquier línea, cuyos mayores hayan sido esclavos, tendrán sufragio activo, siendo hijos de padres ingenuos; y pasivo, para los empleos de República, los que estén fuera del 4º grado respecto de dichos sus mayores”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 5º.

⁶³ FRADERA, J. (2012) “Situación la Constitución de 1812 en el contexto de las Constituciones imperiales”, en 20/10: *El Mundo Atlántico y la Modernidad Iberoamericana 1750-1850*, Vol. 1, Segib, pp. 57-75.

⁶⁴ LEVAGGI ha realizado un completo trabajo analizando diferentes tratados entre autoridades del Virreinato y de la Confederación –según el período– con distintos pueblos de indios: véase LEVAGGI, A. (2000) *Paz en la frontera. Historia de las relaciones diplomáticas con las comunidades indígenas en la Argentina (siglos XVI-XIX)*, Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires.

⁶⁵ ANDRÉS SANTOS, F. y AMEZÚA, L. (2013) “El multiculturalismo y los derechos colectivos en el primer constitucionalismo iberoamericano”, en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, Nro. XLI, p. 346. El mismo silencio se había producido en el ámbito del reconocimiento de los derechos indígenas: “El constitucionalismo, como ideología, excluyó los derechos indígenas, unos derechos comunitarios que no respondían a los requerimientos estatales del individualismo posesivo”, CLAVERO, B.

puede ser considerada –entre otras– como una de las causas de la significativa disminución de la población que se calificaba como indígena en los censos provinciales: “los registrados como ‘indios’ disminuyeron de 11,4% en 1778 a tan sólo 1,5% en 1840” y, correlativamente, “un paulatino blanqueamiento en el registro de la población”⁶⁶.

La situación de los españoles y extranjeros también merece especial atención. Según el diseño constitucional, a estos últimos se les exigía una serie de condiciones relativas para poder disfrutar de libertades políticas, tanto activas, como pasivas⁶⁷. Para ser potencialmente elegibles para los cargos de Gobierno la exigencia era mayor: haber renunciado previamente a toda otra ciudadanía⁶⁸. Los españoles tenían condicionada su participación política, tanto en su faceta activa como pasiva, a un hecho que les resultaba totalmente ajeno a su voluntad como era el reconocimiento por parte del gobierno de España de la independencia de las Provincias Unidas⁶⁹. Recién comenzarían a disfrutar de los beneficios de la ciudadanía después de haberse mostrado “*decididos por la libertad*”, realizado “*servicios distinguidos a la causa del País*”, y haber tramitado el correspondiente procedimiento de solicitud y obtención de una carta de ciudadanía bajo las mismas circunstancias exigidas para los demás extranjeros, acreditando ante las autoridades “*buena comportación pública*”, y “*adhesión y servicios a la Sagrada causa de la Independencia*”⁷⁰. En ambos casos, se exigía a los extranjeros que prestaran debido “*juramento de defender, sacrificando sus bienes y vidas la Independencia de Sud América, del Rey de España, sus sucesores y Metrópoli; y de toda otra Potencia Extranjera*”⁷¹.

Estas observaciones valen para hablar de ciudadanía en tanto que libertades positivas, es decir, titularidad de derechos políticos, y no de una dimensión moral de la ciudadanía asociada a la idea de definir en términos normativos al buen ciudadano, idea por lo demás útil para analizar, por ejemplo, la textura del discurso moral presente en la cultura jurídica –cordobesa, rioplatense, hispanoamericana, hispánica– y su arreglo o no con ciertos cánones preestablecidos como pueden ser los impuestos por la Religión Católica. Las exclusiones de la ciudadanía (renta, sexo, raza, etc.) tuvieron en este contexto, como en la Europa liberal decimonónica de las Cartas Otorgadas, la necesaria

(1994) “Espacio colonial y vacío constitucional de los derechos indígenas”, en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, Nro. 6, pp. 61-86.

⁶⁶ TELL, S. (2008) Ob. cit., pp. 67-68.

⁶⁷ “*Todo extranjero de la misma edad que se establezca en el país, con ánimo de fijar en él su domicilio, y habiendo permanecido por espacio de cuatro años, se haya hecho propietario de un fondo al menos de dos mil pesos o en su defecto ejerza arte u oficio útil, gozará de sufragio activo en las Asambleas Cívicas con tal que sepa leer y escribir*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 2º; “*A los diez años de residencia, tendrá voto pasivo para los empleos de República; mas no para los de Gobierno*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 3º.

⁶⁸ “*Para gozar ambos sufragios debe renunciar antes toda otra ciudadanía*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 4º.

⁶⁹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 6º.

⁷⁰ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ARTS. 7º-8º.

⁷¹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 9º.

consecuencia de “introducir una distinción entre aquellos ciudadanos que eran actores de la acción política y aquellos que sólo eran sus destinatarios”,⁷².

La ciudadanía estaba sometida a una serie de requisitos que operaban como instrumentos de privación temporal o definitiva del derecho al sufragio activo o pasivo. El Reglamento Provisorio de 1821 recogía las disposiciones gaditanas, luego replicadas en los ensayos constitucionales rioplatenses de 1815 y 1817, sobre suspensión y pérdida de la ciudadanía. Establecía la suspensión de la ciudadanía para aquellos individuos que se encontraran en alguno de los diferentes supuestos enumerados en la Constitución: ser deudor de la hacienda del Estado estando ejecutado; ser acusado de delito siempre que éste tuviera cuerpo justificado y por su naturaleza mereciera pena corporal, aflictiva o infamante; ser doméstico o asalariado; no tener una propiedad del valor –al menos– de cuatrocientos pesos, aunque pertenezcan a la mujer si fuese casado y, en su defecto, si no tuviese grado o aprobación pública en una ciencia o arte liberal, o algún oficio lucrativo y útil al país; finalmente, el estado de furor o demencia⁷³. Quedar comprendido en alguno de estos supuestos implicaba la privación temporal del sufragio en sus dos versiones hasta tanto las circunstancias que ubicaban al sujeto en esa posición desaparecieran.

El Reglamento Provisorio no sólo contemplaba casos de suspensión de la ciudadanía. Existían también determinados supuestos en los cuales la consecuencia jurídica prevista por la norma constitucional era la privación definitiva del derecho al sufragio. La pérdida de la condición de ciudadano se reservaba para aquellos sujetos que se naturalizaran en país extranjero, aceptaran empleos, pensiones o distinciones de nobleza de otra nación, sufrieran la imposición legal de una pena aflictiva o infamante, o incurrieran en el estado de deudor dolosamente fallido siempre y cuando no pudieran obtener con posterioridad una nueva habilitación⁷⁴. La última posible exclusión que

⁷² SERVÁN, C. (2012) “De la Constitución al Estado (1814-1914)”, en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coords.) Ob. cit., p. 382.

⁷³ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. CUARTA, CAP. VIII, ART. 2º. Todos los primeros ensayos constitucionales rioplatenses habían estructurado la ciudadanía de la misma manera, con disposiciones idénticas en materia de pérdida y suspensión del derecho al sufragio activo y pasivo. El Estatuto Provisorio de Santa Fe del año 1819 consideraba “*suspensio de este ejercicio... el deudor al fondo público... el acusado de algún crimen con prueba aún semiplena (...)* Cualquiera que por su opinión pública sea enemigo de la causa general de la América, ó especial de la Provincia... hasta que abjurando con hechos sus errores, abraza la del territorio” (Secc. II, Arts. 4-5); el Estatuto Provisorio Constitucional de Entre Ríos de 1822, además de similares circunstancias, recogía como causal de suspensión no tener “*modo de vivir honesto y conocido*” y, desde el año 1840 en adelante, “*los que no sepan leer y escribir*” (Secc. 12, Arts. 115-116).

La Constitución de 1826, mucho más explícita y detallada, incluía además algunas causales nuevas: “*no haber cumplido veinte años de edad... no saber leer ni escribir*” o por los estados de “*demencia... de criado a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago...*”, Constitución de 1826, SECC. SEGUNDA, ART. 6º, su texto completo puede consultarse en SAGÜÉS, N. (2006) *Constituciones Iberoamericanas: Argentina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, CD Anexo, 217-237.

⁷⁴ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. CUARTA, CAP. VIII, ART. 1º. Como se verá más adelante, esto fue algo que se hizo cada vez más frecuente desde la aplicación en la zona rural del Reglamento para Administración de Justicia en la Campaña del año 1823, cfr. AGÜERO, A. (2010b) Ob. cit.

habría que sumar al sistema previsto por el Reglamento, si bien se presenta con el ropaje de las garantías, deja entrever cómo una de las características básicas del orden político tradicional se cuela en la construcción de la nueva comunidad: la responsabilidad personal de los funcionarios por los actos que ejecutaran en ejercicio de su autoridad. Por una parte, se establecía que “*fuera de esos casos [los supuestos de pérdida y suspensión de la ciudadanía], cualquier autoridad que prive a un Ciudadano de sus derechos cívicos, incurre en la pena del talión*”⁷⁵, y por otra, la suspensión del voto activo y pasivo durante dos actos electorales consecutivos a los jueces que omitieran informar a las Municipalidades el nombre de los condenados que debían ser borrados de los registros cívicos⁷⁶.

Como se puede observar a partir de la lectura de estas disposiciones, el beneficio de la participación política giraba en torno a las nociones de propiedad y poder económico. A aquel principio general de reconocimiento del ejercicio de la ciudadanía a todo hombre libre nacido y residente en el territorio cordobés mayor de veinticinco años –por demás excluyente–, habría que agregarle también su condición de propietario de una determinada fortuna y que no fuera doméstico ni asalariado. La exclusión de una gran parte de la población masculina –la femenina ni estaba contemplada en el principio general– restringe hasta dejar bien pequeño el conjunto humano de participantes en la vida política de la comunidad. Por otra parte, la fragilidad de la condición de ciudadano quedaba manifestada en el supuesto que admitía a la acusación sobre determinados delitos como circunstancia que autorizaba la suspensión del derecho al voto, supuesto que además era contrario a la garantía consagrada por el mismo texto constitucional unos artículos más adelante cuando declaraba que “*ningún habitante del Estado puede ser penado... sin que preceda forma de proceso y sentencia legal*”⁷⁷.

Con el objetivo de mantener un control sobre la calidad de cada sujeto y la determinación de su habilidad para ejercer la ciudadanía en la medida correspondiente según su condición, esto es, el ejercicio del voto activo o pasivo y/o su inhabilidad temporal o definitiva, los constituyentes cordobeses previeron la formación de registros cívicos donde se debían asentar tales circunstancias llevando una lista del nombre, la edad y el origen de cada habitante de la Provincia⁷⁸. En el diseño bosquejado, nuevamente se puede observar cómo las posibilidades de actuación del aparato de gobierno en todo el territorio condicionaban el estatus de dos diferentes espacios políticos y obligaban a establecer disposiciones también distintas para los ámbitos urbanos y para la campaña. Allí donde hubiera Municipalidades, éstas serían las encargadas de llevar dichos registros y, además, las facultadas para realizar las correspondientes calificaciones de propiedad

⁷⁵ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. CUARTA, CAP. VIII, ART. 3°.

⁷⁶ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. CUARTA, CAP. VIII, ART. 4°.

⁷⁷ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXIII, ART. 11°. Para comprender cómo había operado desde la época colonial la justicia penal en Córdoba, véase AGÜERO, A. (2008a) *Castigar y perdonar cuando conviene a la República. La justicia penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII*, CEPC, Madrid.

⁷⁸ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. CUARTA, CAP. VIII, ART. 5°.

exigidas para la participación política⁷⁹. En el ámbito de la campaña, por el contrario, la debilidad del aparato burocrático se suplía con el recurso a las tradicionales autoridades domésticas: en cada Curato “*dos vecinos honrados, padres de familia y propietarios*” testificarían bajo juramento sobre las calidades que reunían los habitantes del distrito a fin de determinar si eran aptos o no para el voto activo o pasivo según las disposiciones del documento constitucional quedando empoderada la comunidad local con la “capacidad exclusiva para determinar la condición activa de la ciudadanía, esto es, dicho en términos nuestros, la que elaboraba el censo”⁸⁰.

II. 2. 2. El Sistema electoral

II. 2. 2. 1. Antecedentes locales

Caducada la legitimidad tradicional de la autoridad política a causa de la crisis en la que se vio envuelta la Monarquía Católica en la primera década del ochocientos, las nuevas comunidades políticas debieron desarrollar categorías y prácticas que reemplazaran a las que estructuraban el antiguo imaginario que sustentaba el poder. Un nuevo elemento irrumpió en el discurso político con consecuencias ostensibles en el modo de hacer política: la noción de soberanía del pueblo, sujeto a favor de quien aquélla había retrovertido. Sin entrar a discutir nuevamente aquí las múltiples extensiones posibles del campo semántico de este concepto en función de la interpretación que se haga de cada uno de los términos que componen el binomio –soberanía y pueblo–, lo cierto es que el desarrollo de esta nueva legitimidad del poder trajo aparejada una también novedosa práctica política en el seno de las comunidades hispanoamericanas: las elecciones⁸¹. Incluso unos meses antes de 1810 todo el territorio americano que permanecía bajo la órbita de la Corona española se embarcó en un extenso y complejo proceso electoral para designar representantes ante el órgano de poder que en la península ibérica sustituía al monarca cautivo⁸². Pero es a partir de esa fecha cuando la práctica de convocar a los ciudadanos se convierte en un recurso habitual.

⁷⁹ Ídem.

⁸⁰ Así lo ha explicado para el contexto gaditano PORTILLO, J. (2007) Ob. cit., p. 23. Del mismo modo lo establecía en el ordenamiento cordobés el *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. CUARTA, CAP. VIII, ART. 6º.

⁸¹ Para el estudio de este fenómeno y las circunstancias que rodearon su discusión e implementación, puede consultarse la obra clásica referida al espacio hispanoamericano de ANNINO, A. (coord.) (1995a) *Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX: de la formación del espacio nacional*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. En el ámbito más concreto del espacio rioplatense la primera parte de la obra de SÁBATO, H., TERNAVASIO, M. y Otros (2011) *Historia de las Elecciones en la Argentina: 1805-2011*, El Ateneo, Buenos Aires, aporta investigaciones locales que dilucidan el modo en que los procesos electorarios se desarrollaron en esa parte del continente. Un excelente análisis del caso específico de Buenos Aires a comienzos del Siglo XIX, es el trabajo de TERNAVASIO, M. (2002) *La Revolución del voto: Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires.

⁸² Sobre ese proceso electoral puede consultarse GUERRA, F. (1993) *Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas*, MAPFRE, Madrid.

En el caso cordobés, para reconstruir una historia de las elecciones habría que remontarse a la convocada por el Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 para el nombramiento de un diputado a la Junta Grande de gobierno en representación de Córdoba y, pasando por varias experiencias aisladas, llegar a 1820⁸³. En este año, en

⁸³ En 1810, recurriendo a la institución del cabildo abierto, se convocó por esuelas a la “*parte principal y más sana del vecindario*”, que luego de deliberar en el Ayuntamiento de la ciudad designó para el cargo al Deán Gregorio Funes.

Al año siguiente, el Gobernador impuesto por el Gobierno Central, Diego José Pueyrredón, convocó a los cuarteles de la ciudad para que nombraran a los electores que reunidos en la Sala Capitular designarían a los vocales de la Junta Provincial mandada a formar por la Junta Gubernativa Provisional del Río de la Plata. La Junta había enviado un reglamento que indicaba el modo en que las elecciones se desarrollarían. Los alcaldes de barrio debían citar a los vecinos de su cuartel para que nombraran un elector, quienes el mismo día de su elección concurrirían a la Sala Capitular para elegir por pluralidad de sufragios a los vocales de la junta provincial. El Gobernador de Córdoba, en su convocatoria, modificó el número de cuarteles en que se dividía la ciudad y estableció que el voto debía ser secreto, lo cual provocó serias objeciones por parte del Cabildo ya que, en primer lugar, la división de cuarteles y el nombramiento de los alcaldes de barrio era su facultad y, en segundo lugar, “que se sustituyera el sufragio secreto por el sufragio público por considerar el sufragio secreto una innovación peligrosa para la verdad del sufragio, sin fundamentos y arbitraria”, Cfr. MELO, C. (1950) *Constituciones de la Provincia de Córdoba*, Imprenta de la Universidad, Córdoba, p. X. Finalmente el Cabildo declinó su pretensión y los electores designaron vocales de la junta provincial a los Sres. José Antonio Cabrera, José Xavier Díaz, José Norberto de Allende y Narciso Moyano –este último fue designado por la Junta en Buenos Aires, encargada de dirimir en caso de empate según el reglamento, algo que se había producido entre Moyano y José Avelino de Aramburú–

Al año siguiente, se celebró en Córdoba la elección de Diputados para la Asamblea General Constituyente que comenzó a sesionar el 31 de enero del año 1813. En esa ocasión, doce electores de barrio elegidos por los vecinos de la ciudad se sumaron al Cabildo y designaron conjuntamente a Juan Larrea y Gervasio Posadas como representantes ante el órgano constituyente. El Triunvirato había dispuesto (24 de octubre de 1812) que la elección se realizara por cuarteles, designando en cada uno de ellos un elector que luego concurriría con los demás electos a la Sala Capitular donde se llevaría a cabo la elección de los Diputados. En Córdoba se “adaptaron” las disposiciones del gobierno central dando protagonismo al Ayuntamiento de la ciudad, los doce electores de barrio se sumaron a los miembros del cabildo y juntos eligieron a los diputados.

Años más tarde, en 1815 luego de la renuncia del Gobernador Intendente Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, se convocó en la ciudad un cabildo abierto que proclamó a José Xavier Díaz como Gobernador de la provincia. El renunciante Ortiz de Ocampo pretendió circunscribir su dimisión al estricto ámbito de la ciudad y mantener su autoridad en el espacio de la campaña y la ciudad de La Rioja dependiente de Córdoba, objetando la representatividad del Cabildo de la ciudad. Sin embargo, el Cabildo cordobés rechaza la intención del Gobernador saliente y declara que la renuncia debe entenderse respecto de toda la provincia. Ese mismo año se asistió en Córdoba, al igual que en el resto del Río de la Plata, a un verdadero giro institucional ampliándose la base de la representación a la campaña. De acuerdo a las reglas electorales establecidas en el Estatuto Provisional del 5 de mayo de 1815 para el nombramiento de Diputados ante el Congreso General de las Provincias Unidas, las elecciones dejaban de estar reservadas a las ciudades y se incorporaba a través de un complejo procedimiento escalonado a los habitantes de la campaña. Las reglas de este procedimiento electoral pueden consultarse en los capítulos II y III de la Sección Quinta del Estatuto Provisorio de 1815, en RAVIGNANI, E. (1939) *Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los textos constitucionales, legislativos y pactos interprovinciales que organizaron políticamente la nación*, Tomo VI, Segunda Parte, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Jacobo Peuser, Buenos Aires, pp. 638-650.

En base a las nuevas disposiciones del Estatuto se celebraron en Córdoba las elecciones de los diputados ante el Congreso de Tucumán que al año siguiente declarararía la independencia de las Provincias rioplatenses y la elección popular de los capitulares. En agosto de 1815 Córdoba designó como Diputados ante el Congreso a los Sres. José Antonio Cabrera, Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Eduardo Pérez Bulnes, Nicolás Laguna y Deán Gregorio Funes. La elección de los capitulares en diciembre de 1815 se apartó de la regla del Estatuto ya que, por una parte, no se acotó el procedimiento electoral al ámbito

pocos meses, se produjeron las designaciones de Gobernador Interino recaídas primero en Carlos Antonio del Signo y posteriormente en José Xavier Díaz, ambas en sendos cabildos abiertos del mes de enero; a los pocos días, se desarrolló la elección en toda la provincia de los representantes que compusieron la Soberana Asamblea Constituyente en marzo de 1820 de acuerdo al procedimiento estatuido por la circular de convocatoria firmada por el Gobernador Interino Díaz –muy similar al recogido en los ensayos constitucionales de 1815 y 1817–; y finalmente, el nombramiento, por parte de ese mismo cuerpo representativo, del General Juan Bautista Bustos como Gobernador Propietario de la Provincia de Córdoba⁸⁴.

urbano (según establecía el Cap. IV de la Sección Quinta del Estatuto de 1815) ampliando el Cabildo “su base de representación, abandonado el antiguo sistema de cooptación por un mecanismo electoral que incluía los partidos de la campaña (distritos rurales yuxtapuestos a la circunscripción eclesiástica de los curatos y bajo la autoridad de un juez comisionado (pedáneo) designando desde los tiempos coloniales por acuerdo del ayuntamiento y el gobernador)”, y por otra, “el propio ayuntamiento, bajo las instrucciones del gobernador, se encargó de designar «juntas de observación» para cada uno de los curatos de la campaña encargadas de elegir a los electores (uno por cada curato y cinco por la capital) que deberían designar, reunidos en Asamblea Electoral, a los nuevos cabildantes”. Las citas están tomadas del trabajo de AGÜERO, A. (2012) “La extinción del cabildo en la República de Córdoba, 1815-1824”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, 3ra Serie, Nro. 37, [en línea]. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0524-97672012000300002. Allí, el autor analiza a fondo este acontecimiento y sus consecuencias.

Entre el 26 de enero y el 9 de febrero de 1817 se convocó a un cabildo abierto para la elección de un Gobernador para la provincia, expulsado el titular del cargo por la sublevación encabezada por Juan Pablo Bulnes, sin embargo, esa elección quedó desecha con el regreso de Ambrosio Funes a su cargo. ARCHIVO MUNICIPAL DE CÓRDOBA (1968) *Actas Capitulares*, Libro cuadragésimo noveno, Imprenta de la Universidad, Córdoba, pp. 11-18.

A finales de 1817 se sancionó el Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado. Este nuevo ensayo constitucional rioplatense incorporó la participación opcional de los habitantes de la campaña para la elección de los empleos concejiles (Art. 2, Cap. II, Sección V) pero no innovó respecto del diseño establecido por el Estatuto de 1815 en lo que a elección de diputados al Congreso se refiere (Caps. IV y V de la Sección V).

Dos años más tarde, con motivo de la sanción de la Constitución de las Provincias Unidas en Sud América en 1819, entre los meses de junio y agosto de ese año se celebraron en Córdoba las elecciones para el nombramiento de los respectivos senadores y diputados que representarían a los distintos estamentos reconocidos por el nuevo texto constitucional. La Constitución establecía un Congreso Nacional compuesto de dos cámaras, una de representantes y otra de senadores (Art. III). El senado estaba compuesto por los senadores de provincia, tres senadores militares, un Obispo y tres eclesiásticos, un senador por cada Universidad y el Director del Estado saliente (Art. X). Las disposiciones de la Constitución de 1819 pueden consultarse en SAGÜÉS, N. (2006) Ob. cit., CD Anexo, pp. 201-215. En Córdoba, se eligió por la Universidad a José Eugenio del Portillo (19 de julio de 1819); el cabildo eclesiástico designa la terna para los senadores eclesiásticos recayendo los votos en los Dres. Gregorio José Gómez, José Gregorio Baigorri y Julián Segundo de Agüero (22 de julio); la terna nombrada por los electores en representación de la provincia quedó compuesta por los Sres. Manuel Antonio de Castro, Dr. Gregorio Tagle y Dr. José Antonio Ortiz del Valle (26 de agosto de 1819); Además se eligió diputados a la Cámara de Representantes de la Nación, Dámaso Xigena, José Matías Fragueiro, Manuel Bernabé Orihuela, Eduardo Pérez Bulnes y José Norberto de Allende; a pesar de las elecciones, el Congreso Nacional no llegó a constituirse, Cfr. MELO, C. (1950) Ob. cit., pp. XXI-XXII.

⁸⁴ Un análisis bien detallado de todos estos procesos electorales inmediatamente anteriores a la sanción de la Constitución se ha realizado en el capítulo de este trabajo denominado “Génesis y Sanción del Reglamento Provisorio de 1821”, al que remito.

II. 2. 2. 2. Disposiciones constitucionales en materia electoral

La opción de los constituyentes en materia electoral bebió directamente de las fuentes normativas más próximas en el tiempo y el espacio. Si se cotejan los textos constitucionales rioplatenses de 1815 –Estatuto Provisional– y 1817 –Reglamento Provisorio– sancionados por órganos del Gobierno Central, con el documento cordobés de 1821, el resultado es una identidad casi absoluta entre los diseños del sistema electoral para el nombramiento de los representantes instaurados por los tres textos, salvo algunos detalles predecibles, tales como la proporción que debía guardarse entre el número de habitantes de un determinado distrito electoral y la cantidad de electores o representantes que a ese distrito le correspondían, o el término establecido para la recepción de los sufragios en la campaña⁸⁵.

Sin descuidar esta identidad apuntada, hay que advertir que si bien letra y métodos pueden haber sido recogidos de los comúnmente denominados “primeros ensayos constitucionales patrios”, tanto el tipo de lenguaje utilizado como el reconocimiento de la autoridad de determinados sujetos –v.g. el Cura, vecinos de probidad, etc.– remiten inequívocamente a un imaginario tradicional hispano que no fue exclusivo de las márgenes rioplatenses sino que se extendió por todo el territorio que apenas una década antes se encontraba bajo el imperio de la Monarquía Católica⁸⁶. De manera que, reglas similares estableciendo elecciones indirectas por grados donde los distritos electorales se correspondían con las circunscripciones eclesiásticas –parroquia, curato– se pueden encontrar en las primeras constituciones neogranadinas, novohispanas, e incluso en la propia Constitución gaditana de 1812⁸⁷.

⁸⁵ Tanto el Estatuto Provisional de 1815 como el Reglamento Provisorio de 1817 contienen disposiciones tomadas casi literalmente, a su vez, del Proyecto de Constitución conocido como “de la Sociedad Patriótica” presentado ante la Asamblea General Constituyente de 1813 recogidos, a su vez, de la norma gaditana de 1812. Los tres textos rioplatenses pueden consultarse en SAGÜÉS, N. (2006) Ob. cit., CD Anexo. En un artículo publicado hace varios años en la Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, el Dr. Arturo Torres hizo un cotejo literal –en dos entregas– entre el texto constitucional cordobés y algunas de los textos de carácter “nacional” que lo habían precedido para demostrar coincidencias textuales entre uno y otros, TORRES, A. (1945) “Antecedentes del Reglamento de 1821”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 32, Nros. 4-5, septiembre-diciembre, pp. 1037-1069; y (1946) Vol. 33, Nros. 3-4, julio-octubre, pp. 891-951.

⁸⁶ Las elecciones de los diputados del común instituidas por decreto de Carlos III en el mes de junio de 1766 en el marco de las reformas borbónicas establecían un procedimiento electoral en dos fases similar. En el caso rioplatense, “durante la época anterior a la sanción de la Constitución Nacional de 1853, el régimen electoral no ofreció características estables ni uniformes en todo el país, pero a través de algunos Estatutos y Constituciones se advierte el intento de excluir del ejercicio de los derechos políticos a quienes carecían de propiedad u oficio útil al país, a los domésticos asalariados, a los peones jornaleros, y a quienes no supieran leer ni escribir”, TAU ANZOÁTEGUI, V. (1965) “Gobernados y Gobernantes en Argentina (Época Independiente)”, en *Gouvernés et gouvernants*, Éditions de la Librairie Encyclopédique, Bruxelles, p. 429.

⁸⁷ Naturalmente, ciertos mecanismos variaban de acuerdo a circunstancias como la extensión del territorio en el que se celebraban las elecciones o la cantidad de habilitados para participar en ellas. Así las cosas, no podía ser lo mismo un documento constitucional para la pequeña comunidad política de Popayán en Nueva Granada (Constitución de 1814, Caps. IV-VI), que el texto sancionado en Apatzingán para toda la América Mexicana (Constitución de 1814, Caps. IV.VII) o el de Cádiz de 1812 con vocación bihemisférica (Título III, Caps. I-V), por poner sólo algunos ejemplos significativos. Los textos hispanoamericanos están

II. 2. 2. 2. 1. Elecciones para el Congreso Provincial

Para la elección de representantes al Congreso de la Provincia se escalonaban en el Reglamento Provisorio de 1821 dos instancias sucesivas de votación⁸⁸. Un censo puntual de todos los habitantes que se mandaba a realizar por el propio texto constitucional –a Municipalidades o juntas de parroquia, con las consecuencias ya apuntadas– fijaría la base poblacional de todos los ciudadanos avecinados y residentes en la provincia, esto es, el número de sujetos habilitados para ejercer el sufragio (Cap. IX, Art. 1º)⁸⁹. La primera de aquellas instancias se denominaba en el Reglamento como Asamblea Primaria, el órgano electoral donde los ciudadanos debían emitir su voto para el nombramiento de electores –primer grado de la elección– que a su vez, reunidos en una Asamblea Electoral, serían los encargados de elegir a los representantes al Congreso Provincial –segundo grado de la elección–⁹⁰. Al igual que en los antecedentes más inmediatos de práctica electoral en la provincia, la Constitución de 1821 estableció un procedimiento diferente para la celebración de las Asambleas Primarias en el ámbito de la Ciudad y Villas donde hubiese Municipalidad, y en la campaña (Cap. IX, Art. 4º); sin embargo, mantuvo en ambos casos la misma base de proporcionalidad: cada cuatro mil almas se elegía un Elector y cada doce mil almas se nombraba un Representante (Cap. IX, Art. 3º y Cap. X, Art. 10º)⁹¹.

Los espacios urbanos de la Provincia donde había Municipalidades, Ciudad de Córdoba y Villas de La Carlota y de La Concepción, debían dividirse en cuatro secciones. A cada una de éstas concurrían los sufragantes para votar por un número variable de Electores en función de la cantidad de habitantes de la sección, respetando siempre la

disponibles en <http://www.modern-constitutions.de/>; la constitución gaditana puede consultarse en http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1812.pdf

⁸⁸ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. CUARTA, CAP. IX “De la elección de Representantes para el Congreso de la Provincia-Asambleas Primarias” y CAP. X “De la Asamblea Electoral”.

⁸⁹ En este artículo se puede reconocer la copia textual de un texto de carácter más general como lo fueron el Estatuto de 1815 y el Reglamento de 1817. Al establecerse el modo de composición de las Asambleas Primarias, el texto de la Provincia de Córdoba habla de “*todos los ciudadanos avecinados y residentes en el territorio de la Provincia respectiva*”, cuando en realidad la constitución estaba circunscrita a la provincia mediterránea.

⁹⁰ En el año 1791, Jeremy Bentham atacaba este tipo de práctica y establecía entre las condiciones requeridas para infundir a la nación confianza permanente en una asamblea que piensa representarla, que las elecciones de los representantes fuera directa: “*Si pasa por muchos grados, el pueblo, que no elige mas que á electores, no puede mirar como obra suya á los diputados elejidos; y no se une á ellos por el afecto de la elección, ni por la idea del poder. Los elejidos no dependen del pueblo por gratitud, ni por responsabilidad. No hay union entre las clases superiores é inferiores, y queda imperfecto el vínculo político*”, BENTHAM, J. (1991) *Tácticas parlamentarias*, Servicio de Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, p. 62.

⁹¹ En los dos textos con vocación rioplatense que han sido señalados como fuente directa en materia electoral del Reglamento Provisorio cordobés de 1821 la proporción utilizada es diferente a la opción hecha por los constituyentes de la Provincia. En aquéllos se fijaba el nombramiento de un elector cada cinco mil almas y un Diputado cada quince mil, lo cual resulta razonable considerando que la base total de la población rioplatense era muchísimo mayor que la cordobesa.

proporción mencionada de un representante cada cuatro mil (Cap. IX, Arts. 2º y 3º) o fracción que llegara a dos mil almas (Cap. X, Art. 11º)⁹². El catálogo de autoridades de la elección en esta instancia estaba compuesto por un miembro indeterminado de la Municipalidad y dos jueces de barrio “*de la mayor probidad*”, auxiliados por un escribano o, en su defecto, dos testigos (Cap. IX, Art. 2).

En la campaña el procedimiento estaba dividido en dos momentos. En este caso, a diferencia del método utilizado en la elección de 1820 para la integración de la Soberana Asamblea donde se había incluido un grado más con evidente menoscabo en la representación de los habitantes de las zonas rurales, el objetivo del documento constitucional era facilitar el escrutinio de los votos. En la primera etapa del acto electoral, los ciudadanos residentes en la campaña debían acudir a la casa del juez principal del Curato para votar por un Elector donde las autoridades de la elección, que en este caso eran el propio juez, el Cura y tres vecinos de probidad, recibirían los sufragios conforme iban llegando y los depositarían en un arca de tres llaves custodiada por los dos primeros y uno de los vecinos asociados (Cap. IX, Arts. 4º-6º). Una vez vencido el plazo de cuatro días para la recepción de los votos, el arca custodiada se trasladaba a la cabeza del distrito de Curatos que reunidos comprendieran en su territorio cuatro mil almas, esto es, el Curato de vecindario más numeroso, señalado por la Municipalidad más inmediata al distrito. Allí, las nuevas autoridades electorales de esta segunda etapa, el Juez de este Curato cabecera, el Cura y tres asociados, recibirían todas las arcas, contarían los sufragios y públicamente darían a conocer el resultado, notificando inmediatamente al Elector designado para que se trasladara a la Ciudad de Córdoba donde se celebraría la Asamblea Electoral (Cap. IX Arts. 9º-13º)⁹³.

La Constitución establecía una generosa amplitud en cuanto a las formas admitidas para que cada ciudadano pudiera emitir su sufragio. Dejaba al arbitrio individual del sujeto la opción entre un voto de palabra o por escrito, así como la posibilidad de hacerlo de manera abierta o cerrada (Cap. IX, Art. 7º). Otro aspecto previsto en detalle para evitar ciertas irregularidades en el desenvolvimiento del acto electoral era el procedimiento especial estatuido por el texto para la recepción de denuncias sobre cohecho o soborno en el marco de la elección (Cap. IX, Art. 8º). Inmediatamente después de conocido el hecho ilícito, el denunciante debía presentar su queja justificada ante las autoridades electorales de la sección quienes escucharían las

⁹² Al momento de la sanción del Reglamento sólo existían esas dos Villas, La Carlota y Concepción, pero el propio texto reconocía la posibilidad de establecer nuevos Ayuntamientos allí donde por la proporción del vecindario resultara conveniente, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXIV, ART. 10º.

⁹³ En el Reglamento Provisorio cordobés se hablaba de Secciones de proporción y Secciones de número para hacer referencia a cada uno de estos dos momentos en los que estaba dividida la elección en la campaña. La diferencia apuntada respecto de la elección de 1820 está en el hecho de que en la sección de proporción solamente se recibían los sufragios y no se nombraba a un compromisario para que se trasladara a la sección de número con el objeto de designar al Elector. Para recordar cómo en 1820 la elección en las parroquias y la elección en los Curatos introducían un grado más en el procedimiento, véase al análisis de este asunto ya realizado en el capítulo “*Génesis y Sanción del Reglamento Provisorio de 1821*”.

posiciones del acusador y el acusado. En caso de resultar probado el hecho, sin más solemnidades ni posibilidad de recurrir la decisión, se impondría al sobornante y al sobornado la privación de la voz activa y pasiva, esto es, el ejercicio de sus libertades políticas, durante los próximos veinte años, y en caso de reincidencia, la misma pena a perpetuidad⁹⁴. La fragilidad de la condición de ciudadano era directamente proporcional al poder de unos cuantos padres de familia y el cura del lugar, autoridades naturales en los distintos espacios de aquella república constituida.

Una última cuestión referida a esta primera instancia electoral merece especial atención y se conecta directamente con las calidades exigidas para el ejercicio activo de la ciudadanía que estipuladas de un modo indeterminado como estaban limitaban la generalidad de aquel principio *a priori* “amplio” que declaraba ciudadanos activos y pasivos a todos los hombres libres, vecinos y residentes de la provincia, mayores de veinticinco años⁹⁵. Ya se ha reflexionado acerca de cómo la condición de propietario era una calidad exigida para que alguien no sufriera la suspensión de sus prerrogativas de ciudadano en su faz activa y pasiva, pues bien, aquí nuevamente los constituyentes cordobeses acudieron a ese indicador económico para limitar aún más el ejercicio pasivo de la ciudadanía estableciendo la prohibición de nombrar como Elector a un ciudadano que no reuniera además una propiedad cuyo valor fuera al menos de mil pesos, le perteneciera a él o a su mujer si fuera casado (Cap. IX, Art. 14). De este modo se perfila con mayor concreción el tipo de individuo, propietario, que participaba realmente en los espacios de poder estratégicos para la vida política del estado provincial⁹⁶.

Una vez designados los correspondientes Electores, a instancia del Poder Ejecutivo provincial que era el encargado de fijar la fecha de reunión, todos ellos debían congregarse en la casa consistorial de la Ciudad de Córdoba para la celebración de la Asamblea Electoral, segunda instancia del procedimiento diseñado por el Reglamento Provisorio de 1821 en materia de elecciones (Cap. X, Art. 1º). Dentro de las primeras veinticuatro horas desde su instalación los Electores debían encargarse de nombrar de su propio seno a un presidente que actuaría como la autoridad del cuerpo durante las deliberaciones (Cap. X, Art. 2º) y de acordar todo aquello que fuera preciso “para

⁹⁴ En este aspecto el Reglamento cordobés se apartó de sus fuentes directas que establecían como pena la privación perpetua del ejercicio de la ciudadanía en la primera oportunidad, Cfr. Estatuto Provisional de 1815, Secc. V, Cap. II, Art. 9º; y Reglamento Provisorio de 1817, Secc. V, Cap. IV, Art. 9º.

⁹⁵ Me refiero a la disposición según la cual “*Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado es ciudadano, pero no entrará en el goce y ejercicio de este derecho hasta que haya cumplido veinticinco años de edad, o sea emancipado; y a más reuna las calidades que en sus respectivos lugares se expresarán en este Reglamento*”, Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEGUNDA, CAP. VI, ART. 1º.

⁹⁶ El liberal Bentham también ensayó un intento de justificación del carácter censitario de la composición del parlamento: “*las pecuniarias para ser elejible se fundan al parecer en una jeneral desconfianza contra los sujetos que no pueden presentar la prenda de una propiedad, y los consideran como menos afectos á la conservación del orden establecido, ó como menos incorruptibles. Las condiciones requeridas para ser elector, llevan el objeto de no conferir un poder político á los que se suponen incapaces de ejercerle con inteligencia ó probidad. Es una precaucion contra la venalidad, la ignorancia, y la cabala*”, BENTHAM, J. (1991) Ob. cit., pp. 62-63.

establecer el buen orden y validez de la elección” (Cap. X, Art. 3º). Una vez resueltas estas cuestiones de orden, previas, procederían sin demora a la elección de los Representantes para el Congreso de la Provincia de modo que en el plazo de tres días ya estuviera concluida y publicados los resultados (Cap. X, Art. 8º *in fine*). Resultarían finalmente designados aquellos sujetos que hubieran obtenido en la votación la mayor cantidad de votos –simple pluralidad– (Cap. X, Art. 4º), decidiéndose por la suerte quién sería Representante cuando entre dos o más candidatos, después de tres elecciones seguidas, se mantuviera un empatamiento de votos (Cap. X, Art. 5º). En todos los casos estaba vedado completamente que un Elector se diera el voto a sí mismo (Cap. X, Art. 8º).

Ahora bien, la cantidad de miembros titulares del Congreso Provincial estaba determinada en función de los resultados que arrojará el censo poblacional a razón de un Representante cada doce mil almas o fracción mayor a ocho mil (Cap. X, Arts. 10º y 11º), lo que supuso, en palabras de AGÜERO, “la introducción del sistema proporcional... [que] tuvo como consecuencia una reducción del número de miembros del cuerpo de representantes en comparación con la práctica anterior que estipulaba uno por curato o cuartel de la ciudad”⁹⁷. Así las cosas, y en apenas un año, de los dieciocho integrantes de la primera representación provincial formada de acuerdo al sistema anterior, se pasó a un Congreso Provincial con apenas cinco miembros titulares en detrimento de la representatividad del cuerpo y de sus posibilidades de correcto y eficaz funcionamiento⁹⁸.

La Constitución cordobesa se apartó de sus fuentes directas con la incorporación de dos disposiciones por lo demás trascendentes. La primera de ellas tenía que ver con la falta de compromiso en la dirección de los asuntos públicos de unos sujetos que no eran políticos profesionales sino estancieros o comerciantes que dedicaban la mayor parte de su tiempo a sus negocios. Con el objetivo de evitar los perjuicios para la administración que provocaban las recurrentes y prolongadas ausencias de los representantes, los constituyentes ordenaron a la Asamblea Electoral la elección de cinco sujetos en calidad de Representantes suplentes que en caso de muerte o “imposibilidad” de alguno de los titulares serían nombrados por el propio Congreso Provincial para llenar, definitiva o provisoriamente según el caso, el escaño vacante (Cap. X, Arts. 6º y 7º). La segunda de las disposiciones tenía una consecuencia significativa respecto de una cuestión tan básica

⁹⁷ AGÜERO, A. (2012) Ob. cit.

⁹⁸ “El número es una consideración de mayor gravedad. El ministerio legislativo exige prendas y virtudes que no son comunes, y que por desgracia apenas se hallan en una numerosa reunión de individuos. La legislación requiere una variedad de conocimientos locales que no puede conseguirse mas que en un crecido cuerpo de diputados [...] Una pequeña junta de legisladores puede tener intereses particulares, y hacer leyes contra el interés general. Fácil seria al poder legislativo el someter á su influjo la mayoría; pero el número es un preservativo contra este peligro [...] Últimamente, si el número de los diputados fuera cortísimo, la suma estension de los distritos electorales haria embarazosas las elecciones; y reduciendo casi á nada el valor de un voto, disminuiría proporcionalmente la autoridad de los electores sobre sus diputados, al mismo tiempo que aumentaria el valor relativo de las funciones...”, BENTHAM, J. (1991) Ob. cit., p. 63.

como la concepción acerca de la representación⁹⁹. La opción de los constituyentes cordobeses en esta materia marcó un nuevo horizonte respecto de la tradición política que tanto en sus fuentes directas como en la práctica local inmediatamente anterior había estructurado la relación representante-representado a partir del auxilio de un instrumento jurídico privado como el mandato imperativo¹⁰⁰. Al incluir una cláusula que obligaba a los Electores a otorgar “*a todos y a cada uno de los representantes poderes amplios*” (Cap. X, Art. 9º), sin reservas de ningún tipo, instrucciones ni adscripciones territoriales, se daría un paso fundamental en la construcción de un sujeto político unitario. Mucho más cerca de los diplomas que de los poderes tradicionales, ya ningún enfrentamiento entre los representantes y otras autoridades se resolvió apelando a la ilegitimidad de aquéllos por apartamiento de sus poderes. A partir de entonces, el Congreso creado por la Constitución funcionaría como un órgano representativo de toda la Provincia de Córdoba en su conjunto, unificada en el plano espacial¹⁰¹.

Ser Representante en la Córdoba del Reglamento Provisorio de 1821 no era un objetivo al que todos los habitantes de la provincia podían aspirar. Ya se vio cómo las calidades exigidas a lo largo del texto para el ejercicio de la ciudadanía iban excluyendo sujetos y achicando la potencial masa humana que finalmente habría de dirigir los destinos de la comunidad. En el plano económico, a los cuatrocientos pesos exigidos por la Constitución para no sufrir la suspensión del ejercicio de los derechos de ciudadano y a los mil pesos de propiedad requeridos para poder ser designado Elector, se sumaba otra nueva restricción que reservaba para las familias más ricas la expectativa de ocupar los puestos de poder. Entre las calidades que el texto constitucional demandaba para que un habitante de la Provincia, con al menos siete años de ciudadanía, pudiera recibir el nombramiento como Representante, estaba la de tener “*un fondo de dos mil pesos siendo soltero... un compensativo o rédito equivalente al referido fondo*” o, en última instancia, profesar “*algún arte liberal con aprobación pública de alguna Universidad, y si fuere casado, aunque pertenezcan a la mujer*” (Cap. XI, Art. 1º). El juicio valorativo sobre las calificaciones o aptitud de los Representantes nombrados estaba reservado al propio cuerpo al que se incorporarían (Cap. XI, Art. 2º y Cap. XIII, Art. 14º). El carácter marcadamente censitario de este tipo de dispositivos constitucionales aseguraban desde la superficie textual del Reglamento, “la conservación de privilegios y derechos de las elites

⁹⁹ Sobre este asunto de la representación política, véase el capítulo “*Génesis y Sanción del Reglamento Provisorio de 1821*” donde se analiza con mayor detalle la complejidad que supuso interpretar la extensión de los poderes que los integrantes de la Soberana Asamblea habían presentado ante el cuerpo representativo.

¹⁰⁰ El Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado de 1817 decía textualmente que a los Diputados que representarían a cada provincia ante el Congreso General se le conferirían “*poderes e instrucciones*” donde deberían figurar expresamente las causas que justificaban el envío de menos representantes que los que de acuerdo a la proporción establecida (uno cada quince mil almas) correspondían al distrito (Secc. V, Cap. V, Art. 9º).

¹⁰¹ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 84 y ss., se explaya en esta consideración recalcando que la solución adoptada por los constituyentes cordobeses transforma a la Provincia de Córdoba en “*distrito único*” a efectos electorales, a pesar de que el error de copiar literalmente el artículo de sus fuentes directas –textos con vocación rioplatense– pudiera dar lugar a confusión.

(...) cuya consecuencia natural fue que la elección recayera en los propietarios (comerciantes, letrados y magistrados, en su mayoría propietarios)”, sin que sea necesario entrar en el maleable plano de la práctica política¹⁰².

II. 2. 2. 3. Elecciones para los Cabildos

La ingeniería electoral en el Reglamento Provisorio de 1821 no se agotaba con el complejo procedimiento para la selección de los integrantes del Congreso Provincial. Constitucionalizados como estaban en el texto los Ayuntamientos, toda una serie de disposiciones se ocupaban de determinar el modo en que los empleos concejiles debían ser ocupados¹⁰³. Desde el principio se declaraba la elección popular de los capitulares, (Cap. XXIV, Art. 1º), no obstante lo cual, tenían vigencia todas las limitaciones al ejercicio de la ciudadanía que el propio documento constitucional establecía en otros momentos de su articulado, con la consecuente exclusión de gran parte de la población en el disfrute de las libertades políticas, aunque no se las mencionara explícitamente¹⁰⁴. La elección era competencia del pueblo, pero ese pueblo habilitado para elegir a las autoridades de la república que se encargarían de gestionar el gobierno doméstico de la comunidad no estaba compuesto por todos y todas, y es que además de recogerse las exclusiones tradicionales, debido a la existencia de un nuevo soberano, la Provincia, el Reglamento Provisorio volvía a acotar la integración del cuerpo capitular al reducido ámbito urbano.

Desde el año 1815, el cabildo de Córdoba había ampliado su base de representación incluyendo –aunque controladamente– a los distritos rurales de la campaña, pero la formación de un nuevo órgano representativo de la soberanía provincial, como pretendía ser el Congreso con sede en la ciudad, quitaba al cabildo la función de representar toda la jurisdicción. En consecuencia, “el sistema electoral para los cabildos previsto en el Reglamento constitucional era... algo más restrictivo que el que regía desde 1815”¹⁰⁵. Según el nuevo texto, tanto en la ciudad como en las villas de la provincia en las que hubiera Ayuntamientos, la convocatoria a elecciones para cubrir los cargos concejiles no debía exceder el recinto de ellas (Cap. XXIV, Art. 1º), de modo tal que, si bien se reconocía a los ciudadanos de la campaña la facultad de participar

¹⁰² AYROLO, V. y ROMANO, S. (2001) “Poder y representación política en Córdoba, Argentina, a mediados del siglo XIX”, en *Revista História UNISINOS*, Sao Leopoldo, Brasil, Nro. 4, V. 5, julho-dezembro, pp. 15-49.

¹⁰³ Además de algunas disposiciones aisladas a lo largo de la constitución con menciones tangenciales, dos capítulos estaban exclusivamente dedicados al cuerpo capitular, uno a las “Elecciones de los Cabildos” (Cap. XXIV) y otro al detalle de las atribuciones de los Ayuntamientos (Cap. XXV, innominado). Cfr. *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAPS. XXIV y XXV.

¹⁰⁴ Cobran relevancia los artículos que ya han sido analizados *supra* al tratar sobre la ciudadanía como la habilitación para ejercer cargos de República a los extranjeros con diez años de residencia en la Provincia que hubieran renunciado a toda otra ciudadanía (Cap. VI, Arts. 3º y 4º) y la limitación a los descendientes de africanos, hasta el cuarto grado, para el ejercicio de dichos cargos (Cap. VI, Art. 5 *in fine*).

¹⁰⁵ AGÜERO, A. (2012) Ob. cit.

voluntariamente en el acto electoral (Cap. XXIV, Art. 2º), el cabildo ya no podría pretender el ejercicio del poder político provincial.

Al igual que para las elecciones de Representantes, el procedimiento diseñado por la Constitución era indirecto escalonado en dos grados. En una primera instancia, la ciudad o villa se debía dividir en cuatro secciones en cada una de las cuales los ciudadanos comprendidos en ella votaban por un total de cinco Electores sin importar el número de vecinos que residieran en el distrito (Cap. XXIV, Art. 3º), lo que significó abandonar para el caso de las elecciones capitulares el sistema proporcional de representación. Un capitular asociado a un alcalde de barrio y un escribano –si no hubiera escribano se suplía con la presencia de dos vecinos en calidad de testigos– eran los encargados de velar por el correcto desenvolvimiento del acto electoral en su respectiva sección (Cap. XXIV, Art. 4º). Seguidamente, todas las autoridades de cada sección debían trasladarse a la Sala capitular donde en presencia del Alcalde de Primer voto se realizaba el escrutinio general y proclamaba como Electores a los cinco ciudadanos que hubieran obtenido la mayor cantidad de votos (Cap. XXIV, Art. 5º). Un mes más tarde tenía lugar la reunión de los Electores en la sede del Ayuntamiento para la designación del cabildo entrante para el año siguiente. Era esta reunión la segunda instancia o grado de las elecciones capitulares¹⁰⁶.

II. 2. 2. 3. Balance sobre el sistema electoral

El análisis textual del diseño constitucional cordobés en materia electoral permite hacer varias observaciones en torno a la cultura político-jurídica imperante en la provincia en un contexto de transición. La construcción de un nuevo estándar de legitimidad política una vez desaparecida la del monarca español se fundó discursivamente sobre la categoría de la soberanía popular¹⁰⁷. Como en el resto del mundo hispano, esta nueva comprensión del poder obligó a los actores locales a pensar y poner en uso mecanismos institucionales coherentes para reclutar al personal político¹⁰⁸. La innovación que este tipo de prácticas implicaba fue una de las razones que llevó a introducir en las primeras

¹⁰⁶ El detalle del procedimiento electoral en el Reglamento era tal que se indicaba por medio de disposiciones constitucionales los días en que debían realizarse cada una de las dos instancias de votación: el 15 de noviembre se elegían Electores y el 15 de diciembre éstos nombraban a los integrantes del Cabildo para el año siguiente, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXIV, ARTS. 4 y 6.

¹⁰⁷ En este exacto sentido se ha pronunciado CHIARAMONTE, “caducada la legitimidad de la monarquía, el nuevo poder que se intentaba erigir en su remplazo debía exhibir su propia legitimidad para poder reclamar el reconocimiento de la sociedad. Y esa legitimidad no podía ser otra que la fundada en la voluntad del ‘pueblo’, al que en el supuesto jurídico predominante había retrovertido la soberanía al cesar la del monarca”, CHIARAMONTE, J. (1995b) “Vieja y nueva representación: los procesos electorales en Buenos Aires, 1810-1820”, en ANNINO, A. (coord.) *Historia de las Elecciones en Iberoamérica: Siglo XIX, de la formación del espacio político nacional*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, p. 20.

¹⁰⁸ La expresión es de SARTORI, G. (1999) “La ingeniería constitucional y sus límites”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Nro. 3, pp. 79-87. Disponible en <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:TeoriayRealidadConstitucional-1999-3-15800&dsID=PDF>.

Constituciones escritas toda una serie de disposiciones bien detalladas en la materia – procedimientos, plazos, autoridades, recursos–, cláusulas que luego desaparecerán de los textos constitucionales para ubicarse en leyes electorales. Al tratarse precisamente de un momento de cambio e intento de construcción de un nuevo orden político, la potencialidad de las categorías modernas que estructuraron parte del lenguaje de los constituyentes encontró su límite en la cultura jurídica desde la cual esas categorías se pensaban e interpretaban. En este sentido, la definición de la ciudadanía “a partir del concepto de la vecindad que fue la antigua categoría política de la tradición hispana”¹⁰⁹, facilitó, por ejemplo, la exclusión de una parte importante de la población de la noción de pueblo en tanto que titular del poder político y la conservación de las jerarquías sociales heredadas como estrategia de las elites para el mantenimiento del orden social tradicional¹¹⁰.

Incluso la integración política del mundo rural con una decisión tan “novedosa” como la extensión del sufragio a los habitantes de la campaña, se condicionaba a través de herramientas de control de la participación política fuera de las ciudades en manos de las juntas parroquiales compuestas por jueces rurales, curas y vecinos de probidad¹¹¹. Todos estos factores llevaron a la consagración de un mundo de derechos desiguales y el diseño

¹⁰⁹ ANNINO, A. (1995) “Introducción”, en ANNINO, A. (coord.) (1995a) Ob. cit., p. 17.

¹¹⁰ “Uno de los principales objetivos de la elite cordobesa en el poder fue intentar que no se desmoronase el orden social. Educados en los principios de una escolástica remozada, estos hombres insistieron en mantener la estabilidad como principio del orden social y para ello construyeron una imagen de ese orden, fundándolo en una identidad local preexistente y un *modelo ciudadano que implicaba la convergencia de virtudes cívicas y principios religiosos*, diferenciándose explícitamente del resto de las provincias y en especial de Buenos Aires”, AYROLO, V. (2007a) Ob. cit., p. 170. La exigencia de toda una serie de calidades en la letra del Reglamento cordobés de 1821 para el ejercicio de la ciudadanía, “reforzaban un sistema asentado sobre jerarquías y desigualdades sociales del orden colonial naturalizadas y aún vigentes. Así, la representación política se presenta asociada a, o como extensión de, la condición de propietario y/o a un estatuto social adquiridos con anterioridad”, ROMANO, S. (2010) “Las nuevas fuentes de legitimación del poder y sus protagonistas en la configuración del sistema republicano y representativo de la Provincia de Córdoba”, en TCACH, C. (coord) *Córdoba Bicentenario. Claves de su historia contemporánea*. Editorial de la UNC – CEA, Córdoba, pp. 15-35, p. 6.

¹¹¹ “Las juntas de parroquia, formadas por todos los ciudadanos vecinos y en residencia efectiva en ella, debían reunirse tras acudir a una misa solemne de Espíritu Santo, con sermón adaptado a las circunstancias incluido, estar presididas por el jefe político, alcaldes o regidores y contar con la asistencia del cura párroco. Eran estas juntas las que decidían, por una parte, si había habido algún manejo previo para hacer caer la elección en determinada persona —excluyendo en el acto a los responsables o a los difamadores— y, por otra, resolvían cualquier duda sobre la calidad de cualquier persona para poder votar. En ambos casos «lo que decidiera se ejecutará sin recurso alguno por esta vez y para este solo efecto.» Dicho de otro modo, la junta de parroquia actuaba como un tribunal electoral sin posibilidad alguna de apelación sobre sus decisiones. La presencia del cura párroco en esa junta, expresamente querida por la constitución, podía resultar por ello determinante pues por su veredicto habría de pasar en no pocos casos la decisión de dudas sobre el avendamiento de personas”, PORTILLO, J. (2007) Ob. cit., p. 23.

Como ha dicho Cansanello respecto del Estatuto de 1815 que establecía por primera vez en el Río de la Plata la celebración de elecciones en la campaña, si bien “el sistema de representación política en desarrollo era de carácter amplio y servía a la incorporación de los habitantes a la nueva vecindad, no modificaba las jerarquías y sujeciones interpersonales heredadas del orden hispano, más bien las articulaba, en una modalidad de construcción en las que sólo las cabezas decidían (padre de familia, patrón, amo)”, CANSANELLO, C. (2008) “Ciudadano/Vecino”, en GOLDMAN, N. (ed.) *Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850*, Prometeo, Buenos Aires, p. 204.

de un sistema electoral que permitía transformar “las jerarquías sociales en jerarquías políticas”¹¹². Incluso para sus apologetas, el Reglamento Provisorio de 1821 adoptó en materia electoral un verdadero régimen antidemocrático¹¹³. Como ha sentenciado con claridad COSTA, “la democracia es, ciertamente, representativa, pero el mecanismo representativo al que ella hace referencia exige introducir en la escena política a todos los sujetos, sin excepción. Resultan así duramente rebatidos los dos principales criterios de inclusión (y de exclusión) política consagrados por la tradición: la propiedad y el género”¹¹⁴.

II. 3. Derechos y Garantías

Como bien se sabe, las declaraciones de derechos en el mundo hispano no fueron una consecuencia necesaria de la quiebra institucional, al punto que la Constitución de la Monarquía sancionada en marzo de 1812 no contenía un capítulo dedicado exclusivamente a aquéllos¹¹⁵. A diferencia del texto gaditano, los documentos constitucionales hispanoamericanos incorporaron por lo general un apartado donde, con mayor o menor generosidad, se declaraban cuáles eran los derechos del hombre en sociedad. Esos catálogos, de fuerte corte iusnaturalista, bebieron fundamentalmente de los modelos constitucionales sancionados después de las revoluciones que tuvieron lugar a finales del setecientos que reconocieron, a su vez, el antecedente del *Bill of Rights* inglés del año 1689¹¹⁶. Aunque la Constitución norteamericana de 1787 no contó con una declaración de derechos, en el período que transcurrió entre 1776 y esa Constitución, los diferentes estados que emergieron a partir de las trece colonias británicas sí incorporaron a sus textos constitucionales toda una serie de derechos cuya titularidad correspondía a los hombres. Unos años más tarde, en 1791, diez enmiendas a la Constitución Federal

¹¹² ROMANO, S. (2010) Ob. cit., p. 10.

¹¹³ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 76, dice que “el Reglamento de Córdoba, sancionaba el régimen más antidemocrático, quitando el derecho al sufragio al que no tenía propiedad y al obrero, haciendo la clasificación más odiosa entre ciudadanos”.

¹¹⁴ COSTA, P. (2004) “El problema de la representación política: Una perspectiva histórica”, en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, Nro. 8, pp. 15-61.

¹¹⁵ Lo cual no quiere decir que no se reconocieran derechos, sólo que en lugar de estar todos reunidos en un mismo apartado se encontraban dispersos en el texto, véase PORTILLO, J. (2000) *Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*, Boletín Oficial del Estado/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

¹¹⁶ Un trabajo que plantea de manera muy interesante los complejos contextos en los que se gestaron las declaraciones de derechos tanto en Norteamérica como en Francia es el de LYNN, H. (2007) *La invención de los derechos humanos*, Tusquets, Barcelona. Para obras específicamente dedicadas a la reconstrucción de una historia del constitucionalismo moderno que abordan la dimensión de los derechos y las garantías, puede consultarse MATEUCCI, N. (1998) *Organización del poder y libertad: historia del constitucionalismo moderno*, Trotta, Madrid; FIORAVANTI, M. (1996) Ob. cit; CRUZ VILLALÓN, P. (1989) “Formación y evolución de los Derechos Fundamentales”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, Nro. 25, pp. 35-62; y la obra de GRIMM, D. (2006) *Constitucionalismo y Derechos Fundamentales*, Trotta, Madrid.

ampliaron el articulado del documento incorporando derechos (*Bill of Rights*)¹¹⁷. En Francia al mes siguiente de iniciada la revolución, el 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional sancionó una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y años más tarde, otra se incorporó a la Constitución de 1793. Tanto en uno como en otro contexto las revoluciones políticas que precedieron al momento constitucional habían pretendido transformar las bases del orden social; además de declaraciones de derechos, se diseñaron toda una serie de dispositivos institucionales que consolidaban un cierto significado de los conceptos incluidos en aquellas declaraciones, llegando a adquirir una extensión un poco más coherente con las bases y los principios fundamentales del nuevo orden.

Sin embargo, la importación de tales formulaciones en contextos que no habían experimentado previamente un violento proceso de revisión de los cimientos del orden no tenía por qué aparejar, necesariamente, las mismas consecuencias que en sus lugares de producción. Y es que la estandarización de un determinado tipo de lenguaje normativo no implica sin más la correlativa estandarización de los derechos ya que, por ejemplo, declarar la libertad para imprimir ideas por la prensa no tiene –ni puede tener– el mismo alcance en una comunidad donde se reconoce la libertad de cultos, que en otra comunidad donde se consagra la intolerancia religiosa castigándose toda opinión contraria a la de Jesucristo como una violación a las leyes fundamentales del país. Por otra parte, como ha puesto de manifiesto AGÜERO, el criterio selectivo con que se incorporaron sólo algunos artículos de un determinado modelo constitucional y se descartaron otros, pudo transformar el sentido funcional de los conceptos y el significado normativo que la formulación importada tenía en su contexto originario¹¹⁸.

Así como el “orden de los poderes” en el documento constitucional, tal como se verá, no era aleatorio, el “orden de los derechos” tampoco. En ese sentido, resulta altamente significativo y un claro indicador de la concepción cultural del orden que el

¹¹⁷ Sobre la falta ausencia de declaración de derechos en el texto de 1787 y su posterior inclusión puede consultarse la obra de RAKOVE, J. (1996) *Original meanings. Politics and ideas in the making of the constitution*, Alfred A. Knopf, New York.

¹¹⁸ Cfr. AGÜERO, A. (2010b) Ob. cit., p. 283, nota 26. Por otra parte, el mismo autor ha afirmado que “*en el periodo de transición podremos encontrarnos también con formulaciones novedosas que, sin embargo, son leídas en función de la cultura tradicional. En este caso estaremos ante situaciones de continuidad implícita y es un fenómeno que explica la nula eficacia de los textos patrios de la primera mitad del XIX que hablan de derechos individuales en el marco de una cultura que, arraigada a un imaginario corporativo, oblitera la posibilidad de asumir una noción abstracta de individuo como centro de la axiología jurídica y de crear, en consecuencia, dispositivos institucionales eficaces para asegurar su vigencia*”, Agüero, A. (2010a) “Formas de continuidad del orden jurídico. Algunas reflexiones a partir de la justicia criminal de Córdoba (Argentina), primera mitad del siglo XIX”, en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En línea], Debates, 2010. Disponible en <http://nuevomundo.revues.org/59352>.

Además de los propios textos revolucionarios, cabe desatacar la circulación de ciertas obras referidas a los debates que tuvieron lugar en torno a los primeros momentos constitucionales producidos a finales del setecientos como, por ejemplo, la de THOMAS PAINE *La independencia de la costa firme justificada...* cit. O la obra de Mably *De los Derechos y Deberes del Ciudadano* traducida al castellano en el Cádiz de las Cortes, cfr. Elisa Martín-Valdepeñas Yagüe, Beatriz Sánchez Hita, Irene Castells Oliván y Elena Fernández García (2009) “Una traductora de Mably en el Cádiz de las Cortes: la marquesa de Astorga”, en *Historia Constitucional*, Nro. 10, pp. 63-136. Disponible en <http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/226>

primer capítulo de derechos estuviera dedicado a los “Derechos del Cuerpo Social”, es decir, la primera expresión de derechos en el texto constitucional eran los de la Provincia como sujeto colectivo¹¹⁹. El texto cordobés traía además dos capítulos dedicados exclusivamente a los derechos del hombre “en sociedad”¹²⁰. Pese a ello, a lo largo del articulado de la Constitución se hallaban también formulaciones de derechos en clave de garantías o limitaciones a las facultades de alguno de los poderes del estado¹²¹. Además, reservaba dos de sus treinta y un capítulos a establecer la contracara de los derechos: los deberes, tanto de los hombres como del cuerpo social. En este aspecto, el constitucionalismo católico cordobés estuvo más cerca del *Termidor* de la revolución constitucionalizado en 1795 que de sus comienzos¹²². La inclusión del catálogo de deberes no era un mero recurso retórico ya que su definición y extensión operaba como una verdadera herramienta de interpretación del significado y alcance atribuible a los derechos declarados¹²³.

En sintonía con el resto de textos hispanoamericanos, que en este punto se alejaron del modelo gaditano de constitución, el primer movimiento de los constituyentes consistió en enunciar y definir de modo sucinto aunque determinante los “Derechos que competen al hombre en Sociedad”. A diferencia de la mayoría de los documentos neogranadinos o novohispanos que habían importado directamente formulaciones del primer constitucionalismo francés –Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; Declaración del mismo nombre de 1793 incorporada en la Constitución de la primera república francesa–, el Reglamento de Córdoba mencionaba seis derechos como

¹¹⁹ Otros textos constitucionales provinciales traían similar apartado, que precedía a la declaración de derechos de los ciudadanos. La Constitución tucumana de 1820 tenía un capítulo dedicado a los *Derechos de la Provincia* (Secc. Cuarta, Cap. Primero), antes del correspondiente a los *Derechos Particulares* (Secc. Cuarta, Cap. Segundo); el Estatuto Provisorio Constitucional entrerriano de 1822 respetaba el mismo orden (*Derechos de la Provincia*, Secc. 10; *Derechos Particulares*, Secc. 11).

¹²⁰ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. PRIMERA, CAP. II, “DERECHO PÚBLICO: Derechos que competen al hombre en Sociedad”; y SECC. OCTAVA, CAP. XXIII, “Declaración de Derechos”.

¹²¹ Era el caso de los Capítulos del Reglamento Provisorio dedicados a la “Ciudadanía” (SECC. TERCERA, CAP. VI y SECC. CUARTA, CAP. VII); a los “límites del Poder Ejecutivo” (SECC. SEXTA, CAP. XVI); y a la “Administración de Justicia” tanto “en lo Civil” como “en lo Criminal” (SECC. SÉPTIMA, CAPS. XIX y XX; y SECC. OCTAVA, CAP. XXI).

¹²² “Soberanía popular y concentración de poder: contra estos dos fantasmas reaccionaron los thermidorianos, responsables de la caída del gobierno jacobino, quienes entendieron que los objetivos de la Constitución de 1795 pasaban por frenar la revolución, poner fin a la permanencia del poder constituyente y regular definitivamente el ejercicio del poder de forma estable (...) El nuevo texto contuvo una importante novedad puesto que la *Declaración* no fue sólo de *derechos*, sino también de *deberes del hombre y del ciudadano*: así, además del someterse a la ley y servir a la patria, los ciudadanos debían ser buenos hijos, padres, hermanos, amigos y esposos (art. 4)”, LORENTE, M. (2012b) “Constitucionalismo antiguo y moderno”, en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coord.) Ob. cit., pp. 289-329, p. 326. Sobre la inclusión de los “deberes” en los textos constitucionales franceses y sus consecuencias puede consultarse BESABE, N. (2011) “«Derechos del hombre» y «Deberes del ciudadano» en la encrucijada: los lenguajes políticos de la revolución francesa y el abad de Mably”, en *Historia Constitucional*, Nro. 12, págs. 45-98. Disponible en <http://www.historiaconstitucional.com>

¹²³ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. PRIMERA, CAP. III, “Deberes del hombre en Sociedad”; y SECC. SEGUNDA, CAP. IV, “Deberes del cuerpo Social”.

los propios del hombre en Sociedad. A la tradicional tétrada inserta en las declaraciones compuesta por los derechos a la libertad, igualdad, seguridad y propiedad, la Constitución cordobesa sumó los derechos a la vida y a la honra como lo hicieron también los textos rioplatenses de 1815 y 1817, definiéndolos en términos muy similares¹²⁴. Apartándose de estos ensayos, la definición que de los cuatro primeros hicieron los constituyentes locales siguió casi textualmente al texto venezolano de 1811, indicio que apoya la hipótesis propuesta acerca de su calidad de fuente parcial directa del Reglamento provincial de 1821¹²⁵. En definitiva, el resultado fue un largo artículo donde se proclamaban y definían los derechos del hombre en sociedad del modo que sigue:

*“Los derechos del hombre en Sociedad, son la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad; el primero tiene un concepto tan claro, tan inequívoco y uniforme que no ha menester otras explicaciones; el segundo resulta de la buena opinión que cada uno se adquiere por la integridad y rectitud de sus procedimientos llenando todos los deberes de un hombre de bien y de un buen ciudadano; la libertad es la facultad de hacer todo lo que no daña a los derechos de otros individuos, ni al cuerpo de la Sociedad; su justo y honesto ejercicio consiste en la fiel observancia de la ley; de otro modo, será arbitrario y destructor de la misma libertad. La igualdad consiste en que la ley sea una misma para todos los ciudadanos sea que castigue ó que proteja. La propiedad es el derecho que cada uno tiene de gozar y disponer de los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria. La seguridad existe en la garantía y protección, que da la Sociedad a cada uno de sus miembros para que no se viole la posesión de sus derechos, sin que primero se verifiquen aquellas condiciones que están señaladas por la Ley para perderla”*¹²⁶.

Seguidamente, se declaraba que en todo el territorio del Estado, todo hombre gozaría de estos derechos, sin importar que fuera o no “ciudadano”, planteando además una dicotomía que invita a reflexionar sobre el sustrato a partir del cual se construyeron en este período las identidades políticas: “sea Americano, o extranjero”¹²⁷. Haciendo un pormenorizado análisis de distintas fuentes rioplatenses durante la primera mitad del Siglo XIX, CHIARAMONTE ha demostrado cómo tras el derrumbe del imperio español “la

¹²⁴ Idéntica redacción en el Estatuto Provisional de 1815, Secc. Primera, Cap. I, Art. 1º y el Reglamento Provisorio de 1817, Secc. I, Cap. I, Art. 1º: “el primero [vida] tiene un concepto tan uniforme entre todos, que no necesita de más explicación. El segundo [honra] resulta de la buena opinión que cada uno se labra para con los demás por la integridad y rectitud de sus procedimientos”.

¹²⁵ Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, Capítulo Octavo, Sección Segunda: “La libertad es la facultad de hacer todo lo que no daña a los derechos de otros individuos, ni el cuerpo de la Sociedad, cuyos límites sólo pueden determinarse por la ley, porque de otra suerte serían arbitrarios y ruinosos a la misma libertad” (Art. 153); “La igualdad consiste en que la ley sea una misma para todos los Ciudadanos, sea que castigue o que proteja. Ella no reconoce distinción de nacimiento, ni herencia de poderes” (Art. 154); “La propiedad es el derecho que cada uno tiene de gozar y disponer de los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria” (Art. 155); “La seguridad existe en la garantía y protección que da la Sociedad a cada uno de sus miembros sobre la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades” (Art. 156). La misma redacción puede encontrarse en el Reglamento para el Gobierno Provisorio de la Provincia de Pamplona, Tunja (Nueva Granada), Arts. 111 y ss. Disponible en <http://modern-constitutions.de/CO-PA-1815-05-22-es-e.html>

¹²⁶ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. PRIMERA, CAP. II, ART. 1º.

¹²⁷ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. PRIMERA, CAP. II, ART. 2º.

inexistencia de un soporte social definido para los proyectos de nuevos estados nacionales” redujo las formas de identidad política a una diada de conceptos con preeminencia en los textos constitucionales: por una parte, el sentimiento americano, y por otra, el provincial, como “algo distinto del sentimiento lugareño que coexistía con el español americano en tiempos coloniales (...) una forma política del sentimiento colectivo que, basada en el sentimiento lugareño, es proyectado ahora al nivel de una pretensión de manejo autónomo del poder. Conciencia expresada en las afirmaciones de *independencia* y *soberanía* contenida en los textos constitucionales provinciales”¹²⁸.

Hacia el final del Reglamento Provisorio, opción de técnica constitucional que ha sido criticada por su desorden¹²⁹, se ubicaba el Capítulo XXIII específicamente denominado “Declaración de derechos”. En él se hallaba un verdadero listado de principios, garantías y derechos individuales expresados en el moderno lenguaje del constitucionalismo revolucionario. Amplias formulaciones normativas que rápidamente pueden filiarse con las disposiciones más célebres de las primeras cartas francesas e incluso algunas declaraciones incorporadas en las constituciones estatales norteamericanas que precedieron a Filadelfia¹³⁰. Esta relativa similitud en el plano meramente textual ha llevado a algunos lectores a proclamar sin más que en el texto cordobés “los derechos individuales se reconocen con larga generosidad”¹³¹. Sin embargo, si por una parte se cotejan los artículos de este capítulo con el resto de la estructura del orden diseñada por los constituyentes, y por otra se tiene en cuenta la importancia de los elementos básicos de la cultura jurídica local como, por ejemplo, el peso absoluto de la religión católica, aquellas afirmaciones tan genéricas acerca de la Constitución cordobesa pierden su fuerza y merecen ser problematizadas.

¹²⁸ CHIARAMONTE, J. (1989a) “Formas de identidad en el Río de la Plata luego de 1810”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani*, Tercera Serie, Nro. 1, pp. 71-92.

¹²⁹ Cfr. CIMA, A. (1960) Ob. cit., p. 78.

¹³⁰ Formulaciones similares a las cordobesas, al menos en cuanto al espíritu que las informa, pueden encontrarse en la Declaración de Derechos del Estado de Virginia de 1776, las Constituciones del Estado de Massachusetts de 1780 o Pennsylvania de 1776. Los textos en castellano pueden consultarse en la obra de GRAU, L. (2009) *Orígenes del constitucionalismo americano*, corpus documental bilingüe, Vol. 3, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid. Mucho más parecidas son las disposiciones francesas de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano del 24 de junio de 1793 incorporada a la Constitución del mismo año, disponible en <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-du-24-juin-1793.5084.html>.

¹³¹ CIMA, A. (1960) Ob. cit., p. 80. Otros autores como OLCESE van más allá, “El Reglamento Constitucional en verdad sorprende por su modernidad y por su liberalismo ya que, el capítulo que denomina *Declaración de Derechos* (cap. XXIII), está enderezado a la *protección del individuo contra los avances del Estado* tal como sucede en la Constitución Histórica Argentina (1853/1860), tomada al modo del contenido en las Primeras Enmiendas de la Constitución de los EE.UU. (que allí se denomina *Bill of rights*)”, OLCESE, J. (2012) “El Gobernador Bustos y la primera Constitución de la Provincia de Córdoba (1821)”, en *Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba*, p. 2. Disponible en <http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/institutos/instituto-de-historia-del-derecho/doctrina>.

II. 3. 1. Derechos y ley

Muchas de las disposiciones que en esta declaración de derechos se pueden leer, así como otras que están incluidas en el Capítulo dedicado a la Administración de Justicia en lo Criminal¹³², tienen una valencia indisolublemente ligada al significado que se adscriba al concepto de ley¹³³. La declaración cordobesa comenzaba afirmando a los miembros del Estado la protección del goce de los derechos ya definidos a la vida, la reputación, la libertad, la seguridad y la propiedad, indicando que nadie podía ser privado de ellos “*sino conforme a las Leyes*” (Cap. XXIII, Art. 1º). La formulación genérica del principio de legalidad según el cual “*Ningún habitante del Estado estará obligado a hacer lo que no manda ley clara y expresamente, ni privado de lo que ella del mismo modo no prohíbe*” (Cap. XXIII, Art. 3º), introducía en el ordenamiento el principio básico de la libertad jurídica demarcando como zona permitida toda el área de conductas no prohibidas. El crimen se definía con exclusividad como “*la infracción a la Ley que está en entera observancia*” (Cap. XXIII, Art. 10º) y toda sentencia en causas criminales para que se reputara válida debía “*ser pronunciada por el texto expreso de la ley*” siendo responsable el magistrado que así no lo hiciere (Cap. XXI, Art. 6º).

Ahora bien, el valor normativo de estos enunciados no era –ni podía ser– el mismo en un contexto donde por ley se entendiera un acto humano, producto de una autoridad constituida, con caracteres de generalidad y abstracción, que en otro en el cual, por muy moderno que fuera el lenguaje en el que estuvieran expresadas, “*las leyes [tendían] a quedar atrapadas en la tradición normativa acumulada y sometidas... a la tópica jurisprudencial*”¹³⁴. En esa línea de principio, tampoco era igual un orden jurídico exclusivamente legal que otro cuya trama estaba compuesta, además, por otros discursos de carácter normativo como la religión¹³⁵. El documento cordobés ni siquiera incluyó en su articulado –lugar común en los textos coetáneos– un capítulo que regulara la formación y sanción de las leyes¹³⁶. Muy por el contrario, estableció una cláusula general

¹³² *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXI.

¹³³ Para ayudar a ilustrar el trayecto recorrido por este término y cómo en función del contexto temporal y espacial ha ido variando la extensión del significado, puede consultarse el trabajo de AGÜERO, A. (2007a) “Historia del derecho y categorías jurídicas. Un ejercicio de crítica conceptual”, en *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid* (RJUAM), Nro 16, pp. 135-144. Disponible en http://www.uam.es/otros/rjuam/numero_16.html.

¹³⁴ GARRIGA, C. (2012) “Legislación y Códigos”, en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coords.) Ob. cit., pp. 407-449, p. 418.

¹³⁵ En el lenguaje de los operadores del derecho partícipes de una cultura jurídica tradicional “*religion and law made up a single textual field from which it was possible to derive normative arguments to be used in a secular court... The reference to a normative field like the Divine laws opened an inexhaustible source of potential causes of incriminations beyond the specific definitions introduced by human positive laws*”, AGÜERO, A. (2013a) “Law and Criminal Justice in the Spanish Colonial Order: the Problematic Enforcement of the Legality Principle in the Early National Law in Argentina”, en MARTYN, G., MUSSON, A. y PIHLAJAMÄKI, H. (eds.) (2013) *From the Judge's Arbitrium to the Legalti Principle. Legislation as a Source of Law in Criminal Trials*, Duncker & Humblot, Berlín, pp. 229-251, p. 236.

¹³⁶ Sólo a modo de ejemplo, la Constitución de Cundinamarca del año 1811 en el apartado dedicado al Poder Legislativo (Título V) se detalla minuciosamente el procedimiento para la discusión y sanción de las leyes (arts. 13 y ss.). La Constitución de Tunja, del mismo año, contenía todo un capítulo denominado

que mantuvo inalterada la mayor parte del orden jurídico anterior a su entrada en vigencia: *“Hasta que la constitución determine la conveniente, subsistirán todos los códigos legislativos, cédulas, Reglamentos y demás disposiciones generales y particulares del antiguo Gobierno Español, que no estén en oposición directa o indirecta con la libertad e independencia de Sud América, ni con este reglamento y demás disposiciones que no sean contrarias a él, libradas por el Gobierno General de las Provincias, desde el veinticinco de Mayo de mil ochocientos diez.”*¹³⁷.

II. 3. 2. Derechos y justicia

Partiendo de aquel presupuesto básico acerca de la composición del ordenamiento jurídico, todavía hay otro elemento fundamental que relativizaba el alcance de algunos de los derechos y garantías declarados por la Constitución: el papel de los jueces y el modo en que éstos administraban justicia. Leyendo globalmente el Reglamento Provisorio es posible detectar diseminadas a lo largo del texto una serie de aparentes garantías jurisdiccionales tales como el derecho a no confesar bajo juramento sobre delito propio (Cap. XXI, Art. 3º), la prohibición a los jueces ordinarios de ejecutar determinadas sentencias –presidio, azotes, destierro– sin consulta previa al Tribunal de Justicia (Cap. XXI, Art. 4º), el principio de presunción de inocencia (Cap. XXI, Art. 5º), la exigencia de prueba semiplena o indicios vehementes de crimen castigado con pena corporal para la procedencia del arresto (Cap. XXI, Art. 8º), los requisitos formales exigidos en los decretos o providencias de los magistrados (Cap. XXI, Arts. 13º-21º y Cap. XXIII, Art. 19º), el principio de personalidad de la pena (Cap. XXIII, Art. 12º), el derecho a ser juzgado por tribunal competente determinado con anterioridad por la ley (Cap. XIX, Art.

“Disposiciones generales sobre la Legislatura” (Cap. III) en el que se establecía además el objetivo de sancionar un “sabio Código Civil, y otro criminal” (art. 9). Mucho más explícita fue la Constitución de Apatzingán que además de incluir un Capítulo IV “De la ley” en el que se definía a la ley como *“expresión de la voluntad general... esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación nacional”*, contenía un Capítulo (IX) cuyo título era “De la sanción y promulgación de las leyes”. En el Río de la Plata, la Constitución de 1819 también incorporaba un Capítulo (V) sobre “Formación y sanción de las leyes”; a nivel provincial, el texto tucumano de 1820 también contenía similar apartado (Secc. Segunda, Cap. Cuarto), lo mismo que el Estatuto entrerriano de 1822 (Secc. 5), y la Constitución de la Provincia de Santa Fe del año 1841 (Secc. 4º).

¹³⁷ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 3º. La cláusula está tomada directamente del Reglamento Provisorio de 1817. La ausencia de efecto derogatorio y explícita continuidad del orden jurídico tradicional fue una constante en los textos constitucionales provinciales rioplatenses. El Estatuto Provisorio santafecino de 1819 establecía que quedaban *“en vigor todas las leyes, disposiciones y prácticas que hayan regido la Administración, en cuanto no estén en oposición al presente Estatuto”* (Secc. IX, Cap. Último, Art. 59); según la Constitución de Tucumán de 1820 seguían *“en su observancia las Leyes, Estatutos, y Reglamentos que hasta ahora han regido en lo que no hayan sido alteradas, ni digan contradicción con esta Constitución hasta que la Legislatura varíe ó reforme lo que crea conveniente”* (Secc. Cuarta, Cap. Segundo, Art. 21); el Estatuto Provisorio Constitucional de Entre Ríos del año 1822, de manera muy similar, declaraba que continuarían *“observándose las leyes generales, porque hasta ahora se ha regido la administración, en lo que no hayan sido alteradas, ni digan contradicción al presente estatuto, hasta que sucesivamente sean variadas, ó reformadas por la legislatura”* (Secc. 14, Art. 124).

2º), e incluso el derecho al debido proceso y la ya mencionada garantía de sentencia fundada en ley (Cap. XXIII, Art. 11º y Cap. XXI, Art. 6º).

Si bien su expresión textual respondía a la retórica de las libertades y garantías modernas, sometidas al juego coherente del ordenamiento propuesto por la Constitución estaban duramente condicionadas en su eficacia por una disposición tan general como la que proyectaba en el nuevo escenario provincial el viejo modo de hacer justicia: “*la administración de justicia en lo civil, y criminal, seguirá los mismos principios, orden y método que hasta ahora*” (Cap. XIX, Art. 1º). Por otra parte, la ausencia de un mandato que obligara a los jueces a motivar sus sentencias seguía depositando en la persona del magistrado –y no en la ley– la garantía de la justicia de sus decisiones¹³⁸. Finalmente, todo el catálogo de garantías legales y supuesto principio de legalidad acababa derrumbándose con aquel artículo que explícitamente aclaraba que no debían entenderse derogadas “*las leyes que permiten la imposición de las penas al arbitrio prudente de los Jueces, según la naturaleza y circunstancias de los delitos*” (Cap. XXI, Art. 7º) autorizándolos, en definitiva, a seguir castigando o perdonando, más allá de la ley, según las conveniencias de la república¹³⁹.

II. 3. 3. Derechos y libertades

Esta misma guía de reflexión, considerando por una parte el pesado imaginario tradicional que continuaba informando la actividad intelectual de los operadores jurídicos y, por otra, la inercia de los mecanismos a través de los cuales se definía y aplicaba el derecho, es apropiada para pensar el verdadero alcance de ciertos principios jurídicos enunciados en términos muy liberales por el Reglamento cordobés¹⁴⁰. A la libertad jurídica de base que ya fue mencionada se sumaba otro artículo que en los textos posteriores, como el argentino de 1853, se incluyó: el principio de reserva. Según éste, “*Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden público; ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los Magistrados*” (Cap. XXIII, Art. 2º) garantizándose de tal modo un cierto ámbito de

¹³⁸ Sobre el particular, es de consulta obligada el trabajo de GARRIGA, C. y LORENTE, M. (2007b) “El juez y la ley: la motivación de las sentencias, (Castilla, 1489 – España, 1855)”, en Id., *Cádiz, 1812. La Constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 261-312. Para el caso rioplatense puede consultarse la obra de TAU ANZOÁTEGUI, V. (1982) “Los comienzos de la fundamentación de las sentencias en Argentina”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 10. Una obra colectiva que aborda las cuestiones principales del cambio de concepción en cuanto a cultura jurídica se refiere es la de LORENTE, M. (coord.) (2007) *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid.

¹³⁹ En clara alusión a AGÜERO, A. (2008a) Ob. cit. Para el modo en que operaba el arbitrio de los jueces en aquella cultura jurídica véase la misma obra del autor. La visión, que vale para todo el espacio político hispano, también aborda en particular el contexto rioplatense, y más específicamente cordobés.

¹⁴⁰ Algunos de estos principios ya habían sido enunciados en el Río de la Plata por el Decreto de Seguridad Individual sancionado por el Triunvirato a finales del año 1811, aunque redactado con la gran influencia del Secretario del Triunvirato Bernardino Rivadavia, cfr. BIANCHI, A. (2007) *Historia de la Formación Constitucional Argentina (1810-1860)*, Lexis Nexis, Buenos Aires, pp. 50-51.

privacidad a los habitantes del estado provincial, reforzado por disposiciones como las que garantizaban la inviolabilidad de la correspondencia epistolar –límite a las atribuciones del Poder Ejecutivo– (Cap. XVI, Art. 10º), o la declaración de la casa de cada ciudadano “*como un sagrado que no puede violarse sin crimen*” (Cap. XXIII, Art. 14º) siendo procedentes los allanamientos sólo en determinados casos bien justificados y cumpliéndose ciertas formas de procedimiento por decisión y en presencia de un juez (Cap. XXIII, Arts. 14º y 15º). Sin embargo, la idea no era tan ajena al viejo orden; el “perjuicio a terceros” era un límite propio de la cultura jurisdiccional, los actos no causaban estado y podían ser judicializados si causaban un perjuicio a un tercero, y el “orden público” era una categoría tan amplia que podía llegar a serlo todo, con lo cual, el principio “liberal” de reserva también podía ser objeto de una resignificación a partir de la cultura tradicional¹⁴¹.

Íntimamente ligada al principio de reserva y su alcance en un sistema que consagraba un totalitarismo religioso, se recogía en la Constitución la libertad de “*publicar las ideas por la prensa*”, un tipo de derecho “*tan apreciable al hombre, y tan esencial para la conservación de la libertad civil, como necesaria al progreso de las luces de un Estado*” (Cap. XXIII, Art. 6º). Dado el estatus que se otorgaba en el nuevo orden a esta libertad, su ejercicio debía sujetarse a la correspondiente reglamentación que en uso de sus facultades sancionara el Congreso de la Provincia (Cap. XXIII, Art. 9º). En este último caso se puede comprobar fácilmente cómo operaban los elementos mencionados anteriormente como condicionantes del significado de las formulaciones normativas. La concepción acerca de la libertad de imprenta estaba delimitada en su extensión por un principio básico de la constitución material recogido en el Reglamento Provisorio que calificaba al Estado cordobés como una comunidad católica e intolerante respecto de otros cultos. Si de la propia letra de la Constitución se podía deducir que toda opinión contraria a la doctrina de Jesu-Cristo sería mirada y castigada como una violación a las leyes fundamentales del Estado (Cap. V, Arts. 1º y 2º), entonces el límite de lo que podía o no ser publicado, expresado en términos tan generales y abiertos, iba a depender del contenido de la publicación y del “diseño de los mecanismos institucionales y procesales para su tutela”¹⁴².

Igualmente frágiles eran las garantías al derecho de propiedad establecidas en el texto a partir de conceptos con una estructura muy maleable por la interpretación que de ellos podían realizar los magistrados, prohibiendo a uno de los poderes del Estado “*tomar*

¹⁴¹ Véase AGÜERO, A. (2008b) “Herramientas conceptuales de los juristas del derecho común en el dominio de la administración”, en Lorente, M. (coord.) *La jurisdicción contencioso-administrativa en España. "Una" historia de sus orígenes*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 19-44.

¹⁴² Así había sido ya establecido en el Derecho de libertad de imprenta del año 1811, también factura de Rivadavia, sancionado por el Triunvirato, cfr. BIANCHI, A. (2007) Ob. cit., pp. 50-51. Un buen ejemplo de cómo la libertad de imprenta se encuentra condicionada por estos extremos, a partir del análisis del texto gaditano de 1812, puede consultarse MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2012) “Juntas de censura y jurado. La aplicación peninsular de la normativa de libertad política de imprenta (1810-1823)”, en Larriba, E. y Durán, F. (eds.) *El nacimiento de la libertad de imprenta. Antecedentes, promulgación y consecuencias del decreto de 10 de noviembre de 1810*, Sílex, Madrid, pp. 325-343.

la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarla en la posesión, uso, y aprovechamiento de ella; y si en algún caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado, y se le dé el buen cambio a bien vistas de hombres buenos” (Cap. XVI, Art. 6°).

El catálogo de libertades explícitamente declaradas por la Constitución se terminaba con el reconocimiento de la de permanecer en el territorio del Estado (Cap. XXIII, Art. 4°), ejercer cualquier tipo de trabajo e industria (Cap. XXIII, Art. 5°), y tener el ciudadano en la casa pólvora, armas blancas y de fuego, para la defensa de su persona y propiedades (Cap. XXIII, Art. 16°).

El juego de los artículos 21° y 22° del Capítulo XXIII referidos al estatus de las disposiciones sobre seguridad individual terminan de cerrar el sistema de derechos reconocidos y garantías establecidas por la Constitución. Una potente afirmación como la recogida en el primero de esos artículos, “*Las anteriores disposiciones relativas a la seguridad individual jamás podrán suspenderse*”, quedaba herida por la condición incluida en el siguiente autorizando nada más y nada menos que al Gobernador de la República a decidir cuándo no observarla dando cuenta de ello *a posteriori* al Congreso de la Provincia para que el cuerpo examinara los motivos alegados¹⁴³. Si se acepta la idea planteada por SCHMITT según la cual “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”, y la Constitución nada explicitaba sobre qué debía entenderse por un acontecimiento capaz de comprometer “*la tranquilidad pública, o la seguridad del Estado*” –lo que autorizaba la suspensión de la seguridad individual–, es posible bosquejar la potencia del poder político del Gobernador en el diseño previsto por el Reglamento cordobés.

Todos estos ejemplos dan la razón a aquello que se ha venido sosteniendo acerca de la importancia de reflexionar sobre los mecanismos institucionales para poder comprender la verdadera extensión de los derechos y garantías de los ciudadanos, ya que, “los valores que caracterizan al pensamiento occidental no aseguran por sí solos su propia aplicación (...) Por el contrario: estos valores son potencialmente contradictorios, y el conflicto de intereses que se produce en la vida real entre ellos es tan pronunciado que la naturaleza de las estructuras por medio de las cuales se llega a las decisiones tiene una importancia crucial para determinar el contenido mismo de esas decisiones”¹⁴⁴.

¹⁴³ Una esclarecedora mirada acerca del espacio que ocupa la seguridad individual en el constitucionalismo con un recorrido histórico de su construcción puede encontrarse en la obra de CRUZ VILLALÓN, P. (1980) *El estado de sitio y la constitución*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. Acerca de la suspensión de las garantías, CRUZ VILLALÓN, P. (1984) *Estados excepcionales y suspensión de garantías*, Tecnos, Madrid. Sobre el estado de excepción, es muy acertada la teoría propuesta por AGAMBEN, G. (2003) *Stato di eccezione. Homo sacer, II, i*, Bollati Boringhieri, Torino. Para una revisión de ésta y otras teorías propuestas véase el artículo de LA TORRE, M. (2010) “Constitucionalismo de los Antiguos y de los Modernos. Constitución y «estado de excepción»”, en *Res publica*, Universidad de Murcia, Nro. 23, pp. 17-35.

¹⁴⁴ VILE, M. J. C. (2007) *Constitucionalismo y Separación de Poderes*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 13-14.

II. 4. Los poderes por su nombre

Hacia finales del siglo XVIII, por razones de imperativo de legitimación cultural, los actores debieron pasar de un escenario en el que estaban habituados a hablar de cuatro causas, a pensar el poder político de manera tripartita. Fue precisamente en medio de esa confluencia de lenguaje antiguo y moderno, que se desarrollaron los primeros diseños institucionales que adoptaron la noción de los tres poderes¹⁴⁵. En esa línea, CLAVERO afirma que la primera norma constitucional en la historia que adoptó dicha tríada fue la Constitución de Massachusetts del año 1780. El texto estatal norteamericano se dividía en dos grandes partes: por un lado, Declaración de derechos –*Declaration of Rights of the Inhabitants of the Commonwealth of Massachusetts*– y, por otro, Marco de gobierno –*Frame of Government*–. Esta segunda parte subdividida a su vez en tres capítulos: Poder Legislativo –*Legislative Power*–, Poder Ejecutivo –*Executive Power*–, y Poder Judicial –*Judicial Power*–¹⁴⁶. La última de las disposiciones de la *Declaration of Rights* hacía “la presentación de poderes como transición de entrada en el *Frame of Government*, entendiendo que su misma separación constituye garantías suyas, de los derechos”¹⁴⁷.

Sin embargo, pese al diseño previsto por los primeros textos constitucionales, “la respuesta a la pregunta sobre cuáles eran las respectivas esferas de acción de las ramas del gobierno estaba muy abierta al principio del siglo XIX”¹⁴⁸. En el caso hispanoamericano, ha sido un lugar común achacar la falta de delimitación del ámbito de los poderes tanto a la inexperiencia de los actores políticos como a la indeterminación del modelo

¹⁴⁵ Una densa reflexión teórica sobre el desarrollo histórico de la noción de división de poderes en el mundo occidental es la que aporta en su texto VILE, M. J. C. (2008) *Constitucionalismo y separación de poderes*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. También resulta muy útil el trabajo de CLAVERO, B. (2007) *El orden de los poderes*, Trotta, Madrid. Para el caso hispanoamericano, puede consultarse la obra de AGUILAR RIVERA, J. (2000) *En pos de la quimera. Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico*, Centro de Investigación y Docencia Económicas – Fondo de Cultura Económica, México. La cuestión de la división de poderes en la experiencia rioplatense ha sido específicamente abordada en una serie de trabajos por TERNAVASIO, M. (2010) “Limitar el poder: un dilema republicano. Reflexiones sobre el caso rioplatense durante la primera mitad del siglo XIX”, en PALTÍ, E. (org.) *Mito y realidad de la “cultura política latinoamericana”*, Debates en Iberoideas, Prometeo, Buenos Aires; (2007b) “Poder y poderes en tiempos de revolución. Reflexión para una historia política comparada de la primera mitad del siglo XIX”, en GUERRA, C. MAZZEO Y D. ROUILLON (eds.) *Historias compartidas. Economía, sociedad y poder, siglos XVI-XX*, Actas del primer encuentro de Historia Perú-Argentina, Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto Riva Agüero, Lima; (2004) “La división de poderes en los orígenes de la política argentina”, en *Ciencia Hoy*, Vol. 14, Nro. 80; y (2004) “Construir poder y dividir poderes. Buenos Aires durante la “feliz experiencia” rivadaviana”, en *Boletín del Instituto de Historia Americana y Argentina “Dr. Emilio Ravignani”*, tercera serie, Nro. 26. Disponible en <http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/boletin-del-instituto/boletin-coleccion-en-linea#26>

¹⁴⁶ Cfr. CLAVERO, B. (2007) *El orden de los poderes*, Trotta, Madrid, pp. 17 y ss.

¹⁴⁷ CLAVERO, B. (2007) Ob. cit., p. 19. El artículo en cuestión disponía: “*In the government of this Commonwealth, the legislative department shall never exercise the executive and judicial powers, or either of them: The executive shall never exercise the legislative and judicial powers, or either of them: the judicial shall never exercise the legislative and executive powers, or either of them: to the end it may be a government of laws and not of men*”, Constitución de Massachusetts, Parte Primera, Artículo XXX.

¹⁴⁸ AGUILAR RIVERA, J. (2000) Ob. cit., p. 95.

constitucional; sin embargo, como se ha dicho, “la indeterminación sobre el alcance y facultades de las ramas del gobierno es intrínseca a la teoría de separación de poderes”¹⁴⁹. Las primeras constituciones sancionadas en la región durante la primera mitad del siglo XIX adoptaron, casi uniformemente, una “estricta división de poderes, pero sin ninguna garantía que previniera la transgresión de los límites asignados”¹⁵⁰. Muchas veces, la estrategia de los actores políticos hacía que “los efectos del modelo de límites funcionales sólo [pudiera] apreciarse parcialmente, pues el enfrentamiento no [llegaba] a sus últimas consecuencias. Este es el caso de las repetidas solicitudes de facultades extraordinarias y de leyes de excepción”¹⁵¹.

Enfocando la mirada al territorio del Río de la Plata, para encontrar la primera formulación explícita de la noción de división de poderes habría que remontarse a los considerandos del *Reglamento de división de poderes* –calificado como tal por la historiografía– publicado el 22 de octubre del año 1811 sancionado por la Junta Grande: “La base en que creyó debía fundarlo, fue la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, reservándose aquella la Junta de diputados bajo el título de Conservadora, y depositando estos en varios funcionarios públicos”¹⁵². Más allá de la referencia textual, la discusión acerca de la división de poderes durante los años que siguieron a la revolución tuvo una “doble valencia: territorial y funcional”; por una parte, tenía que ver con “el lugar que los cuerpos territoriales –los pueblos– debían tener en el nuevo orden”, y por otro, con cuáles serían “las atribuciones otorgadas a los nuevos poderes”¹⁵³.

Yendo hacia dentro de los cuerpos políticos provinciales, el problema de la soberanía no tenía estas dos dimensiones y se restringía sólo a determinar en cuál de los nuevos poderes residía. En el caso de Córdoba, pese a sancionarse un texto constitucional que explícitamente lo reconocía, la élite local no desarrolló en la Provincia un debate político-ideológico en torno a la cuestión de la división de poderes como sí ocurrió en Buenos Aires¹⁵⁴. Sin embargo, la Constitución de Córdoba sería, como todas las del

¹⁴⁹ AGUILAR RIVERA, J. (2000) Ob. cit., p. 95.

¹⁵⁰ AGUILAR RIVERA, J. (2000) Ob. cit., p. 101.

¹⁵¹ AGUILAR RIVERA, J. (2000) Ob. cit., p. 115.

¹⁵² *Reglamento de la división de poderes sancionado por la Junta conservadora, precedido de documentos oficiales que lo explican, 30 de septiembre a 29 de octubre de 1811*, en *Asambleas Constituyentes Argentinas...*cit., Tomo VI, 2da. Parte. La historiografía argentina reconoce al cordobés Deán Gregorio Funes como el autor del Reglamento. Según Ternavasio, “la noción de división de poderes ingresaba en el Río de la Plata por la vía gaditana [Decreto de las Cortes de octubre de 1810 y Reglamento provisional del ejecutivo del 16 de enero de 1811]”, TERNAVASIO, M. (2007a) *Gobernar la Revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, p. 68.

¹⁵³ TERNAVASIO, M. (2007a) Ob. cit., p. 70. “Durante la década revolucionaria, la noción de división de poderes emergió débil y atada a un problema que la precedía inevitablemente. La disputa por la definición de un nuevo sujeto de imputación soberana se constituyó en el eje de las discusiones de las asambleas constituyentes, centrándose más sus diputados en las alternativas que definían una determinada distribución del poder entre los territorios del ex virreinato, que en las formas de organizar dicho poder bajo un régimen político que estableciera las atribuciones y límites de los encargados de legislar, ejecutar las leyes y ejercer justicia”, ídem, p. 10.

¹⁵⁴ “Con la caída del poder central en 1820, la élite bonaerense, encargada de dar forma al nuevo orden político provincial, además de discutir las bases de la nueva legitimidad, se abocó a debatir el problema de

mundo hispanoamericano, un texto que si bien tuvo “serios reparos para asumir el lenguaje fuerte de poderes”, adoptaría “sin mayor problema la fórmula ternaria con el orden *ley-gobierno-justicia*”¹⁵⁵.

II. 4. 1. Poder Legislativo

Al igual que el resto de los poderes constituidos por el Reglamento Provisorio de 1821, el legislativo residía “*originariamente en el pueblo*”, aunque de manera provisoria –hasta la sanción de la Constitución definitiva para la Provincia– se expediría por un Congreso de Representantes¹⁵⁶. Este cuerpo, erigido en reemplazo de la Soberana Asamblea Provincial reunida desde marzo de 1820, estaría compuesto por un número variable de miembros en función de la demografía provincial ya que, como se vio en su momento, el texto constitucional había hecho opción por el sistema proporcional en la medida de un Representante cada doce mil almas¹⁵⁷. Entre las calidades exigidas para ser electo Representante figuraban las de ser propietario de un fondo de dos mil pesos, rédito equivalente o profesión de algún arte liberal con aprobación de alguna Universidad, con la consecuente exclusión de gran parte de los habitantes de la Provincia; pero no era todo, se exigía también –al menos– un período de siete años en el ejercicio de la ciudadanía¹⁵⁸. El mandato de cada integrante de la representación provincial era de cuatro años durante los cuales percibiría una dieta a cargo de las rentas del Estado cuya cuantía la decidiría el propio Congreso. La renovación del cuerpo se haría por mitades cada veinticuatro meses¹⁵⁹.

la distribución del poder entre las diferentes autoridades y órganos creados en el transcurso de la crisis”, TERNAVASIO, M. (2004) “Construir poder y dividir poderes. Buenos Aires durante la “feliz experiencia” rivadaviana”, en *Boletín del Instituto de Historia Americana y Argentina “Dr. Emilio Ravignani”*, tercera serie, Nro. 26, pp. 7-45, p. 8. Disponible en <http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/boletin-del-instituto/boletin-coleccion-en-linea#26>

¹⁵⁵ CLAVERO, B. (2007) Ob. cit., p. 26. Como se verá más adelante, esa división de poderes en el plano formal no condicionó a unos actores políticos locales que, materialmente, reconocían que vivían “*en un país en donde no existen constitucionalmente divididos los Poderes*”, según la exposición de motivos para la creación de un Tribunal Provisorio de Justicia en el año 1833, *Compilación de leyes...* cit., p. 109.

Todos los textos constitucionales rioplatenses recogían el esquema trino de poderes. El Estatuto Provisorio Constitucional de Entre Ríos del año 1822 reflexionaba además sobre la función de cada uno de ellos: “*La facultad de hacer las leyes relativas á la administración interior, y particular de la provincia reside en el congreso [...] La facultad de hacer ejecutar las leyes reside en el gobernador [...] La facultad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los jueces, y tribunales establecidos por ley*” (Secc. 1, Arts. 5-7).

¹⁵⁶ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 1°. Además, en otro sector del Reglamento se expresaba la intención de que la futura Constitución estableciera junto a la Sala de Representantes un Senado. Juntos formarían el Departamento de Legislación, Cfr. *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. CUARTA, CAP. X, ART. 10°.

¹⁵⁷ Ídem.

¹⁵⁸ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. QUINTA, CAP. XI, ART. 1°.

¹⁵⁹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. QUINTA, CAP. XI, ARTS. 3° Y 4°. La determinación de los que debían salir en el primer bienio, esto es, Representantes que por única vez tendrían un mandato de sólo dos años, lo decidiría la suerte (Art. 3° *in fine*).

Con el objetivo de asegurar la libre formación de la voluntad del órgano legislativo la Constitución cordobesa reconocía entre sus disposiciones la inviolabilidad parlamentaria. Se protegía la libertad de expresión de los diputados estatuyendo que “*los representantes por sus opiniones, discursos o debates*” no podían ser molestados en manera alguna, quedando en la órbita de facultades de la propia cámara el castigar a sus miembros por el desorden de conducta con sanciones que podían llegar hasta el punto de expulsar al Representante que no actuara diligentemente¹⁶⁰. Cabe aclarar que este privilegio no era personal sino reflejo, lo que significaba que el Representante gozaba de él sólo en virtud de su condición de tal. Resulta llamativo el criterio selectivo de los redactores cordobeses que si bien adoptaron esta prerrogativa presente en la Constitución de las Provincias Unidas de Sud América del año 1819, no incorporaron otra, muy común en los sistemas parlamentarios, que también habían sancionado los constituyentes de 1819: la inmunidad de arresto¹⁶¹. A renglón seguido del privilegio de opinión, y con la misma finalidad de favorecer la celeridad y la eficacia en el manejo de los asuntos que interesaban al Estado, se estableció una genérica incompatibilidad entre el desempeño de la representación y otros cargos, empleos o comisiones durante el tiempo de duración del mandato¹⁶².

Entre todas las atribuciones que el Reglamento confería al Congreso Provincial, hay dos que resultan particularmente interesantes para principiar la reflexión sobre el carácter y función de este poder constituido: soberano *tam conditor quam interpret legum*¹⁶³. De la lectura conjunta de los artículos 2º (Cap. XII) y 1º (Cap. XIII) se puede deducir que el documento cordobés depositaba en la Sala de Representantes el poder constituyente en su dimensión derivada¹⁶⁴. Según el sistema diseñado por estas disposiciones, correspondía al Congreso “*formar la constitución porque se ha de regir y gobernar la Provincia*”¹⁶⁵. Aun en el momento de sancionar la primera constitución, en el ejercicio del poder constituyente existían condicionamientos insuperables, unos

¹⁶⁰ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. QUINTA, CAP. XI, ART. 5º.

¹⁶¹ Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica de 1819, Sección Segunda, Capítulo III, Artículo XXVI: “*Los Senadores y Representantes no serán arrestados ni procesados durante su asistencia a la Legislatura, y mientras van y vuelven de ella: excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamia, u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la sala respectiva con la sumaria información del hecho*”.

¹⁶² Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. QUINTA, CAP. XI, ART. 6º. Si el Representante admitía el cargo incompatible, perdía la representación, a menos que fuera reelegido para ella. Si así ocurría, debía servir el cargo o empleo admitido por sustituto.

¹⁶³ VALLEJO, J. (1992) *Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1250-1350)*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

¹⁶⁴ “El poder constituyente puede ser *originario* y *derivado*. Es *originario* cuando se ejerce en la *etapa fundacional* o de primigenidad del estado, para darle nacimiento y estructura. Es *derivado* cuando se ejerce para *reformular la constitución* [...] también cabe reputar *poder constituyente originario* al que se ejerce en un estado ya existente (o sea, después de su etapa fundacional o primigenia) cuando se cambia y sustituye totalmente una constitución anterior con innovaciones fundamentales en su contenido”, BIDART CAMPOS, G. (1993) *Tratado elemental de derecho constitucional argentino*, Tomo I, EDIAR, Buenos Aires, pp. 189-190.

¹⁶⁵ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII, ART. 1º.

subyacentes en la constitución material de la comunidad política –p. ej. el papel fundamental de la religión católica–, otros impuestos. En sintonía con el horizonte de expectativas de los constituyentes provinciales de sentar al mismo tiempo las bases sobre las cuales debía organizarse el conjunto de las Provincias Unidas rioplatenses, en el texto cordobés se incorporó una disposición inspirada en la Constitución Federal venezolana de 1811 que luego se proyectó en la Constitución para la Confederación argentina de 1853 y acabó suprimiéndose con la reforma de 1860¹⁶⁶. Después de facultarse al Congreso Provincial para formar la Constitución de la Provincia se estableció que “*examinarla y juzgar sobre si se opone o no, a la autoridad de la confederación, es privativo del Congreso General de los Estados*”¹⁶⁷.

Más allá de los fundamentos políticos o intelectuales que justificaban una cláusula de este tenor en la coyuntura de un Congreso General de las Provincias Unidas impulsado por Bustos desde Córdoba en 1821, el resultado era la restricción a un poder en principio ilimitado como lo es el constituyente. La erección de un potencial control de constitucionalidad político a cargo del Congreso Federal era una opción conteste con una noción gradual de soberanía. Por otra parte, la facultad constituyente reservada para el Congreso Provincial no se agotaba en la atribución para sancionar la primera constitución escrita. Al regular sobre las mayorías necesarias para la sanción de determinados asuntos en el cuerpo colegiado, la norma reglamentaba que ningún asunto constitucional quedaría definitivamente “*sancionado sin la concurrencia de dos tercias partes de sufragios*”¹⁶⁸. De esta disposición se puede deducir algo que confirmará la práctica posterior del cuerpo representativo: consiguiéndose una mayoría agravada de voluntades a favor –dos tercios del total–, el texto constitucional podía ser reformado.

Además de esta potestad el Reglamento situaba al Congreso en la posición de intérprete del orden jurídico, lugar que en un contexto de cultura jurídica tradicional implicaba la atribución de definir qué era y qué no era derecho a partir de una lectura del

¹⁶⁶ Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, Capítulo Quinto, Sección Cuarta, Artículo 133: “*El Gobierno de la Unión asegura y garantiza a las Provincias la forma de Gobierno Republicano que cada una de ellas adoptare para la administración de sus negocios domésticos: sin aprobar Constitución alguna Provincial que se oponga a los principios liberales, francos de representación admitidos en ésta...*”; Constitución de la Confederación Argentina de 1853, Parte Primera, Capítulo Único, Artículo 5º: “*Cada Provincia Confederada dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria gratuita. Las constituciones provinciales serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación. Bajo de estas condiciones el Gobierno Federal, garante a cada Provincia el goce y ejercicio de sus instituciones*”; Parte Segunda, Título Primero, Sección Primera, Capítulo IV, Artículo 64º “*Corresponde al Congreso: [...] Inciso 28. Examinar las Constituciones provinciales y reprobirlas si no estuviesen conformes con los principios y disposiciones de esta Constitución*”; Parte Segunda, Título Segundo, Artículo 103º “*Cada provincia dicta su propia Constitución, y antes de ponerla en ejercicio, la remite al Congreso para su examen, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5º*”. Esta exigencia de revisión por parte del Congreso Nacional se eliminó a pedido de la Provincia de Buenos Aires con la reforma constitucional del año 1860.

¹⁶⁷ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII, ART. 1º.

¹⁶⁸ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 2º.

acervo de formulaciones normativas heredadas¹⁶⁹. A tal fin, el resto de las autoridades provinciales –Gobernador, Tribunales, Jueces y funcionarios públicos de cualquier clase y denominación– podían consultar al cuerpo representativo las dudas que tuvieran sobre la correcta inteligencia y aplicación de todo el material normativo tradicional cuando lo encontraran en conflicto con los derechos y “*el sistema actual de esta Provincia*”¹⁷⁰. Este tipo de disposiciones de naturaleza tradicional hispana que remitían al mecanismo consultivo típico de los antiguos Consejos, han llevado a calificar al primer constitucionalismo hispano con el carácter de “consultivo”¹⁷¹.

Un rápido recorrido por el Capítulo dedicado exclusivamente a detallar cuáles eran las competencias del cuerpo provoca la sensación de que, al menos en el plano del diseño institucional, la vida política de la Provincia giraba en torno al Congreso, cuya preeminencia en el tiempo del primer constitucionalismo hispano fue una característica¹⁷². Además de las trascendentes facultades analizadas en materia constituyente e interpretativa, la Sala de Representantes de Córdoba estaba autorizada por la Constitución a llevar adelante por sí sola cuestiones como ordenar una guerra defensiva (Cap. XIII, Art. 2º), imponer contribuciones (Cap. XIII, Art. 3º), recibir empréstitos sobre los fondos del Estado (Cap. XIII, Art. 4º), arreglar la forma de todos los juicios, crear y erigir Tribunales (Cap. XIII, Art. 8º), formar los planes de educación pública (Cap. XIII, Art. 10º), celar la calidad de la moneda, los pesos y las medidas (Cap. XIII, Art. 12º), examinar y juzgar anualmente la cuenta general de las rentas públicas provinciales que envíe el Poder Ejecutivo (Cap. XIII, Art. 13º); y con anuencia de un potencial Congreso

¹⁶⁹ Como ya se ha dicho, la constitución cordobesa incluyó en su articulado una cláusula que convalidó la subsistencia de “*todos los códigos legislativos, cédulas, Reglamentos y demás disposiciones generales y particulares del antiguo Gobierno Español, que no estén en oposición directa o indirecta con la libertad e independencia de Sud América, ni con este reglamento y demás disposiciones que no sean contrarias a él, libradas por el Gobierno General de las Provincias, desde el veinticinco de Mayo de mil ochocientos diez*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 3º.

¹⁷⁰ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 4º.

¹⁷¹ “La ‘consulta’ propia de las instituciones tradicionales de la Monarquía, con toda su dimensión normativa y jurisdiccional, logró traspasar el momento constituyente y las rotundas declaraciones contenidas en los decretos de 24 de septiembre de 1810. Más allá de la enunciación de diferentes potestades, el carácter consultivo se predicó de todos los órganos constitucionales y no sólo de las autoridades a las que se reconocía explícitamente esta naturaleza. Ahora bien, cuando se califica de consultiva la actividad de las instituciones que encarnaban las potestades (esto es poderes en el ámbito de una competencia siguiendo también una reglada instrucción y con sometimiento a estrecha responsabilidad) legislativa, jurisdiccional o ejecutiva, quiere decirse, no tanto que esas instituciones desarrollaron una función consultiva en su relación con otros poderes, sino que esas funciones legislativas, judiciales o gubernativas se ejercían ‘consultivamente’”, MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2011) “Constitucionalismo consultivo”, en *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*, Nro. 10, pp. 89-100, p. 90.

¹⁷² *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII “Atribuciones del Congreso”. Muchos de los artículos incluidos en esta lista de atribuciones, incluso en la literalidad de su redacción, están fuertemente inspirados en el Capítulo que lleva el mismo título en la Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica de 1819, Sección II, Capítulo IV. Si bien reflexionando sobre el caso mexicano, la afirmación vale igualmente para el Río de la Plata en general y Córdoba en particular: “Los congresos tenían competencia para conocer prácticamente todos los asuntos, de los más graves a los más insignificantes. Peticiones personales y leyes de carácter general ocuparon de igual forma al primer Congreso constituyente de la nación”, AGUILAR RIVERA, J. (2000) Ob. cit., p. 95.

General de los Estados, a establecer derechos de importación y exportación al comercio interior y al extranjero (Cap. XIII, Art. 5º), formar pactos o convenios con otras provincias (Cap. XIII, Art. 6º), y levantar y mantener tropas en tiempos de paz (Cap. XIII, Art. 7º).

A esta lista concreta se sumaban toda una serie de atribuciones mencionadas a lo largo del Reglamento como nombrar de entre la lista de Representantes suplentes al reemplazante del miembro titular que por muerte o imposibilidad no pueda asistir definitiva o temporalmente a las sesiones (Cap. X, Art. 7º), calificar las aptitudes de los Representantes que hayan sido designados por la Asamblea Electoral (Cap. XI, Art. 2º), fijar las dietas de los Representantes (Cap. XI, Art. 4º) y del Gobernador (Cap. XIV, Art. 9º), castigar el desorden de conducta de cualquiera de sus miembros (Cap. XI, Art. 5º), elegir al Gobernador de la Provincia (Cap. XIV, Art. 1º), tomarle juramento y posesionarlo en su cargo (Cap. XIV, Art. 14º) y designar al interino en caso de ausencia del titular (Cap. XIV, Art. 11º), autorizar al Poder Ejecutivo la disposición de los fondos del Estado para la realización de gastos extraordinarios (Cap. XVI, Art. 13º), proveer justicia en los casos para los que no haya señalado un tribunal competente (Cap. XVII, Art. 1º), asignar los sueldos de los miembros del Tribunal de Apelaciones (Cap. XVIII, Art. 5º), dictar un Reglamento de Imprenta (Cap. XXIII, Art. 9º), aprobar las ordenanzas municipales formadas por los Cabildos (Cap. XXV, Art. 7º) y el Reglamento para la inversión del caudal de propios y arbitrios (Cap. XXV, Art. 12º), o disponer la organización de un cuerpo de milicia reglada de infantería o caballería hasta tanto el Congreso General de los Estados estableciera la formación de un ejército nacional (Cap. XVIII, Art. 2º).

II. 4. 2. Poder Ejecutivo y Gobierno

II. 4. 2. 1. Antecedentes

Desde la modificación de la Ordenanza de Intendentes, en agosto del año 1783, las ciudades de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis pasaron a formar la Intendencia de Córdoba del Tucumán con capital en la ciudad de Córdoba¹⁷³. Hacia el interior de este espacio, la máxima autoridad estaba reservada para un sujeto con el título de Gobernador Intendente –subdelegado del Virrey– encargado del ejercicio del vicepatronato real y de los cuatro ramos o causas tradicionales de gobierno, a saber, *“justicia, policía, hacienda y guerra, con toda la jurisdicción y facultades necesarias, pero con la respectiva subordinación y dependencia del Virrey y Audiencias del Virreinato”*¹⁷⁴. Durante el período comprendido entre la formación de la Intendencia (1783) y la sanción

¹⁷³ Una detallada explicación de las Intendencias en el Río de la Plata y su posterior fragmentación en Provincias puede encontrarse en la obra de SAN MARTINO DE DROMI, M. (1992) *Intendencias y provincias en la historia argentina*, Editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires. En este tema, es de ineludible referencia la obra colectiva coordinada por MARILUZ URQUIJO, J. (dir.) (1995) *Estudios sobre la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata*, INHIDE, Buenos Aires.

¹⁷⁴ Cfr. MELO, C. (1950) Ob. cit., p. VII.

del Reglamento Provisorio (1821) se sucedieron en Córdoba 20 Gobernadores que ocuparon el cargo en lapsos breves o prolongados, en calidad de propietarios o interinos, designados tanto desde la Península, cuanto por el Gobierno Central rioplatense o por Cabildos abiertos locales¹⁷⁵. Al momento de sancionarse la Constitución cordobesa, regía los destinos de la Provincia el General Juan Bautista Bustos, impulsor de la formación del texto y de la reunión de un Congreso General de las Provincias Unidas para arreglar la organización constitucional de un Estado rioplatense. Su fuerte influjo de poder motivó a los constituyentes a incluir en el documento una cláusula asegurando su continuidad en el cargo pese a la sanción del nuevo texto constitucional, ya que antes de estipular el modo de elección de la autoridad del Poder Ejecutivo se salvó que para el primer período “*su elección ya está verificada...*”, valiendo las disposiciones allí contenidas “*para lo sucesivo...*”¹⁷⁶.

II. 4. 2. 2. Disposiciones constitucionales

En el diseño del Reglamento, el Poder Ejecutivo también se hacía residir en el pueblo y su ejercicio en un sujeto denominado Gobernador de la República, con guardia y honores de Capitán General, cuya elección estaba dentro de la órbita de atribuciones del Congreso Provincial a partir de un detallado procedimiento estatuido en la misma Constitución¹⁷⁷. Para ser electo en el cargo se exigían las mismas calidades que para ser designado Representante aunque tales requisitos eran más gravosos en dos aspectos ya que, por una parte, la edad establecida pasaba de veinticinco a treinta y cinco años y, por otra, el fondo económico del cual se debía ser propietario aumentaba de dos mil a cuatro mil pesos, restringiendo aún más la masa humana potencialmente elegible para dirigir la

¹⁷⁵ Gobernadores Intendentes de Córdoba: Rafael de Sobremonte (1783-1797); Nicolás Pérez del Viso (1797-1803); José González (1803-1806); Victorino Rodríguez (1806-1807); Juan Gutiérrez de la Concha (1807-1810); Francisco Ortiz de Ocampo (1810); Juan Martín de Pueyrredón (1810); José Esteban Bustos (1810); Diego José de Pueyrredón (1810-1811); Junta Provincial –José Xavier Díaz, José Antonio Cabrera y José Norberto de Allende– (1811-1812); Santiago Carrera (1812-1813); Francisco José de Viana (1813-1814); Francisco Antonio Ortiz de Ocampo (1814-1815); José Xavier Díaz (1815-1816); Juan Pablo Bulnes (1816); Ambrosio Funes (1816-1817); Manuel Antonio de Castro (1817-1820); Carlos del Signo (1820); José Xavier Díaz (1820); Juan Bautista Bustos (electo el 21 de marzo de 1820, asumió el cargo prestando juramento el 24 del mismo mes). Cfr. MELO, C. (1950) Ob. cit., pp. VIII-XXVII; y ZINNY, A. (1920) *Historia de los Gobernadores de las Provincias Argentinas*, Vol. III: Córdoba-Tucumán-Santiago del Estero-San Luis, Administración General Vaccaro, Buenos Aires, pp. 17-47.

¹⁷⁶ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIV, ART. 1º.

¹⁷⁷ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIV, ARTS. 1º y 13º, y CAP. XIII, ART. 14º. Según las disposiciones del Capítulo XIV, en un único y continuo acto (Art. 5º) resultaría electo el sujeto que recibiera en la votación del Congreso “*un voto sobre la mitad*” (Art. 2º); si luego de tres votaciones ninguno conseguía esa cantidad, entonces la elección se circunscribía a los dos candidatos que hubieran obtenido la mayor cantidad de votos en aquellas tres oportunidades (Art. 3º); si entre estos dos continuaba la igualdad, entonces se sorteaba y la suerte decidía a favor de uno de ellos (Art. 4º). En el hipotético caso de tener que ausentarse de la ciudad o encontrarse impedido de ejercer sus funciones temporalmente, el Congreso estaba facultado a nombrar alguien que lo sustituyera interinamente (Art. 11º), y si el titular muriera, dentro del preciso término de quince días debía verificarse la nueva elección (Art. 12º).

vida política de la Provincia y reduciéndola a un selecto grupo de propietarios¹⁷⁸. Acorde con los principios republicanos expresados por el Reglamento, además de electivo, el cargo de Gobernador era periódico. Se establecía al efecto que la duración del mandato sería de “*cuatro años contados desde el día de su recepción*”, permitiendo una única reelección para la cual el Gobernador en ejercicio debía obtener una mayoría agravada de votos fijada en “*un voto sobre las dos terceras partes*” del Congreso de la Provincia¹⁷⁹.

En sintonía con la textura tradicional de la católica y corporativa sociedad cordobesa, se obligaba al Gobernador electo que, antes de entrar al ejercicio del cargo, prestara juramento “*en manos del Presidente del Congreso y a presencia de todas las corporaciones*” en los siguientes términos: “*Yo..., juro por Dios Nuestro Señor, y estos Santos Evangelios, que desempeñaré fiel y legalmente el cargo de Gobernador de esta República que se me confía: que observaré el presente Reglamento Provincial: que defenderé, conservaré, y protegeré la Religión Católica Apostólica Romana, única verdadera, celando su respeto e inviolabilidad: que defenderé el territorio de la Provincia y sus derechos, contra toda agresión, adoptando cuantas medidas sean convenientes para conservarlos*”¹⁸⁰. El énfasis implícito en esta fórmula deja traslucir la posición cimental de la religión católica en la cultura jurídico-política de la Provincia, tal como ha venido siendo apuntada¹⁸¹. El juramento ordenado por la Constitución además de hacerse en nombre de Dios y los Santos Evangelios redundaba al referirse tanto al Reglamento –que ya ordenaba la defensa de la Religión Católica y castigaba su inobservancia como una violación a las leyes fundamentales del Estado– como a la única y verdadera Religión, reforzando su carácter de discurso normativo de referencia¹⁸².

Siguiendo la línea de una Constitución federal como la venezolana de 1811, el texto cordobés comenzaba con la enunciación de las atribuciones del Poder Ejecutivo de la Provincia afirmando un principio general sin antecedentes en los ensayos constitucionales rioplatenses que luego sería incorporado por la Constitución de la Confederación Argentina de 1853¹⁸³. El artículo 1º del Capítulo XV establecía que “*El*

¹⁷⁸ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XIV, ART. 6º.

¹⁷⁹ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XIV, ARTS. 7º y 8º.

¹⁸⁰ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XIV, ART. 14º.

¹⁸¹ Precisamente por eso es que resultan llamativas las palabras utilizadas por el propio Bustos un año antes de la sanción del texto al asumir la gobernación de la Provincia prometiendo por su honor. Al tomar posesión del cargo de Gobernador Intendente de la Provincia de Córdoba, el 24 de marzo de 1820, expresó: “*Yo Don Juan Bautista Bustos, prometo bajo mi palabra de honor, proceder fiel y legalmente en el oficio de Gobernador Intendente de esta Provincia, obedeciendo y haciendo obedecer y ejecutar la constitución, leyes y estatutos directivos que emanen y se me comunicarán sucesivamente, por esta Asamblea Provincial*”. AHCDC, Tomo I, Acta de la sesión del 24 de marzo de 1820, p. 18.

¹⁸² La referencia es al Cap. V de la SECC. SEGUNDA, “De la Religión”, que ya ha sido analizado *supra*.

¹⁸³ Otros documentos constitucionales inspirados en la venezolana en diferentes zonas de Hispanoamérica como las neogranadinas de Mariquita de 1815 (Tít. XI, Art. 3), o Pamplona de 1815 (Art. 51), siguieron el espíritu del Artículo 108 de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811: “*Los Poderes Ejecutivos provinciales o los Jefes encargados del gobierno de las Provincias, serán en ella los Agentes naturales e inmediatos del Poder Ejecutivo federal, para todo aquello que por el Congreso general no estuviere cometido a Empleados particulares en los ramos de Marina, Ejército y Hacienda Nacional en los*

*Poder Ejecutivo de la Provincia, será en ella el Agente natural, e inmediato del Poder Ejecutivo Federal para todo aquello que siendo de su resorte o del Congreso General de los Estados, no estuviese cometido a empleados particulares”*¹⁸⁴. La lista de atribuciones que el Reglamento confería al Gobernador era amplísima y tenía un carácter no exhaustivo, quedando abierta a la inclusión de otras según las conveniencias de la República. Entre las explícitamente reconocidas estaban las de cumplir y ejecutar las leyes en vigencia, vigilar sobre la recta administración de justicia, la libertad civil, recaudar e invertir los fondos públicos, cuidar de la seguridad personal y real de todos los que residieran en la Provincia (Cap. XV, Art. 2º); era el encargado de celebrar tratados con otras Provincias (Cap. XV, Art. 3º), recibir y nombrar enviados fuera de la Provincia, entre ellos, a los Representantes de la Provincia para el Congreso General de los Estados (Cap. XV, Art. 4º y Cap. X, Art. 12º), vigilar sobre el aumento de población, agricultura, comercio, artes y arreglo de caminos (Cap. XV, Art. 5º), inspección y superintendencia en los ramos de hacienda, rentas de correos, policía y establecimientos científicos (Cap. XV, Art. 6º); ejercía además las funciones del Patronato (Cap. XV, Art. 7º), concedía los pasaportes y expedía las cartas de ciudadanía (Cap. XV, Arts. 8º y 9º), remitía anualmente al Congreso Provincial el balance de las rentas públicas provinciales (Cap. XV, Art. 13º); y en materia jurisdiccional, gestionaba un instituto tradicional como la gracia, pudiendo suspender ejecuciones y sentencias capitales, conceder perdón o conmutación de penas, cuando la equidad lo sugiriera “*o cuando algún grande acontecimiento feliz*” hiciera “*plausible la gracia*” (Cap. XV, Art. 11º)¹⁸⁵.

De acuerdo a la textualidad circulante en la época, basada en la noción del constitucionalismo como una ideología que limitando el poder garantizaba las libertades a los ciudadanos del Estado organizado bajo el imperio de una Constitución, los constituyentes de Córdoba dedicaron un capítulo íntegro para detallar cuáles debían ser los límites a la autoridad del Poder Ejecutivo; mecanismo adaptado supuestamente para garantizar la consecución de los fines y la protección de los derechos proclamados en el resto del documento¹⁸⁶. La propiedad, definida por la Constitución como el derecho que cada uno tenía de gozar y disponer de los bienes que hubiera adquirido con su trabajo e industria¹⁸⁷, era uno de los intereses protegidos frente a la autoridad ejecutiva prohibiéndosele al Gobernador que por sí ordenara la imposición de “*pechos, contribuciones, empréstitos, ni aumento de derechos de ningún género, directa, ni*

puertos y plazas de las Provincias”. En el Río de la Plata, la Constitución de la Confederación Argentina de 1853, en su Título Segundo, Artículo 107, también adoptó este principio.

¹⁸⁴ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XV, “Atribuciones del Poder Ejecutivo”, ART. 1º.

¹⁸⁵ Para un estudio de este instituto tan característico y caracterizador de un orden político tradicional, comprender sus fundamentos y el modo en que diferentes mecanismos lo instrumentaban, véase HESPANHA, A. (1993a) *La gracia del derecho: Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

¹⁸⁶ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, “Límites del Poder Ejecutivo”.

¹⁸⁷ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. PRIMERA, CAP. II, ART. 1º.

indirectamente” (Cap. XVI, Art. 5º). En el mismo orden de principios, tampoco podía “*tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarla en la posesión, uso y aprovechamiento de ella*” y sólo en un caso necesario de conocida utilidad común lo podía hacer siempre y cuando indemnizara al propietario violentado (Cap. XVI, Art. 6º).

Para no caer en una rápida y fácil interpretación comparativa de este artículo con otros, es conveniente aclarar algunos matices de esta supuesta garantía, como el hecho de que no fuera necesaria la sanción de una ley para declarar la utilidad común y que el precio en compensación por la toma de la propiedad no era previo y estaba determinado por la opinión “*a bien vistas de hombres buenos*”¹⁸⁸. Derechos como la libertad, la igualdad, e incluso la privacidad o el honor, buscaban consolidarse mediante prohibiciones al Poder Ejecutivo de la Provincia como la de intervenir en negocios judiciales –salvo en “*los casos que se expresan en este Reglamento*”–; alterar el sistema de administración de justicia (Cap. XVI, Art. 1º); compulsar, avocarse o suspender, causas pendientes, sentenciadas o ejecutoriadas en los tribunales de justicia (Cap. XVI, Art. 3º). Tenía la obligación de poner a disposición de los Tribunales a los ciudadanos que por razones de necesidad hubiera arrestado, en el plazo máximo de tres días (Cap. XVI, Art. 3º), y expresamente prohibido imponer a cualquier individuo pena alguna siendo responsables con el funcionario que le ayudare a hacerlo –si lo hiciere– y “*castigados como atentadores contra la libertad individual*” (Cap. XVI, Art. 7º). El Gobernador no podía conceder a persona alguna privilegios exclusivos (Cap. XVI, Art. 9º), ni violar o interceptar correspondencia epistolar salvo la existencia –a su juicio– de un temor fundado de traición al país o de subversión del orden público (Cap. XVI, Arts. 10º y 11º). Finalmente, una cláusula genérica e indefinida establecía como límites al Poder Ejecutivo de la Provincia, todas las atribuciones esenciales del Poder Ejecutivo de la Confederación y las del Congreso General de los Estados (Cap. XVI, Art. 17º).

La lectura superficial de esta pesada batería de formulaciones normativas genera la impresión en el observador de la existencia de un sistema constitucional diseñado con la intención de salvaguardar las libertades de los individuos. Las limitaciones al poder de la autoridad política, construidas a partir de la protección de determinados derechos como la propiedad, la libertad o la igualdad, tendrían precisamente esa finalidad. Sin embargo, un dispositivo institucional que autorizaba a este mismo poder explícitamente limitado a suspender por sí, sin anuencia previa del Congreso, las disposiciones relativas a la seguridad individual (Cap. XXIII, Art. 22º), erosiona considerablemente esta imagen¹⁸⁹.

¹⁸⁸ Sobre el desarrollo de la figura de la expropiación por causa de utilidad pública, y aunque pensado para Francia, es de referencia obligada el trabajo de LACCHÈ, L. (1995) *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Giuffrè, Milano.

¹⁸⁹ Para un análisis de la disposición a que me refiero, *vid supra* el epígrafe relativo a Derechos y Garantías.

II. 4. 3. Poder Judicial y Administración de Justicia

II. 4. 3. 1. Antecedentes

La administración de justicia era el tópico al que dedicaba mayor interés el Reglamento Provisorio de 1821. Proporcionalmente, era la cuestión para la cual se destinaban mayor cantidad de capítulos¹⁹⁰. Al menos simbólicamente, puede considerarse un indicio de la importancia que tenía este asunto en la República constitucionalizada, resabio de una cultura jurídica en clave jurisdiccional donde poder político y justicia eran dos caras de una misma moneda¹⁹¹. Durante el período colonial, la mayor parte de la actividad jurisdiccional ordinaria se desarrollaba en torno al Ayuntamiento. Dos alcaldes ordinarios, vecinos de la ciudad, impartían la primera instancia de justicia en materia civil y criminal. Una vez sentenciadas las causas en el seno del cabildo, las apelaciones eran sustanciadas ante el Gobernador que asistido por su teniente letrado resolvía en segunda instancia. Existía además la posibilidad de llegar, en un tercer grado de conocimiento, hasta la Audiencia para que revisara la solución dada por el Gobernador en aquellas materias. Sin embargo, el diseño institucional había cedido ante la práctica.

Condicionados por las posibilidades materiales de la época, los operadores jurídicos debían conformarse y tener por definitiva la decisión dada en segunda instancia, siendo muy esporádico el recurso hasta la Audiencia situada a varios cientos de kilómetros de distancia. En el extenso y despoblado ámbito fuera de las ciudades, actuaban como comisionados los jueces pedáneos “con capacidad para aprehender y hacer las primeras informaciones”, además de dos alcaldes y un provincial de la Santa Hermandad¹⁹². La instrucción de las causas en el ámbito urbano estaba a cargo también de vecinos, los alcaldes de barrio. La citada Ordenanza de Intendentes del año 1782, que erigió la Intendencia de Córdoba del Tucumán con capital en la ciudad de Córdoba, impulsó la modificación parcial del organigrama judicial quitando a los Gobernadores la competencia para conocer en segunda instancia que a partir de entonces quedaría reservada a la Audiencia constituida en Buenos Aires¹⁹³. En la etapa posterior a 1810 la

¹⁹⁰ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XVII “Del Poder Judicial”; SECC. SÉPTIMA, CAP. XVIII “De los Tribunales de Justicia”; SECC. SÉPTIMA, CAP. XIX “De la Administración de Justicia”; SECC. SÉPTIMA, CAP. XX “De la Administración de Justicia en lo Civil”; SECC. OCTAVA, CAP. XXI “De la Administración de Justicia en lo Criminal”; SECC. OCTAVA, CAP. XXII – innominado–; SECC. OCTAVA, CAP. XXVII “Del Juzgado de Comercio”.

¹⁹¹ Para una reflexión sobre estos presupuestos que estructuraban el orden en el Antiguo Régimen, véase GARRIGA, C. (2004) “Orden jurídico y poder político en el antiguo régimen”, en, *Istor*, Nro. 16, pp. 13-44; AGÜERO, A. (2007b) “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en LORENTE, M. (coord.) (2007) *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Cuadernos de Derecho Judicial VI, CGPJ, Madrid, pp. 21-58.

¹⁹² Cfr. AGÜERO, A. (2010b) Ob. cit., p. 271.

¹⁹³ En el año 1783 se dictó la cédula ereccional de la Audiencia Real de Buenos Aires con jurisdicción en todo el territorio del Virreinato del Río de la Plata, sin embargo, hubo que esperar hasta el 10 de agosto de 1785 para que comenzara a funcionar. No era la primera vez que la ciudad porteña acogía a un órgano de justicia semejante. En el período 1661-1671 había funcionado también una Audiencia y Chancillería Real (Cfr. TAU ANZOÁTEGUI, V. y MARTIRÉ, E. (2005) *Manual de Historia de las Instituciones Argentinas*, Librería Histórica, Buenos Aires, p. 176.

legislación comúnmente denominada “patria” no alteró sustancialmente el diseño de la administración de justicia salvo el reemplazo de la Real Audiencia por una Cámara de Apelaciones con asiento en la misma ciudad¹⁹⁴.

II. 4. 3. 2. Disposiciones constitucionales

El Reglamento constitucional cordobés siguió la estela marcada por los ensayos constitucionales rioplatenses previos. A pesar del moderno lenguaje con que se declaraban derechos, garantías y libertades, se establecía que “*la administración de justicia en lo civil y criminal seguirá los mismos principios, orden y método que hasta ahora*” (Cap. XIX, Art. 1º), claro ejemplo de constitucionalización de la tradición. El Poder Judicial, que al igual que los otros dos poderes “*reside originariamente en el Pueblo*” (Cap. XVII, Art. 1º), sería ejercido por un Tribunal de Apelaciones y los demás juzgados ordinarios, sin dependencia alguna del Poder Ejecutivo. Las posibles lagunas de competencia se salvaban con una opción que se encontraba lejos de la separación de poderes proclamada, ya que “*para los casos que no haya tribunal señalado proveerá el Congreso*” (Cap. XVII, Arts. 1º y 2º), tal es así, que al tiempo que debatían sobre el proyecto constitucional redactado por Baigorri y Allende, los Representantes sustanciaban desde una comisión especial una causa entablada contra dos sujetos por supuesta traición¹⁹⁵.

El despacho de las causas civiles y criminales era elevado a la categoría de uno de los primeros bienes de la República de manera que los ciudadanos pudieran “*sin dilación ver satisfechas sus acciones*” y “*la república minorar el número de criminales con el pronto escarmiento de los delitos*” (Cap. XVIII, Art. 1º). En primera instancia la tarea correspondía a tres Alcaldes anualmente elegibles, dos para la materia civil y uno en las causas criminales (Cap. XVIII, Art. 2º), en tanto que para los asuntos mercantiles se nombraría a un Juez de Comercio “*con la jurisdicción, fueros y preeminencias que le estaban concedidas*” por la Cédula de erección del Tribunal del Consulado expedida en el año 1794 para el Virreinato del Río de la Plata¹⁹⁶. En ocasiones el texto pareciera responder a una actitud de copia “irreflexiva” de otras fuentes ya que, si bien según el

¹⁹⁴ El 23 de enero de 1812 el Primer Triunvirato, del que era secretario Bernardino Rivadavia, dictó un “Reglamento para la Administración de Justicia de las Provincias Unidas del Río de la Plata”; la Asamblea General Constituyente del año XIII, sancionó un “Reglamento de Administración de Justicia” el 1º de septiembre del año 1813; los dos ensayos constitucionales con vigencia más importantes del período, el Estatuto Provisional de 1815 y el Reglamento Provisorio de 1817, regulaban en varios capítulos todo lo concerniente a la administración de justicia. Para repasar los avatares de la administración de justicia, y la de los órganos encargados de dicha función, en el período 1810-1820 véase el trabajo de CORVA, M. (2010) “La justicia en la primera década revolucionaria”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 39. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842010000100003

¹⁹⁵ AHCDC, Tomo I, Sesiones de enero, febrero y marzo de 1821.

¹⁹⁶ Real Cédula del 30 de enero de 1794 creando un Tribunal del Consulado en la ciudad de Buenos Aires, su texto completo puede consultarse en CRUZ BARNEY, O. (2001) *El Régimen Jurídico de los Consulados de Comercio Indianos: 1784-1795*, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Disponible en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=19>.

Reglamento se “restituía” el Juzgado de Provincia “*en los mismos términos, y con las mismas atribuciones que existían antes de extinguirse las audiencias*” (Cap. XVIII, Art. 25°), la verdad es que en Córdoba nunca había existido un juzgado de tales características; órganos típicos en las ciudades en las que tenían asiento las Audiencias. Su erección en aquel contexto, sin autonomía orgánica puesto que correspondería su desempeño a uno de los vocales letrados del Tribunal de Apelaciones (Cap. XVIII, Art. 26°), expresaba el sentido tradicional con el que era pensado el máximo órgano de justicia en la Provincia.

Extinguidos los lazos de subordinación política, en un contexto de soberanía e independencia declaradas, toda la actividad jurisdiccional se recondujo a los límites provinciales. La posición jerárquica desempeñada por la Audiencia Real en el período colonial, luego sustituida por la Cámara de Apelaciones con asiento en Buenos Aires según el diseño de la legislación patria sancionada durante la primera década independiente, quedó ocupada en Córdoba por un Tribunal de Justicia con el título de Tribunal de Apelaciones. Este órgano judicial, de composición lega-letrada, debía estar integrado por un total de cinco individuos mayores de veinticinco años –tres, al menos, abogados recibidos– designados por el Gobernador de la República que ocuparían sus cargos mientras durara su “*buena comportación*” –aunque estaban sujetos a residencia cada cuatro años– (Cap. XVIII, Arts. 4°, 8°, 9° y 10°)¹⁹⁷.

La competencia del Tribunal abarcaba un amplio espectro de materias judiciales. Conocía en todas las causas y negocios en las que solían conocer las Audiencias (Cap. XVIII, Art. 14°); evacuaba los recursos de nulidad e injusticia notoria de las sentencias del Tribunal de Alzada de Comercio que, al igual que el Juzgado de Provincia, turnaba entre los cinco miembros del de Apelaciones (Cap. XVIII, Arts. 15° y 16°); resolvía las cuestiones de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la mercantil (Cap. XVIII, Art. 17°); conocía también en grado de apelación y primera suplicación “*los pleitos sobre contrabando y demás ramos de negocios y hacienda*” (Cap. XVIII, Art. 18°)¹⁹⁸. En los segundos recursos de suplicación, nulidad e injusticia notoria, el Tribunal estaba obligado a enviar los autos al Gobernador una vez terminada la sustanciación del grado para que éste nombrara una junta *ad hoc* de cinco individuos encargada de revisar y finiquitar la cuestión (Cap. XVIII, Arts. 19° y 20°). Un reglamento de gobierno formado por el propio Tribunal ordenaría la vida institucional del órgano (Cap. XVIII, Art. 7°), que además de administrar justicia en los casos indicados, tenía facultades de superintendencia respecto del resto de juzgados inferiores quienes debían remitir periódicamente al Tribunal listas generales de todas las causas civiles y criminales pendientes con indicación de su estado (Cap. XVIII, Art. 23°), informes que anualmente el Tribunal debía, a su vez, reenviar al Gobernador de la República (Cap. XVIII, Art. 24°).

¹⁹⁷ Según el Reglamento, el nombramiento de los primeros cinco jueces estaba exclusivamente a cargo del Gobernador. Los sucesivos, serían también nombrados por éste pero a propuesta de una lista elevada por el propio tribunal (Cap. XVIII, Art. 9°).

¹⁹⁸ El mismo artículo aclaraba que los Ministros respectivos tendrían a su cargo la primera instancia que antes le correspondía a los Intendentes (Cap. XVIII, Art. 18° *in fine*).

Además de estructurar la judicatura provincial, la Constitución se ocupaba de establecer ciertas pautas de procedimiento que debían informar el modo en que los magistrados administrarían justicia en la República de Córdoba. Diluidas desde el comienzo por una afirmación provisoria que daba continuidad a “*los mismos principios, orden y método que hasta ahora*” (Cap. XIX, Art. 1º), toda una serie de garantías procesales eran proclamadas por los constituyentes con un lenguaje de protección a los derechos individuales a través de formulaciones normativas importadas que en el marco de una cultura jurídica tradicional adquirirían un significado relativamente más débil que en sus lugares de nacimiento. Ya ha sido analizado en este trabajo cómo las continuas referencias hechas a la ley no designaban a un acto de una asamblea representativa que expresaba la voluntad de todos los ciudadanos ordenando o prohibiendo conductas de manera general y abstracta, sino que podían caber en ese concepto “tanto la Nueva Recopilación de Castilla como un pasaje de Antonio Gómez; un parágrafo del Digesto o una ley de las Partidas con su glosa respectiva. También la ley divina seguía presidiendo las jerarquías de legalidad posible”¹⁹⁹. A la par de la unicidad de fuero para los negocios comunes (Cap. XIX, Art. 3º) se privilegiaba a los militares y eclesiásticos que seguían gozando “*del fuero de su estado en los términos que prescriben las leyes*” (Cap. XIX, Art. 4º). En un mismo nivel de normatividad se declaraba tanto la presunción de inocencia de todo hombre (Cap. XXI, Art. 5º), y la obligación de los jueces de pronunciar sus sentencias por el texto expreso de la ley so pena de responsabilidad personal del Magistrado (Cap. XXI, Art. 6º), como la facultad de imponer penas a su prudente arbitrio (Cap. XXI, Art. 7º).

En el ámbito de la justicia criminal, siguiendo también en esto de manera textual a sus fuentes locales como el Estatuto Provisional de 1815 y el Reglamento Provisorio de 1817, el documento cordobés constitucionalizaba algunas figuras procesales –viejas y modernas– cuyas fuentes de legitimación giraban en torno a categorías que eran también tradicionales e innovadoras: garantías del orden, de la conciencia o de los jueces, pero también –además– inspiradas en valores individuales con el objeto de tutelar a los justiciables ante los posibles embates de un poderoso aparato de justicia. En este sentido, se prohibía la confesión bajo juramento por hechos o delitos propios (Cap. XXI, Art. 3º), la ejecución de sentencias de presidio, azotes o destierro por parte de los tribunales ordinarios sin consulta previa ante el Tribunal de Justicia (Cap. XXI, Art. 4º), el arresto sin prueba semiplena o indicios vehementes de crimen (Cap. XXI, Art. 8º), y la incomunicación del reo después de tomada su confesión (Cap. XXI, Art. 10º). Un detallado y prolijo procedimiento garantizaba tanto la regularidad de los embargos de bienes cuando los delitos investigados llevaban responsabilidad pecuniaria (Cap. XXI, Arts. 14º-18º), como el modo en que los escribanos debían cursar las notificaciones a las partes para asegurar el conocimiento de los actos procesales (Cap. XXI, Arts. 19º-21º).

¹⁹⁹ AGÜERO, A. (2010b) Ob. cit., pp. 292-293. Para la reflexión sobre las distintas garantías declaradas en el Reglamento Provisorio de 1821, véase *supra* el epígrafe correspondiente a “Derechos y Garantías”.

Finalmente, los constituyentes incorporaron un instituto novedoso de la textualidad revolucionaria que, acompañando al reo en la sucesión de los actos del proceso, velaba por su regularidad y potenciaba las posibilidades de defensa del inculpatado: la figura de los padrinos²⁰⁰. Según las disposiciones del Reglamento, en las causas criminales se autorizaba al reo a nombrar libremente un padrino cuya función consistía en ayudar “*en todo aquello en que por el temor, pocos talentos, u otra causa no pueda por sí mismo expresarse*”, presenciando su confesión y las declaraciones de los testigos, cuidando que las mismas fueran asentadas en el expediente “*en los términos en que hayan sido expresadas, sin modificaciones, ni alteraciones*” (Cap. XXI, Arts. 1º y 2º). Esta garantía adicional estatuida en la Constitución, sin perjuicio del nombramiento de un abogado, andaba a caballo entre el discurso moderno de las libertades y el control del poder público, y una cultura jurídica que no acaba de abandonar su lenguaje tradicional, como ha sido señalado, “ya la denominación de la figura nos indica la naturaleza doméstica del cargo al que se confiaba la intermediación entre la autoridad pública y la mayor parte de los reos que pasaban por la justicia ordinaria”²⁰¹.

Las esferas de la justicia civil y comercial también fueron objeto de regulación por parte de la Constitución de 1821. En el primero de estos ámbitos, se puede percibir el deseo de los constituyentes de evitar la judicialización excesiva de las relaciones entre los ciudadanos constitucionalizando prácticas conciliatorias de hondo arraigo en la cultura católica que también habían sido resignificadas por la experiencia revolucionaria francesa. A tal fin, se reconocía el derecho de todos los individuos del Estado a celebrar con otros un compromiso privado para terminar sus diferencias por medio de árbitros designados de común acuerdo por ambas partes en disputa. Para que el procedimiento tuviera la eficacia esperada, se afirmaba la ejecutoriedad de la decisión a la que arribaban los árbitros, siempre y cuando las mismas partes no se hubieran reservado –en el compromiso firmado– el derecho de apelar esa decisión ante los tribunales ordinarios (Cap. XX, Art. 1º)²⁰².

Además de este método de resolución de conflictos, el Reglamento preveía otro instituto más, obligatorio y extrajudicial, con el objeto de prevenir la sustanciación de los pleitos. En sintonía con el filtro de naturaleza económica según el cual no se admitirían demandas por escrito cuya cuantía no excediera de cien pesos, siendo resueltos esos casos mediante un juicio verbal (Cap. XX, Art. 5º), tampoco comenzaría pleito alguno si no se hubiera “*intentado el medio de la reconciliación*” previamente (Cap. XX, Art. 4º). Todo demandante debía presentarse primero ante el Juez de primera instancia, el cual, oficiando de conciliador y amigable componedor junto a “*dos hombres buenos nombrados uno por*

²⁰⁰ La figura de los padrinos ya había sido recogida por el Reglamento Provisorio del año 1817, cfr. AGÜERO, A. (2010b) Ob. cit.

²⁰¹ Ídem, p. 284.

²⁰² En cuanto a la cuestión del arbitraje en la tradición del Derecho Común y su potencial proyección en un nuevo orden véase VALLEJO, J. (1994) “Amor de Árbitros. Episodio de la Sucesión de Per Afán de Ribera el Viejo”, en *Fallstudien Zur Spanischen und Portugiesischen Justiz (15. Bis 20. Jahrhundert)*, Vittorio Klostermann, Francfort del Meno, Alemania, pp. 211-269.

cada parte”, oía las pretensiones de demandado y demandante, el dictamen de los asociados, y tomaba una decisión para terminar el litigio (Cap. XX, Arts. 2º y 3º). Recién después de este procedimiento, y si las partes no quedaban conformes con la determinación extrajudicial adoptada, quedaba expedita la vía judicial. En cuanto al ámbito mercantil, la Constitución nada específico decía y remitía directamente a las disposiciones establecidas por la Real Cédula de erección del consulado de Buenos Aires expedida en Aranjuez el 30 de enero del año 1794²⁰³.

III. DIMENSIÓN FEDERAL DEL CONSTITUCIONALISMO PROVINCIAL

Si se recuerda el contexto en el que Juan Bautista Bustos llegó a Córdoba y asumió el poder político en la Provincia después de liderar la sublevación del Ejército del Norte en la Posta de Arequito aquel enero de 1820, habrá que recordar que una de sus primeras acciones fue la de enviar una circular al resto de Gobernadores de las Provincias rioplatenses convocándolos a un Congreso en su ciudad para emprender la organización de un espacio político que los nucleara bajo el signo federal²⁰⁴. Estando presentes en Córdoba los diputados de las demás Provincias convocadas, la sanción del documento constitucional local era un valioso instrumento para bosquejar y presentar al resto el diseño de organización impulsado por Bustos a nivel supraprovincial. En este sentido, la Constitución cordobesa de 1821 se presentaba “*bajo el supuesto de una república federada*”, un texto para una provincia que, proyectadamente, se insertaría en una república de ese tipo, de allí que abundara en disposiciones referidas al ámbito federal: atribuciones y limitaciones a los poderes federales y provinciales. Las peculiares circunstancias políticas de aquel momento histórico situaban a las cláusulas con vocación general en el plano del horizonte de expectativa de los constituyentes provinciales ya que Córdoba no tenía autoridad, ni legitimidad, para determinar por sí qué materias debían corresponder a una y otra esfera de gobierno²⁰⁵.

A lo largo del Reglamento podían leerse toda una serie de menciones explícitas a unos potenciales “*Congreso General de los Estados*” o “*Poder Ejecutivo Federal*” por entonces inexistentes. Aunque de inspiración y factura norteamericana, referencia clásica de la historiografía constitucional, parece razonable postular que ese modo de pensar y distribuir funciones entre las instituciones de un Estado con dos niveles de gobierno había

²⁰³ Un análisis del surgimiento de la organización y jurisdicción consular en la Monarquía Católica, y las particularidades que dicho ámbito de justicia tuvo en el derecho indiano, con un apéndice documental donde se hallan las distintas Cédulas de erección de los consulados hispanoamericanos, puede consultarse en CRUZ BARNEY, O. (2001) Ob. cit.

²⁰⁴ Un análisis de este primer movimiento de Bustos que excedía las fronteras provinciales y prefiguraba un proyecto político de unión ha sido realizado *supra* en el capítulo de este trabajo titulado “Génesis y Sanción del Reglamento Provisorio de 1821”.

²⁰⁵ Haciendo una lectura de varios de los textos constitucionales provinciales que durante este período se sancionan en el Río de la Plata para dar base jurídica al nuevo sujeto político provincial, independiente, representado en una Asamblea Soberana, se ha observado que “*seule la Constitution de Córdoba peut être qualifiée de fédérale, au sens où elle prévoit l’espace et les limites imparties aux compétences respectives des institutions provinciales et générales*”, VERDO, G. (2006a) Ob. cit., p. 394.

llegado a Córdoba a través de la que aquí se ha reivindicado como una de las fuentes directas del texto constitucional: la Constitución Federal para los Estados de Venezuela del año 1811²⁰⁶. De tal manera, en el documento provincial se establecieron disposiciones según las cuales, por ejemplo, decretar la guerra y la paz –fuera del caso de guerra defensiva– era privativo del Congreso General de los Estados (Cap. XIII, Art. 2°); el Congreso General de los Estados debía prestar su consentimiento para que el Congreso Provincial pudiera establecer derechos de importación y exportación al comercio interior y al extranjero (Cap. XIII, Art. 5°). En ciertos casos se exigía la “*anuencia y consentimiento del Congreso General de los Estados*”, como para que el Congreso Provincial concluyera pactos entre la Provincia y una o más Provincias (Cap. XIII, Art. 6°), o levantara y mantuviera tropas en tiempos de paz (Cap. XIII, Art. 7°). Se reconocía como facultad del Congreso General de los Estados el acto de fijar la moneda, los pesos y las medidas (Cap. XIII, Art. 12°), arreglar y establecer las Postas y Correos generales, asignar la contribución para ellas y designar los grandes caminos (Cap. XV, Art. 5°), y disponer la organización, armamento y disciplina de las Milicias nacionales (Cap. XXVIII, Art. 2°). Una cláusula general establecía que “*Las atribuciones esenciales del Poder Ejecutivo de la Confederación y las que el voto de las Provincias reunidas en Congreso tuviese a bien refundir en el Gobierno General de los Estados, serán límites del Poder Ejecutivo de este Estado*” (Cap. XVI, Art. 17°).

No obstante estas referencias, en el Reglamento constitucional de 1821 hay tres formulaciones muy concretas que perfilaban y daban carácter al diseño cordobés, a saber: 1) la facultad del Congreso Nacional de aprobar los textos constitucionales provinciales, 2) la definición del Gobernador de la Provincia como agente natural del Poder Ejecutivo Federal, y 3) la determinación de una serie de materias judiciales como competencia exclusiva de un tipo de Justicia Federal. Estas mismas cláusulas, no incluidas en las fuentes constitucionales rioplatenses de carácter general, van a formar parte del articulado de la Constitución Federal para la Confederación Argentina del año 1853²⁰⁷. A partir de

²⁰⁶ Tanto en la Constitución de los Estados Unidos del año 1787 (Article I, Section 8, 9 y 10), cuyo texto puede consultarse en la web http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_transcript.html, como en la Constitución Federal para los Estados de Venezuela del año 1811 (Capítulo Segundo, Sección Séptima), que sigue casi literalmente en muchos aspectos a aquella limitándose a traducir algunas de sus disposiciones, al tratarse de textos que regulan al sujeto político que resulta de la unión de los respectivos estados/provincias, las disposiciones se establecen en modo asertivo, esto es, se afirma tal o cual asunto como atribución de algún órgano de la esfera federal/confederal. El texto cordobés, por el contrario, recibe e incorpora parte de esas cláusulas en tanto que límites de las atribuciones de las autoridades provinciales. Con respecto a las fuentes locales, el Estatuto Provisional de 1815 y el Reglamento Provisorio de 1817 no abundan en disposiciones sobre estas materias. Algunas referencias pueden encontrarse en los proyectos de Constitución presentados ante la Asamblea General Constituyente del año 1813, más específicamente el “Proyecto de Constitución de la Comisión Oficial *ad hoc*” y el “Proyecto de Constitución Federal”, ambos textos pueden consultarse en SAGÜÉS, N. (2006) Ob. cbarnit., CD Anexo, pp. 67-93; y 23-35, respectivamente.

²⁰⁷ La Constitución de la Confederación Argentina de 1853 rezaba, respecto de la **primera cuestión**, Parte Primera, Artículo 5° “*Cada provincia confederada dictará para sí una Constitución (...) Las constituciones provinciales serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación*”; Parte Segunda, Título Primero, Sección Primera, Capítulo IV, Artículo 64° “*Corresponde al Congreso: [...] Inciso 28. Examinar las Constituciones provinciales y reprobadas si no estuviesen conformes con los principios y disposiciones de*

este hecho, algunos autores han elogiado la “originalidad” de la norma cordobesa y el modo en que anticipó las soluciones adoptadas en 1853²⁰⁸.

AYROLO ha destacado la naturaleza “confederal” del proyecto político impulsado desde Córdoba por Juan Bautista Bustos²⁰⁹. Retoma para ello la distinción entre “federación” y “confederación” que ya ha sido explorada para el Río de la Plata por autores como CHIARAMONTE o LEVAGGI, recogida también por GOLDMAN²¹⁰. En su argumentación, destaca las ideas de tal signo abrevadas por Córdoba durante la influencia del caudillo oriental Artigas sobre la Provincia (1815) y el “alto grado de independencia para el manejo de sus asuntos internos”²¹¹. Si bien la tesis resulta plausible y la utilización del término “confederación” ayuda a explicar más fielmente la experiencia política rioplatense durante el “momento de los pueblos” iniciado a partir de 1820, al menos en el plano del diseño constitucional, las tres disposiciones incluidas en el Reglamento Provisorio de 1821 vendrían a matizarla.

La primera y segunda de estas cuestiones tienen que ver, respectivamente, con los límites al poder constituyente local depositado en el Congreso Provincial y el carácter específico del titular del Poder Ejecutivo de la Provincia, aspectos que ya han sido

esta Constitución”; Parte Segunda, Título Segundo, Artículo 103° “Cada provincia dicta su propia Constitución, y antes de ponerla en ejercicio, la remite al Congreso para su examen, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5”. Respecto de la **segunda cuestión**, Parte Segunda, Título Segundo, Artículo 107° “Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Confederación”. Finalmente, respecto de la **tercera cuestión**, Parte Segunda, Título Primero, Sección Tercera, Capítulo IV, Artículo 97° “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Confederación, el conocimiento y decisión sobre todas las causas que versen sobre... asuntos en los que la Confederación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias... y entre una provincia y un Estado o ciudadano extranjero”.

²⁰⁸ SEGRETÍ, C. (1995) *Federalismo rioplatense y Federalismo Argentino (El federalismo de Córdoba en los comienzos de la época independiente, 1810-1829)*, Centro de Estudios Históricos, Córdoba, p. 144: Al analizar el artículo que establece que el Poder Ejecutivo provincial es agente inmediato del Poder Ejecutivo Federal o del Congreso General de los Estados, lo califica como una “disposición originalísima que no se encuentra con anterioridad en texto alguno”, aunque matiza la afirmación diciendo “por lo menos lo ignoro en unión con la bibliografía que nada dice al respecto”. Pues bien, en este trabajo se demostrará cómo esa cláusula está casi idénticamente formulada en la Constitución de Venezuela del año 1811. Por su parte, MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) *La formación histórica de la provincia de Córdoba*, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba, Argentina, p. 66, ha dicho que tanto por su espíritu liberal como por el sistema de niveles de gobierno diseñado, “una transacción entre la unidad y el puro federalismo, parecen el resultado de una adivinación que anticipaba el régimen definitivo del país”.

²⁰⁹ La tesis sostenida por esta historiadora puede consultarse en AYROLO, V. (2007b) “La construcción de un sistema político alternativo: Córdoba durante el gobierno de Juan Bautista Bustos, 1820-1829”, en PEIRE, J. (comp.) *Actores, representaciones e imaginarios. Homenaje a François-Xavier Guerra*, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Caseros, pp. 197-218.

²¹⁰ Al respecto pueden consultarse los trabajos de CHIARAMONTE, J. (1993) “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en CARMAGNANI, M. (comp.), *Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 81-132; LEVAGGI, A. (2007) *Confederación y federación en la génesis del Estado argentino*, Facultad de Derecho UBA, Buenos Aires; GOLDMAN, N. (1998) “Los orígenes del federalismo rioplatense (1820-1831)” en, GOLDMAN, N. (dir.) *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, Colección Nueva Historia Argentina, Tomo III, Sudamericana, Buenos Aires.

²¹¹ AYROLO, V. (2007b) Ob. cit., p. 210.

analizados²¹². La tercera, está referida a la creación de una esfera de justicia federal para la resolución de determinados tipos de conflictos.

En el artículo único del Capítulo XXII del Reglamento se podía leer lo siguiente,

*“Las diferencias que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y uno, o muchos ciudadanos de otra; entre ciudadanos de una misma Provincia que disputaren tierras concedidas por diferentes Provincias; entre una Provincia o ciudadanos de ella, y otros Estados, ciudadanos o vasallos extranjeros; y todas aquellas en que el Estado Federal tenga, o sea parte, corresponde su conocimiento al Poder Judicial de los Estados”*²¹³.

Una disposición con tal sentido surge como exigencia de la agregación solidaria de sujetos políticos con capacidad de administrar justicia dentro de los límites de su territorio: es preciso diseñar un método particular para la resolución de aquellos conflictos típicos resultantes de tal proceso. No en vano la primera formulación de una cláusula con este espíritu es debida a los constituyentes norteamericanos reunidos en Filadelfia donde se sentaron las bases modernas del Estado Federal²¹⁴. Los constituyentes reunidos en Caracas en diciembre de 1811 también buscaban construir los cimientos de una organización política similar a la de los Estados Unidos de América del Norte. En esa línea, al establecer cuáles eran los asuntos que correspondería resolver al Poder Judicial de lo que ellos llamaron la “Confederación”, tradujeron la norma estadounidense²¹⁵.

²¹² Vid. *Supra* los epígrafes correspondientes al modo en que el Reglamento Provisorio de 1821 trata sobre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

²¹³ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXII, ARTÍCULO ÚNICO.

²¹⁴ Constitución de los Estados Unidos de 1787, “Article III, Section 2: The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;--to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls; --to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction; --to Controversies to which the United States shall be a Party; --to Controversies between two or more States; --between a State and Citizens of another State, --between Citizens of different States,--between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects”. Este artículo fue modificado unos años más tarde por la enmienda número XI, ratificada por los estados en febrero del año 1795: “Amendment XI: The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of the United States by Citizens of another State, or by Citizens or Subjects of any Foreign State”. Pese a la modificación, en las constituciones que siguieron esta estela, aunque posteriores a la enmienda, se mantuvo la redacción original del artículo, me refiero fundamentalmente a la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811.

²¹⁵ Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, Capítulo Cuarto, Sección Segunda, Artículo 115: “El Poder Judicial de la Confederación estará circunscripto a los casos cometidos por ella; y son:

Todos los asuntos contenciosos, civiles o criminales que se deriven del contenido de esta Constitución;
Los tratados o negociaciones hechas bajo su autoridad;
Todo lo concerniente a Embajadores, Ministros, Cónsules;
Los asuntos pertenecientes a Almirantazgo y jurisdicción marítima;
Las diferencias en que el Estado federal tenga o sea parte;
Las que se susciten entre dos o más Provincias;

Mucho más al sur del continente, en la Córdoba del general Juan Bautista Bustos que desde su llegada al poder había avivado el clima federal e impulsaba un proyecto de organización institucional de las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo ese signo, los redactores del Reglamento Provisorio recogieron desde las fuentes que tuvieron a su alcance ese mismo sistema de jurisdicción federal, prefigurando de algún modo una de las posibles alternativas de diseño constitucional para el conjunto.

Entre una Provincia y uno o muchos ciudadanos de otra;

Entre ciudadanos de una misma Provincia que disputaren tierras concedidas por diferentes Provincias;

Entre una Provincia o ciudadanos de ella y otros Estados, ciudadanos o vasallos extranjeros”.

CAPÍTULO III

EL DERROTERO DEL CONSTITUCIONALISMO EN CÓRDOBA (1821-1847)

I. LA CONSTITUCIÓN EN MARCHA: PUESTA EN PLANTA DEL REGLAMENTO PROVISORIO; I. 1. ¿Qué dice la Constitución? Interpretación y aplicación del texto constitucional; I. 2. La dimensión extraordinaria. Constitución y poder político; II. EL CONGRESO PROVINCIAL, CUERPO SOBERANO DE REPRESENTANTES; II. 1. La selección de los representantes, sus prácticas y estatus; II. 1. 1. Incompatibilidades e inmunidades parlamentarias; II. 2. El funcionamiento de la Sala de Representantes; II. 3. Tensión entre poderes e intermitencias del Congreso; III. EL GOBERNADOR, JEFE POLÍTICO DE LA PROVINCIA; III. 1. Elección y reelección del Gobernador; III. 2. El mando de la Provincia en ausencia del Gobernador; IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UNA FUNCIÓN, VARIOS PODERES; IV. 1. Una larga transición hacia la consolidación de un poder del Estado; IV. 2. La inestable formación del Tribunal de Apelaciones; IV. 3. La administración de justicia en la campaña, su reforma y posterior confirmación.

I. LA CONSTITUCIÓN EN MARCHA. PUESTA EN PLANTA DEL REGLAMENTO PROVISORIO

“Conocemos de manera bastante aceptable los textos y sus circunstancias (...) Sin embargo, sabemos bastante menos sobre la efectiva aplicación de los mismos. En otros términos, sabemos más acerca de qué fueron esos textos que de cómo fueron”¹.

“... con independencia del inmenso valor político que puede atribuirse a la terminología constitucional, ésta no se entiende, o, en el mejor de los casos, se entiende históricamente mal, si no se pone en relación con los mecanismos institucionales que sirvieron, bien para generarla, bien para tratar de imponerla a una(s) sociedad(es) que hasta entonces la había desconocido”².

¿Conocemos bastante bien los textos? La aceptación de ese lugar común en la historiografía constitucional argentina ha llevado a conclusiones generalizadas según las cuales los actores políticos del período que siguió a la emancipación estuvieron más preocupados en la política que en la constitución. Se ha dicho así que los caudillos provinciales no tenían ningún problema para pasar por alto disposiciones de textos normativos que supuestamente –según los cánones del liberalismo y la Ilustración–

¹ PORTILLO, J. (2012) “La historia del primer constitucionalismo entre textualidad y jurisprudencia”, en *PolHis*, Año 5, Nro. 10, Segundo Semestre, p. 35.

² LORENTE, M. (2010) “Esencia y valor del constitucionalismo gaditano (Nueva España, 1808-1821)”, en ANNINO, A. (coord.) *La revolución novohispana, 1808-1821*, FCE, México, pp. 293-383.

declaraban derechos y separaban poderes. La ausencia o debilidad de cultura constitucional en aquel tiempo se deduciría del cotejo entre textos y práctica. Sin embargo, una lectura global y contextualizada de los documentos constitucionales, determinando el verdadero alcance de tales declaraciones y organigrama de poderes, en función del juego coherente de todas las disposiciones incluidas en los textos, podría ayudar a matizar aquella extendida imagen³.

Ahora bien, sin perjuicio de la revisión del diseño institucional cordobés previsto por el Reglamento Provisorio de 1821 a partir de un análisis crítico del documento constitucional considerando sus disposiciones en conjunto, de manera coherente y completa, es posible pensar también que la lectura de la Constitución que hicieron los actores políticos del período desde el momento siguiente a su promulgación fue deformando progresivamente el esquema proyectado por el propio texto. Condicionamientos tanto materiales como culturales operaron en la definición de una nueva imagen del orden en el territorio cordobés, entre antigua y nueva constitución, que fue progresivamente consolidándose hacia la mitad del siglo XIX.

Las circunstancias contextuales de guerra, inestabilidad política y penuria económica –tanto a nivel local como nacional–, imposibilitaron materialmente el desarrollo de muchas de las instituciones diseñadas por los primeros constituyentes⁴. La cordobesa era una población predominantemente rural, asentada en la zona de la campaña, aunque bajo la preeminencia de pocas familias cuyos integrantes –algunos– ejercían los cargos civiles y militares en la jurisdicción y además –otros– participaban informalmente “en el ejercicio del poder por medio de la corrupción y de las alianzas matrimoniales con los funcionarios en ejercicio”⁵.

En el plano militar, las autoridades tuvieron que hacer frente a invasiones externas comandadas por otros caudillos provinciales, a constantes incursiones indígenas en las zonas este y sur, y conflictos internos entre distintas facciones que pugnaban por controlar la Provincia. Esto impactó en una economía provincial herida. La desintegración del ex virreinato había provocado el corte de los lazos comerciales con la región altooperuana, principal sede de las exportaciones de Córdoba cuya producción principal consistía en la cría de mulas utilizadas en la extracción minera. La actividad económica local debió ser reestructurada, direccionada hacia la explotación ganadera y sus subproductos, pero nunca llegó a alcanzar volúmenes significativos durante el período de estudio. En ese contexto, la situación fiscal de la Provincia se deterioró considerablemente; los sucesivos gobiernos debieron acudir al endeudamiento, creación de nuevos impuestos y exigencias de contribuciones forzosas a la población para poder financiar el gasto público,

³ Sobre la importancia de la “lectura densa” de las fuentes, véase de HESPANHA, A. (2002) *Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio*, Tecnos, Madrid.

⁴ Para un bosquejo general de la situación social y económica de la Provincia véase la obra de ROMANO, S. (2002) *Economía, Sociedad y Poder en Córdoba. Primera mitad del siglo XIX*, Ferreyra Editor, Córdoba.

⁵ TELL, S. (2008) *Córdoba rural, una sociedad campesina (1750-1850)*, Prometeo Libros, Buenos Aires, p. 361.

fundamentalmente el sostenimiento del ejército⁶.

Políticamente, el período estuvo marcado por la sucesión de cuatro Gobernadores – o gobiernos– fuertes con diferentes proyectos y alineamientos políticos: Juan Bautista Bustos (1820-1829), José María Paz (1829-1831), José Vicente Reynafé (1831-1835) y Manuel López (1835-1852); el perfil de cada uno de ellos marcó la relación con el resto de autoridades provinciales constituidas⁷. En el escenario rioplatense, Córdoba siempre estuvo a contramarcha de Buenos Aires, el otro gran centro de poder económico y cultural de la región. Mientras en el puerto se discutía el modo en que debía intentarse la emancipación, las élites de Córdoba organizaban una contrarrevolución sofocada por los fusilamientos del 26 de agosto de 1810. Durante la primera década independiente se unió al protectorado del caudillo oriental José Gervasio Artigas, generalmente en conflicto con los gobiernos centrales asentados en Buenos Aires. En 1820, la caída del Directorio fue en parte resultado de la sublevación del Ejército del Norte liderada por el General Juan Bautista Bustos que, una vez designado Gobernador de la Provincia, su proyecto político federal rivalizó con el plan unitario propuesto por Bernardino Rivadavia y unos años más tarde, a finales de la década del '20, Córdoba enarboló por unos meses la bandera del unitarismo mientras el General José María Paz estuvo al mando de la Provincia. A partir de la caída de Paz apenas comenzada la década del '30, los gobiernos que fueron sucediéndose sostuvieron nuevamente el ideal federal, incorporándose gradualmente desde –Reynafé hasta López– al unanimismo del régimen rosista⁸.

Desde 1820 en adelante hubo varios intentos de organizar constitucionalmente el conjunto de las provincias rioplatenses. Bustos impulsó un primer Congreso constituyente

⁶ Entre 1810 y 1850 “la principal fuente de ingresos del estado provincial siguieron siendo –al igual que en las últimas décadas coloniales– los impuestos indirectos aplicados al comercio local e interregional, que representaron el 62% de la recaudación en el lapso 1820/29 y el 75% en el período 1830/55. La principal fuente de egresos fueron obviamente los gastos militares, que generaron el 61% del gasto público provincial en 1820/29 y el 63% en 1830/55 y sumieron a las finanzas públicas provinciales en una situación de gran precariedad durante todo el período”, TELL, S. (2008) Ob. cit., p. 379. Una visión general del período en este asunto en la obra de HALPERÍN DONGHI, T. (1982) *Guerra y finanzas en los orígenes del estado argentino (1791-1850)*, Editorial del Belgrano, Buenos Aires.

⁷ ZINNY, A. (1920) *Historia de los Gobernadores de las Provincias Argentinas*, Vol. III, Vaccaro, Buenos Aires, pp. 9-220. La lista completa de individuos que ostentaron el mando de la Provincia durante el período abordado en este trabajo es más amplia, muchos de ellos ocuparon interinamente el sillón del Ejecutivo cuando alguna imposibilidad material obligaba al Gobernador titular a designar un delegado; otros, sólo cubrieron la más alta magistratura provincial durante lapsos breves en momentos de transición entre uno y otro de los cuatro Gobernadores más importantes del período. Completarían la lista Francisco Bedoya, Antonio Giles, José Julián Martínez, José Xavier Díaz, Felipe Gómez, Pedro Juan González, Faustino Allende, José Manuel Isasa, Gregorio Aráoz de La Madrid, Mariano Fragueiro, José Roque Funes, Calixto María González, Benito de Otero, Domingo Aguirre, Pedro Nolasco Rodríguez, Mariano Lozano, Sixto Casanova, Santiago Derqui, Andrés Avelino de Aramburú, Calixto María González, Norberto Zavalía, Cayetano Lozano, José Francisco Álvarez y Claudio A. de Arredondo.

⁸ Pese a la afirmación realizada, es interesante matizar la idea del unanimismo rosista a partir de textos como el de FRADKIN, R. y GELMAN, J. (2015) *Juan Manuel de Rosas. La construcción de un liderazgo político*, Edhasa, Buenos Aires. También los trabajos de SALVATORE, R. (1998a) “Expresiones federales: formas políticas del federalismo rosista”, en GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comp.) *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, Eudeba, Buenos Aires; y (1998b) “Consolidación del régimen rosista (1835-1852)”, en GOLDMAN, N. (dir.) *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, Colección Nueva Historia Argentina, Tomo III, Sudamericana, Buenos Aires.

en Córdoba (1821) que fue boicoteado por el Ministro de Gobierno porteño Bernardino Rivadavia. Años más tarde, en Buenos Aires sesionó un Congreso Nacional con calidad Constituyente (1824-1827) que operó como autoridad legisferante para el conjunto de las Provincias; si bien llegó a sancionar una Constitución (1826), ésta fue rechazada en el interior por su marcado carácter unitario. Disuelto el Congreso, se pretendió reunir una Convención Nacional en Santa Fe (1828), pero la experiencia fue breve y sin mayores resultados. En 1830 Córdoba encabezó la firma de un pacto junto a otras provincias y conformaron una liga unitaria que rivalizó con la liga federal que unía a las provincias del litoral más Buenos Aires; la tensión acabó con la captura del líder unitario y Gobernador de Córdoba José María Paz en mayo de 1831. Desde ese momento, las provincias funcionaron como una Confederación a partir de unas bases mínimas establecidas por el Pacto Federal del año 1831 y una figura *sui generis* según la cual se encargaban las relaciones exteriores al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires⁹.

Volviendo al escenario local, la inercia de ciertas prácticas políticas y jurídicas enmarcadas en un discurso normativo tradicional fue prevaleciendo sobre algunas de las disposiciones constitucionales sancionadas, reestructurando el sistema institucional bosquejado por el Reglamento Provisorio del año 1821. Aun así, con los bemoles que serán oportunamente manifestados, con todas las suspensiones y todos los actos contraconstitucionales de facto, e incluso a pesar de los cambios de color político, hubo una pretensión de que la Constitución estuviera vigente, lo cual transmite cierto desarrollo de cultura constitucional. Ese es, precisamente, el objeto sobre el que se reflexiona en este capítulo. La línea de flotación del análisis se ubica al nivel del texto constitucional y cómo éste fue rigiendo y alterándose en el camino; sólo en ocasiones se bajará hacia el nivel de instituciones subordinadas al Reglamento para demostrar que ciertas opciones condicionaron el desarrollo de la cultura constitucional proyectada. Siendo esta la estrategia, el presente capítulo intenta reconstruir –a partir de una serie de imágenes discontinuas– las claves principales de aquel proceso que con el tiempo acabaron fijándose en un nuevo texto constitucional para la Provincia: el Código Constitucional Provisorio sancionado en el año 1847¹⁰.

1. 1. ¿Qué dice la Constitución? Interpretación y aplicación del texto constitucional

Un texto constitucional, como cualquier otro documento normativo, contiene toda una serie de disposiciones construidas con palabras cuyo sentido y alcance requiere ser desentrañado por medio de una operación intelectual, la interpretación. Licencias del productor de las formulaciones o falencias propias del mismo lenguaje, entre otras circunstancias, suelen constituir obstáculos que dificultan la dilucidación por parte de sus destinatarios de la valencia normativa de tales enunciaciones. Consciente de esta

⁹ Esa figura ha sido detalladamente analizada por TAU ANZOÁTEGUI, V. (1996) *Formación del Estado Federal Argentino, 1820-1852. El gobierno de Buenos Aires y los asuntos nacionales*, 2da. Ed., Perrot, Buenos Aires.

¹⁰ El estudio del proceso de gestación y sanción del Código Constitucional Provisorio desarrollado durante el año 1847, así como la descripción y análisis normativo del texto, forma parte el Cap. 4 de este trabajo.

problemática, y con motivo de la suspensión de las sesiones durante un mes, la propia Sala de Representantes creó una comisión especial compuesta por cinco miembros del mismo cuerpo a la que se concedió, entre otras, la facultad plena de “resolver las dudas que pueda exponer el Poder Ejecutivo sobre el ya sancionado reglamento en puntos que no sean constitucionales”¹¹. Con esta decisión, los mismos constituyentes erigieron un órgano, intérprete auténtico de la Constitución, que en su primer día de reunión recibió una nota de consulta de parte del Poder Ejecutivo pidiendo se aclarasen algunos puntos del Reglamento y el modo en que debían comenzarse a poner en planta sus disposiciones¹².

Aceptada la reserva a favor del legislativo de la interpretación de las leyes como característica típica del primer constitucionalismo hispano que otorgaba preeminencia a los Legislativos, esta consulta tenía por objeto el esclarecimiento de dos cuestiones cuyo contenido refiere la naturaleza política del cuerpo y la indistinción de las funciones de gobierno en una república que erigía poderes pero continuaba gestionando sus asuntos domésticos según la práctica institucional conocida¹³. La primera de las inquietudes gravitaba sobre el modo en que debía computarse el término del mandato del Gobernador Juan Bautista Bustos, electo un año atrás por la Soberana Asamblea en cumplimiento de uno de los tres objetos para los cuales había sido convocada; la segunda, sobre cómo arbitrar fondos para el nombramiento de los conjuces del Tribunal de Apelaciones y titulares de los demás juzgados de nueva creación¹⁴. De la respuesta dada por los diputados de la comisión se pueden deducir dos consideraciones que motivan una interesante reflexión. Por una parte, la confirmación de un principio general del derecho como el de la irretroactividad de las leyes y la percepción de los representantes sobre el estatus del texto constitucional, por otra, el condicionamiento operado por las circunstancias contextuales para la puesta en planta del diseño institucional previsto por los constituyentes. En un único y mismo acto aclararon que los cuatro años de mandato del titular del Ejecutivo comenzaban a correr desde la “publicación” del Reglamento, y en relación con los medios económicos para erigir el aparato institucional de Justicia

¹¹ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 15 de febrero de 1821*, pp. 106-109. El modelo gaditano también confiaba a las Cortes la interpretación auténtica de la Constitución, véase la colección de trabajos de los propios autores en la obra de GARRIGA, C. y LORENTE, M. (2007) *Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. Siguiendo la lógica de las fuentes, a lo largo de este capítulo se utilizarán indistintamente los términos “Congreso Provincial”, “Sala de Representantes” o “Legislatura”, para referir el órgano compuesto por “Diputados” o “Representantes” de toda la Provincia al que la Constitución de 1821 encargaba el Poder Legislativo.

¹² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de febrero de 1821*, pp. 109-111. Para comprender la dimensión específica que, como especie de la interpretación jurídica, tiene la interpretación de la Constitución, y las condiciones de posibilidad para que esa interpretación sea “auténtica”, puede consultarse la obra del constitucionalista y filósofo italiano GUASTINI, R. (1999) *Estudios sobre la interpretación jurídica*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México.

¹³ Particularmente, sobre el mecanismo tradicional de la consulta y su ejercicio en un orden constitucionalizado véase el trabajo ya citado de MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2011) “Constitucionalismo consultivo”, en *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*, Nro. 10, pp. 89-100.

¹⁴ Ídem. Ver *infra* el análisis acerca del modo en que debía computarse el mandato del Gobernador Juan Bautista Bustos: “IV. 1. Elección y reelección del Gobernador”; y el lento proceso de erección de la Cámara de Apelaciones: “V. 2. La inestable formación del Tribunal de Apelaciones”.

ordenaron que se “*siguiese como hasta ahora, mientras la reunión de la Asamblea Provincial, que debía verificarse en el entrante Marzo, lo decidía ó arbitraba fondos para las dotaciones emanadas de aquel Reglamento*”¹⁵. Su interpretación auténtica definió el sentido de las proposiciones y condicionó la vida política de los años que siguieron ya que, en aquel contexto cultural, decir el derecho –*iurisdictio*– era un modo de ejercer una porción del poder político¹⁶. Así comenzaba a demostrarse quiénes eran sus titulares en la nueva estructura institucional proyectada de la Provincia.

Una vez instalado el Congreso Provincial en mayo de 1821, en adelante, sería este cuerpo el encargado de determinar el alcance de la Constitución. Puesto que nunca llegó a desarrollarse un procedimiento regular de consulta, las afirmaciones acerca de cómo debía entenderse tal o cual artículo del Reglamento Provisorio fueron instadas por medio de distintas vías y como consecuencia de diversas situaciones. En algunas ocasiones la declaración se hacía en abstracto y en otras aplicándose la disposición constitucional a un caso concreto subsumiendo un supuesto fáctico en la norma interpretada. Uno de los mecanismos más corrientes fue la nota de consulta enviada directamente a la Sala por parte del Ejecutivo solicitando se aclarase el modo en que debía interpretarse una cláusula del Reglamento cuya inteligencia provocaba ciertas dudas¹⁷. Otro de los medios comunes por los cuales se excitaba la actividad hermenéutica del Congreso era la moción presentada por algún integrante del propio cuerpo para que se explicara, por lo general en abstracto, el sentido de una norma¹⁸. La ausencia de un Supremo Tribunal de Justicia que

¹⁵ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de febrero de 1821*, pp. 109-111.

¹⁶ Para la matriz medieval de este discurso, véase el trabajo de COSTA, P. (2002) *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano.

¹⁷ Sólo a modo de ejemplo –entre tantos casos similares–, el 20 de noviembre de 1821 el Ejecutivo envió a la Sala un oficio con una consulta sobre el alcance de la incompatibilidad del cargo de representante con otros cargos de acuerdo a la letra del Reglamento Provisorio (Cap. XI, Art. 6). Los representantes acordaron que no había incompatibilidad entre el cargo de representante y el de elector para formar el Cabildo “*tanto porque el desempeño de este simple encargo es de naturaleza breve, cuanto porque el espíritu del código supone una incompatibilidad en el desempeño de los empleos y cargos de que habla, con los de representante*”, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 20 de noviembre de 1821*, p. 187.

¹⁸ También de manera meramente ejemplificativa, en la sesión del 9 de octubre de 1824 el representante Saráchaga presentó una moción para que la Sala explicara “*la ley constitucional sobre la incorporación de los suplentes*”. El Reglamento Provisorio que regía en la Provincia establecía la obligación de la Junta Electoral de nombrar junto a los representantes propietarios a cinco suplentes para que en caso de muerte o imposibilidad de alguno de aquéllos llenaran el puesto vacante. Sin embargo, la vaguedad de la norma planteaba algunos interrogantes que merecían ser aclarados ya que el texto de los Artículos 6 y 7 del Cap. X, Secc. Cuarta del Reglamento Provisorio decía: “*Art.6º.- Después de la elección de Representantes, procederá la Junta Electoral a la elección de cinco suplentes por mismo método y forma; Art.7º.- En caso de muerte o imposibilidad de alguno de los representantes, el Congreso nombrará de los suplentes el que ha de llenar la falta en cualquier tiempo que uno u otro accidente se verifique después de la elección*”. Con ese fin fue que se plantearon dos cuestiones a resolver: 1) si el suplente nombrado por una vez quedaba incorporado a la Sala para cada vez que se precisara de un suplente o no, y 2) si por la ausencia meramente temporal de un representante titular era necesario o no nombrar suplente, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 9 de octubre de 1824*, p. 259. La contestación fue el 26 de octubre del mismo año en el sentido de que quedaba nombrado durante todo su mandato y no se debía nombrar cuando la ausencia del propietario era meramente temporal, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de octubre de 1824*, pp. 271-272.

En un contexto mucho más álgido como fue el de la elección de Gobernador en febrero de 1825, el mismo Saráchaga solicitó al Congreso que antes de comenzar la votación se aclarara cómo debía entenderse aquello que decía la Constitución cuando establecía que “*un voto sobre la mitad hará elección*” (Cap. XIV,

podiera uniformar criterios en la aplicación del derecho o resolver conflictos entre normas igualmente vigentes –leyes versus Constitución–, por un lado, y la posición predominante de un legislativo también pensado como soberano jurisdiccional, por otro, llevó a que la Legislatura cordobesa oficiara de intérprete y último decisor revelando su potestad jurisdiccional¹⁹.

Al tratarse de un cuerpo colegiado soberano, no estaba sujeto institucionalmente a ninguna otra autoridad con competencia para revisar sus actos, esto dicho sin desconocer la potencia política del Gobernador que durante gran parte del período se encontró en una posición de mayor fuerza que la Sala llegando incluso –como se verá más adelante– a disolverla²⁰. Como consecuencia, sus interpretaciones de la Constitución no se basaban en razones o fundamentos de naturaleza normativa, por más que en sus alocuciones algunos representantes adujeran razonamientos de ese tipo, si no que se trataba de decisiones enteramente políticas tomadas como resultado de una simple votación entre los miembros del Congreso. Precisamente por eso es que, a lo largo del período escogido –oscilaciones políticas mediante–, se pueden observar cambios radicales en el sentido atribuido a una misma formulación normativa del Reglamento Provisorio²¹. Esa idéntica razón política permitía aceptar también la ficción de que, en ciertas circunstancias, la Constitución continuaba vigente con toda su fuerza a pesar de que las autoridades decidieran deliberadamente incumplirla, en una especie particular de la tradicional fórmula hispana del “se obedece pero no se cumple”, operando en un escenario pretendidamente constitucional con las características que se analizarán inmediatamente.

Art. 2º), y que el mismo sujeto que se encontraba desempeñando el cargo máximo del Ejecutivo “*no podrá ser reelegido, sino por una vez con un voto sobre las dos terceras partes*” (Cap. XIV, Art. 8º). Siendo en ese momento siete los representantes miembros del Congreso Provincial, se resolvió por la Sala que cuatro y cinco votos afirmativos, respectivamente, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de febrero de 1825*, pp. 302-303.

¹⁹ La Asamblea Electoral reunida en 1825 para nombrar a los representantes que debían completar la Sala según lo dispuesto por el Congreso Nacional Constituyente reunido en Buenos Aires desde el año anterior –que había intervenido en un conflicto entre la Sala de Representantes local y el Ejecutivo– envió una nota consultando el modo en que debía resolverse una contradicción de preceptos normativos entre lo establecido por la ley del 2 de abril de 1825 (en sesión extraordinaria) y el Reglamento Provisorio. Finalmente se resolvió la preponderancia de la Constitución. Más adelante en este capítulo se analiza la relevancia de la potestad jurisdiccional en un mundo como el cordobés de la primera mitad del XIX en el que todavía la noción de poder político se expresaba a través de la categoría *iurisdictio*. Sobre la noción de “constitucionalismo jurisdiccional”, de la que este rol de la Asamblea es un ejemplo, véase la mencionada colección de trabajos en GARRIGA, C. y LORENTE, M. (2007) Ob. cit.; GARRIGA, C. (2010) “Continuidad y cambio del orden jurídico”, en GARRIGA, C. (coord.) *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, Centro de Investigación y docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, México, pp. 59-106; MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2011) Ob. cit., pp. 90 y ss.

²⁰ HALPERÍN DONGHI incluso ha homologado a Bustos con los antiguos Gobernadores Intendentes, HALPERÍN DONGHI, T. (2005) *Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla*, Siglo XXI, Buenos Aires

²¹ Un caso paradigmático en este sentido es la determinación del sentido del Artículo 11º, Cap. XIV de la Constitución sobre designación del Gobernador delegado: “*En los casos de ausencia del Gobernador de la República en defensa del Estado, o de otro legítimo impedimento que le embarase el ejercicio de sus funciones, el Congreso proveerá el interino*”. El análisis de los distintos sentidos atribuidos a esta disposición, hasta el punto de tener que reformarse años después de sancionada, forma parte de uno de los epígrafes siguientes de este Capítulo: “IV. 2. El mando de la Provincia en ausencia del Gobernador”.

I. 2. La dimensión extraordinaria. Constitución y poder político

A pesar del amplio margen de maniobra que otorgaba a las autoridades políticas el mecanismo de la interpretación desde un marco cultural repleto de patrones tradicionales, hubo situaciones en las que resultaba más difícil ampliar el alcance de las disposiciones del Reglamento Provisorio que pasarlas por lo alto. La inobservancia de los límites literalmente impuestos a la autoridad política por la Constitución ha sido el argumento principal para descalificar la actuación de Gobernadores y Salas de Representantes rioplatenses durante el período estudiado en este trabajo. Así es que ciertas instituciones – o meras prácticas políticas en las provincias en las que no se hallaban reguladas– como la justificación del incumplimiento provisorio de la Constitución, o la suspensión de la seguridad individual y la concesión de facultades extraordinarias al Gobernador, han sido apreciadas por nuestra historiografía como una “deformación institucional”, un “vicio o anomalía del régimen de gobierno”, una falla “adherida a los gérmenes de una democracia embrionaria, inorgánica y personalista”²².

Esta visión estuvo fuertemente condicionada por la hipótesis de que en el Río de la Plata, a partir de la sanción de los textos constitucionales, se habría instaurado un nuevo modelo político asociado a la doctrina que postulaba la división de los poderes con ámbitos de atribuciones bien definidos para cada uno de ellos. Sin embargo, más allá de los matices a los que debe someterse una afirmación de ese tipo, desde otras corrientes historiográficas se ha propuesto una explicación superadora que parte desde los fundamentos basilares del orden político de aquel tiempo y lugar. La estrategia viene dada por la reconstrucción de la “antigua constitución” rioplatense –que poco se diferenciaba de la novohispana o la castellana–, y por la recuperación de los caracteres tradicionales de la cultura jurídica de aquel tiempo y lugar también compartida por todo el orbe hispano²³.

Como ha manifestado AGÜERO para el contexto que aquí se analiza, una de las características diferenciadoras del antiguo orden jurídico, en el marco del paradigma cultural en el que se desarrolló y operaba, era su estructuración por medio de una

²² TAU ANZOÁTEGUI, V. (1961) “Las facultades extraordinarias y la suma del poder público en el derecho provincial argentino (1820-1853)”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Nro. 12, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, pp. 66-105, p. 66. Un trabajo más completo dedicado exclusivamente al asunto de la regulación constitucional de la concesión de facultades extraordinarias en todo el continente hispanoamericano es el libro de LOVEMAN, B. (1993) *The Constitution of Tyranny: Regimes of Exception in Spanish America*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh and London.

²³ Para comprender globalmente las características basilares del orden político prerrevolucionario y su proyección en tiempos constitucionales puede consultarse el *Dossier* dirigido por GARRIGA, C. (2004) *Historia y derecho, historia del derecho*, Istor, Nro. 16; o la obra coordinada por el mismo autor (2010) *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, Centro de Investigación y docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, México. Sólo a modo de ejemplo, para el Río de la Plata, pueden citarse los trabajos de CHIARAMONTE, J. (2010) “La antigua constitución luego de las independencias, 1808-1852”, en *Desarrollo económico*, Vol. 50, Nro. 199, pp. 331-361; AGÜERO, A. (2010a) “Formas de continuidad del orden jurídico. Algunas reflexiones a partir de la justicia criminal de Córdoba (Argentina), primera mitad del siglo XIX”, en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Disponible en <http://nuevomundo.revues.org/59352>.

dinámica agregativa según la cual era perfectamente posible “incorporar nuevas soluciones conservando el valor simbólico y virtualmente operativo de las antiguas”, una dinámica normativa que “hacía incluso posible justificar soluciones ‘extraordinarias’ para situaciones que no podían resolverse por los consensos normativos preexistentes”²⁴. Ante un escenario como ese, los fundamentos que habilitaban una posibilidad como aquella – extraordinaria– estaban sostenidos por “dos rasgos culturales del razonamiento normativo precontemporáneo”: por una parte, “el factualismo, esto es, la posibilidad admitida de derivar argumentos normativos a partir de condiciones fácticas, o calificadas como fácticas”, y por otra parte, “el particularismo, vale decir, la convicción de que cada comunidad humana, fuera de base territorial o estamental, tenía derecho a un conjunto normativo especialmente vinculado a sus condiciones de existencia”²⁵.

Aceptado esto, las soluciones extraordinarias encontraban su justificación dentro del propio discurso normativo dejando de ser percibidas como meras deformaciones o desviaciones institucionales. Este es el marco de comprensión de prácticas recurrentes en la Provincia de Córdoba durante la primera mitad del Siglo XIX como la aceptación del incumplimiento de la Constitución en un caso concreto sin perjuicio de mantener su vigencia para los restantes, la suspensión de las disposiciones relativas a la seguridad individual, el otorgamiento al Gobernador de facultades extraordinarias, y hasta su investidura con la suma del poder público²⁶.

En relación con el primero de los rasgos culturales que fundamentaban el valor normativo de las situaciones extraordinarias, podría realizarse un paralelismo con una tradicional fórmula indiana según la cual era posible –al mismo tiempo– obedecer pero no cumplir alguna disposición normativa²⁷. De esta manera, alegando razones suficientes en

²⁴ AGÜERO, A. (2013b) “La Asamblea del año XIII y la dimensión extraordinaria del orden jurídico tradicional. Reflexiones en torno al juramento e instrucciones del cabildo de Córdoba”, en *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, Nro. 13, p. 3. Disponible en <http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAn13a11>. Sobre la noción de “excepción” y “extraordinario” puede consultarse MECCARELLI, M. (2009) “Paradigmi dell’eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica”, en *Quaderni Storici*, Año XLIV, Nro. 131, pp. 493-521. El trabajo dialoga con la tesis sostenida por AGAMBEN, G. (2003) *Stato di eccezione. Homo sacer, II, i*, Bollati Boringhieri, Torino.

²⁵ AGÜERO, A. (2013b) Ob. cit., p. 3.

²⁶ Como ocurrió con el resto de las instituciones o prácticas analizadas en este trabajo, tanto una como otras soluciones extraordinarias no fueron patrimonio exclusivo de Córdoba ni mucho menos. En la mayoría de los espacios políticos que heredaron el fragmentado territorio de la Monarquía Católica puede observarse su utilización y desarrollo a lo largo de la primera mitad del ochocientos. En el trabajo de TAU ANOZÁTEGUI, V. (1961) Ob. cit., puede hallarse un recorrido por los distintos casos rioplatenses en los que se utilizaron estas medidas aquí analizadas. CHIARAMONTE, J. (2010) Ob. cit., vincula las facultades extraordinarias a la “antigua constitución”.

²⁷ “De entre las viejas prácticas asimiladas por el nuevo orden constitucional merecen destacarse aquéllas que tenían como objetivo paralizar la entrada en vigor de las normas por entender que, o bien no se ajustaban a las necesidades particulares de un determinado territorio, o bien chocaban con privilegios propios del mismo. Una particular versión del “obedézcase pero no se cumpla” se instaló en el seno del moderno constitucionalismo, puesto que las diferentes autoridades y cuerpos se lanzaron a “consultar” a otros la inteligencia de las normas recibidas, incluso cuando su letra fuera inequívoca: así, por ejemplo, las Cortes se sintieron molestas cuando el Ayuntamiento de Cádiz consultó sobre si los jefes políticos debían o no votar las decisiones tomadas por los Ayuntamientos, de la misma manera que la Diputación de la Nueva Galicia tuvo que recordar al Alcalde de Jalostotitlán que los alcaldes o gobernadores no podían elegirse

un determinado espacio y momento, se justificaba dejar de observar una norma en principio aplicable sin que ello implicara desconocer su validez ni la legitimidad de la autoridad que la había dictado, con lo cual, siendo otras las circunstancias contextuales, la norma debía observarse. Luego de sancionado el Reglamento Provisorio, la radicalidad de la guerra y la inestabilidad política fue minando progresivamente la legitimidad de la Constitución a favor de otra “Ley Suprema”: la salvación, seguridad y tranquilidad del país. En virtud de ésta, por ejemplo, disposiciones normativas como las que establecían el modo en que debía elegirse el Gobernador, nombrarse su sustituto temporal, o aquéllas que establecían las proporciones para la designación de diputados, entre otras, dejaron de cumplirse intencionalmente en determinados casos concretos “sin perjuicio de mantener su vigencia” para los casos futuros que pudieran presentarse²⁸.

Otra faceta de esta dimensión extraordinaria del orden político-constitucional es la que está directamente relacionada con la concentración del poder político en cabeza del titular del Poder Ejecutivo, e íntimamente vinculada con ella, la suspensión de toda una serie de derechos y garantías relativas a la seguridad individual explícitamente reconocidas en el Cap. XXIII “Declaración de Derechos” del Reglamento Provisorio²⁹. Según establecía la Constitución, “*Las anteriores disposiciones relativas a la seguridad individual jamás podrán suspenderse*” (Art. 21º, Cap. XXIII). No obstante la contundente

como se acostumbraba antiguamente entre los pueblos de indios”, LORENTE, M. (2010) Ob. cit., pp. 334-335.

Para un análisis de esta práctica jurídica característica del orden jurídico tradicional estructurado a partir de la cultura jurídica del Derecho Común, con caracteres específicos en el ámbito del Derecho Indiano véase TAU ANZOÁTEGUI, V. (1992b) “La ley en América hispana, del descubrimiento a la emancipación”, en *Colección del Quinto Centenario del Descubrimiento de América*, Nro. V, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, pp. VII-439.

²⁸ Con motivo de la reelección de Juan Bautista Bustos como Gobernador de la Provincia el día 30 de marzo de 1825, una Asamblea Electoral en la que se hallaba reunido parte del vecindario de la ciudad, y no el Congreso Provincial, decidió por aclamación que fuera el ex Gobernador quien siguiera desempeñándose en su cargo “*dejando vigentes las leyes constitucionales de la materia en los casos que ocurran sucesivamente*”, SEGRETI (1970) *Juan Bautista Bustos en el escenario nacional y provincial*, Ediciones Culturales Cordobesas, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba, p. 183.

Los días 27 y 28 de diciembre del año 1825 se discutió en la Legislatura la ley sancionada por el Congreso Nacional sobre el modo en que debían elegirse los diputados que representaban a las Provincias ante el cuerpo constituyente reunido en Buenos Aires. El conflicto se suscitó porque la norma nacional estaba en franca oposición al texto constitucional cordobés ya que fijaba la proporción de un diputado cada siete mil almas. El segundo día se admitió provisionalmente la solución opuesta a la Constitución de la Provincia, sin perjuicio de declarar que el documento provincial quedaba, a pesar de la decisión, vigente, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 28 de diciembre de 1825*, pp. 423-424.

Hacia el final del período seleccionado en este capítulo, en el mes de junio del año 1844, una vez vencido el último mandato permitido por la Constitución de Manuel López como Gobernador de la Provincia, y estando todos los representantes de acuerdo en que fuera él mismo quien continuara al frente del Ejecutivo, se sancionó un decreto prorrogando por tres años el mando gubernativo de la Provincia de Córdoba en su persona, suspendiendo la elección de Gobernador de que habla el Art. 8 del Cap. XIV de la Constitución, sin perjuicio de mantener su vigencia, en *Compilación de leyes, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter público dictadas en la Provincia de Córdoba desde 1810 a 1870*, Tomo I, Imprenta del Estado, Córdoba, 1870, p. 177.

²⁹ En materia de suspensión de garantías en un orden jurídico-político con Constitución, es de referencia obligada la obra de CRUZ VILLALÓN, P. (1984) *Estados excepcionales y suspensión de garantías*, Tecnos, Madrid.

enunciación de dicho principio general, a renglón seguido se admitía también que el Gobernador –dando cuenta inmediatamente al Congreso Provincial– dejara de observar cuanto en ellas se prevenía siempre que fuese necesario en virtud de “*un muy remoto y extraordinario acontecimiento que comprometa la tranquilidad pública, o la seguridad del Estado*” (Art. 22°, Cap. XXIII).

Según este diseño particular de la excepción, en línea con la idea material de constitución, es posible identificar la fuerte presencia de un “orden de valores que seguía poniendo en primer plano el viejo sentido colectivo de la libertad”³⁰. De esa manera, se condicionaba aún más la vigencia de unas disposiciones que, interpretadas en aquel marco cultural, ya tenían mucha menor potencia que la que suele atribuírseles desde una perspectiva liberal-individualista. El uso de este “remedio” frente a lo extraordinario no tardó en producirse y el 5 de abril del año 1821, apenas un mes y medio después de la promulgación del texto constitucional, el Gobernador interino Francisco Bedoya publicó un Bando declarando “suspensa la seguridad individual” para enfrentar sin barreras los peligros que acechaban a la Provincia de Córdoba tanto al norte como al sur de su territorio³¹. En esta primera oportunidad, fue la Sala de Representantes la que debió instar en más de una oportunidad al Ejecutivo a que restituyera el artículo ilimitadamente suspendido por el Gobernador, como consecuencia de haberse “alejado los peligros que amenazaban la seguridad pública”³². Sin embargo, fue recién cinco meses más tarde cuando el propio Congreso decidió finalmente restituir “á su más ajustado rigor el derecho de seguridad individual, habiéndose por revocada la suspensión que durante la Asamblea electoral adoptó el Ejecutivo en 5 de Abril de este año”³³.

Es posible encontrar en la historia cordobesa otros casos de suspensión en los mismos términos que el anterior³⁴. Sin embargo, en los sucesivos gobiernos los remedios

³⁰ AGÜERO, A. (2013b) Ob. cit., p. 16. Sobre el sentido colectivo de libertad en contraposición al sentido individual de la misma, véase el clásico trabajo de CONSTANT, B. (1820) “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, en *Curso de política constitucional*, Tomo III, Imprenta de la Compañía, Madrid.

³¹ Un trabajo que explora estos acontecimientos que impulsaron la medida extraordinaria de la suspensión de la seguridad individual recogida en la Constitución cordobesa es el de VIVAS, M. (2010) “José Miguel Carrera y su invasión a la Provincia de Córdoba (consecuencias políticas y jurídicas)”, en *Revista Chilena de Historia del Derecho*, Nro. 22, Tomo II, pp. 1073-1089. Disponible en <http://www.historiadelderecho.uchile.cl/index.php/RCHD/article/viewFile/22152/23470>

³² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de junio de 1821*, p. 144.

³³ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 7 de septiembre de 1821*, p. 169.

³⁴ Por ejemplo, El 8 de enero de 1827 cuando el Gobernador Bustos descubrió una conspiración para derrocarlo y envió a la Sala un oficio para que se considerara la propuesta del Ministerio Fiscal acerca de la suspensión de la seguridad individual. La Comisión Permanente, que remplazaba al Congreso Provincial con sus mismas facultades así lo resolvió por el término de dos meses y otorgando al Ejecutivo amplias facultades: “*Queda suspensa la seguridad individual por el término de dos meses, y se faculta al P.E. para que tome todas las medidas que le parezcan mejor convenir para salvar el país y mantener su tranquilidad*”, AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 8 de enero de 1827*, p. 209. Vencido por más de un mes el plazo originalmente previsto, el flamante Ministro de Gobierno Juan Pablo Bulnes concurrió a la Sala para pedir la prórroga de la suspensión de la seguridad individual por un mes más debido a que “*amenazaban de nuevo peligros inminentes a la Provincia*” y la medida era necesaria para “*consolidar el sosiego*”, AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 6 de abril de 1827*, pp. 249-250. Resulta interesante destacar que en la sesión siguiente, en la que se discutió y concedió la prórroga, los representantes

más utilizados fueron otros que ni siquiera estaban previstos en el documento constitucional tales como la concesión de facultades extraordinarias al Gobernador e incluso el otorgamiento de la suma del poder público. Al no tratarse de soluciones regladas, la determinación de su alcance dependió en cada caso particular de las circunstancias en las que se produjo –y fundamentó– la autorización, abarcando, por lo general, mayor concentración de poder político –expresado en términos jurisdiccionales– aunque con una retórica de reunión de los tres poderes en tensión con expresiones de la vieja cultura jurídica³⁵. Planteado a partir del estudio del caso bonaerense, aunque extensible, *mutatis mutandis*, al resto de las provincias que estuvieron bajo su influencia directa, TAU ANZOÁTEGUI propone distinguir –dentro del período aquí considerado– dos etapas en el desarrollo de estas instituciones. Una primera se desarrollaría entre los años 1820 y 1835, etapa en la que “el incremento de las facultades extraordinarias del Ejecutivo respondía a las necesidades locales de cada provincia”, y otra que iría desde 1835 hacia adelante, durante la cual “se advierte que el aumento de atribuciones del Ejecutivo –conformando las facultades extraordinarias o la suma del poder público– constituía un principio orgánico usado para la conservación y el desarrollo del régimen político”³⁶. Sobre el contenido de la delegación, el titular para realizarla, el período de tiempo durante el cual se autorizaba al Ejecutivo –plazo cierto o incierto, determinado o indeterminado– y las condiciones de su ejercicio, como por ejemplo la obligación o no de rendir cuentas una vez cumplido el plazo de finalización de la delegación, no hay nada reglado y cada caso en concreto se diferenciaba del resto. Y la relatividad no sólo se puede percibir entre los distintos espacios políticos que echaron mano a las instituciones sino que también dentro de los límites territoriales de cada provincia variaron de vez en vez. Repasar en detalle algunos ejemplos puede ayudar a definir mejor la naturaleza del fenómeno.

En dos oportunidades el Gobernador Juan Bautista Bustos fue investido por el Congreso Provincial cordobés con la suma del poder público, ambas durante su segundo mandato. La primera de ellas fue obra de una Asamblea Provincial autoconvocada sin ningún tipo de legitimidad constitucional que luego será analizada: la reunión de la Provincia que en los primeros meses del año 1825 reeligió canónicamente a Bustos como titular del Ejecutivo cordobés. Antes de ello, entre la disolución de la Legislatura que había nombrado Gobernador a Julián Martínez y la reelección, dicho cuerpo encargó “al exmo. Señor don Juan Bautista Bustos, el ejercicio de los tres poderes provisoriamente

“promovieron algunas dudas, especialmente sobre lo que importaba el suspender la seguridad individual, y para desvanecerlas se mandó leer el Reglamento de la Provincia, en el capítulo de declaraciones de derechos”, sin que conste el detalle sobre las posiciones sostenidas en esa oportunidad, AHDCD, Tomo II, Acta de la sesión del 7 de abril de 1827, pp. 252-253.

³⁵ Desde una posición más cercana a la que postula la vigencia de la doctrina de la división de poderes, TAU ANZOÁTEGUI propone una definición por diferencias de ambas instituciones, así, “mientras las facultades extraordinarias eran delegaciones de naturaleza legislativa especialmente y en muchos casos referidas solamente a determinadas materias, la suma del poder público equivalía no sólo a la total absorción de atribuciones legislativas, sino también de las funciones judiciales [...] dentro de la inteligencia del vocablo ‘suma del poder público’ debía comprenderse además, la suspensión de la seguridad o garantía individual”, TAU ANZOÁTEGUI, V. (1961) Ob. cit., p. 93.

³⁶ TAU ANZOÁTEGUI, V. (1961) Ob. cit., p. 95.

hasta la reunión de toda la provincia”³⁷. Ahora bien, por el modo en que se produjo y la autoridad política que la decretó, siendo el objetivo de estas líneas analizar el desarrollo de una práctica política legítima, resulta más interesante el caso planteado hacia finales del año 1828 luego de que estallara en Buenos Aires la revolución del 1º de diciembre que había derrocado al Gobernador de aquella Provincia, Manuel Dorrego³⁸. Llegada la noticia de los acontecimientos a Córdoba, el representante Benito Lascano presentó un proyecto que fue aprobado sin demoras confiriendo a Bustos la suma del poder público como único medio para salvaguardar la seguridad de la Provincia dado el estado de inestabilidad y desasosiego generado; el riesgo que dicha medida implicaba era bien conocido, sin embargo, su asunción estaba justificada en la confianza sobre el sujeto³⁹.

En tiempos del General José María Paz, el Gobierno presentó a la Sala algunas providencias para obrar militarmente y tomar represalias contra revoltosos que hostilizaban los Curatos de Pocho y San Javier. El representante Saráchaga observó que era *“muy justo y conducente a la seguridad y tranquilidad de la Provincia, conceder al Ejecutivo las facultades extraordinarias que pedía, sin que esta medida debiera causar recelos, de que el Ejecutivo pudiera abusar de ella, en el uso o en la duración del tiempo porque las debía ejercer, pues que la Sala tenía en su seno una comisión permanente, encargada particularmente de velar sobre la observancia del Reglamento (...) obrar militarmente no significaba obrar sin regla y por puro antojo o capricho, sino solamente la de formar un juicio sin las ritualidades y lentitudes de los ordinarios, civiles o criminales”*, y sin mayores opiniones en contrario se acordó otorgar las facultades extraordinarias al Ejecutivo⁴⁰. Precisamente, un rasgo tradicional de la dimensión

³⁷ RAVIGNANI, E. (1939) *Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los textos constitucionales, legislativos y pactos interprovinciales que organizaron políticamente la nación*, Tomo I, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Jacobo Peuser, Buenos Aires, pp. 1216-1218.

³⁸ GOLDMAN, N. (dir.) (1998) *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, Colección Nueva Historia Argentina, Tomo III, Sudamericana, Buenos Aires.

³⁹ *“Artículo 1º No debiendo el país todo, esperar otros resultados que aquellos que son clasificados por funestos, de la deposición del Señor Gobernador de Buenos Aires Don Manuel Dorrego, que obtenía por los Pueblos la investidura de entender en los negocios de guerra, paz y relaciones exteriores, usando esta Comisión General Permanente, de las facultades sin límites que la Sala de Representantes al tiempo de vacacionarse se ha servido conferirle en sesión del 5 del corriente, y en consideración a observarse próximamente comprometida la tranquilidad pública con aquel acontecimiento extraordinario, autoriza al Supremo Poder Ejecutivo de esta Provincia con los tres altos poderes, en toda su plenitud, para que a su nombre promueva y active por todos los medios que imperiosamente piden las circunstancias, y sean de su posibilidad, las deliberaciones y recursos conducentes a conservar su seguridad, y salvar con decoro sus compromisos con las demás reunidas en Convención en la ciudad de Santa Fé, y muy especialmente con la de Buenos Aires según el artículo 1º de sus tratados sancionados en 4 de Octubre de 1827; y aunque parece peligroso reunir los tres poderes en un solo individuo, no es de esperar del actual Jefe, se desvíe de la imparcialidad, equidad y justicia con que se debe obrar; porque la experiencia ha enseñado, que investido en otra ocasión con facultades extraordinarias, no se le ha notado abuso el más pequeño en su administración, debiendo no obstante ser duradera esta medida hasta tanto dichas Provincias se reúnan en Congreso: cesará de consiguiente el Tribunal de Apelaciones en el ejercicio de sus funciones, desde el momento que sea instruido legalmente de esta disposición, como cesa en las suyas esta Comisión permanente desde el día de su resolución. Artículo 2º Comuníquese al Supremo Poder Ejecutivo, para su inteligencia, publicación por bando y efectos consiguientes”, AHCDC, Tomo III, Acta de la sesión del 10 de diciembre de 1828, pp. 137-138.*

⁴⁰ AHCDC, Tomo III, Acta de la sesión del 1 de septiembre de 1829, pp. 167-168.

extraordinaria era la justificación de actuaciones coactivas sin la observación del orden procesal. Tiempo después la situación de desorden interior continuaba y obligaba a tomar medidas urgentes para sofocar los conflictos. Esas circunstancias seguían justificando la medida adoptada y así lo reconocía el Gobernador interino Julián Martínez al dar su mensaje a la Sala de Representantes en 1830: *“Era preciso obrar con la misma celeridad con que lo hacían los partidarios del desorden. Las formas lentas de nuestra legislación hacían perder la oportunidad de un escarmiento que ahorrarse sin numero de víctimas, que en otro seria foroso ofrecer á la tranquilidad publica. La ley de 1º de septiembre estendiendo el poder y facultades del gobierno, dió á este los medios que le faltaban para asegurar aquella”*⁴¹.

Fue recién el 16 de julio de 1830 cuando el Poder Ejecutivo devolvió a la Sala de Representantes las facultades extraordinarias que ésta le había concedido casi un año atrás⁴². Sin embargo, el gobierno de Paz no acababa de consolidarse políticamente y en las primeras semanas del año siguiente fue preciso nuevamente echar mano de esta práctica extraordinaria. El 9 de febrero de 1831 se concedió al Gobierno *“un poder discrecional para proporcionarse los recursos que fuesen necesarios para salvar el País”*, aclarando que no por eso podría *“imponer a ningún ciudadano la pena capital, salvo a los que se hallen en los casos del derecho de guerra”*⁴³. En esta oportunidad la concesión se realizó por sólo quince días aunque resultó prorrogada los días 21 de marzo, 12 de abril y 6 de mayo de 1831⁴⁴.

Mientras se desarrollaba el gobierno de José Vicente Reynafé, el día 26 de agosto de 1831 se presentó un proyecto para autorizar al Gobernador *“para que sin limitación alguna en el uso y ejercicio de la autoridad, se expida, siga y administre la Provincia, con toda la plenitud de facultades ordinarias y extraordinarias”*, poniéndose a la Sala en receso durante todo el período de vigencia de dicha autorización, cuya fecha de caducidad estaba prevista para el día 31 de diciembre del mismo año. En la sesión del 27 se presentó un nuevo proyecto por parte del Ministro de Gobierno en igual sentido y el 31 de agosto se votó y acordó la concesión⁴⁵. En cumplimiento de lo sancionado, la Sala se disgregó y quedó nombrada en su lugar una comisión *“para que actuase en las ocasiones que fuese preciso durante su receso”*⁴⁶. Cumplido el plazo estipulado, el 2 de enero se presentó una moción para que se declarara si habían concluido o no las facultades extraordinarias. Allí mismo se denunció que nunca se había dado cuenta exacta del uso que de ellas había

⁴¹ Documento N°3, *Mensaje del Gobernador José Julián Martínez, Córdoba, 1º de junio de 1830*, en FERREYRA, A. (1980) *Mensajes de los Gobernadores de Córdoba a la Legislatura*, Tomo I: 1828-1847, Centro de Estudios Históricos, Córdoba, p. 18.

⁴² AHCDC, Tomo III, *Acta de la sesión del 16 de julio de 1830*, pp. 328-330.

⁴³ AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 9 de febrero de 1831*, pp. 28-33.

⁴⁴ AHCDC, Tomo IV, *Actas de las sesiones de los días 21 de marzo* (pp. 34-36), *12 de abril* (pp. 37-38), y *6 de mayo* (pp. 39-40) *del año 1831*.

⁴⁵ *“Artículo único - Queda autorizado el S.P.E. de la Provincia, con todas las facultades extraordinarias que exige el infeliz actual estado de la provincia, por el término prefijo de 4 meses; debiendo dar cuenta de cuanto practicare en virtud de las facultades arriba indicadas”*, AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 31 de agosto de 1831*, p. 69.

⁴⁶ AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 31 de agosto de 1831*, pp. 70-71.

hecho el Ejecutivo, sin embargo, dos días después se prorrogaron y confirmó nuevamente como Gobernador delegado a Calixto María González⁴⁷. El 29 de febrero de 1832 se presentó ante la Sala un oficio del Ejecutivo explayándose sobre el uso de las facultades extraordinarias que pasó al análisis de una comisión *ad hoc*, hasta el 13 de marzo de 1832, día en que se aprobó todo lo hecho por el Gobernador en uso de ellas⁴⁸.

Ya durante el gobierno de Manuel López la práctica supuestamente excepcional se convirtió en regla y tomó dimensiones extraordinarias, tanto como las facultades que al titular del Ejecutivo se concedían. Como consecuencia de una tendencia de ordinarización de lo extraordinario que acabará constitucionalizándose en 1847, en gran parte de su mandato fue agraciado por la Sala de Representantes con el permiso para ejercer facultades extraordinarias sin ningún tipo de control ni condicionamientos. Sólo a modo de ejemplo, es interesante reproducir los términos en los que se realizó la concesión en el mes de julio del año 1845: “*en atención al inminente riesgo en que se halla la provincia y toda la República*”, el Congreso Provincial acordaba investir al Gobernador –cuyo mandato había sido prorrogado– con “*la suma del poder público, por todo el tiempo que lo considere necesario*”⁴⁹.

Por lo general suelen esgrimirse como causas que explicarían la utilización de estos instrumentos razones de corte circunstancial como la inestabilidad política de las Provincias, el estado de guerra permanente –civil, de independencia y otros conflictos internacionales–, la inmadurez cívica o el fenómeno político del caudillismo⁵⁰. En términos más generales, algunos autores prefieren hablar de falta de saber o *expertise* en el diseño de constituciones⁵¹. Ahora bien, sin dejar de reconocer la relevancia de algunas de estas razones en el plano de la motivación para tomar decisiones, para llegar a desentrañar los argumentos normativos que permitían justificar el uso de tales institutos, quizá ayude más explorar las soluciones extraordinarias durante la experiencia de la primera mitad del siglo XIX a partir de los fundamentos del viejo derecho “que haciéndolo por el lado de una supuestamente mal aprendida doctrina de división de

⁴⁷ AHDCD, Tomo IV, *Acta de la sesión del 4 de enero de 1832*, pp. 87-89.

⁴⁸ “Art. 1º. Apruébase en todas sus partes el uso que el Excmo. P.E. ha hecho de las facultades extraordinarias con que fué investido en sanción del 31 de Agosto del año próximo pasado”, AHDCD, Tomo IV, *Acta de la sesión del 13 de marzo de 1832*, p. 120.

⁴⁹ *Compilación de leyes...* cit., p. 179.

⁵⁰ En este sentido, TAU ANZOÁTEGUI, V. (1961) Ob. cit., pp. 95-96. En el ámbito de la historiografía política y social el tema del caudillismo en el Río de la Plata es un tema de constante polémica y debate. Para un sector de la historiografía los caudillos han sido la encarnación de la lucha de los pueblos contra la imposición centralizante de Buenos Aires, mientras que para otros han sido vistos más bien como sinónimo de la barbarie rural y la incivilización. En este sentido, es de consulta obligada la obra colectiva dirigida por GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comp.) (1998) *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, Eudeba, Buenos Aires. Si bien la mayoría de los trabajos allí recopilados son apropiados para la argumentación que aquí se desarrolla, para conocer el derrotero de la historiografía argentina sobre este tema es particularmente útil el trabajo en esa obra de BUCHBINDER, P. “Caudillos y caudillismos: una perspectiva historiográfica”, pp. 31-50. Al margen de esa obra de varios autores, también resulta atractiva la propuesta de CHUMBITA, H. (2009) *Jinetes rebeldes. Historia del bandolerismo social en la Argentina*, Ediciones Colihue, Buenos Aires.

⁵¹ AGUILAR RIVERA, J. (2000) *En pos de la quimera. Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico*, Centro de Investigación y Docencia Económicas – Fondo de Cultura Económica, México.

poderes, o por el de las influencias clásicas (i.e. las dictaduras romanas), aunque algunas referencias en ese sentido aparecieran a nivel retórico”⁵².

II. EL CONGRESO PROVINCIAL, CUERPO SOBERANO DE REPRESENTANTES

Como ya se ha visto, desde principios del año 1820 había funcionado en Córdoba una Asamblea formada con representantes de los distintos Curatos. El objeto de su reunión había sido estrictamente fijado en la convocatoria lanzada por el Gobernador Interino José Xavier Díaz, sin embargo, al poco tiempo de comenzar a deliberar amplió sus potestades y se mantuvo funcionando durante algo más de un año⁵³. Dos meses después de la sanción del texto constitucional, uno de los representantes de la Asamblea cordobesa expuso ante sus colegas la necesidad de formar el Congreso Provincial que en aquel documento habían creado. Entre las razones que sostenían su moción tenía más peso el argumento factual que el normativo. Además de parecerle conveniente “llenar en lo posible los mandamiento de dicho Reglamento”, hizo hincapié en las bondades que para la gestión de los asuntos provinciales traería aparejada dicha erección. Sosteniendo una idea más bien identitaria de la representación en la que era irrelevante la aritmética, si se respetaban las proporciones establecidas en la Constitución el número de los congresales sería mucho menor al número de representantes que en ese momento componían la Sala, con lo cual, la reunión de todos los miembros del cuerpo sería mucho menos costosa y más pronta la expedición de los asuntos que debían despacharse⁵⁴.

El primer Congreso Provincial quedaría formado luego de cumplido el tercer momento –o grado– de la elección indirecta de los representantes. Los dos primeros –en pedanías y Curatos, respectivamente– habían servido para designar a los diputados integrantes de la Soberana Asamblea que eligió a Bustos como Gobernador propietario, declaró la Independencia y sancionó el *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba*. Luego, ellos mismos, en uso de los poderes que habían sido ampliados en la consulta hecha a sus poderdantes, nombraron a la primera camada de miembros del Congreso Provincial. Aquí está el tercer grado eleccionario; se completaba así el ciclo abierto el 6 de marzo de 1820.

De acuerdo a las proporciones establecidas en el Reglamento Provisorio –un representante cada doce mil almas (Art. 10, Cap. X)–, el día 25 de abril del año 1821 “considerándose la principal y de mayor necesidad la elección del Congreso Provincial, procedióse á su nombramiento, y resultaron electos, á pluralidad de votos, Representantes en propiedad los señores Diputados Doctor Norberto Allende y Don José Eugenio del Portillo, Licenciado Don Lorenzo Villegas, Doctor Don Marcelino Tissera y Licenciado Don Benito Lascano, y para suplentes, Don José Vélez, Licenciado Don

⁵² AGÜERO, A. (2013b) Ob. cit., p. 13.

⁵³ Un análisis detallado de la Asamblea electoral de 1820 y su mutación en constituyente ha sido desarrollado en el Capítulo I de esta investigación.

⁵⁴ AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 4 de abril de 1821*, p. 122. La moción, suficientemente apoyada aunque diferida, fue presentada por el diputado Doctor José Roque Savid.

Andrés de Oliva, Doctor Don José Roque Savid, Doctor Don José Antonio Ortiz del Valle y Don José Lascano”⁵⁵. Unos días más tarde, con fecha 11 de mayo del mismo año, acabó instalándose el Congreso con todos sus miembros titulares salvo el Doctor José Norberto Allende, subrogándolo hasta tanto mejorara su salud otro Doctor, Don José Antonio Ortiz del Valle⁵⁶.

Hablar del derrotero del Congreso Provincial durante el período de estudio seleccionado es también hablar de las pujas y confrontaciones entre éste y el resto de los poderes creados por el Reglamento Provisorio, enfrentamientos que muchas veces tenían origen en tensiones puramente faccionalistas, de bandos acomodados en los distintos espacios políticos que instrumentalizaban su posición para presentar la disputa como conflicto de instituciones ocultando de ese modo los verdaderos conflictos de intereses subyacentes⁵⁷. Sin embargo, estas pugnas servían también para ir delimitando el ámbito de actuación de cada uno de ellos, por mucho que en el diseño de los constituyentes estuvieran correctamente delimitados. A esta razón de fuerzas habrá que agregar el examen de distintas cuestiones orgánicas del propio cuerpo representativo que condicionaron su marcha como, por ejemplo, el nombramiento de los representantes y la definición de sus deberes y obligaciones, la lenta y sinuosa deliberación para llegar a sancionar un reglamento interno de debates que organizara toda la actividad de la Sala, la recurrente intermitencia de las sesiones fundada en las más diversas y complejas causas, entre otras.

II. 1. La selección de los representantes, sus prácticas y estatus

Desde los comienzos de la república de Córdoba un mismo y selecto grupo de familias fueron las que participaron en la dirección de los asuntos públicos aportando individuos de su seno para ocupar los principales cargos en el Cabildo de la ciudad. La sanción de la Constitución provincial en 1821 y la creación de un nuevo cuerpo de representantes, cuyos miembros se nombraban a partir de todo un sistema de elecciones indirectas en la ciudad y la campaña, no alcanzaron a modificar radicalmente aquel escenario atravesado por lógicas de poder propias de una sociedad corporativa, tradicional o de antiguo régimen. En ese sentido, una vez extinto el Cabildo de la ciudad en el año 1824, “el círculo de hombres letrados o habituados a la dirección de los asuntos de la república se desplazaba definitivamente al ámbito de las nuevas instituciones provinciales”⁵⁸.

⁵⁵ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de abril de 1821*, p. 128.

⁵⁶ Cfr. CELESIA, E. (1932) *Federalismo Argentino: Apuntes Históricos, 1815-1821, Córdoba*, Tomo III, Lib. Cervantes de Julio Suárez, Buenos Aires, p. 99.

⁵⁷ Analizando el caso mexicano, se ha dicho que “al enfrentamiento entre facciones opuestas en los estados se unió el defecto de diseño de las constituciones locales. Las facciones se apropiaron de las instituciones políticas formales para combatirse entre ellas. Si nada aseguraba el equilibrio entre poderes entonces la estructura constitucional se convirtió en un canal de expresión de la lucha faccional. La constitución se prestaba a ello”, AGUILAR RIVERA, J. (2000) Ob. cit., p. 120.

⁵⁸ AGÜERO, A. (2012) “La extinción del cabildo en la República de Córdoba, 1815-1824”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani* [online], Nro. 37, pp. 41-82, p. 54.

Hace ya tiempo que ROMANO desarrolló una línea de investigación sobre redes de poder político y prácticas electorales en la provincia de Córdoba⁵⁹. Según sus estudios, sería posible diferenciar una serie de rasgos característicos de la configuración de la clase política cordobesa entre los que se destacan “la indiferenciación entre elite social y elite política, el papel rector o tutelar de la religión en los diversos órdenes de la vida social y cultural, el poder asentado en la Ciudad, referenciado en corporaciones y en sus actores más prominentes y la escasa autonomía de la política como actividad diferenciada de la vida social”⁶⁰. Ya se ha visto cómo el Reglamento Provisorio, pese a una generosa declaración genérica acerca de la ciudadanía, restringía fuertemente el ejercicio activo y pasivo de los derechos políticos asegurando el control de las instituciones políticas por parte de un reducido grupo de notables. Un repaso por las listas de representantes y demás autoridades políticas durante la primera mitad del Siglo XIX demuestra que, en su gran mayoría, quienes resultaban electos para desempeñar los distintos cargos en la nueva estructura diseñada por la Constitución eran reconocidos comerciantes, universitarios, hacendados y eclesiásticos pertenecientes al clero regular. Por ello, “es posible pensar que, como en otros espacios, esos funcionarios civiles, militares y eclesiásticos, por sus jerarquías y condición social, fueran considerados en el imaginario social autoridades “naturales” (en el sentido de orden dado) elegibles también como “hombres de representación” aptos para representar a la comarca”⁶¹.

Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0524-97672012000300002&lng=es&nrm=iso

⁵⁹ Junto a Valentina AYROLO, en el marco del proyecto “Las redes de poder en la provincia de Córdoba: funcionarios, notables y representación política, 1815-1855”, hace más de una década que se vienen analizando los distintos extremos del sistema electoral cordobés durante la primera mitad del Siglo XIX, algunos trabajos publicados con los resultados de estas investigaciones son ROMANO, S. y AYROLO, V. (2001) “Poder y representación política en Córdoba, Argentina, a mediados del Siglo XIX”, en *Revista História*, UNISINOS, Nro. 4, Vol. 5, julho-dezembro; ROMANO, S. (2002) Ob. cit.; ROMANO, S. (2010) “Las nuevas fuentes de legitimación del poder y sus protagonistas en la configuración del sistema republicano y representativo en la provincia de Córdoba (1821-1855)”, en César TCACH (coord) *Córdoba Bicentenario. Claves de su historia Contemporánea*, UNC-CEA, Córdoba, pp. 15-35.

⁶⁰ ROMANO, S. y AYROLO, V. (2001) Ob. cit.

⁶¹ ROMANO, S. (2010) Ob. cit., p. 24. Por una parte, “los graduados universitarios, licenciados y doctores en teología, derecho canónico y derecho civil... integraron la legislatura desde su creación, el poder judicial, el claustro de la Universidad y del colegio Monserrat, desempeñando además diversas funciones jerárquicas en el gobierno provincial”. Por otra, entre los miembros del Congreso Provincial, es corriente encontrar también “presbíteros y religiosos cuyo origen social era el núcleo de las familias tradicionales cordobesas (...) muchos de estos hombres estaban vinculados al sector de los comerciantes por lazos de parentesco”. Una lista no exhaustiva de los principales protagonistas incluye a los religiosos Miguel Calixto del Corro, Benito Lascano, José Saturnino Allende, José María Bedoya, Estanislao Learte y José Gregorio Baigorri, cfr. ROMANO, S. y AYROLO, V. (2001) Ob. cit. Finalmente, varios individuos vinculados al comercio formaron parte de las esferas más importantes del poder político local. Si se tienen en cuenta a los “principales comerciantes... todos ellos cumplieron funciones en la Legislatura y en otros espacios institucionales... en gobiernos de distinta orientación política. No obstante ellos, es posible reconocer dos grupos principales (...) Por un lado, el encabezado por Félix de la Peña... por otro, el representado por Manuel de la Lastra”, ROMANO, S. (2002) Ob. cit., pp. 283-284.

El catálogo de representantes que integraron el Congreso Provincial puede reconstruirse a partir del análisis de los diarios de sesiones de la Legislatura disponibles en el ARCHIVO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (1912-1925) Tomos I-VII, La Minerva, Córdoba. Por su parte, ROMANO ha confeccionado un útil cuadro con la nómina de representantes a la Legislatura de Córdoba entre los años 1828 y 1855, en ROMANO, S. (2002) Ob. cit., Apéndice, Cuadro Nro. 20, pp. 361-367.

A diferencia del período colonial, después de 1820 el espacio político de la campaña también debía participar en el proceso de selección de los integrantes del cuerpo representativo. Durante varios días, en presencia del Juez de campaña, el Cura y tres vecinos de probidad –autoridades designadas por el texto constitucional–, los habitantes de la campaña que hubieran sido habilitados para formar parte del padrón –condición verificada por dos vecinos honrados, padres de familia y propietarios– emitían su voto en favor de un sujeto que los representaría en la Asamblea electoral⁶². Esta estructura de autoridades para los comicios locales contribuyó a consolidar exclusiones y jerarquías tradicionales⁶³. Pese a la incorporación de los diferentes distritos de la Provincia al proceso electoral, el verdadero poder político continuó en manos de los notables de la ciudad. Una práctica de lo más usual caracterizó el fenómeno de la representación política de la campaña y aseguró el predominio de la elite urbana: la delegación del poder que realizaban los electores designados en aquel territorio a favor de otros sujetos que residían en la ciudad para que integraran por ellos –en calidad de sustitutos– la Asamblea electoral⁶⁴.

El tamaño del cuerpo colegiado encargado de seleccionar a los representantes que integrarían durante el mandato establecido por la Constitución el Congreso Provincial estaba condicionado por el crecimiento demográfico de la Provincia⁶⁵. Sin embargo, y más allá del incremento poblacional registrado en los censos de los años 1840 y 1852, “en el transcurso del período se mantuvo constante la cantidad de electores por departamento

⁶² *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECCIÓN CUARTA, CAPS. VIII y IX.

⁶³ “De acuerdo con los estudios que hemos realizado, quienes se desempeñaron como jueces de campaña durante la primera mitad del siglo XIX eran miembros de las elites lugareñas, vecinos que en su mayoría integraban la franja de medianos propietarios rurales y eran miembros de antiguas familias del lugar, por lo que su autoridad devenía naturalmente de esa posición. Mantenían además vínculos de diversa índole con los notables de ciudad, principalmente con comerciantes mayoristas, ‘doctores’ y miembros del clero”, ROMANO, S. y AYROLO, V. (2001) Ob. cit.

⁶⁴ Para el caso cordobés, ROMANO ha realizado un detallado análisis de las elecciones celebradas en la Provincia de Córdoba entre 1827 y 1855, según su investigación “los datos cuantitativos indican que en los 25 comicios relevados el total de electores sustitutos fue de 378 para la campaña y ocho para la ciudad. Es decir que el 65, 5 % de los electores titulares de la campaña delegó su mandato, y en varios casos la delegación se produjo de unos electores sustitutos a otros”, ROMANO, S. (2010) Ob. cit., pp 27. Tiempo atrás, realizando una valoración cualitativa del fenómeno, había postulado que “por lo general, los electores de la campaña fueron los principales propietarios y/o funcionarios civiles, militares o eclesiásticos de cada departamento, quienes a su vez delegaron la función electoral en los ‘notables’ de la ciudad (catedráticos y/o clérigos y comerciantes). Este mecanismo aseguró también que los grupos de la elite pudiesen elegir como legisladores a sus parientes o allegados”, ROMANO, S. y AYROLO, V. (2001) Ob. cit. Una visión global del fenómeno y los desafíos que debieron enfrentarse se recoge en la obra de ANNINO, A. (1995a) *Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX: de la formación del espacio nacional*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. Su impronta tradicional hispánica queda revelada en el trabajo de LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) *El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico (1808-1826)*, Colección Bicentenario de las Cortes de Cádiz, Congreso de los Diputados, Madrid, p. 289 y ss.

⁶⁵ “Art.3º. En cada sección darán su voto los sufragantes por tanto número de Electores, cuantos correspondan al total de la población, de suerte que resulte un Elector por cada cuatro mil almas; pero si las Villas no sufrieren las cuatro Secciones, se hará la votación en un solo lugar.

Art.4º. En la campaña guardará la misma proporción cada Elección; pero el método de las Secciones será diferente”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. CUARTA, CAP. IX.

totalizando 25 entre ciudad y campaña, es decir cuatro y 21 respectivamente”⁶⁶. Con todo, los vaivenes de la política interna –cambios violentos del partido al frente del gobierno– no impidieron el desarrollo progresivo de una práctica que aportaba su cuota de estabilidad en el marco de una incipiente estructura institucional. Así fue que “la sustanciación de elecciones periódicas se consolidó a lo largo del período como el único medio válido (en el sentido de legal) para sustentar la legitimidad del poder político provincial, al menos entre las elites dirigentes” fueran unitarias o federales⁶⁷.

Uno de los problemas más recurrentes a los que debió enfrentarse la Sala de Representantes fue la imposibilidad de reunir periódicamente el número de integrantes necesarios para poder sesionar. La ausencia de legisladores en cada sesión trajo aparejados serios incidentes relacionados con la determinación del quórum y el cómputo de mayorías –simples o calificadas– necesarias en cada votación, cuestiones claves para el normal funcionamiento de un cuerpo de naturaleza colegiada. La Constitución nada decía respecto a la cantidad de representantes que debían estar presentes en la Sala para que el Congreso sesionara regularmente, es decir, la definición del quórum era una cuestión que permanecía dentro de la órbita de facultades de la propia Legislatura cuyas reglas debían establecerse en un Reglamento Interno de Debates. Tampoco había cláusulas constitucionales sobre el modo de proceder ante la renuncia al cargo que pudieran presentar los representantes. En consecuencia, y ante la ausencia de formulaciones precisas en la norma fundamental, la Sala debió ir resolviendo casuísticamente sobre la marcha cada uno de los asuntos relacionados con estos temas, tanto en la instancia de Asamblea Electoral como en la reunión del propio Congreso Provincial.

En primer lugar, hubo ocasiones en las que fue preciso conminar a los diferentes Curatos de la Provincia para que, reuniendo sus juntas de compromisarios, nombraran a los sujetos indicados para llenar sus respectivas representaciones⁶⁸. Y es que muchas veces, en línea con lo que se ha dicho respecto de la representación política en la campaña, los sujetos en quienes delegaban sus poderes los electores que residían fuera de la ciudad ya habían aceptado una delegación previa por parte de otro distrito, comportamiento que apoya la idea de que esa práctica electoral aseguró el control de un reducido grupo de notables pertenecientes a la elite urbana⁶⁹. En segundo lugar, fueron sumamente corrientes a lo largo de todo el período las inasistencias de los representantes

⁶⁶ ROMANO, S. (2010) Ob. cit., pp. 23-24. Este número y proporciones de electores se establecieron formalmente en relación al censo provincial del año 1822

⁶⁷ ROMANO, S. (2010) Ob. cit., p. 16.

⁶⁸ Vg. Pese a las gestiones del Poder Ejecutivo, al regreso del primer receso de la Sala de Representantes hubo Curatos que no enviaron sus diputados como fue el caso de Calamuchita y Santa Rosa. La Sala ordenó al Ejecutivo que volviera a convocar a las juntas de compromisarios en tales distritos a fin de que sus respectivos representantes se presentaran en la ciudad el día 1º de abril del año 1821, Cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 13 de marzo de 1821*, p. 118.

⁶⁹ Lorenzo Villegas, hizo dimisión de los poderes que tenía otorgados por el Curato de Tulumba en virtud de haber sido nombrado para representar al Curato de Pocho, de modo que la Asamblea tuvo que oficiar al Ejecutivo para que éste convocara a la junta compromisaria de Tulumba para que designara a otro sujeto en lugar de Villegas, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 4 de abril de 1821*, pp. 120-121.

titulares a las sesiones de la Legislatura, fenómeno que ya se había producido mientras estuvo reunida la Soberana Asamblea de 1820⁷⁰. Si bien se alegaban las más diversas razones, era muy frecuente que la ausencia se fundara en la necesidad de atender los negocios familiares, lo cual implicaba retirarse a las afueras de la ciudad para dirigirse al territorio de la campaña donde se ubicaban sus haciendas⁷¹. Finalmente, muchos de los ciudadanos nombrados para integrar el Congreso Provincial acababan presentando ante la Sala su renuncia al cargo; aunque resistidas en principio, las dimisiones acababan aceptándose con la aclaración de que “*no se abriese puerta con este ejemplo*” para evitar en el futuro los males que a la gestión de los asuntos provinciales provocaban la desidia de muchos representantes⁷². Tal como sucedía con las antiguas cargas concejiles, la naturaleza del encargo que hacía la Asamblea electoral era un auténtico deber para con el cuerpo social que demandaba esfuerzo sin una recíproca contraprestación y muchas veces quienes resultaban nombrados ni siquiera habían sido consultados previamente para conocerse su voluntad⁷³.

Para dar con una solución a este asiduo problema de representantes ausentes y esquivos, además de las medidas para procurar su asistencia compulsiva cuando no hubiere justos motivos que los excusase, se echó mano a un mecanismo previsto en el texto constitucional que, interpretación extensiva mediante, habilitó la posibilidad de reemplazar a los diputados titulares que anticipaban su ausencia o directamente

⁷⁰ Las inasistencias de los representantes a las sesiones de la Soberana Asamblea Electoral que había luego sancionaría el Reglamento Provisorio obligó a revisar el número previsto para formar quórum en la Sala a fin de que los asuntos provinciales pudieran ser atendidos y a imponer sanciones pecuniarias a los vocales que dejaran de asistir a las reuniones del cuerpo sin justificar el hallarse legítimamente impedidos, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 31 de octubre de 1820*, pp. 49-50.

⁷¹ En 1821 el diputado José Norberto de Allende, uno de los cinco primeros integrantes del Congreso Provincial, se excusa una y otra vez ante sus pares llegando a incorporarse efectivamente al cuerpo representativo varios meses después de su integración, Cfr. AHCDC, Tomo I, *Actas de las sesiones del año 1821*. A tal punto eran corrientes estas situaciones que la Sala llegó a otorgar licencias a los representantes para que se ocupen de sus haciendas, es lo que ocurrió, por ejemplo, en 1824 con Julián Martínez, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 31 de agosto de 1824*, p. 240.

⁷² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 13 de agosto de 1821*, pp. 157-158. La desidia en algunos casos llegaba a tornar imposible el desempeño de la Legislatura, por ejemplo, muerto el representante Don Marcelino Tissera, el Congreso designó al Dr. José Roque Savid para que ocupara su lugar, sin embargo, Savid se excusó dando un cúmulo de razones –su cátedra de Teología en la Universidad, su empleo de Regidor defensor de pobres, asuntos particulares– para sostener su reticencia. La Sala acabó aceptando la postura de Savid y nombró en su lugar a Don José Vélez solicitando al presidente del Congreso que a este último no se le admitiese excusación alguna, Cfr. Ídem.

⁷³ En relación con las dietas de los señores representantes, el Reglamento Provisorio atribuía al propio Congreso la facultad de determinar “*el compensativo que deben disfrutar por sus servicios sobre las rentas del Estado*” (Cap. XI, Art. 4º), y así se hizo en octubre de 1821. Sin embargo, luego de la reinstalación del Congreso Provincial en agosto del año 1824, los representantes votaron la reforma de la Constitución declarando gratuito el cargo de diputado por ser “*la mejor recompensa de los Representantes... el honor y satisfacción de servir al público*”, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de agosto de 1824*, p. 221. Lo mismo ocurría con las cargas concejiles durante el período colonial, lo cual demuestra otro indicio más de proyección de la vieja cultura jurídica por debajo del texto constitucional. Para ver cómo era el desarrollo institucional en aquel período, véase AGÜERO, A. (2013c) “Ciudad y poder político en el antiguo régimen. La tradición castellana”, en, TAU ANZOÁTEGUI, V. y AGÜERO, A. (coords.) *El derecho local en la periferia de la Monarquía Hispánica. Río de la Plata, Tucumán y Cuyo, siglos XVI-XVIII*, INHIDE, Buenos Aires, pp. 121-184.

renunciaban a su cargo⁷⁴. Según el Reglamento Provisorio, la misma Asamblea electoral que designaba a los miembros titulares del Congreso Provincial, luego de dicha elección, debía nombrar “cinco suplentes por mismo método y forma” para que asumieran “en caso de muerte o imposibilidad de alguno de los representantes”⁷⁵. El texto reservaba para la Sala la facultad para seleccionar, entre los integrantes de esa lista, al sujeto que debía incorporarse como suplente en lugar del representante titular que hubiera sufrido una imposibilidad sobrevenida⁷⁶.

Si bien los casos que se fueron presentando en la Legislatura no encuadraban exactamente en los supuestos de la norma, la práctica de nombrar suplentes para sustituir en las sesiones a los titulares se fue consolidando en los primeros años aunque de manera poco uniforme⁷⁷. Precisamente por eso, en octubre de 1824 uno de los señores representantes solicitó al cuerpo la explicación de la ley sobre la incorporación de los suplentes, indagando sobre la estabilidad del suplente ya nombrado y los casos en los que, fuera de los supuestos establecidos en la Constitución, era conveniente nombrar a alguien en carácter provisorio⁷⁸. Días más tarde se resolvió que, por una parte, “1º. El Suplente nombrado una vez, queda incorporado en la Sala para todos los casos en que deba echarse mano de los Suplentes”, y por otra, “2º. No deberá nombrarse Suplente por una ausencia ó imposibilidad temporal de alguno de los representantes propietarios”⁷⁹. Ejerciendo su condición de intérprete auténtico de las cláusulas constitucionales, la decisión del Congreso zanjó la cuestión definitivamente para el resto del período, salvo un breve lapso en el que perdió su vigencia⁸⁰.

⁷⁴ Sobre la necesidad de tomar medidas más estrictas en contra de los representantes que no asistían a las sesiones, con la consecuente dificultad para funcionar del cuerpo colegiado, se discutió largamente a mediados de 1825, cfr. AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 10 de junio de 1825*, pp. 360-361.

⁷⁵ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. CUARTA, CAP. X, ARTS. 6º Y 7º.

⁷⁶ “Art. 7º. En caso de muerte o imposibilidad de alguno de los representantes, el Congreso nombrará de los suplentes el que ha de llenar la falta en cualquier tiempo que uno u otro accidente se verifique después de la elección”, ídem.

⁷⁷ Ningún plan previo determinaba el procedimiento de selección de los suplentes y cómo y en qué situaciones procedía el nombramiento. Quizás por eso, la asidua utilización de este recurso obligó al Congreso Provincial a oficiar al Poder Ejecutivo para que convocara a la Provincia a elecciones a fin de recomponer la lista de suplentes, Cfr. AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 11 de marzo de 1822*, p. 212.

⁷⁸ La moción es del representante Juan Antonio Saráchaga, AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 9 de octubre de 1824*, p. 212.

⁷⁹ AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de octubre de 1824*, p. 271.

⁸⁰ El día 16 de agosto de 1833 se resolvió ampliar el número de suplentes que la Asamblea Electoral debía nombrar luego de designar a los representantes. En consecuencia, se reformó el Reglamento Provisorio en los siguientes términos: “Después de la elección de Representantes, procederá la Junta Electoral a la de 15 Suplentes, por el mismo método y forma. El tiempo de su servicio, y el modo de terminarlo, será el mismo de los propietarios”, AHDCD, Tomo V, *Acta de la sesión del 16 de agosto de 1833*, pp. 33-34. Sin embargo, considerando la situación fáctica de escasez de recursos humanos que volvía a condicionar las decisiones políticas, en 1836 se resolvió derogar la reforma volviéndose al número original de cinco suplentes, AHDCD, Tomo V, *Acta de la sesión del 30 de marzo de 1836*, p. 240.

II. 1. 1. Incompatibilidades e inmunidades parlamentarias

Otros aspectos interesantes para incorporar al análisis del cuerpo representativo a efectos de perfilar su naturaleza y relevancia política son, por un lado, las restricciones al acceso a la banca de diputado por ser incompatible el cargo con otros empleos u oficios públicos y, por otro, la inviolabilidad de la persona de los representantes durante su mandato asociada a la facultad del Congreso para juzgar sobre sus actos. A pesar de la escasez de sujetos calificados para ocupar los espacios creados para erigir la nueva estructura político-institucional de la Provincia, los constituyentes cordobeses decidieron que la única manera de servir bien a la república implicaba estar abocado a la tarea de representante sin permanecer simultáneamente en otros nichos de poder formal. Sea para garantizar la independencia, sea para asegurar la dedicación plena a los asuntos que se discutían en el Congreso Provincial, la Constitución era terminante al respecto: “*Ningún Representante admitirá cargo, empleo o comisión durante el ejercicio de su representación. Si lo admitiese, perderá ésta...*”, aunque a renglón seguido se admitía una manera de salvar la cuestión, “*... a menos que sea reelegido para ella; en cuyo caso servirá el empleo por sustituto*”⁸¹. Tal radicalidad en la enunciación de la incompatibilidad parecía no dejar lugar a dudas; la teoría de la separación de poderes que –al menos retóricamente– habrían pretendido adoptar las primeras constituciones hispanoamericanas, era coherente con una solución de este tipo⁸². Sin embargo, ante la ocurrencia de los primeros casos de sujetos que eran designados para desempeñar algún empleo luego de ser electos representantes fue preciso desentrañar el verdadero alcance de la cláusula constitucional, ¿de qué tipo de cargo, empleo o comisión hablaba la norma?

El recorrido por las actas de las sesiones del cuerpo legislativo demuestra la existencia de una constante circulación de los mismos personajes por diferentes cargos y empleos públicos, consecuente con la escasez de capital humano capacitado y con el mantenimiento de unas pocas familias en los espacios de poder. El primer caso de exclusión por incompatibilidad registrado fue el del representante Lorenzo Villegas que debió abandonar su banca por haber aceptado el cargo de Diputado ante el Soberano Congreso Nacional en representación de la Provincia de Tucumán⁸³. A partir de entonces, en cada ocasión en la que se planteó la cuestión de incompatibilidad hubo debate y reflexión al respecto. En noviembre de 1821 el Ejecutivo elevó una solicitud al Congreso para aclarar si el nombramiento de uno de los representantes como elector de la Asamblea Capitular –órgano encargado de designar a los integrantes del Cabildo– era contrario o no a la letra del Reglamento Provisorio. Más allá de la especificidad del caso concreto, dada por la naturaleza breve del simple encargo en cuestión, se determinó que “*el espíritu del*

⁸¹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. QUINTA, CAP. XI, ART. 6°.

⁸² De acuerdo a la tesis sostenida por AGUILAR RIVERA, las primeras Constituciones hispanoamericanas tuvieron una idea tajante de separación de poderes, en esta línea de sentido, impedir que un sujeto miembro del Legislativo recibiera comisión del ejecutivo respondería a esa misma lógica, cfr. AGUILAR RIVERA, J. (2000) Ob. cit., pp. 95 y ss.

⁸³ AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 16 de junio de 1821*, pp. 147-148.

*código supone una incompatibilidad en el desempeño de los empleos y cargos de los que habla, con los de representante”, extremo no acreditado en esa oportunidad*⁸⁴.

Sin embargo, poca luz se echaba sobre el asunto dejándose abierta la puerta para que entraran por allí nuevas consultas indagando sobre la incompatibilidad o no de tal o cual empleo; el casuismo de aquella cultura jurídica continuaba resistiendo las soluciones sistemáticas⁸⁵. La determinación de la incompatibilidad no fue siempre sencilla y libre de pujas de intereses. En algunos casos los mismos representantes que eran designados en otro cargo presentaban ante la Sala su renuncia fundada en las circunstancias sobrevenidas, pero en otros, la oposición a la norma constitucional era denunciada por alguien más, dándose inicio a verdaderos procesos judiciales dentro de la propia Legislatura en los que se oía a los involucrados, se reunían pruebas y resolvía por medio de una votación en la que participaban los demás integrantes del cuerpo⁸⁶.

Un lustro después de la entrada en vigencia de la Constitución, en medio de una ola de revisión de las opciones adoptadas por los primeros constituyentes, el artículo que disponía el cese de la representación de un sujeto electo que admitía otro cargo fue objeto de reforma en los términos siguientes: “*Ningún Representante admitirá cargo, empleo o comisión del Ejecutivo, durante el ejercicio de representación, si la admitiere perderá ésta*”⁸⁷. Lejos de atemperarse la rigurosidad de la medida la solución se radicalizó aún más, eliminando la parte final de la norma que establecía a la reelección como único modo de evitar la exclusión de la Sala. Sin embargo, la adición de una sola palabra en la formulación –*Ejecutivo*– restringía la extensión de la norma. Quizás por eso no deba llamar la atención que meses más tarde un integrante del Congreso Provincial adujera como razón suficiente para evitar ser parte de una de las tantas comisiones que había en la Sala el hecho de que estaba “*sumamente recargado con el despacho del Juzgado 2º*”⁸⁸, o que el Doctor Santiago Derqui en 1832 ocupara una banca en la Legislatura al tiempo que

⁸⁴ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 20 de noviembre de 1821*, p. 187.

⁸⁵ Sobre la tensión histórica entre unas normas que proveen soluciones generales y otras que sólo responden a situaciones concretas véase TAU ANZOÁTEGUI, V. (1992a) *Casuismo y Sistema*, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires.

⁸⁶ A lo largo de casi seis meses –en el año 1825– uno de los integrantes del Congreso Provincial, el Sr. Learte, denunció que existían en la Sala dos vocales que no podían ser representantes, con lo cual, “*todas las deliberaciones serían viciadas por su intervención, así como lo serían si en ellas se mezclase algún otro individuo que no perteneciese a la corporación*”. El primero era Ortiz, que había admitido la Cátedra de Jurisprudencia ofrecida por el Ejecutivo, el segundo era Vélez, deudor ejecutado de la Hacienda del Estado, cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de junio de 1825*, pp. 370-371. Para tomar una decisión fundada, el Congreso acordó solicitar al Ejecutivo informes en relación con lo obrado para la provisión de la Cátedra de Jurisprudencia al señor Ortiz y noticia instruida de la deuda al Estado y ejecución del señor Vélez, cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 6 de julio de 1825*, pp. 374-375. Meses más tarde, una vez recibidos los informes enviados por parte del Ejecutivo y luego de reñidas votaciones, fueron separados ambos representantes de su cargo por los motivos denunciados, cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de las sesiones del 18 y 20 de diciembre de 1825*, pp. 407-411.

⁸⁷ En las reformas presentadas por Bulnes el 9 de abril de 1826 y aprobadas por la Sala el 12 de agosto de ese año, se modificó el artículo 6º del Capítulo XI del Reglamento Provisorio quedando redactado del modo que ha sido transcrito, AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 12 de agosto de 1826*, pp. 149-151.

⁸⁸ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 26 de noviembre de 1827*, p. 463.

se desempeñaba como Alcalde Primero en la ciudad⁸⁹. En definitiva, la incompatibilidad del cargo de representante con otros empleos o cargos públicos, pese a la claridad del Reglamento, terminó siendo un asunto sujeto a la libre interpretación de los propios representantes cuya resolución estaba condicionada por los factores de la política local⁹⁰.

En relación con el segundo de los aspectos antes mencionados, las inmunidades parlamentarias, estaba extendida la idea de que la única manera en la que un cuerpo colegiado podía deliberar libre e intensamente las distintas aristas que conformaban los asuntos sometidos a su parecer, era garantizando el desempeño sin condicionamientos de su cargo a los miembros con voz y voto dentro de ese órgano. Aceptada esta línea de razonamiento, los constituyentes incorporaron una norma que, si bien se apartaba de sus fuentes más cercanas, restringiendo el abanico de privilegios de que debían gozar los representantes, recogía la inmunidad de opinión de los integrantes del Congreso Provincial: *“Los representantes por sus opiniones, discursos o debates no podrán ser molestados en manera alguna...”* reservándose exclusivamente la Sala la facultad de *“castigar a sus miembros por desorden de conducta y con la concurrencia de dos terceras partes, expeler a cualquiera de su seno”*⁹¹. La prerrogativa de la palabra sin censura no fue objeto de mayores consideraciones, pero aquella limitación de la inmunidad de los representantes al mero ámbito de las opiniones rápidamente se reveló insuficiente y conflictiva al punto que una de las primeras mociones presentadas en la Sala luego de la sanción del Reglamento Provisorio fue precisamente para que se determinara *“si en las causas criminales de cualquier gravedad que sean y se promuevan contra alguno de los miembros de esta Corporación, haya de conocer y actuar en ella la*

⁸⁹ Luego de protagonizar un fuerte enfrentamiento entre el Congreso y el Gobernador a finales de 1832, una nueva integración de la Sala de Representantes en las primeras semanas del año siguiente declaró que había caducado por ministerio de la ley el lugar de Derqui en el cuerpo, fundando la medida en el Art. 6º, Cap. XI, del Reglamento Provisorio, cfr. AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 7 de febrero de 1833*, pp. 296-297.

⁹⁰ Con todo, fue frecuentemente aplicado. Por ejemplo, sólo en la segunda mitad del año 1831 el representante Pedro Nolasco Rodríguez aceptó el cargo de Ministro de Hacienda Pública avisándolo en la sesión del 31 de agosto de 1831 para que se lo excluyera de la Sala, AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 31 de agosto de 1831*, p. 69; Juan Bautista Marin expuso que había concluido su representación por el ministerio de la ley en virtud de haber aceptado el empleo de Canónigo dignidad de tesorero de la Santa Iglesia Catedral y Juan Antonio Sánchez avisó haber aceptado la Canonjía de Merced de dicha iglesia, todo en la sesión del 17 de octubre de 1831 en la que la Sala tomó nota y nombró a los reemplazantes, AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 17 de octubre de 1831*, p. 74; semanas más tarde, el Dr. Hipólito Ramallo cesaba por haber sido agraciado por el P. E. con la Canonjía Magistral de la Catedral, AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 9 de diciembre de 1831*, p. 80.

⁹¹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. QUINTA, CAP. XI, ART. 5º. Como se adelantó, la solución de los constituyentes cordobeses fue más acotada que, por ejemplo, la de los constituyentes rioplatenses de 1819 que a la inmunidad de opinión sumaban en otro artículo el privilegio de la inmunidad de arresto: *“Los senadores y representantes no serán arrestados ni procesados durante su asistencia a la Legislatura y mientras van y vuelven de ella, excepto el caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamia u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Sala respectiva con la sumaria información del hecho”*, Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica de 1819, CAP. III, ART. XXVI, las disposiciones de la Constitución de 1819 pueden consultarse en SAGÜÉS, N. (2006) *Constituciones Iberoamericanas: Argentina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, CD Anexo, pp. 201-215.

misma Sala, ó si podrá el Poder Ejecutivo proceder contra los indicados miembros de la Asamblea, ú cualquier otra junta, en qué forma y hasta qué grado”⁹².

Definir el alcance de la inmunidad de los representantes era un claro acto de posicionamiento del Congreso frente al resto de autoridades políticas, fundamentalmente ante el Gobernador. Analizar algunos de los casos en los que se discutió esta cuestión revela el tenso juego de fuerzas entre unos incipientes poderes cuya realidad era más palpable en el nivel del diseño constitucional que en el de la gestión de los asuntos públicos. En mayo de 1821, el licenciado Don Benito Lascano había sido electo miembro del primer Congreso Provincial; desde el comienzo de su mandato había sostenido una posición contraria al Gobernador Bustos y a su reemplazante interino, el Coronel Francisco Bedoya⁹³. El 14 de agosto de ese mismo año, el Ejecutivo envió dos oficios a la Sala de Representantes, uno dirigido al cuerpo y otro a Lascano, “*para que a las cinco de la tarde de este día salga de esta ciudad dicho Sr. Vocal, y dentro de tres consecutivos fuera de esta provincia*”⁹⁴. Inmediatamente el Presidente del Congreso se presentó ante el Gobernador interino manifestando su preocupación por la “*gravedad de esta dura medida que había de ocasionar expectación contra un miembro inviolable del Poder Legislativo independiente*” sin que su gestión lograra revertir la decisión tomada⁹⁵. Días después la Legislatura definió su postura.

Es interesante destacar que en su argumentación, la Sala insistía en la calidad de “*inviolable*” de Benito Lascano por ser miembro del “*respetable Cuerpo Legislativo independiente*”⁹⁶. La fundamentación normativa se basaba en el ya citado Art. 5º del Cap. XI del Reglamento Provisorio a partir del cual se solicitaba al Ejecutivo que se abstuviera de continuar la causa iniciada contra el representante y dejara el asunto “*a disposición privativa de esta Sala*”⁹⁷. Como puede deducirse de la interpretación propuesta de la cláusula constitucional, se reservaba al cuerpo la jurisdicción para juzgar a sus propios integrantes. El razonamiento fue rechazado de plano por el Gobernador quien retrucó negando la extensión de la norma sobre inviolabilidad invocada por el Congreso, la cual debía entenderse circumscripita a garantizarles “*no ser molestados por sus opiniones, discursos y debates, por no trabar la libertad del ciudadano en el decir, o representar un bien público, si a la vez de ejercer (...) su cargo, empleo, oficio, no la tuviese*”⁹⁸. Además, la contestación traía una sentencia que demostraba la concepción del Gobernador en cuanto a la posición de las autoridades políticas constituidas. En una clara

⁹² Moción presentada por el Sr. Lorenzo Villegas que si bien fue apoyada por el resto de sus colegas quedó pendiente de consideración, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 4 de abril de 1821*, p. 122.

⁹³ Lascano planteó en reiteradas oportunidades denuncias por infracciones a la Constitución, insultos del Gobernador hacia el Congreso, abuso de recursos institucionales que atentaban contra los derechos de los cordobeses como la suspensión ilimitada de la seguridad individual, etc., cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de junio de 1821*, pp. 151-152.

⁹⁴ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 14 de agosto de 1821*, p. 160.

⁹⁵ Ídem.

⁹⁶ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de agosto de 1821*, p. 162.

⁹⁷ Ídem.

⁹⁸ Extracto de la nota enviada por el Ejecutivo al Congreso Provincial defendiendo su actuación en contra del representante Lascano. Puede consultarse en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 113.

defensa de su superioridad, afirmaba que “el espíritu del Reglamento, en todos sus artículos siempre dá al Ejecutivo el ejercicio de facultades especiales cuando se ve comprometida la seguridad de la Provincia, ya sea cuando se habla de arresto de personas, inviolabilidad de correspondencia o de seguridad individual”⁹⁹. El desenlace de este episodio cambiaría rápidamente de rumbo con la vuelta de Juan Bautista Bustos a su sillón y la salida de Bedoya como Gobernador Interino; aquél retiró la confinación permitiendo el regreso de Lascano a la Provincia¹⁰⁰.

Años después, a comienzos de 1832, estalló en Córdoba una breve revolución encabezada por Juan Pablo Bulnes¹⁰¹. En ese contexto de conflicto, el Ejecutivo a cargo de José Vicente Reynafé ordenó el arresto del diputado Claudio Arredondo por presunta participación en el levantamiento. Este accionar provocó la protesta formal de la Sala de Representantes solicitando –en cumplimiento de las leyes– se la instruyera de las causas que motivaron tan gravísima medida¹⁰². Ante la negativa de enviar las actuaciones al Congreso por parte de quien sustituía transitoriamente al Gobernador –que había abandonado la ciudad al frente de las tropas de la Provincia–, excusándose en la posible “frustración de las medidas tomadas para salvar la Patria del mal que la amenaza” si se revelaban los documentos en los que se había basado su decisión, se nombró una comisión para que, cerca del Gobernador propietario, negociara la situación de Arredondo¹⁰³. Luego del supuesto éxito de la misión, y en una actitud que excedía sus facultades, la Sala acordó que el Sr. Arredondo quedara “*en el goce de su libertad y derechos*”, lo que produjo la inmediata reacción del Gobernador Reynafé quien desconoció dicho acuerdo¹⁰⁴. Como consecuencia, la Legislatura reconoció su posición de menor fuerza decretando “*que la Sala no puede embarazar la operación del Ejecutivo sobre la persona del referido Representante en razón de que la Ley Reglamentaria de que se favorecía, sólo es para casos muy diversos*”¹⁰⁵. Con un criterio muy diferente al del caso anterior, lo cual se explicaría más bien a partir de los cambios de alianzas entre las facciones que en el desarrollo de nuevos argumentos normativos, “la Sala reconocía la legalidad del arresto de uno de sus miembros, esto es, que de acuerdo a las disposiciones

⁹⁹ Ídem.

¹⁰⁰ Al momento de indemnizar al representante ofendido la Legislatura volvió a declarar aquello que semanas atrás no había quedado más que en el plano discursivo y acordó “*declarar en indemnización por los conocidos ultrajes hechos á este Alto Poder en el modo y forma de conocer, infringiendo notoriamente los más claros y precisos artículos de nuestro reglamento, traspasando los límites de las atribuciones del Ejecutivo, y hollando las que forman la plenitud del Poder de esta Sala por nulas, de ningún valor y efecto, irrespetuosas y atentatorias contra este Cuerpo las providencias giradas en el particular por el expresado exgobernante Dn. Francisco Bedoya*”, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 29 de octubre de 1821*, p. 180.

¹⁰¹ Para profundizar en los avatares de esta “segunda” revolución encabezada por Juan Pablo Bulnes puede consultarse GARZÓN, I. (1901) *Crónica de Córdoba*, Tomo II, La Minerva, Córdoba, pp. 361 y ss.

¹⁰² AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 27 de enero de 1832*, pp. 99-101.

¹⁰³ Ídem.

¹⁰⁴ AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 10 de febrero de 1832*, pp. 106-108.

¹⁰⁵ Ídem, pp. 109-110.

del Reglamento Provisorio, no gozaban del privilegio de no ser arrestados durante el término de su mandato”¹⁰⁶.

Una nueva confrontación acerca de los privilegios de los representantes tuvo lugar hacia finales del mismo año. El disparador en esta ocasión fue el arresto del diputado Santiago Derqui por parte del Mayor de Plaza Don Manuel Antonio Baigorri, integrante también de la Legislatura Provincial. Una vez enterados los representantes de lo sucedido, comenzó un fluido intercambio de notas y argumentos entre el Congreso y el Gobernador interino. Según los primeros, la Sala tenía la facultad de solicitar al Ejecutivo la instrucción de las causas llevadas en contra de sus miembros, e incluso el privilegio de juzgarlos cuando se los acusara de algún delito. Citaban en su favor cláusulas contenidas en un cuerpo normativo que había tenido una efímera vigencia en la Provincia de Córdoba como la Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica del año 1819, pero cuya autoridad parece incuestionable como texto revelador de una ontología normativa situada por encima de los criterios formales de vigencia de las normas¹⁰⁷. Propusieron además una interpretación extensa del Art. 5º, Cap. XI del Reglamento Provisorio según el cual *“la Honorable Sala estaba en posesión de juzgar no sólo los delitos de los Representantes por desorden de conducta cometida en el manejo interior de la Corporación, sino otros que no tenían la menor atingencia a este respecto”*¹⁰⁸. Como no podía ser de otra manera, la decisión de la Sala fue la de separar del seno del Congreso Provincial al diputado Baigorri e inhabilitarlo perpetuamente para el ejercicio de empleos en la Provincia¹⁰⁹. Por su parte, el Ejecutivo y una pequeña minoría de representantes objetaron el procedimiento seguido por el Congreso ya que, según su interpretación de las

¹⁰⁶ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 121.

¹⁰⁷ Se hizo mención al Artículo 8º del Capítulo I sobre “Cámara de Representantes” en el que se establecía: *“Ella [La Cámara] tiene el derecho privativo de acusar de oficio, o a instancia de cualquier ciudadano, a los miembros de los tres Grandes Poderes, a los Ministros de Estado, Enviados a las Cortes extranjerías, Arzobispos y Obispos, Generales de los ejércitos, Gobernadores y jueces superiores de las provincias y demás empleados de no inferior rango de los nombrados: por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, infracción de Constitución u otros que según las leyes merezcan pena de muerte o infamia”*, en en SAGÜÉS, N. (2006) Ob. cit., pp. 201-215. En la estructura argumental de los representantes por la mayoría se demostraba el carácter judicial de la concepción acerca del poder político, *“Expuso... la prudencia con que las Leyes Civiles trataban de evitar estas competencias de jurisdicción, aún entre autoridades subalternas, diciendo: que cuando un Magistrado Civil conocía de una causa que no le pertenecía y su Juez nato quería llamarla, el primer paso que debía dar era oficiar al Juez ante quien pendía la causa, exponiendo las razones en que se fundaba para la remisión de ella. No surtiendo efecto esta primera medida, debía segundarse otra comunicación, incitando al Juez a una conferencia amistosa, en donde cada uno pudiese exponer con más libertad las razones que asistían para entender en la causa; y solo en el caso de que esta medida prudente no diese el resultado que se deseaba, se formaba la competencia; que todo esto se hacía necesariamente para evitar los males; y que si esto sucedía entre autoridades subalternas, con cuánta mayor razón no debería hacerse, a fin de estorbar lo que acarrearía la división o competencia que desgraciadamente aparecía entre las dos autoridades supremas del país”*, AHDCDC, Tomo IV, Acta de la sesión del 28 de diciembre de 1832, pp. 236-237.

¹⁰⁸ AHDCDC, Tomo IV, Acta de la sesión del 31 de diciembre de 1832, pp. 254.

¹⁰⁹ Ídem, p. 255.

leyes fundamentales, el cuerpo “no tenía derecho para ingerirse en los procesos que eran de la sola incumbencia de la Sala de Justicia”¹¹⁰.

Reintegrada la Sala a comienzos de 1833 –con diferente color político–, los nuevos representantes decidieron modificar radicalmente la decisión que el mismo cuerpo había tomado días atrás. Luego de la lectura de todos los antecedentes del caso y las normas en las que unos y otros habían fundado sus argumentos, se declaró “*insubsistente y nula la sanción hecha por la Honorable Sala... lo primero: porque el expresado pronunciamiento contra el Representante Sargento Mayor Dn. Manuel Antonio Baigorri, no había emanado del Tribunal Competente, ni menos se habían observado las fórmulas y requisitos esenciales de todo juicio, y por consiguiente se le había inferido al dicho Baigorri, un evidente despojo al destituirlo de sus empleos e inhabilitación para obtenerlos*”, se agregaba además que “*la Honorable Sala en el predicho pronunciamiento... se había separado de la esfera de sus atribuciones juzgando al dicho Sargento Mayor Baigorri, cuando por su fuero, debía ser juzgado por las leyes militares y por el poder a quien correspondía, que era el Ejecutivo*”¹¹¹. Finalmente, y en un claro mensaje condescendiente hacia el Gobernador, los Representantes declaraban que “*el juzgamiento del Sargento Mayor Baigorri [correspondía] al Supremo Poder Ejecutivo de la Provincia*”¹¹². En conclusión, este nuevo episodio es más que elocuente para ilustrar, por una parte, cómo en pleno proceso de formación institucional, las distintas autoridades políticas disputaban cara a cara el ámbito de su potestad para juzgar, auténtica expresión del poder político en aquella cultura jurídica, y por otro, cómo los conflictos “intraelite” procuraban canalizarse a través de argumentos normativos o institucionales.

II. 2. El funcionamiento de la Sala de Representantes

Por su estructura institucional y tradición jurídico-política, no había habido en la historia de Córdoba lo que podría calificarse aquí como “cultura parlamentaria”. Los cabildos americanos –como el que funcionó en la ciudad cordobesa desde su fundación en 1573 hasta 1824¹¹³– distaban mucho de las prácticas parlamentarias inauguradas por el pensamiento constitucional¹¹⁴. Por ello, quizás, los primeros Congresos Provinciales,

¹¹⁰ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 125. En el seno de la Sala, los señores representantes Flores y Espinoza se opusieron a la opinión de la mayoría diciendo que “*debía ser juzgado el Mayor de Plaza, bajo la órbita del poder a quien correspondía su crimen, pues cada poder tenía demarcadas sus atribuciones*”, AHCDC, Tomo IV, Acta de la sesión del 30 de diciembre de 1832, pp. 249.

¹¹¹ AHCDC, Tomo IV, Acta de la sesión del 5 de febrero de 1833, pp. 288-289.

¹¹² AHCDC, Tomo IV, Acta de la sesión del 7 de febrero de 1833, p. 296.

¹¹³ El momento de la extinción de los Cabildos en Córdoba y sus consecuencias para el orden jurídico-político en la Provincia ha sido abordado desde un enfoque crítico por AGÜERO, A. (2012) Ob. cit.; más tradicional en su análisis, pero no por ello menos útil, es el trabajo de LUQUE COLOMBRES, C. (1984) “En torno a la extinción del cabildo de Córdoba” en *Revista de Historia del Derecho*, Nro. 12, Buenos Aires, pp. 217-228.

¹¹⁴ Un nuevo *corpus* doctrinal apoyaría ese desarrollo, como por ejemplo la obra de BENTHAM, J., *Tactique des assemblées législatives, suivie d'un traité des sophismes politiques* publicada por primera vez en París en el año 1816. Véase (1991) *Tácticas parlamentarias*, Servicio de Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid.

Legislaturas o Juntas de Representantes, operaron durante varios años en el marco de una concepción tradicional del poder político y del orden jurídico que acabó condicionando la práctica institucional. En esa línea de principio, el proceso de definición de las reglas que debían determinar el funcionamiento del Congreso Provincial delimitaba también, en cierta medida, la potencialidad de las atribuciones del cuerpo reconocidas por la Constitución. Siendo la actividad legislativa una de las facultades más importantes de la Sala de Representantes, la no irrupción en el constitucionalismo hispano de principios del XIX de una noción de ley como producto de la voluntad general, propició la continuidad de ciertos procedimientos tradicionales para la definición del derecho a partir de una inmensa masa normativa que según la opción del Reglamento Provisorio continuaban vigentes¹¹⁵. Su desarrollo durante gran parte de la primera mitad del XIX evidencia, por ejemplo, una imagen aún particularista del orden jurídico y una matriz fuertemente corporativa de la sociedad¹¹⁶.

Por una parte, es más que elocuente que un órgano como la Legislatura de Córdoba desarrollara mucha de su actividad política reactivamente, es decir, respondiendo a las más diversas peticiones de carácter individual ingresadas a la Sala por parte de otras autoridades, empleados, y ciudadanos en general. Desde el pedido de aumento de sueldo de un empleado de la Provincia¹¹⁷, hasta la exención de ciertas prohibiciones como la de extraer por única vez dinero para cumplir con deudas contraídas en Buenos Aires¹¹⁸, pasando por demandas de fiel cumplimiento de contratos¹¹⁹, provisión de cargos o empleos públicos¹²⁰, el reconocimiento de beneficios económicos como el Montepío¹²¹, la revisión de impuestos gravosos¹²², y más. El hecho de que la Sala se inmiscuyera en el conocimiento de tantas cuestiones relacionadas con la gestión de diversos asuntos públicos, como el modelo de las Cortes gaditanas, es una característica distintiva de los Legislativos formados durante la primera experiencia constitucional hispana, al punto que en ciertos casos –comenzando por el gaditano– ha llegado a conceptuarse el fenómeno como un “régimen de asamblea” que, además, por

¹¹⁵ Es la cláusula ya analizada según la cual subsistía provisionalmente todo el derecho antiguo, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 3°.

¹¹⁶ AGÜERO, A. (2008a) *Castigar y perdonar cuando conviene a la República. La justicia penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII*, CEPC, Madrid.

¹¹⁷ El caso del portero de la Sala de Representantes, en AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 25 de abril de 1826*, pp. 92-94.

¹¹⁸ AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 17 de noviembre de 1826*, pp. 191-193.

¹¹⁹ El Sr. Fragueiro reclama el incumplimiento de varios de los artículos del contrato de minas celebrado con la Provincia, en AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 8 de agosto de 1826*, pp. 144-146.

¹²⁰ AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 17 de noviembre de 1826*, pp. 191-193.

¹²¹ Introducción del expediente promovido por María Ignacia de Allende, con el objeto de que se la declare con opción al Montepío del Ministerio, a virtud de la muerte de su esposo Dn. Ambrosio Funes, en AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 9 de mayo de 1827*, pp. 191-193.

¹²² El caso de la solicitud de Don José de Ocampo, comerciante, sobre lo gravoso que le era la nueva imposición de derechos al ganado vacuno que se extraía de la Provincia y volvía a introducirse en ella, en AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 18 de agosto de 1827*, pp. 360-361.

sus métodos de admitir, informar y tramitar los asuntos funcionó “jurisdiccionalmente”¹²³.

Tan abundante era la entrada de solicitudes al Congreso que los representantes debieron idear mecanismos de filtro y gestión de este tipo de asuntos particulares. En 1824 luego de recibir una petición concreta por parte del escribano del cabildo en la que solicitaba el abono del trabajo que había tenido en sus actuaciones, la Sala decidió “*que ninguna petición particular, sea de gracia ó justicia, se introduzca en la Sala y que sólo el Sr. Presidente pueda elevar las que considere útil al interés público*”¹²⁴. El señor del Corro expuso que según el artículo último del Reglamento Provisorio, debía nombrarse una comisión de tres individuos de la Sala con el objeto de velar sobre la observancia del texto constitucional, dando cuenta de las infracciones que notasen. Según su parecer, había que designar a los miembros de esa comisión y que sea facultad de la misma encargarse de las peticiones de gracia o justicia que arribaran al Congreso y así se resolvió, ampliando las facultades que la Constitución de la Provincia reservaba a dicha comisión¹²⁵. Sin embargo unos meses más tarde, la nueva Legislatura instalada después de la segunda disolución del Congreso Provincial decidió la creación de una comisión específica encargada de conocer y preparar dictámenes para evacuar todas las peticiones que ingresaran al cuerpo representativo¹²⁶.

Por otra parte, el mantenimiento de una trama eminentemente corporativa del orden social traía como consecuencia la limitación de la capacidad política autónoma de la Sala de Representantes. Tanto así que, por ejemplo, el cuerpo representativo de toda la Provincia, que un tiempo antes se había adjudicado facultades constituyentes para discutir y sancionar la primera Constitución de Córdoba, se consideró impotente para analizar la reforma del arancel eclesiástico y comunicó al Provisor General del Obispado que no le correspondía a la Asamblea –ni había sido su ánimo– “*tocar*” la jurisdicción eclesiástica¹²⁷. La construcción del nuevo orden político estaba tan condicionada desde sus cimientos por los presupuestos básicos de la cultura tradicional que ni los mismos padres de la Constitución eran capaces de asumir todas las consecuencias derivadas de sus decisiones¹²⁸. El reconocimiento de dicha jurisdicción a la Iglesia en una materia tan cara a los ciudadanos como la cuestión arancelaria, era a la vez una asunción de la

¹²³ Esta persistencia de prácticas institucionales “no sólo era “*habitus*” de una burocracia de Antiguo Régimen lo que motivaba estas maneras administrativas, sino una concepción cultural de cómo gestionar situaciones jurídicas y derechos adquiridos, que me atrevo a calificar de constitucional no sólo en el terreno de la mentalidad, sino como expresión de la estructura, aún antigua, de la sociedad política hispana”, MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2011) Ob. cit., pp. 92 y ss; GARRIGA, C. y LORENTE, M. (2007) Ob. cit.

¹²⁴ AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de agosto de 1824*, p. 230.

¹²⁵ AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de agosto de 1824*, pp. 232-233. Salvo unas pocas denuncias de incumplimiento de la Constitución en los primeros meses de su vigencia, nunca llegó a funcionar en plenitud –pese a estar correctamente integrada en las distintas Legislaturas– la comisión encargada de velar por las inobservancias del Reglamento Provisorio. La experiencia cordobesa distó en la práctica del modelo normativo adoptado, el gaditano, que ha sido acabadamente analizado por LORENTE, M. (1988) *Las infracciones a la Constitución de 1812*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

¹²⁶ AHDCD, Tomo II, *Acta de la sesión del 16 de abril de 1825*, pp. 314-316

¹²⁷ AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 7 de febrero de 1821*, pp. 98-100.

¹²⁸ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SÉPTIMA, CAP. XIX.

existencia de corporaciones cuyas facultades continuaban sosteniendo la complejidad del viejo orden jurídico¹²⁹.

En esta línea de principio, no resulta nada extraño que para la sanción de determinadas leyes que afectaban directamente los intereses de ciertos grupos se recurriera a la práctica de consultarlos, parte fundamental del procedimiento legislativo en esta cultura constitucional que “entiende que las situaciones jurídicas, que obtienen los miembros integrantes de la sociedad política hispana, forman parte de ese orden jurídico concretado en la Constitución”¹³⁰. Así, por ejemplo, para la formación de un prospecto de reforma que moderase las cuotas del arancel eclesiástico se convocó a una junta de teólogos¹³¹. Igualmente, el proyecto de reglamentación de la aduana durante el primer semestre de 1825 se desarrolló con el auxilio de los comerciantes de la ciudad¹³². De la misma manera, tanto el diseño primigenio como los posteriores intentos de reforma del *Reglamento de Administración de Justicia para la Campaña de Córdoba* no se concibieron sin la consulta previa a una “Junta de Hacendados... de los más pudientes, de notoria honradez y conocimientos, cuatro de cada partido ó Curato, á su elección” que reunidos en la ciudad darían su opinión acerca de cuáles eran los mejores medios que podían arbitrarse para satisfacer sus necesidades¹³³. El procedimiento era indispensable “para asegurar que las nuevas producciones normativas puedan alterar las situaciones jurídicas de los miembros de aquella sociedad corporativa”¹³⁴.

El déficit de cultura parlamentaria en Córdoba se puede inducir de la sostenida ausencia de un conjunto de reglas que fijaran el modo de funcionar del cuerpo ya que, como todos los textos de su tipo, el Reglamento Provisorio de 1821 nada decía –o casi nada– sobre pautas que debían ordenar el trabajo de la Legislatura¹³⁵. Si bien esta

¹²⁹ “En este sentido, cuando la comprensión del proceso de creación normativa todavía puede aparecer como un proceso de descubrimiento del Derecho (de adecuación de la nueva norma no a ruda equidad, sino a “espíritu de la constitución” y éste, a su vez, entendido en un sentido historicista), pasa a primer plano la importancia de una actividad deliberativa que no se agota en la actividad parlamentaria y por la que trata de conciliarse la nueva declaración normativa con un orden jurídico de algún modo ya pre-constituido. Es más, la deliberación debe ser congruente con la decisión alcanzada. No se entiende entonces que pueda surgir un conflicto entre la instrucción del procedimiento legislativo y la decisión final del legislador. Y también por ello termina desplazándose el protagonismo de la actividad legiferante desde el Congreso hacia otras instituciones cuya concurrencia es obligada en el proceso de producción normativa”, MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2011) Ob. cit., pp. 93-94.

¹³⁰ Ídem, p. 94.

¹³¹ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 13 de marzo de 1821*, p. 117.

¹³² La Sala aprobó el despacho de la comisión encargada de abrir dictamen sobre el proyecto de Reglamento de Aduana, según el cual, preliminarmente se debía: “Art. 1º – Oigase al comercio por vía de informe sobre los varios artículos que comprende el proyecto reglamentario de Aduana; Art. 2º – A este efecto oficiará el Ejecutivo para que inmediatamente mande al Juzgado consular reúna en junta plena al comercio de esta Capital, y oído su informe lo pase al Ejecutivo, y éste a la Sala”, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 4 de agosto de 1825*, pp. 392-393.

¹³³ Cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 29 de julio de 1825*, p. 388.

¹³⁴ MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2011) Ob. cit., p. 95.

¹³⁵ Apenas unos pocos artículos del *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba* mencionaban, por ejemplo, las mayorías necesarias para tomarse determinadas decisiones como “las dos terceras partes” exigidas para expeler a alguno de los representantes (Cap. XI, Art. 5º), o sancionar algún asunto constitucional (Cap. XII, Art. 2º); el “voto sobre la mitad” para

situación fue planteada en más de una oportunidad por los señores representantes que echaban de menos una guía para proceder, el camino hacia la sanción de un *Reglamento Interior de Debates para el Régimen y Policía de la Honorable Sala de Representantes* en el año 1827 fue largo y escarpado¹³⁶. La primera reunión de la Provincia, aquella Soberana Asamblea que declaró la independencia, eligió al Gobernador y sancionó la primera Constitución, adoptó también un pequeño conjunto de reglas preparadas por el diputado Palacios en marzo de 1820¹³⁷. Una vez instalado el Congreso Provincial se encargó a uno de sus integrantes –el representante Benito Lascano– la redacción de un proyecto de Reglamento de Debates¹³⁸, aunque siendo de gran necesidad un instrumento que “*dirija la economía de Gobierno interior de la Sala*”, se adoptó provisoriamente el que había observado el cuerpo anterior desde su reunión¹³⁹. A diferencia de lo ocurrido en la Legislatura porteña que rápidamente sancionó un proyecto preparado por el liberal Ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia, el trabajo de Lascano nunca llegó a aprobarse y la vigencia provisional declamada del Reglamento anterior acabó durando mucho más de lo esperado¹⁴⁰.

En 1824 la segunda Legislatura cordobesa, erigida después de dos años de ausencia del Congreso Provincial, volvió a plantear el asunto del orden que debían seguir las discusiones y se nombró nuevamente de su seno una comisión especial para la redacción de un proyecto de Reglamento, integrada por Estanislao Learte y José María Fragueiro¹⁴¹. La necesidad de formar un propio cuerpo de reglas se fundamentaba alegando que los anteriores reglamentos sólo habían tenido vigor en otro tiempo y que la Sala “*no debía regirse por otras leyes que las que son de costumbre en todo cuerpo colegiado y ella quisiese adoptar*”¹⁴². El texto preparado por la comisión comenzó a discutirse el 27 de agosto de 1824, llegándose a sancionar en las sesiones siguientes algunos de sus primeros artículos; sin embargo, las dificultades políticas del cuerpo

sancionarse asuntos de mucha gravedad (Cap. XII, Art. 2º), o elegir el Gobernador de la Provincia (Cap. XIV, Art. 2º); o la “*simple pluralidad*” para el resto de asuntos que no fueran ni constitucionales ni de mucha gravedad (Cap. XII, Art. 2º), entre otros.

¹³⁶ Una copia de dicho Reglamento puede ser consultada en *Compilación de leyes...* cit., pp. 43-52.

¹³⁷ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 28 de marzo de 1820*, pp. 21-23.

¹³⁸ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 14 de mayo de 1821*, p. 133.

¹³⁹ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de septiembre de 1821*, p. 174.

¹⁴⁰ En 1822 se aprobó en Buenos Aires un Reglamento interno para la sala de representantes preparado por el Rivadavia e inspirado íntegramente en la obra ya citada del filósofo inglés Jeremy BENTHAM que ha sido traducida como *Tácticas parlamentarias* en la que se exponían, entre otras, las virtudes del arte de debatir. “Dicho reglamento... estaba constituido por un conjunto de normas minuciosamente detalladas, que intentaban asegurar el desarrollo ordenado y racional de la práctica legislativa a la vez que la transparencia de los debates parlamentarios, con el objeto de evitar las asambleas tumultuosas tan temidas en aquellos años. Si bien su reglamentación buscaba delimitar un espacio privilegiado para el poder encargado de elaborar y sancionar las leyes, su discusión en el interior de la Junta de Representantes de Buenos Aires reflejó las tensiones que se venían planteando desde el año anterior entre el ejecutivo y el legislativo”, TERNAVASIO, M. (2004) “Construir poder y dividir poderes. Buenos Aires durante la “feliz experiencia” rivadaviana”, en *Boletín del Instituto de Historia Americana y Argentina “Dr. Emilio Ravignani”*, tercera serie, Nro. 26, pp. 7-45, p. 23. Disponible en <http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/boletin-del-instituto/boletin-coleccion-en-linea#26>

¹⁴¹ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 19 de agosto de 1824*, p. 223.

¹⁴² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de agosto de 1824*, pp. 227-228.

representativo truncaron el proceso iniciado y al año siguiente, el 29 de abril de 1825 se volvió a “*admitir supletoriamente el Reglamento de Debates que regía en la anterior Legislatura, para organizar los de la presente, mientras la Sala consideraba y aprobaba el propuesto*”¹⁴³.

Sería recién en 1827 el año en que se discutiría y sancionaría íntegramente el *Reglamento Interior de Debates para el Régimen y Policía de la Honorable Sala de Representantes*¹⁴⁴. El texto aprobado fue un extenso y detallado documento de 89 artículos distribuidos a lo largo de 14 títulos según la materia¹⁴⁵. De manera muy minuciosa se regulaba desde el modo en que los representantes debían dirigir sus alocuciones a la Sala (Art. 2), hasta la distancia de la ciudad a la que podían viajar sin necesidad de comunicarlo al cuerpo (Art. 4), pasando por cuestiones como el nombramiento de suplentes, los días en los que se desarrollarían las sesiones ordinarias, el modo de nombramiento y atribuciones de las autoridades de la Sala, las cinco comisiones encargadas de estudiar y preparar los asuntos para su debate y sanción (de Legislación, de Hacienda, Militar, de Negocios Constitucionales y de Peticiones) indicando cuáles eran las materias privativas de cada una de ellas, qué tipo de mociones se aceptarían, el procedimiento para la redacción y sanción de las leyes, el orden de la palabra en los debates, los métodos de votación según el tipo de asunto tratado, los distintos empleados del Congreso, sus nombramientos y funciones, el procedimiento de control de observancia del propio Reglamento, etc. La fijación de este catálogo de reglas, en un contexto cultural donde la norma escrita no era la única razón para actuar, sirvió más bien como una suerte de guía para el desempeño de las tareas de la Legislatura de Córdoba pero de ninguna manera constriñó a unos representantes que, si fácilmente encontraban argumentos para apartarse de la Constitución –*sin perjuicio de mantener su vigencia*– cuando el momento político lo requería, con mucho menos esfuerzo podrían malear las disposiciones de un Reglamento para el Gobierno Interior de la Sala.

II. 3. Tensión entre poderes e intermitencias del Congreso

En la Provincia de Buenos Aires la Sala de Representantes fue convirtiéndose progresivamente en una institución clave para la gobernabilidad, y el principal espacio

¹⁴³ AHCDC, Tomo I, *Acta del 29 de abril de 1825*, p. 324-325.

¹⁴⁴ En la sesión del día 18 de junio de 1827 comenzó a discutirse y sancionarse, artículo por artículo, el proyecto presentado por la comisión encargada de su elaboración. Posteriormente, se fue discutiendo y aprobando parcialmente durante las sucesivas sesiones de los días 19, 20, 22, 23, 25 de junio, 12, 13, 14, 27, 31 de julio, y 8, 11 y 18 de agosto, en AHCDC, Tomo II, pp. 293-363.

¹⁴⁵ Título Primero: *Composición de la Sala*; Título Segundo: *Del Presidente*; Título Tercero: *Del Secretario*; Título Cuarto: *De las Comisiones*; Título Quinto: *De la forma en que debe presentarse todo asunto*; Título Sexto: *De la redacción*; Título Séptimo: *De los trámites que deben seguir los proyectos que se presenten á la sanción de la Sala*; Título Octavo: *Del orden de la palabra*; Título Noveno: *De la discusión*; Título Décimo: *De la votación*; Título Decimoprimer: *Del orden de la sesión*; Título Decimosegundo: *De la Policía de la Sala*; Título Decimotercero: *De la asistencia de los Ministros de Gobierno y Hacienda á las sesiones*; Título Decimocuarto: *De la observancia del Reglamento*, cfr. *Compilación de leyes...* cit., pp. 45-52.

público de negociación de las decisiones políticas adoptadas por el gobierno¹⁴⁶. En cambio, el Congreso tuvo en Córdoba una presencia intermitente durante los primeros años, en función del grado de tensión entre el propio cuerpo de representantes y el Ejecutivo¹⁴⁷. Hasta aquí se han venido repasando distintas situaciones en las que autoridades políticas de diferente color y rango se disputaban porciones de poder, con la consecuente traducción institucional de dichos enfrentamientos y la definición práctica del ámbito de competencias de cada cual en la nueva estructura provincial. Sin embargo, los hechos de máxima tensión protagonizados por el Congreso durante el período fueron los dos momentos en los que el Gobernador terminó decretando la disolución lisa y llana de la Sala de Representantes en los meses de junio y enero de 1822 y 1825, respectivamente.

La primera disolución se produjo mediante decreto firmado por Juan Bautista Bustos con fecha 22 de junio de 1822¹⁴⁸. Es interesante analizar cómo el titular del Poder Ejecutivo legitimó discursivamente esta decisión –fundada en los continuos choques que tenía con la corporación– trayendo a colación la letra misma de la Constitución, cuya inobservancia denunciaba. Según el Reglamento Provisorio, el censo era la base fundamental para determinar el número de representantes que debían integrar el Congreso¹⁴⁹. La Soberana Asamblea que había designado a los cinco miembros de la primera Sala de Representantes no había tenido en cuenta ese dato esencial, circunstancia que Bustos jamás objetó mientras duró la buena relación entre él y la Legislatura al punto de que en el mes de octubre del año 1821, luego de una larga estadía en la campaña, había enviado al cuerpo representativo un oficio manifestando su “*reconocimiento de la instalación de este Alto Poder*”¹⁵⁰.

Pero una vez que comenzaron los desencuentros la opinión del Gobernador cambió, llegando a su punto más distante con motivo de la discusión en la Sala del aumento en las dietas del titular del Ejecutivo¹⁵¹. Disconforme con la decisión de un

¹⁴⁶ Una buena exposición sobre el papel protagónico de la Sala de Representantes porteña y cómo fue definiéndose su lugar en la construcción del nuevo orden político, aún sin Constitución, puede consultarse en TERNAVASIO, M. (2004) Ob. cit., p. 40.

¹⁴⁷

¹⁴⁸ En el diario de sesiones del Congreso Provincial que puede consultarse en el Archivo de la Honorable Cámara de Diputados de Córdoba, el cuaderno dedicado al año 1822 acaba abruptamente después del acta de la sesión del día 12 de abril con una nota del tenor siguiente: “*El día 27 [22] de junio de 1822 se declaró nulo y disolvió el Congreso Provincial, cuyas sesiones anteceden, por el Gobernador Juan Bautista Bustos*”, AHCDC, Tomo I, p. 216.

¹⁴⁹ “Art.10°. Como el censo ha de ser el fundamento para el número de representantes, se arreglará de modo que por cada doce mil almas se nombre uno; entre tanto no se sancionare la constitución que proveerá de un Senado, que con la Sala de representantes debe formar el Departamento de Legislación”, Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. CUARTA, CAP. X, ART. 10.

¹⁵⁰ AHCDC, Tomo I, Acta de la sesión del 27 de octubre de 1821, p. 176. CELESIA recoge el oficio de reconocimiento con fecha 13 de octubre de 1821: “*Muy Poderoso Señor: a mi vista el oficio de V. A. de 26 del vencido Setiembre, N° 44, en que se sirve instruirme de la instalación de ese alto Cuerpo a fin del reconocimiento que apetece, queda hecho por este Poder Ejecutivo, y lo aviso a V. A. en contesto a su citado oficio de la materia*”, CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 173.

¹⁵¹ En la sesión del 12 de abril, los representantes habían otorgado a Bustos el grado de Brigadier de la Provincia en reconocimiento de sus distinguidos servicios prestados y habían resuelto aumentar desde esa

cuerpo colegiado que no acataba sus órdenes, declaró sin más como nulo e ilegal al Congreso Provincial. Su estrategia argumentativa consistió en apelar a la inconstitucionalidad de la instalación de la Sala por no haberse “erigido en conformidad con la previa formación del censo, calidad esencial para el uso de las facultades constitucionales atribuidas al pleno Congreso”¹⁵². Haciendo gala de un poder político que sobrepasaba los límites constitucionales, Bustos se sentía autorizado para anular, él mismo, un acto institucional por supuesta inobservancia del Reglamento Provisorio. Ante semejante embate, los representantes agraviados no hicieron más que demostrar su impotencia y posición de inferioridad en la relación de fuerzas políticas¹⁵³. Desde la desaparición de la Sala de Representantes el Gobernador Bustos se manejó de manera totalmente autónoma, apenas consensuando algunas medidas con el Cabildo de la capital, tomando decisiones por demás trascendentes para la vida institucional de la Provincia como el dictado de un reglamento de imprenta (1823), la suspensión de la libertad de prensa por decreto (1823), y la implementación de un minucioso plan de organización de la justicia en la campaña (1823)¹⁵⁴.

Casi dos años después de su disolución, consolidada la posición del Ejecutivo como máxima autoridad política en la Provincia y estando presente en Córdoba el enviado de Buenos Aires para negociar la celebración de una Convención Constituyente rioplatense –lo cual implicaba cierta presión para adecuar institucionalmente el espacio provincial a la letra del Reglamento Provisorio de 1821–, a partir del 30 de junio del año 1824 se celebraron los comicios para el nombramiento de electores en todo el territorio cordobés. Semanas más tarde, reunido en la ciudad el Cuerpo Electoral, procedió sin demora al nombramiento de los Señores Representantes que integrarían el Congreso Provincial durante los siguientes cuatro años. Los electores tenían muy presente el antecedente negativo que había conducido a la disolución del anterior Congreso, en razón de ello, se tomó nota de los datos del último censo que se había realizado y, respetando en esta oportunidad las proporciones de ley, se nombraron siete representantes en calidad de titulares y cinco miembros suplentes que presentaron sus poderes y asumieron el cargo a partir del 17 de agosto de 1824¹⁵⁵. En el acto de asunción y juramento de los nuevos

fecha en adelante su sueldo en mil pesos, pasando de tres a cuatro mil pesos anuales, cfr. AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 12 de abril de 1822*, pp. 215-216.

¹⁵² CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 172.

¹⁵³ Como consecuencia del decreto de disolución, los representantes firmaron un oficio el 22 de junio de 1822 reconociendo su desintegración: “*Los cinco individuos que componen el Congreso Provincial y suscriben este oficio, quedan enterados de la disolución de este Cuerpo decretada por V.E. con esta fecha; y en consecuencia se entregan los libros y demás como lo ordena V.E. en su nota de igual fecha. Dios Guarde a V.E. ms. as. Córdoba y Junio 22 de 1822. – Licenciado Benito Lascano, José Vélez, Dr. José Roque Savid, Dr. José Norberto de Allende, Andrés Oliva*”, en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 174.

¹⁵⁴ Estas normas pueden consultarse en *Compilación de leyes... cit.*

¹⁵⁵ Según el censo realizado en el año 1822, la población total de la Provincia de Córdoba ascendía aproximadamente a un total de 76.200 habitantes, y de acuerdo a las proporciones establecidas en la Constitución correspondía nombrar 1 (un) representante cada doce mil almas o fracción superior a ocho mil (Cap. X, Arts. 10 y 11). Los representantes designados como titulares fueron los Señores “*Dr. Dn. José María Fragueiro [comerciante], Coronel Dn. José Julián Martínez [militar], Dr. Dn. Miguel Calixto del Corro [canónico magistral], Dr. D. Juan Antonio Saráchaga [abogado y ex rector de la Universidad], Dr.*

diputados, Bustos celebró enérgicamente que “al cabo de cuatro años se [viera] legítimamente instalado en Córdoba por la primera vez el Congreso Provincial”¹⁵⁶.

Sólo unos pocos meses duró la legitimidad del nuevo Cuerpo Representativo. Luego de un verdadero escándalo público, en ocasión de la segunda elección de Gobernador, Juan Bautista Bustos decidió que la Sala de Representantes tal como estaba integrada “no interpretaba el querer del pueblo” y, en una asonada popular sin precedentes, decretó su disolución¹⁵⁷. Los acontecimientos habían comenzado a gestarse a mediados del mes de febrero de 1825 cuando por imperio de la Constitución vigente el mandato de Bustos estaba próximo a fenecer, exactamente cuatro años después de promulgado el Reglamento Provisorio de la Provincia¹⁵⁸. Sin entrar en los detalles de este proceso electoral, que será objeto de análisis más adelante, baste decir aquí que la reñida elección entre el Gobernador saliente y el electo Julián Martínez acabó empatada y la designación debió realizarse por sorteo, lo cual provocó el rechazo de algunos Curatos que querían la continuación de Bustos –*no obedecerían a otro*– y un pequeño –aunque relevante– grupo de vecinos que se movilizó hasta la plaza solicitando la revocación del nuevo nombramiento¹⁵⁹. El día 26 de febrero, los congregados obligaron a los representantes a que se reunieran en la Sala para revisar su decisión, pero ante la inasistencia de la mayor parte de los diputados acabaron erigiéndose en Asamblea Popular y atribuyéndose facultades soberanas para “*I) Declarar disuelto el Congreso*”, y “*II) Encargar al Coronel Bustos el ejercicio de los tres altos poderes, provisoriamente, hasta la reunión de la provincia*”¹⁶⁰.

Inmediatamente se lanzó una operación política para tratar de justificar esta afrenta contra la vida institucional. Uno de los principales implicados en la revuelta, el ex Gobernador Bustos que ostentaba ya la suma del poder público, envió una circular a la campaña denunciando una supuesta confabulación entre algunos miembros de la Sala de Representantes disuelta y las autoridades porteñas leales a Rivadavia para tomar el poder

Dn. José María Bedoya [presbítero y ex rector], Rdo. Pdre. Fray Hipólito Soler y Dr. Dn. Estanislao Learte [presbítero]”, cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 17 de agosto de 1824*, pp. 219-220. Seguidamente, fueron nombrados suplentes los Señores Felipe Arias, Pedro Nolasco Ceballos, Fray Felipe Serrano, José Posidio Rojo y Francisco Delgado, cfr. CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 178.

¹⁵⁶ CELESIA recoge de “La Gaceta Mercantil” el mensaje del Gobernador a la nueva Sala de Representantes con motivo de su solemne instalación, en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 178.

¹⁵⁷ Como ya se ha visto, la noción de “pueblo” tenía sus propias limitaciones, cfr. ROSANVALLÓN, P. (2004) *El pueblo inalcanzable. Historia de la representación democrática en Francia*, Instituto Mora, México.

¹⁵⁸ Según la cláusula del Cap. XIV, Art. 7º del Reglamento Provisorio el Gobernador duraba “*en el mando por el tiempo de cuatro años contados desde su recepción*”. En su calidad de máximo intérprete de la Constitución, la comisión que relevó a la Soberana Asamblea Constituyente decidió que para el caso de Bustos, cuya elección ya estaba practicada al momento de sancionarse el texto constitucional, el plazo de cuatro años debía comenzar a contarse desde la fecha de publicación del Reglamento, esto es, desde el día 20 de febrero del año 1821, cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de febrero de 1821*, p. 110.

¹⁵⁹ Cfr. CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 186. Sobre la movilización para la expresión de descontento ante medidas tomadas por el gobierno de turno, puede consultarse la obra de HERRERO, F. (2012) *Movimientos de pueblo. La política en Buenos Aires luego de 1810*, Prohistoria, Rosario. El análisis de todo este proceso de elección del sucesor de Bustos que acaba con su reelección se desarrolla más adelante en este trabajo: “III. 1. Elección y reelección del Gobernador”.

¹⁶⁰ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 189.

de la Provincia¹⁶¹. Pero no sólo debió esgrimir razones de lo sucedido hacia el interior de las fronteras cordobesas. Por entonces se encontraba reunido en Buenos Aires el Congreso Constituyente que daría a las Provincias rioplatenses una Constitución y ante esa autoridad con vocación nacional también envió una nota relatando los hechos ocurridos en la Provincia, garantizando que el *impasse* institucional en nada obstruiría la marcha del Congreso¹⁶². Los diputados de la convención, en su mayoría unitarios y enemigos del proyecto federal impulsado por Bustos, condenaron el accionar de las autoridades provinciales y aprobaron un dictamen asumiendo autoridad para pronunciarse en el asunto. Ordenaron la rápida reunión de la representación provincial para que, con arreglo al Reglamento Provisorio, eligiera regularmente al titular del Ejecutivo¹⁶³. Si bien la discusión en el seno del Congreso se desarrolló abordando tópicos basilares como la soberanía de las provincias y el derecho de la autoridad nacional para intervenir en la vida institucional de ellas, para cuando la resolución llegó a Córdoba Bustos ya había convocado al “pueblo” que, reunido “*con plenitud de poderes*” el día 30 de marzo de 1825, lo reeligió por aclamación “*canónica*” como Gobernador de la Provincia “*dejando vigentes las leyes constitucionales de la materia en los casos que ocurran sucesivamente*”¹⁶⁴.

Esa “Asamblea Electoral” que reeligió a Bustos designó también a los representantes que formarían la nueva Legislatura provincial y sin mayores argumentos que fundaran su decisión, nombró a quince sujetos para que integraran como titulares el tercer Congreso Provincial. Además de desconocer la proporción de ley en base al censo, cuestión que años atrás había sido suficiente para disolver la Legislatura, omitió el nombramiento de la lista de cinco suplentes de entre los cuales, en caso de imposibilidad sobrevenida de algún representante, se elegía al reemplazante que ocupaba su lugar. Sin embargo, en un claro mensaje de validación *ex post*, el propio Gobernador presidió la sesión de reorganización de la Legislatura y tomó juramento a los nuevos diputados¹⁶⁵. Al

¹⁶¹ “*Hace mucho que una desvergonzada coalición ultrajando los más sagrados deberes de ciudadano había jurado en su interior hacerse de la provincia una presa (...) Mas llevado el descaro hasta el desenfreno, no ha podido el pueblo ser un frío espectador de la intriga, y juguete, y en masa, y a grandes gritos, ha derrocado y declarado nulo un Congreso que de hecho había desaparecido, porque varios de sus miembros se ocultaron, así es que un pueblo comitente y decidido declaró su voluntad (...) Arrastrado en estas circunstancias por el pueblo, y tres de los vocales del Congreso, inclusive el presidente, (y, en consecuencia, a los diversos reclamos de la campaña), me han hecho, bien a mi pesar, recibirme del mando de la provincia interinamente hasta que consultada toda la provincia en la comprensión de su territorio, forme una junta legislativa que desempeñe todos los deberes de la que ha caducado*”, extracto de la circular enviada por Bustos a la campaña cordobesa firmada el 27 de febrero del año 1825, disponible en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, pp. 191-192.

¹⁶² La nota enviada por Bustos al Congreso puede ser hallada en RAVIGNANI, E. (1939) *Asambleas Constituyentes Argentinas...* cit., Tomo I pp. 1215 y ss.

¹⁶³ La resolución del Congreso, luego de varios días de discusión de los tres despachos presentados sobre el asunto, fue votada el día 24 de marzo de 1825, cfr. Ídem.

¹⁶⁴ El acta de la asamblea popular que reelige a Bustos no forma parte del diario de sesiones de la Sala de Representantes de la Provincia de Córdoba, sin embargo, CELESIA la recoge del Archivo de Gobierno de la Provincia de Córdoba y transcribe un fragmento en CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, pp. 204-205.

¹⁶⁵ A los pocos días de electos, el 4 de abril, juraron como representantes los Señores José María Fraguero, Francisco Ignacio Bustos, Calixto Miguel del Corro, Juan Pablo Bulnes, José Antonio Ortiz del Valle, José Vélez, Pedro Ignacio Castro Barros, Joaquín de Urtubey, José Roque Funes, José Roque Savid, Carlos del

día siguiente de la instalación de la Sala, Bustos comunicó sin pruritos el acontecimiento al Congreso Nacional que se limitó a reconocer su impotencia fáctica para ordenar a las Provincias, por mucho que en el plano discursivo durante los debates internos se hubiera alegado su superioridad, decidiendo contestar que “*se ha recibido, considerado y mandado a archivar la nota del señor General Bustos*”¹⁶⁶.

La tercer Legislatura cordobesa, instalada el día 4 de abril de 1825, luego de todos los vaivenes hasta aquí narrados, tampoco alcanzó a cubrir el período para el cual había sido nombrada. Como se ha visto, la Asamblea Electoral no había nombrado representantes suplentes y ante la renuncia del primero de los titulares –la del Sr. Don Carlos del Signo producida el día 22 de abril– la misma Sala decidió autointegrarse –no sin fuertes discusiones en su seno– para no quedar compuesta con un número de integrantes menor a quince¹⁶⁷. Pese a esa objetada elección –Bustos impugnó su fundamento legal–, hacia el mes de julio cada vez menos representantes asistían a las sesiones –sea por renunciaciones o simples ausencias–, llegando a plantearse la necesidad de tratar urgentemente “*sobre la conservación de la Sala, hallándose ésta en circunstancias de disolverse por la deficiencia de Vocales*”¹⁶⁸. Como solía ocurrir en estos casos, se ofició al Ejecutivo para que sin pérdida de tiempo convocara a la Provincia a elecciones para llenar la Representación. Mientras el proceso se completara, la Legislatura sesionaría válidamente con la asistencia de las dos terceras partes de sus miembros que estuvieran presentes en la ciudad¹⁶⁹. Pese a todo, la medida no pudo frenar la situación de inestabilidad de la Sala y Bustos acabó decidiendo “*la suspensión de las funciones de la H. Sala, á mérito de las divisiones en que estaban sus miembros; efímera existencia de ella, ilegal representación por la reducción de sus miembros; y en custodia de las leyes votar por la misma Sala, declarándose existente*”¹⁷⁰.

Signo, José Vicente Agüero, Estanislao Learte, Juan Prudencio Palacios y Andrés Avelino de Aramburú, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 4 de abril de 1825* [con la leyenda REORGANIZACIÓN DEL CUERPO REPRESENTATIVO DE LA PROVINCIA, DESPUÉS DE LAS JORNADAS DEL 25 Y 26 DE MARZO DEL AÑO 1825], pp. 305-307.

¹⁶⁶ RAVIGNANI, E. (1939) *Asambleas Constituyentes Argentinas...* cit., Tomo I, p. 1267.

¹⁶⁷ Luego de postergar el asunto durante varias sesiones, en la del día 31 de mayo de 1825 se acordó “*que la Honorable Sala debía pronunciarse en la elección del expresado Representante, á virtud de la ley dada en el particular por la Provincia de Córdoba, reunida con plenitud de poderes, en sesión de 2 de Abril del año corriente*”, AHCDC, Tomo I, *Acta del 31 de mayo de 1825*, p. 351. En la sesión siguiente, antes de entrar a votar, los representantes Bulnes, Bustos y Palacios “*expusieron que al verificarse el nombramiento, protestaban la nulidad del acto y de cuanto en lo sucesivo hubiera de tener la Sala, interviniendo la concurrencia del que se nombrase*”, finalmente se vota y se nombra como representante al Sr. “*Dn. Capistrano de la Torre*”, AHCDC, Tomo I, *Acta del 3 de junio de 1825*, p. 354.

¹⁶⁸ AHCDC, Tomo I, *Acta del 11 de julio de 1825*, p. 380. De los quince miembros que habían sido electos a principios de abril, luego de la aceptación de varias renunciaciones, la denuncia a dos de los miembros por estar incapacitados y la salida de otro por haber sido designado para otro cargo, hacia el mes de agosto quedaban en funciones apenas ocho, número muy por debajo de los dos tercios de la Sala (fijado en un principio en diez diputados).

¹⁶⁹ La discusión giró en torno a si existía o no una ley que determinara si las dos terceras partes que se exigían para dar quórum era una proporción del total de miembros de la Sala según la cláusula de su creación o no, y se decidió que no en el sentido arriba mencionado, cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta del 16 de julio de 1825*, pp. 385-386.

¹⁷⁰ AHCDC, Tomo I, *Acta del 17 de agosto de 1825*, p. 402.

Ante la nueva afrenta del Ejecutivo, los representantes que restaban en la Sala decidieron acudir a la intervención de un tercero imparcial que ayudara a encontrar una solución pacífica al conflicto entre las autoridades provinciales. Obedeciendo a una concepción material del soberano como juez imparcial capaz de mediar y resolver conflictos dentro de las comunidades, elevaron la protesta al Soberano Congreso Nacional, fundando su legitimidad en las instrucciones dadas a los diputados que representaban a Córdoba¹⁷¹. La intención era “*instruirlo y querellarse de la ilegal suspensión, ó disolución que acaba de sufrir la representación actual, como las dos anteriores que la precedieron, y en la que... se han hollado abiertamente la independencia é inviolabilidad que caracteriza á los cuerpos representativos*”¹⁷².

El Congreso Nacional discutió arduamente acerca de su competencia para ordenar la vida institucional de la Provincia y acabó votando un dictamen en el que proponía: 1) que el gobierno de Córdoba convocara a todo el distrito a elecciones para designar a los reemplazantes de los cinco sujetos que habían abandonado la representación, 2) que una vez que se incorporaran los nuevos representantes se retomaran de inmediato las sesiones del Congreso Provincial, 3) que se decidiera de manera previa a todo asunto la incompatibilidad o no de los dos representantes que habían sido denunciados –y en caso de ser apartados se eligieran sus reemplazantes–, y 5) concluía recomendando “*bajo la más seria responsabilidad, á la representación de aquella provincia, y á su gobernador, la buena inteligencia y mutua cooperación que tan imperiosamente demandan los particulares intereses de la provincia misma, y los generales del estado*”¹⁷³. A diferencia de lo que había ocurrido unos meses atrás, en esta oportunidad el Gobernador Bustos acató llanamente la decisión del Congreso Nacional, la publicó por bando en toda la campaña e impulsó la celebración de las elecciones sin demora. La Sala de Representantes acabó reinstalándose con sus nuevos cinco integrantes el día 17 de diciembre del año 1825¹⁷⁴.

El cambio de representantes durante la primera parte del período implicó también –por lo general– el cambio del color político dominante en el Congreso Provincial. Si bien esta varianza puede encontrarse en cada nueva integración de la Sala, en los

¹⁷¹ La cláusula en la que basaban la atribución del Congreso Nacional era el Art. 10º de dichas instrucciones que decía: “*Que á efecto de mantener la paz y armonía en que se hallan unas con otras y de que cada una se mantenga en un orden regular en su administración interior, el Congreso se encargue de la tuición de sus instituciones, y de juzgar por ellas las discordias que se susciten entre unas y otras, y en cada Estado particular, entre sus gobiernos y sus habitantes*”, AHCDC, Tomo I, Acta del 10 de septiembre de 1824, p. 251.

¹⁷² La nota de los representantes al Congreso Nacional en GARZÓN, I. (1901) Ob. Cit., Tomo II, p. 88.

¹⁷³ Todos los debates de los diputados de las diferentes provincias en relación con este acontecimiento, a lo largo de las varias sesiones que ocupó al Congreso Nacional el asunto, pueden consultarse en RAVIGNANI, E. (1939) *Asambleas Constituyentes Argentinas...* cit., Tomo II, pp. 153 y ss.

¹⁷⁴ “*Se abrió la sesión anunciando el Sr. Presidente haber recibido noticia oficial del Ejecutivo, de estar reintegrada la Representación Provincial en los miembros que faltaban; siendo nombrados por la Sala Electoral, a mérito de lo dispuesto por el Congreso Nacional los SS. Dn. José Argüello, Dn. Pablo Bulnes, Dn. Bailón Galán y Dn. Mariano Rodríguez, á quienes estando presentes, el Sr. Presidente les tomó el juramento de estilo previa la manifestación que hicieron ante la Sala de sus respectivos diplomas que se leyeron, quedaron incorporados*”, AHCDC, Tomo I, Acta del 17 de diciembre de 1825 [con la leyenda Reintegración de la Sala Representativa de la Provincia: 1ª sesión], p. 404.

momentos en los que se introdujo un valor atípico, como el cambio violento de Gobernador, su medida fue mucho más grande e intensa. Quizá el punto más álgido en este sentido se produjo con motivo de la asunción como titular del Ejecutivo de José Vicente Reynafé en el año 1831, después del fugaz paso del General Paz por el gobierno tras derrocar a Bustos por la fuerza. El día 14 de agosto, el nuevo Gobernador elevó una nota a la Legislatura provincial invitándola a derogar todas las leyes y decretos de la anterior administración en virtud de ser “*atentatorias, nulas e ilegales*”. Los representantes se dedicaron a deliberar sobre el particular, enfrentándose posiciones a favor y en contra del pedido del nuevo Gobernador; incluso hubo una posición intermedia que proponía sólo la derogación de “*aquellas leyes que estuviesen puramente en oposición y contradicción con las fundamentales de la Provincia*” salvando también las “*que fueren en algún modo benéficas a los ciudadanos*”¹⁷⁵. Finalmente, en la sesión del 19 de agosto, se aprobó por una abrumadora mayoría el proyecto preparado por la comisión declarando al General José María Paz y los demás jefes sublevados a sus órdenes como “*injustos invasores de la Provincia de Córdoba (...) tiranizada, oprimida y privada de su libertad*”, por estas razones, “*la representación Provincial instalada en el tiempo del Gobernador Paz, fue ilegítima*”¹⁷⁶. En consecuencia, “*Las leyes, Estatutos, Órdenes y finalmente todo lo dispuesto durante el tiempo de opresión, queda anulado sin valor ni fuerza*”¹⁷⁷. De esta manera, a las intermitencias materiales de la Sala de Representantes se sumaba también la discontinuidad formal de una de las instituciones basilares del sujeto político provincial constituido.

Durante los años que siguieron, el Congreso Provincial fue cobrando estabilidad, consolidándose en el resto del período como una auténtica práctica institucional nacida de la Constitución. Ningún Gobernador de los que se sucedieron volvió a tomar medidas tan drásticas respecto de la actuación del cuerpo representativo, lo cual no sólo se explicaría por la mencionada consolidación, sino también por el carácter acomodaticio de las elites ante un progresivo fortalecimiento de la figura del Gobernador.

III. EL GOBERNADOR, JEFE POLÍTICO DE LA PROVINCIA

III. 1. Elección y reelección del Gobernador

La primera elección de Gobernador tras la sublevación de Bustos en 1820 había sido realizada por la Soberana Asamblea Provincial desde el momento mismo de su reunión; nombrar al jefe político de la Provincia era uno de los tres objetos para los cuales había sido convocada¹⁷⁸. Pese a la ausencia de un texto constitucional, en el mes de marzo del año 1820 el General Juan Bautista Bustos recibió la mayoría de sufragios y

¹⁷⁵ AHDCD, Tomo IV, *Actas de las sesiones del 15 y 19 de agosto de 1831*, pp. 57-61.

¹⁷⁶ *Compilación de leyes...* cit., p. 98.

¹⁷⁷ Ídem.

¹⁷⁸ El análisis de la circular lanzada en febrero de 1820 por el Gobernador Interino José Xavier Díaz, convocando a toda la Provincia, ha sido realizado en el capítulo I de este trabajo.

unos días más tarde juró el cargo para el que se lo había designado¹⁷⁹. La legitimidad de dicho nombramiento nunca fue objetada; los mismos constituyentes se habían encargado de prevenir cualquier intento de oposición insertando una cláusula en la norma cordobesa que salvaba la situación aclarando que la primera elección ya estaba “verificada” (Cap. XIV, Art. 1º). Sin embargo, una vez promulgado el Reglamento Provisorio se planteó la cuestión acerca del modo en que debía computarse su mandato. El propio Bustos fue quien envió una consulta a la comisión especial erigida por la Sala de Representantes para resolver dudas sobre la aplicación del texto recién sancionado. En concreto, se solicitaba una declaración que determinara si los cuatro años de duración del mandato del Gobernador de los que hablaba el Reglamento (Cap. XIV, Art. 7º) debían contarse “desde la recepción del Gobierno en 24 de Marzo de 1820, ó desde la publicación del enunciado Reglamento”¹⁸⁰.

Bien visto el asunto, se trataba de una cuestión de interpretación constitucional y con buena lógica jurídica los representantes apelaron al uso retórico de un principio general del derecho que les auxiliara en la determinación del alcance de la disposición. Su razonamiento comenzó reconociendo la irretroactividad de las leyes, con lo cual, no podía considerarse que el mandato del Gobernador hubiera comenzado antes de la promulgación de la norma constitucional que lo establecía. La erección de un Poder Ejecutivo provincial, en los términos previstos por el Reglamento, era una realidad institucional nueva que sólo podía existir a partir de su sanción¹⁸¹. En consecuencia, se resolvió que el tiempo de los cuatro años de mandato debía correr desde la entrada en vigencia del texto, esto es, desde su publicación en el mes de febrero del año 1821¹⁸². A pesar de esta decisión, que admitía la existencia de un nuevo orden prefigurado por la Constitución vigente, se aceptó sin ningún tipo de discusión el legado de una autoridad política preconstituida y Bustos continuó en su cargo de Gobernador sin siquiera detenerse a jurar la nueva norma fundamental.

Las elecciones para ocupar el Ejecutivo a lo largo del período que aquí se analiza siempre fueron objeto de alguna controversia y su regularidad estuvo condicionada por los vaivenes de la política provincial y rioplatense. Como ya se adelantó, vencido el primer período de su gobierno, Juan Bautista Bustos depositó su mando en el Congreso Provincial instándolo a que procediera a designar un sucesor. El día 25 de febrero de 1825, luego de la lectura del oficio enviado por el mandatario saliente, haciendo una “*absoluta entrega de la autoridad que se le había confiado*”, la Sala se preparó para elegir –en uso de sus atribuciones– al nuevo Gobernador¹⁸³. Las reglas que regulaban el

¹⁷⁹ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 21 de marzo de 1820*, pp. 14-16; y *Acta de la sesión del 24 de marzo de 1820*, p. 18.

¹⁸⁰ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de febrero de 1821*, pp. 109-111.

¹⁸¹ Para comprender la noción de “hechos institucionales” y el papel performativo del lenguaje, véase la obra de SEARLE, J. (1995) *The construction of social reality*, The Free Press, New York.

¹⁸² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de febrero de 1821*, p. 110.

¹⁸³ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de febrero de 1825*, p. 301. Según SEGRETI, pese a la manifestación en contrario, en una serie de misivas enviadas a gente de su confianza Bustos había dejado entrever su intención de ser reelecto como Gobernador de la provincia, Cfr. SEGRETI (1970) Ob. cit., p. 177.

procedimiento para el nombramiento del jefe del Ejecutivo eran inequívocas, sin embargo, el representante Saráchaga solicitó que se aclararan los términos del Reglamento cuando en sus artículos 2 y 8 del Cap. XIV hablaba de *un voto sobre la mitad* y *un voto sobre las dos terceras partes*, esto es, que se concretizara para el caso de ser siete diputados cuántos votos eran necesarios tanto para elección como para reelección. Debate de por medio, se resolvió que cuatro y cinco voluntades, respectivamente, serían suficientes. Puestos a votar, ningún sujeto alcanzó en primera vuelta la mayoría necesaria para ser electo o reelecto. De acuerdo al procedimiento estipulado por la Constitución, se realizaron tres votaciones generales y otras tres entre los candidatos más votados (Art. 3 Cap. XIV) arrojando todas ellas el mismo resultado, cuatro votos para Juan Bautista Bustos y tres para Julián Martínez¹⁸⁴. Como ninguno alcanzaba las voluntades necesarias – cuatro Martínez para ser electo y cinco Bustos para ser reelecto– se realizó un sorteo entre los dos candidatos más votados (Art. 4 Cap. XIV). La suerte, expresión de una lógica identitaria de la representación, favoreció al Coronel José Julián Martínez¹⁸⁵.

Luego de realizado el escrutinio, en esa misma sesión se hizo lectura de dos oficios elevados a la Sala por el Gobernador saliente adjuntando “las protestas de responsabilidad que le hacen los Curatos de la Campaña (...) una del Curato de Río 2º Abajo, y la otra del de Calamuchita, ambas firmadas por los Comandantes Militares y algunos individuos más, y que tenían por objeto manifestar su voluntad de que fuese reelecto el actual Sr. Gobernador, protestando que no obedecerían á otro que se nombrase”¹⁸⁶. En un mismo acto, ciertos Curatos del interior provincial –que ya habían ejercido el derecho a votar sus electores que participaron en el nombramiento de Martínez– desconocieron la legalidad constitucional de un procedimiento correctamente desarrollado según las disposiciones del Reglamento y Bustos amparó su posición¹⁸⁷. La legitimidad carismática del Gobernador que no se resignaba a dejar el mando lo avalaba para impulsar actos de esta naturaleza¹⁸⁸. Ante una afrenta institucional de este tipo, los representantes decidieron responder que la elección ya estaba legalmente practicada y

¹⁸⁴ Al parecer, la asamblea que llevó a cabo esta elección estaba compuesta por representantes opositores a la gestión del Gobernador Bustos, Cfr. SEGRETÍ (1970) Ob. cit., p. 176. Por su parte, CELESIA recoge un cuadro publicado en el diario porteño “*El Argentino*”, Buenos Aires, marzo 18 de 1825 Tomo I p. 13 con los votos de cada representante en cada una de las seis votaciones. Llama la atención el autor sobre la circunstancia peculiar del cambio de preferencias de los representantes en cada vuelta, bloqueándose sucesivamente las mayorías que necesitaba cada candidato (Bustos cinco votos –por tratarse de su reelección– y Martínez cuatro), CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 184.

¹⁸⁵ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de febrero de 1825*, p. 302. Cabe recordar que la selección de ciertos oficios en las repúblicas a partir del azar era una práctica corriente en los Cabildos. Para un repaso por su historia puede consultarse PASSOLA, A. (1997) “Insaculación en intervención monárquica”, en *La historiografía sobre el municipio en la España Moderna*, Cap. IV, Edicions de la Universitat de Lleida, pp. 93-118.

¹⁸⁶ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de febrero de 1825*, pp. 302-303.

¹⁸⁷ Ostentando unas potestades que excedían su autoridad, Bustos, apoyado por las armas del ejército que habían quedado a su cargo, oficiaba de árbitro en los conflictos internos de la república, cfr. AGÜERO, A. (2012) Ob. cit. En igual sentido HALPERÍN DONGHI (2005) Ob. cit., pp. 328 y ss.

¹⁸⁸ Sobre los “tipos de dominación” y, entre ellos, la legitimidad de carácter carismático, es de referencia obligada la obra de WEBER, M. (2014) *Economía y sociedad*, FCE, México. Con este esquema teórico ROMANO ha analizado el caso cordobés, ROMANO, S. (2002) Ob. cit.

solicitaron al nuevo Gobernador que, en cumplimiento de la Constitución, velara por la tranquilidad de la Provincia.

Pero en la mañana siguiente, la del 26 de febrero de 1825, el “Pueblo” reunido en la sala de sesiones del Congreso Provincial mandó a llamar al Presidente y vocales de la Legislatura¹⁸⁹. La inasistencia de la mayor parte de ellos imposibilitó reunir el quórum necesario para sesionar y, superado por los acontecimientos, el Presidente del Congreso, Don Miguel del Corro, presentó a los allí convocados un pliego del Ejecutivo para que deliberaran sobre la situación de la Provincia. Como ya se dijo, esta asamblea popular resolvió disolver la Legislatura, declarando a Córdoba sin representación e inválida la elección recaída en Martínez; finalmente, “siendo impracticables otras medidas...” se encargó al “exmo. Señor don Juan Bautista Bustos, el ejercicio de los tres poderes provisoriamente hasta la reunión de toda la provincia”¹⁹⁰.

El 30 de marzo de 1825 ya estaban en la ciudad de Córdoba los representantes de los Curatos para conformar la Asamblea Electoral. En su mayoría portaban poderes en los que se indicaba la intención de cada distrito de reelegir a Bustos como Gobernador de la Provincia. El respeto a esta lógica de representación política con mandato imperativo implicaba la violación a las disposiciones de la Constitución ya que, según lo advirtieron algunos participantes, el Reglamento Provisorio establecía que esa elección correspondía al Congreso Provincial (Cap. XIII, Art. 14º y Cap. XIV, Art. 1º). Sin embargo, se acordó que “para expedirse con aquella dignidad que distingue a estos cuerpos en la pureza de sus grandes deliberaciones dando el primer ejemplo de respeto a las leyes y deseando por otra parte ser escrupulosamente conforme al sentimiento aclamatorio de la provincia...” debía procederse a la reelección de Bustos “dejando vigentes las leyes constitucionales de la materia en los casos que ocurran sucesivamente”¹⁹¹. Acto seguido se procedió a reelegir “canónicamente” para el cargo ejecutivo al ex Gobernador. El día 4 de abril se reinstaló la Legislatura Provincial designada por los mismos sujetos. Su primera deliberación giró en torno a la necesidad de ratificar o no la reelección hecha por la Asamblea Electoral donde estaba reunida toda la Provincia decidiéndose que no era preciso que así se hiciera y que con el simple acto de toma de posesión y posterior juramento legal quedaba implícita la voluntad del cuerpo representativo¹⁹². De esta manera se cerraba el ciclo abierto con aquella renuncia de Bustos al poder y comenzaba su segundo mandato como Gobernador.

Años más tarde llegaría el turno del General José María Paz que arribó a Córdoba al frente de una tropa regular del ejército nacional con la misión de poner fin a la causa federal sostenida por Bustos y extender en el interior los planes de la revolución unitaria

¹⁸⁹ Apenas unos 170 partidarios de Bustos son los que llevaron a cabo esta “asonada popular”. Sin embargo, ha sido suficiente para que se emitan juicios como el siguiente, “desde que el pueblo, esto es, los representados, asumían la acción, ellos mismos, los representantes, nada tenían que hacer”, CELESIA (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 189.

¹⁹⁰ RAVIGNANI, E. (1939) *Asambleas Constituyentes Argentinas...* cit., Tomo I, pp. 1216-1218.

¹⁹¹ SEGRETI (1970) Ob. cit., p. 183.

¹⁹² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 4 de abril de 1825*, p. 306.

que el 1 de Diciembre del año 1828 había encabezado en Buenos Aires el General Lavalle. La preeminencia de sus armas, obligó al Gobernador de Córdoba a firmar un tratado de pacificación y la cesión del mando en cabeza de Paz¹⁹³. En consecuencia, y a pesar de su retórica institucionalista, Paz se hizo cargo del gobierno de la Provincia el 18 de abril del año 1829 en un acto sin precedentes en la breve historia constitucional cordobesa¹⁹⁴. Pero su misión no estaría asegurada mientras el caudillo federal continuara cerca y urdiendo una estrategia de alianzas para derrotarlo, por ello, decidió salir a la campaña a enfrentarlo en el campo de batalla¹⁹⁵. Luego de vencer a Bustos, y meses más tarde a la contraofensiva lanzada por éste acompañado por las fuerzas del General riojano Facundo Quiroga, en el mes de agosto ratificó según el procedimiento constitucional su rol de Gobernador. Con una Provincia plenamente teñida del color político del vencedor, la votación resultó unánime en favor del ciudadano General José María Paz “*dejándose ver en los semblantes de los señores Representantes el entusiasmo y el júbilo, que naturalmente producía en ellos el acierto de la elección, por el mérito reconocido del electo, unido al desahogo de la gratitud que toda la Provincia de Córdoba y cada un individuo de ella, debe a los eminentes servicios del mismo*”¹⁹⁶. Como se puede entrever, y al igual que en 1820 y 1825, “el nombramiento de tales gobernadores era la mayor parte de las veces determinado por el resultado de una revuelta o por la influencia incontrastable de las armas puestas al servicio de un núcleo político”¹⁹⁷.

El breve gobierno de Paz (1829-1831) estuvo enteramente condicionado por la guerra. El Gobernador casi no permaneció en la ciudad durante el lapso en que estuvo a cargo del Ejecutivo y se vio obligado a recorrer toda la campaña para pacificar el territorio y consolidar militarmente su poder. Precisamente, en una de sus salidas para reconocer el campo de batalla y preparar su estrategia de combate frente a las tropas del Gobernador santafecino Estanislao López, en el mes de mayo del año 1831, José María

¹⁹³ Cfr. MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) *La formación histórica de la provincia de Córdoba*, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba, Argentina, pp. 74 y ss.

¹⁹⁴ Unos meses después, habiendo sido ya electo Gobernador según los términos del Reglamento Provisorio, en su primer mensaje a la Sala de Representantes celebró con júbilo no estar “*lejos el día en que Cordova amuralle sus garantías y derechos para siempre*”, y anunció haber “*llegado el día de constituir un gobierno justo y liberal; que vamos a vivir con leyes, instituciones, y garantías*”. Documento N°2, *Mensaje del Gobernador José María Paz, Córdoba, agosto 25 de 1829*, en FERREYRA, A. (1980) Ob. cit., p. 12.

¹⁹⁵ El Gobernador Bustos se había asentado en las sierras chicas del territorio cordobés, en la estancia de San Roque, y hasta allí marchó Paz para combatir. El 22 de abril de 1829, en la batalla de San Roque, el General unitario venció al Bustos quien debió retirarse de la Provincia que durante casi una década había gobernado.

¹⁹⁶ AHCDC, Tomo III, *Acta de la sesión del 26 de agosto de 1829*, p. 151.

¹⁹⁷ ZORRAQUÍN BECÚ, R. (1953) Ob. cit., p. 123. “Lo que hace la originalidad de la situación cordobesa con respecto a la de las demás provincias no es la concentración de poderes en las manos del gobernador, sino el más complejo aparato institucional en que se la envuelve, de acuerdo con las tradiciones de esa sede administrativa episcopal y universitaria, que es Córdoba. Y en otros casos esa concentración no basta para asegurar una sólida base política al gobernador; aún en Córdoba, lo que permitió a Bustos ser el árbitro y no el instrumento de las disputas de la élite urbana no es la vastedad de sus atribuciones legales, sino el apoyo de sus tropas de línea, que le dio verdadera independencia frente a esa élite. Gracias a esos restos del ejército nacional, Bustos puede ser de veras –y no sólo en la letra constitucional– el heredero de los intendentes regios”, HALPERÍN DONGHI, T. (2005) Ob. cit., p. 329.

Paz cayó prisionero de las fuerzas montoneras al mando de los hermanos Reynafé¹⁹⁸. Esta situación de acefalía fue considerada por los representantes que decidieron declarar el gobierno provincial en estado de vacancia¹⁹⁹. La transición política estuvo a cargo de personajes pertenecientes a la elite cordobesa como los señores Mariano Fragueiro y José Roque Funes que ejercieron interinamente el Ejecutivo hasta la reunión de una nueva Legislatura, afín a la facción federal que había derrotado al ex Gobernador²⁰⁰.

En la primera sesión del Congreso Provincial, reinstalado el 5 de agosto del año 1831, “*resultó electo por una canónica y plena [votación] el Gobernador Teniente Coronel y Comandante General de Armas D. José Vicente Reinafé*”²⁰¹. La elección del mayor de los Reynafé respetó la legalidad constitucional y lo colocó en el mando de la Provincia durante los siguientes cuatro años. Durante los últimos meses de su mandato el Gobernador se vio involucrado en el asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga y los gobiernos de Buenos Aires y Santa Fe, que habían iniciado una investigación en su contra, intimaron al Congreso Provincial para que le obligara a dimitir por hallarse legalmente impedido para ejercer empleos públicos²⁰². La estrategia de los representantes consistió en complacer a las potencias provinciales que reclamaban el cese del Gobernador pero salvando la independencia política de la Provincia, la dignidad y conservación de sus instituciones. A partir de esta premisa, declararon que el gobierno del General José Vicente Reynafé ya había concluido legalmente y que, en función de ello, debía nombrarse un Gobernador provisorio que se hiciera cargo temporalmente del Ejecutivo, misión que se encomendó por mayoría al ciudadano Pedro Nolasco Rodríguez²⁰³.

Rodríguez era un hombre de confianza del ex Gobernador y su elección había sido una maniobra política ideada por Reynafé para escudarse de la persecución que Buenos Aires y Santa Fe, con apoyo de algunas fuerzas de la campaña cordobesa, habían iniciado sobre su persona. Alertados del obstáculo que Rodríguez representaba, los Gobernadores bonaerense y santafecino junto al Coronel Manuel López conminaron al Congreso Provincial para que se nombrara a un nuevo sujeto al mando de la Provincia²⁰⁴. En apenas 20 días, la disputa de poder entre las distintas facciones políticas aún presentes en la

¹⁹⁸ ZINNY, A. (1920) Ob. cit.

¹⁹⁹ Enterada la Sala “*del más desgraciado como inesperado suceso del arrebató por el enemigo, del Gobernador propietario de la Provincia y General en jefe del Ejército D. José M. Paz (...) Ha declarado la H. Representación vacante de hecho, al Gobierno actual de la Provincia...*”, en *Compilación de leyes...* cit., p. 98.

²⁰⁰ Durante el interinato de estos dos personajes, el hecho más sobresaliente fue la firma del tratado de paz entre los comisionados cordobeses, Dalmacio Vélez Sársfield y Eusebio Agüero, y los del Jefe del Ejército santafecino por medio del cual se reconocía “al general en jefe del Ejército auxiliar confederado el derecho a un protectorado, que le permitía intervenir en la vida interior de la Provincia”, GARZÓN, I. (1901) Ob. cit., Tomo II, Córdoba, pp. 334-336. De esta manera, Córdoba comenzaba a alinearse, al menos formalmente, con las provincias que habían firmado el Pacto Federal y conformado la Confederación que regiría las relaciones interiores de las provincias rioplatenses durante los siguientes veinte años.

²⁰¹ AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 5 de agosto de 1831*, p. 50.

²⁰² AHCDC, Tomo V, *Acta de la sesión del 5 de agosto de 1835*, pp. 166-167.

²⁰³ AHCDC, Tomo V, *Acta de la sesión del 7 de agosto de 1835*, pp. 170-171.

²⁰⁴ AHCDC, Tomo V, *Acta de la sesión del 26 de octubre de 1835*, pp. 194-198.

Provincia acabó resolviéndose a favor del hombre de confianza del rosismo en Córdoba: el Coronel Don Manuel “Quebracho” López²⁰⁵.

La llegada de López al poder se produjo con la venia del Gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas y de su par santafecino el Brigadier Estanislao López. Como se ha visto, la transición implicó una serie de interrupciones institucionales y situaciones de precariedad que recién hacia mediados de 1836 acabó regularizándose. Sin ningún tipo de solemnidades ni procedimiento previsto en la Constitución, López asumió el mando de la Provincia como Gobernador “de hecho” el 17 de noviembre del año 1835. La Sala de representantes, que había sido disuelta, volvió a reorganizarse el 22 de noviembre y en el mismo acto de instalación “*se pasó a la elección del individuo que debía regir la Provincia provisoriamente, y fue elegido para el alto destino, por uniformidad de sufragios, el Sr. Coronel y Comandante General en jefe de las fuerzas confederadas Dn. Manuel López*”²⁰⁶. Este nombramiento se extendió hasta el día 30 de marzo de 1836, fecha en la que se eligió por “*canónica y uniforme votación*” al propio Manuel López como Gobernador Propietario de la Provincia de Córdoba²⁰⁷. Sin embargo, hubo que esperar hasta finales del mes de junio para recibir su juramento en la forma constitucional²⁰⁸.

El Gobernador fue reelecto por unanimidad a los cuatro años de la toma de posesión²⁰⁹. A esta altura del desarrollo político de la Provincia, como en el resto de comunidades de la Confederación, el unanimismo era el modo en que las decisiones políticas tenían lugar y la elección del titular del Ejecutivo no era una excepción²¹⁰.

²⁰⁵ Durante esos 20 días hubo 4 autoridades distintas a cargo del Ejecutivo provincial. El Congreso eligió primero, siempre en calidad de provisorio, a Mariano Lozano el 27 de octubre de 1835, pero como éste estaba ausente de la Provincia se delegó el mando en el Coronel Sixto Casanova. Pero pronto se enfrentó con la Legislatura a causa del nombramiento de su Ministro de Gobierno y la Sala resolvió reasumir el Poder Ejecutivo a partir del 8 de noviembre. En consecuencia, Casanova expidió un decreto disolviendo la Cámara de Representantes y asumiendo todo el poder público. Días más tarde, delegó el mando en Andrés Avelino de Aramburu que finalmente lo transmitió, con la suma del poder público que ostentaba, al Coronel Manuel “quebracho” López el 17 de noviembre de 1835. Cfr. ZINNY, A. (1920) Ob. cit., pp. 131-135. El período de López en el poder ha sido específicamente abordado por ROMANO, S. (2002) Ob. cit.

²⁰⁶ AHCDC, Tomo V, *Acta de la sesión del 22 de noviembre de 1835*, p. 216.

²⁰⁷ AHCDC, Tomo V, *Acta de la sesión del 30 de marzo de 1836*, pp. 241-242.

²⁰⁸ AHCDC, Tomo V, *Acta de la sesión del 25 de junio de 1836*, p. 248.

²⁰⁹ En esta oportunidad se discutió sobre la necesidad nombrar al nuevo Gobernador para los siguientes cuatro años o si se podía simplemente prorrogar el término a quien se venía desempeñando a cargo del Ejecutivo provincial. Luego de una reñida votación (8 a 7) se decidió que debía procederse a una nueva elección, en la que salió favorecido el Brigadier Manuel López. AHCDC, Tomo V, *Acta de la sesión del 29 de junio de 1840*, p. 324.

²¹⁰ Sobre la noción de “unanimismo” y sus implicancias, fundamentalmente durante el período rosista que en Córdoba se solapa con el de Manuel “Quebracho” López, puede consultarse la obra de TERNAVASIO, M. (2002) *La Revolución del voto: Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires; también el trabajo de CHIARAMONTE, J. (1993) “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en CARMAGNANI, M. (comp.), *Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 81-132. En un trabajo sobre prensa y opinión pública a lo largo de todo el período aquí estudiado, AYROLO realiza una diferencia entre la “unanimidad política” durante los gobiernos de Bustos y de Paz, y “uniformidad política” en tiempos de Reynafé y López, cfr. AYROLO, V. (2006) “Noticias sobre la opinión y la prensa periódica en la Provincia autónoma de Córdoba: 1820-1852”, en *Quinto Sol*, Nro. 10, pp. 13-46.

Próximo a terminar su segundo período, el Congreso Provincial reconoció la necesidad de atender con urgencia el asunto a fin de determinar los pasos a seguir una vez que se encontrara vacante la silla de López. El Reglamento Provisorio de 1821 descartaba la posibilidad de elegir por tercera vez consecutiva a un mismo sujeto para ejercer el mando del Ejecutivo²¹¹. Pese a la disposición constitucional, uno de los representantes provinciales comenzó a preparar el terreno para justificar un apartamiento del precepto en cuestión apelando a la constitución material; razonaba de la siguiente manera: “*el espíritu de las leyes en general es el bien público; empero que todas tienen sus excepciones; que hay casos particulares que sin desviarse del espíritu de la ley puede hacerse lo que más convenga al país, sin contrariarla*”²¹². La comisión encargada de preparar un proyecto sobre este tema presentó a la Sala su trabajo proponiendo la continuidad del Brigadier López en el mando de la Provincia y esta postura fue apoyada por el resto de los integrantes de la Legislatura. Entre las razones expuestas en apoyo a la solución planteada, los representantes apelaron a la “*voluntad manifiesta de todos los ciudadanos por la continuación del señor López*” y a la “*salud pública*” que, como se analizó previamente, era un espacio retórico que autorizaba –en casos excepcionales– a apartarse de la letra de las disposiciones legales²¹³.

En las sesiones extraordinarias de los días 26 y 27 de junio de 1844, luego de oírse la palabra de casi todos los miembros de la Sala de Representantes, todos contestes en apoyar la continuación de López en el cargo de Gobernador de la Provincia, se sancionó un decreto prorrogando por tres años el mando gubernativo de la Provincia en la persona de Don Manuel López, y suspendiendo la elección de Gobernador prevista en la Constitución, sin perjuicio de mantener su vigencia y aconsejar su reconsideración²¹⁴. Pese al intento de renuncia alegando razones de enfermedad, avanzada edad y necesidad de atender a su numerosa familia –enérgicamente rechazado por los representantes–, el día 1º de julio de 1844 Manuel López renovó su juramento como jefe del Ejecutivo ante la Sala de Representantes de la Provincia de Córdoba “*a presencia del Pueblo y Corporaciones Civiles y Eclesiásticas que habían concurrido a la solemnidad de este acto*”²¹⁵.

²¹¹ Reglamento Provisorio... Secc. Sexta, Cap. XIV, Art. 8: “No podrá ser reelegido [el Gobernador], sino por una vez con un voto sobre las dos terceras partes”.

²¹² AHDCD, Tomo VI, Acta de la sesión del 14 de junio de 1844, p. 188.

²¹³ AHDCD, Tomo VI, Acta de la sesión del 25 de junio de 1844, p. 192.

²¹⁴ “¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los salvajes unitarios! DECRETO: Art. 1º- Se suspende la elección de Gobernador de que habla la Ley, art. 8º, capítulo 14 del Estatuto Constitucional. Art. 2º- Continuará en el mando de la Provincia por el término de tres años el ciudadano Brigadier General D. Manuel López, sin perjuicio de la Ley 8ª, cap. 14, del Código Constitucional, de la cual, como de las demás que contiene dicho Código, se ocupará V.H. á la posible brevedad de su reconsideración. Art. 3º- Comuníquese á efecto de que se persone en esta Sala á prestar el juramento de estilo, ordenado por la ley”, *Compilación de leyes...* cit., p. 177.

²¹⁵ AHDCD, Tomo VI, Acta de la sesión del 1 de julio de 1844, p. 206.

III. 2. El mando de la Provincia en ausencia del Gobernador

Según el Reglamento Provisorio, en los casos de “ausencia del *Gobernador de la República en defensa del Estado, o de otro legítimo impedimento que le embarase el ejercicio de sus funciones*”, era facultad del Congreso Provincial designar al sujeto que interinamente debía reemplazarlo²¹⁶. Esta norma aparentemente clara e inequívoca, con dos concretos supuestos de hecho y un órgano competente para actuar en caso de que alguno de ellos se produjera, fue el eje sobre el que giraron enconadas controversias durante los primeros años de vida política bajo Constitución. El debate sobre el particular, que enfrentó a Gobernadores con Representantes y a éstos entre sí, estuvo generalmente centrado en dos extremos de la disposición legal: por una parte, el alcance del sentido atribuible a la “*ausencia del Gobernador*” como supuesto de hecho, y por otro, la legalidad o no de los nombramientos de interinos realizados por una autoridad diferente de la mencionada en el artículo en cuestión. Como se puede observar, se trataba básicamente de un problema de interpretación normativa que, en ausencia de un Tribunal con capacidad para decidir acerca de su contenido, fue motivo de conflicto entre las distintas autoridades de la Provincia. Máxime si se tiene en cuenta que el intérprete de la Constitución –el propio Congreso– era juez y parte en la disputa. Para profundizar el análisis sobre esta cuestión conviene repasar los distintos episodios en los que esta problemática tuvo lugar.

Como ya se ha dicho, la Provincia de Córdoba no estuvo exenta de encontrarse sumida en un permanente estado de guerra, revueltas internas e invasiones exteriores. Durante este primer período, por tradición y por constitución, los Gobernadores estuvieron al mando de las tropas regulares dirigiendo la lucha armada. Esta situación los obligaba a salir recurrentemente al campo de batalla y, consecuentemente, ausentarse de la ciudad capital donde se asentaban las autoridades de la Provincia. A los pocos días de entrar en vigencia el Reglamento Provisorio, Juan Bautista Bustos tuvo que organizar sus tropas y partir hacia el sur provincial para contener la probable invasión del caudillo chileno José Miguel Carrera²¹⁷. Esta circunstancia lo obligó a enviar un oficio a la Asamblea comunicando su salida y la necesidad de depositar el gobierno político y militar en otro sujeto durante su ausencia, tal y como ordenaba la disposición constitucional. Ese mismo día “*en virtud de sus facultades*” la Sala designó a su Presidente, el Coronel Francisco Bedoya, como Gobernador interino con las mismas atribuciones que el propietario²¹⁸. Esta primera sustitución interina del jefe del Ejecutivo se realizó según el procedimiento establecido en la flamante Constitución, los representantes no pusieron en cuestión la necesidad de nombrar un interino –pese a que

²¹⁶ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIV, ART. 11.

²¹⁷ Los motivos y detalle de esta invasión en GARZÓN, I. (1901) Ob. cit., Tomo II, p. 12 y ss. Un análisis específico de las consecuencias de este acontecimiento para la vida política y constitucional cordobesa puede consultarse el trabajo de VIVAS, M. (2010) Ob. cit.

²¹⁸ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 1 de marzo de 1821*, p. 112. La aclaración hecha por los representantes de que Bedoya gozaba de las mismas atribuciones que el Gobernador propietario no es intrascendente. Unos días después de su nombramiento, el 5 de abril de 1821, Bedoya dictó un Bando de Gobierno suspendiendo la seguridad individual (*vid. infra*).

Bustos no se ausentaba de la Provincia— y la designación estuvo a cargo de la autoridad competente. Sin embargo, pronto comenzarían las prácticas que poco a poco se irían alejando del texto.

Apenas unos meses después, el propio Gobernador interino se vio también en la necesidad de salir hacia la campaña a fin de supervisar el procedimiento de las tropas de la Provincia comandadas por el Coronel Helguera, erguidas para enfrentar una insurrección de montoneros en el norte provincial²¹⁹. Esta circunstancia motivó la nota que envió Bedoya al Congreso comunicando la delegación del gobierno político y militar de la Provincia al Cabildo y al Comandante General Don Antonio Giles, respectivamente²²⁰. Si bien Bedoya había recibido el encargo del Ejecutivo con las mismas atribuciones que el propietario, delegar por sí el gobierno de la Provincia no estaba en la nómina de facultades reservadas a éste. La ilegalidad de la medida fue denunciada por el representante Benito Lascano que propuso salvar formalmente el vicio, como solución conciliatoria entre la letra de la Constitución y los deseos del Gobernador interino, haciendo la Sala el mismo nombramiento hecho por Bedoya “á fin de que el pueblo no fuese presidido por autoridades ilegítimas”²²¹. El Congreso no consintió la propuesta y acordó no innovar durante un período de cuatro días, al cabo del cual, si el sustituto no había regresado procedería al nombramiento de ley. Como el Gobernador interino volvió antes del plazo no hubo pronunciamiento, sin embargo, el antecedente ya estaba sentado. Habiendo podido salvar el Reglamento Provisorio, los miembros de la Sala consintieron la primera inobservancia de la norma constitucional. Cuando unas semanas más tarde se volvió a presentar idéntica situación, el hecho ni siquiera fue objeto de discusión en el seno del cuerpo representativo y Bedoya actuó con total autonomía²²².

A pesar de la claridad de sus palabras, la correcta inteligencia de la disposición constitucional generaba algunas dudas para los actores políticos. Este ánimo quedó evidenciado en la consulta que Bustos elevó en abril de 1826 al Congreso Provincial para que los representantes se pronunciaran sobre la necesidad o no de nombrar un Gobernador interino cuando el titular salía de la ciudad “en tiempo pacífico y sin exceder a los límites de la Jurisdicción de la Provincia”²²³. En términos legales, la cuestión consistía en determinar si una ausencia de ese tipo encuadraba o no en alguno de los dos supuestos contemplados por el Art. 11, Cap. XIV del Reglamento Provisorio. La Sala aprovechó la oportunidad no sólo para ampliar los casos en que se debía nombrar sustituto —el artículo hablaba de salida del Gobernador en defensa del Estado—, sino también para definir que toda incursión en la campaña era motivo de nombramiento de

²¹⁹ Cfr. GARZÓN, I. (1901) Ob. cit., Tomo II.

²²⁰ AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 17 de junio de 1821*, pp. 149-150.

²²¹ Ídem, p. 150.

²²² El mismo Gobernador interino Bedoya resolvió “salir al frente de una fuerza en persecución del caudillo entrerriano Ramírez, y los primeros días de julio se pone en marcha, delegando el mando en lo político en el Alcalde de Ier. Voto Don Manuel José de Ocampo, y en lo militar en el Mayor Don Antonio Giles”, CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 239.

²²³ Ídem, p. 240.

interino y para afirmar que esa era una facultad del Congreso²²⁴. Juan Bautista Bustos acató la decisión de los representantes²²⁵. Al año siguiente, el Gobernador se limitó a “anunciar su salida a la campaña por algunos días, para que la Sala nombrase al que debía sustituirlo durante su ausencia”, designándose interinamente por el cuerpo “en lo político y de Hacienda, el Sub-Inspector de policía Dn. Felipe Gómez, y en lo militar el Jefe de Estado Mayor, Coronel graduado Dn. Anselmo Acosta”²²⁶.

Durante los casi dos años en que el General José María Paz estuvo al frente del Poder Ejecutivo, el estado de conflictos armados internos y la defensa militar de la Provincia fue permanente. Esta circunstancia, que motivaba la constante salida de Paz hacia el frente de batalla, impidió al Gobernador ejercer efectivamente el gobierno en gran parte de su mandato y lo obligó a delegar en varias oportunidades la dirección de la Provincia²²⁷. Sólo una semana después de ser designado como propietario en el cargo, Paz envió su primera comunicación a la Sala anunciando su salida urgente a la campaña por pocos días dejando “provisto suficientemente el Gobierno en el Ministro General y las armas al cargo del Coronel Don Faustino Allende”²²⁸. Pese a que se trataba de un asunto largamente discutido y ya resuelto por la Sala en años anteriores, la nota reeditó el clásico debate en el Congreso Provincial sobre los alcances de la norma.

Uno de los representantes apuntó que la situación se encontraba prevista en un artículo específico del Reglamento Constitucional. Según su lectura de la disposición era facultad de la Representación nombrar al interino, por lo tanto, el Congreso debía declarar si el accionar de Paz estaba en conflicto o no con esa ley. La defensa del poder de la Sala estuvo a cargo de Saráchaga quien argumentó a partir de una interpretación literal de la norma según la cual sólo dos casos eran los contemplados en el Reglamento: la salida del Gobernador fuera de la Provincia (1er caso), y una enfermedad del titular del Ejecutivo de tal naturaleza que lo inhabilitara para ejercer su cargo sin poderse calcular el tiempo de esa inhabilidad (2do caso). Siendo así, la situación de Paz no encuadraba dentro del supuesto de hecho legal ya que se había ausentado de la ciudad pero no de la Provincia.

Varios representantes apoyaron esta solución, sin embargo, otro argumento acerca de la conveniencia del nombramiento fue esgrimido por el Secretario de la Sala. Según

²²⁴ AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 14 de abril de 1826*, p. 72. En las deliberaciones sobre este asunto se trajeron precisamente a colación algunos ejemplos en los que había sido el Gobernador el que había encargado el mando de la Provincia a distintos individuos.

²²⁵ Las disoluciones del Congreso Provincial y el largo conflicto entre la Sala y Bustos que motivó la intervención del Congreso General Constituyente reunido en Buenos Aires son analizadas en otros apartados de este trabajo.

²²⁶ AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 20 de febrero de 1827*, p. 234.

²²⁷ Luego de la batalla de San Roque el 22 de abril de 1829 en que derrotó al ex Gobernador Juan Bautista Bustos y hasta su caída en prisión en el mes de mayo de 1831, José María Paz tuvo que ocuparse de defender la Provincia ante las invasiones lideradas por el caudillo riojano Facundo Quiroga (batallas de La Tablada y Oncativo), sofocar las sublevaciones de Juan Francisco Guevara y el recrudecimiento de la guerrilla en la zona del valle de Traslasierra, entre otros focos de conflicto. Con el objetivo de no descuidar los negocios provinciales, delegó personalmente el cargo de Gobernador en distintos individuos que lo acompañaban en su gestión como el Intendente de Policía Pedro Juan González, el Coronel de milicias Faustino Allende, el Coronel Julián Martínez y el General Gregorio Aráoz de Lamadrid.

²²⁸ AHDCDC, Tomo III, *Acta de la sesión del 2 de septiembre de 1829*, pp. 181-183.

éste, la facultad de nombrar interino era una atribución del Congreso Provincial y no del Gobernador, pero atento a que su ausencia anunciada a la campaña sería de “pocos días”, no resultaba conveniente que fuera la Sala quien designara transitoriamente a alguien que tardaría unos días en ponerse al tanto de los negocios provinciales, tiempo en el que el Gobernador seguramente ya habría regresado a la ciudad. Finalmente, los representantes acordaron que no estaba en conflicto con la ley lo dispuesto por el Gobierno pero no parece haber quedado claro cuál de los argumentos había sido el más convincente²²⁹.

Precisamente por ello, unos meses más tarde volvió a presentarse idéntica controversia. Consciente de la peculiaridad del caso y de las diferentes posiciones acerca de su correcta interpretación, el 17 de octubre de 1829 el Gobernador elevó una nota a la Legislatura anunciando su próxima salida a la campaña “donde peligran más la seguridad y tranquilidad de la Provincia” y solicitando, en consecuencia, auxilio para la inteligencia de la norma constitucional sobre designación del interino puesto que en esta oportunidad no podía “fijarse la duración de la ausencia a tiempo determinado”. Nuevamente se encontraron los representantes con la necesidad de determinar el alcance de la disposición del Reglamento Provisorio. En esta ocasión, sin embargo, acudieron a otra línea de argumentación para volver a simpatizar con los deseos del Gobernador Paz.

Learte fue el representante encargado de introducir la premisa de base sobre la cual se construiría el resto del alegato. Según su lectura del contexto histórico, “en las circunstancias actuales y extraordinarias en que se hallaba la Provincia, la primera Ley era la salvación del país”, en consecuencia, era aconsejable autorizar al Gobernador propietario a que él mismo eligiera al interino. A muchos de los miembros del Congreso presentes no agradó la propuesta. Sin embargo, pronto encontraron la solución al dilema entre favorecer a Paz y respetar la ley de la Provincia votando afirmativamente la siguiente proposición: “¿Sin derogar ni quitar de modo alguno, la fuerza y vigor del art. 11º del capítulo 14, del Reglamento Provisorio, se faculta por ahora o no al P.E. para delegar el mando en persona de su confianza, durante la ausencia...?”²³⁰. Idéntica situación de partida –consultas de Bustos en 1826 y de Paz en 1829–, similares argumentos sosteniendo cada posición, parecida definición sobre el alcance de la norma, distinta resolución. Las sucesivas designaciones fueron realizadas libremente por el Gobernador y la autorización provisoria para inobservar el Reglamento, sin derogar su vigencia, comenzó a consolidar una práctica contraria a la norma constitucional²³¹.

José Vicente Reynafé estuvo a cargo del Gobierno de la Provincia de Córdoba desde el 7 de agosto de 1831 hasta el mismo día del año 1835. En esos cuatro años de mandato legal, distintas circunstancias relacionadas con su salida al frente de tropas regulares y un delicado estado de salud fueron motivo de muchas y prolongadas

²²⁹ AHDCD, Tomo III, *Acta de la sesión del 2 de septiembre de 1829*, p. 181.

²³⁰ AHDCD, Tomo III, *Acta de la sesión del 17 de Octubre de 1829*, pp. 261-262.

²³¹ El resto de designaciones de interinos durante el mandato del General Paz ni siquiera ingresan a la Sala de Representantes, sólo hay constancia de una comunicación anunciando su regreso de la campaña en julio de 1830 y su reasunción del mando “á virtud de haber desaparecido las circunstancias que motivaron su delegación” en el Coronel Julián Martínez. AHDCD, Tomo III, *Acta de la sesión del 21 de julio de 1830*, pp. 331-332.

delegaciones del cargo de Gobernador en otros individuos que lo ejercieron interinamente, al punto que él se encontró ejerciendo efectivamente su puesto apenas dieciocho de aquellos cuarenta y ocho meses²³². Esos nombramientos fueron todos realizados sin observar el procedimiento previsto por la Constitución, aunque no por ello al margen de la legalidad. El 31 de agosto de 1831 el Congreso Provincial aprobó por unanimidad un proyecto de decreto autorizando durante cuatro meses al Poder Ejecutivo con todas las facultades extraordinarias y nombrando una comisión en reemplazo de la Sala por el mismo período²³³.

Dentro de las muchas atribuciones que una decisión de este tipo ponía en cabeza del Gobernador estaba también la de nombrar interinamente sustitutos, facultad que correspondía según el Reglamento Provisorio al Congreso. En uso de ella, Reynafé había designado a su Ministro de Gobierno, Calixto María González, sin siquiera dar noticia a la comisión que había remplazado a la Sala. Pero una vez caducado el plazo previsto de la concesión hecha al Gobernador, el 2 de enero de 1832, uno de los miembros de la comisión aludida planteó la cuestión de si caducada la autorización de facultades extraordinarias, había también caducado el nombramiento del interino efectuado en ejercicio de esas facultades. Luego de un sencillo debate, el acuerdo fue por la afirmativa y se decidió volver a nombrar –esta vez por la comisión– al mismo Calixto M. González para que continuara interinamente al mando de la Provincia²³⁴.

La nueva sanción fue objetada por el propio González argumentando con buena lógica que si había caducado el plazo de cuatro meses durante el cual estaba facultado extraordinariamente el Ejecutivo, había caducado ipso facto también la autoridad de la comisión que había sido erigida por el mismo plazo y precisamente por haberse concedido las facultades; por lo tanto, el procedimiento de su continuación en el cargo realizado por ella era ilegal²³⁵. La solución de este enfrentamiento de posiciones no llegó rápidamente y el asunto descansó entre los negocios pendientes de la Sala hasta el día 18 de mayo de 1832. Entretanto, la comisión remplazante cesó en sus funciones, se reinstaló la Sala de Representantes –20 de enero– y el Ministro de Gobierno Calixto M. González continuó ejerciendo interinamente el puesto de Gobernador de la Provincia.

A pesar de la gravedad institucional de esta cuestión, la resolución definitiva de la controversia llegó casi cuatro meses y medio más tarde de la mano de una reforma constitucional. El 29 de febrero de 1832 se había planteado ante la Sala la necesidad de imprimir varias copias del Reglamento Provisorio para circularlo fundamentalmente entre los tribunales de la Provincia; con este fin, se formó una comisión de estudio de las reformas, supresiones y derogaciones que había sufrido el texto hasta esa fecha, con

²³² Cfr. LOBOS, H. (2011) *Historia de Córdoba*, Tomo IV: La Provincia Autónoma, Ediciones del Copista, Córdoba, p. 143.

²³³ El análisis de los casos en los que el Congreso Provincial autorizó a los distintos Gobernadores cordobeses a ejercer su cargo con facultades extraordinarias se realiza en otro apartado de este Capítulo: “I. 1. La dimensión extraordinaria: Constitución y poder político”.

²³⁴ AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 4 de enero de 1832*, pp. 87-89.

²³⁵ AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 11 de enero de 1832*, pp. 90-91.

facultades también para proponer nuevas reformas²³⁶. Fue, precisamente, en este contexto de rescritura de la Constitución que un grupo de representantes mocionó para que se tomara en consideración el artículo 11º del Capítulo XIV del Reglamento puesto que en varias oportunidades había sido objeto de discusión. Habiéndose cuestionado “pública y privadamente ser atribución exclusiva de la Honorable Corporación el nombrar el interino en ausencia del Sr. Gobernador propietario”, era altamente conveniente que la Sala se pronunciara al respecto para aclarar el sentido del “artículo de un modo expreso y terminante para lo sucesivo”²³⁷. En la sesión siguiente, luego de un breve debate sobre la inteligencia de la disposición constitucional, se sancionó por unanimidad la reforma del artículo en los siguientes términos: “En los casos de ausencia del Gobernador fuera de la Provincia o de otro legítimo impedimento que le embarace el ejercicio de sus funciones, el Congreso proveerá el interino”²³⁸.

Si se recuerda la redacción original de la norma, se puede apreciar que la modificación giró en torno al primero de los dos supuestos de hecho contemplados. Allí donde decía “en los casos de ausencia del *Gobernador de la República en defensa del Estado*”, pasó a decir “en los casos de ausencia del Gobernador fuera de la Provincia”. Con esta nueva redacción se podían encontrar resueltas en la norma una serie de situaciones concretas que antes habían sido motivo de arduas discusiones como, por ejemplo, la salida del Jefe del Ejecutivo por cuestiones ajenas a la defensa del Estado provincial –sí correspondería al Congreso nombrar un interino–, la salida del Gobernador de la ciudad hacia la campaña pero no abandonando la jurisdicción de la Provincia –no correspondería al Congreso–, y la autorización implícita para que en este último caso el propio Gobernador titular pudiera delegar el mando en otro sujeto. En definitiva, la reforma de la Constitución no era más que una adecuación de su texto a la práctica política desarrollada por los poderes Ejecutivo y Legislativo –por acción o por omisión– en los once años anteriores. Una vez autorizados por el Reglamento Provisorio, los Gobernadores que siguieron pudieron nombrar interinos sin necesidad de someter su decisión a la voluntad del Congreso Provincial. Así lo hizo Reynafé en 1832, delegando nuevamente el mando en Calixto M. González, en 1834 cuando designó sucesivamente a su hermano José Antonio Reynafé y Benito Otero, y en el año 1835 nombrando interinamente al Ministro Aguirre²³⁹.

El ejercicio de esta facultad por parte del Gobernador fue consolidándose como atribución propia del Ejecutivo e incluso extendiéndose a otros casos, unos no amparados por la norma, otros regulados como supuestos de hecho en los cuales era competencia del Congreso Provincial realizar el nombramiento. El Gobernador Manuel López en los años 1840, 1841, 1842 delegó por sí el mando de la Provincia en el Ministro Claudio

²³⁶ AHDCD, Tomo IV, *Acta de la sesión del 29 de febrero de 1832*, pp. 113-116. Este proceso de estudio y reformas al texto constitucional cordobés para su publicación oficial es analizado el siguiente Capítulo: “IV. Reescrituras de la Constitución y Nuevas Constituciones ¿Renovación Constitucional?”

²³⁷ AHDCD, Tomo IV, *Acta de la sesión del 15 de mayo de 1832*, p. 146.

²³⁸ AHDCD, Tomo IV, *Acta de la sesión del 18 de mayo de 1832*, pp. 148-149.

²³⁹ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 245.

Arredondo y en Norberto Zavalía, y en 1844 lo hizo en Calixto M. González²⁴⁰. Una nueva adaptación de la norma a la práctica tendría lugar unos años más tarde, durante el gobierno de López, con motivo de la sanción de la nueva Constitución cordobesa en el año 1847. En este documento el artículo referido al asunto ni siquiera mencionaba al cuerpo representativo de la Provincia: “En los casos de ausencia del Gobernador fuera de la Provincia ó de otro legítimo impedimento que le embarace el ejercicio de sus funciones, delegará el mando en la persona que fuere de su confianza”²⁴¹.

IV. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UNA FUNCIÓN, VARIOS PODERES

IV. 1. Una larga transición hacia la consolidación de un poder del estado

Si se echa un rápido vistazo a las disposiciones de la Constitución cordobesa en materia de administración de justicia es posible prefigurar, *a priori*, un diseño institucional con caracteres modernos e ilustrados. Como se ha visto, esa fue la impresión de varios autores, principalmente publicistas, que tangencialmente analizaron el aparato judicial establecido por los constituyentes de 1821. Sin embargo, una lectura global y más densa del texto, como la que se ha propuesto en este trabajo, contribuye a matizar aquel tipo de afirmaciones y obliga a pensar nuevamente la propuesta del Reglamento Provisorio²⁴². Pero si la imagen del aparato judicial se complejiza con el análisis crítico y pormenorizado de las formulaciones normativas, el recorrido por los años que siguieron a su sanción y la puesta en planta de tales instituciones objeta aún más la idea del advenimiento de una nueva concepción sobre la administración de justicia²⁴³.

²⁴⁰ Ídem.

²⁴¹ *Código Constitucional Provisorio*, SECC. VI, CAP. XIV, ART. 10º.

²⁴² Para un recorrido por esta propuesta diferente y sus conclusiones, ver en este mismo trabajo el Capítulo: “II. 1821: Ingeniería Constitucional Cordobesa?”.

²⁴³ TAU ANZOÁTEGUI propone una imagen de tensión entre un diseño normativo de carácter ilustrado y unas prácticas judiciales de corte tradicional para explicar el carácter de la administración de justicia durante el período que aquí se aborda. Afirma el autor que “en el siglo XIX surgieron varios factores que tendían a recortar la extensión” de la antigua concepción de justicia. De este modo, dogmas decimonónicos como la “separación de la moral y la religión del derecho; el triunfo de las concepciones individualistas; la aceptación del régimen político de la división de poderes; y el absolutismo de la ley, contribuyeron... a aminorar sustancialmente aquel antiguo concepto”, sin embargo –reconoce más adelante–, “la ‘nueva justicia’ no se impuso espectacularmente”. En el plano teórico, “dentro del nuevo esquema racionalista, la administración de justicia alcanzó la categoría de un poder independiente de los otros dos”. Sin embargo, esta concepción difundida y presente en el plano de la retórica constitucional, resultaba “notablemente amenguada en la praxis, en donde convergían seguramente las influencias de las nuevas ideas y el peso de la tradicional organización española”, TAU ANZOÁTEGUI, V. (1973) “La administración de justicia en las provincias argentinas (1820-1853)”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 1, pp. 205-249, pp. 211-216. Desde hace unos años se ha desarrollado toda una línea de investigación sobre historia de la justicia en el Río de la Plata, entre ellos, FRADKIN, R. (comp.) (2007) *El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del estado en el Buenos Aires rural, 1780-1830*, Prometeo Libros, Buenos Aires; (comp.) (2009a) *La ley es tela de araña. Ley, justicia y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830*, Prometeo Libros, Buenos Aires. En el marco de un proyecto de investigación sobre *La administración de la justicia en el área rioplatense: tribunales, jueces, criminales y justicias desde la colonia al periodo de la organización nacional (Siglos XVI-XIX)* dirigido por Darío BARRIERA, la compilación de trabajos reunidos en BARRIERA, D. (coomp.) (2009) *Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata. Siglos XVI-XIX*, Editum, Murcia, presenta una imagen global

Incluso antes de su sanción, la Asamblea con facultades constituyentes tomó la decisión de que el Gobernador siguiera entendiendo sobre los recursos de justicia hasta que se elaborara el Reglamento constitucional donde se arreglaría la formación del aparato judicial²⁴⁴. Apenas sancionado el texto, la comisión *ad hoc* para recibir consultas sobre el modo en que debía darse sentido a las prescripciones de la nueva Constitución decidió que, a fin de evitar “*el entorpecimiento en la administración de justicia*” debía omitirse “*el nombramiento de los conjueces, que en atribución del Poder Ejecutivo está declarado*” y resolvió que todo “*siguiere como hasta ahora, mientras la reunión de la Asamblea Provincial... lo decidía o arbitraba fondos para las dotaciones emanadas de aquel Reglamento*”²⁴⁵. Su postura venía a consolidar la opción ya hecha por los constituyentes cuando dispusieron que la administración de justicia seguiría “*los mismos principios, orden y método que hasta ahora...*”²⁴⁶.

La continuidad de un modelo tradicional de hacer justicia no sólo obturaba la posibilidad de que entraran en vigencia todas aquellas garantías proclamadas en el texto – más allá de los condicionamientos derivados del resto de disposiciones que en un mismo plano erosionaban la operatividad de tales garantías–, sino que también mantenía una concepción del orden y del poder político donde la justicia era la categoría basilar para comprender el ejercicio del gobierno²⁴⁷. El tradicional orden jurídico-político de la Monarquía Católica, que se había proyectado en América, “mantuvo siempre sus características definitorias y más sustanciales, [a saber] concepción jurisdiccional, composición pluralista y configuración jurisprudencial”²⁴⁸. A tal punto era central la

del asunto desde una perspectiva que asume el compromiso de analizar prácticas e instituciones desde el peculiar contexto cultural en el que se desarrollaron.

²⁴⁴ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 6 de noviembre de 1820*, pp. 51-52.

²⁴⁵ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de febrero de 1821*, p. 110.

²⁴⁶ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SÉPTIMA, CAP. XIX, ART. 1º. Otros textos constitucionales provinciales rioplatenses incluyeron disposiciones similares, por ejemplo, la Constitución de Salta y Jujuy del año 1821, en su artículo 14º establecía que “*La Administración de justicia seguirá los mismos principios, orden y método que hasta aquí...*”; el Estatuto Provisorio de Santa Fe del año 1819 contenía un artículo, el 34º, según el cual “*La Administración de Justicia continuará en lo sucesivo en el mismo orden que se ha guardado hasta el presente*”. La formulación es recogida de uno de los primeros ensayos constitucionales rioplatenses, el Reglamento Provisorio de 1817, Cap. III, Art. 1º.

²⁴⁷ “Si el orden (natural y social) es un dato originario, el poder no crea, ni constituye, sino que conserva y garantiza, y mantiene el equilibrio social ‘dando a cada uno lo suyo’. La justicia se convierte en función excluyente del poder político en la medida en que en ella se identifica la virtud que tiende ‘naturalmente’ a la conservación de equilibrios y proporciones preestablecidos. No se puede comprender este discurso de poder, ciertamente, si se olvida el carácter religioso de estas verdades [...] Cuando el poder humano entra en juego la sociedad ya está constituida y ordenada según unas reglas que alcanzan a toda la creación (...) ‘Justicia’ puede ser todo aquello que se ajusta a la precomprensión armónica de la creación que inculca la socialización católica”, AGÜERO, A. (2007b) “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en LORENTE, M. (coord.) *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Cuadernos de Derecho Judicial VI, CGPJ, Madrid, pp. 21-58, p. 30. Véase también GARRIGA, C. y LORENTE, M. (2007) Ob. cit.

²⁴⁸ Estas tres características implicaban, respectivamente, “(i) la consideración del derecho como un orden declarativo a partir de principios religiosamente indisponibles, (ii) casuísticamente concretados por la tradición forjada en cada espacio de convivencia políticamente organizada en distintos –pero igualmente válidos– conjuntos normativos, (iii) que sólo los *iurisprudentes* tenían –en su doble condición de tratadistas y de jueces o magistrados– el saber preciso para conciliar en cada *caso* hasta hallar la solución justa, o sea, ajustada a derecho”, GARRIGA, C. (2009) “Gobierno y justicia: el *gobierno de la justicia*”, en Lorente

noción de justicia que incluso la actividad que hoy se podría calificar como “materialmente administrativa... se desarrollaba esencialmente bajo la forma de una gestión judicial del poder... hasta el grado de que, en el lenguaje legal, la noción misma de *potestas publica* se expresaba a través del término *iurisdictio*”²⁴⁹. Este concepto designaba en aquel mundo la potestad para declarar el derecho y establecer la equidad, esto es, “tanto el poder público para resolver una controversia (declarando el derecho) como el de dictar preceptos generales a partir de aquel campo normativo trascendente (estableciendo la equidad)”²⁵⁰. Así las cosas, en línea de principio, “la persona pública, pues, que no tuviese el derecho de juzgar no tenía ni siquiera la capacidad de obligar a los súbditos a obedecer sus órdenes. Es decir, no era titular de ninguna porción de poder público en sentido jurídico”²⁵¹.

Siendo jurisdiccional la trama de aquella cultura jurídica que había regido por siglos en el orbe hispano, y que parecía seguir vigente en Córdoba, no resulta tan insólito que el nuevo cuerpo soberano –la Sala de Representantes– se encontrara en ocasiones juzgando, operando como un verdadero *argos* constitucional²⁵²; y mucho menos extraño que el Gobernador ejercitara funciones judiciales. En este sentido, cabe entender al siglo XIX como un período de transición²⁵³. La supuesta distancia entre las prácticas políticas y el diseño teórico establecido por la Constitución, puesto varias veces de manifiesto por la historiografía, se matiza y encuentra en este enfoque una explicación alternativa a la tradicional idea de confusión de poderes y desprecio por la ley de los actores políticos

(coord.) *La jurisdicción contencioso-administrativa en España. Una historia de sus orígenes*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 45-113, p. 49. La tradición jurídica se trasladó desde la Península a toda América, incluido Brasil, como demuestran GARRIGA, C. y SLEMIAN, A. (2013) “Em trajes brasileiros: justiça e constituição na América Ibérica (c. 1750-1850)”, en *Revista de História*, São Paulo, Nro. 169, pp. 181-221; también HESPANHA, A. (2005) *Direito luso-brasileiro no Antigo Regime*, Fundação Boiteux, Florianópolis.

²⁴⁹ MANNORI, L. (2007) “Justicia y Administración entre antiguo y nuevo régimen”, en *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, Nro. 15, Dykinson, pp. 125-146, pp. 131-132. Reflexionando sobre este mismo punto, GARRIGA ha aclarado que “por supuesto que lo judicial y lo gubernativo eran cosas distintas (o por mejor decir, distinguibles), pero al mismo tiempo inseparables, porque nunca llegó a ser posible enunciar “el gobierno” de “la justicia”. Rectamente entendida, la recurrente expresión “gobierno de la justicia” sirve por ello mejor que cualquier otra para designar el modelo judicial de gobierno resultante de estas concepciones: un modelo de gobierno mediante la justicia”, GARRIGA, C. (2009) Ob. cit., p. 51.

²⁵⁰ En esta línea de principio, “La sentencia (*quasi particularis lex*) y la *lex* (la costumbre, el estatuto, la ordenanza, etc.) son actos de jurisdicción y como tales su virtud normativa consiste en reflejar, en un contexto específico, algún aspecto del orden trascendente”, AGÜERO, A. (2007b) Ob. cit., p. 31. La literatura sobre el concepto de *iurisdictio* como la clave de comprensión del poder político en el mundo precontemporáneo –como el castellano e indiano hasta bien entrado el Siglo XIX–, es profusa. Para comprender su importancia pueden consultarse los trabajos de COSTA, P. (2002) Ob. cit.; VALLEJO, J. (1992) *Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1250-1350)*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid; y HESPANHA, A. (1993b) “Representación dogmática y proyectos de poder”, en ídem, *La gracia del derecho: Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 61-84.

²⁵¹ MANNORI, L. (2007) Ob. cit., pp. 134-135.

²⁵² La elocuente expresión está en GARRIGA, C. y SLEMIAN, A. (2013) Ob. cit., p. 204.

²⁵³ El período 1820-1853, objeto de esta investigación, ha sido calificado por TAU ANZOÁTEGUI como un espacio de tiempo caracterizado por “la co-existencia de la tradicional justicia castellana-indiana y las nuevas teorías, todo en un peculiar clima político”, TAU ANZOÁTEGUI, V (1973) Ob. cit., p. 207.

locales²⁵⁴. Ni el diseño institucional era tan radicalmente ilustrado como se ha pensado, ni la praxis fue tan incompatible según la cultura desde la que aquellas formulaciones se leían y dotaban de sentido. En 1820, la Soberana Asamblea cordobesa decidió que fuera el Gobernador quien siguiera entendiendo sobre los recursos de justicia hasta que se sancionara el Reglamento Constitucional donde se arreglaría la formación del aparato judicial²⁵⁵. Esta práctica no se limitó después de 1821 ya que, con motivo del finiquito de las cuentas pendientes del Ministerio de Hacienda, la Sala envió a Bustos un oficio donde volvía a reconocer la facultad judicial del Ejecutivo en los siguientes términos: “Existiendo por ahora el Poder Judicial unido á las atribuciones de V.E. ha tenido á bien la Sala... acordar pasen á V.E. las cuentas pendientes del Ministerio de Hacienda para su finiquito...”²⁵⁶.

De acuerdo con la tradición jurídica, para gobernar era preciso estar dotado de jurisdicción, y el cuerpo representativo soberano no podía dejar de ostentar esta potestad. La misma Sala que se encontraba discutiendo y sancionando la primera Constitución para la Provincia no detuvo su vocación de administrar justicia en asuntos que se presentaban como sensibles alteraciones al orden político. Al tiempo que juzgaba a los reos Mota y Moyano por supuesto crimen de traición, condenaba a Eduardo Bulnes por “*calumniador criminal y digno del más serio castigo*” ordenando a una comisión especial compuesta por miembros de la propia Sala determinar sobre “*el modo y forma de su ejecución*”²⁵⁷. Días después, ya integrada como Congreso Provincial, uno de sus primeros actos fue el de ordenar a una comisión nombrada de su seno el juzgamiento del comandante Colodrero “*á virtud de su manifiesta inobediencia*”²⁵⁸. En el primero de estos casos el Gobernador intercedió ante la Sala suplicando se sobreseyera la causa del reo Mota y se lo pusiera inmediatamente en libertad y, “*después de una detenida consideración, accedió la Comisión á la generosidad recomendable del señor Gobernador, ordenando la libertad, no sólo del doctor Don Francisco Mota, sino también la de Don José María Moyano*” y sobreseer además la causa²⁵⁹.

²⁵⁴ La idea de una radical tensión se basa en la premisa de una ruptura en el paradigma político rioplatense a partir de 1810 y el comienzo de una nueva etapa, “esta peligrosa confusión de poderes –que Bustos ejerce con prudencia– sólo se explica como resabio de una época que, aunque pasada desde el 25 de mayo de 1810, está todavía muy cerca [...] la larga herencia colonial suele traicionar al sano principio de división de poderes –tal como se entiende en el siglo XIX– introducido por una revolución que aún no cuenta con dos décadas de existencia”, SEGRETÍ (1970) Ob. cit., pp. 156 y 195. En el caso cordobés, según ROMANO, “El Reglamento de 1821 estableció el sistema republicano de gobierno declarando expresamente la independencia del poder judicial del poder ejecutivo, aunque en la práctica esto no se cumplió o fue irregular... estuvo subordinado al poder político”, ROMANO, S. (2004) “Instituciones coloniales en contextos republicanos: los jueces de la campaña cordobesa en las primeras décadas del siglo XIX y la construcción del estado provincial autónomo”, en HERRERO, F. (comp.), *Revolución. Política e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810*, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, pp. 167-200, p. 184. Sin embargo, como se ha visto, la ruptura tampoco llegó con la sanción de la constitución.

²⁵⁵ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 6 de noviembre de 1820*, pp. 51-52.

²⁵⁶ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 27 de octubre de 1821*, pp. 176.

²⁵⁷ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 5 de febrero de 1821*, pp. 96-97.

²⁵⁸ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 14 de abril de 1821*, pp. 125-126.

²⁵⁹ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 5 de marzo de 1821*, p. 115.

La existencia de autoridades políticas con atribuciones en administración de justicia durante este período no fue una particularidad del territorio cordobés sino de todo el orbe hispano, e incluso los territorios en los que se había instalado la cultura del derecho común²⁶⁰. Ampliando un poco las coordenadas locales, se puede observar que también en el resto de las provincias rioplatenses “la gravitación institucional del gobernador era muy intensa”²⁶¹. En Tucumán, hacia el año 1823 la legislatura autorizó al Gobernador “para conocer provisionalmente en los asuntos civiles y criminales en el grado de apelación, y con el auxilio de un letrado responsable”²⁶². Pese a la sanción de reiteradas disposiciones en los años que siguieron, en 1827 la Sala tucumana dispuso que el Gobernador resolviera una queja de un particular contra presuntas arbitrariedades del Juzgado de Alzada, atribuyéndose de ese modo facultades para administrar justicia²⁶³. En el diseño constitucional salteño de 1821 “no existía separación de poderes y más bien el régimen creado, enraizado en la tradición de justicia española, estaba caracterizado por el control recíproco entre la legislatura y el gobernador, ahogando todo intento de independencia judicial”²⁶⁴. El caso santafecino es aún más radical; el Estatuto Provisorio de 1819 enumeraba entre las facultades del gobierno la de “revocar las sentencias de pena capital” y “sentenciar, revocar ó confirmar en apelación, todas las causas civiles y criminales, á escepcion de aquellas que son de su privativo conocimiento”²⁶⁵.

Luego de la breve experiencia del funcionamiento de la Cámara de Apelaciones que preveía el Reglamento Provisorio –cuya historia se analizará en el punto siguiente–, un decreto del propio Gobernador cordobés estableció normativamente la atribución del titular del Ejecutivo para conocer en las apelaciones de los fallos del Juzgado de Alzada²⁶⁶. A partir de la década del '30, en los gobiernos que siguieron al de Juan Bautista Bustos el escenario hasta aquí descrito no sufrió mayores cambios y las reformas no se produjeron en el prescriptivo nivel de las formulaciones normativas, ni en el factual

²⁶⁰ Véase MANNORI, L. (2007) Ob. cit.

²⁶¹ TAU ANZOÁTEGUI (1973) Ob. cit., pp. 221.

²⁶² Ídem, p. 222.

²⁶³ Para el análisis de la transición del período colonial a la construcción del Estado provincial en el caso tucumano pueden consultarse los trabajos de la historiadora tucumana Gabriela TÍO VALLEJO, más recientemente, la compilación de artículos de distintos autores que ella coordina: TÍO VALLEJO, G. (comp.) (2011) *La república extraordinaria. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX*, Prohistoria, Rosario. En lo que a administración de justicia se refiere, (2010) “Papel y grillos, los jueces y el gobierno en Tucumán, 1820-1840”, en *Nuevo mundo, nuevos mundos*, Nro. 10; (2008) “La administración de justicia y la experiencia de las autonomías provinciales en el Río de la Plata. El caso de Tucumán”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 36, pp. 365-398.

²⁶⁴ TAU ANZOÁTEGUI (1973) Ob. cit., p. 225.

²⁶⁵ Art. 29 del Estatuto Provisorio de Santa Fe de 1819. El Art. 38, sobre administración de justicia, reiteraba la misma facultad “*Las causas de cualquier calidad que sean, deben establecerse antes los jueces á que correspondan, llevándose solo por apelación, ante el Gobernador, en los casos que pueda concederse*”. Años más tarde, la Constitución de la Provincia que en 1841 vino a reemplazar al Estatuto, mantenía la potestad en cabeza del titular del Ejecutivo “*El Gobernador de la provincia, por ahora, conocerá en grado de apelación de las sentencias definitivas ó interlocutorias que presentan gravamen irreparable, expedidas por el Juzgado de 1ª Instancia y de Comercio, debiendo pronunciarse con dictamen letrado*” –Art. 58–. Ambos textos constitucionales santafecinos pueden consultarse en SAN MARTINO DE DROMI, M. (1994) Ob. cit.

²⁶⁶ *Compilación de leyes...* cit., p. 72.

plano de la praxis de los actores políticos. Sin embargo, fue un lugar común que cada nuevo Gobernador que asumía el mando hiciera un juicio de valor negativo de la situación heredada, condenando enérgicamente la labor de su predecesor.

En su mensaje al Congreso Provincial en 1831, José Roque Funes reconocía que *“la administración de justicia, este importante ramo, que yacía olvidado há recibido el influjo del gobierno mejorandose en lo posible, y adquiriendo una existencia real; reclama, sin embargo, mejoras considerables, y el más pronto restablecimiento de la suprema cámara para separar del gobierno estas importantes atribuciones, que por su esencia, y su influjo constituyen un poder aparte, é independiente... así lo exige la salud publica”*²⁶⁷. Tres años después, José Antonio Reynafé volvía a plantear la misma imagen aseverando que *“ninguna alteración se ha hecho en la administración de justicia. Sigue las leyes establecidas para ella, hasta que Vuestra Honorabilidad tenga a bien reformar las que la experiencia ha demostrado, son incompatibles con la felicidad pública”*²⁶⁸. El último Gobernador del período, Manuel López, también retrató con horror el estado de la administración de justicia en la Provincia que había recibido: *“á cada hora se veían horrendos fallos en los tribunales: los derechos pisados por el mas vil interés, desoídos vergonzosamente los fundamentos de justicia, burlada y sacrificada la honradez, en triunfo la malicia, el soborno y la venganza, y autorizados los mas inauditos y escandalosos prevaricatos. Las relaciones de amistad eran las disposiciones legales que el capricho y la codicia buscaba para un buen resultado: la morosidad y tardanza que sufrían los asuntos mas egecutivos era un sistema de manifesto negocio: últimamente el estrado de justicia estaba reducido á teatro de pasiones é iniquidad”*²⁶⁹. La crítica tiene ecos que reflejan la vigencia del viejo paradigma de una justicia de jueces.

Otra de las características de la administración de justicia durante estos años, que suele ser apuntada como una debilidad del sistema retóricamente impuesto a partir de las nuevas leyes y textos constitucionales, es la existencia de dos tipos de justicia según un criterio institucional que pone el punto de mira en la persona del juez: la dicotomía entre justicia lega y letrada²⁷⁰. En las provincias rioplatenses, salvo Buenos Aires, un primer escollo era la escasez de letrados y la falta de fondos públicos para dotar las plazas judiciales; como consecuencia, la mayoría de ellas debieron conservar parcial o

²⁶⁷ Documento N°4, *Mensaje del Gobernador José Roque Funes, Córdoba, 4 de agosto de 1831*, en FERREYRA, A. (1980) Ob. cit., p. 33.

²⁶⁸ Documento N°5, *Mensaje del Gobernador José Antonio Reynafé, Córdoba, 25 de octubre de 1834*, en FERREYRA, A. (1980) Ob. cit., p. 48.

²⁶⁹ Documento N°6, *Mensaje del Gobernador Manuel López, Córdoba, 1° de mayo de 1837*, en FERREYRA, A. (1980) Ob. cit., p. 69.

²⁷⁰ Para una aproximación teórica a la cuestión de justicia lega y letrada pueden consultarse los trabajos de AGÜERO, A. (2011b) “El testimonio procesal y la administración de justicia penal en la periferia de la Monarquía Católica, Siglos XVII y XVIII”, en *Acta Histriae*, 19, 1-2, pp. 43-56; (2005) “Saber jurídico y técnica procesal en la justicia lega de la periferia. Reflexiones a partir de documentos judiciales de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII”, en *Actas del XV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Tomo I, Córdoba (España), pp. 313-332; y (2008) *Castigar y perdonar cuando conviene a la república. La justicia penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid. Además de la visión global del asunto, en ellos aborda también las particularidades del espacio político americano, más específicamente cordobés.

totalmente una justicia lega. En este sentido, para llenar las plazas de jueces de campaña, alcaldes ordinarios, miembros de las Cámaras de Apelaciones o Tribunales Superiores, y sobre todo, una justicia gremial como la mercantil, se buscaban “ciudadanos de luces, honradez, ilustración y probidad”; en consecuencia, la orientación que más se difundió y tuvo aplicación en las provincias argentinas fue la que yuxtaponía sujetos letrados con legos, “la del juez lego con asesoramiento letrado obligatorio; la del tribunal integrado con miembros legos y letrados; y la existencia alternada de instancias legas y letradas”²⁷¹.

En Córdoba, siempre debía tenerse en cuenta la precariedad del erario público y la escasez de recursos humanos profesionales, con lo cual, la ideación de estrategias para paliar este tipo de situaciones eran más corrientes de lo esperado. Según el Reglamento Provisorio, el máximo tribunal de justicia provincial estaría compuesto por cinco miembros “*de los cuales tres cuando menos serán abogados recibidos, y los restantes podrán elegirse entre los demás ciudadanos, aunque no revista esta calidad, con tal que sean de notoria providad y luces*” (ART. 4º, CAP. XVIII), y la ley según la cual, años más tarde acabó instalándose dicho tribunal, en agosto de 1826, volvía a recoger esta solución: “*Este Tribunal será compuesto por ahora, de tres individuos, de los que dos deberán ser abogados*”²⁷². La ley de extinción de los Cabildos de la Provincia de 1824 establecía que los Jueces de la ciudad debían ser letrados (Art. 2º) pero a renglón seguido reconocía una estrategia para el caso en que dicho precepto no pudiera cumplirse, y así, “*en defecto de Letrados expeditos se nombrarán ciudadanos de reconocida probidad para las judicaturas y defensorías á cuyo arbitrio estará la elección de Asesores*” (Art. 6º)²⁷³. Si esta era la estrategia para la ciudad, aún más radical era la situación en la zona rural y así lo preveía el *Reglamento para Administración de Justicia para la campaña del año 1823*, analizado *infra*, en el que pueden encontrarse buenos ejemplos de persistencia de las claves culturales tradicionales.

En el plano teórico, uno de los pilares de la administración de justicia decimonónica fue la decisión de confiar la aplicación del derecho en jueces letrados, vinculados a la ley, obligados a aplicarla sin apartarse de la misma con el correlativo deber de fundamentar las sentencias. Para que este movimiento fuera posible, era necesario que previamente se satisficiera la necesidad de “reformular el antiguo ordenamiento legislativo y sustituirlo por los códigos racionalistas”²⁷⁴. Sin embargo, en un sistema en el que la noción de ley aún no había adquirido los caracteres de generalidad, abstracción y mucho menos la entidad de voluntad política hecha norma, donde la administración de justicia se desarrollaba por los cauces de un paradigma cultural tradicional en el que la idea de juez como boca de la ley resultaba imposible y los magistrados no estaban obligados a motivar sus decisiones, más importante que la erudición era la rectitud y honorabilidad de la persona encargada de juzgar. Como ha

²⁷¹ TAU ANZOÁTEGUI, V (1973) Ob. cit., p. 245.

²⁷² Art. 3º de la Ley de creación del Tribunal de Apelaciones, en AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 14 de agosto de 1826*, pp. 153-157.

²⁷³ *Compilación de leyes...* cit., p. 23.

²⁷⁴ TAU ANZOÁTEGUI, V (1973) Ob. cit., p. 240.

explicado GARRIGA, “era insoslayable la adhesión al orden y el compromiso con la justicia, que los juristas expresaban de distintos modos y venía genéricamente formulado como *temor de Dios*”²⁷⁵. En ese contexto, resultaba lógico pensar que “ni siquiera la condición letrada se consideraba imprescindible, y no ciertamente por una cuestión de oportunidad, como era la obligación que tenían los jueces legos (fueran rústicos o militares, de ‘capa y espada’) de actuar con asesoramiento letrado, sino por la muy sustancial razón de que era en la *conciencia* –y no en la *ciencia*– donde se hacía radicar el conjunto de dispositivos que inclinaban a –y permitían administrar rectamente– la justicia (asociada como estaba a los órdenes trascendentes de la *aequitas* y el *ius naturale*, alimentados por la religión)”²⁷⁶. Siendo así, las garantías de los justiciables dependían menos de la condición letrada de los magistrados que de su comportamiento modélico, virtuoso, *perfectus*²⁷⁷.

IV. 2. La inestable formación del Tribunal de Apelaciones

Como ya se ha visto en el capítulo precedente, el Reglamento Provisorio de 1821 disponía la creación de un máximo tribunal de justicia que, con el nombre de Tribunal de Apelaciones, tendría competencia para conocer en todas las causas que antes de la independencia estaban reservadas a la Audiencia; decidiría sobre los recursos de nulidad e injusticia notoria, resolvería las cuestiones de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la mercantil, y ejercería la superintendencia del Poder Judicial eligiendo sus autoridades y oficiales, controlando la labor de los demás jueces inferiores, y dictando el reglamento interno para arreglar el ejercicio de sus funciones²⁷⁸. En sintonía con aquella característica de coexistencia lega y letrada en los tribunales, el de Apelaciones estaría

²⁷⁵ GARRIGA, C. (2007c) “*Justicia animada: Dispositivos de la justicia en la Monarquía Católica*”, en LORENTE, M. (coord.) *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Cuadernos de Derecho Judicial VI, CGPJ, Madrid, pp. 61-104, p. 83. Una lealtad que, como ha demostrado MARTÍNEZ, en el siglo XIX se transformaría en adhesión a la causa política o a la Constitución, véase la obra de MARTÍNEZ PÉREZ, F. (1999) *Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo español (1810-1823)*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

²⁷⁶ GARRIGA, C. (2007c) Ob. cit., p. 83. También en GARRIGA, C. y SLEMIAN, A. (2013) Ob. cit.

²⁷⁷ El *iudex perfectus* hace referencia a “un *modelo* de juez, que se impone a quien tiene la responsabilidad del gobierno de la justicia e impregna de principio a fin el régimen del oficio, el oficio de juez, que da sentido –en sentido literal– al entero entramado de la justicia (...) De ahí que la comprensión del magistrado en estos términos virtuosos sea la clave cultural para comprender los dispositivos de la justicia”, ídem, p. 85. Sobre la noción de *iudex perfectus* en la literatura iushistoriográfica véase, entre otros, VALLEJO, J. (1998) “Acerca del fruto del árbol de los jueces. Escenarios de la justicia en la cultura del *Ius Commune*”, en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, Nro. 2, *La Justicia en el Derecho Privado y en el Derecho Público*, UAM, Madrid. Para la experiencia hispanoamericana puede consultarse el trabajo de MARTIRÉ, E. (2009) *La Audiencia y la administración de justicia en las Indias: del iudex perfectus al iudex solutus*, Perrot, Buenos Aires; también GARRIGA, C. (2006) “Sobre el gobierno de la justicia en Indias”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 34, pp. 67-160.

²⁷⁸ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SÉPTIMA, CAP. XVIII, ARTS. 4º a 24º.

compuesto por cinco individuos, tres al menos abogados, elegidos por el Gobernador para un período indeterminado, mientras durara “*su buena comportación*”²⁷⁹.

Como también se dijo, la comisión encargada de evacuar dudas sobre la interpretación del texto decidió que el aparato institucional de justicia siguiera del mismo modo que antes de la promulgación del documento “*mientras la reunión de la Asamblea Provincial... lo decidía ó arbitraba fondos para las dotaciones emanadas de aquel Reglamento*”²⁸⁰. Esta postergación transitoria se extendió más de lo previsto. Sin mucho éxito, cuatro años más tarde, se llamó la atención sobre la necesidad de crear el Alto Tribunal de Justicia que establecía la Constitución provincial²⁸¹, pero no fue sino hasta agosto del año 1826 que el Congreso Provincial designó una comisión especial para el diseño y presentación de un proyecto de creación de la Cámara de Apelaciones²⁸². La decisión política estaba tomada y en apenas dos días se presentó, discutió y sancionó el proyecto con la mayoría agravada correspondiente debido a la reforma parcial del Reglamento constitucional que aparejaba²⁸³.

La ley de creación erigía el “*Tribunal Mayor de Justicia ó de Apelaciones*” al que debían remitirse todas las causas civiles y criminales (Art. 1º), eximiendo en adelante de ese encargo al Poder Ejecutivo provincial (Art. 2º). La falta de recursos, tanto económicos como humanos, llevó a los legisladores a disminuir el número de jueces que lo integrarían –tres en lugar de cinco–, para lo cual se derogó la disposición respectiva del Reglamento Provisorio, conservando no obstante la posibilidad de integrar el Tribunal con un porcentaje de magistrados legos –al menos uno de los tres– nombrados todos ellos por el Gobernador (Arts. 3º, 4º y 5º). Finalmente se ordenaba el nombramiento de un Fiscal y un Relator, profesionales de derecho, para que sirvieran al Tribunal en sus funciones (Art. 6º). Una vez integrado, el propio Tribunal debía ofrecer una razón circunstanciada de las plazas subalternas que considerara necesarias junto a un presupuesto de gastos (Art. 8º)²⁸⁴.

En la misma sesión en que se aprobó la ley de su creación también se discutió un proyecto que determinaba el modo en que se arbitrarían recursos económicos para su funcionamiento. La penuria económica de la Provincia volvía a hacerse presente en las discusiones sobre este asunto y el proyecto fue un claro ejemplo de cómo la opción más viable para destinar medios a una repartición no consistía en ampliar el gasto público sino

²⁷⁹ Ídem, Arts. 4º, 9º y 10º.

²⁸⁰ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 26 de febrero de 1821*, p. 110.

²⁸¹ La moción es del representante Estanislao Learte. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 19 de abril de 1825*, p. 318.

²⁸² Resultaron designados para integrar la comisión los representantes Bustos, Bulnes y Bravo. AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 12 de agosto de 1826*, pp. 147-148.

²⁸³ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 14 de agosto de 1826*, pp. 153-157. Según la Constitución de la Provincia, “*Ningún asunto constitucional quedará sancionado sin la concurrencia de dos tercias partes de sufragios...*” (CAP. XII, ART. 2º). Como el proyecto presentado reducía de cinco a tres los miembros del Tribunal de Apelaciones fue necesario reunir esa mayoría agravada.

²⁸⁴ *Compilación de leyes...* cit., pp. 33-34.

en recortar otras partidas presupuestarias, redistribuyendo los escasos recursos²⁸⁵. En este sentido, se propuso y aprobó disminuir los sueldos del Secretario de Gobierno y los Alcaldes Ordinarios, y extinguir tanto el sueldo del Provisor eclesiástico como una pensión anual por razón de Montepío a cargo del Estado²⁸⁶. Sin embargo, una petición elevada por el Alcalde Ordinario Prudencio Palacios motivó la derogación del artículo correspondiente²⁸⁷. Pese a esta declaración de falta de recursos económicos, el Ejecutivo solicitó al Congreso que, para evitar la *“enormidad de los inconvenientes y males que sufrirá el despacho público en la administración de Justicia, si ésta hubiera de expedirse por el reducido número de tres”*, y para no violentar la voluntad de los constituyentes, se modificara la integración del recién creado Tribunal de Apelaciones; el pedido fue aceptado, volviéndose al número originario de cinco miembros previsto por el Reglamento Provisorio²⁸⁸.

El 25 de octubre de 1826 Bustos designó a los primeros cinco miembros de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, *“el Presidente del Tribunal Dr. D. José Dámaso Jigena, y los demás camaristas siguientes: D. Juan Prudencio Palacios, Dr. D. José A. Ortiz, Dr. D. José Roque Funes, Dr. D. Francisco Ignacio Bustos, y el Fiscal Licenciado Gerónimo Salguero”*²⁸⁹. A partir de este momento –en palabras del propio Gobernador– debía cambiar el modo en que se administraba justicia en la Provincia: *“los interesados en los negocios contenciosos que se hallaban pendientes ante este Gobierno por la Comisión con que estaba del despacho del ramo de Justicia, deberán recurrir á este Superior Tribunal de Apelaciones para la prosecución de aquellos, como cualquiera otro comprovinciano que tenga que introducir en lo sucesivo cualquier recurso que respecta á aquel ramo no siendo contra persona aforada”*²⁹⁰. Con cierta prisa, *“para que no se retarde la plantificación de dicho Superior Tribunal y pueda por consiguiente proceder a expedirse en sus recomendables funciones, se señala el día de mañana a las cinco de la tarde... para poner en posesión de sus empleos a los Camaristas”*²⁹¹.

Apenas instalada, la Cámara de Apelaciones comenzó a evaluar el contexto provincial para adoptar las medidas necesarias de cara a una correcta administración de justicia según las posibilidades del territorio. La Provincia carecía de abogados que ejercieran la práctica en el foro, por ello, una de las primeras medidas fue presentar una solicitud al Congreso Provincial para que se habilitara a los *“graduados en derecho, bajo la responsabilidad de abogados, para defender, y a los camaristas para continuar en la*

²⁸⁵ Resulta paradigmático en este sentido un extremo de la minuta de utensilios franqueada por la Sala para el funcionamiento de la Cámara de Apelaciones: *“Que la tinterera y mesa de la Sala, sirvan al Tribunal...”*, AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 20 de noviembre de 1826*, p. 190.

²⁸⁶ El sueldo del Secretario de Gobierno se reduce en mil pesos, pasando de dos mil a mil (Art. 1º), y los de cada uno de los dos Alcaldes Ordinarios se reducen en doscientos pesos, pasando de ochocientos a seiscientos cada uno (Art. 2º). AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 14 de agosto de 1826*, pp. 157-159.

²⁸⁷ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 3 de noviembre de 1826*, pp. 188-190.

²⁸⁸ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 5 de octubre de 1826*, pp. 177-178.

²⁸⁹ *Compilación de leyes...* cit., p. 27.

²⁹⁰ Ídem.

²⁹¹ Ídem.

defensa de las causas que han iniciado”²⁹². La petición, informada por el representante Gil, fue objeto de largas discusiones entre los miembros presentes hasta que finalmente se hizo lugar a ella, agregándose además, con fundamento en las mismas razones, el derecho a defensa en causa propia a todo ciudadano de la Provincia sin necesidad de presentación de escritos con firma de un letrado²⁹³. La declarada imparcialidad del Tribunal al momento de juzgar, característica insoslayable de la justicia, se salvaba obligando a los camaristas, cuando actuasen como abogados, a participar “*desde la banca de abogados*”²⁹⁴. La garantía para los justiciables debía buscarse en la virtud de los magistrados, en sintonía con la concepción tradicional sobre la justicia²⁹⁵.

Otra cuestión clave que revela la debilidad de la Cámara de Apelaciones en aquel contexto fue el infructuoso esfuerzo por sancionar un Reglamento de Administración de Justicia en la Provincia y el Reglamento para el régimen interior del Tribunal. El 20 de octubre de 1827 ingresaron a la Legislatura sendos proyectos sobre estos temas que habían sido elevados por la Cámara al Gobernador, y de inmediato se enviaron a otras tantas comisiones para su estudio y consideración. En la presentación del dictamen acerca del segundo de ellos se discutió enérgicamente sobre la competencia de la Sala para debatir y aprobar un cuerpo normativo relativo a la vida interna de la Cámara. Una de las posturas, con fundamento en la norma constitucional, defendía la autonomía del Tribunal, su potestad de *iurisdictio*, en virtud de la cual “*no necesitaba de solemnidades para formar leyes reglamentarias*”²⁹⁶. Sin embargo, los representantes de la mayoría

²⁹² AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 17 de noviembre de 1826*, pp. 192-193. Cabe recordar la petición en igual sentido hecha en 1814 al Gobierno Central, patrocinada por el Gobernador Ortiz de Ocampo, para que se autorizara a una lista de Doctores a ejercer como abogados debido a la escasez de este tipo de profesionales en la ciudad, Cfr. CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 271.

²⁹³ AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 20 de noviembre de 1826*, pp. 197-198. Defensa propia y habilitaciones para ejercer como abogado fueron dos constantes a lo largo del período. En octubre de 1833 la Sala sancionó una ley facultando al Poder Ejecutivo “*para que pueda habilitar á los graduados en derecho civil, en el ejercicio de Abogado*”, *Compilación de leyes...* cit., p. 114. En 1835 reconoció “*en su valor y fuerza*” la ley del 20 de noviembre de 1826 que autorizaba a todo ciudadano a defenderse en causa propia sin necesidad de firma de letrado, *Compilación de leyes...* cit., pp. 133-134. Casi diez años más tarde, el 7 de junio de 1844, el Congreso Provincial se entregó al estudio de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo según el cual solicitaba se reconsiderara la sanción de aquella ley de diciembre de 1835. Uno de los representantes miembros de la comisión encargada de dictaminar sobre el asunto “*patentizó los inconvenientes que traía tal ley y males que eran consiguientes y los bienes que se reportaban los litigantes de presentarse con la firma de Letrado*”, AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 7 de junio de 1844*, p. 186. Sus observaciones fueron secundadas por el resto de diputados y el proyecto finalmente aprobado dejó sin efecto la disposición que había sido observada por el gobierno: “*Art. 1º- Queda sin efecto, valor ni fuerza alguna la Sanción de 16 de Diciembre del año 1835*”, *Compilación de leyes...* cit., p. 176.

²⁹⁴ *Compilación de leyes...* cit., pp. 37-38.

²⁹⁵ Sobre la posición de los jueces y las características a ellos exigidas en el período de transición debe consultarse la obra de MARTÍNEZ PÉREZ, F. (1999) Ob. cit.; sobre cómo ese proceso de construcción del papel del juez se extendió a lo largo de gran parte del Siglo XIX, véase la obra de SOLLÁ SASTRE, J. (2011) *La discreta práctica de la disciplina. La construcción de las categorías de la responsabilidad judicial en España, 1834-1870*, Congreso de los Diputados (Colección monografías, 83), Madrid.

²⁹⁶ AHDCDC, Tomo III, *Acta de la sesión del 9 de mayo de 1828*, p. 31-35. El respaldo normativo de esta postura era el Art. 7º del Cap. XVIII del Reglamento Provisorio cordobés, según el cual “*El Presidente llevará la voz, cuidará de la Policía, y del despacho, formándose previamente el mismo tribunal el reglamento a que debe arreglar el ejercicio de sus funciones*”. A pesar de la norma, es posible pensar que “la asimilación del patrón constitucional relativo a la división de poderes y su consecuente discriminación

decidieron aprobar el Reglamento en general y difirieron su discusión en particular hasta la sesión del 2 de junio en la que se aprobó y devolvió a la Cámara de Apelaciones²⁹⁷. Uno de los puntos previstos por el Reglamento era la atribución que el Tribunal se otorgaba a sí mismo para conocer en materia de disensos matrimoniales; esto provocó la férrea oposición del Gobernador que reclamó para sí ante el Congreso Provincial, tal como lo establecía el régimen impuesto por los Borbones a fines del XVIII²⁹⁸. La decisión final, en manos del cuerpo soberano, fue a favor del Ejecutivo quien conservó su competencia en la materia²⁹⁹.

El 30 de julio del mismo año se presentó el informe de la comisión de ley sobre el Reglamento de Justicia elevado por la Cámara. Si bien este proyecto para encauzar los procedimientos judiciales no llegó a sancionarse, durante el debate de su articulado fueron vertidas varias consideraciones respecto de la concepción que los representantes tenían acerca de la justicia y el orden jurídico que sirven para bosquejar el imaginario jurídico de la época. Una parte de los representantes se negaba a debatir un texto que –según su visión– no era más que un compendio de leyes preexistentes y, por lo tanto, ocioso. Frente a ellos, se contestó que *"la Sala de Justicia, por ley debía precisamente tener un Reglamento metodizado en la forma que se había presentado el actual, pues aunque se corroborasen leyes preexistentes debía sancionarse, lo mismo que había hecho con el Reglamento de Provincia, conteniendo todo él, puras leyes preexistentes"*³⁰⁰. Esta confesión de los legisladores acerca de la textura eminentemente tradicional del orden jurídico cordobés, y de los textos como reflejo de un orden previo, resulta paradigmática y ayuda a comprender, en este período de transición, el protagonismo de una cultura jurídica que durante siglos había estructurado la sociedad rioplatense; por ello mismo, condicionaba el potencial revolucionario de toda una serie de declaraciones de derechos y garantías que, interpretadas bajo su luz, decían bastante menos que en otros contextos culturales. Pese a la importancia del asunto, se decidió postergar su discusión y aprobación para dar prioridad a la revisión del –tan ansiado por la corporación de hacendados– Reglamento de administración de justicia para la campaña³⁰¹.

formal entre los productos normativos de cada poder, era todavía un esbozo de la novedosa demarcación teórica entre potestad legislativa y potestad reglamentaria", AGÜERO, A. (2011a) "Tradición jurídica y derecho local en época constitucional. El "Reglamento para la Administración de justicia y policía en la campaña" de Córdoba, 1856", en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 41, pp. 1-43, p. 9. Sobre la dimensión reglamentaria véase GARRIGA, C. (2007b) "Constitución, ley, reglamento: el nacimiento de la potestad reglamentaria en España (1810-1814, 1820-1823)" en GARRIGA, C. y LORENTE, M., *Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 169-258.

²⁹⁷ AHCDC, Tomo III, *Acta de la sesión del 2 de junio de 1828*, p. 37-38.

²⁹⁸ Véase VALLEJO, J. (2010) "Paradojas del sujeto", en GARRIGA, C. (Coord.) *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, Centro de Investigación y docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, México, pp. 173-199. Una interesante historia del derrotero de este asunto a lo largo del siglo XIX en VALLEJO, J. (2013) "Sujeito e Código na Espanha do século XIX: A "microscópica" Lei de Dissenso de 1862 e as dimensões do poder paterno", en MARTINS-COSTA, J. y BECK VARELA, L. (org.) *Código. Dimensão histórica e desafio contemporâneo. Estudos em homenagem ao Professor Paolo Grossi*, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, pp. 109-129.

²⁹⁹ AHCDC, Tomo III, *Acta de la sesión del 4 de noviembre de 1828*, p. 116-117.

³⁰⁰ AHCDC, Tomo III, *Acta de la sesión del 30 de julio de 1828*, p. 67-70.

³⁰¹ AHCDC, Tomo III, *Acta de la sesión del 23 de septiembre de 1828*, p. 92-93.

Estos primeros pasos de la Cámara de Apelaciones de la Provincia fueron tambaleantes. Más allá de las loas del primer tiempo, con un Gobernador que hacía alarde de sus conquistas en la materia desde “*la creación de la excelentísima cámara de justicia*”, la falta de apoyo político y el constante tironeo de poder entre las diferentes autoridades públicas provinciales terminó truncando la vida del Tribunal³⁰². La potestad pública de decir el derecho y establecer la equidad era la expresión del poder político y los criterios para su distribución entre los distintos actores provinciales estaban aún por definirse, más allá de las disposiciones del texto constitucional³⁰³. Nuevamente el condicionante económico impactó en el diseño institucional y, alegándose la escasez del erario público, se presentó en la Sala de Representantes una moción que solicitaba la suspensión de la Cámara de Apelaciones³⁰⁴. El asunto, que había pasado a la comisión de negocios constitucionales, quedó en suspenso y la decisión de la Comisión Permanente de otorgar al Gobernador de la Provincia la suma del poder público, en la sesión extraordinaria del 11 de diciembre del año 1828, lo tornó abstracto³⁰⁵. En virtud de dicha concentración del poder en manos del Ejecutivo, la Cámara de Apelaciones cesó en el ejercicio de sus funciones y ya no volvió a constituirse más en el resto del período que se analiza en este trabajo.

En los años que duró el gobierno de José María Paz nunca fue establecido el tribunal superior de justicia que preveía el Reglamento Provisorio y en los gobiernos de José Vicente Reynafé y Manuel López se instalaron fugazmente sin éxito un “Tribunal Provisorio” y un “Tribunal Superior de Justicia” de carácter también provisorio³⁰⁶. La

³⁰² En su mensaje a la Sala de Representantes, el Bustos hacía alarde de la organización judicial en los siguientes términos, “*la creación de la excelentísima Cámara de justicia que determinasteis en 14 de agosto de 1826, há correspondido señores á vuestras intenciones: la justicia precide sus actos; la madurez, y sabiduría, sus determinaciones, la prudencia, sus consejos, finalmente la vigilancia sobre todos los subalternos garantiza el orden público, así es que impulsados todos, mas por el exemplo, que por el rigor de las leyes, son hoy mas breves las sustanciaciones, y finalización de las causas, que lo que fueron en tiempos anteriores, á pesar de la complicacion del código legislativo español, que aun nos rige por desgracia, y de que es preciso os ocupeis con empeño señores*”, Documento N°1, Mensaje del Gobernador Juan Bautista Bustos, Córdoba, abril 14 de 1828, en FERREYRA, A. (1980) Ob. cit., p. 4.

³⁰³ Sobre la problemática distribución de funciones entre los distintos actores políticos durante los primeros años que siguieron a la crisis de la Monarquía Católica, véase TERNAVASIO, M. (2007a) *Gobernar la Revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

³⁰⁴ La moción fue del representante Urtubey y pasó a la comisión de negocios constitucionales para su análisis. AHCDC, Tomo III, *Acta de la sesión del 17 de octubre de 1828*, pp. 114-115.

³⁰⁵ AHCDC, Tomo III, *Acta de la sesión del 11 de diciembre de 1828*, pp. 140-141.

³⁰⁶ A mediados del mes de mayo de 1833, durante el gobierno de Reynafé, el Congreso Provincial sancionó la creación de un “*Tribunal provisorio que ejerza las funciones de la Cámara de Apelaciones*” formado por tres letrados nombrados directamente por el Gobierno, lo cual dejaba al Ejecutivo “*fuera de toda intervención en el ejercicio del Judicial*” pasando al Tribunal “*todos los recursos civiles y criminales pendientes*”; asimismo, se suprimía el “*Juzgado de Alzadas de Provincia*” por quedar “*sin objeto*”, como consecuencia de la creación del Tribunal; unas semanas más tardes, a pedido del propio Gobernador, se dio marcha atrás con la medida, cfr. *Compilación de leyes...* cit., pp. 109-112.

Años después, la Sala decretó la creación de un “*Tribunal Superior de Justicia Provisorio*” el día 26 de octubre de 1842, *Compilación de leyes...* cit., pp. 157-158. La provisionalidad estaba atada a “*la mejora de las circunstancias del Erario Público*” (Art. 1). En el Tribunal, terminarían “*todas las causas civiles en apelación, con arreglo á las Leyes que nos rigen*”, mientras que “*las criminales, pasarán directamente después de sustanciadas y sentenciadas, en los Tribunales inferiores al P.E. para su superior aprobación*” (Art. 1). Siguiendo con la lógica de justicia lega-letrada, se ordenaba que el Tribunal estuviera compuesto

consecuencia de esta omisión constitucional fue el mantenimiento de una matriz jurisdiccional que ubicaba al Gobernador a la cabeza del aparato de justicia³⁰⁷. Ya se ha visto cómo el Gobernador Roque Funes reconocía en 1831 ante el Congreso Provincial la necesidad de ordenar “*el más pronto restablecimiento de la suprema cámara para separar del gobierno estas importantes atribuciones*”³⁰⁸. El largo mandato de Manuel López al frente del ejecutivo provincial prolongó esta ausencia. A cinco años de su asunción, decía a la Sala de Representantes que “*insumidos los fondos del estado en los ingentes indispensables gastos que ha demandado con preferencia el interés vital de su seguridad en la aciaga época (que ha absorbido casi todo el periodo de mi administración) me cabe el sentimiento de no haber podido restablecer aun el Superior Tribunal de Justicia suspenso desde el año 29 por estos mismos motivos*”³⁰⁹. Años más tarde, en 1847, volvía a insistir en su mensaje con este asunto: “*no ha sido posible restablecer el supremo tribunal de justicia, que quedó suprimido desde el año 29... con este motivo (el gobierno) há tenido que llamar sobre sí todo el peso de esta grave atención, que há dado un doble objeto al ramo gubernativo*”³¹⁰. En el plano de la retórica política todos lamentaban la falta del Tribunal, sin embargo, redirigidas al Gobernador las atribuciones máximas en cuanto a la administración de justicia, la decisión política de reintegrar la Cámara de Apelaciones no resultaba atractiva al Poder Ejecutivo a tal punto que en el Código Constitucional Provisorio de 1847 ni siquiera se la mencionaba³¹¹.

Durante su efímera existencia, ocurrió un hecho que permite comprender las tensiones de una cultura jurídica en transición: la concepción acerca del orden jurídico y su definición, la justicia como función y el modo en que se administraba, y la posición real de poder de cada una de las autoridades provinciales, más allá del diseño institucional declarado en la constitución. Todo comenzó con la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones el día 5 de febrero del año 1827 en la causa iniciada por el presunto crimen de “*subversión pública y tranquilidad de la Provincia*”, en contra de ciertas personalidades muy conocidas en Córdoba como “el Coronel Francisco Antonio Ortiz de Ocampo (...) el Teniente Coronel D. Antonio Giles, D. Manuel Antonio Pizarro, D.

“*de tres miembros, de los cuales, al menos uno deberá ser letrado*” (Art. 2). Antes del primer año de vida, el “*Tribunal Superior de Justicia Provisorio de Apelaciones en lo civil*” se suprimió el 13 de septiembre de 1843 por haber cesado “*los motivos que impulsieron á la Honorable Representación*” su creación, *Compilación de leyes...* cit., p. 170.

³⁰⁷ En esta sentido, “todas las causas y sentencias, tanto civiles como criminales, son elevadas al gobernador para su resolución definitiva, posiblemente con la intervención del asesor de gobierno”, LOBOS, H. (2011), Ob. cit., p. 120.

³⁰⁸ Documento N°4, *Mensaje del Gobernador José Roque Funes, Córdoba, 4 de agosto de 1831*, en FERREYRA, A. (1980) Ob. cit., p. 30.

³⁰⁹ Documento N°7, *Mensaje del Gobernador Manuel López, Córdoba, 20 de junio de 1840*, en FERREYRA, A. (1980) Ob. cit., p. 86.

³¹⁰ Documento N°10, *Mensaje del Gobernador Manuel López, Córdoba, 18 de mayo de 1847*, en FERREYRA, A. (1980) Ob. cit., p. 142.

³¹¹ El diseño institucional proyectado por la nueva Constitución de Córdoba, sancionada en el año 1847, se analiza en el Capítulo siguiente: “IV. Reescrituras de la Constitución y Nuevas Constituciones ¿Renovación Constitucional?”.

Gaspar Bravo, D. Manuel Rivero, D. Gervasio Arzac, D. Mariano Giles y Don Mariano Pizarro”³¹². En su fallo, los Magistrados comprobaron la comisión del delito de conspiración, y sin embargo, absolvieron o impusieron penas muy bajas a sus partícipes. Comunicada la decisión del Tribunal a Bustos, éste la rechazó de plano considerando “que la sentencia dictada no estaba conforme a las leyes que regían” y decidió enviarla al Congreso cordobés para que el cuerpo representativo de la Provincia analizara el fallo y determinara si la Cámara había cumplido con su deber; el Gobernador buscaba una pena ejemplificadora y los representantes parecían dispuestos a satisfacer sus intenciones³¹³. Atendiendo a la gravedad del asunto, la Comisión General Permanente acordó nombrar una sub-comisión especial compuesta por los representantes Juan Pablo Bulnes y Diego de la Riva para que, previo conocimiento de los autos y demás antecedentes y documentos de la causa existentes en cualquiera de los tribunales de la Provincia, “*abriera dictamen sobre la legalidad o ilegalidad de la sentencia*” dictada por el Supremo Tribunal³¹⁴. Pese a que, de acuerdo con la tradición, los fallos no se fundaban legalmente, en la sesión siguiente se resolvió ordenar a la Cámara de Apelaciones que comisionara a uno de sus miembros para explicar “*a presencia del Pueblo y la Legislatura*” las razones que habían fundamentado la decisión del Tribunal y poderse así “*arribar al conocimiento de la justicia o injusticia con que se había pronunciado la sentencia*”³¹⁵.

Paralelamente, los doctores José Dámaso Gigena, José Antonio Ortiz del Valle y José R. Funes, y el licenciado Juan Prudencio Palacios –miembros integrantes de la Cámara de Apelaciones– presentaron la renuncia a sus plazas el día 7 de febrero. Ellos consideraban que el Gobernador, al calificar su sentencia como injusta y atentatoria del orden, había violado el principio sancionado de la independencia de los tres poderes republicanos, sobre todo siendo que podría haber solucionado el problema con una estrategia distinta, apelando a otros argumentos sin incurrir en un ataque al Tribunal³¹⁶. También apreciaban “muy fuera de reglas la revisión de la sentencia por la H. Sala de Representantes”, actitud que claramente atentaba contra la independencia mutua de ambos poderes lo que ilustraban *a contrario* imaginando la monstruosidad que significaría una intromisión del Judicial en las operaciones del Legislativo³¹⁷.

³¹² GARZÓN, I. (1901) Ob. cit., Tomo II, p. 131. AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 16 de febrero de 1827*, p. 226. En igual sentido CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 265.

³¹³ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 266.

³¹⁴ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 11 de febrero de 1827*, pp. 224-225.

³¹⁵ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 16 de febrero de 1827*, p. 226.

³¹⁶ GARZÓN, I. (1901) Ob. cit., Tomo II, p. 132. Según proponían, podría haberse fundado la decisión en la “máxima política que enseña: *la salud de la república es la ley suprema*” y haber suspendido directamente el fallo.

³¹⁷ En su nota de renuncia, comparaban la actitud del Gobernador Bustos con la del Monarca Castellano y citaban en consecuencia la *Real Orden de Su Majestad comunicada por el secretario de Estado y del despacho de Gracia y Justicia al Real y Supremo Consejo de Castilla (12 de octubre de 1804). Concerniente a la competencia del Tribunal en materia de ejecución de sentencias de la Sala de Mil y Quinientas*, cuando decía: “*Llega al más alto punto la desazón que turba mi paternal corazón, cuando considero el gran descuido con que procede el mi Consejo en los asuntos de mayor importancia (...) El notorio perjuicio é injusta sentencia... en el pleito visto por mi Consejo pleno... es para mí una prueba*

Cumplida la orden de la Legislatura, en la sesión del día 17 de febrero tuvo lugar un arduo debate entre los representantes que integraban la Comisión Permanente y los miembros del Tribunal enviados por su Presidente para “responder a los cargos que hagan los señores comisionados de la H. Sala, sin transgredir la línea que tienen ajustadamente marcadas las leyes especiales de la materia, mandadas observar por el Reglamento”³¹⁸. En primer lugar, se oyeron los argumentos esgrimidos por uno de los comisionados del Tribunal para sostener la legalidad del pronunciamiento en la causa. Comenzó su alocución el Sr. Juan Prudencio Palacios denunciando el procedimiento seguido contra la Cámara de Apelaciones y protestando “*de cuanto se obrase por la Sala en este asunto... en razón de la independencia que investían los tres altos Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, deslindados en el Reglamento Provincial*”³¹⁹. Seguidamente, sostuvo que correspondía al Fiscal del Tribunal la facultad de recurrir la sentencia pronunciada si consideraba que ésta estaba viciada de nulidad o era injusta, disponiendo para ello de los recursos de primera y segunda suplicación. Su conclusión era que, no habiéndose recurrido la sentencia a través de las vías legales establecidas para ello, el fallo debía considerarse “*legitimado*”³²⁰.

Luego tomó la palabra el Presidente de la Sala Juan Pablo Bulnes, integrante de la comisión especial formada para el estudio del caso. Erigió como razón principal de la medida tomada por la Sala –escuchar comisionados del Tribunal– la popularidad que un asunto tan grave como éste demandaba, de modo que cada ciudadano pudiera discernir sobre la legalidad o ilegalidad de la sentencia. Seguidamente, negó la calidad de Poder Supremo atribuida por los comisionados a la Cámara de Apelaciones afirmando aquel rasgo típico de predominio del Legislativo que ya ha sido explicitado, manifestando en esta oportunidad que “*todos los tribunales debían considerarse bajo la influencia de la Legislatura Provincial, cuando se trataba de reclamar la observancia de la ley*”³²¹. Finalmente argumentó que si bien estaba vencido el plazo para presentar por parte del Fiscal un recurso de primera suplicación, habiendo venido a la Sala la causa, él estaba en el derecho de deducir la nulidad de la sentencia por medio de un recurso extraordinario.

Después de las palabras de Bulnes, siguió el turno del magistrado comisionado José Roque Funes que intentó defender la solución de fondo adoptada por el Tribunal

nada equívoca del poco pulso, y ninguna premeditación con que procede el mi Consejo en casi todas sus decisiones (...) El Rey creía tener en su Consejo unos Ministros sabios, celosos é infatigables (...) Pero el Rey ve enteramente defraudadas sus esperanzas (...) Tengo motivos superabundantes para respirar indignación contra el mi Consejo todo (...) su injusta sentencia, ha desazonado mi paternal corazón en gran manera (...) En atención a esto, quiero, ordeno y mando que en lo sucesivo en toda sentencia dada por mi Sala de Mil quinientos en las causas decisivas y contenciosas no se proceda á su execucion, sin que ántes se me remita á mi para que visto que sea por mi Secretario de Estado, declare éste, ó quien yo determine, si está fundada en Derecho ó no”, disponible online en el Repositorio Universitario de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM: <http://www.ru.tic.unam.mx:8080/handle/DGTIC/71769>

³¹⁸ Ídem.

³¹⁹ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 17 de febrero de 1827*, p. 228.

³²⁰ Ídem, p. 229.

³²¹ Ídem, pp. 229-230. Otro claro ejemplo del predominio de los Legislativos en el período de transición entre un tipo de cultura política y otro.

atacando las viejas leyes con un argumento igual de viejo. Fundaba la minoración de las penas “*duras, férreas y bárbaras*” opuestas “*con el sistema de republicanismo que ha adoptado el país*”, en una norma constitucional según la cual se dejaba a la prudencia de los jueces la aplicación de penas arbitrarias³²². Bulnes volvió a tomar la palabra para impugnar el razonamiento de Funes. Dijo que los Ministros habían desconocido la regla constitucional según la cual, las sentencias criminales debían ser pronunciadas por el texto expreso de la ley. Además, que la calificación de “*férreas y bárbaras*” que se había hecho de las leyes que disponían la pena de último suplicio para los delitos de conjuración era incorrecta ya que se trataba de leyes recibidas en todos los pueblos del mundo civilizado³²³. Luego, el representante Flores razonó que estableciendo los códigos que regían a la Provincia la pena de muerte para los autores de asonadas y sediciones, y estando probado hasta la evidencia el delito de conspiración, la sentencia que no aplicaba esa pena era injusta³²⁴. Terminada la discusión, se pasó el asunto a la comisión *ad hoc* para que preparara y elevara el correspondiente dictamen.

El 20 de febrero de 1827 la Comisión General Permanente consideró el dictamen firmado por Bulnes y de la Riva³²⁵. En el documento declaraban que “*parece... resultar una prueba más clara que la luz del mediodía, según el lenguaje del acreditado Antonio Gómez con referencia á una Ley de Partida que convence hasta la última evidencia... que la referida sentencia es nula, injusta y subversiva del orden público... pues pudiendo por sí... causar el trastorno y anarquía, traería la última y más atroz de las calamidades según Tito Livio*”. El razonamiento era el siguiente: el Reglamento Provisorio establecía que toda sentencia criminal debía ser pronunciada por el texto expreso de la ley; según el mismo documento constitucional, la ley debía ser buscada en las antiguas disposiciones del Gobierno español que no se encontraran en oposición con la libertad e independencia de Sud-América, en el caso puntual, las “*LL. 1ª y 2ª, tít. 3º part. 7ª, y la 2ª, tít. 18, lib. 8º de la Recopilación*”.

Los magistrados habían justificado el apartamiento de ellas porque un Gobierno de carácter republicano –como se autoproclamaba el cordobés– debía ser menos sanguinario que uno Monárquico como el que dictó esas disposiciones “*férreas*”. Sin embargo, no supieron que “*todos los publicistas modernos, desde el inmortal Filangieri, aseguran que en las Repúblicas se cuida más del cumplimiento de las L.L. que en los Estados Monárquicos*”, en consecuencia, deberían haber sido más escrupulosos al

³²² Ídem, pp. 230-231. El artículo al que hacía referencia Funes establecía: “*No se entienden por esto derogadas las leyes que permiten la imposición de las penas al arbitrio prudente de los Jueces, según la naturaleza y circunstancias de los delitos, ni restablecida la observancia de aquellas otras que por atroces e inhumanas se hallan proscriptas y desusadas*”, Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXI, ART. 7. Como se ha visto, la administración de justicia según el prudente arbitrio de los jueces era una de las características de la cultura jurídica tradicional, cfr. AGÜERO, A. (2008a) Ob. cit., que luego de la sanción de la Constitución continuaba incólume.

³²³ AHCDC, Tomo II, Acta de la sesión del 17 de febrero de 1827, p. 231.

³²⁴ Ídem, p. 232.

³²⁵ El texto completo del dictamen elaborado por la subcomisión especial nombrada para analizar la sentencia pronunciada por la Cámara de Apelaciones puede consultarse en GARZÓN, I. (1901) Ob. cit., Tomo II, nota 24, pp. 137-141. Todas las citas textuales del documento han sido extraídas de allí.

momento de aplicar la ley. Continuaban diciendo que el crimen en cuestión había sido calificado en todos los tiempos y en todas las naciones como horroroso y castigado con la última pena sin necesidad de haberse consumado la rebelión porque “según Tácito «los que piensan, consultar ó entrar en acuerdo sobre determinarse en materia de rebelión, ya se rebelaron»”. Si desde la antigua Grecia hasta los últimos republicanos contemporáneos, todas las naciones señalaban una misma pena, por qué la Cámara habría de apartarse de ella. El Tribunal debió aplicar las leyes y dejar en todo caso en manos del Gobernador el uso de la clemencia acordada a él por el Reglamento Constitucional³²⁶.

Finalmente, el dictamen concluía con una cita de autoridad de un “célebre publicista”, según el cual, “será siempre peligroso someter los intereses de los ciudadanos al mero arbitrio de los que administran la justicia. Son inútiles las mejores leyes si no se observan, y por lo mismo debe la Nación de mantenerlas y de que se respeten y se ejecuten con exactitud. Nunca serán en este punto demasiado justas, extensas ni eficaces las medidas que tome, porque de ellas depende en gran parte su felicidad, su gloria y su reposo”. El publicista referido no era otro que el suizo Emerich de Vattel³²⁷. Sin embargo, resulta paradigmático y muy característico del modo de argumentar en aquella cultura jurídica, la selección parcial de la teoría de Vattel realizada por los firmantes del dictamen. Es que la gran autoridad que algunos autores habían adquirido los convertía en herramientas de persuasión, pero no mucho más que eso³²⁸. Si se continúa leyendo la obra del publicista, unos párrafos más adelante de la cita utilizada, éste realiza una afirmación que vacía de contenido todo lo dicho hasta aquí en el informe, avalando la posición defendida anteriormente por los miembros de la Cámara de Apelaciones: “luego que se ha establecido este tribunal supremo, el soberano no puede reformar sus sentencias, y en general está absolutamente obligado a guardar y mantener

³²⁶ Entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, la Constitución cordobesa establecía: “Tendrá facultad de suspender las ejecuciones y sentencias capitales, conceder perdón o conmutación, previo informe del tribunal de la causa cuando poderosos motivos de equidad lo sugieran, o cuando algún grande acontecimiento feliz haga plausible la gracia; salvo los delitos que exceptúan las leyes”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XV, ART. 11°.

³²⁷ La cita a la que se refiere el dictamen ha sido encontrada en VATTEL, E. (1822) *El Derecho de Gentes ó Principios de la Ley Natural, aplicados á la conducta, y á los negocios de las naciones y de los soberanos*, Ibarra impresor de cámara de S.M., Madrid, pp. 206-207.

³²⁸ Como explica AGÜERO, incluso se desarrolló el uso de nuevas autoridades doctrinales para afirmar normas tradicionales: “Otra forma de continuidad vinculada con formulaciones normativas antiguas que también suele dar lugar a equívocos interpretativos pasa por la utilización, en el contexto de transición, de nuevas autoridades doctrinales para reafirmar normas de la tradición anterior. Muchas veces suele rastrearse la presencia de un determinado autor para seguir la “pista” de las nuevas corrientes ideológicas. Parece razonable que la presencia de una determinada obra es, al menos, un indicio de contacto con una nueva corriente de pensamiento. Pero podemos preguntarnos qué argumentos se extraían de ellas a la hora de la discusión forense. Aunque resultan un número insignificante si se lo compara con el de las citas a la doctrina tradicional (Antonio Gómez, Gregorio López, Hevia Bolaños, Villanova y Mañes, Elizondo y Marcos Gutiérrez), a lo largo de la primera mitad del XIX se pueden ver en los procesos de la justicia cordobesa algunas citas a los “nuevos filósofos”, como Montesquieu, Beccaria o Filangieri. Indudablemente son nombres que han adquirido difusa autoridad y eso les convierte en herramienta de persuasión en determinadas circunstancias. Ello no significa, sin embargo, que la doctrina que de ellos se tome sea necesariamente novedosa”, AGÜERO, A. (2010a) Ob. cit.

las formas de la justicia. Querer violarlas sería caer en el dominio arbitrario, al cual no puede jamás presumir que haya querido someterse ninguna nación”³²⁹.

Considerado el dictamen sin ningún tipo de objeciones, se propuso el siguiente decreto que resultó uniformemente sancionado: “Art. 1º–*Se declara nula, ilegal y atentatoria de la seguridad pública la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones, el 5 del corriente Febrero en la causa de conspiración. Art. 2º–En consecuencia devuélvase la causa al mismo Tribunal para su revisión y reforma. Art. 3º–Declárese a los Señores Ministros que la dictaron en el caso del artículo 6º cap. 21 sección 8ª*”³³⁰. Declarada nula la sentencia, Bustos aceptó la renuncia presentada por los Magistrados de la Cámara de Apelaciones y designó a sus remplazantes, previa reforma de la ley de creación del Tribunal volviendo al número de tres integrantes según había sido la primera solución adoptada por la Sala. Paradójicamente, el mismo Gobernador que meses antes había atacado la reforma al Reglamento Provisorio propuesta por los representantes, argumentando a favor de que fueran cinco los jueces del Tribunal para evitar así los inconvenientes y males de un número tan reducido de Magistrados, era en esta oportunidad quien impulsaba la reducción de su número³³¹. Los nuevos jueces asumían con la misión de cumplir con la segunda parte del decreto sancionado, esto es, revisar y reformar la sentencia declarada nula e injusta. Se designó, en consecuencia, gente de la máxima confianza del Gobernador como “el doctor Francisco Ignacio Bustos, licenciado Salguero y licenciado José Gabino Blanco”³³².

Después de la consideración de la causa por los nuevos jueces nombrados al efecto, ellos mismos plantearon una consulta a la Sala sobre “*si en su pronunciamiento se han de ceñir al texto literal de la ley, aplicando la pena de muerte y confiscación de bienes todos, o pueden imponer una pena arbitraria, según el mérito del proceso y verdad intrínseca que produce*”³³³. Es que si bien había una tendencia a ser literales, la rigurosa legalidad con un orden normativo compuesto por las viejas leyes tenía sus problemas y los magistrados lo percibían; el caso muestra el choque entre la retórica de la legalidad y la conservación de las leyes antiguas³³⁴. El Congreso Provincial, que un

³²⁹ La cita que contradice la postura de los representantes y refiere a la obligatoriedad de las sentencias de los tribunales supremos, en ídem, pp. 211-212.

³³⁰ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 20 de febrero de 1827*, p. 234. La norma del Reglamento Provisorio a que hacía referencia el decreto sancionado por la Sala establecía que “*Toda sentencia en causas criminales para que se reputé válida debe ser pronunciada por el texto expreso de la ley, y la infracción de ésta, es un crimen en el Magistrado que será corregido con el pago de costas, daños y perjuicios causados*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXI, ART. 6.

³³¹ Según el acta de la sesión del día 20 de febrero citada, es el propio Gobernador el que aconseja “*sería conveniente que éste [el Tribunal] se redujera al número de tres, incluso el que había quedado, en atención a la escasez de los fondos públicos, y de Letrados*”, AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 20 de febrero de 1827*, p. 235.

³³² GARZÓN, I. (1901) Ob. cit., Tomo II, p. 139. En igual sentido, RIVIERE, R. (1958) Ob. cit., p. 74.

³³³ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 19 de mayo de 1827*, p. 273.

³³⁴ Para un análisis teórico de los problemas que tiene la pretensión de legalidad con leyes viejas, véase HESPANHA, A. (1993d) “*De iustitia a disciplina*”, en ídem, ob. cit., pp. 203-273. Véase también AGÜERO, A. (2013a) “*Law and Criminal Justice in the Spanish Colonial Order: the Problematic Enforcement of the Legality Principle in the Early National Law in Argentina*”, en MARTYN, G., MUSSON, A. y PIHLAJAMÄKI,

tiempo atrás había protagonizado uno de los eventos de mayor gravedad institucional en la Provincia, declarando nula e injusta la sentencia de la Cámara de Apelaciones por no haber aplicado la ley y haber resuelto una pena arbitraria, sancionó en esta oportunidad que los nuevos conjueces estaban habilitados para imponer una pena arbitraria³³⁵. En el mes de julio los presos recuperaron su libertad y “*El Tribunal condenó á la multa de 2.000 pesos al general Ocampo, con pérdida de su empleo y grados militares en la provincia; á la de 600 á D. Gaspar Bravo, y de 500 á D. Manuel Antonio Pizarro*”; pese al pronunciamiento, el Gobernador Bustos no tuvo ningún reparo en reformar la sentencia dejando sin efectos la privación de grados a Ocampo³³⁶.

Todo este episodio en el que se discutieron dos cuestiones principales, por un lado, la corrección o no del procedimiento seguido por el Gobernador y la Sala de Representantes, y por otro, la corrección o no de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones, es elocuente respecto de la concepción del poder político en aquella Córdoba de la primera mitad del XIX. Si se acepta sin más la idea de que el supuesto diseño ilustrado de la constitución cordobesa había modificado el aparato institucional de la Provincia en clave moderna, la conclusión más acertada es la de CELESIA para quien “a pesar de todas las garantías de independencia que le eran consagradas en el Reglamento constitucional, de la decantada separación de poderes, del respeto a las instituciones, lo único cierto que resultó del ensayo, fue la comprobación una vez más, de que, cuando las leyes, su cumplimiento molesta a los malos gobernantes, estos las deshacen”³³⁷. Sin embargo, si se admite la lectura en clave jurisdiccional que aquí ha sido propuesta, el resultado es un panorama en el que el verdadero poder político aún se define a partir de la tradicional vinculación entre poder y capacidad de juzgar. En ese escenario, no cabe duda que las auténticas autoridades políticas fueron las sucesoras del Cabildo y del Gobernador Intendente, a saber, el Congreso Provincial y el Gobernador, respectivamente. Con todo, son más que elocuentes para bosquejar el cuadro del período las palabras que podían leerse en uno de los números del periódico *El Padre Castañeta* en el año 1852: “la administración de justicia es un ramo, que ya dará que hacer al que quiera arreglarlo. Dos alcaldes ordinarios, y el Gobernador asesorado, he ahí las únicas instancias á que está allí reducida toda tramitación judicial. La Cámara y la Alzada son cosas desconocidas y habrá abogados en Córdoba que no las conocerán ni de nombre”³³⁸.

IV. 3. La administración de justicia en la campaña. Reforma y confirmación

Si todo lo que hasta aquí se ha dicho en materia de administración de justicia en Córdoba pareciera devolver una imagen más próxima a la concepción tradicional del orden político que a un supuesto diseño liberal ilustrado, el análisis de este ramo en el

H. (eds.) (2013) *From the Judge's Arbitrium to the Legalti Principle. Legislation as a Source of Law in Criminal Trials*, Duncker & Humblot, Berlín, pp. 229-251.

³³⁵ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 21 de mayo de 1827*, pp. 275-276.

³³⁶ Cfr. GARZÓN, I. (1901) Ob. cit., Tomo II, pp. 143-144.

³³⁷ CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 270.

³³⁸ Cfr. ROMANO, S. (2002) Ob. cit., p. 296.

territorio de la campaña cordobesa no hace más que confirmar la hipótesis propuesta. En el Reglamento Provisorio de 1821, las disposiciones referidas al Poder Judicial (Cap. XVII), los Tribunales de Justicia (Cap. XVIII) y la Administración de Justicia (Caps. XIX-XXII), no hacían ningún tipo de alusión a la campaña y todo seguiría igual hasta que en el año 1823 se promulgó un extenso *Reglamento para la administración de justicia en la campaña de Córdoba* que estableció una estructura que trascendió a la justicia y sentó las bases de toda una organización política por debajo, e incluso en contra, de la Constitución³³⁹. Un breve análisis de esta experiencia sirve para comprender la textura tradicional sobre la que descansaba el nuevo orden constitucional, tanto por lo que el Reglamento Provisorio calló, como por el impacto, en el sistema de derechos y libertades declarados, de una particular manera de administrar justicia que potenció viejos mecanismos de la época colonial.

En el año 1822 el Gobernador Juan Bautista Bustos había decidido unilateralmente disolver el Congreso Provincial asumiendo todo el poder político en la Provincia, situación que se extendió por más de dos años hasta la reinstalación de la Sala de representantes el 17 de agosto de 1824. Fue precisamente durante ese lapso en el que faltó el cuerpo representativo que el propio Bustos, con el auxilio del viejo Cabildo de la ciudad, puso en planta el proyecto de organización institucional de la justicia en la zona rural. Según el Reglamento de administración de justicia para la campaña, el aparato judicial estaría compuesto por “*Jueces Pedáneos de 1ª Instancia*” –uno por cada distrito– y “*Jueces Pedáneos de Alzada*” –uno por cada uno de los ocho curatos en los que se dividía la Provincia– (Cap. I, Arts. 1 y 2), con autoridad civil y criminal (Cap. V), nombrados directamente por el Cabildo y el Gobernador, respectivamente (Cap. II, Art. 1)³⁴⁰.

De acuerdo a una tradición propia de una justicia de jueces, debía nombrarse a personas de entre “*los mejores sugetos que haya en cada partido, que sepan leer y escribir, que sean tenidos por hombres buenos de conducta sin tacha y de religiosa vida, de suerte, que sean dignos en cuanto permite el presente estado de la campaña de la confianza que se le hace*” (Cap. II, Art. 2). La garantía de su buen desempeño estaba fundada en la honradez y reputación de los elegidos, y en el religioso juramento exigido “*antes de ejercer el cargo y publicar sus despachos*” al que el Reglamento dedicaba

³³⁹ El texto del *Reglamento para la administración de justicia en la campaña de Córdoba* puede consultarse en *Compilación de leyes...* cit., pp. 516-523. Un primer estudio de sus disposiciones fue realizado por PEÑA, R. (1974) “Los jueces pedáneos en la Provincia de Córdoba (1810-1856). Algunos aspectos de sus atribuciones”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 2, pp. 121-148. Desde una perspectiva menos jurídica también lo abordó ROMANO, S. (2004), Ob. cit. Sin embargo, el estudio más reciente con un enfoque iushistoriográfico que aquí se comparte es el trabajo de AGÜERO, A. (2010b) “La justicia penal en tiempos de transición. La república de Córdoba, 1785-1850”, en GARRIGA, C. (Coord.) *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, Centro de Investigación y docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, México, pp. 267-305. Sobre la justicia en la campaña de Buenos Aires reflexiona, por ejemplo, FRADKIN, R. (2009b) “¿Misión imposible? La fugaz experiencia de los jueces letrados de primera instancia en la campaña de Buenos Aires (1822-1824)”, en BARRIERA, D. (coomp.) Ob. cit., pp. 143-164; también las compilaciones de trabajos de varios autores, realizadas por el mismo FRADKIN, R. (comp.) (2007) Ob. cit., y (2009a) Ob. cit.

³⁴⁰ *Compilación de leyes...* cit., p. 516.

varios artículos³⁴¹. En esta misma línea, se exhortaba a todos los jueces de campaña “a llevar una *comportación honrada y circunspecta; a que sean suaves, apacibles, y familiares, sin degradación ni bajeza; benignos, sensibles, y compasivos; pero sin tocar en debilidad para administrar justicia, perseguir los vicios, y escarmentar al que fuere delincuente. Se exhorta igualmente a que guarden la posible decencia en el trato de sí mismos; a que sean decorosos en sus palabras, en sus acciones, y en sus obras, de suerte que jamás sean un motivo de vilipendio y escándalo los que deben ser los primeros en dar los buenos ejemplos*” (Cap. X)³⁴². Todo el discurso sobre el que estaba construido el diseño institucional de la justicia en la campaña utilizaba los argumentos típicos de la justicia de jueces. A más de los extremos que definían el modelo del juez, la legitimidad de su autoridad también descansaba sobre aquellos principios de obediencia, reverencia y respeto a la autoridad como a los padres mismos, tal como lo enseñaba la ley de Dios³⁴³.

También en la lógica de aquella cultura, como se ha visto, circunstancias excepcionales justificaban medidas extraordinarias. En la campaña, el débil control del territorio por parte de la autoridad política y la presión de los hacendados por controlar a la población errante, autorizaban a adoptar ciertas disposiciones de aquel carácter. En ese sentido, la administración de justicia en materia penal se caracterizó por la minoración de requisitos y formas procesales que obstaculizaban la posibilidad de instaurar una justicia más expeditiva para facilitar “*el pronto escarmiento de los que fueren delincuentes*” (Cap. VIII, Art. 1). Siguiendo esta línea, se declaraba inaplicable para ciertos casos la prohibición constitucional –recogida de la tradición colonial– de ejecución de las penas de azotes sin previa consulta al Tribunal de Justicia³⁴⁴. Y cuando la consulta era

³⁴¹ El Juramento “*por Dios nuestro Señor y esta señal de la cruz*” no sólo obligaba a “*desempeñar con actividad y celo el encargo*”, sino también a librar las demandas “*bien y lealmente, lo más pronto posible y mejor que pudiere y supiere*” (Cap. III, Arts. 1 y 2). Los pedáneos de alzada debían jurar ante el Gobernador y los de primera instancia ante los de alzada, debiendo estos últimos labrar un acta del ritual donde constara el cumplimiento de este deber y enviarla al Cabildo (Cap. III, Arts. 2-4), *Compilación de leyes...* cit., p. 517.

³⁴² *Compilación de leyes...* cit., p. 521.

³⁴³ El Cap. X del Reglamento, sobre *el debido respeto a los Jueces...*, comenzaba diciendo: “*Es un precepto sagrado que nos ha impuesto la misma religión tributar a los jueces los homenajes de la obediencia, y del respeto. En el cuarto mandamiento de la Ley de Dios se entienden también por padres a más de los naturales, los que se hallan constituidos en autoridad; y solo a aquel los honra, quien los obedece y reverencia. El castigo de los delitos, el exterminio de los vicios, el premio del mérito, el germen de la virtud; la administración de justicia, la tranquilidad pública y en fin el bien general del estado, todo dependen de la observancia de esta sagrada ley*”, en *Compilación de leyes...* cit., p. 521.

³⁴⁴ La prohibición constitucional era explícita: “*Se prohíbe a los Jueces ordinarios ejecutar las sentencias de presidio, azotes o destierro sin consultarse ante al Tribunal de Justicia*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXI, ART. 4. Sin embargo, el Reglamento para la campaña contenía la mencionada excepción en su Cap. X, Art. 8º: “*Está prohibido generalmente ejecutar la pena de azotes, sin consultar antes al Tribunal de Justicia; pero como toda ley admite su justa interpretación y excepción en casos particulares, principalmente cuando así lo exige el bien del Estado y el remedio de grandes males, primeros objetos que se propuso el Legislador y á que debe ceder todo rigor de principios; y como por lo que respecta a la campaña no se presenta, por ahora, otro recurso para contener los excesos del robo y de otra clase de vicios, que la destruyen y asolan, que facilitar por medio de dicha pena el pronto escarmiento de los que fueren delincuentes, se declara con respecto á la campaña estar comprendidos estos en la espresada pena de azotes en los casos de infragante de que habla este Reglamento; y por equivalente al Tribunal de Justicia, la consulta al Juez de Alzada en los casos que se previene*”, en *Compilación de leyes...* cit., p. 519.

requerida, puesto el reo en “*prisión segura*”, el procedimiento consistía en levantar “*una pronta y breve sumaria bastante para convencerlo del delito*”, confesión, descargos, y remisión de todo al Juez Pedáneo de Alzada para que autorizara la ejecución de la pena (Cap. VIII, Arts. 6-8). Con todo, la instauración de este tipo de justicia expeditiva potenciaba también la capacidad punitiva de unas magistraturas honorarias, de tipo notabiliar y paternalista, organizadas desde entonces en una doble instancia (Juez pedáneo de alzada por curato, y juez pedáneo de primera instancia en las pedanías que integraban el curato), bajo control último de los jueces ordinarios de la capital provincial³⁴⁵.

Atendiendo al “clamor de los hacendados” una vez más, a mediados del año 1825 el Congreso Provincial aprobó un proyecto de creación de una comisión especial para la elaboración de un nuevo Reglamento de administración de justicia en la campaña cordobesa. Según la decisión de los representantes, debía convocarse a una “*Junta de Hacendados... de los más pudientes, de notoria honradez y conocimientos, cuatro de cada partido ó Curato, á su elección*” que se reuniría en la ciudad³⁴⁶. La intención era oír sus propuestas y arbitrar los medios que ellos creyeran eficaces para disminuir los continuos robos que denunciaban. La posición de poder de los grandes propietarios de estancias a las afueras de la ciudad era tal que no sólo manifestaron sus inquietudes sino que prepararon y presentaron todo un proyecto de reforma del cuerpo normativo vigente³⁴⁷. Los avatares del gobierno provincial y la necesaria atención de cuestiones más urgentes como las relaciones exteriores o la guerra misma suspendieron la sanción del Reglamento elevado por los hacendados, no obstante, todo este proceso atestigua el mantenimiento de una concepción eminentemente corporativa de la sociedad en aquella república cordobesa.

Si corporativos eran los intereses, no debe extrañar que aún frente al cambio violento de color político se mantuviera una estructura de poder que favorecía, en este caso, a los hacendados. Ya se ha visto cómo el Reglamento para la campaña sancionado por Bustos reducía las formalidades y habilitaba una justicia expedita para consuelo de los propietarios. Pues bien, llegado al poder luego de vencer en el campo de batalla al ex Gobernador, el nuevo jefe provincial José María Paz, decretó la plena vigencia del mismo Reglamento promulgado por su predecesor mandándolo a imprimir y publicar para facilitar su circulación³⁴⁸. Además de esta continuación, Paz capitalizó la trama

³⁴⁵ AGÜERO, A. (2010b) Ob. cit.

³⁴⁶ Cfr. AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 29 de julio de 1825*, p. 388. En esta misma sesión se leyeron dos oficios procedentes de los Departamentos de Tumbura y Santa Rosa, suscrito por vecinos del lugar, implorando la reforma del Reglamento de administración de justicia vigente en la campaña.

³⁴⁷ Cfr. ROMANO, S. (2004) Ob. cit., pp. 182 y ss.

³⁴⁸ El 13 de agosto de 1830, Paz firmó el decreto que puede consultarse en *Compilación de leyes...* cit., p. 82. Unos días antes, el 2 de mayo de 1829, se había sancionado una ley sobre robo de ganado simplificando el proceso para su castigo, cfr. *Compilación de leyes...* cit., p. 57. En aquel contexto “aparecía también el recurrente problema de formalizar las causas para los delitos leves (...no pudiendo reducirse a proceso todos aquellos –robos– que no excedan de una o dos cabezas...) como fundamento para establecer un procedimiento “*verbal y sumario*” y “sin apelación” mediante el cual el juez de campaña, junto a dos vecinos, formando tribunal, castigarían con la irremisible pena de 50 azotes todo robo de una o dos cabezas de ganado”, AGÜERO, A. (2010b) Ob. cit., p. 290. De más está decir que los vecinos debían ser “de

institucional diseñada por el cuerpo normativo de 1823 para “cometer especialmente” el ramo de policía en cada Curato de la campaña al Juez de Alzada del mismo, en calidad de comisionado, y a los Jueces Pedáneos, en sus respectivos distritos, en calidad de comisarios, poniéndose a disposición de cada uno de ellos, armas y una partida especial de milicianos. Pese a esta indicación precisa, el resto de milicianos y todos los “vecinos y habitantes en la campaña sin distinción alguna”, fueron “obligados a prestar auxilios á los Jueces con sus personas y armas, cuando los reclamasen”³⁴⁹.

Como se puede observar, la ratificación –e incluso radicalización– del perfil de la administración de justicia en la campaña no fue patrimonio exclusivo de ninguno de los grupos políticos en pugna. Pocos años después, en 1834, el Poder Ejecutivo envió a la Sala de Representantes un proyecto con reformas “provisorias” en la organización institucional del ramo y la medida fue una de las más celebradas por el Gobernador José Antonio Reynafé durante su gobierno; en su mensaje anual a la Sala de Representantes así lo manifestaba, aportando indicios claros para delinear el cuadro de situación:

*“la audacia de los ladrones y asesinos era necesario contenerla, para salvar al país. Las formas establecidas para las secuelas de los juicios, y varias minuciosidades que la retardan, era en tales circunstancias un nuevo obstáculo que se ofrecía, para moralizar. En éste conflicto el gobierno tuvo la necesidad de dirigirse á Vuestra Honorabilidad pidiendo la creación de cuatro jueces ordinários para la campaña con las atribuciones, que las leyes detallan á los de esta clase y con la facultad de poder prescindir, á objeto de facilitar el escarmiento, de las formas que no fuesen absolutamente precisas y esenciales. Esta medida puesta en ejecución ha producido los mejores resultados, y hoi se disfruta de una tranquilidad y seguridad á que no se creyó tan fácil poder llegar, habiendo sido bastantes, pocos castigos, bien que aplicados en oportunidad y con debida energía”*³⁵⁰.

conocida honradez y probidad”, y que la pena alternativa a los azotes podía ser la de “seis meses de trabajo en las obras públicas”, Decreto de José María Paz, *Compilación de leyes...* cit., p. 57.

³⁴⁹ Art. 7 del decreto reglamentando la policía de la campaña está fechado el 20 de octubre de 1830. Puede consultarse íntegramente en *Compilación de leyes...* cit., pp. 86-91. La función principal de estos agentes consistía en actuar como brazo ejecutor de las órdenes libradas por el gobierno y llevar un celoso control de la actividad desarrollada en la campaña. A modo de ejemplo, estaban facultados para otorgar las “licencias” correspondientes a los vecinos que quisieran viajar fuera de la Provincia –cobrando por ello el respectivo derecho– o mudar su residencia de un Curato a otro, llevando además un cuidadoso control de los sujetos que ingresaban a la Provincia provenientes de otros territorios, de las personas que cada vecino de la campaña alojaba en sus casas, de las compraventas de ganado realizadas, del estricto cumplimiento de la prohibición del desarrollo de determinados juegos considerados inmorales, etc. La supuesta desmoralización de la campaña era una de las preocupaciones principales de la corporación de hacendados, por ello, se imponía a estos jueces “no consentir de modo alguno gente vaga y ociosa en sus respectivos distritos, remitiendo á los de esta clase á disposición del Gobierno para ser destinados á obras públicas” (Art. 26). Finalmente, es interesante atender al modo en que dicho decreto se manda a publicar: “Art. 33. Para que lo dispuesto en los artículos precedentes tenga el más puntual cumplimiento y llegue á noticia de todos los Jueces de Alzada y Pedáneos de primera instancia, lo mandarán publicar en un día festivo después de la misa, donde hubiere parroquia, y donde no hubiere la publicación se hará en los lugares más públicos del distrito y de modo que nadie pueda alegar ignorancia”.

³⁵⁰ Documento N°5, *Mensaje del Gobernador José Antonio Reynafé, Córdoba, 25 de octubre de 1834*, en FERREYRA, A. (1980) Ob. cit., p. 49.

Un año más tarde el panorama no había variado en nada y la Comisión General decidió prorrogar por ocho meses más la medida “provisoria”³⁵¹.

El control férreo de la campaña, desprovisto de formas legales y garantías para los justiciables, fue la política característica de todos los gobiernos del período. La protección de los intereses de los hacendados –bajo un discurso que apelaba a la moralidad– daba una imprescindible cuota de legitimidad al poder político. En su mensaje a la Sala de Representantes del año 1837, el Gobernador Manuel López decía que en la campaña, *“una gran parte de familias criminales y mal entretenidas que infestaban el país y corrompían la buena índole de nuestros campesinos, se hallan en el día reformadas, y destinadas á la frontera al cuidado de personas de arreglo y moralidad, se ocupan del trabajo y la industria abriendo la mejor esperanza de una nueva vida y buen proceder”*³⁵².

La creación de “una justicia expeditiva, articulada sobre las mismas viejas prácticas del final de la colonia pero ya desligada de los antiguos condicionamientos... [había cobrado] cuerpo escrito sin necesidad de filtrarse tímidamente por los entresijos del viejo discurso jurisdiccional”³⁵³. El Reglamento promulgado por Juan Bautista Bustos –sucesivas ratificaciones mediante– continuó vigente durante todo el período de estudio de este trabajo hasta 1856. En ese año se sancionó un nuevo texto que si bien recogió parte de los postulados que el nuevo escenario político-constitucional proponía a partir del texto de la Constitución Nacional de 1853 y la consecuente Provincial de 1855 –como la abolición de la pena de azotes–, no se apartó sustancialmente del orden tradicional establecido³⁵⁴.

³⁵¹ AHCDC, Tomo V, *Acta de la sesión del 5 de febrero de 1835*, pp. 154-155.

³⁵² Documento N°6, *Mensaje del Gobernador Manuel López, Córdoba, 1° de mayo de 1837*, en FERREYRA, A. (1980) Ob. cit., p. 70.

³⁵³ AGÜERO, A. (2010b) Ob. cit., pp. 288-289.

³⁵⁴ El análisis de este nuevo *Reglamento para la Administración de Justicia y Policía en la campaña* del año 1856 ha sido trabajado por AGÜERO, A. (2011a) Ob. cit. Como queda fuera del período seleccionado para esta investigación, para un análisis de sus disposiciones e implicancia, se remite al trabajo mencionado. Los textos constitucionales nacional y provincial de 1853 y 1855, respectivamente, se abordan en los capítulos siguientes.

CAPÍTULO IV

REESCRITURAS DE LA CONSTITUCIÓN ¿RENOVACIÓN CONSTITUCIONAL?

I. VIGENCIA DEL TEXTO, VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN; I. 1. Reformas aisladas al texto; I. 2. Paquetes de reformas; I. 2. 1. Primer momento (1826); I. 2. 2. Segundo momento (1830-1832). Reformas y publicación oficial del texto; II. EL CÓDIGO CONSTITUCIONAL PROVISORIO DE 1847; II. 1. Génesis y sanción del Código Constitucional Provisorio de 1847; II. 1. 1. Necesidad de reforma y debate constituyente; II. 1. 2. Revisión del P.E. y publicación(es); II. 2. El nuevo texto. Prácticas hechas Constitución; II. 2. 1. Fortalecimiento de la figura del Gobernador; II. 2. 2. La exclusión del enemigo político y conservación del orden; II. 2. 3. La apoteosis de la soberanía de la Provincia; II. 2. 4 Derechos, Garantías y Administración de justicia; II. 2. 5. Ciudadanía y sistema electoral.

I. VIGENCIA DEL TEXTO, VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN

La experiencia analizada precedentemente muestra que la Constitución era un texto de referencia que operaba en un escenario de reglas y excepciones; éstas generalmente justificadas a partir de una lógica que revela, en parte, la constitución material de la república. Incluso así, había en aquel contexto una pretensión de vigencia visible, por ejemplo, en las continuas apelaciones a fórmulas como la de “*sin perjuicio de mantener su fuerza...*” en función de las cuales la Constitución se incumplía pero siempre se salvaba. Esa misma pretensión de vigencia también se refleja en el valor dado por los actores políticos a la textualización, esto es, a la voluntad de plasmar en el texto ciertas modificaciones que acercaran la letra de la norma a la práctica política, de allí las continuas reescrituras de la Constitución. En esa línea de principio, si bien la norma constitucional sancionada en enero de 1821 estuvo formalmente vigente durante un lapso de casi veintiséis años y medio, como se ha adelantado, durante ese período el texto sufrió diversas modificaciones. Toda una serie de reformas a lo largo de esos años fueron alterando sensiblemente el contenido de las formulaciones originales.

El Reglamento Constitucional de 1821 no preveía en su articulado disposiciones referidas concretamente a su reforma, es decir, no se establecía un procedimiento especial para su modificación –total o parcial– salvo la norma contenida en la primera parte del Art. 2º Cap. XII que establecía: “*Ningún asunto constitucional quedará sancionado sin la concurrencia de dos tercias partes de sufragios...*”¹. La regla no estaba específicamente

¹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 2.

dedicada a la cuestión que aquí se analiza, ya que por “*asunto constitucional*” podían entenderse –y de hecho se entendieron– muchísimos supuestos como, por ejemplo, la creación de alguno de los órganos previstos por el Reglamento Provisorio; sin embargo, se entendió que para la alteración, sustitución o derogación de un artículo de la norma constitucional, la disposición también era aplicable. En consecuencia, no habiendo ningún órgano designado en el Reglamento para tratar sobre sus reformas, y siendo suficiente para las modificaciones sobre asuntos constitucionales la sanción del Congreso Provincial con una mayoría agravada, fue este cuerpo representativo el protagonista principal de las variaciones que durante el lapso de su vigencia fue sufriendo el texto.

Si se clasificaran las modificaciones introducidas al Reglamento Provisorio entre 1821 y 1847 por su método de preparación y posterior sanción, podría decirse que hubo dos grandes modos de trabajo por parte de la Legislatura en materia de reforma constitucional. Por una parte, las reformas aisladas de una o pocas disposiciones del documento, generalmente dirigidas a la supresión o cambio de los extremos de una solución adoptada por los constituyentes originarios; por otra, los paquetes de reformas, verdaderos programas políticos llevados adelante por un grupo de poder que pretendía introducir un cambio significativo en la redacción y diseño de la Constitución con el objeto de adaptarla a lo que se percibía como las necesidades políticas de la Provincia en un determinado momento.

Como se verá más adelante, en el año 1847, la última plasmación textual antes de la incorporación de la Provincia de Córdoba al orden constitucional federal impuesto por la Constitución Nacional de 1853, constitucionalizó la práctica política, quitando del texto todo aquello que sobraba y no se adaptaba al modo en que se ejercía el poder. Finalmente, lo que había empezado como una tensión entre una retórica discursiva de legitimación y una constitución material que no respondía plenamente a ese modelo, terminaría con el abandono de la pretensión de reflejar una retórica liberal en el articulado de la Constitución. Éste acabó siendo fiel a la materialidad, lo que podría interpretarse de dos maneras, no incompatibles y complementarias: por un lado, que seguía predominando la dimensión de lo fáctico –factualismo, constitución material–; pero al mismo tiempo, que se había asumido la importancia para la nueva cultura jurídica de la textualización.

Seguidamente se analizarán las reformas aisladas, en primer lugar, para estudiar después las propuestas de reformas generales. Aunque a lo largo de este trabajo ya se ha ido haciendo referencia a muchas de ellas, serán expuestas de modo sistemático para poner en primer plano las alteraciones textuales del Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba del año 1821.

1. 1. Reformas aisladas al texto

Retribución de los Representantes. La Legislatura que comenzó sus sesiones el día 17 de agosto de 1824, sancionó, en la sesión siguiente a su instalación, una reforma al Art. 4º, Cap. XI del Reglamento de la Provincia relativo a la dieta de los señores representantes. Luego de leído en la Sala el artículo en cuestión, según el cual era atribución del

Congreso Provincial fijar “*el compensativo que deben disfrutar por sus servicios sobre las rentas del Estado*”, y discutido bastante el asunto, se acordó unánimemente su alteración. La razón que fundamentaba dicha modificación era que debía considerarse como la “*mejor recompensa*” para los señores representantes “*el honor y satisfacción de servir al público*”². A partir de entonces, el cargo de representante pasó a ser *ad honorem* y no porque el Congreso así lo hubiera fijado sino porque la Constitución lo establecía.

Extinción de los cabildos. A finales de ese mismo año, en la sesión del día 30 de diciembre del año 1824 el Congreso Provincial sancionó un proyecto de ley que ordenaba la extinción de los Cabildos de la Ciudad de Córdoba y las Villas de la Concepción y Carlota. Como el Reglamento Provisorio de 1821 contenía dos capítulos enteros destinados a regular todo lo concerniente a los Ayuntamientos, el proyecto de extinción debió incluir en su articulado una disposición que se refería expresamente a la Constitución de la Provincia, alterando su estructura. El artículo 16 de esta ley estableció, sin más, la supresión de aquellos dos capítulos del texto constitucional en los siguientes términos: “*Art. 16º- Quedan, de consiguiente, derogados los capítulos 24 y 25 del Reglamento Provisorio de 30 de Enero de 1821*”³. El ejemplo de la experiencia bonaerense diseñada por Rivadavia influyó decisivamente en Córdoba⁴. Como ya se ha referido, se trató de una medida que resolvía varios problemas: duplicidad de cajas, ausencia de sujetos dispuestos a transformarse en jueces honorarios, colapso de las magistraturas ordinarias del Cabildo. Por otra parte, lograba cohesionar la élite en una institución como la Sala de Representantes que seguía proyectando su poder sobre todo el territorio provincial, evitándose así la fragmentación que en otros escenarios, como el caso mexicano, se produjo a partir de la constitución de nuevos municipios⁵.

Tratamientos. El último apartado del Reglamento Provisorio contenía una serie de disposiciones en las que se consignaba el tratamiento que debían recibir las diferentes autoridades de la Provincia. La cuestión no es menor, si se considera que el capital simbólico de determinadas denominaciones puede ayudar a imaginar el valor dado a las

² AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 18 de agosto de 1824*, p. 221.

³ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 30 de diciembre de 1824*, p. 296.

⁴ Para el caso del cabildo de Buenos Aires, véase TERNAVASIO, M. (2000) “La supresión del cabildo de Buenos Aires: ¿crónica de una muerte anunciada?”, *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, Tercera serie, N° 21, 1er semestre, pp. 33-73. Para Córdoba, un primer análisis del tema en LUQUE COLOMBRES, C. (1984) “En torno a la extinción del cabildo de Córdoba” en *Revista de Historia del Derecho*, Nro. 12, Buenos Aires, pp. 217-228. Un estudio más reciente es el de AGÜERO, A. (2012) “La extinción del cabildo en la República de Córdoba, 1815-1824”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani* [online], Nro. 37, pp. 41-82, p. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0524-97672012000300002&lng=es&nrm=iso; AGÜERO, A. (en prensa) “El constitucionalismo hispano, la eclosión municipal y la supresión de los cabildos en el Río de la Plata, primera mitad del siglo XIX”, en *El Constitucionalismo Hispánico Temprano*, Centro de Estudios en Historia – Universidad del Externado, Bogotá.

⁵ El caso mexicano ha sido abordado por Antonio ANNINO, en varios de sus trabajos, entre ellos: (1995b) “Voto, tierra, soberanía. Cádiz y los orígenes del municipalismo mexicano”, en GUERRA, F. (dir.) *Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español*, Editorial Complutense, Madrid; (2010), “La ruralización de lo político”, en ANNINO, A. (coord.), *La revolución novohispana, 1808-1821*, México, FCE, pp. 384-464. Para una reflexión comparativa entre uno y otro caso, véase AGÜERO, A. (en prensa) Ob. cit.

nuevas instituciones. Según la cláusula aludida, el Poder Legislativo provincial debía recibir el tratamiento de “*Poderoso Señor, en el principio, y el de Alteza en el decurso...*”, nada más y nada menos que el tratamiento dado a las Audiencias y al Rey en el orden político colonial; la concepción de un Legislativo predominante y soberano, heredero de la majestad dispersa entre los pueblos, autorizaba una solución de ese tipo⁶. Por otra parte, las referencias al Tribunal de Apelaciones reunido en cuerpo debían ser por la fórmula “V.S.” y todo escrito dirigido desde o hacia el Tribunal debía encabezarse con las palabras “*Recto Tribunal*”⁷. Sin embargo, a partir de 1825 la Sala de Representantes decidió introducir cambios en las formas de tratamiento previstas por la Constitución, lo cual puede ser visto como un indicativo de las reconfiguraciones simbólicas de poder. Estando reunido en Buenos Aires el Congreso Constituyente que trabajaba en la redacción y sanción de una norma fundamental nacional, los representantes argumentaron la conveniencia de “*uniformar el tratamiento de esta Corporación con el que se ha adoptado con las demás Provincias*”; en consecuencia, decidieron trocar la denominación que se daba a la Sala según el Reglamento por las iniciales “V.H.”, en referencia a Vuestra Honorabilidad⁸. Año y medio más tarde, el 28 de octubre de 1827, la Legislatura volvió a considerar el asunto de los tratamientos de las autoridades, en esta oportunidad el órgano bajo la lupa fue el Tribunal de Apelaciones. En atención a la “*dignidad y elevado carácter que inviste*”, se resolvió que pasara a ser denominado “*Excelencia*” en lugar del “V.S.” previsto, y los escritos fueran encabezados por el título “*Exma. Cámara de Apelaciones*” en lugar de “*Recto Tribunal*”⁹.

Representación. El 15 de enero de 1826 se sancionó el proyecto que había sido tratado por la Legislatura anterior sobre la reforma del sistema electoral diseñado en el Reglamento Provisorio¹⁰. La norma derogó y dejó “*sin valor alguno*” los artículos 10° Cap. X, Sección Cuarta y 3° Cap. XI, Sección Quinta de la Constitución de 1821¹¹. Concretamente, lo que se modificaba era la proporción entre habitantes de la Provincia y representantes en el Congreso. Los constituyentes habían establecido que cada doce mil almas correspondía designar un representante pero la reforma bajó la relación “*de modo*

⁶ GÓMEZ, M. (2010) “Imagen y representación del sello real en las Indias”, en GUZMÁN BRITO, A. (coord.) *El Derecho de las Indias Occidentales y su pervivencia en los derechos patrios de América: Actas del XVI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Vol. 2, págs. 641-656. Sobre la reconfiguración de la soberanía en el territorio hispanoamericano, véase CALDERÓN, M. y THIBAUD, C. (2010) *La Majestad de los Pueblos en la Nueva Granada y Venezuela 1780-1832*, Taurus, Bogotá.

⁷ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., TRATAMIENTOS.

⁸ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 8 de abril de 1825*, pp. 308-309.

⁹ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 28 de octubre de 1826*, pp. 186-187.

¹⁰ El Proyecto que había sido elaborado por el representante Francisco Ignacio Bustos ingresó a la Sala para su discusión el día 3 de junio del año 1825, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 3 de junio de 1825*, pp. 353-354.

¹¹ El texto completo de la ley sobre elecciones de los representantes sancionada por el Congreso Provincial puede consultarse en *Compilación de leyes, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter público dictadas en la Provincia de Córdoba desde 1810 a 1870*, Tomo I, Imprenta del Estado, Córdoba, 1870, p. 25. Se trató tan sólo de 5 artículos, suficientes para derogar los artículos correspondientes del Reglamento Provisorio, establecer nuevas proporciones entre cantidad de almas y representantes, y disminuir la duración del mandato de los miembros del Congreso; todo esto dejando vigente el resto de disposiciones no mencionadas en la ley.

*que por cada seis mil almas, se nombre uno...*¹². De esta manera, se duplicaba el número de integrantes de la Sala de Representantes; y aunque no se expresaban los motivos del cambio, en otro momento habían discutido acerca de la conveniencia de mayor número de sujetos no tanto para elevar el grado de “representatividad” del cuerpo sino más bien para atender mejor los negocios públicos. El segundo de los artículos derogados contenía la cláusula que establecía la duración del mandato de los miembros del Congreso Provincial y el modo en que la Sala debía renovar periódicamente sus integrantes. Originalmente, la disposición contemplaba que cada representante ocupara su cargo por un período de cuatro años, renovándose la Sala por mitades cada dos. La reforma en cuestión prolongó la duración del mandato de los diputados y, consecuentemente, trastocó el modo en que se debía producir la salida de unos para que el cuerpo fuera renovándose parcial y periódicamente. El nuevo artículo quedó escrito en los siguientes términos: “*La Sala de Representantes, se renovará por terceras partes completamente, cada dos años, y parcialmente cada ocho meses y los dos primeros tercios será removidos por la suerte*”. El texto de la reforma del 15 de enero aclaraba en el último de sus artículos que quedaban “*vigentes las leyes de la materia*” que no estaban “*comprendidas en la reforma de los artículos precedentes*”¹³. Esta peculiar advertencia contenida en la ley de reforma provocó un desajuste entre algunas normas concretas del Reglamento Provisorio ya que, por ejemplo, en el artículo siguiente al primero de los modificados quedó la referencia a la proporcionalidad anterior: “*Si en el distrito de las doce mil almas que debe representar cada Diputado hubiese alguna fracción que llegue a ocho mil almas, se nombrará por dicha fracción un representante como si llegara el número de doce mil*”¹⁴. Sin embargo, en ningún lugar consta que los representantes hayan denunciado esta falta de coherencia de la Constitución luego de las modificaciones aludidas.

Tribunal de justicia. El 14 de agosto de 1826 el Congreso Provincial sancionó la ley de creación del Tribunal de Justicia previsto por el Reglamento Provisorio¹⁵. Según los términos del proyecto sancionado por los representantes, se reformaba tácitamente la Constitución. El artículo 3º de la ley de erección estableció que serían tres los Ministros de la Cámara, en clara oposición al documento constitucional donde se preveía que fueran “*cinco individuos*”¹⁶. Inmediatamente después de conocida la resolución de la Sala, el Gobernador Juan Bautista Bustos se opuso firmemente a esta reforma y, fundando su

¹² AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 15 de enero de 1826*, p. 29.

¹³ Ídem.

¹⁴ ART. 11º, CAP. X, SECCIÓN IV del Reglamento Provisorio de 1821 –versión publicada en 1832–, en *Compilación de leyes...* cit., p. 470.

¹⁵ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SÉPTIMA, CAP. XVIII, ARTS. 4º y ss.

¹⁶ AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 14 de agosto de 1826*, pp. 154-155. El artículo alterado disponía: “*Se erigirá un Tribunal de Justicia con el título de tribunal de apelaciones: se compondrá de cinco individuos, de los cuales tres cuando menos serán abogados recibidos, y los restantes podrán elegirse entre los demás ciudadanos, aunque no revista esta calidad, con tal que sean de notoria providad y luces, prefiriéndose entre éstos, en igualdad de circunstancias, los que tengan grados en una de las facultades mayores en alguna Universidad*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SÉPTIMA, CAP. XVIII, ART. 4º.

posición en la necesidad de evitar los inconvenientes y males que el reducido número de tres acarrearía, presionó a la Sala para que se respetara la integración diseñada por la Constitución, lo que finalmente sucedió¹⁷. Pero unos meses más tarde, luego de la renuncia de cuatro de los Ministros que componían el Tribunal en razón de aquella anulación de una de sus sentencias por parte de la Sala que ya ha sido analizada, fue el propio Gobernador el que solicitó la reducción del número de camaristas a tres. A pedido de Bustos, en la sesión del 20 de febrero de 1827 se aprobó la reforma por “*una mayoría competente de sufragios*”, esto es, la cantidad exigida para el tratamiento de asuntos constitucionales¹⁸. Esta nueva composición es la que figura en las publicaciones corrientes del Reglamento Provisorio eliminándose también la parte relativa a las calidades que debían reunir los designados: “*Se erijirá (sic) un Tribunal de Justicia con el título de Tribunal de Apelaciones: se compondrá de tres señores Ministros*”¹⁹.

I. 2. Paquetes de reformas

I. 2. 1. Primer momento (1826)

El año 1826 vino precedido de ciertos realineamientos políticos; a mediados del año anterior Bustos había disuelto la Legislatura y recién en diciembre el cuerpo representativo se había vuelto a instalar. La arena parlamentaria se hizo eco de las tensiones políticas, lo que se muestra en la sinuosa marcha de las instituciones y su estratégica utilización por parte de las distintas facciones enfrentadas. En materia constitucional, la tensión se tradujo en una intentona reformista encabezada por quien ocupaba la banca de Presidente en el Congreso Provincial: Juan Pablo Bulnes, un federal neto, ex-artiguista, que desde 1820 apoyó a Bustos llegando a ser su Ministro de Gobierno; durante 1826 lideró también la oposición de la Legislatura provincial a la Constitución unitaria sancionada por el Congreso Constituyente reunido en Buenos Aires²⁰.

El día 22 de febrero del año 1826, en el seno de la Comisión General Permanente que había sustituido a la Sala con motivo del receso vacacional, “*se consideró la inexcusable necesidad de algunas reformas al Reglamento Provincial que con frecuencia embarazaban la marcha del Cuerpo Legislativo y debían removerse*”²¹. Y es que en un escenario donde el Legislativo actuaba como soberano, las reglas estrictas –escritas– que

¹⁷ AHDCD, Tomo II, *Acta de la sesión del 5 de octubre de 1826*, pp. 177-178.

¹⁸ AHDCD, Tomo II, *Acta de la sesión del 20 de febrero de 1827*, p. 235. El análisis del caso que enfrentó a la Cámara de Apelaciones con el Gobernador Bustos y la Sala de Representantes se realiza en el Capítulo anterior: “IV. 2. La inestable formación del Tribunal de Apelaciones”.

¹⁹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SÉPTIMA, CAP. XVIII, ART. 4º, según la versión publicada en 1832, en *Compilación de leyes...* cit., p. 477.

²⁰ Una semblanza completa de Juan Pablo Bulnes en MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) *La formación histórica de la provincia de Córdoba*, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba, Argentina, p. 58.

²¹ AHDCD, Tomo II, *Acta de la sesión del 22 de febrero de 1826*, pp. 49-50.

limitaban su capacidad de actuar eran percibidas como incómodas ataduras; el texto debía depurarse para acercarse más a la práctica política.

La complejidad de la empresa intentó resolverse encargando a uno de los integrantes de la Comisión que preparara un paquete de reformas al texto constitucional y oportunamente las propusiera a la Sala para su consideración; la tarea recayó directamente en la persona del Presidente de la Sala, Juan Pablo Bulnes. Un mes y medio más tarde, en la sesión del 8 de abril, se presentó un proyecto de once artículos reformando varias disposiciones del Reglamento Provisorio, todas relativas a ciudadanía, ejercicio del voto, derechos políticos de los extranjeros y calidades exigidas para ser electo Representante o Gobernador de la Provincia. Aprobado en general esa misma mañana, durante la noche del 8 y la mañana del día siguiente se aprobaron en particular los once artículos presentados²².

Esas modificaciones no fueron las únicas que Bulnes había preparado. Al tiempo que se discutían en particular aquellos once artículos, entregó a la Comisión Permanente otro proyecto adicional de reformas, entre ellas, la secularización de la fórmula que debía utilizar el Gobernador al momento de tomar posesión del cargo –promesa en lugar de juramento– (Art. 14, Cap. XIV) tal como había sido realizado por Bustos al asumir su cargo antes de sancionada la Constitución; la incompatibilidad absoluta del cargo de representante con el desempeño de cargos o comisiones dadas por el Ejecutivo –eliminándose la posibilidad de ser confirmado como representante por una nueva elección– (Art. 6, Cap. XI); y la facultad del Poder Ejecutivo provincial de proveer canonjías y prebendas –antes prohibida– (Art. 16, Cap. XVI)²³. El segundo paquete de reformas también fue aprobado por los miembros de la Comisión, sin embargo, esto no se tradujo en una reforma inmediata de la Constitución. Como ella misma se había encargado de recordar en el mes de febrero, la Comisión no tenía facultades para tratar por sí asuntos constitucionales²⁴. Por lo tanto, una vez reinstalado el Congreso Provincial, el acuerdo pasó a la comisión de asuntos constitucionales para su tratamiento²⁵.

Reinstalado el cuerpo deliberativo provincial, nunca se dedicó a tratar ni estudiar aquel primer proyecto elaborado por Bulnes sobre ciudadanía y calidades para el ejercicio

²² AHDCDC, Tomo II, *Acta de las sesiones del 8 y 9 de abril de 1826*, pp. 53-66.

²³ AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 9 de abril de 1826*, pp. 63-65. La facultad de conceder prebendas es un rasgo típico del viejo soberano dispensador, la clave del poder a través de la gracia. En el caso cordobés la facultad no estuvo todo el tiempo en manos del Gobernador siendo precisamente uno de los puntos centrales que caracterizó los períodos de fortalecimiento del Ejecutivo.

²⁴ La ley relativa al término de las sesiones, presentada el 10 y sancionada el 14 de enero de 1826, establecía que la Comisión erigida en remplazo de la Sala de Representantes durante su receso “*No podrá tocar asuntos constitucionales*” (Art. 8º). En la sesión del 21 de febrero de 1826, al tratar sobre el reconocimiento del nombramiento de Rivadavia como Presidente de las Provincias Unidas, ella misma había reconocido que no tenía “*facultad según el artículo 8º de sus atribuciones... para tocar asuntos constitucionales*”, AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 21 de febrero de 1826*, p. 47.

²⁵ El 13 de abril de 1826 se reinstaló el Congreso Provincial y en la sesión del 17 se resolvió que el proyecto de Bulnes reformando el Reglamento Provisorio pasara a la comisión de asuntos constitucionales, AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 17 de abril de 1826*, p. 75.

activo y pasivo de las libertades políticas²⁶. Sin embargo, con motivo de la renuncia presentada por uno de los miembros de la Legislatura, el diputado Julián Gil, fundando la solicitud en su inhabilidad para ser electo por no haber alcanzado la edad correspondiente, el Congreso debió deliberar sobre similares consideraciones a las tratadas por Bulnes en su proyecto²⁷. Esta fue la razón por la cual, el 19 de abril de 1826, se aprobó la derogación del Art. 1º, Cap. VI del Reglamento Provisorio y su sustitución por éste: *“Todo hombre libre que haya nacido y resida en la Provincia es ciudadano, pero no entrará al goce de este derecho, es decir, no tendrá voto activo hasta la edad de 18 años, ni pasivo hasta haber cumplido 25, o ser emancipado, a más reúna otras calidades que en su lugar se exigirán”*²⁸. La reforma adoptó la distinción entre dos dimensiones diferentes del derecho al sufragio: la faz pasiva o posibilidad de ser electo, y la faz activa o facultad de elegir a los representantes para cuyo ejercicio se disminuía la edad exigida²⁹.

Unos meses más tarde, la Sala se dedicó a discutir y votar el segundo de los proyectos preparados por Bulnes que había sido aprobado previamente por la Comisión Permanente. Durante el debate se planteó la oposición a la reforma por parte de dos representantes que consideraban a algunos de los artículos presentados como una inapropiada laicización de las instituciones provinciales. El juicio de estos sujetos no era un sentir exótico y aislado, sino una convicción arraigada y profunda de la república cordobesa; y si bien en esta oportunidad su voz resultó impotente para frenar las modificaciones en el recinto de la Sala, con el tiempo acabaría imponiéndose como una de las categorías básicas de la cultura constitucional de la Provincia.

La primera de las medidas ejecutadas consistió en la supresión de la fórmula de juramento que debía prestar el Gobernador, quitando toda referencia a Dios, los Santos Evangelios, la Religión Católica y la Constitución provincial. En su lugar, se impuso una promesa de honor: *“Prometo bajo las garantías de honor y conciencia, desempeñar con fidelidad, pureza y exactitud, el cargo que acepto de Gobernador de esta Provincia, en la*

²⁶ En las actas de las sesiones de la Sala de Representantes no hay noticia de haberse tratado por el cuerpo deliberativo provincial, ni tampoco de haberse pasado el proyecto a comisión alguna para su estudio.

²⁷ El diputado Julián Gil presentó su renuncia al cargo de representante y *“la fundaba en la inhabilidad institucional por falta de 25 años a que no había llegado en edad”*, AHCDC, Tomo II, Acta de la sesión del 13 de abril de 1826, p. 68. Para la comisión encargada del estudio del caso, no debía admitirse *“la excusación hecha por el Señor Gil, representante electo [debiendo continuar] en este cargo a virtud de suplirle la Sala la edad que le falta para obtenerlo”*, AHCDC, Tomo II, Acta de la sesión del 18 de abril de 1826, p. 79.

²⁸ AHCDC, Tomo II, Acta de la sesión del 19 de abril de 1826, p. 84.

²⁹ Sobre esta distinción puede consultarse la obra de ARAGÓN REYES, M. (2007) “Derecho electoral: sufragio activo y pasivo”, en NOHLEN, D., ZOVATTO, D., OROZCO, J., y THOMPSON, J. (eds.) *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*, FCE, IIDH, UH, II, TEPJF, IFE, México. La redacción original del artículo desconocía esta distinción: *“Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado es ciudadano, pero no entrará en el goce y ejercicio de este derecho hasta que haya cumplido veinticinco años de edad, o sea emancipado; y a más reúna las calidades que en sus respectivos lugares se expresarán en este Reglamento”*, Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 1º.

ejecución y observancia de sus leyes e inviolable conservación de sus instituciones”³⁰. Cabe señalar que la opción por la promesa en lugar del juramento tenía su antecedente local más inmediato en las normas relativas al procedimiento penal, tal como lo reflejaron los textos constitucionales generales de los años 1815 y 1817³¹.

Otra de las modificaciones consistió en agravar la incompatibilidad ya existente entre el ejercicio del cargo de representante provincial y cualquier “*cargo, empleo o comisión del Ejecutivo, durante el ejercicio de representación*”. Como ya se ha adelantado, según la nueva redacción de la disposición constitucional, si un representante aceptaba el ofrecimiento del Gobernador, perdía absolutamente su lugar en el Congreso provincial; la reforma eliminaba la posibilidad de ser reelecto como medio para conservar su representación, sirviendo interinamente el empleo por sustituto —mientras duraba su mandato—³².

Finalmente, se derogó el artículo de la Constitución que incluía entre los límites al Poder Ejecutivo la provisión o presentación de canongías o prebendas eclesiásticas, ampliando consecuentemente las atribuciones del Gobernador en una suerte de regalismo aplicado al soberano local. La disposición quedó redactada en estos términos: “*El P.E. de la Provincia puede proveer todas las canongías y prebendas que vacasen, y remover a los que por algún crimen se hagan dignos de semejante castigo, ínterin la Provincia de Córdoba sea la única contribuyente para el sostén del coro de esta Iglesia Catedral*”³³. En un momento histórico en el que, a pesar de los diferentes intentos de cohesionar las comunidades políticas, la dispersión corporativa no había logrado superarse, la Iglesia era, a su vez, muchas iglesias, y cada Provincia trataba de atarla a su poder laico³⁴.

³⁰ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 12 de agosto de 1826*, p. 149. La redacción original del artículo 14º, Cap. XIV que se reforma establecía la fórmula del juramento en los siguientes términos: “Yo..., juro por Dios Nuestro Señor, y estos Santos Evangelios, que desempeñaré fiel y legalmente el cargo de Gobernador de esta República que se me confía: que observaré el presente Reglamento Provincial: que defenderé, conservaré, y protegeré la Religión Católica Apostólica Romana, única verdadera, celando su respeto e inviolabilidad: que defenderé el territorio de la Provincia y sus derechos, contra toda agresión, adoptando cuantas medidas sean convenientes para conservarlos”.

³¹ Cfr. AGÜERO, A. (2010b) “La justicia penal en tiempos de transición. La república de Córdoba, 1785-1850”, en GARRIGA, C. (Coord.) *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, Centro de Investigación y docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, México, pp. 267-305.

³² AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 12 de agosto de 1826*, p. 149.

³³ Ídem.

³⁴ Para un análisis sobre la relación entre la Iglesia y las soberanías provinciales, y los distintos problemas para el ejercicio del patronato durante la época que siguió al año 1820, véase el libro de MARTÍNEZ, I. (2013) *Una Nación para la Iglesia argentina. Construcción del Estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX*, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires. También resulta útil la obra de AYROLO, V. (2007a) *Funcionarios de Dios y de la República: clero y política en la experiencia de las autonomías provinciales*, Ed. Biblos, Buenos Aires. En materia de ejercicio del patronato por parte de la Provincia, véase AYROLO, V. (2004) “Argumentos y prácticas patronales durante la experiencia de la centralidad política en las Provincias Unidas, 1810-1821”, en *Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”*, Año 4, Nro. 4. Para un análisis del período inmediatamente anterior al que aquí se aborda, PEIRE, J. (2000) *El taller de los espejos. Iglesia e imaginario 1767-1815*, Ed. Claridad, Buenos Aires.

I. 2. 2. Segundo momento (1830-1832). Reformas y publicación oficial del texto

Hacia mediados del año 1830, durante el gobierno del General José María Paz, se reconoció la necesidad de generalizar el conocimiento del Reglamento Provisorio del que “no debiera carecer ni el último de los Ciudadanos”³⁵. El hecho de no haberlo dado a la prensa desde 1821 era la causa de que el Reglamento “no haya salido de los Tribunales”. Y es que dentro del imaginario jurídico tradicional, las normas que hoy se entenderían como derecho positivo eran normas dirigidas principalmente a los oficiales y a quienes debían ejecutarlas, no a la ciudadanía; en consecuencia, el modo vigente en materia de publicación normativa no era otro que el de la circulación de textos entre autoridades, el envío de la disposición al sujeto obligado a cumplirla aguardando su correspondiente acuse de recibo³⁶. Sólo eventualmente se pregonaban las normas a son de caja y voz de pregonero cuando se trataba de bandos de buen gobierno, por lo tanto, con la intención de difundir materialmente la norma constitucional, el Ejecutivo instó a la Sala de Representantes para que de manera urgente se contrajera “con la mayor asiduidad, y si es posible con preferencia a todo otro negocio” a pasar un ejemplar de la Constitución al Gobierno para mandarlo a publicar por la prensa. Sin embargo, la tarea no era tan sencilla como parecía. Desde su sanción, el Reglamento había ido sufriendo en distintos tiempos “varias y muy substanciales alteraciones”. Por ello, era preciso reconsiderar toda la actividad legislativa de la última década para ordenar el texto vigente, aprovechando la oportunidad para incluir también las reformas que fuera conveniente realizar³⁷. Pese a la urgencia declarada en el oficio por el Ejecutivo, las circunstancias políticas ocuparon al Congreso Provincial en otros asuntos al punto que durante el resto del Gobierno de Paz no se volvió a mencionar la necesidad de publicar la Constitución. La facción federal que sucedió a Paz también consideró la necesidad de disponer de copias del Reglamento para “poder expedirse mejor en todos los negocios públicos”³⁸. Esto refleja de qué modo, a pesar de la tensión entre materialidad y Constitución formal, el texto cumplía una misión –al menos simbólicamente– de cohesión y sustento de la comunidad política que trascendía el faccionalismo.

Un año y medio después la situación no había cambiado; es más, el cuadro de situación planteado por el representante Javier Rodríguez en la sesión del 29 de febrero de 1832 era aún peor. En su alocución denunció “la falta notable que se sentía en los Tribunales del Reglamento de Provincia” y volvió a insistir en la necesidad de ordenar su

³⁵ Oficio del Poder Ejecutivo a la Sala de Representantes del día 2 de julio de 1830, en SILVA, F. (1931a) “Federalismo del Norte y del Centro en 1820”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 18, Nros. 5-6, julio-agosto, pp. 135-295.

³⁶ Sobre la publicidad normativa entre antiguo y nuevo orden debe consultarse la obra de LORENTE, M. (2001) *La Voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889)*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

³⁷ Todas estas consideraciones, en el oficio citado.

³⁸ Un año más tarde de planteada la necesidad por el Ejecutivo, la difusión del Reglamento era todavía una materia pendiente. Instalada la nueva Legislatura, después de la prisión del General Paz y la designación de Reynafé como Gobernador titular, uno de los representantes mocionó para que “se pasase a todos los señores Representantes para poder expedirse mejor en todos los negocios públicos, un tanto del Reglamento Provisorio”, AHDCD, Tomo IV, *Acta de la sesión del 31 de agosto de 1831*, p. 71.

impresión³⁹. La moción fue secundada por otros miembros de la Sala y se acordó nombrar una comisión especial para poner en claro las reformas que habían tenido lugar hasta la fecha con el objeto de pasarlo al Gobierno para su impresión⁴⁰. Los avatares que debió sufrir esta comisión fueron muchos: comenzó su trabajo de inmediato, estudió el texto, tuvo que ser reintegrada con los representantes Derqui y Aguirre y realizó varias consultas a la Sala sobre la vigencia o no de algunas reformas que habían sido practicadas⁴¹. Finalmente, el 4 de mayo de 1832 presentaron un dictamen en el cual se condensaba todo el trabajo realizado para su correspondiente consideración por el pleno de la Sala en las sesiones siguientes. A la ordenación del cuerpo normativo realizada por los representantes comisionados se agregó la reforma del artículo 11° del Capítulo XIV, que trataba sobre el nombramiento del Gobernador interino en casos de ausencia del titular, y la derogación de la modificación practicada en 1826 sobre la fórmula mediante la cual el Gobernador debía jurar su cargo al momento de tomar posesión del mismo volviéndose a la católica versión original de 1821: “Yo..., juro por Dios Nuestro Señor, y estos Santos Evangelios... que defenderé, conservaré y protegeré la Religión Católica Apostólica Romana, única verdadera, celando su respeto e inviolabilidad”⁴².

El resultado final de toda esta labor fue la ratificación de la decisión ya tomada acerca de la impresión del texto constitucional según el trabajo realizado por la comisión encargada de su estudio⁴³. El día 13 de junio de 1832 se resolvió enviar al Poder Ejecutivo de la Provincia un ejemplar del Reglamento Provisorio tal como había quedado para su publicación, satisfaciendo de ese modo la “necesidad que tienen los Tribunales y demás ciudadanos de la instrucción de las leyes principales que rigen nuestra Provincia”⁴⁴. El texto impreso en los talleres de la Universidad de Córdoba, incluyó todas las alteraciones que el Reglamento Provisorio de 1821 había ido sufriendo a lo largo de sus primeros once años de vigencia precedentemente analizadas⁴⁵.

³⁹ AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 29 de febrero de 1832*, p. 115.

⁴⁰ Ídem, pp. 115-116.

⁴¹ En la sesión del 13 de marzo de 1832 la comisión elevó una consulta sobre la vigencia o no de ciertas disposiciones del Reglamento, sin embargo, la consulta fue rechazada por la Sala en virtud de no estar presentada según las formas prescriptas por el Reglamento Interno de Debates, AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 13 de marzo de 1832*, pp. 120-121. El 6 de abril se decidió evacuar la consulta de la comisión sobre la vigencia de la reforma que se había hecho en 1826 sobre la fórmula del juramento para tomar posesión del cargo de Gobernador y si la Sala había derogado o no el Capítulo XXII del Reglamento Provisorio referido al Poder Judicial de los Estados. AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 6 de abril de 1832*, p. 133. El 10 de abril se consultó sobre la reforma del artículo 1° del Capítulo VI del Reglamento sobre ciudadanía, AHCDC, Tomo IV, *Acta de la sesión del 10 de abril de 1832*, p. 136.

⁴² Estos acuerdos fueron tomados en las sesiones del 18 de mayo y 8 de junio del año 1832. AHCDC, Tomo IV, *Actas de las sesiones del 18 de mayo y 8 de junio de 1832*, pp. 149 y 159.

⁴³ Esta decisión de enviar a imprimir el texto estaba tomada desde la sesión del 29 de febrero en que se había ordenado el nombramiento de la comisión.

⁴⁴ En estos términos se pronuncia el representante Santiago Derqui en el oficio que envía al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre de 1832 instando a que cumpla con la publicación del texto que la Sala le había mandado con la orden de impresión, en CELESIA, E. (1932) *Federalismo Argentino: Apuntes Históricos, 1815-1821, Córdoba*, Tomo III, Lib. Cervantes de Julio Suárez, Buenos Aires pp. 26-27.

⁴⁵ Esta versión oficial del Reglamento Provisorio, la primera mandada a publicar, con fecha 11 de diciembre de 1832, puede encontrarse en *Compilación de leyes...* cit., pp. 465-487.

II. EL CÓDIGO CONSTITUCIONAL PROVISORIO DE 1847

II. 1. Génesis y Sanción del Código Constitucional Provisorio de 1847

II. 1. 1. Necesidad de reforma y debate constituyente

Manuel “Quebracho” López fue el Gobernador de Córdoba durante los años del rosismo. En 1847 llevaba al frente del Ejecutivo provincial doce años, desde 1835, cuando se observó la necesidad de una nueva Constitución⁴⁶. Ya se ha visto cómo el Congreso Provincial se las ingenió para prorrogar el mandato del Gobernador una vez vencido su segundo período constitucional de cuatro años. En esa oportunidad, pese al planteo infructuoso de una modificación al Reglamento, y apelando subsidiariamente a lo extraordinario de la situación, se decretó en 1844 la continuación de López en el poder durante tres años más suspendiendo la elección de Gobernador prevista por el Art. 8 del Cap. XIV del Reglamento Provisorio; todo sin perjuicio de mantener su vigencia y aconsejar su reconsideración⁴⁷. Siguiendo ese consejo de revisión, y estando próximo a vencerse el plazo acordado que mantenía legítimamente al Gobernador en su sillón, a finales del año 1846 comenzó a pergeñarse la redacción y sanción de un nuevo texto constitucional para la Provincia.

A mediados de ese año la Sala invitó a los miembros de la comisión de negocios constitucionales a expedirse sobre “*el asunto relativo al arreglo y reforma del reglamento provisorio*”⁴⁸. Sin embargo, fue recién en octubre de 1846 cuando, a pedido de uno de los miembros de esa comisión, se concretó una sesión extraordinaria del Congreso Provincial para avanzar en los detalles de la reforma constitucional. La intención del diputado opinante, Lorenzo Villegas, era que el cuerpo representativo en pleno instruyera a la comisión encargada de revisar el texto sobre “*qué artículos debían sufrir la reforma, o si todo el Código*” debía someterse al procedimiento de modificación⁴⁹. Según su parecer, todo el Reglamento Provisorio “*estaba en*

⁴⁶ Para un análisis del alineamiento político del Gobernador López pueden consultarse las obras de AYROLO, V. (2007a) Ob. cit.; y ROMANO, S. (2002) *Economía, Sociedad y Poder en Córdoba. Primera mitad del siglo XIX*, Ferreyra Editor, Córdoba.

⁴⁷ *Compilación de leyes...* cit., p. 177. La necesidad de reformar la Constitución de 1821 fue puesta de manifiesto por los representantes al momento de debatirse el decreto que prorrogó el mandato de López. Desde la comisión que había preparado el proyecto se hizo hincapié en “*los inconvenientes que presentaba en estas circunstancias el cumplimiento del Capítulo 14 del Código Provincial, y la necesidad suma de su reforma, como de otras del mismo Código, que no debían tener efecto en circunstancias como las presentes, que eran extraordinarias y por lo tanto los males insubsanables que traerían a la Provincia su observancia*”. Más allá del argumento sobre lo extraordinario, se hizo presente también “*con ejemplos prácticos que nuestro Código estaba reformado muchas partes de él, que actualmente no ha sido reimpresso con tales reformas, como debió, observando asimismo que antes de ahora había sido infringido muchas partes de él*”, en AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 27 de junio de 1844*, pp. 197-199.

⁴⁸ AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 27 de julio de 1846*, p. 280.

⁴⁹ AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 28 de octubre de 1846*, pp. 320-323. El diputado Lorenzo Villegas era uno de los tres sujetos que, junto a José Norberto de Allende y José Gregorio Baigorri, había sido designado por la Asamblea Soberana del año 1820 para la redacción del Reglamento Provisorio pero una comisión del Ejecutivo lo obligó a ausentarse de la Provincia y abandonar la obra constituyente (véase

contradicción y sin ajustamiento a las bases del sistema republicano de libertad por el cual se habían expresado todos los pueblos de la República", pero correspondía a la Sala, en tanto que órgano constituyente, resolver sobre el particular⁵⁰.

Pese a la lógica argumental desplegada por Villegas, el Vicepresidente del Congreso Provincial opinó que el *"trabajo de revisar y determinar la reforma en parte o en el todo, era de la privativa inspección de la comisión"*⁵¹. Aunque esgrimió una defensa amplia de las facultades de la comisión, seguidamente condicionó el encargo intimándola a *"no variar en la reforma la forma del sistema actual del gobierno Representativo Federal sancionado por todos los pueblos de la República Argentina"*⁵². El unanimismo rosista que había caracterizado los últimos años del período rioplatense no permitía una solución distinta; esta proposición fue la que acabó siendo aprobada por los representantes⁵³. Aunque podría pensarse en una aparente contradicción entre las posturas planteadas, si bien se mira el asunto, los dichos de uno y otro estaban más cerca de lo imaginado; las palabras del Vicepresidente otorgando libertad a la comisión no excluía al Congreso del rol constituyente ya que reservaba para él la facultad de revisar, discutir, modificar y aprobar el proyecto presentado por aquélla.

El pequeño grupo de diputados sobre el que recayó la tarea de preparar el proyecto quedó conformado por el Dr. Lorenzo Villegas, el Coronel Francisco Malarín y por Don Benito Otero –miembros natos de la comisión de Negocios Constitucionales– a quienes se sumaron, por cuestiones de logística y auxilio erudito, dos miembros titulares más del cuerpo representativo ya que *"la reforma del reglamento constitucional era un asunto de alta gravedad que requería mayor número de luces para expedirse con el mejor acierto"*⁵⁴. A diferencia de la primera oleada de constituciones hispanoamericanas luego de la crisis de la Monarquía Católica, en esta oportunidad no se encargó una Constitución a un reducido grupo de expertos extraños a la Sala de Representantes como ocurrió con el Reglamento de 1821. El gobierno ya estaba en marcha; durante los últimos años habían ido consolidándose ciertas prácticas políticas y la reforma constitucional no debía ser mucho más que una adaptación de la letra de la norma a tales prácticas, una formalización

en el Cap. I de este trabajo el epígrafe "II. 3. Cuestión procedimental: designación de una comisión redactora, su composición y labor").

⁵⁰ AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 28 de octubre de 1846*, pp. 320-323.

⁵¹ Ídem.

⁵² Ídem.

⁵³ Sobre la influencia del Gobernador Juan Manuel de Rosas en el resto de las provincias rioplatenses puede consultarse, entre otras obras, la compilación de trabajos compilada por GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comp.) (1998) *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, Eudeba, Buenos Aires. Muchos de los trabajos que componen la obra están dedicados a este asunto; FRADKIN, R. y GELMAN, J. (2015) *Juan Manuel de Rosas. La construcción de un liderazgo político*, Edhasa, Buenos Aires. También SALVATORE, R. (1998b) "Consolidación del régimen rosista (1835-1852)", en GOLDMAN, N. (dir.) *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, Colección Nueva Historia Argentina, Tomo III, Sudamericana, Buenos Aires

⁵⁴ La moción de elevar el número de integrantes de la comisión, con el fundamento expuesto, había sido presentada por el diputado Malarín, AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 4 de noviembre de 1846*, p. 326.

de la materialidad. Con esa finalidad, quiénes mejores que los propios protagonistas del entramado institucional de la Provincia.

Distinto pareciera ser el caso en lo que a “cuestión nominal” –para utilizar la misma denominación propuesta en el primer capítulo– se refiere. De manera similar a la consulta realizada por la comisión redactora del proyecto del Reglamento Provisorio de 1821, Villegas planteó ante la Sala una moción que, a modo de indicio, permite bosquejar la trama del pensamiento político constitucional de los constituyentes cordobeses de aquella época para quienes el texto tenía un valor retórico destacable. La demanda concreta del representante era que *“en lugar de la reforma del reglamento que ha acordado V.H. se formase una constitución permanente de la provincia”*⁵⁵. Un cuarto de siglo más tarde volvía a plantearse en el cuerpo cordobés la misma dicotomía entre “Reglamento”, al que se acoplaba el calificativo de provisorio, y “Constitución”, concepto asociado a la idea de permanencia. Esta propuesta de interpretación, indirectamente inferida al momento de analizar las breves discusiones que tuvieron lugar en septiembre de 1820, cobra mayor potencia promediándose la centuria a partir de las palabras del propio Villegas ya que, según su juicio, *“hay una especie de impropiedad o contradicción entre las expresiones de reglamento provisorio y al mismo tiempo constitucional, porque la expresión de provisorio demanda una idea de cosa temporal y la de constitucional una cosa permanente que tiene un sentido diferente, así es que forman un contraste por su diametral oposición”*⁵⁶. Lamentablemente la falta de debate político priva al lector de mayores datos para determinar la trama de la cultura constitucional de la época. Antes que debatir los extremos de la proposición de Villegas, otro representante planteó la impropiedad de la moción –lo que acabó fundando su rechazo– debido a que tendía *“a derogar un artículo de la ley que... sancionó la H. Representación por cuya resolución se acordó la reforma del Reglamento Constitucional Provisorio de la Provincia y no una constitución permanente”*⁵⁷.

En apenas unas semanas desde su nueva conformación, con fecha 1º de diciembre del año 1846, la comisión de Negocios Constitucionales elevó a la Sala de Representantes el producto de su labor, y diez días más tarde el cuerpo en pleno se abocó a la discusión constituyente, aprobando en esa misma sesión el proyecto en general⁵⁸. Antes que una reforma, el borrador contenía un nuevo documento constitucional, todos los artículos que lo componían eran de nueva redacción; según uno de sus redactores, el texto no era *“otra cosa, así en lo general, como en lo particular de cada uno de sus artículos y aún los*

⁵⁵ AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 6 de noviembre de 1846*, pp. 328-329.

⁵⁶ Ídem.

⁵⁷ Ídem.

⁵⁸ Los miembros que componían la Sala de Representantes encargada de discutir y sancionar el Código Constitucional Provisorio de 1847 son los mismos que firman el ejemplar promulgado por el Gobernador a principios de febrero de ese año: *“Calisto M. Gonzalez–Presidente – Inocente Castro – Felis de la Peña – Eusebio Cazaravilla – Francisco Malarin – Miguel Aparicio Rodriguez – Lucas Funes – Nicolas Peñaloza – Carlos Tagle – Casimiro Martinez – José Maria de Allende – Benito de Otero – Lorenzo Villegas – Severo Gonzalez – Eduardo Ramirez de Arellano – Juan Ramon de la Rosa Torres–Secretario.–”, Código Constitucional Provisorio de la Provincia de Córdoba de 1847*, en AGN, Sala X, 5-4-3, Gobierno de la Provincia de Córdoba 1838-55.

ulteriores, que los principios más sagrados e inconcusos de la ley natural respetados en todas las naciones civilizadas, especialmente en las republicanas que siempre han observado su más fiel observancia, a excepción de los gobiernos despóticos que no reconocen otro principio ni ley que su voluntad”⁵⁹. Ese rechazo a la idea de que la ley es la voluntad general forma parte de los presupuestos básicos de la constitución material, e incluso un constitucionalista como Alberdi tenía la misma convicción⁶⁰. Seguidamente, entre el 11 de diciembre de 1846 y el 13 de enero de 1847, a lo largo de doce sesiones ininterrumpidas en las que únicamente se trabajó sobre el borrador presentado por la comisión, se discutió y fue sancionándose progresivamente, punto por punto, la nueva Constitución cordobesa⁶¹.

⁵⁹ AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 11 de diciembre de 1846*, pp. 331-332.

⁶⁰ “The adoption of a system of national codification was not a consequence, as it could have been in the French case, of a new voluntarist conception of law grounded on the power of the general will (such as it had been defined in the article 6 of the Declaration of the Rights of Man of 1789). Precisely, talking about that voluntarist definition of the law, Juan Bautista Alberdi, one of the intellectual fathers of the Argentinean constitution, said that such a statement was a narrow and materialistic definition of the law as it made the human legislator ignore the truly starting point for his job which consisted of a ‘simple work of interpretation, so to speak’. Moreover, he added: ‘It is a kind of sacrilege to define the law as the general will of a people. The will is powerless before the facts that are work of Providence’”, AGÜERO, A. (2013a) “Law and Criminal Justice in the Spanish Colonial Order: the Problematic Enforcement of the Legality Principle in the Early National Law in Argentina”, en MARTYN, G., MUSSON, A. y PIHLAJAMÄKI, H. (eds.) (2013) *From the Judge’s Arbitrium to the Legality Principle. Legislation as a Source of Law in Criminal Trials*, Duncker & Humblot, Berlín, pp. 229-251, p. 248.

⁶¹ En la sesión del día 11 de diciembre de 1846 además de aprobarse el proyecto en general se aprobaron también los artículos de los capítulos de la primera sección (Caps. I, II y III), AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 11 de diciembre de 1846*, pp. 331-333.

En la del día 12, los capítulos de la segunda sección (Caps. IV y V), AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 12 de diciembre de 1846*, pp. 334-338.

El día 15, los primeros siete artículos del Cap. VI, sección tercera (siete artículos según el proyecto elevado, arts. 1-6 en la versión finalmente sancionada ya que se suprimió el artículo seis del borrador preparado por la comisión), AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 15 de diciembre de 1846*, pp. 339-345.

El día 16, se aprobó solamente el artículo siete (artículo seis en la Constitución sancionada) del mismo capítulo, AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 16 de diciembre de 1846*, pp. 346-347.

El día 17 se aprobaron los tres artículos restantes del capítulo VI, el artículo único del capítulo VII, y los dos primeros artículos del capítulo siguiente, sección cuarta, AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 17 de diciembre de 1846*, pp. 348-349.

El día 22 se continuó con la aprobación de los demás artículos del capítulo VIII y todos los que formaban la sección cuarta (Caps. IX y X), además de aprobarse íntegramente la sección quinta (Cap. XI), AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 22 de diciembre de 1846*, pp. 350-354.

El día 23, se comenzó a discutir la sección sexta, aprobándose el capítulo XII y la primera disposición del capítulo siguiente, AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 23 de diciembre de 1846*, pp. 355-357.

En la última sesión del año, la del día 24 de diciembre de 1846, se aprobaron todos los artículos restantes del capítulo XIII e íntegramente los capítulos XIV y XV, AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 24 de diciembre de 1846*, pp. 358-360.

Luego de un breve receso, en la primera reunión del siguiente año continuó discutiéndose y aprobándose por el Congreso Provincial la nueva Constitución cordobesa. En la sesión del día 2 de enero de 1847 se sancionaron los primeros diez artículos del capítulo XVI, AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 2 de enero de 1847*, pp. 7-11.

El día 7 de enero se aprobaron los artículos 1-13 del capítulo XVI (se suprimió el artículo 14 del proyecto), todas las disposiciones del capítulo XVII, y el único capítulo que conformaba la sección séptima (Cap. XVIII), AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 7 de enero de 1847*, pp. 12-14.

Si se traza una línea comparativa entre el proceso constituyente de 1821 y el de 1847 podrán inducirse ciertas similitudes entre uno y otro momento. Las únicas fuentes disponibles para el análisis del fenómeno son las magras actas de las sesiones durante las cuales se llevaron a cabo los debates sobre cada uno de los artículos del proyecto. La ausencia de fuertes discusiones, vuelve a demostrar la uniformidad del pensamiento de una elite, mucho más cohesionada desde el predominio de la facción federal en las instituciones y la progresiva eliminación de sus enemigos unitarios del escenario político. Apenas unos pocos enfrentamientos de opiniones tuvieron lugar en el seno del Congreso: cuestiones irresueltas que probablemente se habían discutido también durante los trabajos preparativos de la comisión de negocios constitucionales, ya que fueron precisamente los miembros de esa comisión quienes plantearon en más de una oportunidad modificaciones a los artículos tal como se encontraban redactados en el proyecto que la Sala de Representantes estaba discutiendo.

El primer y más urticante punto de disputa se generó a partir de la propuesta del representante Villegas en relación con un tema tan caro a la sociedad cordobesa como la religión. En concreto, el diputado se oponía a la redacción original del artículo según el cual “*La Religión Católica, Apostólica, Romana*” era definida como “*la Religión del Estado*”⁶². El argumento no se desarrollaba por la vía del reconocimiento de la libertad de cultos ni mucho menos; lejos de posturas de ese tipo se había estado desde siempre en Córdoba, y la alineación política con la “Santa Causa de la Federación”, característica del rosismo, obliteraba de plano la posibilidad de un planteamiento así⁶³. La objeción de Villegas tenía que ver con el adjetivo “romana” con que se calificaba a la Religión, porque ello “*importaba conceder al Sumo Pontífice de Roma un poder indeterminado e indefinido*” sobre la Provincia y ese era uno de los puntos más discutidos en aquel momento: las diferentes posiciones a favor y en contra de un mayor grado de autonomía de las comunidades políticas respecto de Roma.

El diputado argumentaba que habiendo en el Sumo Pontífice de Roma “*dos poderes, uno espiritual y otro temporal*”, tal como estaba concebido el artículo “*podría dar lugar a fuertes interpretaciones que perjudicara nuestra independencia y libertad*”⁶⁴. Según su parecer, durante las guerras de independencia el Papa “*debió habernos dirigido como a hijos espirituales [aconsejando] los medios y recursos que en tan críticas*

El día 9 se aprobó la octava y última sección del proyecto, compuesta por un único capítulo, el XIX, AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 9 de enero de 1847*, pp. 15-16.

Finalmente, en la sesión del día 13 de enero del año 1847 se volvieron a discutirse –y a votarse sobre su aprobación o no– ciertas disposiciones que habían quedado pendientes de sesiones anteriores por no haberse alcanzado en su momento las mayorías necesarias para aprobar las modificaciones al proyecto original propuestas en la Sala por algunos representantes. Se trataba de los siguientes artículos: Art. 7, Cap. VI (aprobado con modificaciones); Art. 4, Cap. XVI (aprobado según la versión original preparada por la comisión); Art. 10, Cap. XVI (aprobado con la modificación propuesta), AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 13 de enero de 1847*, pp. 17-19.

⁶² *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEGUNDA, CAP. V, ART. 1º.

⁶³ Sobre la relación entre política, religión e Iglesia en este período véase los trabajos de MARTÍNEZ, I. (2013) Ob. cit., y AYROLO, V. (2007a) Ob. cit.

⁶⁴ AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 12 de diciembre de 1846*, pp. 334-338.

circunstancias nos convenía adoptar para mantener ileso el espíritu de nuestra sagrada religión"; y sin embargo, había abandonado a su suerte a las Provincias Unidas, con lo cual, no debía ahora rendírsele pleitesía y sumisión⁶⁵. Una vez pacificado el territorio rioplatense y organizado constitucionalmente bajo la forma federal, si las legislaturas provinciales así lo decidían, el Gobierno General de la Nación podría celebrar un concordato con el Sumo Pontífice regulando los términos de la relación bilateral⁶⁶.

La postura de Villegas corría exclusivamente por el plano de las relaciones políticas que la Provincia debía mantener con otros sujetos, y no representaba ningún ataque a los valores católicos que en Córdoba estaban íntimamente arraigados, incluso sus propias palabras así lo reconocían. Sin embargo, la reacción conservadora del resto de los diputados no se hizo esperar. Inmediatamente, Calixto González *"reclamó se le hiciese guardar el orden al señor Villegas porque faltaba al decoro y alto respeto de la H. Representación, pretendiendo substraer la Provincia de la sumisión debida en lo espiritual al Sumo Pontífice Romano [...] es mejor siempre que el texto de la ley sea más claro que su espíritu mismo; mucho más en materia de religión que es la base fundamental del Estado"*⁶⁷. Por su parte, el representante Arellano rechazó la propuesta aclarando que justamente "apostólica" y "romana" eran los atributos esenciales que distinguían *"nuestra Religión Católica única y verdadera de las demás sectas y falsas religiones que muchos protestantes, como Lutero, Calvino y otros han procurado constantemente confundirlas con la de Jesucristo"*⁶⁸. Este último iba más allá, proponía que al artículo en cuestión se agregara, después de la prohibición de enseñar doctrinas contrarias a la de Jesucristo, la aclaración siguiente: *"enseñada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana"*⁶⁹. El diputado Funes apoyaba también la moción, ya que para él *"la ley debe poner bases fijas muy principalmente en materia de religión, así es que se hace indispensable la expresión romana pues con esta se indica la íntima unión y dependencia con el Vicario de Cristo, cabeza de la verdadera Iglesia"*⁷⁰. Finalmente, el artículo quedó sancionado – once votos contra uno– según su redacción original en el proyecto –conservando el calificativo de "romana"– con la adición planteada por Arellano.

Las disposiciones generales sobre ciudadanía y materia electoral sufrieron también pequeñas modificaciones con respecto a su redacción original. La mayoría de ellas fueron

⁶⁵ Ídem.

⁶⁶ Un acuerdo *"por el que quedasen deslindados los poderes espirituales que nosotros reconociésemos o debiéramos reconocer en su Santidad; al paso que su Santidad reconociese también el modo como debía ejercerlas sobre nosotros, atendida la distancia que nos separa de la Corte de Roma y tomando en consideración todos los fundamentos con que la Nación Argentina puede exigir de su Santidad la garantía de inmunidad de sus derechos temporales, como igualmente el que la más exacta y sagrada observación de los mandamientos del Decálogo iluminados por nuestro señor Jesucristo y sus venerables discípulos en los Santos Evangelios se mantengan entre nosotros puros e ilesos, para que no sólo sea la norma de nuestra conducta interior política y civil, sino también de la internacional"*, ídem, p. 336.

⁶⁷ Ídem.

⁶⁸ Ídem.

⁶⁹ Ídem, p. 337.

⁷⁰ Ídem.

cuestiones meramente textuales inspiradas por un espíritu localista que buscaba afianzar la identidad cordobesa y privilegiar a los hijos de la Provincia, cargando de requisitos a los sujetos que no gozaban de tal identidad para el goce y ejercicio de los derechos políticos. En ese sentido, por ejemplo, la moción del Presidente del Congreso, representante Tagle, que proponía la calificación de los dos mil pesos de patrimonio que se exigía a los extranjeros para disfrutar del derecho al sufragio activo en las asambleas cívicas. Según su alegato, los dos mil pesos debían ser “*en finca raíz y no en otros valores que por esta calidad de capital, ofrece naturalmente el mayor interés al extranjero para residir en el país*”⁷¹. La intención de Tagle, que bien podría pensarse también como una estrategia de la elite terrateniente frente a otras para consolidarse en el poder, era que los extranjeros se instalaran permanentemente en Córdoba y entendía que la propiedad de bienes raíces garantizaba esa circunstancia. Sin embargo, la propuesta recibió fuertes críticas del resto de la bancada, en primer lugar “*porque la calidad del capital en bienes raíces no ofrecía al extranjero ese mayor interés para residir en el país*”, y en segundo lugar, porque se aceptaba como legítima la actitud que precisamente Tagle quería desincentivar ya que “*la calidad de especulación que estos [extranjeros] hacían con sus artes o industria que ejercían generalmente se veía que era con el objeto de hacer sus adquisiciones en metálico u otros valores de fácil expendio para facilitar con menos trabajo su transporte para otro país donde les prometiese mayores ventajas de producción sobre el ramo de industria que ejerciese*”⁷².

Una discusión acerca de la exigencia de renuncia o no a toda otra ciudadanía para los americanos que quisieran tener voto activo y pasivo para empleos de república –algo que finalmente acabó sancionándose en ese sentido–, sirve para confirmar lo problemático que todavía resultaba la determinación del alcance del sentido de la categoría “americano” en el contexto cordobés de mediados del XIX⁷³. El debate principal giraba en torno a, si para “*guardar un espíritu de armonía y buena inteligencia con los demás estados americanos vecinos*” era conveniente exigir aquella renuncia o no, proponiéndose la posibilidad de que un mismo sujeto gozara de dos ciudadanía. Sin embargo, lo que resulta interesante destacar es cómo para algunos el adjetivo americano incluía a todos los ciudadanos del continente que no fueran cordobeses, es decir, se podía ser cordobés o americano y no había una tercera alternativa; y cómo para otros había un

⁷¹ AHDCD, Tomo VI, *Acta de la sesión del 15 de diciembre de 1846*, pp. 339-345.

⁷² Esta postura en contra de la propuesta de Tagle fue sostenida por los representantes Funes, Arellano y González, y acabó imponiéndose en la votación, Ídem, p. 340.

⁷³ Para un profundo análisis sobre las diversas expresiones de identidad política en el Río de la Plata en los tiempos de las independencias, véase CHIARAMOTE, J. (1989) “Formas de identidad en el Río de la Plata luego de 1810”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, 3ª serie, Nº 1, págs. 71-92. Sobre la identidad americana y la identificación de América como una patria común, véase el trabajo de ENTIN, G. (2013) “El patriotismo americano en el siglo XVIII. Ambigüedades de un discurso político hispánico”, en HÉBRARD, V. y VERDO, G. (eds.) *Las independencias hispanoamericanas: un objeto de historia*, Casa de Velázquez, Madrid, pp. 19-34. Para comprender el derrotero del proceso de construcción identitario puede consultarse el trabajo de ORTEMBERG, P. (2004) “Algunas reflexiones sobre el derrotero social de la simbología republicana en tres casos latinoamericanos. La construcción de las nuevas identidades políticas en el siglo XIX y la lucha por la legitimidad”, en *Revista de Indias*, Vol. 64, Nro. 232, pp. 697-720.

grado intermedio de identidad política entre cordobés y americano: el ser argentino. Las palabras de Calixto González –secundadas por el representante Funes– son elocuentes; para él, preguntarse como lo hacía Villegas si la voz “americano” comprendía a los ciudadanos de las Provincias Confederadas era equivocado *“porque de estos no habla el artículo, sino únicamente de los extranjeros americanos y no argentinos”* quienes *“no pueden a un mismo tiempo ser ciudadanos y pertenecer a dos países diferentes”*⁷⁴.

Aquel mismo espíritu localista había llevado a los miembros redactores del proyecto a incluir un artículo que excluía a los españoles del disfrute del derecho de sufragio en todas sus dimensiones ya que el gobierno de ese país no había reconocido aún la independencia *“de Nuestro Estado Argentino”*. Una moción fundada en el principio de la generalidad de las leyes proponía volver a redactar el artículo extendiendo la exclusión a todos los ciudadanos de países cuyos gobiernos no hubieran reconocido la independencia –naturalmente, allí quedarían incluidos los españoles–⁷⁵. Sin embargo, la idea fuertemente arraigada en la Constitución de exclusión política del enemigo –como se verá luego en relación con los “salvajes unitarios”– sustentó un alegato a favor de mantener el artículo tal cual había sido originalmente escrito, circunscripto a los extranjeros enemigos españoles⁷⁶.

Pero el parecer de los representantes en este asunto no era ni remotamente uniforme, lo cual demuestra el apego de gran parte de la población cordobesa por el pasado colonial luego de disipado el fervor revolucionario. La exposición más minuciosamente presentada y que acabó imponiéndose en la votación –proponiendo la supresión del artículo en cuestión– fue la de Don Severo González que, además de apelar al principio de la igualdad según el cual *“la ley debe ser una misma para todos ya sea que premie, ya que castigue”*, declaraba la existencia *“entre nosotros de un sentimiento de simpatía, entre los españoles que trae su origen de nuestros antepasados el que no existe con los demás extranjeros, así es que no importa que el gobierno español no haya reconocido otra independencia hasta hoy para que por esto se le prive a un español europeo el goce de un derecho que su honradez y buenos procedimientos le han hecho acreedor a merecer la confianza de los ciudadanos hijos del país”*⁷⁷.

⁷⁴ AHCDC, Tomo VI, Acta de la sesión del 15 de diciembre de 1846, pp. 341-342.

⁷⁵ Este mismo razonamiento es el que fundamentó luego la reescritura del artículo 8 (artículo 7 en la versión promulgada) del Cap. VI que en lugar de comenzar diciendo *“Todo europeo que acredite su decisión por la libertad é independencia americana...”* pasó a decir *“Todo extranjero...”*, AHCDC, Tomo VI, Acta de la sesión del 17 de diciembre de 1846, p. 348.

⁷⁶ El representante Funes se oponía a la reescritura del artículo y consideraba que la radicalidad de la exclusión debía ser explícita para los españoles ya que *“la nación española siempre había pretendido e intentaba subyugar al estado argentino razón porque hasta hoy no había deferido a reconocer nuestra independencia, que esta era una nación realmente enemiga y hasta declarada porque sus aspiraciones y pretensiones eran demasiado conocidas por todos, mientras que otras no habían manifestado una marcha en oposición como esta y con hechos señalados que las demás naciones podían invadirnos, ofendernos y aun si se quiere decir que no reconocían otra independencia americana, es indisputable la diferencia notable que hay entre un enemigo declarado y otro que no lo es, sino que puede serlo”*, AHCDC, Tomo VI, Acta de la sesión del 15 de diciembre de 1846, pp. 342-343.

⁷⁷ Ídem, p. 343.

Dos disposiciones del proyecto provocaron la división de los representantes, lo que imposibilitó la consecución de la mayoría necesaria para aprobarlas y debieron volver a ser tratadas en la última sesión del debate constituyente una vez ya sancionado todo el resto⁷⁸. La primera tenía que ver con las personas obligadas a presentarse ante el Supremo Gobierno para “*prestar el juramento de defender la Libertad é Independencia Americana, y la causa Santa Nacional de la Federación contra todo poder europeo, ó cualquier otro extranjero que pretendiese invadirla; respetar las autoridades legítimamente constituidas de la Provincia, y obedecer fielmente sus leyes*”⁷⁹. Entre los enumerados por el artículo estaban, junto a médicos, abogados y profesores, los sacerdotes, y ese fue precisamente el foco del conflicto⁸⁰. Según una de las posiciones, se debía eliminar de la lista a los sacerdotes ya que “*el sacerdocio era un estado, como era igualmente el matrimonio y no una facultad o profesión*”, además, “*cuando se ordenaba un sacerdote y venía al país este presentaba sus credenciales al prelado E. Exmo. para poder después de su clasificación entrar a desempeñar las funciones y deberes de su estado*”, por lo tanto, dejar el artículo tal como estaba redactado sería doblar requisitos, penas y castigos para los sacerdotes⁸¹. Según la otra, era improcedente la supresión de la voz sacerdote de la lista de personas obligadas a prestar juramento de fidelidad, y con mayor razón ellos que “*por su mismo estado ejercían infinitamente una mayor influencia sobre las masas de la población*”, por lo tanto, “*debía exigírseles el juramento de sostener nuestra independencia americana y la causa nacional de la república, mucho más cuando ejercen su influencia en el púlpito, confesionarios y en todos los actos públicos y privados, lo que no sucede en los demás ciudadanos por el ningún poder que tienen respecto de aquellos*”⁸². Empatada la votación, el artículo volvió a discutirse en dos oportunidades más hasta quedar aprobado en la sesión del día 13 de enero de 1847 por trece votos a favor y tres en contra, manteniéndose a los sacerdotes dentro de la cláusula⁸³.

La segunda de las disposiciones que debieron volver a tratarse por ausencia de las voluntades suficientes durante la primera discusión fue el artículo 4 del Cap. XVI; en

⁷⁸ Tratándose de la propia Sala de Representantes, y no de una Convención Constituyente *ad hoc*, las reglas del debate eran las contenidas en el Reglamento Interior de la Sala.

⁷⁹ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 6.

⁸⁰ La colaboración, pero también las resistencias, de la Iglesia católica en lo que al juramento de una Constitución política se refiere, ha sido exhaustivamente analizado por LORENTE para el caso gaditano en LORENTE, M. (2007) “El Juramento Constitucional”, en GARRIGA, C. y LORENTE, M., *Cádiz, 1812...* cit., pp. 73-118, pp. 105 y ss. Una vez jurada la Constitución, los sacerdotes se convertían en funcionarios de Dios y de la República, según la acertada expresión de AYROLO, V. (2007a) Ob. cit.

⁸¹ AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 15 de diciembre de 1846*, p. 344. Sobre el sacerdocio como un “estado” y una reflexión acerca del tiempo en que el estado era el estado de las personas, véase CLAVERO, B. (1986) *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea*, Tecnos, Madrid; también en su trabajo de (2013) “Cádiz 1812: Antropología e historiografía del individuo como sujeto de constitución”, en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Nro. XLII, pp. 201-279.

⁸² Ídem, pp. 344-345.

⁸³ AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 13 de enero de 1847*, pp. 17-19. Había sido discutido sin llegar a un acuerdo a mediados del mes anterior: AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 16 de diciembre de 1846*, pp. 346-347.

concreto, la norma proyectada exceptuaba al Ejecutivo de la obligación de poner a disposición de los magistrados –en un plazo no mayor a tres días– a los sujetos arrestados por supuesto peligro de la seguridad del país o el orden o tranquilidad públicas. Un artículo de tales características, que ampliaba considerablemente las facultades del Gobernador de la Provincia, suscitó de inmediato un enfrentamiento de posiciones entre algunos de los constituyentes con motivo de una propuesta de adición planteada por el diputado Achával. Según éste, para “*otorgar al ciudadano todas las garantías concernientes a su seguridad individual*”, tal como el espíritu de la ley constitucional lo deseaba, debía agregarse al artículo que, al tratarse de un caso excepcional, “*el Gobierno deberá en este caso someter su procedimiento al juicio de la H. Sala de Representantes, dentro del tercero día, siguiente al último de su arresto*”⁸⁴.

El representante Funes rechazó de plano la extensión de la formulación normativa propuesta, recurriendo a la lógica de la excepcionalidad que ya ha sido analizada. Era precisamente el carácter extraordinario del caso el fundamento que autorizaba al Ejecutivo a tomar medidas también extraordinarias y, sobre todo, reservadas, para llegar de la mejor manera y en el menor tiempo posible al esclarecimiento del asunto; contra esta finalidad atentaban la burocratización y publicidad que otorgaba el procedimiento ante la Sala. Además, continuaba Funes, también podía llegar a presentarse el inconveniente de “*confundir a las vez las atribuciones del P.L. con el E. porque aquel en tal caso entraría a conocer y juzgar sobre lo que era peculiar y privativo del P.E. (...) si había obrado bien o mal en la aprehensión de los ciudadanos*”⁸⁵. Otros diputados salieron, en defensa de la propuesta, a rebatir los argumentos vertidos por Funes, apelando a un discurso sobre las garantías de los ciudadanos en los estados republicanos, a la inconsistencia del supuesto inconveniente de la publicidad –que fácilmente se eludía dando carácter reservado a la sesión de la Legislatura cuando tratara el asunto–, y a la falsa alarma creada sobre la confusión de atribuciones ya que “*la H. Sala sólo iba a conocer sobre si el P.E. se hallaba en el caso excepcional o no del que habla la ley*”⁸⁶. En esa misma sesión, con una ajustada mayoría –seis votos contra cinco–, se sancionó el artículo con el agregado, pero como no se habían conseguido los votos suficientes, hubo que dejar en suspenso la decisión. Como en el caso anterior, en la sesión del día 13 de enero se reconsideró el asunto y rechazó, por diez votos contra tres, la adición que había sido propuesta y secundada con fuertes argumentos⁸⁷.

Además de estos debates en el seno del cuerpo constituyente, hay varios artículos que sufrieron algún cambio de palabras sin ningún tipo de objeciones como el artículo 7 del Cap. VI, “*todo extranjero*” en lugar de “*todo europeo*”⁸⁸; y el artículo 6 del Cap. VIII, “*registro cívico*” en vez de “*registro civil*”⁸⁹. En relación con la denominación de

⁸⁴ AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 2 de enero de 1847*, pp. 8-11.

⁸⁵ Ídem.

⁸⁶ Ídem.

⁸⁷ AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 13 de enero de 1847*, pp. 17-19.

⁸⁸ AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 17 de diciembre de 1846*, p. 348.

⁸⁹ AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 22 de diciembre de 1846*, p. 351.

toda la humanidad, incluidos aquellos seres humanos que no tenían personalidad autónoma como las mujeres, los niños, y los domésticos, dependientes, se cambió el término “*almas*” por “*habitantes*” en los artículos 2 del Cap. IX y 10 del Cap. X, que establecían las proporciones para definir el número de electores y representantes, respectivamente⁹⁰. Esto no es menor, si se considera que en el lenguaje de los textos del constitucionalismo hispano aquella palabra era la única capaz de incluir a todos los individuos⁹¹. El artículo 9 del Cap. XVI, que prohibía al titular del Ejecutivo “*violar*” la correspondencia epistolar se modificó por “*abrir*”⁹²; el artículo 1º del Cap. XVII sobre el *Poder Judicial* se aprobó con una nueva redacción quedando de la siguiente forma, “*su ejercicio en los Tribunales Superiores, ó inferiores establecidos por la Ley*”⁹³; y por último el caso del artículo 2 del Cap. XVIII que establecía una excepción al principio general según el cual todo residente en la Provincia era soldado del Estado, también se modificó, incorporándose “*República Argentina*” donde decía “*encargado de las Relaciones Exteriores*”⁹⁴. Otros artículos fueron directamente suprimidos del proyecto original presentado por la comisión, entre ellos, el 4 del Cap. XI y el 14 del Cap. XVI; desafortunadamente, el laconismo de las actas de las sesiones no permite conocer cuál era el sentido de tales artículos⁹⁵.

Esa misma concisión es la que dificulta tanto el conocimiento de la versión original del artículo 8 del Cap. IX —que se sancionó modificado—, como cuál fue el aspecto objetado que motivó su reforma⁹⁶. De igual modo, tampoco es posible conocer los fundamentos por los cuales se decidió ampliar y detallar las atribuciones del Gobernador en materia de patronato general, modificándose el artículo 10 del Cap. XV⁹⁷. Por otra parte, más disposiciones acabaron aprobándose con pequeños agregados o supresiones, es lo que pasó, respectivamente, con los artículos 10 del Cap. XVI y 2 del

⁹⁰ AHDCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 22 de diciembre de 1846*, pp. 351 y 353.

⁹¹ Para comprender el significado político de estos términos véase LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) *El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico (1808-1826)*, Colección Bicentenario de las Cortes de Cádiz, Congreso de los Diputados, Madrid, pp. 178-179; CLAVERO, B. (2013) Ob. cit.

⁹² AHDCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 2 de enero de 1847*, p. 11.

⁹³ La brevedad del acta no permite conocer cuál era la versión del proyecto original modificada por la nueva redacción, AHDCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 7 de enero de 1847*, p. 13.

⁹⁴ AHDCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 7 de enero de 1847*, pp. 13-14.

⁹⁵ AHDCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 22 de diciembre de 1846*, p. 354 y AHDCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 7 de enero de 1847*, pp. 12-13.

⁹⁶ AHDCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 22 de diciembre de 1846*, p. 352.

⁹⁷ En su versión original preparada por la comisión, el artículo establecía que, entre sus atribuciones, el Ejecutivo “*Ejercerá las funciones del patronato y presentará para los beneficios parroquiales en el distrito de la Provincia*”, sin embargo, la sanción del artículo en cuestión se realizó con la siguiente redacción: “*Ejercerá el patronato General respecto de la Iglesia, beneficios y personas eclesiásticas, con arreglo a las leyes vigentes*”, AHDCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 24 de diciembre de 1846*, pp. 359-360. Sobre argumentos y prácticas patronales durante el período anterior pero que continúan desarrollándose por distintos derroteros durante la primera mitad del siglo XIX Véase el texto de AYROLO, V. (2004) Ob. cit. La visión global del período y el juego de poder entre Rosas, los Gobernadores, y su relación con Roma, véase MARTÍNEZ, I. (2013) Ob. cit.

Cap. X⁹⁸. Finalmente, en la última sesión continuada del debate constituyente se acordó que los tratamientos de cada uno de los tres poderes se colocaran en sus respectivos capítulos⁹⁹.

II. 1. 2. Revisión del P.E. y publicación(es)

Una vez puesto en limpio y ordenado el texto de la nueva Constitución de la Provincia, con todas las adiciones, modificaciones, correcciones y supresiones que a lo largo del debate constituyente habían ido sufriendo los artículos del proyecto de la comisión, se firmó una copia del Código Constitucional Provisorio que seguidamente se envió al Ejecutivo para su correspondiente “*publicación e impresión*”¹⁰⁰. Sin embargo, y a pesar de que según el Reglamento Provisorio y este mismo Código Constitucional el poder constituyente residía exclusivamente en el Congreso Provincial, el Gobernador no cumplió inmediatamente con la orden de la Sala y devolvió la Constitución que se le había mandado a publicar, solicitando “*la reconsideración de algunos artículos sancionados del Código Constitucional Provisorio, acompañando al efecto algunas observaciones para que sean adicionadas y corregidas en su redacción*”¹⁰¹. En los hechos, esta actitud no implicaba un fuerte menoscabo a la voluntad constituyente de la Sala ya que en el escrito del Ejecutivo no había más que unas cuantas correcciones literarias para mejorar el estilo de la norma fundamental, sin alterar su espíritu y destacar el valor retórico del término Constitución, modificando las autorreferencias que hacía el propio texto llamándose a sí mismo reglamento¹⁰². Pero eso no fue todo.

En esa misma nota dirigida a la Sala de Representantes, el jefe de la Provincia decía además –abandonando ya el tono de recomendación– que “*los artículos que se hubiesen omitido del antiguo reglamento, que no estuviesen en oposición con el expresado Código Constitucional, debían insertarse en él, y en sus lugares respectivos*

⁹⁸ En el primer caso, el artículo que autoriza al Gobernador a abrir la correspondencia epistolar en ciertos casos, se aprobó con un agregado al final propuesto por el representante Villegas que requería que el procedimiento se realizara “*a presencia del interesado, y en ausencia con asistencia del Síndico Procurador de la Ciudad*”, AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 2 de enero de 1847*, p. 11; en el caso del artículo 2 del Cap. X se suprimió la parte final cuando, hablando sobre el Ministro del Ejecutivo, decía “*si lo tuviese, o la persona que tuviese a bien comisionar el P.E.*”, AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 22 de diciembre de 1846*, pp. 352-353.

⁹⁹ AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 9 de enero de 1847*, p. 16.

¹⁰⁰ AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 22 de enero de 1847*, pp. 23-24.

¹⁰¹ AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 31 de enero de 1847*, p. 27.

¹⁰² Las observaciones que, en su nota del día 27 de enero de 1847, el Ejecutivo había hecho a la redacción del Código sancionado, proponiendo algunas adiciones y correcciones eran las siguientes: “*Al artículo [3] de la sección 3ra. Capítulo 6º ‘teniendo la indispensable calidad de Americano’, en lugar de ‘siendo americano’. Al artículo 4º de la misma sección [y capítulo], proponiendo el verbo renunciar a la palabra antes. Al artículo único del capítulo 7º ‘Código Constitucional’ en lugar de ‘reglamento’. Al artículo 6º de la sección 4ª capítulo 8º ‘para tener’ en lugar [de] ‘para tomar’. Al artículo 13 de la sección 6ª capítulo 14 ‘Constitución Provincial’ en lugar de reglamento. Al artículo 24 de la misma sección [capítulo 17] ‘las ordenanzas mercantiles de Bilbao’ en lugar de ‘y las ordenanzas mercantiles’; y al artículo 5º de la sección 8ª capítulo 19, ‘Código Constitucional’ en lugar de reglamento*”, AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 1 de febrero de 1847*, p. 32.

formando un solo cuerpo de leyes para su impresión, publicación y circulación correspondiente”¹⁰³. De esta manera, el Poder Ejecutivo se arrogaba atribuciones de carácter constituyente, puesto que el cuerpo investido con esas facultades no se había limitado a reformar algunos artículos de la norma fundamental anterior sino que había sancionado íntegramente una nueva Constitución. Decidir la vigencia de disposiciones que no se hallaban en este nuevo texto, como lo pretendía el Gobernador, era una decisión de naturaleza constituyente; lo colocaba en una posición predominante de poder respecto de las demás autoridades políticas –en sintonía con el resto de prácticas constitucionalizadas– y dejaba entrever una noción dúctil de la idea de Constitución formal que, según sus propias palabras, hasta parecía responder a la vieja lógica agregativa del derecho tradicional que rechazaba la derogación¹⁰⁴.

La comisión de negocios constitucionales fue la encargada de analizar el oficio y preparar un proyecto de decreto sobre el asunto. Lejos de adoptar una postura obsecuente respecto del punto más grave de los comunicados por el Ejecutivo, el Congreso Provincial sacó a relucir su potestad soberana y consideró que no era necesario agregar los artículos del Reglamento de 1821 que no se habían vuelto a poner en la Constitución, y tomó en consecuencia una medida aparentemente radical –sin precedentes en la breve historia constitucional cordobesa–: decretó sin más que quedaba “*abolido el reglamento Constitucional Provisorio sancionado en el año 1821*”¹⁰⁵. El carácter derogatorio de la norma constitucional denotaría, en principio, un cambio en el orden jurídico y, sobre todo, en la manera en la que los actores políticos de la época concebían el orden. Ese efecto derogatorio del texto, indicio del papel que ocuparía la voluntad en el derecho, era precisamente algo de lo que había carecido el Reglamento Provisorio de 1821 amparando así la inercia de todo un conjunto de prácticas y normas típicas del derecho tradicional castellano-indiano. Sin embargo, este signo *a priori* de modernidad jurídica tampoco puede ser pensado como el punto de partida de un nuevo tiempo. Los constituyentes tampoco habían sido tan radicales. Del mismo modo que el viejo Reglamento, la nueva constitución incorporaba una cláusula que mantenía “*en todo su valor, fuerza y vigencia, todos los Códigos Legislativos, Cédulas, Reglamentos, y demás disposiciones generales y particulares del antiguo Gobierno Español...*”¹⁰⁶. La acumulación normativa seguía

¹⁰³ AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 31 de enero de 1847*, p. 27.

¹⁰⁴ Sobre este asunto, véase GARRIGA, C. (2007a) “Constitución política y orden jurídico: el efecto derogatorio de la Constitución de Cádiz”, en GARRIGA, C. y LORENTE, M., *Cádiz, 1812...* cit., pp. 119-168.

¹⁰⁵ El proyecto presentado por la comisión de negocios constitucionales, sancionado por unanimidad en el plano de la Sala, decía: “*Viva la Confederación Argentina. Mueran los salvajes unitarios. Año 38 de la libertad, 32 de la independencia y 12 de la Confederación Argentina. A la H. Sala de Representantes. La Comisión de Negocios Constitucionales tiene el honor de elevar a la ilustrada consideración de V.H. el siguiente proyecto de ley constitucional, y que a su juicio debe redactarse en la sección 8ª, capítulo 19, los artículos siguientes: Art. 3º - Queda abolido el reglamento Constitucional Provisorio sancionado en el año 1821*”, AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 1º de febrero de 1847*, p. 29. Sobre la importancia del efecto derogatorio de la Constitución ya se ha hablado en el Capítulo I de este trabajo: “II. 7. Promulgación, publicación y difusión del Reglamento Provisorio. Su entrada en vigor”. Allí se hace alusión a las consecuencias jurídico-constitucionales que tuvo la verdadera ausencia del “*efecto derogatorio*” de la Constitución según el análisis de GARRIGA, C. (2007a) Ob. cit.

¹⁰⁶ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 3. La continuidad del viejo derecho se hacía también con la misma salvedad que hasta ahora se había hecho desde 1810, condicionando

operando como criterio constitutivo de un orden jurídico que aún se estructuraba a partir de los caracteres que eran propios de la cultura jurídica tradicional, aunque resignificados y constitucionalizados por el nuevo texto fundamental.

Con respecto a las demás correcciones textuales propuestas para mejorar el estilo del Código Constitucional Provisorio, los representantes aceptaron llanamente las observaciones del Ejecutivo, firmaron la nueva versión del documento incluyendo los nuevos artículos sancionados, y volvieron a pasarla al Gobernador para su correspondiente publicación e impresión¹⁰⁷. Además de la práctica corriente de publicar materialmente el texto a través de un bando solemne, y su circulación entre las autoridades políticas del territorio para que dieran a conocer y pudieran aplicar la nueva letra de la Constitución, el decreto de Manuel López del 9 de febrero de 1847 ordenó también –a diferencia de 1821– la remisión de una copia del documento constitucional al Registro Oficial¹⁰⁸.

Unos meses después de la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional, el Ejecutivo volvió a enviar al Congreso Provincial un oficio solicitando la *“reconsideración sobre el artículo 13 capítulo 13 página 9 en que se encuentran citas de leyes... que no están comprendidos en el Código y que solo se hallan en el Reglamento Provisional”*¹⁰⁹. La cuestión estribaba en que, aparentemente, los redactores de la Constitución habían transcripto literalmente desde el Reglamento Provisorio la disposición que el Gobernador observaba, relativa a los casos en los que correspondía deliberar a la Sala de Representantes; en el nuevo texto, las remisiones a otros pasajes del documento que el artículo hacía, carecían de sentido e incluso más, en algunos casos se remitía a artículos que en el Código Constitucional Provisorio ya no existían¹¹⁰. Pese a la importancia del asunto, y a las reiteradas insistencias del Gobernador para que se subsanara el descuido, fue recién en la sesión del 7 de julio del año 1848 cuando la

la vigencia de tales normas a que no se encontraran *“... en oposición directa ó indirecta con la Libertad é Independencia de Sud América, ni con este Código, y demás disposiciones del P.E. de la Provincia”*.

¹⁰⁷ AHDCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 1º de febrero de 1847*, pp. 29-32.

¹⁰⁸ *“Córdoba, 9 de Febrero de 1847. Guárdese, cúmplase y ejecútese lo dispuesto por el precedente Código Constitucional de la Provincia: en consecuencia, publíquese por bando solemne, imprímase, circúlese y dése al Registro Oficial. Manuel López”*, en *Compilación de leyes...* cit., p. 513. En relación con el Registro Oficial al que debía enviarse el texto, se trataba de una institución cuyo proyecto de instalación “había sido presentado a la Sala de Representantes por su presidente, Juan Pablo Pérez Bulnes en 1826. La propuesta era formar ‘un papel periódico y un Registro Oficial, en que se asentasen las deliberaciones y decretos de ambos poderes provinciales’. Pese a que esta propuesta obtuvo la unanimidad de votos y se ordenó dotar al ‘periodista’ con 800 pesos ‘sobre los fondos provinciales’, el proyecto parece no haberse concretado hasta diciembre de 1829, fecha de la primera acta”, AYROLO, V. (2006) “Noticias sobre la opinión y la prensa periódica en la Provincia autónoma de Córdoba: 1820-1852”, en *Quinto Sol*, Nro. 10, pp. 13-46, p. 32.

¹⁰⁹ AHDCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 13 de junio de 1847*, pp. 39-40.

¹¹⁰ En la versión original se hacía remisión, por ejemplo, a artículos de los capítulos 23, 25 y 28 cuando el texto ordenado de la nueva Constitución sólo tenía 19 capítulos: *“Al Poder Legislativo le corresponde deliberar en los casos de que hablan los artículos 12, capítulo 10; 2, 4 y 5 del Cap. 11; 10 y 11 del Cap. 14; 5, 9 y 13 del Cap. 16; 1 del 17; y 5 del 18; 9 del 23; 7 y 12 del capítulo 25; y 2 del Cap. 28”*.

comisión del Congreso Provincial encargada de la revisión presentó su dictamen corrigiendo la redacción del artículo referido¹¹¹.

La iniciativa política era patrimonio casi exclusivo del Ejecutivo, consecuencia de su preponderancia fáctica entre las autoridades provinciales. En ese sentido, hacia finales del año 1848, una vez más, el Gobernador buscó excitar el poder constituyente impulsando una reforma al texto fundamental que no llevaba siquiera dos años en vigencia¹¹². Su propuesta importaba una ampliación de sus facultades y el fortalecimiento de su posición privilegiada frente al resto de los órganos institucionales ya que buscaba, entre otras cosas, eliminar la prohibición absoluta al Gobernador de imponer a los individuos pena alguna, y relevar de responsabilidad a quienes cumplieran órdenes del Gobernador que no fueran refrendadas por el Ministro o su reemplazante¹¹³. Nuevamente, la Legislatura provincial se opuso a los designios del Ejecutivo, en este caso se negó a reformar las disposiciones impugnadas e insistió en conservar su redacción original, haciendo mínimos agregados a otros de los artículos observados por el Ejecutivo¹¹⁴. Sin embargo, su oposición a la voluntad de López no pudo sostenerse por mucho tiempo y en la primera sesión del año 1849, ante la insistencia del Gobernador, se sancionaron las modificaciones que éste había propuesto pese a que la misma Legislatura unos días atrás los había rechazado con sólidos argumentos¹¹⁵.

¹¹¹ Además del artículo 13 del Cap. XIII se modificaba el artículo 11 del Cap. XVII y se proponía la integración de una comisión especial que encargada de inspeccionar la impresión del Código Constitucional Provisorio para evitar errores como los que se habían detectado, AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 7 de julio de 1848*, p. 104. Días más tarde se aprobaron las modificaciones propuestas pero se rechazó la conformación de la comisión alegándose, entre otras cosas, que no correspondía al Poder Legislativo –si no al Ejecutivo– la inspección de las leyes y que su tarea acababa en el acto mismo de sanción, AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 28 de julio de 1848*, p. 108.

¹¹² El 29 de noviembre del año 1848 ingresó al Congreso Provincial un oficio firmado por el Poder Ejecutivo manifestando a la Sala la necesidad de reconsiderar –a su juicio– “los artículos 8º capítulo 15 pág. 11, 6º del cap. 16 pág. 12, 7º del mismo capítulo, y 9º del cap. 17 pág. 13”, AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 29 de noviembre de 1848*, p. 119. Como la Legislatura estaba próxima a concluir su mandato y había elecciones previstas para el corto plazo se decidió que el asunto se postergara para ser tratado por la nueva composición de la Sala de Representantes.

¹¹³ En lo que respecta a la responsabilidad de los funcionarios públicos, esta modificación podría llegar a inscribirse en una línea de preparación del terreno institucional para la futura construcción de una administración de carácter comisariada –jerarquizada para la ejecución impersonal de las leyes–. Para un análisis de este asunto, fundamental para la comprensión del modelo constitucional gaditano, véase GARRIGA, C. y LORENTE, M. (2007a) “Responsabilidad de los empleados públicos y contenciosos de la Administración (1812-1845). Una propuesta de revisión”, en Ídem, *Cádiz, 1812. La Constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 313-369.

¹¹⁴ En el primero de los casos se argumentó que no era necesario eliminar la prohibición de imponer penas ya que en la misma Constitución había un artículo que reconocía al Gobernador como Tribunal Superior de Apelaciones (Art. 1º, Cap. VXI). En el segundo caso, se dijo que sería imposible conocer o distinguir toda orden que emanaba del Gobernador si no era por la autorización del ministro que la distinguía de los actos privados del titular del Ejecutivo; por otra parte, negar la responsabilidad al que cumplía una orden sin firma del ministro abría un horizonte insondable ya que sería imposible distinguir las órdenes falsas de las auténticas, AHCDC, Tomo VII, *Acta de la sesión del 19 de diciembre de 1848*, pp. 127-128.

¹¹⁵ La nueva redacción de los artículos quedó ordenada según el proyecto de ley sancionado el 15 de enero de 1849: “Art. 1º - El artículo 8º del capítulo 15 se redactará como sigue: ‘El Gobierno de la Provincia asistirá por sí, o por delegación con el fiscal de Estado a la visita corte y tanteo de las sumas de las cajas del Estado’. Art. 2º - El art. 12 del mismo capítulo 15 en esta forma: ‘A falta de Ministro por enfermedad u otro impedimento legal mientras se provee este empleo, el P.E. nombrará al oficial 1º de Sub-Secretaría

Otro episodio de las tensiones constituyentes entre el Gobernador y el Legislativo se produjo el día 19 de abril, con motivo de la nota enviada por el Ejecutivo al Congreso Provincial adjuntando una copia de la última versión impresa del Código Constitucional Provisorio para su revisión previa publicación. Pocos días después, la Comisión de Negocios Constitucionales –que había sido la encargada de revisar el texto– informó al pleno de la Sala que en el *“ejemplar del Código Constitucional se encontraban defectos muy substanciales, tanto en su impresión, falta de ortografía, tipo muy desigual, y lo que es muy notable, la supresión de un artículo, sin duda por descuido del impresor”*, encomendándose al Presidente del cuerpo que notificara de ello al remitente para salvar dichos defectos formales¹¹⁶.

Cumplido aquel encargo, las comunicaciones entre una autoridad y otra sobre este asunto se discontinuaron, y sólo semanas más tarde volvió a ingresar a la Legislatura un oficio firmado por el Gobernador que incluía una nueva copia de la Constitución *“para que según mérito, la H. Sala determinase lo que considere más conveniente”*; e inmediatamente fue girado –por segunda vez– a la Comisión de Negocios Constitucionales para su (re)lectura y revisión¹¹⁷. Al mes siguiente, el Presidente del Congreso informó a los representantes que el grupo de trabajo se había *“ocupado detenidamente con la circunspección que demanda la naturaleza y gravedad de este asunto...”* realizando el *“... más formal examen del expresado Código, así sobre la redacción de su art. como en su ortografía y tipo; y después de este trabajo, tiene la satisfacción de anunciaros estar perfectamente arreglado y en todo conforme con el original sancionado por V.H.”*¹¹⁸. En consecuencia, y recogiendo en su argumentación las *“muy justas y fundadas”* razones expuestas por el Ejecutivo, la Sala de Representantes acabó aprobando por unanimidad de sufragios *“el ejemplar reimpresso del Código Constitucional Provisorio...”* que incluía, nada más y nada menos, que *“... la supresión del art. 2º capítulo 13 y modificación al art. 10 capítulo 15 según lo indica el S.P.E.”*¹¹⁹.

para que autorice sus resoluciones, y en defecto de éste al 2º o al que fuera de confianza’. Art. 3º - El art. 6º del capítulo será redactado en esta: ‘No podrá por sí solo imponer a ningún individuo pena alguna’ sino asociado de su asesor, su Ministro, o el oficial nombrado para autorizar sus resoluciones en sus pasos’ [facultándosele con sólo ese requisito formal]. Art. 4º - El art. 7º del mismo capítulo se redactará en esta: ‘No expedirá orden ni comunicación alguna sin que sea suscrita por su Ministro, o el oficial encargado de autorizar sus resoluciones, y no tendrá efecto la que carezca de esta calidad’ [quedando eximidos de responsabilidad quienes cumplieran la orden]. Art. 5º - Quedan en vigencia los artículos 4º, 5º y 6º de la sanción de 19 de Diciembre pasado. Art. 6º - Comuníquese al P.E.”, AHCDC, Tomo VII, Acta de la sesión del 15 de enero de 1849, pp. 137-138. También en Compilación de leyes... cit., pp. 202-203.

¹¹⁶ AHCDC, Tomo VII, Acta de la sesión del 4 de mayo de 1849, pp. 151-152.

¹¹⁷ AHCDC, Tomo VII, Acta de la sesión del 10 de julio de 1849, p. 163.

¹¹⁸ AHCDC, Tomo VII, Acta de la sesión del 7 de agosto de 1849, p. 172.

¹¹⁹ Ídem, p. 174. El primero de esos artículos establecía como atribución del Congreso Provincial, en pleno goce de la soberanía de la Provincia, declarar la guerra o hacer la paz por sí sola, siempre que fuese injustamente atacada por cualquier poder extraño; el segundo, se modificó en la parte que otorgaba al P.E. la facultad de elegir obispos a propuesta en terna del Senado Eclesiástico, quedando a completa discrecionalidad del Gobernador.

Con todo, la experiencia constituyente que se ha venido analizando fue un proceso de tipo abierto¹²⁰. Se inició en los últimos meses de 1846 con la decisión de revisar y reformar el Reglamento Provisorio, continuó en febrero de 1847 con la sanción del Código Constitucional Provisorio por parte del Congreso Provincial, siguió con las objeciones que en varias oportunidades planteó el Ejecutivo, y acabó cerrándose en agosto de 1849 cuando se ordenó la publicación de la versión final del documento constitucional con varias modificaciones y supresiones respecto del texto de 1847. Como ya se ha apuntado, una de las características de este proceso fue la existencia, en los hechos, de dos autoridades que actuaron en calidad de titulares del poder constituyente: por un lado el Congreso Provincial, facultado para tal tarea según la norma constitucional vigente al momento de decidirse la reforma, y por otro, el Gobernador, que haciendo uso de su poder político, ejerció una amplia influencia en el Legislativo llegando a decidir qué artículos debían suprimirse, cuáles modificarse y en qué sentido. A tal punto torció en más de una ocasión la voluntad del Congreso y objetó todo lo que leía y no compartía del texto sancionado, que no sería exagerado considerarlo como el verdadero constituyente. Todas las ediciones oficiales de la nueva Constitución, como la insertada en la oficial *Compilación de leyes, decretos y acuerdos...* ordenada en el año 1870, acogieron la versión de agosto de 1849.

II. 2. El nuevo texto. Prácticas hechas Constitución

En su mensaje al Congreso Provincial del año 1847, el Gobernador Manuel López hacía mención a la reforma del texto constitucional cordobés: “*me es altamente satisfactorio felicitaros por la reforma tan útil y necesaria que habéis emprendido del Reglamento Provincial. Sustituido este por vuestro Código constitucional que ha sido publicado en toda la provincia, y acogido con entusiasmo, ven los cordobeses en esta tarea, la obra sabia y laboriosa de vuestras profundas meditaciones. Las leyes patrias en todo país culto han sido aceptadas con respeto, y obedecidas sin violencia*”¹²¹. Pese al entusiasmo del titular del Ejecutivo y sus loas a la nueva norma fundamental, hay una imagen extendida entre los iuspublicistas locales y la historiografía según la cual el Código Constitucional Provisorio no sería más que un mero retoque estético del texto anterior. En este sentido, se ha dicho que la de 1847 “fue en realidad una simple reforma del Reglamento de 1821, muchos de cuyos capítulos pasaron íntegros a aquel, copiándose

¹²⁰ Como ya se mencionó, la noción de ciclo constituyente “abierto” ha sido utilizada por los constitucionalistas argentinos para caracterizar la experiencia de 1853-1860, y hace referencia a un proceso “en el que no es fácil percibir el ejercicio del poder constituyente en un acto único que clausure y agote aquel ejercicio”, BIDART CAMPOS, G. (1973) “Notas sobre el carácter abierto y eficaz del poder constituyente originario en Argentina”, en *Revista de estudios políticos*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Nro. 188, pp. 261-272.

¹²¹ Documento N° 10, *Mensaje del Gobernador Manuel López, Córdoba, 18 de mayo de 1847*, en Ferreyra, A (1980) *Mensajes de los Gobernadores de Córdoba a la Legislatura*, Tomo I: 1828-1847, Centro de Estudios Históricos, Córdoba, p. 148.

hasta los errores que habían aparecido en el testimonio que se había hecho para su publicación”¹²².

A caballo entre una postura y otra, la comprensión del alcance de la nueva Constitución cordobesa exige reconocer la razón relativa de ambas posturas. Es verdad que el Código Constitucional Provisorio de 1847 se preparó sobre la plantilla del Reglamento Provisorio y muchos artículos de éste se transcribieron literalmente en el nuevo documento; es verdad también que las disposiciones modificadas representaron un bajo porcentaje del total de artículos, sin embargo, la importancia de esos artículos para el constitucionalismo provincial obliga a repasar el nuevo diseño normativo. A grandes rasgos, se podría decir que fue un modelo que ajustó la forma a la materia, caracterizado por el fortalecimiento de la figura del Gobernador, por la incorporación de una lógica de exclusión del adversario político ya vigente en la práctica tutelando el interés de conservación y protección del orden, por la apoteosis de la soberanía provincial en detrimento de la esfera “federal” prevista en el antiguo Reglamento, y por el vaciamiento del lenguaje de los derechos y garantías con fuertes repercusiones en el sistema constitucional de administración de justicia. Además, ciertos cambios en materia electoral, reflejaron también esa adecuación de la norma a la práctica política cimentada durante los años anteriores.

II. 2. 1. Fortalecimiento de la figura del Gobernador

El primer gran conjunto de modificaciones respecto del documento anterior giró en torno al fortalecimiento de la figura del Gobernador provincial. Toda una serie de disposiciones del nuevo documento vinieron a ampliar sus atribuciones, desligarlo de ciertas cargas e independizarlo aún más del resto de autoridades políticas tanto de la Provincia como de la Confederación. Incluso la causa inmediata alegada normalmente como el puntapié que motorizó la reforma constitucional se inscribió en esta línea. Así fue que a la ampliación del mandato del Gobernador, llevando su duración de cuatro a seis años, se agregó la posibilidad de ser elegido una y otra vez de manera consecutiva e ilimitada, sin condicionamientos. Esta medida concreta fue la que permitió al Brigadier López continuar en el poder después de más de diez años de ejercicio ininterrumpido del cargo¹²³.

Apuntalando su capacidad de disposición, se confirmó la práctica que ya había sido incorporada al texto constitucional en 1832. En caso de ser necesaria la designación de un sustituto en quien delegar el mando del Ejecutivo, sea por ausencia o por algún otro impedimento que no hiciera posible el ejercicio del poder al Gobernador, correspondía a éste –y no a la Sala de Representantes– la facultad para designar una persona de su

¹²² CELESIA, E. (1932) Ob. cit., Tomo III, p. 21.

¹²³ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIV, ART. 7. Como se recordará, en el texto del Reglamento Provisorio la reelección estaba permitida sólo una vez si resultaba favorecido por una mayoría agravada, en cambio, según el Código Constitucional la reelección era indefinida.

confianza en su lugar¹²⁴. De igual modo ocurría con la determinación de la causa que autorizaba la expropiación. En el Reglamento de 1821 el artículo la consentía en los casos en que “*fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común*”; por su parte, el Código Constitucional Provisorio capacitaba al Gobernador a tomar la propiedad de cualquier particular “*si en algún caso fuese de urgente necesidad para la Patria*”¹²⁵. La calificación de utilidad común a cargo del Congreso representaba un obstáculo más difícil de eludir para las autoridades que la simple determinación de la urgente necesidad por parte del Ejecutivo y, en consecuencia, una mayor garantía para los titulares de un derecho de propiedad; no empalidece esta apreciación el hecho de que continuara reconociéndose, como venía siendo, la obligación simultánea a cargo de la Provincia de indemnizar dando “*el buen cambio a bien vistas de hombres buenos*”¹²⁶.

Frente a la prohibición de realizar gastos de carácter extraordinario sin anuencia previa del Congreso Provincial, en el nuevo sistema el Gobernador podía disponer de los fondos del Estado por ese concepto hasta la suma de doce mil pesos requiriéndose la autorización de la Sala de Representantes sólo en el caso en que fuera necesario superar la suma indicada¹²⁷. Se eliminaba además la obligación de enviar “anualmente” al Congreso Provincial “*una razón exacta de las entradas de las Cajas del Estado, y Municipalidad, como también de las inversiones, existencias y deudas*” como disponía la Constitución anterior¹²⁸. El resignificado poder del Ejecutivo en materia fiscal y monetaria incluía la atribución para “*celar por la calidad de la moneda, pesos y medidas*”, además de la facultad para aprehender a los falsificadores e introductores de monedas no aprobadas por el Poder Legislativo¹²⁹.

En sintonía con el tenor confederacionista de la nueva Constitución, ya no figuraba en el texto un hipotético Poder Ejecutivo Federal como límite a las atribuciones del provincial. Tampoco se calificaba a este último como “*Agente natural e inmediato*” de aquél, sino como “*órgano inmediato de los negocios*” que a la propia Provincia correspondían, salvo los delegados al “*Encargado general de las R.E., paz y guerra de la Confederación*”; con lo cual, el alcance de la capacidad de agencia del Gobernador se extendía mucho más allá de la línea indeterminada –aunque determinable– de la versión

¹²⁴ Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. SEXTA, CAP. XIV, ART. 10. Apenas unas semanas después de asumido el mando por el Gobernador López, y debiendo salir a la campaña para recorrer la frontera sur de la Provincia, firmó un decreto con fecha 6 de diciembre delegando el mando gubernativo durante su ausencia en “*el ciudadano federal Alcalde 2º don Calixto María González*”, AHCDC, Tomo VII, Acta de la sesión del 7 de diciembre de 1847, pp. 70-71.

¹²⁵ Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 8.

¹²⁶ La determinación del precio de la indemnización debía realizarse de la misma manera según las disposiciones de ambos textos constitucionales: Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 6 y Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 8.

¹²⁷ Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 12.

¹²⁸ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XV, ART. 13.

¹²⁹ Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. SEXTA, CAP. XV, ART. 9.

de 1821¹³⁰. Otras modificaciones menores cerraban los capítulos sobre las atribuciones del Ejecutivo cordobés¹³¹.

El artículo 1º del Capítulo XVI era el más elocuente en lo que se refiere a los modos de ejercer el poder político y muestra cuál era la concepción acerca del gobierno en la Provincia de Córdoba hacia mediados del diecinueve. Más allá de la realidad de las prácticas –cuyo análisis ya ha sido abordado en el capítulo anterior–, a nivel de formulaciones normativas hubo un giro copernicano en materia de facultades judiciales del Gobernador. Frente al “*No podrá... intervenir en negocio alguno judicial, civil o criminal contra persona alguna de cualquier clase, o condición que fuere, ni alterar el sistema de administración de justicia*” del Reglamento Provisorio de 1821, la nueva Constitución admitía la tradición y se sinceraba, equiparando la dimensión factual con la normativa: “*Aconsejado de su Asesor continuará como al presente, ejerciendo las veces del Tribunal superior de apelaciones...*”¹³². Poco aminoraba el peso de la tradicional cultura jurídica la provisionalidad de esta facultad según la parte final del artículo “... *mientras se forme la Suprema Cámara de Justicia*”, ya que –en los hechos– nadie garantizaba su pronta erección ni parecía ocupar un lugar destacado entre los asuntos de la agenda política.

El recorte del artículo siguiente iba de la mano de la disposición anterior, y el límite al Ejecutivo a partir de 1847 sólo consistirá en la prohibición de compulsar, avocar, o suspender causas pendientes ante los Tribunales inferiores¹³³. Lo mismo ocurría respecto del nuevo artículo 6 del mismo Capítulo. En el sistema anterior, era un claro límite a la autoridad del Gobernador la prohibición de imponer, por sí, pena alguna a los individuos; pero no sólo eso, si así se hacía, el Secretario que firmaba la orden y el Juez que se encargaba de ejecutarla eran tenidos como responsables y castigados como “*atentadores contra la libertad individual*”¹³⁴. Si bien el mismo artículo en el nuevo documento constitucional comenzaba de la misma manera, diciendo que “*No podrá por sí solo imponer á ningún individuo pena alguna...*”, el sentido de la norma era diametralmente diferente a su versión anterior ya que, continuaba, “*si no asociado de su*

¹³⁰ Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. SEXTA, CAP. XV, ART. 1º. No existía en cambio en la Constitución de 1847 un artículo como el siguiente: “*Las atribuciones esenciales del Poder Ejecutivo de la Confederación y las que el voto de las Provincias reunidas en Congreso tuviese a bien refundir en el Gobierno General de los Estados, serán límites del Poder Ejecutivo de este Estado*”, según el texto ordenado del Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 17.

¹³¹ Según el artículo 8 del Capítulo XIV el sueldo del Gobernador pasaba a ser un monto fijo de cuatro mil pesos, dejando de estar indeterminado y sujeto a la voluntad política del Congreso Provincial. El artículo 11 del mismo Capítulo disponía que en caso de muerte del Gobernador, se imponía un plazo fatal muchísimo más breve para proceder al nombramiento de su reemplazante (tres días contra quince del texto anterior). En el Capítulo XV, el artículo 11 establecía que en lugar del secretario previsto por el Reglamento Provisorio, el Gobernador nombraría un “Ministro” y a falta de éste podía nombrar a los Oficiales 1º o 2º de su Secretaría para que autorizaran sus resoluciones.

¹³² Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 1º.

¹³³ Como se ha visto, el Reglamento de 1821 era más estricto al respecto: “*No compulsará, avocará, ni suspenderá las causas pendientes, sentenciadas, o ejecutoriadas en los tribunales de justicia*”, Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 2.

¹³⁴ Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 7.

Asesor y su Ministro, ó el Oficial nombrado para autorizar sus resoluciones en sus casos”¹³⁵. De esta manera, se aceptaba lisa y llanamente la facultad penal del titular del Ejecutivo, que se consolidaba así –a nivel normativo– como la autoridad más poderosa dentro del orden político-constitucional.

II. 2. 2. La exclusión del enemigo político y conservación del orden

Otra de las principales características del nuevo texto constitucional de 1847 fue su inclinación hacia la conservación del orden característico del “momento rosista”¹³⁶. La reforma incorporó disposiciones que a la luz de un constitucionalismo liberal serían juzgadas de lo más reaccionarias. La intolerancia religiosa, estructurada a partir de un discurso católico intransigente, y la exclusión del enemigo político –los unitarios– de cualquier pequeño resquicio institucional, fueron las opciones escogidas para constitucionalizar las prácticas políticas que durante los últimos doce años habían mantenido el *status quo* de la Confederación.

La Santa Causa de la Federación era también la causa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, una y otra comulgaban y la primera garantizaba la férrea defensa de la segunda¹³⁷. Frente al supuesto liberalismo religioso de algunos unitarios, estaba el conservadurismo católico de los federales convencidos. En esa línea, la Constitución también radicalizó su lenguaje y posición. Por una parte, proclamaba que los derechos y los deberes de los hombres que vivían en sociedad reposaban sobre los principios que había grabado en los hombres “*el Supremo Ser autor de la naturaleza*”¹³⁸; por otra, se retomaba la disposición de 1821 según la cual los Magistrados no permitirían en el territorio del Estado ningún otro culto público ni que se enseñara doctrina contraria a la de Jesucristo. En este punto, durante el debate constituyente, el diputado Villegas quiso defender frente al resto de representantes la independencia religiosa del país, pero tan fuerte fue el rechazo de su postura que acabó agravándose –para escarmiento de los

¹³⁵ Cfr. *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 6.

¹³⁶ La idea de “momento” corresponde a la obra de POCKOCK, J. G. A. (1975) *El momento maquiveliano*. Posteriormente ha sido adaptada por LORENTE y PORTILLO para significar la experiencia constitucional del primer constitucionalismo hispano. En uno y otro caso, la intención es hacer referencia “no sólo a una época –es decir, un lapso de tiempo marcado por una tendencia que lo caracteriza– sino, sobre todo, a una cultura política...”, LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) Ob. cit., p. 13. Con ese sentido, resulta plenamente aplicable al período de la historia rioplatense dominado por el Gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas; un lapso marcado por la declamación del federalismo y la exclusión del adversario político, circunstancia que se manifestaba incluso en el encabezamiento que llevaban todos los documentos oficiales: “*Viva la Confederación Argentina. Mueran los salvajes unitarios*”. En el caso cordobés, incluso el Código Constitucional Provisorio de 1847 comenzaba con esa fórmula. Véase al respecto las obras de FRADKIN, R. y GELMAN, J. (2015) Ob. cit.; y MYERS, J. (1995) *Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen rosista*, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

¹³⁷ Véase MARTÍNEZ, I. (2013) Ob. cit.

¹³⁸ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. PRIMERA, CAP. III, ART. 2. Los principios eran aquéllos dos ya mencionados en el Reglamento Provisorio de 1821, aunque allí declarados como principios grabados en los hombres por la naturaleza: “*Haz siempre á los otros todo el bien que quisieras recibir de ellos: no hagas á otro lo que no quisieras que te hiciese*”. Las consecuencias de este límite al ejercicio de los derechos ya ha sido analizado en el Capítulo II de este trabajo: “II. 1. 1. Patria cristiana. Su impacto en la vigencia de los derechos y las libertades”.

díscolos– la propuesta constitucional. A la disposición proyectada, se agregó que la única doctrina aceptada sería la enseñada por la “*Iglesia Católica, Apostólica y Romana*”¹³⁹. El texto elevaba al plano constitucional la férrea defensa de esta religión, una actitud que López había promovido durante todo su gobierno con la adopción de medidas como el nombramiento en 1841 de una junta censora de las obras impresas para evitar la difusión de doctrinas o ataques contra la religión católica y la causa de la federación¹⁴⁰.

La uniformidad del credo político se garantizaba exigiendo la calidad de federal neto o reconocido para participar en la vida política y social de la Provincia de Córdoba. En esa línea, entre las calidades para ser nombrado elector se exigía también “*ser reconocido por federal*”, lo mismo que para ser electo representante¹⁴¹. Si esto era así para tales autoridades políticas, nada menos podía esperarse del sujeto que debía ocupar como titular el sillón del Ejecutivo provincial. Con un sentido de tradiciones arraigadas a la tierra, el primer requisito para ser Gobernador en el nuevo diseño constitucional era haber nacido en el territorio provincial¹⁴². Por otra parte, al remitir genéricamente a los requisitos que establecía el art. 1º del Cap. XI para ser representante, se exigía también, a diferencia del Reglamento de 1821, tener la indispensable calidad de ser decidido en sostén de la Causa Santa Nacional de la Federación. Finalmente, el nuevo juramento que el ciudadano elegido como “*Gobernador de esta Provincia*” debía pronunciar antes de entrar en ejercicio de su cargo, le obligaba también a defender “*la Libertad é Independencia Americana contra todo poder extranjero, y la Causa Santa Nacional de Federación*”¹⁴³.

Pero como se adelantó previamente, no sólo quienes participaban directamente en la vida político-institucional de la Provincia debían dar fe de su convencido apoyo al credo federal. Con el objeto de asegurar la observancia del orden, se incorporaba al texto de 1847 un juramento de fidelidad exigido tanto para sacerdotes como para médicos, abogados o profesores, como requisito previo para el ejercicio de su ministerio o profesión¹⁴⁴. En concreto, tales ciudadanos estaban obligados a jurar “*defender la Libertad é Independencia Americana, y la causa Santa Nacional de la Federación contra todo poder europeo, ó cualquier otro extranjero que pretendiese invadirla; respetar las autoridades legítimamente constituidas de la Provincia, y obedecer fielmente sus*

¹³⁹ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEGUNDA, CAP. V, ART. 1º.

¹⁴⁰ ROMANO, S. y AYROLO, V. (2000) “¿Corporaciones, Familias o “Partidos”? La conformación de la Legislatura de la Provincia de Córdoba entre 1850-1855”, ponencia presentada en las *Primeiras Jornadas de Historia Regional Comparada*, Porto Alegre, p. 6.

¹⁴¹ En el primer caso, cfr. *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. CUARTA, CAP. IX, ART. 10. Por otra parte, las calidades exigidas para ser electo representante eran las mismas que en el texto constitucional de 1821 sólo que se agregaba el requisito de tener “*la indispensable calidad de ser decidido en sostén de la Causa Santa Nacional de la Federación*”, *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. QUINTA, CAP. XI, ART. 1º.

¹⁴² “*Ninguna persona será elegible para este oficio, sin que sea nacido en la Provincia...*”, *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIV, ART. 6.

¹⁴³ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIV, ART. 13.

¹⁴⁴ Sobre el juramento y la responsabilidad de los funcionarios públicos por la observancia del orden, véase LORENTE, M. (2007) Ob. cit. y GARRIGA, C. y LORENTE, M. (2007a) Ob. cit.

leyes”¹⁴⁵. Como si con todo este arsenal de disposiciones no hubiera sido suficiente para garantizar la uniformidad, el único Capítulo de la octava sección establecía genéricamente –bajo la denominación de “*observancia*”– la exclusión del enemigo político. Se disponía que “*ningún salvaje unitario podrá obtener empleo alguno*”, haciendo responsables a los militares o autoridades públicas que propusieren o nombraren sujetos “*que no tuviesen la calidad de ser federales netos*”¹⁴⁶. Tal como se ha venido apuntando, no era más que la constitucionalización de una práctica típica de aquel “momento rosista” que el Congreso Provincial se había encargado de sancionar como ley, recién asumido López, a finales del año 1835¹⁴⁷.

El último instrumento previsto para la conservación del orden descansaba en la sección final del nuevo texto constitucional. Al igual que el Reglamento Provisorio de 1821, era obligación del Congreso Provincial nombrar una comisión de tres individuos encargada de velar sobre la observancia de la Constitución¹⁴⁸. Su defensa estaba además prevista en el propio texto ya que, ampliando el proyecto presentado, los representantes sancionaron el 1º de febrero de 1847 una disposición –junto con aquella que abolía el Reglamento de 1821– que tipificaba la conducta de todos quienes atentaran, o prestaran los medios para atentar, contra la nueva Constitución¹⁴⁹. Además de recibir el castigo que las autoridades consideraran apropiado, la comunidad política quedaba a salvo expulsando de su seno a quienes se comportaran de tal manera ya que se erigía a la “*rebelión contra las autoridades legalmente constituidas en la Provincia*” en una nueva causal de pérdida de la ciudadanía¹⁵⁰.

II. 2. 3. La apoteosis de la soberanía de la Provincia

Uno de los aspectos en los que más claramente se apartaba el Código Constitucional Provisorio de 1847 del Reglamento Provisorio de 1821 era el de la ausencia en el nuevo texto de disposiciones que adjudicaran atribuciones a una esfera de

¹⁴⁵ Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 6.

¹⁴⁶ Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. OCTAVA, CAP. XIX, ARTS. 1 y 2.

¹⁴⁷ “Córdoba, Diciembre 16 de 1835. Plenamente convencida la H. Representación de esta Provincia de los horrorosos males que ha causado la funesta influencia de los depravados unitarios en los destinos públicos que han ejercido hasta la fecha... sancionan con fuerza y vigor de Ley, el siguiente Decreto: Artículo 1º. Por ahora y desde esta fecha, hasta la Constitución del país, no ejercerá empleo alguno en esta Provincia ningún unitario conocido por tal”, *Compilación de leyes...* cit., pp. 134-135.

¹⁴⁸ Tanto por el precario diseño, como por la casi inexistente práctica, tampoco resulta equiparable –como no lo era la del Reglamento de 1821– con la experiencia gaditana que ha sido analizada por LORENTE, M. (1988) *Las infracciones a la Constitución de 1812*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

¹⁴⁹ “Viva la Confederación Argentina. Mueran los salvajes unitarios. Año 38 de la libertad, 32 de la independencia y 12 de la Confederación Argentina. A la H. Sala de Representantes. La Comisión de Negocios Constitucionales tiene el honor de elevar a la ilustrada consideración de V.H. el siguiente proyecto de ley constitucional, y que a su juicio debe redactarse en la sección 8ª, capítulo 19, los artículos siguientes [...] Art. 4º - Todo el que atentare contra el presente Código Constitucional o prestase medios para ello, será castigado según la gravedad del crimen”, AHCDC, Tomo VII, Acta de la sesión del 1º de febrero de 1847, pp. 29-32.

¹⁵⁰ Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. CUARTA, CAP. VIII, ART. 1.

poder “nacional” o “federal”¹⁵¹. Esta opción de los constituyentes del '47 circunscribía toda una serie de facultades y decisiones políticas a las fronteras del territorio de Córdoba, fortaleciendo la soberanía provincial¹⁵². Con esa lógica, se decidió la supresión de ciertas cláusulas –no tan propias de un texto constitucional provincial– que en el Reglamento Provisorio se referían al diseño político del conjunto de los estados provinciales rioplatenses, como por ejemplo la que establecía el procedimiento de extradición de criminales o aquella que definía detalladamente las bases de una hipotética justicia federal¹⁵³. La opción constituyente es un indicativo de cómo había cambiado el horizonte de expectativas de la elite en el poder entre 1821 y 1847. Como se verá más adelante, en 1821 aquel horizonte era el de una federación que estaba al alcance, con una Provincia dispuesta a integrarse en un todo mayor. Sin embargo, en 1847 ese horizonte parecía casi imposible, avivado el ánimo confederal, con un Estado provincial a la defensiva, celoso de sacrificar sus facultades y admitir intromisiones en la política local¹⁵⁴.

En primer lugar, fueron eliminadas del texto constitucional todas las referencias explícitas que atribuían facultades al “Congreso General de los Estados”¹⁵⁵. Dejaba de ser preciso que la autoridad nacional prestara su anuencia y consentimiento tanto para el establecimiento de los derechos de importación y exportación, como para la celebración

¹⁵¹ Aunque con menos ejemplos que los que aquí se presentarán, a una conclusión similar llega CHIARAMONTE, J. (1993) “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en CARMAGNANI, M. (comp.), *Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 81-132, p. 117.

¹⁵² El análisis del texto constitucional del año 1847 demuestra el verdadero alcance de la noción de soberanía provincial, un concepto menospreciado por los constitucionalistas y cierta historiografía constitucional que proyectó sobre el período la imagen del Estado federal resultante. Uno de los dogmas del sistema federal argentino es que las Provincias que componen la Nación no son “soberanas” si no “autónomas”. Sin embargo, como ha demostrado AGÜERO, la distinción entre ambos conceptos “fue el resultado de un desplazamiento conceptual históricamente determinado por el proceso de construcción estatal. En ese contexto, el término autonomía fue paulatinamente introducido como sinónimo de «soberanía provincial», expresión que había sido utilizada de forma excluyente por los primeros publicistas e intérpretes del nuevo orden constitucional sobre la base del texto de 1853-1860”, AGÜERO, A. (2014) “Autonomía por soberanía provincial. Historia de un desplazamiento conceptual en el federalismo argentino (1860-1930)”, en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Nro. XLIII, pp. 341-392, p. 342.

¹⁵³ “Artículo último. El Poder Ejecutivo de esta República a requerimiento de los respectivos Poderes Executivos de los otros Estados, entregará cualquiera de los reos acusados de crimen de Estado, hurto, homicidio, u otros graves que se refugiaren en esta Provincia, para que sean juzgados por la autoridad provincial a que corresponda”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXI, ARTÍCULO ÚNICO.

“Artículo único. Las diferencias que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y uno, o muchos ciudadanos de otra; entre ciudadanos de una misma Provincia que disputaren tierras concedidas por diferentes Provincias; entre una Provincia o ciudadanos de ella, y otros Estados, ciudadanos o vasallos extranjeros; y todas aquellas en que el Estado Federal tenga, o sea parte, corresponde su conocimiento al Poder Judicial de los Estados”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXII, ARTÍCULO ÚNICO.

¹⁵⁴ El análisis de la dimensión “federal” de todo el período que ha venido siendo trabajado se desarrolla en el Capítulo V: “El horizonte confederativo”.

¹⁵⁵ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII, ARTS. 1º, 2, 5, 6, 7 y 12; CAP. XV, ARTS. 1º, 2, 3 y 5; CAP. XVI, ART. 17; SECC. OCTAVA, CAP. XXVIII, ARTS. 2 y 3.

de pactos con otras provincias¹⁵⁶. El silencio sobre la formación de milicias nacionales, silenció también la facultad del Congreso General de los Estados para dictar sus ordenanzas. Lo mismo ocurrió en relación a la delegación de facultades al nivel federal para el establecimiento y arreglo de los correos, caminos y postas generales, el levantamiento de tropas y la fijación de la moneda. En definitiva, según el nuevo diseño político-institucional, no había disposiciones que otorgaran atribuciones a un hipotético Gobierno Central que, como se ha visto, ya no limitaba en nada el poder de las autoridades políticas provinciales.

Como consecuencia de ello, el Congreso Provincial asumió toda una serie de facultades –aquellas que en el diseño anterior descansaban en la esfera federal– que lo reposicionaron como cuerpo soberano. En esa línea, la “*Constitución porque se ha de regir y gobernar la Provincia*” pasaba a ser producto exclusivo de su voluntad sin que fuera ya necesario que el Congreso Federal la examinara y juzgara, ni había limitaciones a las contribuciones que decidía imponer para atender a las urgencias del Estado¹⁵⁷. Incluso los constituyentes previeron depositar en el seno de la Sala de Representantes la facultad para declarar la guerra, defensiva u ofensiva, según la primera versión del texto de 1847, sin embargo, el artículo fue suprimido unilateralmente por decisión del propio Gobernador en la copia de la Constitución que mandó a imprimir durante el año 1849.

También en relación con los representantes provinciales ante hipotéticas instancias confederales, se trasladó del Ejecutivo al Legislativo provincial la facultad para su nombramiento¹⁵⁸. Por último, y aunque parezca una diferencia menor, en el Reglamento Provisorio se establecía para todas las autoridades y magistrados la posibilidad –“*podrán*”– de consultar al Congreso Provincial las dudas sobre la inteligencia de las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas; sin embargo, según el texto de 1847, en caso de dudas, era obligación –“*deberán*”– acudir al Congreso Provincial quien revalidaba así su condición de intérprete auténtico de las normas en el territorio provincial¹⁵⁹. Otro rasgo más que marca una pauta de soberanía en la Legislatura, cercano al modelo asambleario gaditano, que además de consultivo, ha servido para calificar a las Cortes como un *argos* constitucional¹⁶⁰.

¹⁵⁶ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII, ARTS. 4 y 5.

¹⁵⁷ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII, ARTS. 1º y 2.

¹⁵⁸ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. CUARTA, CAP. X, ART. 12.

¹⁵⁹ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. QUINTA, CAP. XII, ART. 4. Durante el debate constituyente volvió a plantearse la calidad de intérprete auténtico de las leyes del Congreso Provincial, el representante Villegas propuso que la consulta al Poder legislativo sobre la inteligencia de las leyes y reglamentos, por parte de particulares y jueces inferiores, se hiciera a través del Ejecutivo. Sin embargo, la propuesta no prosperó y el artículo 4 del Cap. XII se sancionó con su redacción original, AHCDC, Tomo VI, *Acta de la sesión del 23 de diciembre de 1846*, pp. 355-357.

¹⁶⁰ Esta noción de “constitucionalismo consultivo” ha sido desarrollada por MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2011) “Constitucionalismo consultivo”, en *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*, Nro. 10, pp. 89-100; la idea de *argos* constitucional es de GARRIGA, C. y SLEMIAN, A. (2013) “Em trajes brasileiros: justiça e constituição na América Ibérica (c. 1750-1850)”, en *Revista de História*, São Paulo, Nro. 169, pp. 181-221.

II. 2. 4. Derechos, Garantías y Administración de justicia

El hito más significativo de la reforma constitucional del año 1847, al menos para la reconstrucción de una historia constitucional que parta de las libertades antes que de las instituciones, es la decisión tomada por los constituyentes de omitir por completo un Capítulo entero del anterior Reglamento Provisorio, el dedicado a la declaración de los derechos. Como se ha dicho, el nuevo texto constitucional incorporaba una cláusula de abolición del documento sancionado en 1821, con lo cual, toda una serie de principios y garantías constitucionales allí contenidas –ausentes en la nueva Constitución– dejaban de estar expresamente reconocidas en el ordenamiento normativo cordobés¹⁶¹.

Todas las garantías que el Reglamento Provisorio recogía se redujeron en el Código Constitucional a una única y breve disposición según la cual “*Ningun ciudadano podrá ser juzgado en causas civiles ó criminales, por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley*”¹⁶². Aunque interpretadas a la luz del paradigma jurídico-político predominante en Córdoba reducían considerablemente su alcance, en la nueva Constitución ya no se decía nada sobre la unidad de fuero, el nombramiento de padrinos, la prohibición de obligar a alguien a declarar bajo juramento contra sí mismo, la prohibición de la ejecución de penas graves sin previa consulta al Tribunal de Justicia, el principio de inocencia, la exigencia de sentencia fundada en ley anterior al hecho, la prohibición de incomunicación luego de la confesión, etc. Es más, se volvía a disponer –ya sin retórica liberal de por medio que hiciera dudar acerca del alcance de la decisión– que “*La administración de justicia en lo civil y criminal seguirá los mismos principios, forma y método que se hallan prescriptos en las leyes generales, que no estén en oposición con nuestras leyes patrias, interin el Poder Legislativo de la Provincia dá un Código judicial*”¹⁶³. La nueva Constitución era el resultado de la adecuación del texto fundamental a la práctica, lo cual, obligaba a los actores políticos a renunciar a toda una serie de declaraciones de tenor ilustrado que, interpretadas bajo los parámetros de una cultura jurídica como la cordobesa de la primera mitad del Siglo XIX, se habían ido vaciando de sentido.

En el Reglamento Provisorio todo lo relacionado con la administración de justicia se regulaba a lo largo de setenta y ocho artículos distribuidos en seis Capítulos dedicados al Poder Judicial –en general– (Cap. XVII), a los Tribunales de Justicia (Cap. XVIII), a la Administración de Justicia –en general– (Cap. XIX) y a la Administración de Justicia en lo civil (Cap. XX) y en lo criminal (Cap. XXI), además de las disposiciones que

¹⁶¹ Como por ejemplo la declaración de derechos contenida en el Capítulo XXIII del Reglamento Provisorio donde se mencionaban, al menos retóricamente, principios como el de legalidad o reserva, la inviolabilidad del domicilio, y libertades de tránsito, prensa y expresión, entre otras; o las garantías establecidas en el Capítulo XXI para una recta administración de justicia en lo criminal donde se prohibía tomar confesión bajo juramento a los reos, se declaraba la presunción de inocencia, la garantía de sentencia fundada en ley, etc.

¹⁶² *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XVII, ART. 18.

¹⁶³ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XVII, ART. 20. En ese halo de tradición, también al Ministro Contador de Hacienda se le reconocía “*la jurisdicción contenciosa que le acuerda la ley 2ª tít. 3º, libro 8º de las Indias*”, ídem, CAP. XVII, ART. 10.

organizaban la Justicia mercantil (Cap. XXVII); esto se redujo en el Código Constitucional Provisorio de 1847 a un único Capítulo sobre el Poder Judicial que constaba tan sólo de 25 artículos. Esta sencilla cuenta matemática puede ser considerada como un indicador de la secundarización de la Justicia en el sistema político-constitucional cordobés de la época. Es viable afirmar que en Córdoba continuaban vigentes muchas de las categorías básicas del paradigma jurisdiccional, tales como la idea de orden trascendente y la concepción corporativa de la sociedad¹⁶⁴. Sin embargo, la Justicia como tal se había ido deteriorando en favor del crecimiento del Gobierno¹⁶⁵. En esta línea de principio, mucho del poder del Gobernador ya no derivaba de su condición de juez si no del incipiente desarrollo de todo un lenguaje y tecnología institucional que respondía—aunque rudimentariamente— a una forma de Administración. Frente a un Gobernador que se había ido consolidando en un ámbito de poder fuerte, la Administración de Justicia se fue pauperizando y su reducción en el texto constitucional pareciera ir en esa línea.

El organigrama del Poder Judicial fue considerablemente simplificado en 1847. Como primera medida se eliminó de la nueva Constitución al “*Tribunal de segunda suplicación, nulidad e injusticia notoria*” que había recogido el Reglamento Provisorio¹⁶⁶. También la justicia inferior se redujo en cantidad y calidad: frente a los tres alcaldes o jueces de primera instancia con competencia material específica —dos civiles y uno criminal— del documento anterior, el Código Constitucional se limitaba a establecer sólo “*dos Alcaldes ó Jueces de 1ª Instancia en esta Capital que entenderán indistintamente así en los asuntos civiles, como en los criminales de toda la Provincia*”¹⁶⁷. Esta menor complejidad del sistema institucional de Administración de Justicia se completaba con la eliminación de todas las disposiciones relativas a la organización del Tribunal de Apelaciones, cuya instalación no se ordenaba de inmediato sino que se supeditaba a las circunstancias políticas y económicas de la Provincia: “*tan luego sea posible*”¹⁶⁸. Mientras tanto, como se vio, el Gobernador ejercería las veces de Tribunal superior de apelaciones.

¹⁶⁴ Sobre tales características, véase AGÜERO, A. (2007b) “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en LORENTE, M. (coord.) *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 21-58.

¹⁶⁵ Para la relación entre Justicia y Gobierno durante el período de transición entre el Antiguo Régimen y el nuevo orden véase MANNORI, L. (2007) “Justicia y Administración entre antiguo y nuevo régimen”, en *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, Nro. 15, pp. 125-146. También el trabajo de SOLLÀ, J. (2007) “Justicia bajo administración (1834-1868)”, en LORENTE, M. (coord.) *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 291-324.

¹⁶⁶ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XVII, ART. 1º.

¹⁶⁷ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XVII, ART. 3.

¹⁶⁸ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XVII, ART. 5. Con respecto a la competencia de ese futuro Tribunal, la Constitución de 1847 no innovó demasiado respecto del documento anterior, reservándose para éste las mismas causas y negocios que conocían las Audiencias y todas las que el propio Código Constitucional designaba (Cap. XVII, Art. 7), los recursos de fuerza y competencias entre la jurisdicción ordinaria y mercantil (Cap. XVII, Art. 8), los pleitos sobre contrabando, revisión de cuentas, y demás ramos y negocios de Hacienda, en grado de apelación y primera suplicación (Cap. XVII, Art. 9), además de ser el encargado de terminar la sustanciación del grado en el caso de recursos de segunda suplicación, nulidad e injusticia notoria (Cap. XVII, Art. 11).

Finalmente, en cuanto a la composición y textura del orden normativo, el peso específico de la tradición jurídica se hacía mucho más patente en la nueva Constitución. Frente a la declamada provisionalidad –“hasta que la constitución determine lo conveniente”– y el aséptico “subsistirán” de 1821¹⁶⁹, en el Código Constitucional de 1847 se disponía tajantemente que quedaban enteramente con “su valor, fuerza y vigencia...” todas las disposiciones normativas del antiguo gobierno español; conservándose la condición de no ser opuestas a la libertad e independencia sudamericanas, al propio Código Constitucional y demás disposiciones del Ejecutivo “de la Provincia”¹⁷⁰. Otro indicio más del predicho confederacionismo del nuevo texto cordobés¹⁷¹.

II. 2. 5. Ciudadanía y sistema electoral

El último gran conjunto de modificaciones de 1847 se circunscribieron a las disposiciones sobre ciudadanía y demás aspectos del sistema electoral. A grandes rasgos, se trató de la recepción del sistema diseñado por el representante Bulnes e incorporado al Reglamento Provisorio durante la primera ola de reformas del año 1826. A diferencia de la uniformidad establecida por el Reglamento Provisorio, se recogió la solución adoptada como repuesta al “caso Gil”¹⁷². El Código Constitucional distinguía entre las dos caras del ejercicio del derecho de sufragio; por una parte, el sufragio activo, caso para el que se exigía una edad mínima de dieciocho años, y por otra, el sufragio pasivo, para cuyo ejercicio se debía haber cumplido veinticinco años de edad¹⁷³. Se establecía también, tal como había sido reescrito en 1826, que la proporción entre representantes y habitantes debía guardar la relación de uno cada seis mil, duplicando el número de escaños en el Congreso Provincial respecto del diseño de 1821¹⁷⁴. Llamativamente, volvió a transcribirse de manera irreflexiva el Inc. 2º del Art. 11, Cap. XI; el mismo establecía

¹⁶⁹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 3.

¹⁷⁰ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 3.

¹⁷¹ En la Constitución anterior la condición de vigencia de todas las disposiciones del antiguo gobierno español era no estar en oposición con las libradas desde el 25 de mayo de 1810 en adelante por el “*Gobierno General de las Provincias*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XII, ART. 3.

¹⁷² El “caso Gil” fue aquel episodio analizado anteriormente en el que el representante Julián Gil presentó ante el Congreso Provincial su renuncia fundada en la inhabilidad para ser electo por no haber alcanzado la edad correspondiente; asunto que quedó resuelto con la derogación del artículo que exigía ese requisito y la incorporación de un doble rasero en materia de sufragio: 18 años para el ejercicio del voto activo y 25 años para el ejercicio del voto pasivo, cfr. AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 19 de abril de 1826*, p. 84.

¹⁷³ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 1º. Sobre la distinción entre sufragio activo y pasivo véase el análisis realizado precedentemente al tratar las distintas reformas al texto constitucional de 1821.

¹⁷⁴ Según la versión original del Reglamento Provisorio la proporción entre representantes y “almas” era de uno por cada doce mil, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. CUARTA, CAP. X, ART. 10. Además, se incorporó el más moderno término “habitantes” en lugar del “almas” utilizado por los primeros constituyentes en 1821, *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. CUARTA, CAP. X, ART. 10. La distinción entre “almas” y “habitantes” ha sido analizada precedentemente con el auxilio de CLAVERO, B. (2013) Ob. cit. al momento de referir la reforma al texto de 1821 que intercambiaba tales términos.

cómo proceder en el caso de distritos en los que no se llegaba al número indicado de habitantes para elegir un representante, disponiendo que debía considerarse la “*fracción que llegue a ocho mil... como si llegara al número de doce mil*”; el error estaba en que la proporción establecida, como se acaba de ver, era de uno por cada seis mil.

En relación con los sujetos provenientes de otros territorios, las nuevas formulaciones normativas eran bastante más inclusivas. Estando ya lejos el tiempo hostil de las guerras de independencia, se simplificaron los requisitos para que ciertos extranjeros pudieran participar en la vida política de la comunidad, reduciendo –por ejemplo– de diez a seis años el período de residencia exigido para ocupar empleos de república a quienes, siendo de fuera, tuvieran la “*indispensable calidad de americano*”¹⁷⁵. Siguiendo el mismo principio, se eliminó toda una serie de prohibiciones de participar activamente a los europeos españoles. El nuevo texto ya no distinguía según su procedencia y se refería genérica y abstractamente a los “*extranjeros*”, a quienes se les exigía carta de ciudadanía para lo cual debían, además de sortear el procedimiento de rigor, acreditar su apoyo y ofrecer sus servicios tanto a la libertad e independencia americana como a la “*causa Nacional de la Federación*”¹⁷⁶.

Entre las calidades para ser nombrado elector se redujo a la mitad el valor de la propiedad que se debía reunir –quinientos pesos contra mil de la norma anterior–. Es innegable que esto tuvo su correlato inmediato en el “universo de los elegibles” ampliando los padrones electorales¹⁷⁷. Fue precisamente la base popular uno de los sostenes de la autoridad política durante el período rosista¹⁷⁸. Sin embargo, no debe olvidarse el papel restrictivo de la exigencia ya analizada de “*ser reconocido por federal*” para poder participar en la vida política de la Provincia.

En cuanto a la división administrativa de la Provincia, el Código Constitucional Provisorio de 1847 adoptó un lenguaje que, si bien podía sonar novedoso en materia constitucional, hundía sus raíces en el tiempo colonial: los “*Curatos*” pasaron definitivamente a ser “*Departamentos*” y convalidando la extinción de los cabildos ordenada en 1824, ya no se mencionaba a las “*Municipalidades*”¹⁷⁹. En los casos en que

¹⁷⁵ Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ART. 3.

¹⁷⁶ Código Constitucional Provisorio... cit., SECC. TERCERA, CAP. VI, ARTS. 7 y 9.

¹⁷⁷ ROMANO, S. (2010) “Las nuevas fuentes de legitimación del poder y sus protagonistas en la configuración del sistema republicano y representativo de la Provincia de Córdoba”, en TCACH, C. (coord) *Córdoba Bicentenario. Claves de su historia contemporánea*. Editorial de la UNC – CEA, Córdoba, pp. 15-35, p. 7.

¹⁷⁸ Pueden consultarse al respecto los trabajos de SALVATORE, R. (1998a) “Expresiones federales: formas políticas del federalismo rosista”, en GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comp.) *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, Eudeba, Buenos Aires; y (1998b) “Consolidación del régimen rosista (1835-1852)”, en GOLDMAN, N. (dir.) *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, Colección Nueva Historia Argentina, Tomo III, Sudamericana, Buenos Aires.

¹⁷⁹ Es lo que surge de comparar las disposiciones de los capítulos VIII y IX de ambos textos constitucionales. Como ya se apuntó en relación con el término “departamentos”, que podría generar la impresión de una nueva división del territorio en base a criterios de racionalidad administrativa, era un concepto que ya aparecía en textos anteriores al primer texto constitucional de 1821. TORRES, confiesa que no ha podido “encontrar la fecha exacta, ni ningún documento por el cual se haya ordenado oficialmente la división de la provincia en departamentos [...] los nombres de las regiones, figuran desde muy antiguo en

debía determinarse si una persona era o no apta para participar activa o pasivamente en una elección, lo que originalmente se había encomendado a las municipalidades pasó a ser de resorte exclusivo de una junta de calificaciones de la propiedad, compuesta en la ciudad por los alcaldes ordinarios, el fiscal de estado y el procurador de la ciudad, y por los jueces de alzada junto a dos pedáneos y dos vecinos honrados en la zona rural; estas juntas, además, debían llevar el registro cívico de ciudadanos¹⁸⁰.

Si bien el objeto de la reforma en materia electoral, con las pequeñas modificaciones que fueron introducidas, era la simplificación de las reglas y etapas de los comicios, en el afán por reducir el detalle de las disposiciones se volvió más difícil la comprensión de los momentos en los que estaba dividido el proceso electoral, tanto en la ciudad como en la campaña. Por ejemplo, el nuevo Art. 2 del Cap. IX comenzaba estableciendo que “*en cada sección darán su voto los sufragantes...*”, cuando hasta el momento nada se había dicho sobre la división de la Ciudad y las Villas en secciones.

El procedimiento de renovación del Congreso Provincial es otro de los aspectos que varió respecto del texto anterior. El nuevo mandato de los representantes tenía tres años de duración y la Sala se debía renovar parcialmente todos los años en una tercera parte de sus miembros¹⁸¹. Por otro lado, es interesante destacar que el nuevo documento nada decía sobre dos asuntos que en los años pasados habían generado serias disputas entre las distintas autoridades políticas: el tema de las dietas de los representantes y la prohibición de admitir cargo, empleo o comisión durante el término de sus mandatos. Otro ejemplo más de adecuación de la Constitución formal a la práctica política, fue el hecho de que los constituyentes del '47 recogieran en la norma fundamental la costumbre

numerosos documentos, mapas, etc.”, TORRES, A. (1948) “Organización administrativa de Córdoba; sus antecedentes históricos y legales”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 35, Nros. 3-4, pp. 821-874, julio-octubre, p. 821. Según la hipótesis del autor, los departamentos se habrían formado sobre la base de la jurisdicción territorial de los curatos o divisiones eclesiásticas que se verificaban a medida que se enviaban párrocos a los distintos asentamientos en la zona rural. Por su parte, TELL explica que “a fines del período colonial esta jurisdicción [Córdoba] estaba compuesta por la ciudad cabecera y diez subdivisiones administrativas denominadas ‘partidos’, que en líneas generales coincidían con las jurisdicciones eclesiásticas o ‘curatos’. En las primeras décadas independientes, se crearon nuevas subdivisiones administrativas, cuya denominación oficial pasó a ser la de ‘departamentos’, aunque las autoridades siguieron utilizando el término ‘curato’ para referirse a ellas. Hacia mediados del siglo XIX ya eran trece los departamentos, que a su vez se subdividían en varias pedanías, también llamadas ‘partidos’”, TELL, S. (2008) *Córdoba rural, una sociedad campesina (1750-1850)*, Prometeo Libros, Buenos Aires, p. 54. También CELTON dice que desde finales de la época colonial las once divisiones administrativas de la Provincia eran denominadas “indistintamente departamentos, partidos o curatos, en este caso, continuando con una antigua costumbre que homologaba la jurisdicción civil con la eclesiástica”, CELTON, D. (1996) *Ciudad y campaña en la Córdoba colonial*, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba, p. 24.

¹⁸⁰ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. CUARTA, CAP. VIII, ARTS. 5 y 6. Se ha dicho que “a los fines de contar con padrones actualizados para las elecciones en la campaña la reforma del Reglamento en 1847 dispuso mantener un registro cívico con los ciudadanos aptos para ejercer el voto activo y pasivo y, aparte, los que hubiesen perdido la ciudadanía. (...) En este punto se advierte que la reforma precisó por un lado quiénes compondrían las juntas encargadas de llevar el registro cívico, ya que en el Reglamento de 1821 esa tarea estaba a cargo de los mismos que presidían las asambleas primarias y, por otro, eliminó el testimonio “externo” de los dos vecinos honrados, padres de familia y propietarios para avalar dicho registro, con lo cual –entendemos– se dio mayor poder a los jueces para decidir quiénes podían votar y ser elegidos”, Romano (2010) Ob. cit., p. 7.

¹⁸¹ *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. QUINTA, CAP. XI, ART. 3.

electoral de la primera mitad del Siglo XIX según la cual los electores estaban facultados para designar a sustitutos que los reemplazaran ante la asamblea electoral donde se elegía a los miembros del Congreso Provincial¹⁸².

Como colofón, puede afirmarse que la sanción del Código Constitucional Provisorio de la Provincia de Córdoba de 1847, significó la formalización de la dinámica política interior, y de prácticas ancladas en la constitución material de entonces. Años de vigencia formal de toda una serie de disposiciones constitucionales no habían podido condicionar ni contener el modo en que se venía ejerciendo –en los hechos– el poder, ante lo cual, la solución no fue otra que adecuar, como ya había sido hecho en otras oportunidades, la letra de las normas al inmenso peso de la práctica política. El sinceramiento de los actores políticos es un indicador del cambio de su horizonte de expectativas. La Constitución legitimó la autoridad, consolidó el espacio provincial, pero no llegó a alterar la matriz político-constitucional cordobesa. Estas quizás sean las razones de que, al menos en la superficie textual, el lenguaje de la nueva Constitución resulte mucho menos atractivo que el del Reglamento Provisorio de 1821 y, consecuentemente, haya sido duramente criticado por los historiadores locales¹⁸³.

¹⁸² *Código Constitucional Provisorio...* cit., SECC. CUARTA, CAP. IX, ART. 8.

¹⁸³ Son muy elocuentes las fuertes palabras que le dedica, por ejemplo, MARTÍNEZ PAZ: “La Constitución de 1847 muestra una organización inflexible de partido, que procura el exterminio de los enemigos; la convicción política, religiosa y social queda impuesta coactivamente. Toda la ciudadanía es una milicia al servicio de la autoridad, que no respeta ni siquiera los fueros inviolables del pensamiento”, MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) *La formación histórica de la provincia de Córdoba*, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba, Argentina, p. 127.

CAPÍTULO V

EL HORIZONTE CONFEDERATIVO (1820-1855)

I. CÓRDOBA Y EL RESTO DE LAS PROVINCIAS RIOPLATENSES; I. 1. La dimensión federal de la política cordobesa durante la primera mitad del XIX; II. CÓRDOBA Y LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA; II. 1. Córdoba y el Congreso General Constituyente de Santa Fe; II. 1. 2. Los debates sobre el texto de 1853 y su eco en Córdoba; II. 2. Relaciones intertextuales entre los documentos cordobeses y el federal de 1853; III. LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DE 1855; III. 1. La necesaria adaptación de Córdoba a la Constitución de 1853; III. 2. La Constitución y su derrotero en el Congreso Nacional; III. 3. ¿Un nuevo texto para un nuevo tiempo? Indicios de persistencia.

I. CÓRDOBA Y EL RESTO DE LAS PROVINCIAS RIOPLATENSES

I. 1. La dimensión federal de la política cordobesa durante la primera mitad del XIX

Si se recuerda lo que se señaló al comienzo de este trabajo, el proyecto federal de Bustos tenía dos dimensiones bien definidas. Los Gobernadores que siguieron también debieron ocuparse de la política interior y exterior de la Provincia. Hasta aquí se ha analizado en profundidad la dimensión doméstica; corresponde ahora reflexionar sobre los aspectos principales de la dimensión interprovincial. Desde el año 1810 en adelante, la elite de Córdoba fue sufriendo los vaivenes de la misma inestabilidad política que legitimó, sucesivamente, a autoridades con intereses y proyectos diametralmente opuestos. A grandes rasgos se podría adelantar que la Provincia experimentó, en distintas etapas, primero, el rechazo a la causa revolucionaria y la adhesión explícita a la autoridad colonial, luego, los sucesivos intentos por encabezar la organización político-constitucional de las provincias bajo el signo federal primero y bajo los presupuestos de la postura unitaria después y, finalmente, un largo período caracterizado por el acercamiento al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, y el apoyo a su política externa e interna.

Ya se ha visto que en el año 1820 la caída del Director Rondeau, como consecuencia de la batalla de Cepeda, disolvió el gobierno central y abrió un nuevo período en el que las viejas ciudades existentes en el territorio del Río de la Plata aseguraron –cada una a su modo– su soberanía provincial. Tradicionalmente, la historiografía argentina, tanto constitucional como política, desde MITRE en adelante, ha denominado este momento histórico que se extendió por más de tres décadas como el de

las “*autonomías provinciales*”¹. Esa retroproyección del estatus político de las provincias desarrollado por la teoría constitucional argentina luego de sancionada la Constitución, ha limitado la comprensión cabal del período, condicionado la imagen de las provincias por la forma de estado federal que acabó adoptándose². Desde otro enfoque historiográfico, que se desliga del paradigma de la “*nación preexistente*” para estudiar el tiempo que siguió a la emancipación hispanoamericana, se ha revalorizado la condición de los sujetos políticos locales y su potestad soberana, situándolos en un papel mucho más protagónico durante el proceso de construcción de los estados hispanoamericanos³. De acuerdo con esta última perspectiva de análisis, el desarrollo de una cada vez más intensa y compleja diplomacia entre las provincias sería un indicador del estatus soberano de los estados provinciales y, a la vez, un excelente campo de estudio para entender sin reduccionismos el ajetreado camino hacia la organización constitucional⁴.

Más allá de una imponente cantidad de pactos o tratados interprovinciales de la más diversa índole, durante las tres décadas que transcurrieron desde 1820 a 1853 tuvieron lugar –o se pretendió que así fuese– varios intentos de organización constitucional. El objetivo que perseguían en ellos las provincias era acordar la erección de una esfera de poder que los aglutinara bajo una forma de gobierno cuya trama fue uno de los principales puntos de disputa, desarrollándose diversos discursos acerca del modo en que cada provincia se relacionaría con las demás y con el nuevo sujeto colectivo, o cómo se acabarían distribuyendo las potestades políticas. En todos aquellos intentos, en mayor o en menor medida, Córdoba tuvo un protagonismo peculiar cuya revisión resulta útil para bosquejar la representación de su estatus y su posición en la relación de fuerzas del concierto rioplatense.

El primer intento de reunión interprovincial, después de la caída del Gobierno central en el año 1820, fue el congreso que el Gobernador de Córdoba Bustos pretendió

¹ La obra de MITRE suele considerarse como una de las primeras manifestaciones de la historiografía argentina, MITRE, B. (1858) *Historia de Belgrano*, Imprenta de Mayo, Buenos Aires.

² Para entender la distinción entre “soberanía” y “autonomía” provincial, y cómo el segundo concepto acabó desplazando al primero, fue retroproyectado, y se impuso como categoría política para la comprensión de la historia constitucional argentina, véase AGÜERO, A. (2014) “Autonomía por soberanía provincial. Historia de un desplazamiento conceptual en el federalismo argentino (1860-1930)”, en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Nro. XLIII, pp. 341-392.

³ Un claro ejemplo de este enfoque aplicado a la experiencia rioplatense es la obra de CHIARAMONTE, J. (1997) *Ciudades, provincias, estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846)*, Emecé, Buenos Aires.

⁴ Un abordaje novedoso sobre el período del interregno (1810-1816) en el ex virreinato de Nueva Granada, normalmente calificado por la historiografía como el momento de la “*patria boba*”, con el que pueden trazarse numerosos paralelismos con el Río de la Plata, puede hallarse en la obra de GUTIÉRREZ ARDILA, D. (2010) *Un nuevo reino: geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno en Nueva Granada, 1810-1816*, Universidad del Externado, Bogotá. Para el Río de la Plata, similar propuesta acerca del “*carácter diplomático de las reuniones interprovinciales*” había sido planteada por CHIARAMONTE, J. (1993) “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en CARMAGNANI, M. (comp.), *Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 81-132.

celebrar al año siguiente en su propia Provincia⁵. La convocatoria lanzada por él al resto de gobernadores deja entrever el carácter de su proyecto de país y qué lugar le cabía en el nuevo diseño político a cada uno de los sujetos colectivos que protagonizaban el período. Ya se ha analizado en otra parte de este trabajo cómo la invitación fue enviada a los gobernadores intendentes de Tucumán, Bernabé Aráoz, y Salta, Martín Güemes, al de Córdoba, al de Mendoza, y al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, omitiendo deliberadamente hacerlo con las ciudades subordinadas, respetando así el viejo orden intendencial⁶. Sin embargo, apenas unos meses después, hacia finales de 1820 Bustos ya había cambiado su postura respecto de los interlocutores válidos para impulsar la organización constitucional, ampliándola hacia el resto de distritos que en ese año habían declarado su independencia, esto es, las ciudades subalternas. Esta actitud de Bustos se consolidaría al año siguiente⁷.

El armado del congreso tuvo sus altibajos. A una primera etapa en la que rápidamente se comenzaron los procedimientos para la designación de los diputados que participarían en las reuniones, siguió un duro revés con la intención del Litoral rioplatense de arrebatar a Córdoba el protagonismo político impulsando como sede de la reunión el Convento de San Lorenzo en la Provincia de Santa Fe⁸. Pero la diplomacia cordobesa supo aprovechar la tensión existente entre Buenos Aires y Santa Fe para erigirse en mediadora y pacificadora, recobrando su rol principal y reinstalando el compromiso de reunir un congreso en el centro del país, lo que quedó suscrito en el tratado de paz facilitado por Córdoba celebrado en la estancia de Benegas: “*Los mismos [los gobiernos representados] promoverán eficazmente la reunión del Congreso dentro de dos meses,*

⁵ Un completo análisis de este proceso encabezado por Córdoba puede encontrarse en la obra de VERDO, G. (2006a) *L'indépendance argentine entre cités et nation (1808-1821)*, Publications de la Sorbonne, París, pp. 379 y ss.

⁶ LOBOS, H. (2011) *Historia de Córdoba*, Tomo IV: La Provincia Autónoma, Ediciones del Copista, Córdoba, p. 52

⁷ Como ha puesto de relieve VERDO, cuando en septiembre de 1821 se retomó la iniciativa política por parte de Córdoba, la imagen del tablero era totalmente diferente: “*Lorsqu’il relance son projet au mois de septembre, Bustos adopte une logique de ralliement du plus grand nombre, qui l’oblige à considérer que toutes les provinces indépendantes ont le droit d’être représentées (...) C’est donc à travers la mise en place d’une instance représentative que les cités subalternes parviennent à acquérir une véritable existence politique et à affirmer leur autonomie de gouvernement*”, VERDO, G. (2006a) Ob. cit., p. 419.

⁸ El tratado de Pilar firmado por los Gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos en 1820 así lo disponía en la primera de sus cláusulas: “*Artículo 1º - Protestan las partes contratantes que el voto de la Nación, y muy particularmente el de las Provincias de su mando, respecto al sistema de gobierno que debe regirlas se ha pronunciado a favor de la confederación que de hecho admiten. Pero que debiendo declararse por Diputados nombrados por la libre elección de los Pueblos, se someten a sus deliberaciones. A este fin elegido que sea por cada Provincia popularmente su respectivo representante, deberán los tres reunirse en el Convento de San Lorenzo de la Provincia de Santa Fe a los sesenta días contados desde la ratificación de esta convención. Y como están persuadidos que todas las Provincias de la Nación aspiran a la organización de un gobierno central, se comprometen cada uno de por sí de dichas partes contratantes, a invitarlas y suplicarles concurren con sus respectivos Diputados para que acuerden quanto pudiere convenirles y convenga al bien general*”.

remitiendo sus diputados a la ciudad de Córdoba por ahora, hasta que en unidad elijan el lugar de su residencia futura”⁹.

A mediados de 1821 ya se encontraban en Córdoba varios de los diputados de las distintas provincias rioplatenses que participarían del congreso cuyo objetivo principal era dar al conjunto una Constitución y organizar políticamente el territorio bajo el signo federal¹⁰. Todo parecía marchar de acuerdo a los planes de Bustos hasta que sobrevino un cambio inesperado en la política porteña con el advenimiento al poder del Ministro de gobierno de Buenos Aires Bernardino Rivadavia, uno de los personajes más relevantes del período en el Río de la Plata¹¹. Un manifiesto firmado por el Gobernador Martín Rodríguez, pero de clara factura rivadaviana, planteaba la inconveniencia del congreso cordobés y la inoportunidad de constituirse el país en un estado de anarquía tal como el que atravesaban las provincias. A esta declaración siguieron una serie de decisiones de la Sala de Representantes porteña, revocando los poderes originarios de sus diputados y reduciendo sus instrucciones a una mera autorización para celebrar tratados interprovinciales, con lo cual, se condicionaba el pretendido carácter constituyente del congreso. Pese a la diáspora de diputados, las autoridades cordobesas trataron de inaugurar por todos los medios las sesiones en noviembre de 1821, aunque debieron suspender el inicio por un tiempo más. Finalmente, con la firma del tratado del cuadrilátero entre Buenos Aires y todo el litoral rioplatense –Entre Ríos, Corrientes y

⁹ Artículo 2 del tratado de Benegas, acuerdo de paz firmado por las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, con la mediación de Córdoba, el 24 de noviembre del año 1820.

¹⁰ En septiembre de 1820 la Asamblea cordobesa había nombrado para el cargo de diputado en representación de la Provincia al Doctor José Dámaso Gigena, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 19 de septiembre de 1820*, pp. 29-30. Un año más tarde, el Congreso Provincial instalado de acuerdo a los mandatos de la Constitución **Provincial**, ante el pedido del Gobernador de que se otorgasen los poderes e instrucciones al Diputado para el Congreso General de la Nación, se trajeron las actas del 19 de septiembre de 1820 y, según la facultad otorgada por el Reglamento Provisorio (Art. 1, Cap. XII), se ratificó y aprobó la elección hecha por la Asamblea. José Antonio Ortiz del Valle salvó su voto, considerando que debía el Congreso, en virtud de sus facultades constitucionales, elegir libremente a quién designar y no constreñir su voluntad según el nombramiento que ya existía. Seguidamente, se seleccionó “por ahora” otro diputado más, resultando electo José Eugenio del Portillo. Se resolvió otorgar a cada uno la suma de dos mil pesos de los fondos de la Provincia, y que las instrucciones se otorgarían “oportunamente”, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de agosto de 1821*, pp. 165-166. Ante la solicitud del Ejecutivo, en la sesión del 12 de septiembre se reconsideró la elección de los dos diputados al Congreso General. Allí se dijo que debían reputarse nulos los acuerdos previos por inasistencia de algunos representantes en las deliberaciones y por la incompatibilidad del electo José Eugenio del Portillo según la norma del Reglamento Provisorio, Cap. XII, Art. 2. Se acordó en consecuencia la nulidad de ambos nombramientos. Se hizo una nueva votación y resultaron electos Dámaso Gigena y José María Bedoya, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 12 de septiembre de 1821*, pp. 172-174.

Por su parte, en representación del resto de provincias, se encontraban en Córdoba hacia mediados de 1821 los siguientes diputados: “Por Buenos Aires, don Juan Cruz Varela, don Matias Patron, don Justo García Valdéz y don Teodoro Sanchez de Bustamante. -Por Córdoba, don Dámaso Jijena. -Por Santa Fé, don Pedro Larrachea. -Por Mendoza, don Francisco Delgado. -Por San Juan, don Posidio Rojo. -Por San Luis, don Marcelino Poblet. -Por Santiago del Estero, don Mateo Saravia”, SALDÍAS, A. (1878) *Ensayo sobre la historia de la Constitución Argentina*, Imprenta y librería de mayo, Buenos Aires, p. 124.

¹¹ La oposición política entre Bustos y Rivadavia, y sus visiones bien diferentes acerca del modo en que debían organizarse las provincias, ha sido abordado por GARZÓN, R. (2006) *Juan Bautista Bustos y Bernardino Rivadavia: dos proyectos de país*, Ediciones del Copista, Córdoba.

Santa Fe– en enero de 1822, se terminó de sepultar el proyecto federal de Juan Bautista Bustos y el protagonismo de Córdoba en el proceso de organización constitucional durante la década de 1820¹².

Rivadavia impulsó toda una serie de reformas de carácter liberal –en materia religiosa, política y económica– que se llevaron a cabo en Buenos Aires durante sus años como ministro de gobierno entre 1821 y 1824¹³. En ese contexto, y como parte de su proyecto político, inició las tratativas para la reunión de un nuevo congreso constituyente que rápidamente fue bien recibido y apoyado por el resto de las provincias¹⁴. Córdoba no fue la excepción. Si bien hubo algunas voces en contra de la participación en el congreso, aduciendo la inoportunidad de la reunión hasta que “*la Provincia no estuviese organizada en un estado de respetabilidad*”, la mayoría acabó imponiéndose con el argumento de la necesidad, haciendo ver “*los perjuicios que acarrearía á la causa del país en general... la demora por más tiempo en la organización de un Gobierno común que únicamente podía subvenirse á las grandes necesidades del Estado*”¹⁵. Después de un arduo debate sobre cuestiones puntuales como dónde enviar los Diputados, su número, la renta que debían disfrutar, la duración de su mandato y las instrucciones que debía dárseles, se decidió que la Provincia de Córdoba concurriría al Congreso General al que había sido invitada por su par de Buenos Aires¹⁶.

¹² El artículo 13 del tratado del Cuadrilátero establecía expresamente que “*No considerando útil al estado de indigencia y devastación en que están envueltas las provincias de Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes por dilatadas guerras civiles que han soportado a costa de sangre, desembolsos, ruinas y sacrificios de todo género, su concurrencia al diminuto Congreso reunido en Córdoba, menos conveniente a las circunstancias presentes nacionales, y al de separarse la de Buenos Aires, única en regular aptitud respectiva para sostener los enormes gastos de un Congreso, sus empresas marciales y en sostén de su nascente autoridad, quedan mutuamente ligadas a seguir la marcha política adoptada por aquella en el punto de no entrar en Congreso por ahora, sin previamente arreglarse, debiendo, en consecuencia, la de Santa Fé retirar su diputado de Córdoba*”.

¹³ Una de las más importantes medidas políticas impulsadas fue la supresión de las instituciones capitulares. Ese fenómeno, ubicado en su contexto, ha sido analizado por véase TERNAVASIO, M. (2000) “La supresión del cabildo de Buenos Aires: ¿crónica de una muerte anunciada?”, *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, Tercera serie, N° 21, 1er semestre, pp. 33-73. Una obra más general sobre ese momento de la política porteña es la de ROMERO, L. (1976) *La feliz experiencia, 1820-1824*, Ed. La Bastilla, Buenos Aires.

¹⁴ Una de las razones por las que la convocatoria sancionada por la Junta de Representantes de Buenos Aires sería que el art. 7 de la ley “zanjaba la espinosa cuestión de la residencia en estos términos: ‘El lugar de la Representación Nacional será el que designe la mayoría de los pueblos, expresados por sus respectivos gobiernos con el lleno de autoridad correspondiente’, cfr. RIVIERE, R. (1958) *El Gobernador Juan Bautista Bustos*, Imprenta de la Universidad, Córdoba, p. 43.

¹⁵ La inoportunidad fue alegada por el Fray Hipólito Soler quien presentó un proyecto. La contestación vino de parte de “*los Señores Saráchaga, Fragueiro y Corro*”. Finalmente, se decidió tratar aquellos papeles relativos a la instalación del Congreso Nacional con preferencia a la organización interior de la Provincia, AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 24 de agosto de 1824*, p. 225.

¹⁶ AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 25 de agosto de 1824*, p. 228. A lo largo de sucesivas sesiones fueron definiéndose aquellas cuestiones planteadas: el lugar de la reunión seleccionado por Córdoba fue la ciudad de Buenos Aires, AHDCD, Tomo I, *Acta de la sesión del 27 de agosto de 1824*, p. 234; tres sería el número de Diputados que representarían a Córdoba en el Congreso, quienes gozarían de una renta anual de dos mil quinientos pesos –más quinientos pesos en concepto de viáticos por el viaje de ida y vuelta–, renta que continuarían disfrutando hasta un mes después de concluida su representación, y se decidió también que

El aspecto más debatido en el seno de la Legislatura cordobesa fue el tenor de las instrucciones que se debían dar a los Diputados que representarían a la Provincia ante el Congreso. Siendo de tal gravedad el asunto, puesto que la libertad de acción de los designados estaría limitada por esos mandatos de actuación, se planteó la necesidad de fijar previamente las bases sobre las cuales se proyectarían aquellas instrucciones. En este sentido, los representantes comenzaron a proponer distintos puntos fundamentales que debían estar contenidos, tópicos que iban desde la independencia de América, la guerra contra España, la independencia de las Provincias y la garantía de sus instituciones, hasta la declaración de “*que la Religión Católica Apostólica Romana sea la Religión de la Provincia de Córdoba, protegida por sus autoridades*”¹⁷. Finalmente se resolvió nombrar una comisión compuesta por el representante Saráchaga para que preparara el proyecto de instrucciones y lo presentara a la Sala para su correspondiente sanción, sobre la base del sostenimiento de la “*independencia de América y la Religión Apostólica Romana*”¹⁸. Fieles a la tradición local, las instrucciones preparadas y puestas a discusión eran marcadamente católicas¹⁹. Previendo la intención de Buenos Aires de proyectar sobre las demás provincias su espíritu liberal, se condicionó la permanencia de los diputados cordobeses en el Congreso: debía respetarse rigurosamente la Religión Católica Apostólica Romana, excluirse otros cultos, mantenerse la disciplina vigente en la Iglesia por los cánones, y promoverse la comunicación con el Pontífice Romano²⁰.

Otro de los puntos fundamentales de las instrucciones era el relacionado con la independencia de América. En el proyecto se condicionaba también la presencia de los representantes al hecho de que todas las Provincias que iban a entrar al Congreso juraran “*sostener la independencia política de la América contra la Nación Española y toda potencia que intente subyugarla*”, comprometiéndose a mantener la guerra hasta la expulsión definitiva de los ejércitos españoles de este continente²¹. Finalmente, respecto de la situación política interior de las Provincias, la instrucción era que cada provincia

durarían dos años en su mandato, Oficio del Congreso Provincial al Poder Ejecutivo fechado el 18 de septiembre de 1824, puede consultarse en *Compilación de leyes, decretos, acuerdos de la Excm. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter público dictadas en la Provincia de Córdoba desde 1810 a 1870*, Tomo I, Imprenta del Estado, Córdoba, 1870, pp. 19-20.

¹⁷ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 31 de agosto de 1824*, p. 239.

¹⁸ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 7 de septiembre de 1824*, p. 245.

¹⁹ El cordobés participaba de la ola de constitucionalismo hispano, caracterizado como “católico”, cfr. LORENTE, M. (2013) “De las leyes fundamentales de la Monarquía Católica a las constituciones hispánicas, también católicas”, en HÉBRARD, V. y VERDO, G. (eds.) *Las independencias hispanoamericanas: un objeto de historia*, Casa de Velázquez, Madrid. Este aspecto ya ha sido analizado en el Capítulo II de este trabajo: “II. 1. Una república católica”.

²⁰ Arts. 1-4 de las Instrucciones para los Diputados que representarían a la Provincia de Córdoba ante el Congreso General del año 1824. Pueden consultarse en AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 10 de septiembre de 1824*, pp. 247-251. En la sesión del 17 de septiembre se reformó el Art. 3 suprimiéndose la palabra “*Cánones*” y dejándose de condicionar la presencia de los diputados cordobeses en caso de reforma de la disciplina de la Iglesia, obligándoselos simplemente a comunicar cualquier modificación en este punto a la Legislatura de la Provincia, AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 17 de septiembre de 1824*, pp. 254-255.

²¹ Arts. 5-6, Ídem.

conservara la posición y administración interior que tenía respecto del resto, hasta tanto las circunstancias permitieran discutir una constitución permanente. Se encargaba al Congreso, transitoriamente, la tutela de las instituciones de cada una y de “*juzgar por ellas las discordias que se susciten entre unas y otras, y en cada Estado particular, entre sus gobiernos y sus habitantes*”; y fue precisamente en ese carácter de juez del Congreso General, que los representantes del Congreso Provincial cordobés acudieron en busca de auxilio cuando se enfrentaron al Gobernador²².

²² En este sentido los Arts. 9-10, Ídem. Fue precisamente esa facultad de tuición de las instituciones provinciales, atribuida al Congreso General por medio de las instrucciones cordobesas, la que habilitó a los representantes a acudir ante el cuerpo nacional con motivo de la irregular reelección –hecha por aclamación popular– del Gobernador Juan Bautista Bustos a principios de 1825. El Congreso llegó a formar una comisión compuesta, entre otros, por personalidades como Funes, Gorriti y Vélez, en cuyo seno se discutieron las facultades del cuerpo constituyente en virtud del juego armónico de las instrucciones cordobesas que autorizaban la tuición y la Ley Fundamental que garantizaba a las provincias el derecho de regirse por sus propias instituciones. En la sesión del 24 de marzo de 1825 se aprobó el despacho de la mayoría rechazando la actitud de Bustos e impulsando la intervención del gobierno nacional para garantizar la celebración de elecciones libres en Córdoba; el diario de sesiones del Congreso puede consultarse en RAVIGNANI, E. (1937) *Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los textos constitucionales, legislativos y pactos interprovinciales que organizaron políticamente la nación*, Tomo I, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Jacobo Peuser, Buenos Aires. La sesión del 24 de marzo de 1825 en pp. 1219-1236. El Gobernador de Córdoba respondió con desagrado a la nota del Congreso y este cuerpo resolvió finalmente abandonar el asunto y declarar que se había “*recibido, considerado, y mandado archivar la nota del señor general Bustos*”, ídem, p. 1267.

Una nueva intervención del Congreso Constituyente fue solicitada por los miembros de la Sala de Representantes de Córdoba para que, en calidad de juez, resolviera el conflicto que se había generado entre el Gobernador y la Legislatura, enfrentamiento que había traído como consecuencia la disolución del cuerpo provincial a mediados de agosto del año 1825. Pasada a comisión la solicitud, y luego de un largo debate entre los Diputados que más conocían la Provincia –Vélez, Funes, Castro–, se resolvió pasar al Ejecutivo cordobés la presentación de la Sala de Representantes para que informara al Congreso sobre las acusaciones allí contenidas. Hasta tanto se resolviera sobre el fondo de la cuestión, el gobierno cordobés debía suspender todo procedimiento sobre el particular –suspender el llamado a elecciones para recomponer la Sala, porque de esa manera el Gobernador llenaría su objeto y embarazaría la labor del Congreso nacional–. Para evitar los males que causaba la falta de representación, el gobierno de Córdoba debía pasar el informe exigido “*sin pérdida de momentos*”, RAVIGNANI, E. (1937) Ob. cit., Tomo II, p. 154. Bustos cumplió con el pedido y envió el informe solicitado que pasó a la misma comisión para que dictaminara, lo que se presentó el 14 de noviembre: “*La comisión ha establecido, como base de su dictamen, que este negocio es de la naturaleza de aquellos que no conviene se decidan por los principios de una justicia severa, y en los que se obtienen siempre resultados más ventajosos cuando un poder discrecional, sobreponiéndose à toda consideración, llama en su auxilio las reglas de la prudencia, y de la política*”. Siendo que se acusaban mutuamente –Sala y Gobernador– de haber abusado en el ejercicio de sus atribuciones y violado y atropellado las leyes fundamentales de la Provincia, y que a ninguno le asistía la razón por entero, la comisión decidió solicitar a los representantes que dieran un corte prudencial al conflicto, prescindiendo de lo que hacía a la materia principal del reclamo, de modo que se pudiera restablecerse en Córdoba el imperio de las leyes y el respeto a sus instituciones. En su parte dispositiva se decía “*Art. 1. El gobierno de Cordova procederà, sin demora, à convocar la provincia, para la elección de los individuos que deben integrar su representación, en lugar de don Carlos Signo, don Estanislado Learte, don Juan Prudencio Palacios, y don Juan Pablo Bulnes... y de don Pedro Ignacio Castro y Barros [...] 2. Hecha la elección, é incorporados los nuevamente electos, la representación volverà à entrar en el ejercicio de sus funciones, con arreglo à las leyes de la provincia. 3. La representación... decidirà, ante todas las cosas, sobre las tachas que resulta haberse puesto à la persona de varios de los representantes, para que, en el caso de considerarlas legales, se proceda desde luego à la elección de los que deban subrogarlos. 4. Deberà tambien ocuparse, con la posible preferencia, de establecer la regla que fije*

Luego de establecidas las bases y sancionadas las instrucciones, Córdoba nombró con la calidad de Diputados ante el Congreso a los señores Elías Bedoya, Eduardo Pérez Bulnes y José Gregorio Baigorri²³. La excusación del coautor del Reglamento Provisorio obligó a los representantes a nombrar a otro en su lugar, designación que recayó en el Deán Gregorio Funes²⁴. El siguiente paso fue extender los respectivos poderes para representar a la Provincia²⁵. Las dificultades económicas obstaculizaron la partida inmediata de los designados hacia Buenos Aires²⁶. Pese a ello, y al duro golpe que significó a la legitimidad del cuerpo la ley sancionada por la Junta de Representantes de Buenos Aires reservándose el derecho de analizar y aceptar, o no, la Constitución que pudiera llegar a sancionarse, el Congreso acabó instalándose a principios de diciembre de 1824, iniciando sus sesiones ordinarias el día 16 de ese mismo mes²⁷. La Legislatura

permanentemente el número de representantes, cuya reunión haya de considerarse suficiente en lo sucesivo para formar sala. 5. El congreso recomienda... á la representación de aquella provincia, y á su gobernador, la buena inteligencia y mutua cooperación...", ídem, p. 233.

²³ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 14 de septiembre de 1824*, p. 253.

²⁴ AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 28 de septiembre de 1824*, p. 257.

²⁵ "... usando de las facultades de nuestra representación, le conferimos todas las que competen al oficio de tal Diputado, con la plenitud que corresponde, y que usando de ellas (con arreglo á nuestras instrucciones en los casos que estas determinan sin necesidad de manifestarlas fuera de ellos) entre en unión con los Diputados de las demás Provincias... dándolo todo por firme y obligatorio para esta Provincia como si ella misma y por sí sola lo acordase", AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 14 de octubre de 1824*, pp. 261-262.

²⁶ El deterioro de las finanzas provinciales hacía imposible el pago de dietas y viáticos a los diputados lo que impedía su partida a Buenos Aires para reunirse con sus pares de las demás provincias. La ya consumada instalación del Congreso General, y el oficio del gobierno de la Provincia porteña solicitando a Córdoba la remisión de sus representantes, obligaron al Congreso Provincial a diseñar una estrategia para sortear esta situación. Sin posibilidades de recolectar fondos para dietar a sus diputados, se resolvió autorizar al Ejecutivo para que solicitara al Gobierno de Buenos Aires que en calidad de empréstito asistiera a los Diputados de Córdoba. La gravedad del asunto obligó a los representantes a reconsiderar algunas de sus decisiones anteriores, sancionándose en consecuencia que Córdoba aceptaba el comienzo de las sesiones del Congreso General aunque sus Diputados aún no hubieran llegado y para hacer más expedita su salida se autorizó al Ejecutivo a echar mano de algunos sobrantes como la caja de propios y los fondos de escuelas y policía. Esta estrategia, y la sanción de un decreto propuesto por Gobierno creando nuevos impuestos sobre apuestas y visitas a tiendas y pulperías con el objeto de dietar a los enviados por Córdoba, posibilitaron que se desistiera del empréstito previsto, AHCDC, Tomo I, *Acta de las sesiones de los días 6 y 8 de noviembre y 1º y 4 de diciembre de 1824*, pp. 277-284. Una visión general del período, incluyendo la situación de Córdoba, en HALPERÍN DONGHI, T. (1982) *Guerra y finanzas en los orígenes del estado argentino (1791-1850)*, Editorial del Belgrano, Buenos Aires.

²⁷ La Sala de Representantes de Córdoba, que había sido muy auspiciosa con la instalación del cuerpo que reunía a las Provincias, consideró que la ley porteña tenía la consecuencia potencial de tornar ilusorios y sinsentido los trabajos del Congreso General –al igual que los de los anteriores reunidos por las Provincias– y decidió sancionar el 4 de diciembre una ley en repudio de la bonaerense, "*se acordó: 1º. No son admisibles por antisociales el 2º y 3º artículos de la ley fundamental para el próximo Congreso, sancionado por la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires. 2º. Esta Sala se reserva adoptar igual base en la dura necesidad que la de Buenos Aires insista en ella, ó de no concurrir á Congreso. 3º. De lo acordado sobre el particular se instruirá por el P. E. al Diputado Dr. Dn. Gregorio Funes*", AHCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 4 de diciembre de 1824*, p. 287.

De acuerdo a la costumbre que imponía la designación del miembro de mayor edad como Presidente y el más joven en calidad de Secretario, en el Congreso Constituyente fueron nombrados provisionalmente dos cordobeses –aunque no ambos en representación de su Provincia natal–, el Deán Gregorio Funes y Dalmacio Vélez Sársfield, respectivamente; una vez instalado ordinariamente el Congreso, fue nombrado

Provincial reconoció legalmente constituido el Congreso General Constituyente, en sesión extraordinaria del 24 de diciembre de 1824²⁸.

Una de las características de este Congreso Constituyente fue su intensa actividad legislativa, previa a la sanción de la Constitución. Entre las normas más relevantes que se sancionaron cabe recordar la llamada Ley Fundamental, la Ley de creación del Poder Ejecutivo Nacional y la Ley de establecimiento de la Capital. Por medio de la primera se reproducía el pacto de asociación que ligaba a las provincias rioplatenses, se declaraba al Congreso General con calidad de “*Constituyente*” y se garantizaba a las provincias que, hasta la sanción de la Constitución, cada una continuaría rigiéndose de acuerdo a sus propias instituciones²⁹. A esta norma apeló Córdoba en más de una oportunidad para rechazar las decisiones de un Congreso General que, sin tapujos, invadía potestades provinciales. Así, por ejemplo, desconoció la ley del Congreso General sancionada el 15 de abril de 1826 en la que se arrogaba la facultad para remover a los diputados de las provincias. En esa oportunidad, los representantes cordobeses afirmaron que se trataba de una atribución de la Provincia, fundada en la importancia que tenía para el proceso de organización constitucional la preservación de las instituciones locales, constantemente amenazadas por las leyes de un Congreso General que faltaba al compromiso asumido de garantizar las instituciones de cada estado provincial³⁰.

Con similares argumentos, Córdoba también desconoció la ley de creación del Poder Ejecutivo Nacional Permanente (P.E.N.), impuesta por la mayoría unitaria del Congreso Constituyente los primeros días de febrero del año 1826. Según la norma sancionada, todas las facultades que se hallaban provisoriamente en cabeza del Gobierno de Buenos Aires –y las que la nueva Constitución estableciera– pasaban a ser atribución del “*Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata*”³¹. La Legislatura de la Provincia discutió bastante, a lo largo de varias sesiones, el proyecto para reconocer –o no– a Bernardino Rivadavia como Presidente de la Nación. Finalmente, se sancionó un acuerdo desconociéndolo, por haber sido nombrado contra el tenor expreso de la Ley Fundamental de 23 de enero³². Un mes después, a pedido del Gobernador, se aclaró que lo sancionado por la Sala no importaba reconocimiento del P.E.N. en tanto que institución

como Presidente definitivo quien fuera gobernador de Córdoba antes de la sublevación de Arequito, Don Manuel Antonio Castro.

²⁸ AHDCDC, Tomo I, *Acta de la sesión del 24 de diciembre de 1824*, p. 289.

²⁹ La Ley Fundamental sancionada el día 23 de enero de 1825 establecía además que la Constitución que se sancionara debía ser ofrecida a la consideración de las provincias y no sería promulgada, ni establecida en ellas hasta que hubiera sido aceptada (Art. 6); transitoriamente, el manejo de las relaciones exteriores y la comunicación de las decisiones del Congreso a las provincias quedaba en manos del Gobierno de Buenos Aires (Art. 7), en RAVIGNANI, E. (1937) Ob. cit., Tomo I, pp. 1132-1133.

³⁰ Véase *Compilación de leyes...* cit., p. 29.

³¹ Ley del 6 de febrero de 1826, estableciendo al P.E.N. permanente, en RAVIGNANI, E. (1937) Ob. cit., Tomo II, p. 620.

³² AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 29 de abril de 1826*, pp. 100-101.

y, por lo tanto, se precisó que tampoco se admitía la ley del día 6 de febrero de ese año que lo había creado³³.

La última de aquellas normas, votada el 4 de marzo de 1826, estableció a Buenos Aires como la capital del Estado, quedando dicha ciudad bajo la inmediata y exclusiva dirección de las autoridades nacionales. En Córdoba se rechazó la decisión de los constituyentes por ser diametralmente opuesta al Art. 3 de la Ley Fundamental bajo cuya base se hallaba instalado el Congreso Constituyente, y “*que religiosa y fielmente es obligado a observar*”³⁴.

Con todo, la progresiva expansión del poder del Congreso ubicado en Buenos Aires y su recurrente desconocimiento de la soberanía provincial acabó tensando la relación a tal punto que la Sala de Representantes de Córdoba decidió, como primera medida, la remoción de sus Diputados que no habían “*nivelado su conducta, según artículo expreso de sus instrucciones, al voto ya declarado por la provincia en la forma de gobierno, y capitalización del Estado*”³⁵. Una vez ratificada la remoción, se acordó la separación definitiva del pacto general de asociación, y se ordenó al Ejecutivo levantar las tropas según lo establecido en el Reglamento Provisorio para “*sostener su libertad, y proteger la oprimida en las demás provincias*”; encargando además al Gobernador ponerse de acuerdo con Simón Bolívar para conseguir el apoyo necesario en esa empresa, protestando a todas las Provincias “*su más cordial fraternidad, alianza y protección á su recíproco comercio*” sin dejar de asegurar para todos sus habitantes los derechos del hombre en sociedad³⁶.

Separada la Provincia del Congreso Constituyente, la norma constitucional unitaria sancionada el 24 de diciembre de 1826 no tenía ninguna posibilidad de aceptación por parte de las autoridades políticas cordobesas. A mediados del año 1825 los constituyentes habían lanzado una consulta al país solicitando opinión a las Asambleas Provinciales en relación con las bases sobre las que debía erigirse la Constitución³⁷. Con el fin de responder al Congreso, el 8 de enero de 1826 se presentaron en la Sala de Representantes dos proyectos sobre la opinión de Córdoba en relación a la forma de gobierno que debía adoptar el país. Según el primero de ellos, Córdoba se pronunciaba “*decididamente en favor de la forma ó sistema de unidad republicana, como la forma más continente (sic) para afianzar el orden, la libertad, y la prosperidad nacional*”; de acuerdo al segundo, debía depositarse “*en el Gobierno Gral. toda la porción de*

³³ AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 29 de mayo de 1826*, pp. 109-111.

³⁴ AHDCDC, Tomo II, *Acta de las sesiones de los días 11 a 21 de julio de 1826*, pp. 123-129.

³⁵ AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 31 de julio de 1826*, pp. 139-143.

³⁶ AHDCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 2 de octubre de 1826*, pp. 173-176. Véase también *Compilación de leyes...* cit., pp. 35-36.

³⁷ La práctica de la consulta, al punto de llegar a calificar la experiencia constitucional de la primera mitad del siglo XIX como un “constitucionalismo consultivo”, ha sido analizada por MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2011) “Constitucionalismo consultivo”, en *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*, Nro. 10, pp. 89-100. Su implicancia ha sido considerada en el Capítulo anterior.

Soberanía, que baste á las vías Generales” reservándose la Provincia “*el derecho de su economía y arreglo interior*”³⁸. En la sesión del 13 de enero, el segundo de los proyectos –calificado por Bustos como “*forma de Gobierno Federal*”– recibió un apoyo casi unánime, de diez votos contra uno³⁹. La contradicción entre el pronunciamiento de la Legislatura y la Constitución del año ’26 era patente⁴⁰.

A tal punto llegaba la radicalidad de la posición de Córdoba que, cuando arribó desde Buenos Aires el canónigo Juan Ignacio Gorriti, comisionado por el Congreso General para convencer a la Legislatura sobre las bondades de la Constitución y su necesaria aprobación, los representantes se negaron de plano a considerar un texto que no vinculaba de ningún modo a la Provincia ya que sus diputados habían sido removidos del Congreso Constituyente –desligándose así del pacto de Asociación Nacional– antes de su sanción⁴¹. Luego de un arduo intercambio de opiniones entre Gorriti y el Presidente de la Sala, a lo largo de dos sesiones en las cuales cada uno continuó aduciendo razones cada vez más intransigentes en apoyo de su posición, el cuerpo provincial sancionó un decreto poniendo fin al asunto. Según la argumentación de los representantes, Córdoba se encontraba “*desligada del pacto nacional*”; además, la Constitución dictada estaba envuelta en toda una serie de vicios que deslegitimaban tanto la norma como la autoridad que la había dictado: se había sancionado sin el concurso de los Diputados cordobeses, se había tomado como base el sistema de unidad, y el Congreso había actuado ilegalmente en más de una oportunidad sancionando varias leyes en violenta infracción de la Ley Fundamental de 23 de enero. Por todo ello, Córdoba no entraría en el examen del documento constitucional sancionado, devolvía el texto entregado por el comisionado y lo intimaba a abandonar la ciudad en el término fatal de cuarenta y ocho horas⁴². El proceso constituyente desarrollado durante el período 1824-1827 fracasó en Córdoba como en el resto de las provincias rioplatenses y el Congreso General Constituyente acabó disolviéndose a mediados del año 1827 sin cumplir con su objetivo.

Sepultado el intento anterior, el Gobernador Bustos recobró la iniciativa política realizando toda una serie de gestiones tendientes a lograr el éxito de una nueva reunión constituyente. Rápidamente inició las tratativas diplomáticas para convencer al resto de las provincias y suscribió con el Gobierno de Buenos Aires un tratado acordando su participación en la Convención Nacional que se reuniría en la Provincia de Santa Fe, el otorgamiento de instrucciones de carácter federal a los diputados ante esa Convención, y

³⁸ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 8 de enero de 1826*, pp. 10-13.

³⁹ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 13 de enero de 1826*, pp. 24-25.

⁴⁰ La Constitución de 1826 establecía en su artículo 7: “*La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana, consolidada en unidad de régimen*”, en SAGÜÉS, N. (2006) *Constituciones Iberoamericanas: Argentina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, CD Anexo, pp. 217-237.

⁴¹ AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 12 de enero de 1827*, p. 214.

⁴² AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 15 de enero de 1827*, pp. 219-220. La exposición de motivos de esta decisión y el decreto respectivo en *Compilación de Leyes...* cit., p. 41.

la cooperación en la guerra contra el Brasil, entre otras cosas⁴³. Acto seguido, la Sala de Representantes ratificó el acuerdo, nombró una comisión especial para formar las bases de instrucciones que se otorgarían, y designó a los Señores Salguero y Francisco Ignacio Bustos como Diputados por Córdoba ante la Convención Nacional⁴⁴.

El titular del ejecutivo cordobés se congratulaba a sí mismo por la realización de los esfuerzos necesarios para el éxito de la reunión, pero llamaba la atención por la falta de compromiso del resto de los gobernadores. En su mensaje a la Sala de Representantes del año 1828 afirmaba que *“los diputados de la provincia de Córdoba á congreso ó convencion, existen en Santa Fé, desde principios de noviembre, sin que les hayan reunido otros que los de Buenos Aires, San Luis... el gobierno ignora las causas que hayan motivado este estacionamiento... si causas extrañas han paralizado la reunion de un cuerpo nacional deliverante tan necesario en las circunstancias, la posteridad no podrá imputar este defecto á la provincia de Cordoba que há hecho quanto ha estado en su posibilidad por abreviar la nacionalizacion del país”*⁴⁵. Aunque luego de ciertos avatares alcanzó a instalarse, la autorización dada al Gobernador de Buenos Aires para ratificar en nombre de las Provincias Unidas el tratado de paz con Brasil –traspasando violentamente los derechos de las provincias, en opinión de varias de ellas– fue la bisagra a partir de la cual la Convención perdió gran parte de su legitimidad hasta su disolución en agosto de 1829⁴⁶.

En los años que siguieron ya no hubo reuniones generales con carácter constituyente hasta 1852. La dimensión federal de la política cordobesa estuvo marcada por un movimiento pendular que llevó a la Provincia desde una posición unitaria, en la que además tuvo el rol protagónico de encabezar la formación de una Liga de Gobernadores del Interior liderada por el Gobernador José María Paz, hasta una posición federal desde la cual sólo se limitó a acompañar las decisiones que se tomaban lejos de Córdoba. La adhesión al Pacto Federal suscrito el 4 de enero del año 1831 –una vez finalizado el gobierno Paz– significó también la adhesión a la política del Gobernador de

⁴³ RIVIERE, R. (1958) Ob. cit., p. 65. El acuerdo, un texto de 13 disposiciones, puede consultarse allí mismo.

⁴⁴ Bustos renunció al encargo y acabó siendo reemplazado por José Marcos Castro, AHCDC, Tomo II, *Acta de la sesión del 4 de noviembre de 1827*, pp. 455-457. Entre las instrucciones, hubo un intento por establecer –al igual que había ocurrido para los Diputados ante el Congreso General Constituyente de 1824– una disposición según la cual, la Constitución que se sancionaría por la Convención debía fijar por base la Religión Católica Apostólica Romana como Religión del Estado. Una postura contraria sostuvo que eso sería contrariar las bases convenidas con Buenos Aires e imponer una determinada Religión a una Provincia que había sancionado la libertad de cultos, razón por la cual se rechazó el artículo que pretendía adicionarse a las instrucciones de los Diputados.

⁴⁵ Documento N°1, *Mensaje del Gobernador Juan Bautista Bustos, Córdoba, abril 14 de 1828*, en FERREYRA, A (1980) Ob. cit., p. 4.

⁴⁶ GONZÁLEZ CALDERÓN, J. (1930) *Historia de la organización constitucional*, Lajouane, Buenos Aires, pp. 175 y ss.

Buenos Aires Juan Manuel de Rosas y la renuncia de las autoridades cordobesas a protagonizar el proceso de organización político-constitucional⁴⁷.

II. CÓRDOBA Y LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA

El Gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas ejerció una gran influencia política e institucional sobre todo el territorio de la Confederación durante más de dos décadas⁴⁸. Sin embargo, hacia mediados del siglo XIX su gobierno había comenzado a desgastarse y la preponderancia sobre el resto de los caudillos provinciales rioplatenses – otrora irremediamente leales a su persona – iniciaba un camino de franca retracción. El resquebrajamiento del régimen rosista comenzó con el pronunciamiento del Gobernador entrerriano Justo José de Urquiza que, abandonando la práctica de los últimos años, aceptó la simbólica renuncia que Rosas enviaba periódicamente a sus pares para legitimar su ostentación del cargo de Encargado de las Relaciones Exteriores y Asuntos Nacionales de la Confederación Argentina⁴⁹. Sin embargo, tuvo su momento culmine con la batalla de Monte Caseros el día 3 de febrero del año 1852, enfrentamiento en el que las tropas de la Confederación sucumbieron ante las armas del Ejército Grande⁵⁰. Todo había comenzado unos meses atrás, pero esa derrota en el campo de batalla expandió rápidamente sus efectos y se tradujo en un durísimo revés en la arena política. Rosas, ya ausente de la escena nacional, se vio obligado a renunciar también como titular del Ejecutivo bonaerense, y poco a poco el General Urquiza fue adquiriendo protagonismo en el proceso de organización constitucional de la Confederación.

⁴⁷ En la sesión del 19 de agosto de 1831 la Sala de Representantes facultó al Gobernador a “*adherirse al tratado público de alianza ofensiva y defensiva bajo el sistema federal celebrado por las provincias litorales*”, AHDCD, Tomo IV, *Acta de la sesión del 19 de agosto de 1831*, p. 62.

⁴⁸ Sobre la influencia de la política Rosas en la Confederación, pueden consultarse, a modo general, las obras ya citadas de FRADKIN, R. y GELMAN, J. (2015) *Juan Manuel de Rosas. La construcción de un liderazgo político*, Edhasa, Buenos Aires. También los trabajos de SALVATORE, R. (1998a) “Expresiones federales: formas políticas del federalismo rosista”, en GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comp.) *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, Eudeba, Buenos Aires; y (1998b) “Consolidación del régimen rosista (1835-1852)”, en GOLDMAN, N. (dir.) *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, Colección Nueva Historia Argentina, Tomo III, Sudamericana, Buenos Aires.

⁴⁹ El análisis pormenorizado del nacimiento y desarrollo de esta figura *sui generis* en el derecho público rioplatense, cómo funcionaba y cuáles eran sus fundamentos, puede encontrarse en la obra de TAU ANZOÁTEGUI, V. (1996) *Formación del Estado Federal Argentino, 1820-1852. El gobierno de Buenos Aires y los asuntos nacionales*, 2da. Ed., Perrot, Buenos Aires. Según este autor, la naturaleza del encargo era la de un mandato revocable, ya que “*las delegaciones eran esencialmente revocables... las provincias estaban en absoluta libertad para ejercer por sí todas las facultades en ellas incluidas, y aun las de Relaciones Exteriores*”, ídem, p. 179. Siguiendo esta lógica, el Gobernador de Entre Ríos aceptó los argumentos planteados por Rosas en su renuncia y declaró que era voluntad del pueblo entrerriano: “(1) *reasumir el ejercicio de las facultades inherentes a su territorial soberanía, delegadas en la persona del Exmo. Señor Gobernador y capitán general de Buenos Aires en virtud del tratado de las provincias litorales, fecha 4 de enero de 1831 [y] (2) una vez manifestada así la libre voluntad de la provincia de Entre Ríos, queda ésta en aptitud de entenderse directamente con los demás gobiernos del mundo, hasta tanto que, congregada la Asamblea nacional de las demás provincias hermanas, fuese definitivamente constituida la República*”.

⁵⁰ GOLDMAN, N. (dir.) (1998) Ob. cit.

El entrerriano comprendió que su victoria no se sostendría si no ganaba la adhesión del resto de los gobernadores provinciales a su proyecto. Por eso mismo, emprendió una intensa campaña hacia los pueblos rioplatenses para convencer a sus autoridades de sostener el nuevo escenario político⁵¹. Ungido con el favor del resto de gobernadores, poco a poco fueron delegando en él similares facultades a las que antes habían depositado en manos de Juan Manuel de Rosas. Por medio del tratado interprovincial conocido como *Protocolo de Palermo*, firmado el día 6 de abril de 1852, se reguló el modo en que se desarrollarían las relaciones exteriores de las provincias hasta la sanción de la Constitución, encargando interinamente la misión al nuevo referente nacional⁵². Consolidada relativamente su posición de liderazgo, Urquiza lanzó una circular a cada una de las catorce provincias, convocándolas a participar en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos de una reunión entre gobernadores⁵³.

Paralelamente, en Córdoba se produjo después de Monte Caseros un inmediato reajuste de lealtades políticas, indicador inequívoco del carácter acomodaticio de las elites, que permitió a la Provincia sumarse a la empresa de organización nacional⁵⁴. Luego del pronunciamiento de Urquiza, la Sala de Representantes de Córdoba manifestó su apoyo político a Juan Manuel de Rosas, lo que se tradujo en una serie de medidas institucionales de gravedad, como la concesión de la suma del poder nacional y la consagración de Rosas como “*Jefe Supremo de la Confederación Argentina*” a cuya “*sabia política del gran Americano*” adherían, “*poniendo fuera de la ley a Urquiza*”⁵⁵. Al otorgar facultades ilimitadas al Ejecutivo provincial para la mejor defensa de la Provincia, los representantes cordobeses calificaron a Urquiza como un “*envilecido cabecilla, salvaje unitario, loco...*”⁵⁶. Ahora bien, del profundo rechazo hacia Urquiza y la sostenida obediencia para con el “*ilustre General*” Gobernador de Buenos Aires, casi sin solución de continuidad, los mismos actores, pasaron a profesar su admiración por el entrerriano vencedor de la batalla y a emitir juicios de condena contra Rosas, personaje que comenzaron a calificar como tirano⁵⁷.

⁵¹ Esa campaña se conoce como la *Misión Irigoyen*, en razón del nombre del encargado de ejecutarla. Los aspectos centrales de dicha misión pueden consultarse en GONZÁLEZ CALDERÓN, J. (1930) Ob. cit., pp. 217 y ss.

⁵² Ídem.

⁵³ La convocatoria fue enviada por medio de una circular fechada el día 8 de abril de 1852 invitando “*a una reunión solemne de los excelentísimos gobiernos de las Provincias Confederadas*” para que todas juntas “*formen el preliminar de la Constitución Nacional*”, GONZÁLEZ CALDERÓN, J. (1930) Ob. cit., p. 221.

⁵⁴ Muchas son las obras que recogen el rol que cupo a las diferentes provincias en el proceso de construcción constitucional del Estado argentino. Específicamente dedicadas a este asunto, y circunscritas a la Provincia de Córdoba, están la de GUZMÁN, D. (1934) “Influencia de Córdoba en la organización nacional”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 21, Nros. 9-10, noviembre-diciembre, pp. 115-149; y PAVONI, N. (1993) *Córdoba y el gobierno nacional. Una etapa en el proceso fundacional del Estado argentino 1852-1862*, Tomo I, Banco de la Provincia de Córdoba, Córdoba.

⁵⁵ Cfr. GARZÓN, I. (1902) *Crónica de Córdoba*, Tomo III, pp. 240 y ss.

⁵⁶ Ídem.

⁵⁷ El mensaje del Gobernador cordobés al Congreso Provincial unos días después de la batalla de Caseros no tiene desperdicio y merece ser literalmente transcripto: “*¡Viva la Confederación Argentina! – Córdoba,*

El nuevo escenario fue definiéndose de inmediato. Entre finales de febrero y mediados de marzo de 1852 la Sala de Representantes de Córdoba “*en uso de la soberanía que inviste, conquistada por el invicto Gral. D. Justo José de Urquiza vencedor del tirano Juan Manuel de Rosas*”, sancionó un par de decretos declarando a la Provincia “*en pleno goce de su soberanía territorial, reasumiendo en sí la parte que le corresponde como un Estado libre, independiente y confederado, hasta la reunión de un Congreso Nacional*”; anulando las medidas del año anterior favorables al Gobernador porteño; y reconociendo a partir de entonces a Urquiza como “*Libertador de la República despotizada por la odiosa dominación del tirano D. Juan Manuel de Rosas*” confiriéndole además “*el encargo de las Relaciones Exteriores y negocios generales de la República hasta la reunión de su Congreso nacional*”⁵⁸. Sin embargo, el panorama político provincial tuvo su punto de inflexión hacia finales del mes de abril del año 1852. El día 16 el Gobernador Manuel López delegó el mando en su hijo José Victorio, éste no pudo calmar el ánimo de la oposición al gobierno de su padre y el 27 de abril estalló la revolución que acabó con más de una década y media de poder del mismo hombre⁵⁹. Al día siguiente, reunidos en la plaza los vecinos que habían apoyado la revolución,

Febrero 22 de 1852 – A la Honorable Representación – Honorables Representantes: *Ha llegado el momento de recobrar el libre ejercicio de vuestros imprescriptibles derechos, ajados y conculcados más de veinte años por el infame déspota Juan Manuel de Rosas. Derrocado en su persona el simulacro de la Tiranía desapareció también para siempre jamás el ominoso y colosal poder con que ha sojuzgado tanto tiempo á nuestra cara Patria, con que el 28 de noviembre último os arrancó violentamente un pronunciamiento, un anatema de oprobio y proscripción contra el hombre que debíamos bendecir, contra el libertador de la República Argentina, y por decirlo de una vez, contra el Ilustre y benemérito General D. Justo José de Urquiza. Testigos de esta verdad sois vosotros mismos HH. RR. puesto que visteis entonces los documentos que nuevamente elevó á vuestra ilustrada consideración: documentos que contienen literalmente el formal decreto de vuestra enunciada sanción; documentos que remitió al efecto, como invariable norma, el Dictador y abominable Rosas; y documentos, en fin, que patentizan y justifican hasta la evidencia la dominación absoluta que por abuso de su execrable poder ejercía sobre la débil Provincia de Córdoba. Preciso es Hs. RR., os ocupéis, sin perder momento, de reconsiderar aquel bastardo pronunciamiento, restituyendo al pleno goce de todos sus derechos al digno ciudadano y General Argentino D. Justo José de Urquiza, y que llenéis también la honrosa misión que os ha confiado la Provincia, publicando ante el Orbe entero con la debida solemnidad el ardiente voto que en favor de este Héroe y de la Organización Nacional espontánea y libremente han emitido ya vuestros comitentes á invitación del infrascripto. Al ocuparos de tan importante negocio no olvidaréis sin duda los graves inconvenientes que estorbaron á Vuestra Honorabilidad y el Gobno. para haber anticipado este pronunciamiento, que sin traer entonces ventajas á la causa de la Libertad pudo más bien trabar la marcha del Ejército Grande que la sostenía, distrayendo su atención del exterminio y aniquilamiento del Tirano para proteger á Córdoba contra los peligros que en aquellas circunstancias le amenazaban. Dios guarde á V.H. ms. as. – MANUEL LÓPEZ, en GARZÓN, I. (1902) Ob. cit., Tomo III, pp. 243-245.*

⁵⁸ *Compilación de leyes...* cit., p. 229. GARZÓN, I. (1902) Ob. cit., Tomo III, pp. 246 y ss.

⁵⁹ Del mismo modo que en el caso anterior, aquellos hombres de Córdoba que en el comienzo de la legislatura de 1851 lanzaban generosos elogios a López y su administración fueron muchos de los que impulsaron su derrocamiento y suscribieron un decreto embargando sus bienes “porque durante su administración se habían menoscabado las fortunas de los ciudadanos a causa de violentas exacciones”, GARZÓN, I. (1902) Ob. cit., Tomo III, p. 233. Las tropas se amotinaron en el cuartel de la ciudad, doblegaron al jefe de la fuerza, atacaron la residencia del gobernador delegado José Victorio López y lo arrestaron. Luego continuaron hacia la casa de su padre y tomaron prisionero también al Gobernador titular Manuel López. Un detalle de los acontecimientos y los personajes de la Provincia que participaron activamente en los acontecimientos puede encontrarse en la obra recientemente citada (pp. 250 y ss.) y en MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) Ob. cit., pp. 129 y ss.

designaron por aclamación al Doctor Alejo Carmen Guzmán quien se hizo cargo del Ejecutivo en calidad de Gobernador provisorio⁶⁰.

Luego de la Revolución del 27 de abril de 1852, la Provincia de Córdoba comenzó un lento proceso de reorganización e incorporación al nuevo concierto de las Provincias⁶¹. Durante los primeros meses del nuevo gobierno, la convocatoria a elecciones en la Provincia estableció que la Asamblea Electoral se reuniera a mediados del mes de junio, estando previsto en el mismo decreto que el Congreso Provincial iniciaría sus sesiones a finales de ese mes, restaurando así en plenitud la vida institucional cordobesa⁶². En ese preciso contexto político provincial se desarrolló, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, la reunión de los Gobernadores convocada por Urquiza. Fueron las tareas de reestructuración del poder y las instituciones políticas, las razones que alegó el Gobernador provisorio para justificar su ausencia y designar en su reemplazo un ministro plenipotenciario⁶³.

De las catorce provincias rioplatenses que formaban la Confederación, sólo tres – Salta, Jujuy y Córdoba– no participaron directamente en las deliberaciones y firma del

⁶⁰ Documentos oficiales que justifican la legalidad con que el Pueblo Cordobés ha derrocado la tiranía de D. Manuel López: *“En la ciudad de Córdoba á veinte y ocho días del mes de abril de mil ochocientos cincuenta y dos en nombre de la Libertad conquistada por el Ilustre Gral. D. Justo José de Urquiza... reunido todo el Pueblo Cordobés... declarándose en asamblea general como lo estaba desde la tarde del día veinte y siete en que derrocó la tiranía que por tanto tiempo pesaba sobre él, proclamándose en pleno goce de su libertado y de todos sus inalienables derechos inherentes á la soberanía de un Pueblo libre, amante de sus instituciones (...) en esta virtud era su voluntad nombrar un Gobernador Provisorio que gobernase la Provincia, hasta que convocada esta, de conformidad a nuestras leyes constitucionales, nombrasen los diputados que compongan la representación provincial que elegirá según las mismas leyes el Gobernador Propietario que deba gobernarla (...) y habiéndose convocado á todos los ciudadanos se procedió a colocar cuatro mesas en la Plaza pública... se recibieron los votos para Gobernador Provisorio; y cerrado este acto, se procedió al escrutinio general y resultó electo el Ciudadano Dr. D. Alejo del Carmen Guzmán, Gobernador Provisorio de la Provincia, por una mayoría de cuatrocientos cincuenta y cinco votos proclamándose tal en el acto mismo, pasándose en el momento á la Sala Capitular donde prestó el juramento de Ley”*, AGN Sala X, 5-4-3, Gobierno de la Provincia de Córdoba 1838-55.

⁶¹ Para un completo panorama de este asunto puede consultarse la obra de PAVONI, N. (1993) Ob. cit.

⁶² El día 20 de mayo de 1852 el Gobernador Provisorio firmó el decreto convocando a *“toda la Provincia á la Asamblea Electoral Primaria que deberá nombrar los Electores de la Ciudad y Campaña, que compongan la Asamblea Electoral de RR. al Congreso Legislativo Provincial”*, según el calendario fijado, las elecciones primarias tendrían lugar entre los días 30 de mayo y 2 de junio, la Asamblea Electoral se reuniría en la capital el día 13 de junio y el 20 se debía instalar el nuevo Congreso Provincial, que iniciaría sus sesiones el día 24 del mismo mes, en *Compilación de leyes...* cit., pp. 230-231.

⁶³ *“Córdoba, Junio 2 de 1852, El Gobernador y Capitán General de la Provincia. Siendo necesaria la concurrencia por parte del Gobierno de la Provincia á la reunión de los Excmos. Sres. Gobernadores de las Provincias á que han sido invitadas por el encargado de las Relaciones Exteriores, General D. Justo José de Urquiza (...) Que en la actualidad no es posible la asistencia personal del actual Gobernador provisorio por ser necesaria su presencia en la Provincia [...] Acuerda y decreta: Art. 1º. Nómbrase al Dr. D. José Genaro Carranza, Ministro Plenipotenciario comisionado de este Gobierno para que lo represente en la solemne convención de los Excmos. Gobernadores de las Provincias... Art. 2º. Confiérese al espresado Ministro Plenipotenciario cuantas facultades sean precisas para tratar tan importantes asuntos á los intereses de la Nación que han de dar la base para la definitiva Constitución de la República...”*, Decreto nombrando Plenipotenciario en la convención de Excelentísimos Sres. Gobernadores en San Nicolás, en *Compilación de leyes...* cit., pp. 234-235.

Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos en mayo de 1852⁶⁴. Lo mismo que Salta y Jujuy, la Provincia de Córdoba acordó su adhesión al tratado interprovincial unos días más tarde mediante una ley sancionada por el Congreso Provincial recientemente instalado⁶⁵. El Doctor Guzmán acababa de ser elegido Gobernador propietario –dos meses exactos había durado su interinato– y a las pocas horas de haber asumido comunicaba al Director Urquiza que Córdoba acompañaría al resto de las provincias en la gesta constituyente, participaría de las deliberaciones y se sometería a las decisiones emanadas del Congreso General⁶⁶. Dicha adhesión fue ratificada por la Legislatura luego de la convulsión política provocada por la revolución porteña del 11 de septiembre que acabó distanciando a la Provincia de Buenos Aires del resto de la Confederación hasta el año 1860⁶⁷. Como en la

⁶⁴ “Los infrascriptos Gobernadores y Capitanes Generales de las Provincias de la Confederación Argentina, reunidos en la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos por invitación especial del Excmo. Señor Encargado de las Relaciones Exteriores de la República Brigadier General Justo José de Urquiza, a saber: el mismo Excmo. Señor General Urquiza como Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y representando la de Catamarca por ley expedida en esta Provincia, el Excmo. Señor Dr. Don Vicente López como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Excmo. Señor General Dn. Benjamín Virasoro Gobernador de la Provincia de Corrientes, el Excmo. Señor General D. Pablo Lucero, Gobernador de la Provincia de San Luis, el Excmo. Señor General Don Nazario Benavidez Gobernador de la Provincia de San Juan, el Excmo. Señor General D. Celedonio Gutiérrez Gobernador de la Provincia de Tucumán, el Excmo. Señor Don Pedro Pascual Segura, Gobernador de la Provincia de Mendoza, el Excmo. Señor D. Manuel Taboada, Gobernador de la, Provincia de Santiago, el Excmo. Señor D. Manuel Vicente Bustos, Gobernador de la Provincia de La Rioja, el Excmo. Señor Don Domingo Crespo Gobernador de la Provincia de Santa Fe [...] Hemos concordado y adoptado las resoluciones siguientes [...] Dado en San Nicolás de los Arroyos a treinta y un día del mes de mayo del año 1852”, en *La Constitución en el Congreso General Constituyente* (1943), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, Buenos Aires, pp. 11-14.

⁶⁵ La Provincia de Córdoba adhirió al Acuerdo de San Nicolás mediante ley de la Sala de Representantes sancionada el día 1º de julio de 1852: “La H. Sala de RR. en uso de sus facultades ordinarias y extraordinarias que inviste, ha sancionado con todo el valor y fuerza de ley lo siguiente: Artículo 1º. La Provincia de Córdoba se adhiere en todas sus partes al acuerdo celebrado por los Excmos. Gobernadores de la Confederación Argentina en San Nicolás de los Arroyos, a treinta y un días del mes de Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos. Art. 2º. Se declara el acuerdo referido por ley nacional en todo el territorio de la Provincia...”, en *Compilación de leyes...* cit., pp. 237-238.

⁶⁶ El Congreso Provincial nombró *Gobernador y Capitán General de la Provincia en propiedad... al ciudadano Dr. D. Alejo Carmen Guzmán*” el día 27 de junio del año 1852, en *Compilación de leyes...* cit., pp. 236-237. En su calidad de tal, días después de su nombramiento, envió una nota oficial a Urquiza.

Documento N° 64: El Gobernador de Córdoba, comunica al Gobernador Delegado de Entre Ríos que la Legislatura de la Provincia se adhiere en todas sus partes al Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Córdoba, 12 de julio de 1852, “Al Exmo. Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia de Entre Ríos. El infrascripto se honra en acompañar á V. E. para su conocimiento... la nota que el señor Presidente de la Honorable Sala de esta Provincia le dirigió con fecha 2 del presente, incluyéndole la ley sancionada por la misma el día anterior, que también va impresa, por la que se adhiere en todas sus partes, la Provincia de Córdoba, al acuerdo celebrado por el Excmo. señor General don Justo J. de Urquiza y demás Excmos. Gobiernos de la Confederación Argentina el 31 de Mayo último, en San Nicolás de los Arroyos, y declarándolo por ley nacional en todo el territorio de la Provincia [...] ALEJO CARMEN GUZMÁN”, en *Documentos relativos a la organización constitucional de la República Argentina* (1911), Facultad de Filosofía y Letras, Sección Historia, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, Buenos Aires, Tomo I, pp. 109 y ss.

⁶⁷ “Sala de sesiones, Córdoba, Septiembre 25 de 1852. La H. Representación de la Provincia, en uso de las atribuciones que inviste, ha sancionado con valor y fuerza de ley lo siguiente: Artículo 1º. La Provincia de Córdoba reproduce su adhesión pronunciada en la ley 1º de Julio, al Acuerdo celebrado por los Excmos, Gobiernos de la Confederación en San Nicolás de los Arroyos á 31 de Mayo ultimo. Art. 2º. Declara

oportunidad anterior, el Gobernador Guzmán no demoró en comunicar el acto político de apoyo y lealtad al General Urquiza: “... la Provincia de Córdoba, firme á su solemne juramento de sostener por todos los medios que estén en su posibilidad la causa de la organización y constitución nacional, ha reproducido... su adhesión al acuerdo del 31 de Mayo del presente año, que hizo por la ley de 1.º de Julio, declarando su invariable voluntad de sostener á las deliberaciones que emanen del Soberano Congreso Constituyente próximo á instalarse, por más obstáculos que la actualidad oponga á su cumplimiento”⁶⁸.

II. 1. Córdoba y el Congreso General Constituyente de Santa Fe

El Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos estableció las bases sobre las cuales habría de erigirse la empresa constituyente. Según se ha dicho, su firma había estado precedida por una astuta estrategia política para evitar el fracaso del Congreso: la conciliación entre “los intereses personales de aquellos gobernantes con poderes extraordinarios, que a toda costa querían conservar, y los intereses supremos de la República, que consistían en el establecimiento de sus instituciones libres”⁶⁹. La experiencia había impuesto la idea de una representación igualitaria entre las provincias; siguiendo con ese principio, el artículo 5 del Acuerdo disponía que cada una debía nombrar dos diputados ante el Congreso General Constituyente que se reuniría en la ciudad de Santa Fe durante el segundo semestre del año 1852⁷⁰. La cláusula imponía el principio de “igualdad en la representación”, de esta manera, se garantizaba la participación equitativa de los pueblos y evitaba la preponderancia de las provincias más pobladas que por lo general habían predominado en las reuniones anteriores en las que la representación de cada una había sido en proporción de su número de habitantes. Esta fue una de las razones principales que motivó el rechazo del Acuerdo por parte de la Provincia de Buenos Aires⁷¹.

asimismo su inexorable resolución de cooperar por todos los medios que estén en la esfera de su poder, á que tenga exacta observancia en todas sus partes el mencionado Acuerdo, hasta que se haya dado cima á la organización definitiva de la República. Art. 3º. Declara también su invariable voluntad de someterse á las deliberaciones que emanen del Congreso Nacional Constituyente, próximo á instalarse, por más obstáculos que la actualidad de la República oponga al cumplimiento de aquellas..., en *Compilación de leyes...* cit., p. 244.

⁶⁸ Documento N° 90: Circular del Gobernador de Córdoba al de Entre Ríos, adjuntándole una ley de la Provincia, por la cual la Legislatura renueva adhesión a la causa de la Organización Nacional y manifiesta someterse a las deliberaciones del Congreso Constituyente. Córdoba, 1º de octubre de 1852, en *Documentos relativos a la organización constitucional...* cit, p. 137.

⁶⁹ GONZÁLEZ CALDERÓN, J. (1930) Ob. cit., p. 225.

⁷⁰ Acuerdo de San Nicolás. Artículo 5º: “Siendo todas las provincias iguales en derechos como miembros de la Nación, queda establecido que el Congreso Constituyente se formará con dos diputados por cada provincia”, en *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 13.

⁷¹ En la Legislatura porteña se desarrolló un complejo debate en el que acabó sancionándose el rechazo al acuerdo firmado por el Gobernador. Además de la igualdad en la representación, contraria a una ley local del año 1827 según la cual Buenos Aires sólo participaría de una Convención Constituyente bajo la condición de que cada provincia estuviera representada en forma proporcional, lo cual le garantizaba su

Pese a los condicionamientos históricos que consagraban la representación equitativa en el plano normativo, nada obstaría a que en el plano político el Director Provisorio de la Confederación ejerciera su influencia sobre el resto de Gobernadores y acabara controlando el Congreso. No tenía más remedio si quería sacar adelante su plan; Rosas había sido derrotado en el campo de batalla, pero el sistema de gobierno y lealtades que durante décadas había consolidado continuaba en pie. Como se ha visto que sucedió en Córdoba, la mayoría de las Legislaturas provinciales no atendieron al “pronunciamiento” de Urquiza, lo declararon traidor y protestaron su adhesión al Gobernador de Buenos Aires al que invistieron expresamente con el poder supremo⁷². Si bien las élites provinciales, y los Gobernadores en particular, rápidamente se acomodaron a la nueva distribución de fuerzas cambiando de opinión y reaccionando contra el sistema que durante años habían servido, era preciso garantizar el dominio de voluntades. El modo de hacer esto posible quedó plasmado en la letra del propio Acuerdo ya que, más allá de los procedimientos regulares para la elección de los representantes, los Gobernadores se reservaron la facultad para intervenir directamente en el nombramiento de los diputados ante el Congreso General Constituyente⁷³. Esto tuvo como consecuencia inevitable que varios de los diputados nombrados fueran personas que jamás habían pisado siquiera el distrito que estuvieron llamados a representar⁷⁴.

El caso de la Provincia de Córdoba no fue la excepción. La primera alternativa barajada por las autoridades comprendió a los juristas cordobeses Juan del Campillo y José Barros Pazos, designados en agosto de 1852. El último de ellos, cordobés de

preponderancia en la reunión, se rechazó también el inmenso poder otorgado por los Gobernadores a Urquiza –un potencial nuevo tirano–, y modo en que el artículo 19 del acuerdo establecía el modo en que se sufragarían los gastos del Congreso: “*las provincias concurrirán proporcionalmente con el producto de sus aduanas exteriores, hasta la instalación de las autoridades constitucionales, a quienes exclusivamente competirá el establecimiento permanente de los impuestos nacionales*”. Igualdad en la representación y proporcionalidad en el sostenimiento del Congreso eran principios inaceptables para la mayoría de diputados porteños, crf. GONZÁLEZ CALDERÓN, J. (1930) Ob. cit., 236 y ss.

⁷² RIVAROLA, R. (1908) *Del régimen federativo al unitario. Estudio sobre la organización política de la Argentina*, Jacobo Peuser, Buenos Aires, pp. 34-35.

⁷³ Acuerdo de San Nicolás. Artículo 7º: “*Es necesario que los diputados estén penetrados de sentimientos puramente nacionales, para que las preocupaciones de localidad no embaracen la grande obra que se emprende; que estén persuadidos que el bien de los pueblos no se ha de conseguir por exigencias encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen nacional regular y justo; que estimen la calidad de ciudadanos argentinos, antes que la de provincianos. Y para que esto se consiga, los infrascriptos usarán de todos sus medios para infundir y recomendar estos principios y emplearán toda su influencia legítima, a fin de que los ciudadanos elijan a los hombres de mis probidad y de un patriotismo más puro e inteligente*”, en *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 13.

“Puede comprenderse que estos consejos y tutela de los electores no quedaran limitados á los términos de meras formas abstractas (...) Pero, en rigor, por tal medio las indicaciones generales se convierten en candidaturas determinadas por los mismos gobernantes, que, en principio, no deberían influir en las elecciones en que el pueblo sin tutores debe darse la representación que le corresponda. Sospecho, sin pruebas á la mano, que de la cláusula 7a del Acuerdo, á la designación directa de los candidatos por los Gobernadores que los harían elegir, no ha de haber mayor distancia que la que media entre una orden y el cumplimiento de la misma”, RIVAROLA, R. (1908) Ob. cit., pp. 53-54.

⁷⁴ Cfr. ROSA, J. (1942) “Nos, los representantes del pueblo”, en *Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas*, Nro. 10.

nacimiento y militante antirrosista, hacía ya tiempo que residía en la Provincia de Buenos Aires y, en el momento de ser nombrado representante por Córdoba en el Congreso, se desempeñaba como rector de la Universidad de Buenos Aires⁷⁵. La opción de Barros Pazos por los claustros en lugar de la política obligó a buscar otro diputado para la provincia, elección que recayó en el futuro Presidente de la Confederación, doctor Santiago Derqui, en calidad de titular, y Clemente José Villada, como suplente. Como Barros Pazos, Derqui había nacido en la ciudad de Córdoba pero su oposición al régimen rosista –personificado en Córdoba en el Gobernador López– lo mantuvo exiliado en las provincias del litoral, la mayor parte del tiempo en Corrientes, donde desarrolló una interesante carrera política⁷⁶. Así las cosas, los juristas Santiago Derqui y Juan del Campillo fueron finalmente los encargados de representar a la provincia de su nacimiento durante las deliberaciones constituyentes. Muy por el contrario de lo que podría pensarse, siendo Córdoba una comunidad tan conservadora y católica, ambos diputados acabaron alineándose detrás de la facción que respondía más directamente al Director Provisorio Urquiza, la misma encargada de preparar el proyecto de Constitución Nacional y dirigir el debate: los “circuleros”⁷⁷.

Otros dos constituyentes estaban directamente vinculados a la Provincia de Córdoba. Uno, el sacerdote santiagoense Benjamín Lavaïsse, representante de Santiago del Estero, que era desde mediados del XIX el párroco de Villa Tulumba, una de las poblaciones más importantes del norte cordobés; otro, el abogado Regis Martínez, nacido y educado en Córdoba, que representó en el Congreso General Constituyente a la Provincia de La Rioja⁷⁸. Sin embargo, y pese a la preparación erudita y práctica política, tanto de éstos como de aquéllos, ninguno tuvo una participación protagónica durante las sesiones que duró el debate de la Constitución Nacional. Sus nombres apenas figuran al margen de las actas del Congreso como meros firmantes de los documentos y, en el caso de Santiago Derqui, ni eso siquiera, ya que designado por el propio cuerpo para cumplir una misión diplomática, estuvo ausente por comisión durante casi todo el tiempo en que sesionó el Congreso⁷⁹. Tan considerable había sido su ausencia que al regreso de su comisión, el mismo día en que se sancionó la Constitución, debió solicitar al cuerpo que

⁷⁵ PAVONI, N. (1993) Ob. cit., p. 67.

⁷⁶ Ídem.

⁷⁷ En el seno mismo del Congreso, “circuleros y montoneros se encontraban oficialmente separados por distintas apreciaciones políticas y religiosas confesionales. Los primeros eran partidarios de la tolerancia religiosa... en cambio, los segundos entendían que la católica debería seguir siendo la única religión de los argentinos [...] Los separaba una cuestión fundamental: los primeros, inspirándose en el criterio alberdiano de anteponer las formas políticas a la nación misma, querían una Constitución que creara nuevas modalidades de vida; en cambio, los segundos querían que la Constitución fuese un reflejo fiel de las modalidades existentes”, ROSA, J. (1943) “Alberdi y las ideas constitucionales del 53”, en *Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas*, Nro. 11.

⁷⁸ Véanse las notas 437 y 450 de BIANCHI, A. (2007) *Historia de la formación constitucional argentina: (1810-1860)*, Lexis Nexis, Buenos Aires, pp. 160 y 163.

⁷⁹ Un simple recorrido por las actas del Congreso General Constituyente permite realizar estas afirmaciones acerca del silencio de los representantes cordobeses y la inasistencia a las sesiones por parte de Derqui. Véase *La Constitución en el Congreso...* cit., pp. 35-215.

se le autorizase a poner su firma al pie de la Carta Constitucional⁸⁰. Por su parte, Juan del Campillo integró la comisión de negocios constitucionales, pero cuando se unió a ella, ya estaba redactado el proyecto⁸¹; el recuerdo que la historiografía ha guardado de él ha sido que, gracias a su esmerada prolijidad, fue el encargado de caligrafiar la versión definitiva de la Constitución, luego de sancionados en particular todos sus artículos: la versión primigenia de la Norma Fundamental de 1853 está redactada de su puño y letra⁸².

II. 1. 2. Los debates sobre el texto de 1853 y su eco en Córdoba

Separada la Provincia de Buenos Aires del resto de las de la Confederación por su rechazo a los términos del Acuerdo de San Nicolás, el General Urquiza convocó al resto de los diputados a la ciudad de Santa Fe y les comunicó la intención de emplazar formalmente el Congreso General Constituyente el día 20 de noviembre del año 1852⁸³. Cumplidas las formalidades previas, quedó solemnemente instalado⁸⁴. Adoptado el mismo Reglamento de Debates del Congreso General Constituyente del año 1825, se nombró una comisión de negocios constitucionales encargada de preparar un proyecto de Constitución, integrada por los diputados Manuel Leiva (Santa Fe), Juan María Gutiérrez (bonaerense, en representación de Entre Ríos), José Benjamín Gorostiaga (Santiago del Estero), Pedro Díaz Colodrero (Corrientes) y Pedro Ferré (correntino, por Catamarca)⁸⁵.

El 23 de febrero de 1853, “*en consideración a la importancia de los trabajos encomendados a la comisión de negocios constitucionales y a la necesidad de que se*

⁸⁰ Su pedido, secundado por Gorostiaga, fue acogido favorablemente por el Congreso ya que la razón de su ausencia era el desempeño de una comisión, además, al regresar de su viaje había prestado inmediatamente su aprobación a los trabajos del cuerpo, Sesión del 24 de diciembre de 1852, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 216.

⁸¹ PAVONI, N. (1993) Ob. cit., p. 67.

⁸² ROSA, J. (1942) Ob. cit.

⁸³ Decreto del Director Provisorio Gral. Justo José de Urquiza del 8 de noviembre de 1852: “*Hallándose ya reunidos los diputados de doce de las provincias confederadas (...) Considerando que es una necesidad urgente para la República, proceder a la instalación del Congreso general de la nación, en conformidad con el voto uniforme de todos los pueblos argentinos...* [el Director] *ha resuelto y decreta: Artículo 1º- El Congreso general constituyente de las provincias de la Confederación Argentina, será instalado solemnemente, por el Director provisorio, en el día 20 del presente mes, en la ciudad de Santa Fe. Artículo 2º - Los diputados de las provincias presentes, serán invitados a reunirse en sesiones preparatorias, con el objeto de examinar los poderes respectivos y nombrar de entre sus miembros el que haya de desempeñar las funciones de presidente del acto...*”, en *La Constitución en el Congreso...* cit., pp. 15-16.

⁸⁴ Los días 15 y 18 de noviembre se realizaron las primeras sesiones preparatorias entre los diputados que ya se encontraban presentes en la ciudad y se nombraron las autoridades del cuerpo: Facundo Zuviría (Salta) como Presidente, Manuel Leiva (Santa Fe) Vicepresidente, Juan Francisco Seguí (Santa Fe) y Delfín Huergo (San Luis) secretarios, 4ª sesión preparatoria – 18 de noviembre de 1852, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 17. Muchas obras de Historia Constitucional Argentina abordan en detalle la tarea constituyente del Congreso de Santa Fe, entre ellas, VARELA, L. (1910) *Historia Constitucional de la República Argentina*, 4 Vols., Taller de impresiones oficiales, La Plata; RAVIGNANI, E. (1926-1930) *Historia constitucional de la República Argentina*, 3 Vols., Peuser, Buenos Aires; GONZÁLEZ CALDERÓN, J. (1930) Ob. cit.; SAMPAY, A. (1975) *Las Constituciones de la Argentina (1810-1972)*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires; BIANCHI, A. (2007) Ob. cit.

⁸⁵ Sesión del 24 de diciembre de 1852, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 26.

presente cuanto antes a la discusión... el proyecto de Constitución”, se acordó la ampliación de dicha comisión sumando dos nuevos miembros que se incorporarían a las tareas que ya habían comenzado los anteriores. Dicha elección recayó sobre el diputado por Mendoza D. Martín Zapata y el abogado cordobés Santiago Derqui, representante ante el Congreso por su Provincia⁸⁶. La ausencia justificada de Derqui –que se encontraba cumpliendo un encargo del propio Congreso– dejaba a la comisión redactora incompleta, razón por la cual se nombró provisoriamente como reemplazante al otro constituyente cordobés, Juan del Campillo⁸⁷. La comisión elevó para el examen del Congreso en pleno, el “*Proyecto de Constitución para la Confederación Argentina*”. En la presentación de los trabajos, que estuvo a cargo del constituyente por Santiago del Estero, Benjamín Gorostiaga, el diputado no hizo más que remitirse al informe adjunto al proyecto. Si bien un análisis profundo de la Constitución de 1853 y su proceso de génesis y sanción exceden ampliamente el objetivo de este trabajo, un rápido repaso por los principales aspectos discutidos, los fundamentos de las principales decisiones, la orientación política del grupo preponderante, y el ideal de nación prefigurado servirán para ubicar a Córdoba dentro de ese contexto⁸⁸.

En cuanto a la opción fundamental, después de tantos años de enfrentamientos entre los pueblos rioplatenses, se dejaba bien en claro que el sistema federal era “*la base del proyecto que la comisión ha concebido. Según él, conserva cada provincia su soberanía y su independencia; se gobierna según sus propias instituciones, y la elección de magistrados y legisladores, se verifica exclusivamente por la libre voluntad de sus habitantes*”⁸⁹. De acuerdo a los tratados firmados oportunamente por las provincias, cuya vigencia era explícitamente reconocida en el texto de la Constitución, “*estas soberanías independientes son, sin embargo, miembros de una misma familia... deben tener un gobierno que las abraza a todas, las represente en el exterior como cuerpo de nación,*

⁸⁶ Para el diputado cordobés Juan del Campillo “*la experiencia había manifestado al Congreso que esta comisión [de negocios constitucionales] debía haber sido compuesta de más miembros*”, Según su propia alocución, de los cinco miembros de la comisión, uno se había ausentado enviado en comisión por el propio Congreso (Gorostiaga), otro se hallaba en comisión del Directorio (Ferré), y de los tres restantes, dos tenían cargos de autoridad en el cuerpo (Leiva y Colodrero), lo que disminuía el tiempo dedicado a la redacción del proyecto. Por su parte, el representante Leiva se oponía a la ampliación argumentando que a la fecha en que se quería ampliar el número de integrantes, la comisión ya se había dividido en dos y los trabajos estaban por terminarse razón por la cual creía inconveniente sumar más diputados a las labores, decisión que incluso podría llegar a retardar la presentación del proyecto, Sesión del 23 de febrero de 1852, *La Constitución en el Congreso...* cit., pp. 27-30.

⁸⁷ Sesión del 24 de febrero de 1852, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 31.

⁸⁸ El informe completo de la comisión de negocios constitucionales puede consultarse en *La Constitución en el Congreso...* cit., pp. 35-44. La historiografía constitucional argentina es conteste en afirmar que si bien eran cinco los miembros de la comisión de negocios constitucionales (véase *supra*), luego ampliada a siete, el proyecto en sí fue obra de dos de sus integrantes, a saber, el santiagueño Benjamín Gorostiaga, responsable de la redacción del preámbulo y la denominada parte orgánica, y el porteño Juan María Gutiérrez –diputado por Entre Ríos–, quien se dedicó a escribir la parte dogmática o de declaración de derechos y garantías, Cfr. NASIF, D. (2009) “El pensamiento constitucional de José Benjamín Gorostiaga. El olvido de un prócer”, en MANILI, P. (dir.) *El Pensamiento Constitucional Argentino (1810-1930)*, Errepar, Buenos Aires, pp. 257-284.

⁸⁹ Informe de la comisión de negocios constitucionales, en *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 36.

vigile por su bienestar y engrandecimiento, y las proteja tanto en el goce de sus instituciones peculiares, como en su seguridad e independencia. A este gobierno ha llamado la comisión gobierno federal”⁹⁰. Los poderes del gobierno federal se formaban “*de aquella porción de soberanía que de manera alguna podrían emplear bien las provincias confederadas si parcialmente se las reservasen*”⁹¹.

El informe se extendía en argumentos sobre la necesidad de formar un fuerte tesoro nacional para afrontar los gastos que la administración de los asuntos federales habría de generar, así como la necesidad de *igualar el déficit de toda provincia confederada cuya renta no alcance a satisfacer sus necesidades interiores*”⁹². Más adelante, sentaba la opinión de los redactores en torno a un tópico que provocó arduos debates posteriores: la “*obligación del gobierno federal [de] mantener y sostener el culto católico, apostólico, romano, a expensas del tesoro nacional (...) una obligación sin la cual se debilitaría el culto aunque estuviese por otra parte amurallado de intolerantes barreras*”; era precisamente con aquel tesoro nacional que habría de “*sostenerse el culto católico*”⁹³. Por otra parte, y en cumplimiento con los compromisos asumidos con otras naciones, se debía “*conceder a todo habitante de la Confederación el ejercicio público de su culto*”⁹⁴. Esta actitud frente a los diversos cultos traería sus problemas a lo largo del debate y en la etapa posterior de aceptación del texto por las provincias, especialmente en las más radicalmente católicas como era el caso de Córdoba. Así como estaba, convergía con una de las miras fundamentales de la Constitución como era la de “*atraer población activa, útil y moral al seno de la Confederación*”, un tipo de inmigrante creyente, padre de familia, que “*si abandona la patria de su nacimiento, no por eso enajena su conciencia ni su culto*”; mucho más peligroso que eso era “*poblar nuestro territorio con hombres ateos, incapaces de soportar el yugo saludable de las prácticas religiosas*”⁹⁵.

Si bien Buenos Aires se hallaba transitoriamente separada de la Confederación y no había asistido a las deliberaciones del Congreso General Constituyente, la comisión reconocía haber “*concebido su proyecto para que ahora, y en cualquier tiempo, abraza y comprenda los catorce estados argentinos*”⁹⁶. Toda la fe estaba puesta en la Constitución⁹⁷. Para Gorostiaga su sanción era urgente: “*los pueblos la reclaman con*

⁹⁰ Ídem, p. 36.

⁹¹ Ídem, p. 37.

⁹² Ídem, p. 38.

⁹³ Ídem, p. 40.

⁹⁴ Ídem, p. 40. En clara referencia al tratado firmado con Gran Bretaña en el año 1825 según el cual se acordaba a los súbditos británicos la libertad de conciencia y el derecho de concurrir a sus ritos públicamente.

⁹⁵ Ídem, p. 41.

⁹⁶ Ídem, p. 41.

⁹⁷ A la Constitución se sumaba el resto de tareas emprendidas por el Congreso para organizar políticamente la Confederación, en esa línea, otros dos proyectos de ley que adjuntaron “*sin las cuales quedaría incompleto el sistema del gobierno federal*”; normas referidas tanto a la creación de una municipalidad para la ciudad de Buenos Aires “*palanca del progreso material y de la buena policía de las ciudades*” cuyo régimen se pretendía extender al resto de la República, como a la reglamentación de, por una parte, “*el*

exigencia; porque el Congreso conoce muy bien que la Constitución es el más poderoso elemento de pacificación para los pueblos; el único recurso que nos queda para establecer el orden, y salvar a la Confederación de la disolución y de la anarquía”⁹⁸. Aunque mayoritaria, la postura acerca de la necesidad y urgencia en la sanción del texto constitucional no era unánime y ello quedó en evidencia desde el momento que siguió a la presentación del proyecto. Nada más y nada menos que el presidente del Congreso, el diputado por Salta Don Facundo Zuviría, presentó –sin éxito– una moción “*reducida a pedir el aplazamiento de la sanción y promulgación de la carta fundamental de la República, por no creer la oportunidad de dictarla*”⁹⁹. Luego de escucharse a todos los que quisieron reprochar a Zuviría, y de su propia contrarreplica, el proyecto presentado por la comisión de negocios constitucionales quedó aprobado en general por una mayoría de catorce votos contra cuatro¹⁰⁰.

Al día siguiente comenzó la discusión en particular, artículo por artículo, y fue recién durante estos debates pormenorizados que se pudieron distinguir claramente dos grupos de opinión bien diferenciados. La primera disposición que generó un arduo debate entre los constituyentes estuvo referida a la religión. El sacerdote Pedro Zenteno, diputado por Catamarca, propuso la reescritura del artículo 2 del proyecto radicalizando su tenor: “*Artículo 2º La Religión Católica Apostólica Romana, como única y sola verdadera, es exclusivamente, la del Estado. El gobierno federal la acata, sostiene y protege, particularmente para el libre ejercicio de su Culto público. Y todos los*

principio reconocido en el proyecto, de la libre navegación de los ríos interiores”, y por otra, la política de centralización de las rentas aduaneras, cfr. Informe de la comisión de negocios constitucionales en *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 43.

⁹⁸ Sesión del 20 de abril de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 48.

⁹⁹ Luego retiró la moción y reafirmó su plena obediencia a las decisiones del cuerpo representativo, pero se reservó el derecho de pronunciar un grave discurso con los argumentos que sostenían su oposición, en torno a tres grandes líneas que ya habían sido alegadas por un amplio sector de la política rioplatense –aquél alineado con el Gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas– durante los años previos al Acuerdo de San Nicolás, a saber, la inoportunidad de la Constitución, la necesidad previa de la paz, y el conveniente aplazamiento de su sanción. Según su razonamiento, si los pueblos deseaban y exigían a sus representantes una Constitución, era porque en ella “*creen ver el remedio de los males que les aquejan*”. Sin embargo, la Constitución preparada en aquellas circunstancias –según el diputado–, no alumbraba un futuro promisorio sino más bien “*la continuación de los males que con ella se pretende curar y la fuente de otros nuevos y mayores*”. Era necesario que los pueblos estuvieran realmente preparados para una Constitución, “*en las costumbres, opinión, hábitos públicos y en la disposición de los espíritus para recibirla, observarla y acatarla, como el símbolo de su fe social y política*”. Y luego de repasar la situación de las provincias rioplatenses concluía que “*el actual estado de nuestra patria no ofrece la oportunidad de darle la Constitución que se desea*”. Continuaba diciendo que “*las instituciones no son sino las fórmulas de las costumbres públicas, de los antecedentes, de las necesidades, carácter de los pueblos y expresión genuina de su verdadero ser político. Para ser buenas y aceptadas, deben ser vaciadas en el molde de los pueblos para que se dicten*”, y no en moldes extranjeros como acababa de manifestar Gorostiaga. De allí la necesidad de su aplazamiento. El discurso del Presidente del Congreso General Constituyente, Facundo Zuviría, fundamentando su posición contraria a la sanción de la Constitución para la Confederación argentina, fue leído en la sesión del día 20 de abril de 1853. Puede consultarse íntegramente en *La Constitución en el Congreso...* cit., pp. 52-73.

¹⁰⁰ Ídem, p. 93.

habitantes de la Confederación le tributan respeto, sumisión y obediencia”¹⁰¹. De acuerdo a su parecer, tal declaración era el “*sentimiento dominante en la mayoría de los habitantes de la Confederación [y] que esa declaración se había conservado íntegra en todas las constituciones de las provincias*”, como había sido el caso de Córdoba¹⁰². La intransigente reformulación de la disposición recibió tímidos apoyos por parte de algunos representantes que si bien estaban de acuerdo con otorgar un papel más destacado a la religión católica llegaron a proponer otras reescrituras menos intensas¹⁰³.

Otras voces salieron en defensa de la redacción presentada por la comisión¹⁰⁴. Sin embargo, fue Gorostiaga quien alzó la bandera y se encargó de atacar con sólidos argumentos la postura de Zenteno. Su alocución giró en torno a una serie de lineamientos que podrían resumirse en los siguientes: primero, la falsedad de que el catolicismo fuera la religión del Estado –no todos los ciudadanos eran católicos, ni era un requisito para obtener la ciudadanía pertenecer a la comunidad católica–, segundo, la falsedad de la afirmación del catolicismo como la “*única y verdadera*” religión –se trataba de un punto de dogma cuya decisión no era competencia de un congreso político que tenía que respetar la libertad–, y tercero, que “*la obligación impuesta al gobierno federal... de sostener el culto católico, era muy diferente de lo que se llama derecho de obligar la conciencia de los hombres a adorar a Dios de otra manera que lo que ellos creen ser más agradable a la Divinidad*”¹⁰⁵. Luego de otras intervenciones coincidentes, el artículo fue aprobado tal como había sido redactado por la comisión, dando pie a la gran novedad en materia constitucional que se consagraría por primera vez para todo el territorio de la Confederación –no sin mediar un intenso debate– unos artículos más adelante: la libertad de cultos.

El debate en cuestión fue planteado en torno al artículo 14 que, según su redacción original, establecía que “*Todos los habitantes de la Confederación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber... de*

¹⁰¹ Sesión del 21 de abril de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 95. La redacción original del artículo, que fue la que finalmente acabó sancionándose, establecía simplemente que “*El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano*”, *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 2.

¹⁰² Ya se ha visto cómo la reforma de 1847 recogió nuevamente la declaración e incluso incorporó un agregado final –*enseñada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana*– que llevó más allá la disposición de 1821.

¹⁰³ Es el caso del diputado Leiva, ídem, p. 96.

¹⁰⁴ Por ejemplo, el también sacerdote “*señor Lavaisse fundó su oposición a las adiciones propuestas, en que la Constitución no podía intervenir en las conciencias, sino reglar sólo el culto exterior. Que el gobierno federal estaba obligado a sostenerlo, y esto era lo bastante*”, ídem, p. 96.

¹⁰⁵ Ídem, pp. 97-98. El diputado Seguí también sostuvo que “*el Congreso [era] incompetente para fallar en materias de dogmas*”, ídem, p. 100. No sólo por lo que en la redacción precisa del artículo se refiere, sino por la amplia valencia normativa que tenía en aquel momento la religión, esta sea quizá una de las cuestiones más relevantes y de mayor diferencia entre la Constitución de 1853 y, por ejemplo, el Código Constitucional Provisorio cordobés de 1847.

profesar libremente su culto”¹⁰⁶. El máximo exponente de la facción conservadora, el diputado Zenteno, se opuso formalmente alegando que “*el Congreso no podía sancionar la libertad teológica de cultos porque tal sanción sería contraria al derecho natural, contraria al símbolo de la fe Católica, Apostólica, Romana (...) tampoco podía sancionarla como meramente civil o política, por ser para ello el Congreso autoridad incompetente [y aunque se pensara que lo fuera] tal sanción no sería conforme a las necesidades y votos de la nación*”; citaba en su apoyo fuentes normativas como el Santo Concilio de Trento, la cuarta Decretal de Benedicto XIV, la Bula de Inocencio X “*Telo Domus Dei*”, la de Pío VII “*Authorem fidei*” y otros textos de derecho canónico¹⁰⁷. A esta postura respondieron el grueso de los constituyentes más liberales –salvo los cordobeses– con argumentos basados también en el derecho natural, en el derecho comparado, en las obligaciones internacionales asumidas por la Confederación, y en la indispensable tolerancia para el progreso del país por la inmigración, entre otros. Toda esa masa argumental autorizaba la sanción de la disposición por parte de un Congreso cuya autoridad y competencia era indiscutible puesto que, “*su deber primordial era el de declarar y reglamentar los derechos y garantías que han de hacer libres y felices a los hombres que habiten nuestro suelo, siendo inseparable a este objeto el respeto que se debe a sus creencias... al gobierno temporal sólo le incumbía promover las conveniencias sociales de este mundo, y respecto al otro, garantizar la libertad de las conciencias y creencias de cada uno*”¹⁰⁸.

El asunto de la religión fue de los que más oposiciones generaron entre los diputados que representaban a las provincias. Además de los puntos ya analizados, hubo otros intentos de modificación del bosquejo elevado por la comisión. Por un lado, un intento de adición de un artículo que proponía que, luego de tantas concesiones hechas en materia de religión, se estableciera que “*para obtener empleo alguno civil en la Confederación Argentina se necesita que el individuo profese y ejerza el culto Católico,*

¹⁰⁶ Esa redacción original fue la que finalmente acabó aprobándose. *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 14.

¹⁰⁷ La radicalidad de su posición puede deducirse de su estrategia argumentativa: “*la sanción de la libertad teológica de cultos sería contraria al derecho natural porque violaba el primero de sus tres principios, que enseña al hombre como su primer deber, dar culto a Dios, el mismo que no se da ni puede darse de otro modo que el que enseña la Religión revelada como única y sola verdadera; que otra cualquiera sería desagradable e injurioso al mismo Dios. Que así como un deudor no paga su deuda con moneda falsa, ni hay acreedor que la reciba, ni se dé por satisfecho con ella; así también ningún hombre debe pagar el tributo de adoración que debe a Dios con un culto falso, sino con el único y solo verdadero; ni al mismo Dios como acreedor a nuestras adoraciones le será grato recibirlas de otro culto que del Católico, Apostólico, Romano [...] siendo la libertad de cultos meramente civil o política un punto de disciplina eclesiástica en los países católicos como el nuestro, subordinados a la Cabeza visible de la Iglesia, que es el Soberano Pontífice de Roma, y por consiguiente de la exclusiva competencia de aquella Suprema Autoridad Eclesiástica; claro era que las potestades temporales no podían legislar válidamente sobre esta materia acerca de la cual carecían de competencia, lo que haría nulas sus sanciones*”, *La Constitución en el Congreso...* cit., pp. 138-139.

¹⁰⁸ Ídem, p. 146.

Apostólico, Romano”¹⁰⁹. Pasó a estudio de una comisión y luego de un intento de restricción del alcance de la disposición –exigible sólo para los altos poderes– acabó rechazándose por ser incompatible con el espíritu general del texto constitucional. En el nuevo orden político “*debían evitarse indagaciones odiosas como las que tendrían lugar para cerciorarse acerca de la creencia de un individuo, indagaciones que ha querido evitar el Congreso cuando ha reservado sólo al juicio de Dios las acciones privadas de los hombres*”¹¹⁰. Pese a las deliberaciones, Zenteno, apoyado por otros como Lavaisse, intentó incorporar un requisito más para ser senador: tener la calidad de católico¹¹¹.

Por otro lado, en oportunidad de discutirse el artículo 73, el diputado Lavaisse solicitó que se agregara “*a las condiciones requeridas para ser Presidente y Vicepresidente, la de pertenecer a la Comunidad Católica, Apostólica, Romana*”, una propuesta que, como se ha visto, ya había tenido su espacio durante las sesiones anteriores pero que aquí resultaba más sólidamente argumentada desde que la propia Constitución concedía al Ejecutivo “*los derechos de Patronato Nacional... el deber sostener el Culto... la celebración de Concordatos... el pase de Bulas, Breves, Rescriptos del Sumo Pontífice*”¹¹². Gorostiaga, férreo defensor del proyecto original, planteó que no lo consideraba necesario pero que, a diferencia de las discusiones en puntos anteriores, se conformaría a la adición propuesta. Fue entonces cuando obtuvo por primera vez la palabra en el debate constituyente uno de los diputados por la provincia de Córdoba, el señor Juan del Campillo, para manifestar su conformidad con la modificación solicitada. Dijo que habría deseado igual exigencia para los altos funcionarios de la Confederación y que “*con respecto a los diputados y senadores estaba tranquilo y satisfecho de que obtendrían esa calidad desde que se dejaba su elección al voto de los pueblos y de sus Legislaturas, de cuyos sentimientos católicos no podía dudarse*”¹¹³. Continuó argumentando que si bien en aquellos casos hubiera sido útil y conveniente exigirlo, era una decisión que debía dejarse librada al buen juicio de los electores; pero que en el caso del Presidente y Vicepresidente “*había una razón de diferencia, pues aunque también estaba garantida esta calidad por la elección popular, era una sola persona que debía durar seis años en sus funciones y no sería demasiado solícito el Congreso en ocurrir a la eventualidad aunque muy remota de que la elección fuese menos acertada, o que el Presidente variase sus creencias*”¹¹⁴. El artículo terminó siendo aprobado con la adición.

Como se adelantó, este cariz “poco católico” de la Constitución de 1853 provocó fuertes rechazos en la Provincia de Córdoba. La actitud dogmática en materia religiosa era una característica compartida por los actores políticos al punto que trascendía el

¹⁰⁹ La propuesta fue elevada por el diputado Leiva, apoyada por los diputados Ferré y Zenteno, Sesión del 26 de abril de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 163.

¹¹⁰ Sesión del 27 de abril de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 177.

¹¹¹ Ídem, p. 183.

¹¹² Sesión del 29 de abril de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 201.

¹¹³ Ídem, pp. 201-202

¹¹⁴ Ídem, p. 202.

faccionalismo local; por ello, se temió por la suerte que tendría allí el texto sancionado¹¹⁵. Uno de los sectores más poderosos e influyentes de la Provincia, el eclesiástico, planteó expresamente su oposición a la Constitución. El Cabildo Eclesiástico puso al cuerpo de religiosos “en estado deliberativo sobre los puntos de su interés contenidos en la Constitución, a fin de acordar lo que se estimara más conforme al espíritu de la Iglesia”¹¹⁶. Por su parte, el rector de la Universidad, Estanislao Learte, se negó a jurar la Constitución Nacional tal como fue ordenado por el Director Provisorio y las autoridades provinciales correspondientes¹¹⁷. Desde el sector político, siempre acomodaticio y más permeable a las presiones de orden federal, el Gobernador Guzmán sostuvo también una posición intransigente: “*en un país en que sólo reina la religión cristiana que ha creado en nosotros usos y costumbres religiosas, no conviene que se sancione la libertad de culto, porque no dudo que nuestros hábitos religiosos se resentirán. Estamos en posición de la intolerancia y ¿a cambio de qué ventaja renunciaríamos este derecho?*”¹¹⁸. Pese a todo, Córdoba acabó cediendo en su postura y sometiéndose llanamente a la Constitución “en el entendimiento que simboliza el triunfo de la causa nacional y la única garantía sólida de unión”¹¹⁹.

Otros de los aspectos controvertidos durante las sesiones, algunos reeditados en 1860 durante la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, tuvieron que ver específicamente con el reparto de competencias entre la esfera federal y las provincias según el marco del sistema de gobierno que se adoptaba. Así sucedió, por ejemplo, con la redacción final del artículo 3° del proyecto, disposición que establecía a la ciudad de Buenos Aires como ciudad capital de la Confederación. El diputado Leiva reflexionó sobre la inconveniencia de la disposición argumentando que, además de la necesidad de respetar la soberanía provincial –máxime siendo que Buenos Aires no estaba representada en el Congreso–, “*toda ley constitucional debía ser estable y de fácil ejecución, y por esto debía contener sólo principios generales, y no artículos reglamentarios*”¹²⁰. La discusión en concreto se circunscribía a definir si la capital de la Confederación debía

¹¹⁵ En un mensaje al Gobernador Guzmán, el sacerdote Lavaisse le decía “*Usted me tiene dadas pruebas de sus ideas demócratas y liberales, creo que recibirá con aplauso este proyecto. Salvo la tolerancia de cultos (...) Haga hablar con mil lenguas a la prensa en favor del proyecto de constitución, y que si quieren decir algo de libertad de cultos, que sea con mucha economía. ¡Por Dios! No vaya Córdoba a aparecer como el pensamiento de Facundo Quiroga, levantando en alto el estandarte de la rebelión, con la palabra religión...*”, PAVONI, N. (1993) Ob. cit., p. 68.

¹¹⁶ Ídem.

¹¹⁷ Ídem, p. 69.

¹¹⁸ Ídem.

¹¹⁹ Ídem, p. 72.

¹²⁰ Sesión del 29 de abril de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 103. La postura era que, para respetar la soberanía de los pueblos que formaban la Confederación, debía negociarse con la provincia cuya ciudad se intentaba capitalizar y sólo con su consentimiento declarar el territorio como capital. Toda esta reflexión teórica volvió a plantearse y fue adoptada en la reforma de la Constitución del año 1860: “*Artículo 3°: Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse*”.

indicarse explícitamente y de manera bien determinada en el texto fundamental, o si correspondía dejar eso librado a una ley posterior. Los argumentos que se vertieron sirven para recrear la imagen sustentada por algunos diputados sobre la historia política rioplatense; es lo que ocurre con el discurso de Zapata, parangonando la experiencia norteamericana con la de la Confederación para determinar si se trató de procesos idénticos o diferentes, que transitaron de la unión a la secesión, o viceversa¹²¹. De un tenor similar fueron las posturas defendidas durante la lectura del artículo 4º referido a la formación del tesoro nacional, y si los derechos de importación y exportación correspondían a las provincias o al gobierno federal.

Lo propio para el artículo 41 sobre la definición de la autoridad competente para entender y fallar en materia de juicio político a los Gobernadores de las provincias. El abogado cordobés Martínez, diputado por La Rioja, planteó la propuesta de reservar esa atribución al Congreso Nacional puesto que, si lo que se buscaba era *“hacer desaparecer del suelo argentino, esos bárbaros Gobiernos irresponsables que han talado la República en veintidós años de absolutismo, y sancionar como garantía del respeto a las leyes constitucionales y derechos del ciudadano, el severo juicio de los gobernantes criminales, y recibir por ello mil bendiciones de los pueblos; era preciso que este juicio no quedase reducido a palabras vanas y a un mero fantasma teórico que nunca se haga efectivo, como sería el enjuiciamiento de los gobernadores de provincia ante sus mismas legislaturas...”*¹²². Gorostiaga rechazó la propuesta de modificación razonando que eso

¹²¹ “Se nos cita por ejemplo a los Estados Unidos del Norte que no establecieron tampoco su Capital en la Constitución. ¿Pero quién no conoce la diferencia que hay entre uno y otro caso? Los Estados Unidos eran colonias independientes unas de otras que se regían por sus respectivos gobiernos y que tenían costumbres, leyes e intereses diferentes. Al emanciparse de la Metrópoli y cuando trataron de constituirse en una sola Nación, ninguno de ellos quiso, por esa misma diversidad de intereses y demás circunstancias, ceder a los otros el derecho de dar la Capital, y fué menester formarla en un territorio que no perteneciese a ninguno y fuese al mismo tiempo de todos. Nosotros por el contrario, formamos como Colonia un solo Gobierno tan central como el monárquico, del que dependíamos. El antiguo virreinato de Buenos Aires se ejercía desde aquella Ciudad y en toda la extensión de él por el Virrey. Nos emancipamos también de nuestra Metrópoli; y los Gobiernos de Buenos Aires, sin apercibirse del cambio político, y social que esta nueva situación debía producir, continuaron el mismo sistema colonial, que ha terminado recién el año pasado y que nos produjo todas las guerras civiles que han despedazado el país desde nuestra independencia, y a lo que es preciso que los argentinos de corazón cooperen a poner un término radical. Los Estados Unidos pues, pasaron en su emancipación de una completa, separación a su unión por el vínculo federal: nosotros por el contrario, pasamos de la unidad mis absoluta a la federación que vamos a constituir; y como esta forma de Gobierno tiene por base el equilibrio de los estados federales, debemos propender a esto, evitando o curando la deformación, y vicio que para su propia vida y para la de la Nación tiene uno de sus vínculos constitutivos”, Sesión del 22 de abril de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., pp. 112-113.

¹²² Continuaba: “éstas no habían sido ni podían ser por largo tiempo, —con cortas excepciones—, sino cuerpos compuestos de hombres en su mayoría asalariados del Poder Ejecutivo, de otros muy especialmente afectos a la persona de él y casi en su totalidad influenciados por el gobernante e incapaces por consiguiente de un juicio recto, imparcial e independiente (...) el tribunal que necesitaban debía ser fuerte, imparcial, libre de las influencias del poder e independiente en sus resoluciones. Que lo llenaría mejor estos grandes objetos y necesidades, era la Cámara de Senadores, instalada lejos de esos gobernantes mismos, a quienes la mayoría del Senado ni aún conocería quizá; que exentos de su odio y prevenciones, como de su amistad e influencias, e intérpretes de la libertad y soberanía de los pueblos, formarían el digno Tribunal que llene las importantes exigencias que el Soberano Congreso debía tener en vista al sancionar el severo enjuiciamiento de los gobernantes criminales arbitrarios y haría respetar los

sería “un ataque a la soberanía e independencia de cada provincia, base esencial del sistema federal que la misma Constitución establece [...] Que se sujetaba de ese modo una autoridad soberana independiente, sin previo conocimiento de su Legislatura, al juicio de un tribunal que no le era superior sino en aquellos negocios que pueden llamarse Nacionales, no en lo relativo a los negocios interiores de sus provincias”¹²³. Pese a la lógica del defensor del proyecto, Zavalía salió en apoyo de la reforma, retrucó con su mismo método los argumentos del santiagueño y el artículo acabó aprobándose con la modificación.

La atribución de dictar los Códigos para toda la Confederación, que el proyecto otorgaba al Congreso de la Nación, fue también objeto de oposición. Para el mismo Zavalía “tal atribución era propia de la legislatura de cada provincia no del Congreso... esta restricción a la soberanía provincial era contraria a la forma de gobierno que establece la Constitución”¹²⁴. Ante la objeción del tucumano, nuevamente Gorostiaga salió en defensa de su obra. Como ya se había sancionado al discutirse el artículo 24, “no quedaba duda sobre la facultad del Congreso para promover la reforma de la actual legislación del país”, pero su argumento más fuerte se desarrolló por otro derrotero: la necesidad de evitar los “males inconcebibles” que acarrearía el hecho de dejar librado a cada provincia la facultad de sancionar los códigos civil, mineral, penal y demás leyes generales, convirtiendo a la legislación del país que se pretendía consolidar en un “inmenso laberinto”¹²⁵. El respeto a las “peculiaridades” de cada provincia quedaría salvado con la facultad reservada a cada una de ellas de dictar sus propios códigos de procedimiento y leyes orgánicas de establecimiento de los poderes judiciales locales. Por lo demás, como razonó el diputado Zenteno, la preocupación en que se había fundado la oposición “estaba satisfecha en el tenor del mismo artículo, pues que siendo el Congreso una reunión de hombres de todas las provincias ellos representaban su soberanía e intereses y podían por consiguiente dictar leyes para toda la Confederación”¹²⁶. Apartándose del modelo en el que se había supuestamente vaciado el proyecto, se terminó aprobando que el gobierno federal hiciera las leyes pero los gobiernos locales serían quienes las interpretarían y aplicarían¹²⁷.

derechos y soberanías de los pueblos para que no queden abandonados como lo han estado, a sufrir avances y vejaciones de sus mandatarios”, Sesión del 26 de abril de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., pp. 168-169.

¹²³ Ídem, p. 170.

¹²⁴ Esgrimió además un argumento fáctico y otro de tipo comparativo, en primer lugar reconoció que “las provincias con menos hombres de luces que pudieran ocuparse con suceso de la codificación, acogerían por prudencia los Códigos que dictara el Congreso”, para concluir afirmando que “en los Estados Unidos, cada uno se dictaba sus leyes”, ídem, p. 190.

¹²⁵ La posición de Gorostiaga en *La Constitución en el Congreso...* cit., pp. 190-191.

¹²⁶ Ídem, p. 192.

¹²⁷ Este es el sistema que surge de los artículos 64, inc. 11; 101; 102; 103 y 105 de la *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*.

El debate acerca de la competencia de la justicia federal se desarrolló sobre el mismo cauce, planteándose semejantes argumentaciones fácticas y normativas, aunque con un final diametralmente opuesto al del caso anterior. En concreto, el diputado Zenteno propuso agregar al artículo 97 el caso de “*causas... que se suscitasen entre el gobernador de una provincia y un ciudadano de ella, dando por razón la influencia que podían ejercer los gobernadores sobre los Tribunales de su misma provincia, lo que no sucedería en un Tribunal federal enteramente independiente e imparcial*”¹²⁸. Pese al apoyo recibido por la propuesta, la potente voz del redactor Gorostiaga salió en defensa de la opción utilizada aduciendo “*que el sistema federal era la base obligatoria de la Constitución; que debía respetarse la soberanía e independencia de las provincias y cuidarse mucho de que el poder ya legislativo, ejecutivo o judicial del gobierno federal, no invadiese aplicándolos a casos importunos, los respectivos poderes de las provincias (...) en el caso propuesto... el poder judicial federal nada tenía que hacer, porque el gobernador y el ciudadano eran iguales ante la ley, iguales ante el magistrado de esa misma provincia encargado de aplicarla, y sujetos por consiguiente a su jurisdicción*”¹²⁹. En todas estas cuestiones, de lo más trascendentes para el nuevo diseño político de la Confederación, tampoco se pronunciaron los constituyentes cordobeses, lo que resulta particularmente llamativo si se considera su preparación intelectual y su vasta experiencia constitucional local, más precisamente la cultura derivada del Reglamento Provisorio de 1821, que tres décadas antes había bosquejado interesantes soluciones a las problemáticas que en Santa Fe se estaban abordando.

Aprobados individualmente todos los artículos, y luego de algunas reconsideraciones puntuales solicitadas por varios diputados, aquel 30 de abril del año 1853 se cerró el debate constituyente¹³⁰. Al día siguiente, en sesión extraordinaria, se reunieron “*al objeto de firmar la Carta Constitucional de la República*”¹³¹. El diputado Pérez mocionó para que el cuerpo debatiera y decidiera si estaba autorizado para firmar o no la Constitución puesto que se había hallado fuera de las sesiones durante la discusión de más de tres cuartas partes del proyecto, lo que finalmente acabó acordándose favorablemente para la firma¹³². El diputado cordobés Santiago Derqui estaba en la misma situación, y más, incluso en esa misma sesión extraordinaria se encontraba todavía en comisión¹³³. Dos días más tarde, en la sesión del 3 de mayo, solicitó al Congreso se le

¹²⁸ Sesión del 30 de abril de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., pp. 207-208.

¹²⁹ Ídem, p. 208.

¹³⁰ Ídem, p. 210. Según se ha revisado, luego de recorrer todo el debate constituyente, surge de las actas del Congreso General Constituyente que no aparecen explícitamente aprobados los artículos 11, 12, 13 y 63 del proyecto elevado por la comisión de negocios constitucionales.

¹³¹ Sesión extraordinaria del 1º de mayo de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 211. En su discurso de cierre, el Presidente del Congreso recordó y auguró que “*«el 1º de mayo de 1851 el vencedor de Caseros firmó el exterminio del terror y del despotismo. El 1º de mayo de 1853 firmamos el término de la anarquía; el principio del orden y de la ley. Quiera el Cielo seamos tan felices en nuestra obra como él fue en la suya»*”, ídem, p. 215.

¹³² Ídem, p. 212.

¹³³ Ídem, p. 211 al margen.

permitiese firmar la Carta Fundamental lo que, por ser la causa de su ausencia una comisión encargada por el propio cuerpo, se acordó afirmativamente¹³⁴. Por último, el Presidente del Congreso leyó una minuta de declaración reflexionando sobre la trascendencia del hito político que los diputados estaban protagonizando, y sobre la verdadera inteligencia del sistema de gobierno que acababan de estatuir, comenzando una tradición de dogmática federal que marcaría la vida política de los argentinos¹³⁵.

La versión final del texto de la Constitución de la Confederación Argentina de 1853 se envió firmado por los diputados al Director Provisorio Justo José de Urquiza para que, en cumplimiento del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, “*sea debidamente promulgada y jurada con solemnidad en toda la extensión del territorio, pueblos, distritos y comarcas que abrazan las trece provincias representadas en Congreso*”¹³⁶. Al ejemplar de la norma se adjuntaron también las leyes orgánicas de capitalización, centralización de aduanas y municipalidad. Una comisión especial se encargaría de presentar el texto ante la provincia de Buenos Aires para tratar de incorporarla al nuevo cuerpo político constituido, comisión compuesta por los diputados Carril, Gorostiaga y Zapata¹³⁷. El día 25 de mayo del año 1853 Urquiza promulgó la Constitución Nacional, ordenando a su vez la lectura pública y jura del documento en todas las provincias de la Confederación¹³⁸. En Córdoba así se hizo; el Ejecutivo provincial sancionó un minucioso

¹³⁴ Sesión del 3 de mayo de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 216.

¹³⁵ Algunos pasajes del discurso son más que elocuentes para comenzar a descifrar, genéticamente, la opción constitucional de 1853 en materia de sistema de gobierno: “*El Congreso con claras nociones ha formulado al fin la federación, quitando a esta voz lo que tenía de peligroso, en la vaga y absurda significación vulgarmente recibida. Ha respetado la independencia provincial hasta donde alcanza la acción del poder local conciliable con un gobierno general; y del excedente de las soberanías provinciales, formando un haz, ha organizado los poderes que deben representar una nación compacta a perpetuidad. La federación será bien entendida, si se comprende como en los Estados Unidos del Norte, única federación modelo que existe en el mundo civilizado (...) sería intolerable si... se la redujese a un pacto de conservación entre capitanejos*”.

“*La soberanía política absoluta no pertenece ni puede pertenecer de derecho a ninguna de las provincias argentinas; porque todas conquistaron el territorio en común; porque ganaron su independencia en común; porque prodigaron su sangre y sus tesoros en común; porque son solidarios en sus reveses y en sus glorias, y porque el martirio las ha fraternizado*”.

“*La autoridad de los gobiernos y la libertad misma de los pueblos, nada ganarían al lado de gobiernos rivales e independientes dentro del mismo territorio. Así ha parecido natural y forzoso seguir en la Constitución una serie de consecuencias que se encadenan. Unidad e independencia del territorio nacional; libertad y garantías de los hombres que lo habitan; libertad e independencia provincial; Gobierno Federal, garantía del libre ejercicio de los derechos y funciones de todos los Poderes organizados*”, Ídem, pp. 219-220.

¹³⁶ Ídem, p. 231. La facultad del Director Provisorio para promulgar la Constitución surgía del artículo 12 del Acuerdo: “*Sancionada la Constitución y las leyes orgánicas que sean necesarias para ponerla en práctica, será comunicada, por el presidente del Congreso, al encargado de las relaciones exteriores, y éste la promulgará inmediatamente como ley fundamental de la nación, haciéndola cumplir y observar. En seguida será nombrado el primer presidente constitucional de la República, y el Congreso constituyente cerrará sus sesiones, dejando a cargo del ejecutivo poner en ejercicio las leyes orgánicas que hubiere sancionado*”, en *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 14.

¹³⁷ Ídem, p. 236.

¹³⁸ Decreto de Promulgación: “*¡Viva la Confederación Argentina! El Director Provisorio de la Confederación Argentina. Vista la presentación de la Constitución Federal de la República que el*

decreto ordenando el modo en que debía llevarse a cabo la ceremonia de juramento de la nueva Constitución Federal, prevista por el propio Director Provisorio para el día 9 de julio de ese mismo año¹³⁹. A partir esa fecha quedó asumida ante Dios la obligación política de respeto y defensa del nuevo orden constitucional¹⁴⁰.

Congreso General Constituyente le ha hecho por medio de una Comisión Especial mandada de su seno; y en cumplimiento de la estipulación duodécima del Acuerdo celebrado en San Nicolás de los Arroyos, en 31 de mayo de 1852, DECRETA: Art. 1º - Téngase por Ley Fundamental en todo el Territorio de la Confederación Argentina, la Constitución Federal sancionada por el Congreso Constituyente el día primero del presente mes de Mayo en la ciudad de Santa Fe. Art. 2º - Imprímase y circúlese a los Gobiernos de Provincia, para que sea promulgada y jurada auténticamente en comicios públicos. Dado en San José de Flores a 25 días del mes de Mayo de 1853. JUSTO J. DE URQUIZA”, en La Constitución en el Congreso... cit., pp. 240-241.

Comunicación del Decreto a las provincias: “... Concluida la lectura empezará el acto del juramento, y para verificarlo, se abrirá en cada partido uno o más registros, según lo requiera el número de su población, encabezado por la fórmula siguiente: «Nosotros, ciudadanos argentinos, que formamos el pueblo de la Provincia de juramos por la Santa Cruz en que se inmoló el Redentor del Mundo, respetar, obedecer y defender la Constitución Política de la Confederación Argentina, sancionada por el Congreso General Constituyente el 1º de mayo de 1853». Todos los individuos que por las leyes de la Provincia sean hábiles para votar, escribirán o harán escribir sus nombres en los registros, y una vez cerrados éstos con la certificación de las autoridades locales, serán remitidos a la Secretaria del Directorio para que obren en los Archivos del Gobierno de la Confederación, como una prenda de adhesión a la Ley Fundamental y de honor para la generación que tenga la virtud de arrancar a su patria del caos, y presentarse con las formas dignas de un pueblo civilizado...”, ídem, pp. 242-245.

¹³⁹ “Córdoba, Junio 20 de 1853. El Gobernador Delegado de la Provincia, ACUERDA y DECRETA: Art. 1º. Cúmplase en todo lo dispuesto por el supremo decreto directorial, fecha 25 de Mayo ppdo., poniéndose en conocimiento de la H. Sala de RR. de la Provincia. Art. 2º. El día 9 de Julio próximo será publicada y jurada la carta constitucional en esta capital y su Provincia con toda la solemnidad posible. Art. 3º. Todos los empleados de la lista civil y militar, el cuerpo universitario y su ilustre claustro, los jefes de los diferentes Departamentos de la Administración Pública, acompañados de los empleados respectivos de cada oficina, asistirán el día 9 á las ocho de la mañana al despacho del Gobierno para acompañarle al acto de la publicación y juramento de la Constitución, y la solemne misa de gracias que debe celebrarse en la Santa Iglesia Catedral. Art. 4º. En la capital, como en las villas y pueblos cabeza de partido de los departamentos de campaña, que se designarán, se reunirán todos los ciudadanos civiles y militares para proceder á la publicación de la carta constitucional por medio de su lectura, y terminado que sea este acto, procederán a jurarla, según la fórmula que prescribe la circular del Exmo. Director Provisorio. Art. 5º. Los puntos designados para la publicación en los departamentos de campaña son: En el de Anejos: Alta Gracia y Santo Domingo. En el de Calamuchita: Soconcho y los Reartes. En el Río 3º Arriba: La Capilla de Rodríguez. En el Río 3º Abajo: Villa Nueva y Fraile Muerto. En el Río 4º: Villa de la Concepción, La Carlota y Fuerte Achiras. En el de San Javier: Nono y Villa de San Pedro. En el de Pocho: La Parroquia y Taninga. La Punilla: San Antonio y Cruz del Eje. En el de Ischilín: La Parroquia. Tulumba: la Villa de ese nombre y el Totoral. Río Seco: la Villa de este nombre y la del Chañar. Santa Rosa: la Villa de este nombre. Río 2º Abajo: Villa del Rosario y Fuerte del Tío. Art. 6º. En la capital como en los departamentos de campaña, se abrirán registros formados del acta que se levantará para constancia de tan augusto y solemne acto, encabezada con la fórmula del juramento, firmándose enseguida por todos los empleados civiles y militares y demás concurrentes: debiendo permanecer abiertos dichos registros por tres días consecutivos para recibir las firmas en las cinco secciones de la capital por ante los jueces de Paz y en la campaña, en los que abrieron los respectivos jueces de Alzada y Pedáneos en los puntos designados. Art. 7º. Los registros correspondientes á los departamentos de campaña, cerrados con la certificación de las autoridades respectivas, se remitirán al Gobierno para reunirse á los de la capital y remitirlos al Exmo. Sr. Director Provisorio á los efectos que espresa la circular fecha 25 de Mayo”, en *Compilación de leyes...* cit., pp. 258-259.

¹⁴⁰ Sobre las implicancias del juramento constitucional, es referencia obligada la obra –ya mencionada y analizada en el Cap. I de este trabajo– de LORENTE, M. (2007) “El Juramento Constitucional”, en GARRIGA,

II. 2. Relaciones intertextuales entre los documentos cordobeses y el federal de 1853

Un ligero análisis comparativo de los textos constitucionales cordobeses sancionados durante la primera mitad del Siglo XIX con la Constitución Federal argentina del año 1853, arroja como resultado toda una serie de disposiciones idénticas entre los primeros y el segundo. Las similitudes pueden encontrarse tanto en la parte dogmática, como en la parte orgánica de la Constitución. Ahora bien, dichas identidades no serían del todo llamativas si no fuera porque se trata de documentos proyectados, discutidos y sancionados en épocas muy distintas –como es el caso del Reglamento Provisorio del año 1821 y la Constitución Federal de 1853–, en las que el territorio rioplatense atravesó procesos políticos muy diferentes, y constituían normas pensadas para sujetos políticos de tamaño y alcance totalmente diverso: una, la Confederación, y otra, una Provincia integrante de ella.

Sin desconocer que entre el Reglamento Provisorio de 1821, sus reformas, el Código Constitucional de 1847 y la Constitución Federal hay tanto de similitud como de discordancia, lo cual repercute directa e intensamente en el orden político-constitucional proyectado por esos textos, es interesante repasar analíticamente sus disposiciones semejantes para tratar de dilucidar aquellas cuestiones, tanto estructurales como contingentes, que ayudan a ensayar una explicación del fenómeno.

Muchos de los artículos o soluciones institucionales previstas en el Reglamento Provisorio del año 1821 hacían explícita referencia a un supuesto sujeto político que aglutinaría a Córdoba con el resto de las provincias rioplatenses. Ya se ha dicho que su presencia en un documento de carácter provincial tenía causa en la intención del Gobernador Juan Bautista Bustos de presentar a los constituyentes de las distintas provincias, convocados por él para celebrar una convención que diera al Río de la Plata una constitución, su boceto de organización federal. En el horizonte de expectativa de los constituyentes provinciales estaba la posibilidad de sentar, al mismo tiempo, las bases

C. y LORENTE, M., Cádiz, 1812. *La constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 73-118.

Nota comunicando la jura de la Constitución llevada a cabo el 9 de julio de 1853. *Documentos relativos a la organización constitucional...* cit., pp. 181-182: “¡VIVA LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA! El Gobierno de la Provincia de Córdoba, Julio 14 de 1853. Al Exmo. Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia de Entre Ríos. El infrascripto acompaña á la presente para conocimiento de ese Gobierno, el adjunto decreto impreso por el que se mandó publicar y jurar la carta Constitucional de la Confederación Argentina sancionada por el soberano Congreso en 1º de Mayo y mandada publicar y jurar por disposición fecha 25 del mismo mes por el Exmo. Señor Director Provisorio, en todos los Pueblos de la República. Al comunicarlo á V. E. tiene la alta satisfacción de participarle que en cumplimiento de aquella disposición el mismo día 9 glorioso aniversario de nuestra Independencia, ha sido publicada y jurada en esta Capital y en todas sus Provincias la Carta Constitucional del modo más solemne, en medio del patriótico entusiasmo que anima siempre á los Argentinos en los grandes días de la Patria. Por tan grandioso acontecimiento para la Nación felicita el infrascripto á V. E. y á esa benemérita Provincia de su mando; pues con la Carta, acabará de cimentarse el orden en el País, y se afianzará definitivamente en el imperio de las Instituciones Democráticas de que pende el engrandecimiento y prosperidad Nacional y particular de cada una de las Provincias Confederadas. Dios guarde á V. E. muchos años. ALEJO CARMEN GUZMÁN”.

para organizar la Provincia y el conjunto. Eso los llevó a incorporar disposiciones referidas a las atribuciones de los distintos órganos de poder federales y su interdependencia con los locales, de acuerdo a un modelo bien definido de federación, alternativa política que finalmente acabaron consagrando los diputados reunidos en el Congreso General Constituyente de 1852/3.

El objeto parcialmente compartido por los textos –regular relaciones y distribuir atribuciones entre dos esferas de poder–, impulsó a los redactores de unos y otro a buscar ideas en otros horizontes, rastreando distintas soluciones y alternativas institucionales previstas por documentos que ya se hubieran ocupado de lo mismo. En consecuencia, tanto los constituyentes cordobeses del '21 como los nacionales del '53 acabaron abrevando directa o indirectamente en las mismas fuentes normativas. Principios liberales propios del constitucionalismo revolucionario, generosa –aunque selectivamente– declamados; ingeniería de poderes superpuestos sobre la base de un ideal federal de clara inspiración norteamericana¹⁴¹.

El primero de esos aspectos replicados, bien visto, tenía que ver con la medida de la soberanía de los estados provinciales. Según cada uno de los dos textos que se vienen comparando, las provincias estaban plenamente facultadas para el dictado de sus respectivas cartas constitucionales, sin embargo, se trataba de un poder constituyente condicionado o limitado desde afuera del propio sujeto político provincial ya que, la facultad de examen y revisión de tales documentos se reservaba para el Congreso General de los Estados o Congreso Nacional¹⁴². Esta disposición difícilmente podría encontrarse en una Constitución como la norteamericana en la que el poder reservado por cada uno de los estados de la unión era mucho más fuerte que el del naciente gobierno federal. Sin embargo, una de las fuentes de los textos rioplatenses, inspirada en aquella norma del norte aunque mejor adaptada a la realidad hispanoamericana, como lo fue la Constitución Federal para los Estados de Venezuela del año 1811, contenía una regla similar¹⁴³.

¹⁴¹ La experiencia norteamericana, tanto el proceso federal como los estatales, sirvió de ejemplo, directa o indirectamente, para las constituciones en todo el mundo hispanoamericano. En lo que aquí interesa, según la palabra de los propios redactores de la Constitución de 1853, el proyecto preparado estaba “*vaciado en el molde de la constitución de los Estados Unidos, único modelo de verdadera federación que existe en el mundo*”, Sesión del 20 de abril de 1853, *La Constitución en el Congreso...* cit., p. 48. Respecto del Reglamento Provisorio de 1821, como se ha visto, recibió indirectamente la influencia norteamericana a través de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela del año 1811.

¹⁴² Según el *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...*, SECC. SEXTA, CAP. XIII, ART. 1º: “Al Congreso corresponde formar la constitución porque se ha de regir y gobernar la Provincia; examinarla y juzgarla sobre si se opone o no, a la autoridad de la confederación, es privativo del Congreso General de los Estados”. Por su parte, la Constitución de 1853, en su Artículo 5º establecía expresamente que “Cada Provincia Confederada dictará para sí una Constitución [que] serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación...”; más adelante, siguiendo el mismo principio, el Artículo 64º inc. 28 disponía que “Corresponde al Congreso: [...] Examinar las Constituciones provinciales y reprobadas si no estuviesen conformes con los principios y disposiciones de esta Constitución”; finalmente, cerrando el sistema previsto, el Artículo 103º reiteraba que “Cada provincia dicta su propia Constitución, y antes de ponerla en ejercicio, la remite al Congreso para su examen, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5”.

¹⁴³ El Artículo 133 de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811 contenía una disposición cuyo espíritu era el mismo que el de las normas rioplatenses: “El Gobierno de la Unión

Otro de los asuntos de los que puede predicarse cierta identidad entre el Reglamento y la Constitución es el de la previsión de una justicia de tipo federal con todo un cúmulo de competencias bien definidas¹⁴⁴. Aquí, como en el caso anterior, la vocación de los constituyentes cordobeses de proyectar normas para el conjunto, y una compartida genealogía de fuentes, ayudarían a explicar la similitud, aunque en el texto nacional se otorgaba mucho más poder al gobierno federal en detrimento de las soberanías provinciales; el artículo 97 incorporaba además, como competencia de toda la justicia federal “*Corte suprema y... tribunales inferiores de la Confederación*” toda una serie de causas entre las que se destacan “*los conflictos entre los diferentes poderes públicos de una misma provincia*”, y los asuntos “*entre los vecinos de diferentes provincias; entre una provincia y sus propios vecinos...*”¹⁴⁵. Como se ha dicho, la filiación directa de esta disposición diseñando un sistema especial de solución de controversias hay que buscarla tanto en el texto norteamericano de 1787 como en el venezolano de 1811, de allí su similitud textual¹⁴⁶.

Relacionado también con la organización del aparato de administración de justicia y sus principios rectores, los diputados cordobeses en la década del '20 y los de la

asegura y garantiza a las Provincias la forma de Gobierno Republicano que cada una de ellas adoptare para la administración de sus negocios domésticos: sin aprobar Constitución alguna Provincial que se oponga a los principio liberales, francos de representación admitidos en ésta...”. Disponible en <http://modern-constitutions.de/VE-00-1811-12-21-es-e.html>.

¹⁴⁴ En la norma de Córdoba se establecía que “*Las diferencias que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y uno, o muchos ciudadanos de otra; entre ciudadanos de una misma Provincia que disputaren tierras concedidas por diferentes Provincias; entre una Provincia o ciudadanos de ella, y otros Estados, ciudadanos o vasallos extranjeros; y todas aquellas en que el Estado Federal tenga, o sea parte, corresponde su conocimiento al Poder Judicial de los Estados*”, Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXII, ART. ÚNICO.

¹⁴⁵ Constitución de la Confederación Argentina de 1853, ART. 97.

¹⁴⁶ Constitución de los Estados Unidos de 1787, “*Article III, Section 2: The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority; --to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls; --to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction; --to Controversies to which the United States shall be a Party; --to Controversies between two or more States; --between a State and Citizens of another State, --between Citizens of different States, --between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects*”. Este artículo fue modificado unos años más tarde por la enmienda número XI, ratificada por los estados en febrero del año 1795: “*Amendment XI: The Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of the United States by Citizens of another State, or by Citizens or Subjects of any Foreign State*”, disponible en http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_transcript.html. Pese a la modificación, en las constituciones que siguieron esta estela, aunque posteriores a la enmienda, se mantuvo la redacción original del artículo, me refiero fundamentalmente a la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811.

Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, Artículo 115: “*El Poder Judicial de la Confederación estará circunscripto a los casos cometidos por ella; y son: Todos los asuntos contenciosos, civiles o criminales que se deriven del contenido de esta Constitución; Los tratados o negociaciones hechas bajo su autoridad; Todo lo concerniente a Embajadores, Ministros, Cónsules; Los asuntos pertenecientes a Almirantazgo y jurisdicción marítima; Las diferencias en que el Estado federal tenga o sea parte; Las que se susciten entre dos o más Provincias; Entre una Provincia y uno o muchos ciudadanos de otra; Entre ciudadanos de una misma Provincia que disputaren tierras concedidas por diferentes Provincias; Entre una Provincia o ciudadanos de ella y otros Estados, ciudadanos o vasallos extranjeros*”.

Confederación en la del '50, plantearon una meta institucional que formaba parte del horizonte de posibilidades que se abría a la luz de las experiencias foráneas que servían de modelo: la instalación del sistema de juicios por jurados¹⁴⁷. En Córdoba se dijo que si bien la administración de justicia seguiría transitoriamente los mismos principios que había seguido durante siglos, dicha provisionalidad duraría hasta tanto “*las circunstancias de la Provincia, hacen adoptable, y permiten establecer el sistema de legislación por jurados*”¹⁴⁸. Por su parte, los constituyentes reunidos en Santa Fe encargaron al Congreso Nacional la promoción de “*la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados*”¹⁴⁹.

Continuando con las soluciones compartidas en materia de organización institucional, la Constitución de 1853 recogía una formulación similar a la del Reglamento Provisorio de 1821 en lo que se refiere a la consideración del Gobernador de Provincia desde el punto de vista del orden federal. El Ejecutivo local se erigiría –por derecho propio– en una autoridad que cumpliría funciones para el gobierno del conjunto dentro de los límites del territorio provincial en relación con ciertas materias. Según el primero de los documentos constitucionales, “*Los gobernadores de provincias son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Confederación*”¹⁵⁰. De manera muy similar, el texto cordobés establecía que “*El Poder Ejecutivo de la Provincia, será en ella el Agente natural, e inmediato del Poder Ejecutivo Federal para todo aquello que siendo de su resorte o del Congreso General de los Estados, no estuviere cometido a empleados particulares*”¹⁵¹. El artículo también puede encontrarse en una constitución de carácter típicamente federal como la sancionada para los Estados de Venezuela en 1811, desde la que incluso se proyectó a un gran número de constituciones provinciales de aquella región¹⁵².

Por último, como natural consecuencia de la distribución de funciones entre dos esferas separadas aunque superpuestas de gobierno –una federal y otra local–, los textos atribuían ciertas competencias a determinados órganos, de uno u otro nivel. En ese reparto de facultades los redactores provinciales y nacionales compartieron, en más de

¹⁴⁷ La cuestión del juicio por jurados en el Río de la Plata ha sido analizada por LEVAGGI, A. (1982) “El juicio por jurados en la Argentina durante el siglo XIX”, en *Revista de Estudios Histórico Jurídicos*, Nro. VII. Disponible en <http://www.rehj.cl/index.php/rehj/article/viewArticle/94>. Para una historia del juicio por jurados, y una historia del canon historiográfico sobre el asunto, véase MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2006) “Visión histórica y constitucional del jurado”, en *Estudios de Derecho Judicial*, Nro. 96, pp. 19-45.

¹⁴⁸ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SÉPTIMA, CAP. XIX, ART. 1°.

¹⁴⁹ *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 24.

¹⁵⁰ *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 107.

¹⁵¹ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XV, ART. 1°.

¹⁵² Las constituciones neogranadinas de Mariquita de 1815 (Tít. XI, Art. 3), o Pamplona de 1815 (Art. 51), siguieron la misma tónica planteada por el Artículo 108 de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811: “*Los Poderes Ejecutivos provinciales o los Jefes encargados del gobierno de las Provincias, serán en ella los Agentes naturales e inmediatos del Poder Ejecutivo federal, para todo aquello que por el Congreso general no estuviere cometido a Empleados particulares en los ramos de Marina, Ejército y Hacienda Nacional en los puertos y plazas de las Provincias*”.

una oportunidad, el mismo criterio de definición. Mucho de lo que en el Reglamento Provisorio se depositaba en manos de un potencial “*Congreso General de los Estados*”, en la Constitución de la Confederación correspondía al “*Congreso Nacional*”. Esto era así, por ejemplo, para decidir sobre la paz o la guerra¹⁵³; sobre el establecimiento, organización, armamento y disciplina de las milicias nacionales¹⁵⁴; para fijar la calidad de la moneda, los pesos y las medidas¹⁵⁵; o arreglar y establecer las postas y correos generales¹⁵⁶. En otros casos, el Reglamento Provisorio preveía que el Congreso General de los Estados debía prestar su consentimiento para determinados asuntos como la celebración de tratados por parte de las provincias –algo que en la Constitución de 1853 se replicó parcialmente¹⁵⁷, y otros que en el texto nacional posterior directamente quedaron bajo la órbita del Congreso Nacional, como fue el caso del establecimiento de los derechos de importación y exportación al comercio interior y al extranjero¹⁵⁸.

¹⁵³ Para la norma cordobesa, “*decretar la guerra y la paz, es privativo del Congreso General de los Estados*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII, ART. 2. Según la Constitución de 1853 el Congreso Nacional autoriza “*al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz*” (Art. 64, inc. 21).

¹⁵⁴ El documento de Córdoba establecía que –aunque provisoriamente y hasta se reuniera el cuerpo federal lo haría la Sala de Representantes local–, “*Disponer la organización, armamento y disciplina de las milicias corresponde al Congreso Federal de los Estados...*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XVIII, ART. 2. Por su parte, la Constitución de 1853 disponía que “*Corresponde al Congreso... Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias, y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la Confederación...*” (Art. 64, inc. 24).

¹⁵⁵ Para el Reglamento de 1821 era atribución del Congreso provincial celar la calidad de la moneda, los pesos y la medida, pero en el sistema proyectado, fijarlos sería facultad reservada al “*Congreso General de los Estados*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII, ART. 12. Según la Constitución de 1853 era el Congreso Nacional el encargado de “*Hacer sellar monedas, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Confederación*” (Art. 64, inc. 10). Más adelante, en sintonía con el sistema federal adoptado, como las provincias “*no ejercen el poder delegado a la Confederación. No pueden... acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso federal*” (Art. 105).

¹⁵⁶ En el diseño cordobés, si bien el Ejecutivo debía dejar a “*cargo del Congreso General de los Estados arreglar y establecer las Postas y Correos generales, asignar la contribución para ellas y designar los grandes caminos*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XV, ART. 5. En el texto nacional, “*Corresponde al Congreso... Arreglar y establecer las postas y correos generales de la Confederación*” (Art. 64, inc. 13).

¹⁵⁷ Entre las atribuciones del Congreso Provincial se establecía que el cuerpo podía “*con la intervención del P.E. del que habla el art. 3º, cap.15, formar pactos o convenios con una o más Provincias, pero de ninguna manera concluirlos sin la anuencia y consentimiento del Congreso General de los Estados, y para obtenerlo se especificará el fin y duración de los pactos o convenios particulares*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII, ART. 6. La Constitución del año 53, por su parte, disponía que “*Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso federal*” (Art. 104).

¹⁵⁸ En la norma provincial se establecía que “*Corresponde al Congreso de la Provincia con anuencia y consentimiento del Congreso General de los Estados establecer derechos de importación y exportación al comercio interior, y al extranjero, siendo un deber de las Leyes generales de la unión el procurar uniformarlo en la libertad de toda suerte de trabas funestas a la mutua prosperidad de las Provincias Federadas*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XIII, ART. 5. Sancionada la Constitución de la Confederación en 1853, esa facultad pasó exclusivamente a manos

En el plano dogmático, es posible afirmar que en materia de declaración de derechos y garantías, o enunciación de principios, se percibe una influencia –aunque debidamente filtrada por las creencias religiosas de los constituyentes rioplatenses– de ciertos autores referentes del liberalismo francés como Mably o Constant, y del constitucionalismo revolucionario de finales del setecientos¹⁵⁹. En este exacto sentido se leen en la Constitución de la Confederación Argentina del año 1853, disposiciones ya escritas en similares términos –a veces idénticos– en el Reglamento Provisorio de Córdoba del año 1821, que a su vez habían formado parte de las disposiciones de los ensayos constitucionales patrios que lo precedieron en 1817 y 1815. El comúnmente denominado principio de reserva, presente en el Reglamento, según el cual “*Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden público; ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los Magistrados*”¹⁶⁰, tenía en el proyecto de Constitución Nacional la misma redacción, y acabó sancionándose con un agregado: “... *que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública...*”¹⁶¹. El artículo inmediatamente siguiente del Reglamento Provisorio decía lo mismo que la parte final del 19 de la Constitución Nacional: “*Ningún habitante de la Confederación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe*”¹⁶².

En ambos textos la correspondencia epistolar se declaraba inviolable, lo mismo que el domicilio personal¹⁶³. Un habitante del Estado, por los crímenes que supuestamente hubiera cometido, tenía derecho a ser juzgado por quien fuera su juez natural, esto es, el juez designado como competente por la ley con anterioridad del presunto hecho delictivo; garantía que se completaba con la prohibición de ser condenado

del cuerpo representativo federal: “*Corresponde al Congreso: Legislar sobre las aduanas exteriores, y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ellas*” (Art. 64, inc. 1).

¹⁵⁹ Para comprender la influencia en el plano jurídico-constitucional de ciertas corrientes filosóficas en el Río de la Plata, véase CHIARAMONTE, J. (1989b) *La Ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura laica durante el Virreinato*, Puntosur, Buenos Aires; TAU ANZOÁTEGUI, V. (1987) *Las ideas jurídicas en Argentina (siglos XIX y XX)*, Perrot, Buenos Aires.

¹⁶⁰ *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXIII, ART. 2.

¹⁶¹ *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 19.

¹⁶² Apenas unas ligeras modificaciones de estilo en la redacción y el obvio cambio de la palabra “*Confederación*” por otra que se refería al territorio más reducido de la Provincia: “*Ningún habitante del Estado estará obligado a hacer lo que no manda ley clara y expresamente, ni privado de lo que ella del mismo modo no prohíbe*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXIII, ART. 3.

¹⁶³ “*El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación...*”, *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 18. Por su parte, el documento cordobés, al enumerar los límites a las atribuciones del Ejecutivo establecía que el Gobernador “*No podrá absolutamente, en ningún caso, por sí solo violar o interceptar la correspondencia epistolar, la que debe respetarse como sagrada*”; más adelante, en el capítulo que contiene una declaración de derechos, se reconocía que “*La casa de un ciudadano es un sagrado que no puede violarse sin crimen, y sólo en caso de resistirse a la convocatoria del Juez podrá allanarse*”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 10 y SECC. OCTAVA, CAP. XXIII, ART. 14, respectivamente.

sin un juicio previo y sentencia fundada en la ley¹⁶⁴. Nadie estaría obligado a declarar por un delito del que supuestamente fuera autor¹⁶⁵. La finalidad enunciada de las cárceles era la seguridad, y no el castigo de los reos, reconociéndose además la responsabilidad por el daño que provocare una detención maliciosa¹⁶⁶. Se buscó garantizar el correcto desempeño de la tarea de los representantes otorgándoles inmunidad por sus opiniones y prohibiéndoles recibir empleo alguno del Poder Ejecutivo –aunque el verdadero alcance de estas disposiciones estuvo condicionado a la interpretación que las autoridades correspondientes hicieron en cada momento de la cláusula–¹⁶⁷. Toda una serie de libertades como las de tránsito, trabajo, industria y publicación de ideas por la prensa tuvieron su lugar en la superficie textual de los documentos constitucionales cordobés y nacional¹⁶⁸.

¹⁶⁴ *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 18: “Ningún habitante de la Confederación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa...”.

Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SÉPTIMA, CAP. XIX, ART. 2: “Ningún ciudadano podrá ser juzgado en causas civiles y criminales por ninguna comisión sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley”.

Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXIII, ART. 11: “Ningún habitante del Estado puede ser penado, ni confinado sin que preceda forma de proceso y sentencia legal”.

¹⁶⁵ *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 18: “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo...”.

Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXI, ART. 3: “A ningún reo se le tomará su confesión bajo juramento, sobre hecho, o delito propio”.

¹⁶⁶ *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 18: “Las cárceles de la Confederación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXI, ART. 11: “Siendo las cárceles para seguridad, y no para castigo de los reos toda medida que a pretexto de precaución, sólo sirva para mortificarlos maliciosamente será corregida por los tribunales indemnizando a los agraviados por el orden de justicia”.

¹⁶⁷ “Los representantes por sus opiniones, discursos o debates no podrán ser molestados en manera alguna; pero el Congreso podrá castigar a sus miembros por desorden de conducta y con la concurrencia de dos terceras partes, expeler a cualquiera de su seno”; “Ningún Representante admitirá cargo, empleo o comisión durante el ejercicio de su representación. Si lo admitiese, perderá ésta, a menos que sea reelegido para ella; en cuyo caso servirá el empleo por sustituto”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. QUINTA, CAP. XI, ARTS. 5 y 6.

“Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”; “Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala”, *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ARTS. 57 y 61.

¹⁶⁸ “Todo hombre tiene libertad de permanecer en el territorio del Estado, o retirarse siempre que por esto no se exponga la seguridad del país o sean perjudicados los intereses públicos”; “Ningún género de trabajo, de cultura, de industria, o de comercio, serán prohibidos a los ciudadanos de este Estado”; “La libertad de publicar las ideas por la prensa es un derecho tan apreciable al hombre, y tan esencial para la conservación de la libertad civil, como necesaria al progreso de las luces de un Estado”, *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXI, ARTS. 4, 5 y 6.

También el derecho de propiedad estaba reconocido y protegido contra las intromisiones ajenas, fueran éstas de carácter público o privado. Una larga historia de apropiación por parte de los poderes de turno llevó a los constituyentes a incorporar en los documentos fundamentales los requisitos para la procedencia de la expropiación que, aunque agravados en 1853 y planteados genéricamente como una garantía antes que una limitación al ejercicio del poder del Ejecutivo, siguieron el mismo principio¹⁶⁹. Finalmente, persiguiendo la correcta administración de justicia, con la misma eficacia en todo el territorio del conjunto de las provincias rioplatenses –cuyo estatus de soberanía relativa en el marco de la Confederación era también reconocido–, uno y otro texto recogieron disposiciones facilitando la recíproca extradición de criminales entre los estados provinciales¹⁷⁰. Otro indicio más de similitud de soluciones como resultado de la identidad de fuentes utilizadas por ambos constituyentes¹⁷¹.

Recapitulando, el recorrido atento por la letra de los textos constitucionales cordobeses, más específicamente el Reglamento Provisorio de 1821, y la Constitución Nacional de 1853, permite identificar artículos textualmente idénticos, disposiciones similares, y soluciones institucionales compartidas entre ellos. En la explicación de este fenómeno cobra especial relevancia el clima político en el que el texto cordobés fue preparado y sancionado. En un contexto como el cordobés de 1821, con un Congreso General Constituyente parcialmente reunido, el Gobernador Bustos aprovechó la sanción del Reglamento Provisorio para mostrar al resto de provincias su proyecto de

“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa...”, Constitución de la Confederación Argentina de 1853, ART. 14.

¹⁶⁹ Constitución de la Confederación Argentina de 1853, ART. 17: *“La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...”*.

En el caso del texto provincial, luego de establecerse que el Ejecutivo no podía tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, se aceptaba que *“... si en algún caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado, y se le dé el buen cambio a bien vistas de hombres buenos”*, Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 6.

¹⁷⁰ Constitución de la Confederación Argentina de 1853, ART. 8: *“La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias confederadas”*.

Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración... cit., SECC. OCTAVA, CAP. XXI, ART. ÚLTIMO: *“El Poder Ejecutivo de esta República a requerimiento de los respectivos Poderes Executivos de los otros Estados, entregará cualquiera de los reos acusados de crimen de Estado, hurto, homicidio, u otros graves que se refugiaren en esta Provincia, para que sean juzgados por la autoridad provincial a que corresponda”*.

¹⁷¹ Tanto la Constitución Federal de los Estados Unidos del año 1787 como la Constitución Federal para los Estados de Venezuela del año 1811 incluían artículos referidos a la extradición de los criminales entre estados/provincias. En el primer caso, *“A Person charged in any State with Treason, Felony, or other Crime, who shall flee from Justice, and be found in another State, shall on Demand of the executive Authority of the State from which he fled, be delivered up, to be removed to the State having Jurisdiction of the Crime”* (Article IV, Section 2); en el segundo, *“Las Provincias a requerimiento de sus respectivos Poderes Ejecutivos, se entregarán recíprocamente cualesquiera de los reos acusados de crimen de Estado, hurto, homicidio u otros graves, refugiados en ellas, para que sean juzgados por autoridad provincial a que corresponda”* (Artículo 127).

organización nacional; esa intención política explicaría la textura federal de un documento que incorporaba disposiciones poco comunes y hasta irrelevantes para un texto constitucional de carácter provincial.

Esta vocación de los constituyentes cordobeses los habría impulsado a buscar modelos de organización constitucional que previeran estrategias de distribución de competencias entre órdenes de gobierno de distinto nivel, separados y superpuestos, y de interrelación entre sujetos políticos de la misma entidad, compartiendo un gobierno común. En ese mismo derrotero debieron vagar los constituyentes reunidos en Santa Fe para diseñar la Constitución de la Confederación. De allí que unos y otros hayan recaído, directa o indirectamente, en las mismas fuentes normativas y doctrinales para desarrollar su tarea¹⁷². La explicación propuesta, que ubica a autores y textos dentro de un mismo contexto cultural de producción y de sentido, aporta una hipótesis de comprensión del fenómeno descrito. Por otro camino, la alternativa sería caer en la falacia de afirmar que, sólo por precederle en el tiempo, el Reglamento provincial fue la causa o fuente directa de las disposiciones contenidas en la Constitución de la Confederación Argentina de 1853¹⁷³.

III. LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DE 1855

III. 1. La necesaria adaptación de Córdoba a la Constitución de 1853

La Constitución Nacional de 1853 implicó la necesidad de adaptar las Constituciones Provinciales. En Córdoba, la reescritura del texto constitucional venía operando, sin embargo, desde los años anteriores. El texto de 1847 había comenzado a sufrir modificaciones inmediatamente después de su sanción. A la historia ya contada acerca de los cambios introducidos hasta 1849 por el propio Poder Ejecutivo antes de la

¹⁷² En este sentido, como se adelantó, es posible filiar los textos constitucionales bajo análisis con la Constitución de los Estados Unidos de 1787, la Constitución Federal para los Estados de Venezuela del año 1811, los proyectos de tinte federal presentados ante la Asamblea Constituyente del año 1813, entre otras. Por su parte, se ha dicho que un texto doctrinal como el de Thomas Paine, *La independencia en costa firme*, en su versión española preparada por Manuel García de Sena, obra que contenía además un largo anexo incluyendo textos constitucionales de algunos estados norteamericanos como Massachusetts y Virginia, sirvió tanto a los cordobeses Baigorri y Allende, como al tucumano Juan Bautista Alberdi que a través de su obra *Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina*, iluminó a los redactores de la Constitución Nacional de 1853, cfr. MELO, C. (1950) *Constituciones de la Provincia de Córdoba*, Imprenta de la Universidad, Córdoba, y ROSA, J. (1943) Ob. cit., respectivamente.

¹⁷³ La historiografía constitucional, argentina y cordobesa, con su regular apología de los textos locales y abordaje selectivo de los fenómenos constituyentes, ha caído en afirmaciones del tipo “Córdoba expresa en 1821 la fórmula del acierto de la forma de estado federal argentino 32 años antes que la consagrara la Constitución Nacional de 1853”, SEGRETÍ, C. (1995) *Federalismo rioplatense y Federalismo Argentino (El federalismo de Córdoba en los comienzos de la época independiente, 1810-1829)*, Centro de Estudios Históricos, Córdoba, p. 148; “Se puede decir que las *Instrucciones* de Artigas a sus representantes en la Asamblea del año 13 y este *Reglamento Provisorio* de Bustos, son los dos principales antecedentes argentinos de nuestro federalismo, que siguió en su espíritu y en su letra la Constitución del 53”, DÍAZ DE MOLINA, A. (1958) “La constitución cordobesa de 1821 y su influencia institucional”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, pp. 90-91; la narrativa puede llegar a ser más radical, “en nuestro glorioso año 20, los argentinos teníamos ya nuestra Constitución del 53”, Ídem, p. 92.

promulgación oficial del texto, se fueron sumando algunas reescrituras que trocaron la voluntad original de los constituyentes. En el año 1852, luego de derrocado Manuel López y antes de que asumiera el cargo en calidad de propietario el Doctor Alejo Carmen Guzmán, el Congreso Provincial sancionó la primera ley sobre elección del titular del Ejecutivo. En la disposición, se abordaba una cuestión que siempre había enfrentado a Gobernadores y Legislaturas como era la fijación de la renta anual que debía percibir el “*Gobernador y Capitán General de la Provincia*” y de los fondos públicos de libre disponibilidad para gastos extraordinarios¹⁷⁴. Sin embargo, la decisión más grave fue la de reducir a tres años el período de su mandato y prohibir –absolutamente– la reelección del mismo sujeto hasta tanto hubieran transcurrido dos períodos gubernativos desde su último gobierno. La experiencia política más reciente, cargada de perpetuación y nepotismo, condicionó a los legisladores para decidir inhabilitar también para ser electos, por igual tiempo, a los parientes más cercanos del Gobernador saliente; como garantía, se declaraba nula la resolución del cuerpo legislativo que desconociera tales prohibiciones y se ordenaba la inmediata disolución del Congreso que pretendiera autorizarlo¹⁷⁵.

En ese mismo clima de reestructuración institucional, a principios del mes de diciembre del año 1852 el Congreso Provincial sancionó una ley orgánica creando la Cámara de Justicia¹⁷⁶. Según la norma, estaría compuesta por cinco letrados –tres mientras la matrícula de abogados fuera tan baja¹⁷⁷– nombrados en lo sucesivo con intervención de la propia Cámara, el Gobernador y el Congreso Provincial, mayores de 25 años, con una duración limitada de su mandato. Además de los ministros de ella, se nombrarían también tres jueces de 1ª instancia, dos en materia civil –*Jueces de 1ª Instancia*– y uno para causas criminales –*Juez del Crimen*–. Toda una serie de auxiliares de la justicia tales como Relator, Agente Fiscal, Escribanos, Alguacil, Procuradores de número y Defensor General de Pobres y Menores, serían nombrados por la misma Cámara. Su competencia general eran “*todos los negocios Civiles, Criminales, de*

¹⁷⁴ “*Ley sobre elección de Gobernador. Córdoba, Junio 27 de 1852. Artículo 1º – El Gobernador y Capitán General de la Provincia gozará en lo sucesivo del sueldo de tres mil pesos anuales sin que tenga derecho á otro emolumento ó subsidio so pretesto alguno [...] Art. 5º – El Gobernador y Capitán General de la Provincia podrá disponer de la cantidad de dos mil pesos anuales de los fondos públicos para gastos extraordinarios; y si por acontecimientos imprevistos precisa más, deberá pedirlo á la H.S., debiendo en tal caso, dar cuenta anual justificada de su inversión á la misma H.S.*”, en *Compilación de leyes...* cit., p. 236.

¹⁷⁵ “*Art. 2º – Su permanencia en el mando durará el tiempo de tres años, y no podrá ser reelegido en ningún caso, sin que haya transcurrido el intervalo de dos períodos gubernativos contados desde su descenso. Art. 3º – Si se contraviniese el artículo anterior, será nula la resolución; el cuerpo legislativo que lo hiciere, quedará disuelto por este hecho, y el pueblo en actitud de usar de sus derechos. Art. 4º – No podrá ser elegido Gobernador ningún pariente del Gobernador saliente dentro de cuarto grado de consanguinidad, ó dentro del segundo de afinidad, sin que pasen dos períodos gubernativos desde el descenso del pariente saliente*”, en ídem.

¹⁷⁶ El texto completo de la norma, compuesta por 35 artículos, puede consultarse en *Compilación de leyes...* cit., pp. 249-252.

¹⁷⁷ El número de abogados hábiles en la Provincia hacia finales del año 1852 era de tan sólo veintidós, cfr. MELO, C. (1950) Ob. cit., p. XLIII.

*Hacienda, de Comercio y de Minas, seguidos ante el inferior inmediato en grados*¹⁷⁸.

A pesar del empeño del Gobernador Guzmán para fortalecer e independizar la administración de justicia, puso sus reparos a la ley sancionada por la Sala de Representantes y la devolvió al cuerpo para su reconsideración. Mientras tanto, siguió haciéndose cargo de las funciones de Tribunal de Apelaciones tal como lo establecía el Código Constitucional¹⁷⁹. Ahora bien, la imperiosa necesidad de creación del Tribunal continuaba; el principio político de la división de poderes y el objetivo de una mejor y más rápida administración de justicia así lo aconsejaban, no sólo “*por el bien general de la Provincia para su completa organización en el más libre y espedito ejercicio de sus funciones de los tres altos poderes*”, sino también por los muchos inconvenientes que aquella práctica acarrearba al Ejecutivo, interrumpiendo “*la acción del Gobierno en las multiplicadas atenciones que le rodean de interés público*”¹⁸⁰. Administrar y juzgar iban definiéndose como dos dimensiones del poder político cuyo ejercicio no podía continuar unificado, más por razones de eficiencia que de garantía de derechos¹⁸¹. Fue, precisamente, por estas razones que, no obstante estar pendiente la reconsideración de la ley, “*el grave perjuicio público que proviene de su retardación*” impulsó al Gobernador a dictar un decreto creando un “*Tribunal de Apelaciones y Cámara de Justicia*” para el que se nombraban como vocales a los señores Dres. Félix Olmedo, Julián Gil y Manuel Lucero¹⁸².

Es muy interesante considerar los fundamentos normativos que esgrimió el titular del Ejecutivo para justificar su decisión, exponiendo su visión –y la de su grupo– sobre el orden constitucional. En primer lugar, apeló a “*la ley Provincial comprendida en el capítulo 17 del Reglamento Provisorio de 1821*” donde “*se halla previsto y dispuesto cuanto es concerniente á la creación de la Cámara de Justicia, sus atribuciones y demás que al presente se precisa para su nombramiento*”¹⁸³. Ese material normativo establecería el marco dentro del cual se erigiría y funcionaría el nuevo tribunal¹⁸⁴. Sin embargo,

¹⁷⁸ Artículo 22 de la ley de creación de la Cámara de Justicia, en *Compilación de leyes...* cit., p. 251.

¹⁷⁹ La disposición que así lo establecía pertenecía al capítulo sobre los límites al poder ejecutivo: “*Aconsejado de su Asesor continuará como al presente, ejerciendo las veces del Tribunal superior de apelaciones, mientras tanto se forme la Suprema Cámara de Justicia*”, *Código Constitucional Provisorio...* SECC. SEXTA, CAP. XVI, ART. 1º.

¹⁸⁰ *Compilación de leyes...* cit., p. 275.

¹⁸¹ Para un análisis teórico sobre esta distinción, véase MANNORI, L. (2007) “Justicia y Administración entre antiguo y nuevo régimen”, en *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, Nro. 15, pp. 125-146.

¹⁸² El decreto de creación del Superior Tribunal de Apelaciones y Cámara de Justicia del día 26 de noviembre de 1853 puede consultarse en *Compilación de leyes...* cit., pp. 275-276.

¹⁸³ *Compilación de leyes...* cit., p. 275. Ese capítulo XVII no era más que la enunciación de los órganos que formarían el Poder Judicial y la declaración de su independencia respecto del Poder Ejecutivo. En realidad, es el capítulo XVIII del Reglamento Provisorio el que en sus artículos 4 a 21 establecía todo lo relativo al funcionamiento del Tribunal de Apelaciones.

¹⁸⁴ Así lo disponía el artículo 3 del decreto de creación: “*Para el despacho del Tribunal y el servicio económico del mismo, se arreglará a lo dispuesto por el capítulo 18 del Reglamento Provisorio de la*

aquellas disposiciones habían sido reemplazadas hacía ya tiempo por el Código Constitucional Provisorio del año 1847, por ello, el segundo movimiento de Guzmán fue justificar su supuesta vigencia en el ordenamiento cordobés, argumentando que no habían sido “especialmente revocadas por ninguna ley posterior”¹⁸⁵. La afirmación del Gobernador era falsa. Ya se ha visto que una de las características que diferenciaron a la Constitución de 1847 del Reglamento de 1821 fue precisamente eso que el decreto desconocía: la inclusión de una cláusula en el texto constitucional ordenando la abolición del Reglamento de 1821¹⁸⁶. Sin embargo, esto no pareció ser un obstáculo para que en esta oportunidad, como en otras, se echara mano del viejo documento constitucional como si de una verdadera fuente formal de derecho se tratara. Y aquello era posible, sin contradicciones, porque la textura del orden jurídico aún se parecía en gran parte al modo en que tradicionalmente se habían entramado las disposiciones normativas¹⁸⁷. La nueva ley, casi idéntica a la que había sido observada por Guzmán, acabó sancionándose el 24 de marzo del año 1855 y la administración de justicia arreglándose a sus disposiciones¹⁸⁸.

El proceso de construcción estatal estaba indisolublemente ligado a la creación de un espacio unificado donde el comercio pudiera desarrollarse sin trabas. Para que esto fuera posible, es decir, para que tuviera lugar la erección de un mercado común, era preciso que los múltiples derechos aplicados al tránsito de mercaderías, o a la introducción de productos provenientes de una provincia en el mercado local de otra, fueran progresivamente eliminados para facilitar la integración¹⁸⁹. Con la intención de “mejorar la condición del comercio interior y reciproco de las diversas provincias argentinas”, los Gobernadores firmantes del Acuerdo de San Nicolás habían estipulado “que los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie que pasen por el territorio de una Provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en

Provincia dado en 1821, hasta tanto que por el Poder Legislativo se dé la ley reglamentaria sobre la administración de justicia”, *Compilación de leyes...* cit., p. 276.

¹⁸⁵ Ídem, p. 275.

¹⁸⁶ *Código Constitucional Provisorio...* SECC. OCTAVA, CAP. XIX, ART. 3: “Queda abolido el Reglamento Constitucional provisorio, sancionando en el año de mil ochocientos veinte y uno”. Sobre las consecuencias de una disposición como esa en el texto constitucional, véase GARRIGA, C. (2007a) “Constitución política y orden jurídico: el efecto derogatorio de la Constitución de Cádiz”, en GARRIGA, C. y LORENTE, M., *Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, cit., pp. 119-168.

¹⁸⁷ A modo de ejemplo de lo que acaba de decirse, el día 24 de febrero de 1853 se derogó el artículo 3 del Cap. XI del Código Constitucional Provisorio que decía: “La Sala de RR. se renovará por terceras partes completamente cada tres años, y particularmente cada año, siendo los dos primeros tercios removidos por la suerte”; y se reestableció la vigencia del derogado artículo 3 del Cap. XI del Reglamento Provisorio del año 1821 que rezaba: “El tiempo de su duración será el de cuatro años: se renovarán por mitad cada dos años y los que han de salir en el primer vienio decidirá la suerte”, según *Sanción de la H. Representación sobre la reunión del cuerpo Legislativo*, *Compilación de leyes...* cit., p. 256.

¹⁸⁸ *Compilación de leyes...* cit., pp. 326-328.

¹⁸⁹ Sobre la política cordobesa en materia de “comercio exterior” durante toda la primera mitad del siglo XIX véase ROMANO, S. (2002) *Economía, Sociedad y Poder en Córdoba. Primera mitad del siglo XIX*, Ferreyra Editor, Córdoba.

*que se transporten: y que ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio*¹⁹⁰. Cumpliendo con ese mandato, la Sala de Representantes cordobesa derogó todas las leyes y decretos que imponían ese tipo de derechos¹⁹¹.

Consecuencia de la misma vocación, y en cumplimiento del Estatuto para la organización de la Hacienda y crédito público de la Confederación, fue la sanción del decreto del 2 de enero de 1854 declarándose desde el día anterior “*suprimida la Aduana de la Provincia, quedando libre de derechos de introducción todos los artículos de comercio que se introducen á la Provincia despachados en los puertos de la Confederación*”¹⁹². En la misma sintonía facilitadora del tránsito y la integración territorial de la Federación, es posible filiar otra resolución, inspirada en el artículo 14 de la Constitución Federal de 1853 (que acordaba a los habitantes de la Confederación el derecho de navegar, entrar, permanecer, transitar y salir libremente del territorio argentino): la abolición “*en el territorio de la Provincia [del] derecho del pasaporte y licencias que antes se pagaban para salir o transitar por esta Provincia*”¹⁹³. Sin embargo, la retórica normativa seguía condicionada por un orden acumulativo de disposiciones –vigentes– que operaba como límite a las libertades. Tanto el Reglamento de Administración de justicia en la campaña del año 1823, como su reescritura de 1856, seguían depositando en cabeza de los patrones la emisión de “una papeleta o pasaporte” para evitar que los peones se fugaran¹⁹⁴.

Una de las decisiones más emblemáticas, adoptada con el objeto de ampliar –al menos en un aspecto– la población de sujetos titulares de derechos, eliminando distinciones “de linaje”, fue la de ordenar la ampliación de la admisión de jóvenes en la Universidad de San Carlos¹⁹⁵. De a poco, la sociedad cordobesa ajustaba sus normas al nuevo orden constitucional. La nueva retórica de los derechos quedó definitivamente

¹⁹⁰ Acuerdo de San Nicolás. Artículo 3°.

¹⁹¹ “¡Viva la Confederación Argentina! Córdoba, Julio 6 de 1852. El Gobernador y Capitán General de la Provincia, De conformidad á lo convenido en la resolución 3ª del Acuerdo [de San Nicolás de los Arroyos]... ACUERDA y DECRETA: Art. 1º Quedan sin ningún valor ni efecto los derechos establecidos por leyes y decretos anteriores á las tropas de carretas, arrias y ganados de toda especie que transiten por el territorio de esta Provincia, ó que se conduzcan efectos, productos de industria nacional ó extranjera de una para otra cualquiera de las Provincias Confederadas. Art. 2º Quedan asimismo sin derecho alguno los carruajes, bueyes o bestias en que se transporten dichos productos y artículos de comercio nacional ó extranjero”, en *Compilación de leyes...* cit., p. 239.

¹⁹² *Compilación de leyes...* cit., pp. 281-282.

¹⁹³ *Compilación de leyes...* cit., pp. 305-306. La norma era consecuencia directa del decreto firmado por el Ministro del Interior de la Confederación, Juan María Gutiérrez, según el cual quedaba “*abolido el uso del pasaporte para entrar y transitar en el territorio de la Confederación Argentina, así como para salir de él ya sea por tierra ó por agua*”, en ídem, p. 305.

¹⁹⁴ Cfr. AGÜERO, A. (2011a) “Tradición jurídica y derecho local en época constitucional. El Reglamento para la Administración de justicia y policía en la campaña de Córdoba, 1856”, en *Revista de Historia del Derecho*, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Nro. 41, pp. 1-43.

¹⁹⁵ “Sala de sesiones, Córdoba, Noviembre 3 de 1852. La H. Sala de Representantes ha sancionado en sesión de ayer lo siguiente: Art. único. La educación pública que en la universidad mayor de San Carlos se dá a la Juventud, es franca para todos sin distinción de linaje”, en *Compilación de leyes...* cit., p. 247.

impuesta en el lenguaje político con la jura de la Constitución Nacional. Meses más tarde, un decreto del Gobernador de la Provincia de Córdoba reconocía las consecuencias de dicha imposición: *“Hallándose dispuesto por el art. 15 de la Constitución que desde su publicación quedan libres todos los esclavos existentes en el territorio argentino, acordándose á los amos una indemnización que será reglada por una ley especial...”* se establecía que *“Ningún ciudadano podrá retener á otro en su poder á título de esclavo”*¹⁹⁶.

III. 2. La Constitución Provincial de 1855 y su derrotero en el Congreso Nacional

No sólo el marco político-constitucional erigido en la Confederación a partir de la sanción del texto federal de 1853 obligaba a revisar las disposiciones constitucionales contenidas en el Código Provisorio cordobés de 1847. Una auténtica obligación federal cayó sobre la Provincia luego de que el Congreso Nacional sancionara una ley a finales del año 1854 fijando un término fatal de ocho meses para que cada provincia de la Confederación dictara su propia constitución¹⁹⁷. De acuerdo a la norma nacional, los textos provinciales serían revisados por el Congreso Nacional antes de su promulgación para comprobar que estuvieran en todo de acuerdo con los principios y disposiciones del documento federal¹⁹⁸.

El ex constituyente Juan María Gutiérrez, en su calidad de Ministro del Interior de la Confederación Argentina, envió una circular a todos los Gobernadores adjuntando la ley sancionada por el Congreso, conminando a las provincias a cumplir con su obligación de dictar una Constitución que, preferiblemente, debía ser *“la obra de una convención reunida especialmente a aquel efecto... numerosa y compuesta de todas las clases de la sociedad, de todos los colores políticos, porque es indispensable que tengan en aquel caso representación todos los intereses y todas las opiniones, a fin de que estos grandes auxiliares de la autoridad estén siempre de parte de la Constitución e interesados en su*

¹⁹⁶ Aunque el lenguaje ya había asumido nuevos parámetros, la reglamentación del principio tan radicalmente declarado por los constituyentes demoró un poco la modificación de la realidad. El propietario de esclavos tenía un plazo para presentarse junto a sus esclavos en el Departamento de Policía exhibiendo sus títulos legítimos de propiedad (en la campaña el plazo se ampliaba aún más); en esa oportunidad, el Jefe de Policía entregaba al *“amo”* un certificado donde constaba su derecho a indemnización, en *Compilación de leyes...* cit., p. 260.

¹⁹⁷ Así lo establecía la Ley Nro. 9 dictada el 29 de noviembre por el Congreso Nacional. El proceso de revisión de las Constituciones provinciales en el Congreso de la Nación ha sido analizado por LANTERI, A. (2011) *“Las provincias en un ámbito de poder institucionalizado. El congreso de Paraná en la Confederación, 1854-1861”*, en *Estudios Sociales*, Nro. 41, Universidad Nacional del Litoral, pp. 69-95.

¹⁹⁸ Artículo 5 de la *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*: *“Cada Provincia Confederada dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria gratuita. Las constituciones provinciales serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación”*.

existencia y cumplimiento”¹⁹⁹. Pese a la indicación del reconocido jurista, y a un proyecto de ley presentado en ese sentido por los diputados Zavalía y Cáceres, en uso de su potestad soberana no delegada, el Congreso de la Provincia de Córdoba decidió erigirse él mismo en asamblea constituyente y ponerse en la tarea de redactar y sancionar una nueva Constitución. El nuevo escenario nacional parecía no haber calado hondo en la posición predominante del Legislativo provincial.

El Gobernador Guzmán intimó en reiteradas ocasiones a la Sala para que se entregara de lleno a la obra constituyente y cumplir así con la obligación de dictar la Constitución, asunto que el Gobierno Nacional recomendaba insistentemente en despachar con brevedad. Una vez reinstalada la nueva Legislatura, se decidió el encargo de la tarea a la comisión de negocios constitucionales que quedó conformada por los representantes Fernando Zavalía, Rafael García, Clemente Villada, Manuel Lucero y Gerónimo Yofre, nómina ampliada días más tarde con la incorporación de Félix de la Peña y Fenelón Zuviría²⁰⁰. El proyecto preparado por ellos tuvo entrada en la Sala —que había mutado a estos efectos en Asamblea Constituyente— el día 8 de junio y dos meses más tarde, el 16 de agosto de 1855, se terminó de sancionar la nueva Constitución de la Provincia de Córdoba²⁰¹.

Elevado el texto ante el Congreso Nacional para su aprobación, según lo establecía la Constitución Federal, una comisión fue la encargada de estudiar el documento cordobés y emitir un dictamen sobre la procedencia —o no— de su aprobación²⁰². El despacho de la comisión fue tratado por la Cámara alta del Congreso, el 1º de septiembre de 1855. En su opinión, los senadores aconsejaron su aprobación con excepción de algunas disposiciones específicas “*por cuanto se desviaban de las prescripciones de la Constitución Nacional, y a más porque las dos últimas disposiciones complicaban a los poderes federales en objetos de administración puramente provincial*”²⁰³. Había formulaciones del texto sancionado por Córdoba que contrariaban principios generales de la norma de 1853 o directamente sobrepasaban el espacio de decisión reservado a la soberanía provincial. En concreto, se rechazaba el agravamiento de los requisitos exigidos para el ejercicio del sufragio activo que, además de un cierto nivel económico, exigía “*saber leer y escribir*”; la calidad de “*Capitán General de la Provincia*” atribuida al titular del Ejecutivo; los términos en los que el Gobernador era responsable y podía ser acusado ante la Cámara de Diputados a efectos de instar el juicio

¹⁹⁹ Fragmento de la Circular enviada por Gutiérrez a los Gobernadores de Provincia fechada el 11 de diciembre del año 1854, en MELO, C. (1950) Ob. cit., p. XLVII.

²⁰⁰ LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ACTAS DE SESIONES, *Sesión del 28 de marzo de 1855...* o MELO, C. (1950) Ob. cit., p. XLVIII.

²⁰¹ En el ínterin, el 17 de junio de 1855 la Sala de Representantes de la Provincia había elegido como Gobernador propietario para suceder a Guzmán al ciudadano Roque Ferreyra, cfr. LEGISLATURA... *Sesión del 17 de junio de 1855*, pp. 201-208. El texto completo de la Constitución puede consultarse en *Compilación de leyes...* cit., pp. 356-368.

²⁰² LANTERI, A. (2011) Ob. cit.

²⁰³ MELO, C. (1950) Ob. cit., pp. LII-LIII.

político; y la designación de la Corte Suprema como tribunal competente para entender en las acusaciones contra la Cámara de Justicia provincial; en esos términos fue aprobada la Constitución²⁰⁴.

La Sala de Representantes pasó el texto al Ejecutivo provincial para su correspondiente publicación y juramento según el artículo 77 del mismo, aclarando que *“los artículos que se sustituyen en lugar de los desechados por las Cámaras Legislativas de la Nación, serán remitidos en oportunidad para su aprobación: obtenida ésta, y publicados en la Provincia, formarán parte de la Constitución”*²⁰⁵. Llamativa esta resolución de ordenar se jurara un documento incompleto que sería alterado en el corto plazo con la nueva redacción de las disposiciones observadas por la Nación. Es que, como dijo un representante durante el debate, *“era más urgente que se jurase la Constitución que el que se sustituyese”*²⁰⁶. Sin embargo la dilación no fue tal, ya que en la misma sesión, pese a la crítica de uno de los representantes de haberse invertido el orden de discusión de los proyectos de ley, se presentó la propuesta preparada por la comisión de negocios constitucionales para la sustitución de los artículos en cuestión. El proyecto consistía en desechar de plano uno de los artículos –aquél que denominaba al Gobernador como Capitán General–, eliminar sólo la parte final de otro –sobre los requisitos de propiedad y alfabetización exigidos para ejercer el sufragio activo–, y la alteración de dos de los artículos en la parte referida a las competencias exigidas por Córdoba a los órganos nacionales –Congreso y Suprema Corte–²⁰⁷.

²⁰⁴ En la sesión del 9 de octubre ingresó a la Legislatura una nota del Gobernador de Córdoba acompañando una copia legalizada de la ley sancionada por el Congreso de la Nación: *“El Senado y Cámara de Diputados de la Confederación Argentina, etc., reunidos en Congreso sancionan con fuerza de ley. Art. 1º- Apruébase la Constitución de la Provincia de Córdoba, sancionada por su Convención Constituyente, en 16 de Agosto del año del Señor mil ochocientos cincuenta y cinco. Art. 2º- Se exceptúan de la aprobación anterior las siguientes disposiciones: 1º- El art. 16 en la parte que dice «una propiedad ó profesión que asegurase una renta anual de cien pesos al menos, y saber leer y escribir, después de cinco años de promulgada esta Constitución». 2º- La atribución trece del art. 52 que dice: «Es el Capitán General de la Provincia». 3º- La restricción 8ª del mismo artículo que dice: «el Gobernador es responsable y puede ser acusado conforme á lo prescripto en el art. 41 de la Constitución Nacional por la Legislatura Provincial, por cualquier ciudadano ó por parte ofendida, por acto en que hubiere violado ó dejado sin ejecución la Constitución, ó las leyes nacionales, la Constitución ó leyes provinciales; por crimen de concusión, defraudación y por incuria culpable en el cumplimiento de sus deberes. Las quejas serán presentadas á la Cámara de Diputados de la República, para declarar si hay lugar á la formación de causa y acusación ante el Senado de la Nación, quedando el acusador responsable conforme á las leyes». 4º- La primera parte del artículo 66 que dice «cualquiera acusación contra la Cámara de Justicia, por los delitos á que se refiere el artículo anterior, deberá interponerse ante la Suprema Corte»”, en LEGISLATURA... Sesión del 9 de octubre de 1855, pp. 410-411.*

²⁰⁵ *Compilación de leyes...* cit., p. 368.

²⁰⁶ LEGISLATURA... cit., Sesión del 18 de octubre de 1855, p. 426.

²⁰⁷ *“La H. Asamblea Constituyente ha sancionado con valor y fuerza de ley lo siguiente: Art. 1º- En sustitución de la restricción 8ª del art. 52, corresponde á la Asamblea Provincial, tomar en consideración de oficio ó a queja de parte, de la conducta pública del Gobernador, por los siguientes delitos, siempre que sean de carácter provincial: traición, violación de la Constitución, concusión, malversación de los fondos públicos ú otros que merezcan pena de muerte ó infamia. Este juicio que deberá ser público y previo juramento individual de obrar con justicia, no tendrá más efecto que la suspensión del acusado; quedando no obstante sujeto á juicio, castigo ó vindicación, conforme á las leyes y ante los tribunales ordinarios. La*

Acordada la continuación de la Sala hasta tanto se jurara la Constitución –a pesar del vencimiento de los mandatos vigentes– con la finalidad de que los nuevos representantes fueran nombrados como resultado de elecciones celebradas bajo el imperio de la nueva norma fundamental, el 25 de octubre pudo finalmente establecerse que se tuviera por “*ley fundamental de la Provincia*” la norma constitucional provincial “*sancionada por la H. Asamblea de RR. y aprobada por las Cámaras Legislativas de la Confederación*”²⁰⁸. El 14 de noviembre de 1855, el Gobernador dictó un decreto estableciendo el día y, más detalladamente, el modo en que debía llevarse a cabo el solemne juramento de la nueva Constitución de la Provincia incluyendo el *Te Deum* en acción de gracias “*al Ser Supremo*”²⁰⁹. Siguiendo la indicación de la propia Legislatura que había extendido su mandato, se realizaron las elecciones correspondientes en toda la Provincia, y el día 13 de diciembre de 1855 el “*Gobernador proclamó instalada la Asamblea Legislativa*” en los términos establecidos por el texto constitucional²¹⁰.

III. 3. ¿Un nuevo texto para un nuevo tiempo?

El texto constitucional de 1855 fue sancionado en el marco de una nueva organización política y constitucional de las provincias rioplatenses, y bajo los cánones de la cultura jurídica que la nueva Constitución Federal imponía²¹¹. Su estructura era muy

suspensión sólo será sancionada con diez y seis votos uniformes al menos; y en el caso de suspensión al Gobernador de la Provincia, por el tiempo que ella dure ocupará este destino el Presidente de la Cámara de Justicia. Art. 2º. En sustitución de la primera parte del art. 66. «Cualquiera acusación contra dos ó más miembros de la Cámara de Justicia, por los delitos á que se refiere el art. 65, deberá interponerse ante un Tribunal compuesto de nueve jueces elegidos el 1º de Mayo de cada año, y en la forma siguiente: 3 por la Asamblea, 3 por el P.E., y 3 por la Municipalidad de la capital; esta elección se hará por la Asamblea y Municipalidad á pluralidad de votos pudiendo ser recusados previa justificación de causa legítima en cuyo caso los jueces recusados se reemplazarán del mismo modo que fueron elegidos», en ídem.

En la sesión siguiente, se agregó un supuesto más al nuevo artículo 66: “*Interpuesta acusación contra uno solo de los miembros de la Cámara de Justicia, conocerá de ella la misma Cámara integrada por el Ministro Fiscal y los dos Jueces de 1ª Instancia y por impedimento de alguno ó más de estos, serán llamados el Agente Fiscal y Abogados de la matrícula en igual número á todos los impedidos*”, en LEGISLATURA... cit., Sesión del 20 de octubre de 1855, p. 431.

²⁰⁸ *Compilación de leyes...* cit., p. 368. El texto –alterando las disposiciones que habían sido observadas– fue parcialmente objetado de nuevo por el Congreso Nacional. Tuvo entrada a la Cámara de Senadores en septiembre del año 1857, pasó a la Cámara de Diputados al año siguiente y allí se declaró inconstitucional la restricción establecida según el nuevo art. 52, inc. 8. Vuelta al Senado para su aprobación, acabó convirtiéndose en ley, con la eliminación mencionada, el 5 de julio de 1859, MELO, C. (1950) Ob. cit., pp. LVII-LVIII.

²⁰⁹ *Compilación de leyes...* cit., pp. 369-370. El 30 de noviembre de 1855, día designado para la ceremonia de jura, fue declarado por decreto como “*fiesta cívica*”, cfr. *Compilación de leyes...* cit., p. 371.

²¹⁰ LEGISLATURA... cit., Sesión del 13 de diciembre de 1855, p. 437.

²¹¹ “La nueva Constitución tuvo como fuentes principales a la Constitución mendocina de 1854 y al proyecto de Constitución preparado para la provincia de Mendoza por Juan Bautista Alberdi (1854), quien a su vez había utilizado como fuentes diversas leyes constitucionales de la provincia cuyana y la Constitución chilena de 1833, modelos de los cuales la Constitución cordobesa de 1855 se apartó en muy pocas disposiciones”, GILETTA, J. (2000) “Apuntes para una evolución histórica del constitucionalismo en

similar a la de los antecedentes constitucionales de la Provincia; un poco más breve que aquéllos, constaba de apenas 81 artículos repartidos a lo largo de once secciones sin subdivisiones en capítulos²¹². Una innovación respecto de esos mismos antecedentes fue el brevísimo preámbulo que la precedía, fragmento que, si bien no era una declaración genérica de principios políticos y antecedentes materiales como en el texto federal, hacía mención a una de las características sobresalientes del sistema de gobierno federal adoptado por la Confederación: las provincias conservaban toda potestad soberana no delegada expresamente al Gobierno Federal por medio de la Constitución Nacional²¹³.

Al igual que el resto de textos provinciales sancionados en virtud del nacional, la Constitución de Córdoba ratificó los principios políticos establecidos en la Constitución de 1853. Declaró los mismos derechos y garantías allí contenidos y organizó una similar estructura de poderes basada en el sistema representativo y republicano que también se confirmaba²¹⁴. El halo republicano se hacía notar incluso en disposiciones que iban más allá de las que organizaban los poderes, como la que acababa con la posibilidad de otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder público, algo también establecido por la Constitución Nacional²¹⁵. Una explícitamente reconocida “*soberanía provincial*” residía en el pueblo de la Provincia, y era ejercida –en la parte no delegada a

Córdoba (Siglos XIX y XX)”, en Cuadernos de Historia, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Nro. 10, pp. 151-193, p. 158.

²¹² *Constitución para la Provincia de Córdoba de 1855*; SECCIÓN I, De la Provincia, su territorio y culto; SECCIÓN II, Disposiciones generales; SECCIÓN III, Forma de gobierno; SECCIÓN IV, Del Poder Legislativo; SECCIÓN V, De la formación y sanción de las leyes; SECCIÓN VI, De la comisión permanente; SECCIÓN VII, Del Poder Ejecutivo; SECCIÓN VIII, Del Poder Judicial; SECCIÓN IX, Del Poder Municipal; SECCIÓN X, De la reforma de esta Constitución; SECCIÓN XI, Disposiciones generales, en *Compilación de leyes...* cit., pp. 356-368.

²¹³ El preámbulo se limitaba a exponer que “*Nos los Representantes de la Provincia de Córdoba, reunidos en Asamblea Constituyente y en ejercicio del poder no delegado al Gobierno Nacional, decretamos y sancionamos la siguiente CONSTITUCIÓN*”, *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., PREÁMBULO.

²¹⁴ “*La Provincia confirma y ratifica el principio de Gobierno republicano representativo...*”; “*Todos los habitantes de la Provincia de Córdoba, gozan en ella de los derechos y garantías que la Carta Fundamental en su parte 1ª, capítulo único, otorga á favor de todos los habitantes de la Confederación...*”, *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., SECC. II, ARTS. 4 y 5, respectivamente. El texto cordobés no contenía un apartado dedicado exclusivamente a los derechos, la referencia genérica al texto nacional arriba mencionada, era la disposición que establecía la vigencia de tales derechos en la Provincia. Sólo unos pocos artículos desparrramados a lo largo del documento reafirmaban el reconocimiento de ciertas garantías como que “*toda sentencia debe ser fundada en ley promulgada antes del hecho del proceso*” (SECC. VIII, ART. 71) o “*siendo la correspondencia epistolar, un sagrado que nadie puede violar sin hacerse reo contra la seguridad personal y primordiales derechos del hombre, no podrá servir en juicio la correspondencia y papeles sustraídos*” (SECC. VIII, ART. 68).

²¹⁵ “*Ninguna autoridad de la Provincia es extraordinaria. Todas son esencialmente limitadas por esta Constitución; y ninguna ley podrá darse que sea contraria ó derogatoria de sus disposiciones*”, *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., SECC. II, ART. 8. La Constitución Nacional también había regulado categóricamente el fenómeno que había sido corriente durante la primera mitad del siglo: “*El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria*”, *Constitución de la Confederación Argentina de 1853*, ART. 29.

la Nación— por los poderes “*Legislativo, Ejecutivo y Judicial*”²¹⁶.

A cargo del primero de aquéllos, una Asamblea Legislativa de veinticinco Diputados, designados por elección directa y en representación de los distintos Departamentos en que estaba dividida la Provincia²¹⁷. Tanto la elección directa de los representantes como la representación territorial de cada departamento, eran novedades que modificaban radicalmente la ingeniería electoral cordobesa. El cuerpo legislativo resultante de unas elecciones de tal carácter tendría una conformación más plural y compleja que los anteriores; es que, el abandono de las elecciones indirectas de dos y tres grados implicaba una expectativa de mayor representatividad del nuevo Poder Legislativo. Además, por primera vez se incluía en la Constitución toda una sección dedicada a la “*formación y sanción de las leyes*”, afirmando simbólica y materialmente el carácter y naturaleza de ese tipo de normas en el nuevo orden²¹⁸.

Un Gobernador, que duraba tres años en su cargo sin posibilidad de reelección inmediata, electo nominalmente por una Asamblea especial —*concurrente*— en la que formaban parte los miembros titulares de la Legislatura y veinticinco electores más designados específicamente para la ocasión, era el responsable del Ejecutivo²¹⁹. Finalmente, el Poder Judicial residía en una Cámara de Justicia compuesta por cinco magistrados, junto a una cantidad determinable de jueces inferiores de primera instancia en lo civil y criminal nombrados por el Gobernador a propuesta de la Asamblea Legislativa. Las circunstancias contextuales seguían siendo un límite material al diseño teórico de las instituciones, como en anteriores ocasiones, La baja matrícula de abogados en la Provincia obligó a incluir en la Constitución una disposición transitoria según la cual, la Cámara de Justicia, que debía componerse de cinco magistrados, podría formarse “*por ahora sólo de tres mientras se aumenta la matrícula de esta profesión*”²²⁰.

²¹⁶ *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., SECC. III, ART. 13. El texto hablaba literalmente de “soberanía provincial” y no de “autonomía” como la teoría y la historiografía constitucionales han retroproyectado para el período. Para la distinción teórica entre esos dos conceptos, y un análisis sobre el modo en que el asunto ha sido abordado por la historiografía y el constitucionalismo en Argentina, véase el trabajo de AGÜERO, A. (2014) Ob. cit.

²¹⁷ Hasta tanto no se dictara una ley de elecciones que arreglara las proporciones al censo de habitantes, la composición de la Asamblea se establecía por la propia Constitución: “*cuatro por la Ciudad, dos por el Río 2º Abajo, dos por el Río Seco, dos por Tulumba, dos por Pocho, dos por la Punilla, dos por San Javier, dos por el Río 4º, dos por Calamuchita, uno por Anejos, uno por Santa Rosa, uno por el Tercero Arriba, uno por el Tercero Abajo y uno por Ischilín...*”, *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., SECC. IV, ART. 14.

²¹⁸ *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., SECC. V. Anteriormente, todo lo concerniente a formación y sanción de las leyes se había dejado librado a la regulación que los diputados quisieran darle en el Reglamento Interior de la Sala de Representantes.

²¹⁹ *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., SECC. IV, ART. 28, INC. 2º. La designación de un Gobernador interino en casos de ausencia o imposibilidad de ejercicio del cargo por parte del titular volvía a ser una atribución de la Asamblea Legislativa (INCS. 18º y 21º). Resulta llamativo que en caso de vacancia el puesto debía ser ocupado transitoriamente por el Presidente de la Cámara de Justicia y en su defecto el de la Municipalidad de la Capital (SECC. VII, ART. 49).

²²⁰ *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., SECC. VIII, ART. 57.

En sintonía con la morigeración del papel de la Religión Católica sancionada por los constituyentes de 1853, y el reconocimiento explícito –no sin un fuerte debate de por medio– de la libertad para profesar cualquier culto en el territorio de la Confederación, la norma cordobesa de 1855 adoptó una postura que resultaba mucho más permisiva en relación con sus antecedentes. Si bien se declaraba que la Religión Católica, Apostólica, Romana era la Religión de la Provincia y el Gobierno debía prestarle “la más decidida y eficaz protección”²²¹, ya no se afirmaba que ésta fuera la “única verdadera” ni se ordenaba a los magistrados que no permitieran “en todo el territorio otro culto público, ni enseñar doctrina contraria a la de Jesucristo”²²². Pero esta modificación no era la más significativa. Relegando la valencia normativa en un sentido formal de la Religión, y ubicándola en un plano de fuente meramente material del derecho, se eliminaba una disposición tan grave como la que, tanto en el Reglamento Provisorio de 1821 como en el Código Constitucional de 1847, consideraba “la infracción” del artículo referido a la Religión como “una violación de las leyes fundamentales del Estado”, que debía ser castigada como tal²²³.

Por mandato constitucional, en respuesta a otra de las exigencias de los constituyentes de 1853, se restablecían las “Municipalidades ó Cabildos”, atribuyéndose a la Asamblea Legislativa la facultad de organizarlos “sobre las bases en ella designadas”²²⁴. En un ejercicio que combinaba criterios tradicionales con una nueva racionalidad, estas esferas de gobierno se repartirían a lo largo de un territorio provincial que, a efectos administrativos, estaría dividido “en departamentos, éstos en pedanías y éstas en cuarteles, haciéndose la división en virtud de su extensión territorial y no de su población”²²⁵. La potestad del Congreso Provincial para definir el modo en que se instauraría el régimen municipal era muy amplia, aunque entre las “bases” establecidas por la Constitución se determinaba muy claramente toda una serie de materias que no podían dejar de estar bajo la órbita de los municipios: “La acción de las Municipalidades será directa y exclusiva en los ramos de instrucción primaria de la capital y departamentos, en los establecimientos de beneficencia y caridad, en los de Policía, de orden, moralidad, salubridad, aseo y ornato público, en el número y comodidad de los

²²¹ “La Religión Católica Apostólica Romana, es la Religión de la Provincia; su Gobierno le prestará la más decidida y eficaz protección, y todos sus habitantes el mayor respeto y la más profunda veneración”, *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., SECC. I, ART. 3.

²²² En este sentido se expresaban tanto el *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración...* cit., SECC. SEGUNDA, CAP. V, ART. 1º; como el *Código Constitucional Provisorio...* SECC. SEGUNDA, CAP. V, ART. 1º, que además agregaba que la única doctrina de Jesucristo verdadera era la “enseñada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana”.

²²³ Ídem en ambos textos, ART. 2º.

²²⁴ *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., SECC. IV, ART. 28, INC. 3º. En la sección correspondiente se abundaba en estas disposiciones: “Quedan restablecidas las Municipalidades ó Cabildos, en la forma, extensión, límites y atribuciones judiciales; administrativas y económicas que le designe una ley especial que dictará la Asamblea Provincial dentro de los seis meses subsiguientes á la jura de esta Constitución” (SECC. IX, ART. 72). El Congreso Provincial dictó la ley correspondiente el día 3 de septiembre de 1856.

²²⁵ *Constitución para la Provincia de Córdoba...* cit., SECC. IX, ART. 73.

camino, construcción de puentes y posadas, y en el nombramiento de los jueces de paz y justicia preventiva en la capital y departamentos"; en la capital, como resabio de un estatus diferenciado con el resto de la Provincia, la Municipalidad tenía intervención también en el “*nombramiento de los Jueces de 1ª Instancia en lo civil y criminal*”²²⁶.

En cuanto a la revisión del texto, del mismo modo que la Constitución de la Confederación, se establecía una prohibición de reforma durante los primeros diez años de vigencia²²⁷. Una vez superada esa obstrucción, por el simple transcurso del tiempo previsto, toda reforma constitucional debía seguir un procedimiento especial, agravado respecto de la legislación común e instado exclusivamente por la Asamblea Legislativa, para poder prosperar como tal²²⁸. Una propuesta de reforma, apoyada por al menos las dos terceras partes del Congreso Provincial, era el puntapié inicial del procedimiento. Aceptada la propuesta, debía sancionarse una ley provincial declarando la necesidad de la reforma. Seguidamente, había que reunir un cuerpo especial *ad hoc* –la Convención Constituyente– compuesto por veinticinco Diputados, que sería la autoridad facultada para preparar, debatir y sancionar las modificaciones a la norma fundamental²²⁹. Esta rigidez del documento de 1855, característica nunca prevista en los antecedentes locales, es un indicador del nuevo estatus en el imaginario jurídico de la Constitución formal respecto de la material.

Analizada globalmente la letra de la norma, la cuestión central que cabe explorar es si efectivamente la Constitución de la Provincia de Córdoba del año 1855 operó un verdadero cambio político-constitucional o no. Sin desconocer modificaciones importantes –como el nuevo papel constitucional de la Religión–, si bien en el nivel superficial del lenguaje se incorporó con más fuerza la retórica de las libertades y los derechos, en el plano más básico de la estructura institucional y dinámica del poder político las cosas no parecieran haberse alterado radicalmente; máxime si se mira más allá de las fronteras de la capital y se analiza el viejo territorio rural de la campaña. Llevando este argumento al extremo, se podría hablar quizás de *gatopardismo* constitucional, en el sentido más corriente de la expresión que alude a la obra de Lampedusa, presentando una transformación política de entidad que en la práctica sólo habría venido a alterar la parte superficial de las estructuras de poder, conservándose varios de sus elementos esenciales.

El análisis de la experiencia constitucional que siguió a la sanción de la Constitución de 1855 queda fuera de las coordenadas en las que se ubica este trabajo. Apenas un testimonio sirve para plantear como hipótesis lo que se ha afirmado: la sanción

²²⁶ Constitución para la Provincia de Córdoba... cit., SECC. IX, ART. 74, INCS. 5º y 6º.

²²⁷ Constitución para la Provincia de Córdoba... cit., SECC. X, ART. 75. La Constitución de la Confederación Argentina de 1853, ART. 30, establecía que “La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, pasados diez años desde el día en que la juren los pueblos...”.

²²⁸ “Son atribuciones de la Asamblea Provincial: (...) Iniciar la reforma de esta Constitución conforme a lo prescripto en ella”, Constitución para la Provincia de Córdoba... cit., SECC. IV, ART. 28, INC. 9º. Las disposiciones relativas a la reforma de la Constitución estaban reunidas en una sección del documento específicamente dedicado al asunto, “De la reforma de esta Constitución” (SECC. X).

²²⁹ Ídem, SECC. X, ART. 76.

en el mes de septiembre del año 1856 del Reglamento de Administración de Justicia en la Campaña; un peculiar cuerpo normativo que, ya desde su propia denominación –la voz reglamento remite a la tradición indiana– y sus disposiciones más trascendentes, pasando por el proceso mediante el cual fue formado y sancionado, no puede ser pensado como el producto de una nueva cultura constitucional²³⁰. La reforma en el régimen de administración de justicia formaba parte de la agenda de la política cordobesa desde hacía unos diez años, por lo tanto, su sanción en 1856 se explica más por las necesidades de la élite provincial que por la adaptación de la administración de justicia a los nuevos estándares constitucionales. Pese a la regulación constitucional del procedimiento para la formación y sanción de las leyes, se siguió la misma práctica –de larga data– que treinta años antes había servido para la redacción del viejo Reglamento de Administración de Justicia para la Campaña (1823) y para sus posteriores revisiones: se convocó por decreto una Junta de Hacendados que emitiera su opinión y propusiera una nueva regulación²³¹. El propio proceso de formación del reglamento revela así unos “claros anclajes tradicionales en la forma de gestión del poder... [y] pone en evidencia la persistencia de un ideal de autorregulación corporativa de hondo arraigo en la cultura jurisdiccional de antiguo régimen”²³².

Por otra parte, también responde a la cultura tradicional la conservación de la estructura de la justicia, con unos jueces a los que se dotaba “de una competencia dual en la que convergían funciones contenciosas y gubernativas”, responsables personalmente por los actos en el ejercicio de su función, no remunerados, cuyo oficio descansaba “sobre una jerarquía social tejida a partir de unidades domésticas y vínculos personales que proporcionan el sustrato y el sustento imprescindible para hacer operativo el cuadro institucional”²³³. Aunque la mejor expresión de aquel supuesto gatopardismo constitucional, que ocultaría el mantenimiento de las estructuras de poder tradicionales bajo una apariencia de libertades, es el modo en que se pretendió resignificar la papeleta

²³⁰ Para un completo análisis y contextualización de este Reglamento de Administración de Justicia para la Campaña, véase AGÜERO, A. (2011a) Ob. cit. Este caso en particular se inscribe en “ese momento que transcurre entre la sanción del orden constitucional y la puesta en vigencia de los códigos de fondo ofrece un escenario valioso para reflexionar sobre el modo en que las élites provinciales entendieron o asimilaron el nuevo orden constitucional, particularmente desde el punto de vista de la axiología relativa los derechos subjetivos que el texto de 1853 pretendía garantizar”, ídem, p. 3

²³¹ “Córdoba, Diciembre 15 de 1855. Considerando que la Campaña se halla hoy día en un total abandono... que para moralizar la Campaña, es indispensable robustecer el poder de sus autoridades y adoptar todas aquellas medidas que la experiencia haya demostrado convenientes; que esas medidas sólo pueden ser dictadas por los mismos hacendados que se hallan al cabo de sus necesidades y de los medios que es posible adoptar para conseguirlo... Artículo 1º. Convócase una junta de hacendados, compuesta de individuos de todos los Departamentos, con el objeto de dar un Reglamento y adoptar con el Gobierno todas las medidas que crean necesarias para el buen arreglo de la Campaña...”, en *Compilación de leyes...* cit., pp. 373-374.

²³² AGÜERO, A. (2011a) Ob. cit., p. 7. Continúa el autor, “Desde esta óptica, la intervención legislativa se concibe como una acción dirigida a mantener una idea de orden social mediante la satisfacción de un interés particular (aunque de un sujeto colectivo) más que a imponer estándares comunes y abstractos sobre los individuos genéricamente considerados”, ídem.

²³³ Ídem, p. 13.

de conchabo a partir del liberal lenguaje de los contratos pero conservando “una categorización de los sujetos cuyo posicionamiento deriva más de una persistente ontología social, que de su condición de partes en un contrato (...) hay «gentes de servicio» por un lado y «patrones» por el otro, y su contenido normativo se orienta a conectarlos de forma compulsiva (...) [con] roles pre-adjudicados (...) [muy lejos] del ideario liberal del sujeto único de derecho”²³⁴.

En conclusión, la Constitución sancionada en el año 1855 recogió muy bien los principios y estándares delineados por el texto federal. Pese al supuesto acierto de los constituyentes locales, no tardaron en aparecer voces críticas a la norma, atribuyéndole una larga lista de defectos²³⁵. A diferencia de sus antecedentes provinciales, aunque se practique una lectura global –coordinando todas las disposiciones normativas dispersas a lo largo de sus once secciones– no se hallan fácilmente vestigios de la cultura jurídica tradicional. Sin embargo, la interpretación que hicieron de ese nuevo lenguaje las élites políticas locales les permitió dotar al orden constitucional de unas “connotaciones que resultarían muy difíciles de explicar a la luz de los significados que hoy asignamos a sus enunciados”²³⁶. En un contexto de transición, la tensión política que provocó el supuesto desconocimiento y la violación de los preceptos constitucionales pueden tratar de explicarse desde esta perspectiva²³⁷. Quince años después de su puesta en vigencia, y por medio del procedimiento que ella misma establecía, se reunió una Convención Constituyente para reformarla. Para finales de 1870 una nueva norma constitucional establecía el marco político y jurídico de la Provincia, pero eso ya es parte de otra historia.

²³⁴ Ídem, p. 20

²³⁵ “Se atribuía a dicho texto [Constitución Provincial de 1855], entre otros, los siguientes defectos: su ineficacia comprobada [para] garantizar los derechos que ampulosamente proclamaba; la deficiente regulación del régimen municipal; dejar librada la educación primaria a la acción exclusiva de las Municipalidades; el estado de desequilibrio que ideó entre los distintos poderes públicos provinciales; la arcaica estructura dada al Poder Legislativo; las frecuentes delegaciones de poder efectuadas por el titular del Ejecutivo, con el marco constitucional vigente; y la falta de regulación alguna que haga viable el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos”, GILETTA, J. (1998) “La Honorable Convención Provincial Constituyente de 1869-1870”, en Cuadernos de Historia, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Nro. 8, pp. 147-169, p. 148.

²³⁶ Agüero, A. (2011a) Ob. cit., p. 43.

²³⁷ En un acuerdo extraordinario con fecha 11 de agosto de 1857 firmado por los señores de la Excm. Cámara en el que declaran su disconformidad con la pretensión del Ejecutivo de nombrar camaristas sustitutos en flagrante violación de las disposiciones constitucionales, denuncian que “*el mismo Ejecutivo ha conocido y conoce en asuntos judiciales, invadiendo las atribuciones privativas del Superior Tribunal contra lo prescrito en la restricción 7ª, sección 7ª de la Constitución Provincial que le prohíbe toda intervención en asuntos de carácter contencioso bajo de ningún pretexto*”, en *Compilación de leyes...* p. 385.

CONCLUSIONES

El protagonismo de los espacios locales en el tiempo que siguió a la disolución de la Monarquía Católica, con su consecuente dispersión corporativa, autoriza a afirmar que el estudio de la dimensión provincial, y en algunos sitios municipal, del primer constitucionalismo hispanoamericano es un aspecto fundamental para la comprensión densa de la historia constitucional –y los procesos de construcción estatal– en los países de la región. Habiéndose retrovertido la soberanía a los *pueblos*, sobre ellos recayó la legitimidad necesaria para dar una respuesta a la crisis –dinástica, de independencia y, finalmente constitucional– provocada por las abdicaciones de Bayona.

Sin embargo, la tradición historiográfica constitucional no ha asumido, por lo general, todas las consecuencias de dicho enfoque, que sin embargo es el que se viene implantando en la historiografía política en los últimos años. Comprometida a menudo por las condiciones que impone el mismo objeto que pretende explicar –el proceso de construcción estatal y nacional–, le ha costado mucho superar ciertos presupuestos analíticos tales como los orígenes remotos de la nación, el paradigma estatista, o la doctrina de la separación tripartita del poder, etc., que acaban sesgando, muchas veces, los resultados de las investigaciones. Uno de estos sesgos consiste en la desatención de los procesos constituyentes locales (por contrapartida a los procesos constituyentes a nivel de Estado-Nación), sean estos municipales, provinciales o estatales según la región.

En el caso argentino, el panorama responde al modelo descrito. Los textos constitucionales sancionados –y vigentes– en la mayor parte de las catorce provincias rioplatenses, durante la primera mitad del siglo XIX, han sido sistemáticamente desatendidos por las obras de historia constitucional y, salvo excepciones, no han merecido atención específica. Si acaso desde algunos sectores de pensamiento constitucional, así como del revisionismo histórico, se reconoció el aporte de los caudillos provinciales en la construcción del federalismo argentino, dicho reconocimiento no pasaba por una valoración sustancial de los textos constitucionales que las provincias discutieron, sancionaron, y –con ciertos matices– publicaron durante ese período. Se ha llegado a decir que las Constituciones provinciales no fueron más que simple papel mojado, lo que sin embargo constituye una afirmación insensible a las vivencias de los actores que en más de una oportunidad asumieron que el texto cumplía una misión de cohesión y sustento que transcendía el faccionalismo. En definitiva, la revalorización del rol protagónico de los *pueblos* operada en el ámbito de la historiografía política y social

obliga a un cambio en el enfoque clásico de los estudios histórico-constitucionales: la historia genética del constitucionalismo argentino debe comenzar por las provincias.

Ahora bien, la recuperación del objeto de estudio no es suficiente si no va acompañada de una también renovada estrategia metodológica para su abordaje. En primer lugar, uno de los aspectos fundamentales del enfoque propuesto consiste en la concepción del derecho como fenómeno discursivo, la asunción de la relación contingente significante-significado y la necesidad de reconstruir las categorías según la adscripción de significado que sus propios destinatarios pudieron atribuirles: el sentido *local* de los conceptos. En segundo lugar, se debe reconocer la distinción entre formulaciones normativas –el texto– y normas –lo que los individuos pueden o deben jurídicamente hacer–, cuyo conocimiento es resultado de un determinado proceso interpretativo. En tercer lugar, es preciso *tomarse los textos en serio*, leerlos densa y globalmente –nunca seleccionando sólo porciones de ellos–, respetando su lógica, conscientes de la existencia de diferentes niveles de textualidad: disposiciones con vocación normativa, horizonte de expectativas, y la cultura jurídica subyacente a ambos. Finalmente, aceptar que sin el estudio de los dispositivos institucionales que permitieron o impidieron la realización de los valores que inspiraban el orden político es imposible comprender una determinada experiencia jurídica ubicada en un tiempo y espacio determinados.

A partir de estas premisas la investigación que aquí concluye ha emprendido el estudio de la experiencia constitucional de Córdoba. Por una parte, como caso testigo de un proceso que tuvo similares connotaciones en otras provincias rioplatenses, y por otra, como epifenómeno de un movimiento cultural que se inscribe en unas coordenadas que trascienden dicho espacio, tales como las que configuran las peculiaridades propias del constitucionalismo en el orbe hispano inmediatamente posterior a las independencias.

Como los demás textos constitucionales coetáneos, el *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba* del año 1821 se gestó mediante un proceso que comenzó con elecciones indirectas para conformar una Soberana Asamblea representativa de la república. Dicha Asamblea encargó a una comisión de expertos –no integrantes del cuerpo representativo– la redacción del proyecto de Constitución. El proceso de discusión y sanción de ese proyecto en el seno de la Asamblea fue breve y casi sin contradicciones, ya que los protagonistas compartían un mismo imaginario cultural y una misma noción sustancial u ontológica del orden jurídico, que apuntalado en elementos inmutables tales como la Religión Católica (que a su vez determinaba elementos claves del diseño de una comunidad política), configuraban el modo de ser de la comunidad o su “constitución” en sentido “material”.

La plasmación textual o formalización de dichos elementos en el Reglamento Provisorio, condicionó el lenguaje de los derechos y las libertades en el que estaba redactado el documento constitucional. Entremezclados con declaraciones de derechos y garantías, toda una serie de disposiciones o principios generales radicalizaron el anclaje del orden constitucional diseñado en 1821 a una cultura jurídica tradicional que

permanecía indemne por la ausencia del efecto derogatorio de la Constitución: la Religión Católica, cuya inobservancia era considerada una violación a las leyes fundamentales del país, operando como clave de interpretación general y rasero normativo; la administración de justicia, siguiendo declaradamente los mismos principios, orden y métodos que en el período colonial; y la asimilación en bloque de todo el viejo derecho español –*códigos, cédulas, reglamentos y demás disposiciones generales y particulares*–. No es casual que representantes provinciales percibieran el texto como un reflejo del orden tradicional, calificando al “*Reglamento de Provincia...*” como un compendio de “... *puras leyes preexistentes*”.

Pero no sólo declaraciones genéricas definieron la trama tradicional del orden constitucional, limitando la vigencia de las disposiciones “modernas” y la efectiva puesta en planta del diseño institucional a partir del principio de la división de poderes. En primer lugar, la comunidad católica era la comunidad política, por lo que quedaron fuera los “otros” habitantes del territorio, a los que no se hizo ni mención. En segundo lugar, artículos concretos a lo largo del texto restringieron el catálogo de los derechos y las garantías individuales como, por ejemplo, aquél que autorizaba a los jueces a imponer penas de acuerdo a su prudente arbitrio según las conveniencias de la república, o el que suspendía la ciudadanía a aquel sujeto que revistaba como doméstico asalariado, pese al principio general otorgaba el derecho al sufragio a todo hombre libre. Finalmente, la lenta puesta en planta del Reglamento Provisorio, determinada tanto por circunstancias materiales como la guerra, la penuria económica, etc., cuanto por factores culturales, como la lógica de la “dispensa” y la “excepción”, derivadas de los rasgos tradicionales de la vieja experiencia jurídica (el casuismo, el factualismo y el razonamiento tópico), también condicionaron su espíritu “moderno” reestructurando el “mapa institucional” diseñado en el plano superficial del texto.

Desde 1821 en adelante, el derrotero de la experiencia constitucional de Córdoba se caracterizó por la convivencia de nuevas prácticas políticas y jurídicas con otras de corte tradicional cuya inercia pudo sobreponerse al bosquejo de dispositivos orientados a limitarla. El Congreso Provincial se erigió en soberano y su preponderancia fue similar a la de otros cuerpos legislativos reunidos a lo largo y ancho del antiguo territorio de la Monarquía Católica, sin embargo, sus continuas intermitencias como consecuencia de las disoluciones ordenadas por el Gobernador minaron su poder en beneficio de este último, que no sólo recibió continuas delegaciones de facultades extraordinarias, sino que además siguió entendiendo en las apelaciones debido a las dificultades –o el desinterés– para institucionalizar el máximo órgano de justicia previsto en el Reglamento. La misma Constitución, de acuerdo con aquella lógica de la dispensa y la excepción, llegó a dejar de ser observada, *sin perjuicio de mantener su vigencia*, cuando la salvación, seguridad y tranquilidad de la república así lo aconsejaba. De esta forma, la praxis fue acomodándose en gran parte a la costumbre y muchos de los dispositivos constitucionales modernos quedaron relegados al plano de la retórica, aunque esto no implica negar el papel

performativo del lenguaje constitucional y su relevancia para marcar nuevos modos de organización y gestión del poder a los que las prácticas también debieron ir ciñéndose.

El imaginario cultural consintió que se diera normatividad a lo factual, aceptando incluso la justificación de transgresiones a la literalidad de la Constitución. Sin embargo, esto no implicó un desprecio por la vigencia del texto y en reiteradas ocasiones los actores políticos impulsaron la modificación constitucional. Entre 1821 y 1847 se alteraron varios artículos del documento original en cuestiones relativas a la edad para el ejercicio de la ciudadanía, el tratamiento que debía darse a las autoridades, las proporciones para la composición de la Sala de Representantes, el número de integrantes de la Cámara de Apelaciones, etc. En el año 1847 se llevó a cabo una gran reforma inclinada hacia la formalización de los elementos más claramente adscritos a la tradición, que oficiaba de constitución material, y a las prácticas políticas decantadas en las últimas décadas bajo el contexto general de la confederación rosista adecuando la letra de la norma al inmenso peso de la práctica política. Más que una reforma del anterior, se trató de la sanción de un documento distinto: el Código Constitucional Provisorio. Entre sus novedades, fortaleció el poder de la figura del Gobernador, incorporó una lógica de exclusión del adversario político ya vigente en la práctica, tutelando el interés de conservación y protección del orden, aumentó hasta su apoteosis la soberanía provincial en detrimento de la esfera “federal” prevista en el antiguo Reglamento de 1821, y vació el texto del lenguaje de los derechos y garantías con fuertes repercusiones en el sistema constitucional de administración de justicia.

La última reescritura del texto durante la primera mitad del siglo XIX no prolongó mucho tiempo su vigencia y debió sustituirse como consecuencia de un cambio en el horizonte político de la Confederación rioplatense. La tan ansiada organización constitucional a nivel nacional llegó de la mano del Gobernador entrerriano Justo José de Urquiza en el año 1853, y la nueva Constitución Federal obligó a las provincias a sancionar textos constitucionales adaptados al orden y cánones normativos proyectados, resultado garantido por el examen reservado al Congreso de la Nación. En ese marco, Córdoba volvió a sancionar otra norma fundamental, la Constitución para la Provincia del año 1855.

Esta tesis ha pretendido convencer sobre la necesidad de volver a estudiar los textos constitucionales provinciales desde una perspectiva alternativa. A contramano de la historiografía más tradicional, que los ha considerado meros papeles ineficaces, se ha propuesto una lectura que procura dar cuenta del sentido que esos textos tuvieron para los actores del momento, y del papel que –desde ese lugar– cumplieron en la estructuración del orden político emergente. La sencilla identificación de contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace no resuelve los problemas de interpretación acerca de las razones que llevaron a los actores a concretar ciertos rumbos de acción. Reducir la historia político-constitucional rioplatense a una mera tensión entre prácticas y textos sin eficacia resulta, al menos, insuficiente. Por ello, es preciso enfocar esos rumbos a partir de una

lectura atenta en torno a las tensiones presentes dentro mismo de los propios textos jurídicos y de la más porosa cultura que los subentendió.

La idea central que aquí se ha procurado sostener, consiste en reconocer que las constituciones –con todas sus dispensas y todas las trasgresiones que pudieron haber sufrido– tuvieron en aquellos espacios políticos la capacidad para generar prácticas políticas que se sostuvieron y consolidaron a lo largo del siglo XIX, cumpliendo así un rol estructurante de la política y el orden jurídico del nuevo Estado Nación argentino.

ANEXO

- *Cronología de la historia política del Río de la Plata y Córdoba (1810-1855)*
- *Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba de 1821*
- *Código Constitucional Provisorio de la Provincia de Córdoba de 1847*
- *Constitución para la Provincia de Córdoba de 1855*

Cronología de la historia política del Río de la Plata y Córdoba (1810-1855)

AÑO	RÍO DE LA PLATA	CÓRDOBA
1810	Revolución de mayo. Formación de la Primera Junta Provisional Gubernativa.	Contrarrevolución. Fusilamiento a los rebeldes. Adhesión a la revolución.
1813	Asamblea General Constituyente.	Envío de diputados a la Asamblea.
1815	Estatuto Provisional.	Influencia de Artigas. Primera Declaración de Independencia de la Provincia.
1816	Congreso de Tucumá. Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de Sud América.	Alineamiento con las autoridades centrales.
1817	Reglamento Provisorio.	
1819	Constitución de las Provincias Unidas de Sud América.	Rechazo de la Constitución por su carácter unitario.
1820	Sublevación de Arequito. Batalla de Cepeda. Caída del Directorio. Momento de los pueblos.	Elección de Bustos como Gobernador. Formación de la Soberana Asamblea Electoral.
1821	Frustrado Congreso General Constituyente de Córdoba. Influencia de Rivadavia en la política de Buenos Aires.	Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba.
1824	Instalación del Congreso General Constituyente en Buenos Aires.	Extinción de los cabildos.
1826	Constitución unitaria.	Rechazo de la Constitución.

1829	Primer gobierno de Juan Manuel de Rosas.	Derrocamiento de Bustos. Elección de José María Paz como Gobernador.
1830		Paz encabeza la Liga unitaria del Interior.
1831	Pacto Federal entre las Provincias del Litoral.	Derrocamiento de Paz. Elección de Reynafé como Gobernador.
1835	Segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Dirección de las Relaciones Exteriores de la Confederación.	Elección de Manuel López como Gobernador.
1847		Código Constitucional Provisorio.
1851	Pronunciamiento de Urquiza.	Adhesión a Rosas. Revolución del 27 de abril. Derrocamiento de López. Adhesión a Urquiza.
1852	Batalla de Monte Caseros. Caída de Juan Manuel de Rosas. Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Congreso General Constituyente de Santa Fe.	
1853	Constitución de la Confederación Argentina.	
1855		Constitución para la Provincia de Córdoba.

*Reglamento Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba
de 1821*

REGLAMENTO PROVISORIO
PARA EL REGIMEN Y ADMINISTRACION DE LA
PROVINCIA DE CORDOVA

AÑO DE 1821

Sistema Presupuesto el de Una República Federada

SECCION PRIMERA

CAPITULO I

De la Provincia de Córdoba y de sus Derechos

Artículo I°.--- La Provincia de Córdoba es la reunión de todos sus habitantes nacidos o avecindados dentro de los linderos que demarcan actualmente su territorio.

Art. 2°.--- La Provincia de Córdoba es libre, e independiente. Reside esencialmente en ella la Soberanía y le compete el derecho de establecer sus leyes fundamentales por constituciones fijas; y entre tanto por Reglamentos provisorios en cuanto no perjudique los derechos particulares de las demás Provincias, y los generales de la confederación.

CAPITULO II

DERECHO PÚBLICO

Derechos que competen al hombre en Sociedad

Artículo 1°.--- Los derechos del hombre en Sociedad, son la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad; el primero tiene un concepto tan claro, tan inequívoco y uniforme que no ha menester otras explicaciones; el segundo resulta de la buena opinión que cada uno se adquiere por la integridad y rectitud de sus procedimientos llenando todos los deberes de un hombre de bien y de un buen ciudadano; la libertad es la facultad de hacer todo lo que no daña a los derechos de otros individuos, ni al cuerpo de la Sociedad; su justo y honesto ejercicio consiste en la fiel observancia de la ley; de otro modo, será arbitrario y destructor de la misma libertad. La igualdad consiste en que la ley sea una misma para todos los ciudadanos sea que castigue ó que proteja. La propiedad es el derecho que cada uno tiene de gozar y disponer de los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria. La seguridad existe en la garantía y protección, que da la Sociedad

a cada uno de sus miembros para que no se viole la posesión de sus derechos, sin que primero se verifiquen aquellas condiciones que están señaladas por la Ley para perderla.

Art. 2°.---Todo hombre gozará de estos derechos en el territorio del Estado, sea o no ciudadano, sea Americano, o extranjero.

CAPITULO III

Deberes del hombre en Sociedad

Artículo 1°.--- La declaración de los derechos antecedentes contiene la obligación de los Legisladores; pero la conservación de la Sociedad, pide que los que la componen reconozcan y llenen igualmente las suyas.

Art. 2°.--- Los derechos de los otros son el límite moral de los nuestros y el principio de nuestros deberes relativamente al cuerpo social; ellos reposan en dos principios que ha grabado en todos las naturaleza, a saber: Haz siempre a los otros todo el bien que quisieras recibir de ellos; no hagas a otro lo que no quieras que te hiciese.

Art. 3°.---Son deberes de cada individuo para con la Sociedad vivir sometido a las Leyes haciendo el bien que ellas prescriben y huyendo del mal que ellas prohíben; obedecer y respetar a los Magistrados y autoridades constituídas como Ministros de la ley, y primeros ciudadanos, mantener la libertad y la igualdad de derechos, contribuir a los gastos públicos y servir a la Patria cuando ella lo exija, haciéndole el sacrificio de sus bienes y de su vida.

Art.4°.--- Ninguno es hombre de bien, ni buen ciudadano, si no observa las leyes, fiel y religiosamente; si no es buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo y buen padre de familia.

Art.5°.--- Cualquiera que traspasa las leyes abiertamente, o que las elude con astucia, o rodeos artificiosos y culpables, es enemigo de la sociedad; ofende los intereses de todos, y se hace indigno de la benevolencia pública.

SECCION SEGUNDA

CAPITULO IV

Deberes del cuerpo Social

Artículo 1°.--- La Sociedad afianza a los individuos que la componen el goce de la vida, de su libertad, de sus propiedades y demás derechos naturales; en esto consiste la ganancia social que resulta de la acción reunida de los miembros del cuerpo y depositada en la Soberanía.

Art.2º.--- Siendo instituídos los Gobiernos para bien y felicidad común de los hombres, la Sociedad debe proporcionar auxilios a los indigentes y desgraciados y la instrucción a todos los ciudadanos.

Art.3º--- Toda disposición, o Estatuto contrario a los principios establecidos en los Capítulos antecedentes, es injusto y debe ser sin ningún efecto.

CAPITULO V

De la Religión

Artículo 1º.--- La religión Católica, Apóstolica, Romana es la religión del Estado y la única verdadera; su protección, conservación, pureza e inviolabilidad, será uno de los primeros deberes de la representación del Estado, y de todos sus Magistrados, quienes no permitirán en todo el territorio otro culto público, ni enseñar doctrina contraria a la de Jesu-Cristo.

Art.2º.--- Todo hombre deberá respetar el culto público y la Religión Santa del Estado. La infracción de este artículo, será mirada y castigada como una violación de las leyes fundamentales del Estado.

SECCION TERCERA

CAPITULO VI

De la Ciudadanía

Artículo 1º.--- Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado es ciudadano, pero no entrará en el goce y ejercicio de este derecho hasta que haya cumplido veinticinco años de edad, o sea emancipado; y a más reuna las calidades que en sus respectivos lugares se expresarán en este Reglamento¹.

Art.2º--- Todo extranjero de la misma edad que se establezca en el país, con ánimo de fijar en él su domicilio, y habiendo permanecido por espacio de cuatro años, se haya hecho propietario de un fondo al menos de dos mil pesos o en su defecto ejerza arte u oficio útil, gozará de sufragio activo en las Asambleas Cívicas con tal que sepa leer y escribir.

Art.3º.--- A los diez años de residencia, tendrá voto pasivo para los empleos de República; mas no para los de Gobierno.

Art.4º.--- Para gozar ambos sufragios debe renunciar antes toda otra ciudadanía.

¹ El día 19 de abril de 1826 se substituyó el artículo por éste: *“Todo hombre libre que haya nacido y resida en la Provincia es ciudadano, pero no entrará al goce de este derecho, es decir, no tendrá voto activo hasta la edad de 18 años, ni pasivo hasta haber cumplido 25, o ser emancipado, a más reúna otras calidades que en su lugar se exigirán”*.

Art.5°.--- Los nacidos en el país que sean originarios de Africa por cualquier línea, cuyos mayores hayan sido esclavos, tendrán sufragio activo, siendo hijos de padres ingenuos; y pasivo, para los empleos de República, los que estén fuera del 4° grado respecto de dichos sus mayores.

Art.6°.--- Ningún Español Europeo, podrá disfrutar de sufragio activo o pasivo, mientras la independencia de estos Estados no sea reconocida por el Gobierno de España.

Art.7°.--- Los Españoles de esta clase decididos por la libertad y que hayan hecho servicios distinguidos a la causa del País, gozarán de la ciudadanía, obteniendo antes, la correspondiente carta.

Art.8°.--- Los Españoles y demás extranjeros, que soliciten ser ciudadanos, acreditarán su buena comportación pública, su adhesión y servicios a la Sagrada causa de la Independencia, por medio de una información que producirán precisamente ante uno de los Jueces ordinarios de la Ciudad o Villa en cuyo territorio residan los pretendientes con audiencia del Síndico Procurador o informe del cuerpo Municipal.

Art.9°.--- Unos y otros prestarán juramento de defender, sacrificando sus bienes y vidas la Independencia de Sud América, del Rey de España, sus sucesores y Metrópoli; y de toda otra Potencia Extranjera. El Gobernador de la República podrá comisionar la recepción de este juramento.

CAPITULO VII

Prerrogativas del ciudadano

Artículo único.--- Todo ciudadano es miembro de la Soberanía y tiene voto activo y pasivo en los casos y formas que designa este Reglamento.

SECCION CUARTA

CAPITULO VIII

De los modos de perderse y suspenderse la Ciudadanía

Artículo 1°.--- La Ciudadanía se pierde, Primero: por naturalización en país extranjero; Segundo: por aceptar empleos, pensiones, o distinciones de nobleza de otra nación; Tercero: por la imposición legal de pena aflictiva o infamante; Cuarto: por el estado de deudor dolosamente fallido, si no obtiene nueva habilitación después de purgada la nota.

Art.2°.--- La Ciudadanía se suspende; Primero: por ser deudor a la hacienda del Estado estando ejecutado; Segundo: por ser acusado de delito, siempre que éste tenga cuerpo justificado y por su naturaleza merezca pena corporal, aflictiva o infamante; Tercero: por ser doméstico asalariado; Cuarto: por no tener una propiedad del valor al menos de cuatrocientos pesos, aunque pertenezcan a mujer si fuese casado; y en su defecto si no

tuviese grado o aprobación pública en una ciencia o arte liberal, o algún oficio lucrativo y útil al país; Quinto: por el estado de furor o demencia.

Art. 3°.--- Fuera de esos casos, cualquier autoridad que prive a un Ciudadano de sus derechos cívicos, incurre en la pena del talión.

Art. 4°.--- Los Jueces que omitan pasar a las respectivas Municipalidades nota de los que deben ser borrados de los registros cívicos por haber sido condenados en forma legal, serán privados de voto activo y pasivo en dos actos consecutivos.

Art.5°.--- Las calificaciones de propiedad serán peculiares a las respectivas Municipalidades que llevarán permanentemente un Registro Civil de los ciudadanos aptos para tener voto activo y pasivo en las Asambleas primarias, y electorales, con la expresión de su edad y origen; y por registro separado, los que hayan perdido el derecho de ciudadanía o se hallen suspensos de ella.

Art.6°.--- En la campaña se suplirá lo dispuesto por el artículo antecedente, autorizando los Cabildos a los mismos que deben presidir las Asambleas primarias o parroquiales para formar un censo en cada curato; y que dos vecinos honrados, padres de familia y propietarios, testifiquen bajo de juramento ante dichos comisionados tener los comprendidos en el censo las calidades requeridas por este Reglamento, para voto activo y pasivo.

CAPITULO IX

De la elección de Representantes para el Congreso de la Provincia---Asambleas Primarias

Artículo 1°.--- Las Asambleas primarias se compondrán de todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la Provincia respectiva, para lo que se formará antes un censo puntual de todos los habitantes del distrito.

Art.2°.--- Las Asambleas primarias de la Ciudad y de las Villas donde hubiese Municipalidad se harán en cuatro secciones; y cada una será presidida por un miembro de la Municipalidad y dos Jueces de barrio de la mayor probidad, auxiliados de un escribano y en su defecto de dos testigos.

Art.3°.--- En cada sección darán su voto los sufragantes por tanto número de Electores, cuantos correspondan al total de la población, de suerte que resulte un Elector por cada cuatro mil almas; pero si las Villas no sufrieren las cuatro Secciones, se hará la votación en un solo lugar.

Art.4°.--- En la campaña guardará la misma proporción cada Elección; pero el método de las Secciones será diferente.

Art.5°.--- En cada Asamblea primaria habrá Secciones de proporción y cada Ciudadano votará en ella por un Elector.

Art.6°.--- El Juez principal del Curato y el Cura con tres vecinos de probidad nombrados por la Municipalidad del distrito, se juntarán en casa del primero y recibirán los sufragios según fueren llegando, los cuales depositarán en un arca pequeña de tres llaves que se distribuirán entre el Juez, el Cura y uno de los vecinos asociados.

Art.7°.--- El sufragio podrá darse de palabra o por escrito, abierto o cerrado, según fuere del agrado del sufragante, y en él se nombrará la persona que ha de concurrir a la Asamblea Electoral.

Art.8°.--- Si alguno dedujese en aquel acto o después, queja sobre cohecho o soborno, deberá hacerse sin pérdida de instante o justificación verbal del hecho ante los cinco Jueces de aquella Sección, reunidos al efecto el acusador y acusados, y siendo cierto, serán privados de voz activa y pasiva por veinte años la primera vez y perpetuamente por la segunda el sobornante y el sobornado. Los calumniadores sufrirán la misma pena por dos actos consecutivos, y de este juicio no habrá más recurso.

Art.9°.--- Concluído el término de cuatro días, que durará en la campaña la recepción de votos, quedarán cerrados los actos de aquella Sección, y al siguiente día el Alcalde con dos de los tres vecinos asociados conducirán la arca cerrada a la Sección del número, entregando entonces el Cura su llave al que corresponda.

Art.10°.--- El distrito de Curatos reunidos, que comprenden en su territorio cuatro mil almas, es la Sección del número.

Art.11°.--- La Municipalidad más inmediata al distrito de la Sección del número, señalará el Curato que ha de ser Cabeza de la Sección, prefiriendo siempre el de vecindario más numeroso y diciendo las dudas que en ello ocurran.

Art.12°.--- A la Cabeza de Sección de número deberán conducirse las arcas de las Secciones de proporción las que recibirán el Juez, el Cura y tres asociados de los de mayor probidad y abriéndolas contarán los sufragios y calificarán la pluralidad practicando este acto públicamente.

Art.13°.--- Al que resultare con mayor número de votos para elector, se le notificará que se traslade inmediatamente a esta Ciudad donde ha de celebrarse la Asamblea Electoral.

Art. 14°.--- Ninguno podrá ser nombrado Elector, si a más de las calidades de Ciudadano en ejercicio de sus derechos, no reúne la de una propiedad cuyo valor sea al menos de mil pesos, siendo soltero, y de igual cantidad si fuese casado aunque pertenezca a la mujer.

CAPITULO X

De la Asamblea Electoral

Artículo 1°.--- Las Asambleas Electorales deberán celebrarse en las casas consistoriales de esta Ciudad donde deberán reunirse los Electores el día que fuese señalado por el Poder Ejecutivo sin demora alguna.

Art.2°.--- El primer acto de los Electores será nombrar un presidente de entre ellos a simple pluralidad de sufragios para guardar el orden.

Art.3°.--- La Asamblea Electoral extenderá con el Escribano de la Municipalidad sus actas, y podrá acordar previamente tan solo aquellas cosas que sean precisas para establecer el buen orden y validez de su elección, sin ocupar en estos actos, más tiempo que el preciso de veinticuatro horas

Art.4°.--- Procederá inmediatamente a la elección de representantes para el Congreso de la Provincia y la elección resultará de la simple pluralidad de votos.

Art.5°.--- Si el empatación fuese tal que, repetida hasta tres veces la elección, no resultare ni simple pluralidad, entonces los que tuviesen igualdad de votos entrarán en suerte y está decidirá.

Art.6°.--- Después de la elección de Representantes, procederá la Junta Electoral a la elección de cinco suplentes por mismo método y forma

Art.7°.--- En caso de muerte o imposibilidad de alguno de los representantes, el Congreso nombrará de los suplentes el que ha de llenar la falta en cualquier tiempo que uno u otro accidente se verifique después de la elección.

Art.8°.--- Ninguno de los Electores puede darse el voto a si mismo y dentro de tercer día debe estar concluída y publicada la elección.

Art.9°.--- En seguida otorgarán todos los Electores sin excusa alguna a todos y a cada uno de los representantes poderes amplios.

Art.10°.--- Como el censo ha de ser el fundamento para el número de representantes, se arreglará de modo que por cada doce mil almas se nombre uno; entre tanto no se sancionare la constitución que proveerá de un Senado, que con la Sala de representantes debe formar el Departamento de Legislación².

Art.11°.--- Si al formarse el arreglo de que habla el artículo 10 se hallasen algunas fracciones se observarán las reglas siguientes: 1°. Si en la Sección de número hubiera alguna fracción que llegue a dos mil almas, se votará un Elector por dicha fracción. 2°. Si en el distrito de las doce mil almas que debe representar cada Diputado hubiese alguna fracción que llegue a ocho mil almas, se nombrará por dicha fracción un representante como si llegara el número de doce mil.

Art.12°.--- Los representantes para el Congreso general de los Estados los nombrará por ahora el Gobierno de la Provincia en número que puedan sobrellevar los fondos de la República y que no exceda al de un Diputado por cada quince mil almas.

² El 15 de enero de 1826 estableció que se nombrara un representantes "*por cada seis mil almas*".

SECCIÓN QUINTA

CAPITULO XI

De los Representantes

Artículo 1º.--- No podrán ser elegidos Representantes para el Congreso de la Provincia los que no tengan siete años al menos de Ciudadanía antes de su nombramiento, se hallen en ejercicio de sus derechos y a más tengan veinticinco años cumplidos de edad y un fondo de dos mil pesos siendo soltero, como asimismo todo empleado que disfrute de un compensativo o rédito equivalente al referido fondo, o profese algún arte liberal con aprobación pública de alguna Universidad, y si fuere casado, aunque pertenezcan a la mujer.

Art. 2º.--- Las calificaciones o aptitud de los que fueren nombrados representantes, serán peculiares al Congreso³.

Art. 3º.--- El tiempo de su duración será el de cuatro años: se renovarán por mitad cada dos años y los que han de salir en el primer venio decidirá la suerte⁴.

Art. 4º.--- El compensativo que deben disfrutar por sus servicios sobre las rentas del Estado, lo fijará el Congreso de la Provincia.

Art. 5º.--- Los representantes por sus opiniones, discursos o debates no podrán ser molestados en manera alguna; pero el Congreso podrá castigar a sus miembros por desorden de conducta y con la concurrencia de dos terceras partes, expeler a cualquiera de su seno.

Art. 6º.--- Ningún Representante admitirá cargo, empleo o comisión durante el ejercicio de su representación. Si lo admitiese, perderá ésta, a menos que sea reelegido para ella; en cuyo caso servirá el empleo por sustituto⁵.

SECCION SEXTA

CAPITULO XII

Del Poder Legislativo

³ El 18 de agosto de 1824 se modificó esta disposición, indicándose como la “*mejor recompensa*” para los señores representantes “*el honor y satisfacción de servir al público*”.

⁴ El 15 de enero de 1826 se modificó este artículo estableciendo que *La Sala de Representantes, se renovará por terceras partes completamente, cada dos años, y parcialmente cada ocho meses y los dos primeros tercios será removidos por la suerte*”.

⁵ En las reformas de los días 8 y 9 de abril de 1826 se eliminó la posibilidad de ser confirmado como representante por una nueva elección.

Artículo 1°.--- El Poder Legislativo reside originariamente en el Pueblo; se expedirá por ahora por un Congreso de Representantes: su ejercicio, modo y término en la formación de las Leyes, hasta su sanción lo fijará la constitución de la Provincia.

Art.2°.--- Ningún asunto constitucional quedará sancionado sin la concurrencia de dos tercias partes de sufragios; en lo que no fueren de esta naturaleza, pero que fueren de mucha gravedad, será necesario un voto sobre la mitad; y los que no fueren de una ni otra clase, quedarán resueltos por una simple pluralidad.

Art.3°.--- Hasta que la constitución determine la conveniente, subsistirán todos los códigos legislativos, cédulas, Reglamentos y demás disposiciones generales y particulares del antiguo Gobierno Español, que no estén en oposición directa o indirecta con la libertad e independencia de Sud América, ni con este reglamento y demás disposiciones que no sean contrarias a él, libradas por el Gobierno General de las Provincias, desde el veinticinco de Mayo de mil ochocientos diez.

Art.4°.--- El Gobernador de la República, Tribunales, Jueces y funcionarios públicos de cualesquiera clase y denominación, podrán consultar al Congreso de la Provincia las dudas que les ocurrieran, en la inteligencia y aplicación de las expresadas Leyes, Reglamentos o disposiciones de uno y otro Gobierno, siempre que las encuentren en conflicto con los derechos explicados, y sistema actual de esta Provincia.

CAPITULO XIII

Atribuciones del Congreso

Artículo 1°.--- Al Congreso corresponde formar la constitución porque se ha de regir y gobernar la Provincia; examinarla y juzgarla sobre si se opone o no, a la autoridad de la confederación, es privativo del Congreso General de los Estados.

Art. 2°.--- En un riesgo inminente de ser, atacada la Provincia, puede el Congreso ordenar una guerra defensiva; y fuera de este caso, decretar la guerra y la paz, es privativo del Congreso General de los Estados.

Art. 3°.--- Corresponde al Congreso de la Provincia por tiempo determinado, que no pase de un año, imponer para las urgencias del Estado contribuciones proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Provincia.

Art. 4°.--- Para el mismo objeto puede recibir empréstitos sobre los fondos del Estado.

Art. 5°.--- Corresponde al Congreso de la Provincia con anuencia y consentimiento del Congreso General de los Estados establecer derechos de importación y exportación al comercio interior, y al extranjero, siendo un deber de las Leyes generales de la unión el procurar uniformarlo en la libertad de toda suerte de trabas funestas a la mutua prosperidad de las Provincias Federadas.

Art. 6°.--- Puede con la intervención del P.E. del que habla el art. 3°, cap.15, formar pactos o convenios con una o más Provincias, pero de ninguna manera concluirlos sin la anuencia y consentimiento del Congreso General de los Estados, y para obtenerlo se especificará el fin y duración de los pactos o convenios particulares.

Art. 7°.--- Puede con los mismos requisitos, consentimiento y anuencia del Congreso General de los Estados, levantar y mantener en tiempos de paz, las tropas que estime necesarias para el servicio de la Provincia.

Art. 8°.--- Al Congreso de la Provincia corresponde arreglar la forma de todos los juicios, crear y erigir los tribunales que estime necesarios para la administración de Justicia en todo el territorio de la República.

Art. 9°.--- Crear y suprimir empleos de toda clase.

Art. 10°.--- Formar planes de educación pública, y proveer los medios para el sostén de los establecimientos de esta clase.

Art. 11°.--- Asegurar a los autores o inventores de establecimientos útiles a la Provincia, privilegios exclusivos por tiempo determinado.

Art. 12°.--- Celar la calidad de la moneda, los pesos, y las medidas que se hallan establecidas en la Provincia, y que en adelante fixare i arreglare el Congreso General de los Estados.

Art. 13°.--- Recibir anualmente del Poder Ejecutivo la cuenta general de las rentas públicas, examinarla y juzgarla.

Art. 14°.--- Al Congreso de la Provincia corresponde deliberar en los casos de que hablan los artículos 12 del cap.10; 2°, 4° y 5° del cap. 11; 1° y 11 del cap.14; 5°, 9° y 13 del cap.16;1° del 17; 5° del cap.18; 9° del 23; 7° y 12 del cap. 25, y 2° del cap. 28.

CAPITULO XIV

Del Poder Ejecutivo

Artículo 1°.--- El Supremo P.E. reside originariamente en el Pueblo y será ejercido por un Gobernador de la República; su elección ya está verificada: para lo sucesivo, y entre tanto la constitución provee de reglas fixas para la elección del Gobernador de la República y si acaeciese vacar esta magistratura, el Congreso de la Provincia elegirá el que juzgue más digno de tal alto puesto.

Art.2°.--- Un voto sobre la mitad hará elección.

Art.3°.--- Si después de tres votaciones, ninguno obtuviere la expresada mayoría, se publicarán los dos sujetos que hayan obtenido el mayor número, y por ellos solos se sufragará en las siguientes votaciones.

Art.4°.--- Si repetida tres veces la votación no resultare la expresada mayoría, se sacará por suerte de entre los dos el Gobernador de la República.

Art.5°.--- Todo esto deberá verificarse acto continuo desde que se dió principio a su elección.

Art.6°.--- Ninguna persona será elegible para este oficio sin que sea al tiempo de su elección habitante de esta República por seis años que hayan precedido inmediatamente a su elección, aunque éstos hayan sido interrumpidos por un año intermedio de ausencia; sin que tenga treinta y cinco años cumplidos de edad; y sin que al mismo tiempo posea dentro de esta República una propiedad cuyo valor sea al menos de cuatro mil pesos siendo soltero, e igual caudal si fuese casado aunque pertenezcan a la mujer, o los demás requisitos que previene el art. 1°. del cap.11.

Art.7°.--- Durará en el mando por el tiempo por cuatro años contados desde el día de su recepción.

Art.8°.--- No podrá ser reelegido, sino por una vez con un voto sobre las dos terceras partes

Art.9°.--- El sueldo que debe disfrutar lo asignará el Congreso de la Provincia.

Art.10.--- No disfrutará de ningún otro emolumento o derecho bajo cualesquiera pretexto o causa.

Art.11.--- En los casos de ausencia del Gobernador de la República en defensa del Estado, o de otro legítimo impedimento que le embarase el ejercicio de sus funciones, el Congreso proveerá el interino⁶.

Art.12.--- En caso de muerte se verificará la elección dentro del preciso término de quince días.

Art.13.--- Su guardia y honores, serán los de Capitán General en la Provincia.

Art.14.--- Antes de entrar al ejercicio del cargo, el Gobernador electo de la República, en manos del Presidente del Congreso y a presencia de todas las corporaciones prestará el siguiente juramento: Yo..., juro por Dios Nuestro Señor, y estos Santos Evangelios, que desempeñaré fiel y legalmente el cargo de Gobernador de esta República que se me confía: que observaré el presente Reglamento Provincial: que defenderé, conservaré, y protegeré la Religión Católica Apostólica Romana, única verdadera, celando su respeto e inviolabilidad: que defenderé el territorio de la Provincia y sus derechos, contra toda agresión, adoptando cuantas medidas sean convenientes para conservarlos⁷.

⁶ En la reforma del día 18 de mayo de 1832 se especificó que el nombramiento del interino correspondía al Congreso cuando el Gobernador salía “*fuera de la Provincia*”, con lo cual, cuando se ausentaba para recorrer la campaña no era preciso que fuera el cuerpo representativo quien nombrara su sustituto.

⁷ En las reformas sancionadas los días 8 y 9 de abril de 1826 se modificó la fórmula del juramento cambiándolo por una promesa de honor. La redacción definitiva se sancionó el día 12 de agosto del mismo año, quedando así: “*Prometo bajo las garantías de honor y conciencia, desempeñar con fidelidad, pureza y*

CAPITULO XV

Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 1°.--- El Poder Ejecutivo de la Provincia, será en ella el Agente natural, e inmediato del Poder Ejecutivo Federal para todo aquellos que siendo de su resorte o del Congreso General de los Estados, no estuviese cometido a empleados particulares.

Art.2°.--- El puntual cumplimiento y ejecución de las leyes, que actualmente rigen; el vigilar sobre la recta administración de justicia, mediante iniciativas a los funcionarios de ella; el mando y organización de las Milicias dentro de la Provincia bajo las disposiciones y ordenanzas que para ello se dieren por el Congreso General de los Estados; la facultad de dirigir, citar y executar la enseñanza de la disciplina ordenada por el Congreso General; la nominación de sus respectivos oficiales de Coronel abajo; el sociego público; la libertad civil; la recaudación y arreglada inversión de los fondos públicos; y la seguridad real y personal de todos los que residen en el territorio del Estado, son otras tantas atribuciones de la autoridad del Gobernador de la República.

Art.3°.--- Será el órgano de la Provincia, y podrá iniciar, concluir y firmar tratados de comercio con una o más Provincias, con la anuencia y consentimiento del Congreso de la Provincia y del Congreso General de los Estados de que habla el art. 6, cap 13, de este Reglamento.

Art.4°.--- Recibirá los enviados, y nombrará por sí solo los que fuere necesario enviar fuera de la Provincia a los objetos de que trata el artículo antecedente.

Art.5°.--- Vigilará particularmente sobre el aumento de la población, agricultura, comercio y artes; arreglo de caminos secundarios, que faciliten la comunicación de los pueblos entre sí, y con las vías generales, dejando al cargo del Congreso General de los Estados arreglar y establecer las Postas y Correos generales, asignar la contribución para ellas y designar los grandes caminos.

Art.6°.--- Todos los objetos y ramos de hacienda, renta de correos, y de policía; los establecimientos científicos, y de todo otro género, formados, o que se formaren, son de la suprema inspección, superintendencia, y resorte del Gobernador de la República, bajo las leyes, u ordenanzas que las rigen, o que en adelante formare el cuerpo legislativo.

Art.7°.--- Exercerá las funciones del Patronato, y presentará para los beneficios Parroquiales en el distrito de la Provincia.

Art.8°.--- Nombrará un solo secretario que servirá todos los ramos, podrá separarlo por sí, y será responsable por la elección que hiciera para este puesto.

Art.9°.--- Concederá los pasaportes para fuera de la Provincia.

exactitud, el cargo que acepto de Gobernador de esta Provincia, en la ejecución y observancia de sus leyes e inviolable conservación de sus instituciones". Con la reforma del 8 de junio de 1832 el artículo volvió a su redacción original.

Art.10.--- Expedirá las cartas de ciudadanía, entre tanto se forma la constitución; y bajo las calidades que se prescriben en este Reglamento.

Art.11.--- Tendrá facultad de suspender las ejecuciones y sentencias capitales, conceder perdón o conmutación, previo informe del tribunal de la causa cuando poderosos motivos de equidad lo sugieran, o cuando algún grande acontecimiento feliz haga plausible la gracia; salvo los delitos que exceptúan las leyes.

Art.12.--- Puede proponer por escrito al Congreso de la provincia los proyectos, mejoras y reformas que estimare necesarias, o convenientes a la felicidad y prosperidad de la República.

Art.13.--- Remitirá cada año a la representación de la Provincia una razón exacta de las entradas de las Cajas del Estado, y Municipalidad, como también de las inversiones, existencias y deudas, impartiendo para este efecto las órdenes oportunas a quienes deban formularlas.

CAPITULO XVI

Límites del Poder Ejecutivo

Artículo1º.--- No podrá, fuera de los casos que se expresan en este Reglamento intervenir en negocio alguno judicial, civil o criminal contra persona alguna de cualquier clase, o condición que fuere, ni alterar el sistema de administración de justicia.

Art. 2º.--- No compulsará, avocará, ni suspenderá las causas pendientes, sentenciadas, o ejecutoriadas en los tribunales de justicia.

Art. 3º.--- Cuando la urgencia del caso le obligue a arrestar a algún ciudadano, deberá ponerlo dentro de tercero día a disposición de los respectivos Magistrados de justicia con todos los motivos y antecedentes para su juzgamiento.

Art. 4º.--- Se exceptúa el caso en que la causa del arresto sea de tal naturaleza, que por ella se halle comprometida la seguridad del Pays, o el orden y tranquilidad pública en cuyo evento tendrá el reo o reos, de acuerdo con su Asesor, y Fiscal del Tribunal de Apelaciones, que serán responsables mancomunadamente, por el tiempo necesario a tomar las medidas de seguridad, haciendo después la remisión a la justicia.

Art. 5º.--- No podrá imponer pechos, contribuciones, empréstitos, ni aumento de derechos de ningún género, directa, ni indirectamente sin previa resolución del Congreso de la Provincia.

Art. 6º.--- No puede tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarla en la posesión, uso, y aprovechamiento de ella; y si en algún caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado, y se le dé el buen cambio a bien vistas de hombres buenos.

Art. 7º.--- No puede por sí, imponer a ningún individuo pena alguna: el Secretario si firmase la orden, y el Juez que la execute serán responsables, y castigados como atentadores contra la libertad individual

Art. 8º.--- No expedirá orden, ni comunicación alguna sin que sea subscripta por el Secretario, y no tendrá efecto la que carezca de esta calidad.

Art. 9º.--- No podrá conceder a persona alguna en el Estado, privilegios exclusivos, excepto a los inventores de artes, o establecimientos de pública utilidad con aprobación del Congreso de la Provincia.

Art. 10.--- No podrá absolutamente, en ningún caso, por sí solo violar o interceptar la correspondencia epistolar, la que debe respetarse como sagrada.

Art. 11.--- En los casos, sin embargo, de un fundado temor de traición al Pays; de subversión del orden público a juicio del Gobernador de la República; su Secretario y el Síndico Procurador del Común, que tendrán voto con obligación del secreto, y bajo igual responsabilidad, podrá proceder asociados con los expresados, y en su defecto con los dos primeros Capitulares, a la apertura y examen de la correspondencia.

Art. 12.--- Los que en los puntos mencionados de traición o subversión del orden público resultaren delincuentes por la correspondencia podrán ser procesados y asegurados según la inminencia del peligro.

Art.13.--- No Podrá por sí solo disponer de los fondos del Estado para gastos extraordinarios sin anuencia previa del Congreso de la Provincia.

Art. 14.--- Se exceptúan los que fueren extraordinarios y ejecutivos que podrá por sí calificar y ordenar con la calidad de dar cuenta al Congreso, después de verificados para su aprobación.

Art. 15.--- En las presentes circunstancias en que esta Provincia hace el importante servicio de mantener un ejército cuya conservación, es del interés general de los Estados, queda expedito el Gobierno por ahora, y durante las mismas circunstancias para hacer los gastos que demanda la mantención y socorro de los oficiales y tropas con la moderación que exige la escasa situación de la Provincia.

Art. 16.--- No proveerá o presentará hasta otra deliberación ninguna canongía o prebenda eclesiástica⁸.

Art. 17.--- Las atribuciones esenciales del Poder Ejecutivo de la Confederación y las que el voto de las Provincias reunidas en Congreso tuviese a bien refundir en el Gobierno General de los Estados, serán límites del Poder Ejecutivo de este Estado.

⁸ En las reformas de los días 8 y 9 de abril de 1826 se otorgó al Gobernador esta facultad. El nuevo artículo quedó definitivamente aprobado por el Congreso Provincial el día 12 de agosto de 1826 en los siguientes términos: “*El P.E. de la Provincia puede proveer todas las canongías y prebendas que vacasen, y remover a los que por algún crimen se hagan dignos de semejante castigo, ínterin la Provincia de Córdoba sea la única contribuyente para el sostén del coro de esta Iglesia Catedral*”.

CAPITULO XVII

Del Poder Judicial

Artículo 1°.--- El Poder Judicial reside originariamente en el Pueblo: su ejercicio, por ahora y hasta que se sancione la constitución en el Tribunal de segunda suplicación, nulidad e injusticia notoria; en el tribunal de apelaciones, y en los demás juzgados ordinarios; para los casos que no haya tribunal señalado proveerá el Congreso.

Art. 2°.--- No tendrá dependencia alguna del Poder Ejecutivo Supremo y en sus principios, forma y extensión de funciones, estará sujeto a las leyes de su instituto.

SECCIÓN SÉPTIMA

CAPITULO XVIII

De los Tribuales de Justicia

Artículo 1°.--- Facilitar el despacho de las causas civiles y criminales por competente número de Magistrados, es uno de los primeros bienes de una República y el principal objeto que deben proponerse sus instituciones; el ciudadano logra sin dilación ver satisfechas sus acciones, y la república minorar el número de criminales con el pronto escarmiento de los delitos.

Art. 2°.--- Con este objeto, y el de precaver en cuanto lo permitan las circunstancias de la Provincia, la dilación que padece la administración de justicia, tanto en lo civil como en lo criminal, se nombrarán tres Alcaldes o Jueces de 1.^a instancia anualmente elegibles, dos para las causas civiles, y uno para sólo las criminales.

Art. 3°.--- Turnará entre los Escribanos que actualmente sirven la pensión de las causas criminales según la práctica observada.

Art. 4°.--- Se erigirá un Tribunal de Justicia con el título de tribunal de apelaciones: se compondrá de cinco individuos, de los cuales tres cuando menos serán abogados recibidos, y los restantes podrán elegirse entre los demás ciudadanos, aunque no revista esta calidad, con tal que sean de notoria providad y luces, prefiriéndose entre éstos, en igualdad de circunstancias, los que tengan grados en una de las facultades mayores en alguna Universidad⁹.

Art. 5°.--- El sueldo que han de disfrutar sobre las rentas del Estado, lo asignará el Congreso de la Provincia.

⁹ La ley de erección del Tribunal sancionada el 14 de agosto de 1826 redujo el número de miembros del Tribunal a tres. El 20 de febrero de 1827 volvió a modificarse quedando redactada de al siguiente manera: “*Se erijirá (sic) un Tribunal de Justicia con el título de Tribunal de Apelaciones: se compondrá de tres señores Ministros*”.

Art. 6°.--- Cada cuatro meses elegirá la misma corporación a simple pluralidad de sufragios su Presidente de entre los cinco que la componen; si no resultase elección, se repetirá segunda vez; y si aún resultase lo mismo, decidirá la suerte.

Art. 7°.--- El Presidente llevará la voz, cuidará de la Policía, y del despacho, formándose previamente el mismo tribunal el reglamento a que debe arreglar el ejercicio de sus funciones.

Art. 8°.--- Ninguno podrá ser nombrado para el Tribunal de apelaciones si no es mayor de veinte y cinco años, y reúne las calidades de que habla el artículo 4°.

Art. 9°.--- El primer nombramiento de los conueces que han de componer el Tribunal de apelaciones, lo hará por sí el Gobernador de la República, los subsiguientes los hará a propuesta en terna del mismo Tribunal, sin que la colocación numeral de los individuos arguya preferencia para el nombramiento.

Art. 10.--- La duración de estos empleados, será la de su buena comportación, y estarán sujetos a residencia cada cuatro años, o antes si lo exigiere la justicia

Art. 11.--- El soborno, el cohecho y la prevaricación de los Magistrados, producen acción popular contra los que lo cometen.

Art. 12.--- Se nombrará un Fiscal para lo civil, y criminal, y negocios de Hacienda que ocurran ante el Gobierno.

Art. 13.--- Un portero que desempeñará igualmente el oficio de Alguacil, y un escribano que percibirá sólo los derechos de actuación según arancel.

Art. 14.--- El Tribunal de Apelaciones conocerá, no sólo de todas las causas y negocios, de que según las leyes y demás disposiciones posteriores conocían las audiencias en tiempos del gobierno español sino también de las que este Reglamento le designa.

Art. 15.--- Los recursos de nulidad e injusticia notoria de las sentencias del tribunal de Alzada de comercio se decidirán en el Tribunal de Apelaciones.

Art. 16.--- El Juzgado de Alzada de comercio, turnará anualmente entre los cinco conueces que deben componer el Tribunal.

Art. 17.--- Las competencias entre las jurisdicción ordinaria y mercantil se decidirán por el Presidente del Tribunal de apelaciones con arreglo a la cédula ereccional del Consulado.

Art. 18.--- El Tribunal de apelaciones conocerá en grado de apelación y primera suplicación de los pleitos sobre contrabando y demás ramos de negocios y hacienda, quedando a los Ministros la primera instancia que correspondía a los Intendentes.

Art. 19.--- En los segundos recursos de suplicación, nulidad, e injusticia notoria, el Tribunal de apelaciones terminada la sustanciación del grado; dará cuentas con autos al Gobernador de la República.

Art. 20.--- Este con consulta del Asesor General, nombrará una junta de cinco individuos por las mismas reglas que se prescriben en el art. 4º., que la determinen; la cual, concluido su acto, quedará disuelta.

Art. 21.--- Corresponderá también al Tribunal de apelaciones, recibir de todos los Jueces de primera instancia del territorio avisos puntuales de las causas que se formen por delito, y listas de las causas civiles y criminales pendientes en sus juzgados, con expresión del estado de unas y otras, a fin de promover la más pronta administración de justicia.

Art. 22.--- Todos los Jueces de los tribunales inferiores deberán dar cuenta a más tardar dentro del tercero día al Tribunal de Apelaciones de las causas que se formen por delitos cometidos en su territorio.

Art. 23.--- Deberán asimismo remitir al mismo Tribunal listas generales cada seis meses de las causas civiles, y cada tres de las criminales que pendieren en sus Juzgados con expresión de su estado.

Art. 24.--- El Tribunal de apelaciones remitirá cada año al Supremo Poder Ejecutivo, listas exactas de las causas civiles, y cada seis meses de las criminales, así fenecidas, como pendientes con expresión des estado que éstas tengan, incluyendo las que haya recibido de los Juzgados inferiores a efecto de que el Gobierno por, medio de iniciativa, haga se administre sin retardo justicia.

Art. 25.--- Se restituye el Juzgado de provincia en los mismos términos, y con las mismas atribuciones que existían antes de extinguirse las audiencias en todo lo que no fuere opuesto a este Reglamento.

Art. 26.--- El Juzgado de Provincia, turnará anualmente entre los tres vocales Letrados del Tribunal de apelaciones.

Art. 27.--- Queda a las partes la libertad de ocurrir directamente al Tribunal de apelaciones omiso el Juzgado de Provincia excepto en los pleitos de cuantía de trescientos pesos, o menor, que quedarán concluidos con dos sentencias conformes.

CAPITULO XIX

De la Administración de Justicia

Artículo 1º.--- La administración de justicia en lo civil, y criminal seguirá los mismos principios, orden y método que hasta ahora, entre tanto las circunstancias de la Provincia, hacen adoptable, y permiten establecer el sistema de legislación por jurados.

Art. 2º.--- Ningún ciudadano podrá ser juzgado en causas civiles y criminales por ninguna comisión sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley.

Art. 3º.--- En los negocios comunes, civiles, y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas.

Art. 4º.--- Los Eclesiásticos gozarán del fuero de su estado en los términos que prescriben las leyes, y los militares gozarán también el suyo en los términos que previene la ordenanza.

CAPITULO XX

De la Administración de la Justicia en lo Civil

Artículo 1º.--- No se podrá privar a ningún individuo del Estado el derecho de terminar sus diferencias por medio de Jueces árbitros elegido por ambas partes, y la sentencia que ellos dieren se ejecutará, si las partes, al hacer el compromiso no se hubieren reservado el derecho de apelar.

Art. 2º.--- El Juez de 1ª. instancia antes de entrar a conocer judicialmente ejercerá el oficio de conciliador y amigable componedor; y el que tenga que demandar por negocios civiles, o por injurias debe presentarse a él con este objeto.

Art. 3º.--- El Juez de 1ª. instancia con dos hombres buenos nombrados uno por cada parte, oirá al demandante y al demandado; se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intención y tomará oído el dictamen de los dos asociados, la providencia que le parezca propio para terminar el litigio, sin más progreso, como se terminará en efecto, si las partes se aquietan con esta determinación extrajudicial.

Art. 4º.--- Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la reconciliación, no se entablará pleito alguno.

Art. 5º.--- Los Jueces de 1ª. instancia no admitirán demanda por escrito de cantidad que no exceda de cien pesos, y se expedirán en ellas por un juicio verbal; podrán si las partes presentar sus relaciones para el mero efecto de instruir los Juzgados y esclarecer más sus derechos.

SECCION OCTAVA

CAPITULO XXI

De la Administración de Justicia en lo Criminal

Artículo 1º.--- En las causas criminales, los reos nombrarán un Padrino que presencie su confesión y declaraciones de los testigos, sin perjuicio del Abogado, y Procurador establecidos por la ley.

Art. 2º.--- Cuidará el Padrino que la confesión y declaraciones se sienten por el escribano o Juez de la causa, clara y distintamente en los términos en que hayan sido expresadas, sin modificaciones, ni alteraciones ayudando al reo en todo aquello en que por el temor, pocos talentos, u otra causa no pueda por sí mismo expresarse.

Art. 3°.--- A ningún reo se le tomará su confesión bajo juramento, sobre hecho, o delito propio.

Art. 4°.--- Se prohíbe a los Jueces ordinarios ejecutar las sentencias de presidio, azotes o destierro sin consultarse ante al Tribunal de Justicia.

Art. 5°.--- Todo hombre debe presumirse inocente hasta que no haya sido declarado culpable con arreglo a las leyes y si entre tanto se juzga indispensable asegurar su persona, cualquier rigor que no sea para esto sumamente necesario deberá ser reprimido.

Art. 6°.--- Toda sentencia en causas criminales para que se repunte válida debe ser pronunciada por el texto expreso de la ley, y la infracción de ésta, es un crimen en el Magistrado que será corregido con el pago de costas, daños y perjuicios causados.

Art. 7°.--- No se entienden por esto derogadas las leyes que permiten la imposición de las penas al arbitrio prudente de los Jueces, según la naturaleza y circunstancias de los delitos, ni restablecida la observancia de aquellas otras que por atroces e inhumanas se hallan proscriptas y desusadas.

Art. 8°.--- Ningún individuo podrá ser arrestado sin prueba al menos semiplena, o indicios vehementes de crimen por el que merezca pena corporal, que se harán constar en previo proceso sumario.

Art. 9°.--- En término de tercero día se hará saber al reo la causa de la prisión, y no siendo el Juez aprensor el que deba seguirla lo remitirá con los antecedentes al que fuese nato, y deba conocer.

Art. 10.--- Ningún reo estará incomunicado después de su confesión, y nunca podrá dilatarse esta por más de diez días sin justo motivo del que se pondrá constancia en el proceso, haciéndose saber el embargo al reo y sucesivamente de tres en tres días si esto continuase.

Art. 11.--- Siendo las cárceles para seguridad, y no para castigo de los reos toda medida que a pretexto de precaución, sólo sirva para mortificarlos maliciosamente será corregida por los tribunales indemnizando a los agraviados por el orden de justicia.

Art. 12.--- En cualquiera estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena corporal se le pondrá en libertad bajo fianza.

Art. 13.--- Para decretarse prisión, embargo de bienes, y pesquisa de papeles contra cualquier habitante de la República, se individualizará en el decreto su nombre, o señales que distingan su persona con el objeto de la diligencia.

Art. 14.--- Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporción únicamente a la cantidad a que ésta pueda extenderse.

Art. 15.--- En el acto del embargo se formará prolijo inventario en presencia del reo quien deberá *firmarlo*, dándosele copia autorizada para su resguardo puestos los bienes en seguridad con fe del escribano, y en su defecto del mismo Juez y dos testigos.

Art. 16.--- Cuando al tiempo del embargo no se pudiese por algún accidente formar inventario, se aseguran los bienes a que se extienda dicho embargo, bajo de dos llaves, una de las cuales tomará el Juez, y la otra el reo, y no siendo esto practicable, se cerrarán y sellarán a presencia suya las arcas y puertas de la casa o habitaciones, y primera oportunidad se abrirán a su presencia y se practicará el inventario.

Art. 17.--- Cuando hubiere de hacerse el embargo en ausencia del reo fuera del lugar nombrará el Juez un ciudadano honrado de bienes conocidos, que haga sus veces en este acto; pero si la no asistencia del reo procediese de enfermedad, el mismo nombrará persona de su satisfacción.

Art. 18.--- El Juez o comisionado, que prenda o arreste a cualquier ciudadano (no siendo infraganti delito) sin guardar el orden que prescribe el Art. 8.º de este Cap. será removido; el que faltare a lo que se previene para los embargos, será responsable al interesado de los bienes que justificare faltarle.

Art. 19.--- Los Escribanos harán personalmente las notificaciones a las partes, suscribiéndolas éstas: en caso de resistir a ello, o no haber firmar suplirá por el notificado un testigo con expresión del defecto.

Art. 20.--- Si el Escribano no encontrare a la parte para la notificación de su causa, la solicitará hasta por tercera vez; si aún entonces no le hallase, le dejará un cedulón firmado de su mano, que contenga el auto, o decreto que va a notificarle; y haciendo constar en el proceso las diligencias de haberlo así ejecutado con la atestación de los dos testigos, surtirá los mismos efectos que si se hubiera hecho la notificación en persona.

Art. 21.--- Cualquier omisión de los Escribanos en punto tan interesante, será castigado por el Juez de la causa según la gravedad y circunstancias de la causa.

Artículo último.--- El Poder Ejecutivo de esta República a requerimiento de los respectivos Poderes Executivos de los otros Estados, entregará cualquiera de los reos acusados de crimen de Estado, hurto, homicidio, u otros graves que se refugiaren en esta Provincia, para que sean juzgados por la autoridad provincial a que corresponda.

CAPITULO XXII

Artículo único.--- Las diferencias que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y uno, o muchos ciudadanos de otra; entre ciudadanos de una misma Provincia que disputaren tierras *concedidas* por diferentes Provincias; entre una Provincia o ciudadanos de ella, y otros Estados, ciudadanos o vasallos extranjeros; y todas aquellas en que el Estado Federal tenga, o sea parte, corresponde su conocimiento al Poder Judicial de los Estados.

CAPITULO XXIII

Declaración de derechos

Artículo 1°.--- Los miembros del Estado deben ser protegidos en el goce de los derechos de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad; nadie puede ser privado de alguno de ellos, sino conforme a las Leyes.

Art. 2°.--- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden público; ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los Magistrados.

Art. 3°.--- Ningún habitante del Estado estará obligado a hacer lo que no manda ley clara y expresamente, ni privado de lo que ella del mismo modo no prohíbe.

Art. 4°.--- Todo hombre tiene libertad de permanecer en el territorio del Estado, o retirarse siempre que por esto no se exponga la seguridad del país o sean perjudicados los intereses públicos

Art. 5°.--- Ningún género de trabajo, de cultura, de industria, o de comercio, serán prohibidos a los ciudadanos de este Estado.

Art. 6°.--- La libertad de publicar las ideas por la prensa es un derecho tan apreciable al hombre, y tan esencial para la conservación de la libertad civil, como necesaria al progreso de las luces de un Estado.

Art. 7°.--- Con este objeto deberá el Cabildo de esta ciudad disponer que de sus fondos, se costee la compra y establecimiento de una imprenta pública.

Art. 8°.--- Todo individuo natural del país, o extranjero, puede poner libremente en este Estado imprentas públicas con solo la calidad de previo aviso al Gobernador de la República.

Art. 9°.--- El Reglamento a que debe sujetarse este establecimiento lo dará en su caso el Congreso de la Provincia.

Art. 10.--- El crimen es sólo la infracción de la Ley que está en entera observancia; pues sin este requisito debe reputarse sin fuerza.

Art. 11.--- Ningún habitante del Estado puede ser penado, ni confinado sin que preceda forma de proceso y sentencia legal.

Art. 12.--- Ninguna sentencia pronunciada por traición contra el Estado, o cualesquiera otro delito arrastrará infamia a los hijos, o descendientes del reo, ni privará a éste del derecho de disponer de sus bienes según las leyes.

Art. 13.--- Ningún ciudadano podrá resistir la prisión de su persona, o embargo de sus bienes decretado por Juez competente, ni desobedecer si fuere llamado; pues se hace culpable por la resistencia; pero tendrá derecho a reclamar las disposiciones de este

Reglamento referentes a la seguridad individual, y repetir contra el Juez o comisionado que las quebrantase según la responsabilidad que le resulte.

Art. 14.--- La casa de un ciudadano es un sagrado que no puede violarse sin crimen, y sólo en caso de resistirse a la convocatoria del Juez podrá allanarse.

Art. 15.--- Esta diligencia se hará con la consideración debida personalmente por el Juez, y en caso, que algún urgente motivo se lo impida dará al delegado orden por escrito con las especificaciones convenientes, dejando copia de ello al individuo que fuera aprehendido y al dueño de la casa si la pidiera.

Art. 16.--- Todo ciudadano podrá tener en la casa, pólvora, armas blancas, y de fuego, para la defensa de su persona y propiedades; en casos urgentes en que no pueda reclamar la autoridad y protección de los Magistrados.

Art. 17.--- El Gobierno no podrá exigirselas sinó por su justo precio cuando sean necesarias para la defensa del Estado.

Art. 18.--- Ninguno será obligado a prestar auxilios de cualquier clase para los ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de un cuerpo, o individuo militar sinó de orden del Magistrado civil según la Ley; el perjuicio que en este caso se infiera al propietario será indemnizado por el Estado.

Art. 19.--- Todos los mandamientos o providencias que en uso legítimo de su autoridad expidan los Magistrados para el buen orden de la República, y dirección de los negocios, deberán ser por escrito.

Art.20.--- Todos los extranjeros de cualquier nación que sean se recibirán de la misma seguridad que las de los demás ciudadanos siempre que respeten la religión del Estado, y que reconozcan la independencia de esta República, su soberanía, y las autoridades constituídas por la voluntad general de sus habitantes.

Art.21.--- Las anteriores disposiciones relativas a la seguridad individual jamás podrán suspenderse

Art.22.--- Cuando por un muy remoto y extraordinario acontecimiento que comprometa la tranquilidad pública, o la seguridad del Estado no pueda observarse cuanto en ella se previene, el gobernador de la República que se viese en esta fatal necesidad, dará razón inmediatamente al Congreso de la Provincia, quien examinará los motivos de la medida, y el tiempo que deba durar.

CAPITULO XXIV¹⁰

Elecciones de los Cabildos

¹⁰ La ley de extinción de los cabildos del 30 de diciembre de 1824 derogó los Capítulos XXIV y XXV referidos a la corporación municipal.

Artículo 1°.--- Las elecciones de empleos concejiles se harán popularmente, tanto en esta Ciudad como en las Villas de su pertenencia, donde se hallen establecidos Cabildos, sin exceder la convocación fuera del recinto de ellas.

Art.2°.--- Sin embargo, los ciudadanos de las inmediaciones, y campaña, con ejercicio de ciudadanía, podrán concurrir, si quieren a dicha elección.

Art.3°.--- la Ciudad o Villa, se dividirá en cuatro Secciones, y en cada una de ellas votarán los ciudadanos allí comprendidos por cinco electores, sea cual fuere el número de sus habitantes.

Art.4°.--- Este acto será presidido por un Capitular asociado de los Alcaldes de Barrio, y un Escribano, y en su defecto de dos vecinos en calidad de testigos, y se practicará el día 15 de Noviembre.

Art.5°.--- Concluída la votación en las Secciones se reunirán todos los votos de ellas en la Sala Capitular, y hecho allí por los mismos Regidores que la han presidido, y el Alcalde de Primer Voto públicamente el escrutinio general serán electores los que resulten con el mayor número de sufragios.

Art.6°.--- Estos se juntarán en la misma Sala Capitular a hacer la elección para el año entrante el día 15 de Diciembre, y concluída se notificará inmediatamente a los electos a fin de que estén prontos para su recepción el día primero de Enero en que serán posesionados por el Cabildo saliente, dándose aviso al Gefe de la República.

Art.7°.--- El entrante dentro de ocho días elegirá los Alcaldes de Barrio, Hermandad y Pedaneos que sean necesarios para mantener el orden, y administrar justicia según sus facultades y empleo en los Curatos y Departamentos de la Campaña en toda la comprensión de su respectivo territorio.

Art.8°.--- Formarán libro para dichas elecciones, que harán recaer en personas de la mejor calidad, y nota, vecinos del lugar, que sepan leer y escribir, y pasarán razón de los electos al Gobernador de la República.

Art.9°.--- Nombrará el Cabildo entrante dos Asesores Letrados de los cuales uno será de la corporación, y de los dos Juzgados en lo Civil, y el otro del Juzgado en lo Criminal.

Art. 10.--- Los Cabildos ya establecidos bajo la más alta responsabilidad informarán al Congreso de la Provincia de los lugares donde por su vecindario, y competentes proporciones convenga establecer nuevos Ayuntamientos.

Art. 11.--- Los Alcaldes y el Síndico Procurador se mudarán todos los años; los Regidores por mitad cada año.

Art. 12.--- El que hubiere exercido cualesquiera de estos cargos, no podrá volver a ser elegido para ninguno para ninguno de ellos sin que pasen por lo menos dos años.

Art. 13.--- Para ser Alcalde, Regidor o Procurador Síndico además de ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, se requiere ser mayor de veinte y cinco años, con cinco a lo menos de vecindad y residencia en la Provincia.

Art. 14.--- Donde los fondos y otras circunstancias lo permitan, tendrá el Ayuntamiento un secretario elegido por éste, a pluralidad de votos, y dotado de los fondos del Común.

CAPITULO XXV

Estará a cargo de los Ayuntamientos:

1°.--- La policía de salubridad y comodidad;

2°.--- Auxiliar al Alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas, y bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público.

3°.--- Hacer el repartimiento y recaudación de todas las contribuciones y remitirlas a la Tesorería de la Provincia;

4°.--- Cuidará de todas las escuelas de primeras letras, y de los demás establecimientos de educación que se paguen de los fondos del común;

5°.--- Cuidará de los hospitales, y demás establecimientos de beneficencia que se establecieren bajo las reglas que se prescriban.

6°.--- Cuidará de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes, y de todas las obras públicas, de necesidad, vitalidad y ornato.

7°.--- Formar las ordenanzas municipales del Pueblo, y presentarlas al Congreso para su aprobación por medio del gobierno de la Provincia, que las acompañará con su informe.

8°.--- Promover la agricultura, la industria, y el comercio, según lo permitan las circunstancias de la Provincia, y cuanto le sea útil y benéfico; a estos objetos promoverá eficazmente el establecimiento de sociedades económico- patrióticas.

9°.--- Los Ayuntamientos desempeñarán todos estos encargos bajo la inspección del gobierno de la Provincia, sin que por esto se entienda atribuírsele la facultad de confirmar o suspender los acuerdos de los Cabildos.

10.--- En los casos no obstante en que tema prudentemente la subversión del orden público en razón de ejecutarse dichos acuerdos, podrá suspenderlos, y dar cuenta al Congreso de la legalidad de su procedimiento.

11.--- El Ayuntamiento formará por sí, y a la más posible brevedad; un reglamento para la arreglada inversión del caudal de Propios, y arbitrios con arreglo a los Capítulos 27, 28 y demás que de ello tratan en el Código de Intendentes.

12.--- Dicho reglamento lo pasará el Ayuntamiento al Congreso de la Provincia para su aprobación, y fuera de este caso en los demás en que por dicha ordenanza se dispone recurrir a la Junta Superior de Hacienda, se recurrirá al Gobierno Supremo de la Provincia.

13.--- La administración e inversión de los caudales de Propios y arbitrios, correrá a cargo de una Junta de este nombre según se halla establecido por el Código de Intendentes; será de su cargo nombrar depositario bajo de responsabilidad de los que le nombren.

14.--- La inversión de los caudales sobrantes de Propios y arbitrios, se hará con arreglo al cap. 41 de dicha ordenanza, pero a propuesta de los Cabildos al Gobierno de la Provincia para su aprobación.

CAPITULO XXVI

Del Ministerio de Hacienda

Artículo 1°.--- La provisión de empleos gefes en el Ministerio de Hacienda, la hará por sí solo el Gobernador del Estado, siendo responsables de las malas elecciones de dichos gefes.

Art. 2°.--- La de oficiales subalternos la verificará a propuesta del Ministerio por escala de antigüedad en igual aptitud, y buenos servicios.

Art. 3°.--- Entre tanto los fondos del Estado permiten proveer la plaza de Intendente de Hacienda, se restituye a los Ministros la jurisdicción contenciosa que se les concede por la Ley 2, tít. 3, lib. 8, de las Indias, quedando por ahora sin efecto en esta parte lo dispuesto por el art. 27 de la Ordenanza de Intendentes.

Art. 4°.--- Uno de los dos conjuces no letrados, que han de componer el Tribunal de Apelaciones por turno, hará el oficio de contador, para tomar y fenecer las cuentas que debe presentar cada año el Ministerio de Hacienda.

Art. 5°.--- El Vocal que hiciere de Contador podrá hacer los autos, tocantes a las dichas cuentas ante los escribanos de la Ciudad, y cometer al Alguacil Ordinario la ejecución de sus mandamientos, a que acudirán todos como tienen obligación por sus oficios.

Art. 6°.--- El Gobierno nombrará anualmente una persona práctica y entendida en este Ministerio que haga las veces de contador y ordenador en las cuentas que presente el Ministro de Hacienda, y el Gobierno recompensará su trabajo con fondos del Estado.

Art. 7°.--- Si de las cuentas que se tomaren y alcances que hiciere el Vocal Contador, resultaren, y se causaren algunos pleitos, conocerán de todas en 1.^a y 2.^a instancias los tres conjuces letrados del tribunal de Apelaciones; si remitieren en discordia, el Gobernador de la República nombrará al Asesor General del Gobierno que con los demás conjuces determine el negocio remitido.

Art. 8º.--- En los casos de segunda suplicación se expedirá este recurso a semejanza de lo dispuesto por este Reglamento en los Arts. 19 y 20, Cap. 18, omisa la consulta del Asesor General, si el asunto hubiese sido antes remitido en discordia.

Art. 9º.--- El Gobernador de la República asistirá por sí, o por delegación en uno de los individuos del Tribunal de Apelaciones, a la visita mensual, corte y tanteo anual de las cajas del Estado.

Art. 10.--- Las cuentas de la administración de correos se expedirá por el mismo orden y método que queda prevenido para el Ministerio de Hacienda.

CAPITULO XXVII

Del Juzgado de Comercio

Artículo 1º.--- Por ahora y entre tanto es verificable el establecimiento del Tribunal de Consulado de que trata el art. 2 de la Cédula Ereccional expedida para el Virreynato de Buenos Aires, los asuntos mercantiles se expedirán por un Juez de Comercio con arreglo a la dicha Cédula en cuanto no se opongan a los artículos contenidos en este Reglamento.

Art. 2º.--- Se nombrará un Juez de Comercio con la jurisdicción, fueros y preeminencias que le estaban concedidas por la referida Cédula, un Teniente Conciliario que le substituya, en ausencias y enfermedades, o impedimentos legales; un Síndico Conciliario que promueva los asuntos concernientes al bien general del comercio.

Art. 3º.--- Su instituto será la más pronta administración de justicia, y la protección y fomento del comercio en todos los ramos.

Art. 4º.--- La elección se hará el 5 de Enero de cada bienio en casa del Juez Consular, precedida del Juez de Alzadas: los sufragantes para ella deben tener las calidades de vecinos domiciliarios de esta Ciudad, comerciantes en todo ramo, que hayan hecho introducciones propias, o a comisión, y pagados derechos en esta Aduana, hasta en cantidad de cien pesos por una vez.

Art. 5º.--- La forma de la elección será la que prescribe la citada Cédula Ereccional, en los artículos 41 y 42, con la diferencia que los electores sólo serán tres y los elegidos otros tres como se dispone en el artículo 2 de este Reglamento.

Art. 6º.--- El Juez de Alzada después de poner en posesión a los elegidos, dará cuenta con los correspondientes testimonios de todo lo actuado al Gobernador de la República.

Art. 7º.--- No podrán hacerse las elecciones sin que concurran a lo menos ocho vocales; y en caso de no estar completo este número, se procederá con arreglo a lo prevenido en iguales casos en el art. 46 de la Cédula Ereccional citada.

Art. 8º.--- La administración de justicia pertenece privativamente al Juez Consular.

Art. 9º.--- Podrá expedirse, y deliberar por si solo hasta la cantidad de cien pesos, y de esta cantidad adelante con los acompañados que prescriba el artículo 10 de la referida Cédula.

Art. 10.--- Las apelaciones seguirán el orden prevenido en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la citada Cédula Ereccional.

Art. 11.--- Si de los negocios executoriados se interpusiese recurso de nulidad, e injusticia notoria que por el artículo 13 de la referida Cédula se interponía al Consejo de Indias, el Tribunal de Alzadas de comercio terminada la substanciación del grado, dará cuenta con autos al Gobernador de la República.

Art. 12.--- Este nombrará inmediatamente una junta compuesta de los letrados restantes en el Tribunal de Apelaciones, el Asesor General de Gobierno, y dos comerciantes de probidad, inteligencia y crédito en el comercio, donde se terminará el recurso con arreglo a las leyes.

Art. 13.--- Serán fondos consulares los derechos que por ahora están establecidos en la Provincia; las multas y penas pecuniarias que imponga el Juzgado consular y Juez de Alzadas en los casos prevenidos en la precitada Cédula.

Art. 14.--- Estos fondos tendrán por objeto principal los gastos ordinarios, la reparación de caminos, y demás fines que recomienda la dicha Cédula.

Art. 15.--- La exacción se hará en la Aduana por los Ministros de Hacienda, quienes se entenderán con la Junta Consular por el orden e independencia prevenida en el art. 32 de la Cédula Ereccional.

Art. 16.--- La conservación y administración de estos fondos estarán a cargo de la Junta Consular compuesta del Juez, su Teniente Conciliario, y Síndico Conciliario, bajo la seguridad de una caja con tres llaves, no pudiendo abrirse sin la precisa asistencia de los tres claveros; como tampoco podrá girarse libramiento sin la intervención de éstos.

Art. 17.--- Será obligación de la Junta Consular presentar cuenta documentada por el tenor de lo prevenido a este respecto en la Cédula referida.

Art. 18.--- Para su examen o glosa serán nombrados comerciantes de inteligencia y probidad por la Junta General de Vocales a mayoría de votos. Para la aprobación de ella se elevará al Gobierno Supremo previo el informe de los glosadores.

CAPITULO XXVIII

De las Milicias Nacionales

Artículo 1º.--- Todo individuo del Estado nacido en América: todo extranjero que goce de sufragio activo en las asambleas cívicas: todo español europeo con carta de ciudadano, y todo africano, y pardo libres, habitantes de la ciudad, villas y campaña desde la edad de veinte años hasta de cincuenta, si tuviesen robustez, son soldados del Estado.

Art. 2°.--- Disponer la organización, armamento y disciplina de las milicias corresponde al Congreso Federal de los Estados; pero siendo necesaria a la seguridad de un estado libre una milicia bien organizada, el Congreso de la Provincia, entre tanto aquel se verifica podrá disponer la organización, armamento y disciplina de un cuerpo de milicia reglada de infantería, o caballería, y sobre el pie de fuerza que estime conveniente.

Art. 3°.--- El objeto principal de esta milicia, será acudir a la defensa común de los Estados, y al auxilio y reposición de los ejércitos de línea, cuando la necesidad lo exija y lo ordene el Congreso general de los Estados.

Art. 4°.--- En el caso preciso de sacarse una parte de esta milicia para la reposición de los ejércitos, cuidarán los gefes de hacerlo con individuos expeditos sin embarazos justos que los excepcionen, reponiendo inmediatamente la falla que resulte para mantener íntegra la fuerza nacional de su cargo.

Art. 5°.--- En la primera creación del cuerpo de Milicias de que habla el Art. 2.º, nombrará por sí el Gobernador de la República, todos los Gefes de Coronel abajo, y demás oficiales subalternos; y en lo sucesivo hará el nombramiento de éstos a propuestas de dichos Gefes con arreglo a ordenanzas.

Art. 6°.--- La Milicia Nacional no gozará de fuero militar si no cuando se halle en actual servicio.

CAPITULO XXIX

De las Milicias Cívicas

Artículo 1°.--- Una milicia bien reglada, e instruída, compuesta de los ciudadanos es la defensa natural más conveniente y segura a un Estado libre.

Art. 2°.--- Con este objeto: de los habitantes de la Ciudad y su recinto se formará de nuevo el cuerpo de Cívicos por Regimientos, Batallones o compañías sueltas.

Art. 3°.--- Esta milicia se compondrá únicamente de los vecinos que cuenten con una finca o propiedad cuando menos del valor de cuatrocientos pesos; como igualmente de los clientes de tienda abierta, o de cualquiera que ejerza algún arte u oficio público.

Art. 4°.--- La milicia cívica estará plenamente sujeta y subordinada al Gobernador de la República cesando toda intervención del Cabildo.

Art. 5°.--- El nombramiento de Gefes y Oficiales subalternos en la primera creación de esta milicia, la hará por sí el Gobernador de la República, y en lo sucesivo nombrará los oficiales subalternos a propuesta de la Plana Mayor.

Art. 6°.--- Para que no quede sin ejercicio la jurisdicción ordinaria no gozará de fuero militar, la milicia cívica.

Art. 7°.--- El instituto principal de esta milicia será mantener el orden y tranquilidad del Pueblo, auxiliar la administración de Justicia, y defender la Patria.

Art. 8°.--- Ningún soldado veterano, nacional o cívico, a quien se confía las armas blancas, o de fuego para defender el orden público podrá hacer uso de ella fuera de la facción contra ningún habitante del Estado.

Art. 9°.--- El que de este modo usase de ella contra cualquiera habitante de esta República, será juzgado y castigado dentro del tercero día por el respectivo Juez para satisfacción de la vindicta pública, altamente interesada en la seguridad individual.

CAPITULO XXX

Como la ilustración igualmente que la virtud son necesarias para la conservación pacífica de los derechos del hombre en sociedad, será una obligación de las autoridades, y Magistrados de esta República, fomentar el interés de la literatura y de las ciencias protegiendo los seminarios de ellas, especialmente la Universidad, Escuelas públicas y Aulas de gramática; promover instituciones útiles, por recompensa, e inmunidades para la promoción de la agricultura, artes, ciencias, comercio, oficios, etc. Sostener e inculcar los principios de humanidad y general benevolencia, caridad pública y privada; industria y frugalidad, honestidad y delicadeza en su proceder; sinceridad, sentimientos generosos y todo afecto social entre el pueblo.

CAPITULO ULTIMO

El Congreso de la Provincia, nombrará una comisión de tres individuos de su seno, cuyo objeto será velar sobre la observancia de este Reglamento, y dar cuenta al Congreso de las infracciones que notare.

Tratamientos¹¹

El Poder Legislativo tendrá el tratamiento de Poderoso Señor, en el principio, y el de Alteza en el decurso.

El Supremo Poder Ejecutivo tendrá el tratamiento de Excelencia.

La Junta que se manda formar en el Cap. 18, art. 20 para los recursos de segunda suplicación, durante el ejercicio de sus funciones, tendrá el tratamiento de Excelencia.

¹¹ En dos oportunidades estas disposiciones sobre los tratamientos de las autoridades provinciales sufrieron modificaciones. El 8 de abril de 1825 se decidió que la Sala de Representantes sería denominada "*Vuestra Honorabilidad*". El 28 de octubre de 1827 se acordó que el Tribunal de Apelaciones pasara a ser denominado "*Excelencia*" en lugar del "*V.S.*" previsto, y los escritos fueran encabezados por el título "*Exma. Cámara de Apelaciones*" en lugar de "*Recto Tribunal*".

El Tribunal de Apelaciones que se manda erigir en el Cap. 18, Art. 4º, tendrá en cuerpo unido el tratamiento de V. S. y en particular de Vd. llano. Al principio se le encabezará Recto Tribunal.

Sala de sesiones en Córdoba, 30 de Enero de 1821.

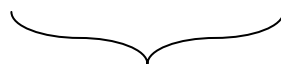
Francisco Bedoya: Presidente.— Dr. José Marcelino Tisera: Vice Presidente.— José Lascano, José Francisco Xigena, Maestro Juan José Espinosa, Dr. José Roque Savid, José Vélez, José Felipe Arias, Dr. Francisco Ignacio Bustos, Lorenzo Recalde y Cano, Domingo de Malde, Licenciado Andrés de Oliva: Secretario.—

Código Constitucional Provisorio de la Provincia de Córdoba de 1847

¡VIVA LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA!

¡Mueran los Salvages Unitarios!

**CODIGO
CONSTITUCIONAL
PROVISORIO DE LA PROVINCIA
DE
CORDOBA**



SESION PRIMERA

CAPITULO PRIMERO

De la Provincia de Córdoba y sus derechos

Artº 1º La Provincia de Córdoba es la reunión de todos sus habitantes nacidos, ó avecinados dentro de los linderos, que demarcan actualmente sus territorios.

Art. 2. La Provincia de Córdoba es libre é independiente: reside esencialmente en ella la soberanía, y le compete el derecho de establecer sus leyes fundamentales por constituciones fijas; y entretanto, por Códigos provisorios en cuanto no perjudique los derechos particulares de las demás Provincias, y los generales de la Confederación.

CAPITULO 2º

DERECHO PÚBLICO

Derechos que competen al Hombre en Sociedad

Artº 1º Los derechos del hombre en sociedad, son la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad, y la seguridad: el primero tiene un concepto tan claro, tan inequívoco y uniforme, que no ha menester otras esplicaciones: el segundo resulta de la buena opinión que cada uno se adquiere por la integridad y rectitud de sus procedimientos, llenando todos los deberes de un hombre de bien, y de un buen ciudadano: la libertad es la facultad de hacer todo lo que no daña a los derechos de otros individuos, ni al cuerpo de la sociedad: su justo y honesto ejercicio consiste en la fiel observancia de la ley: de otro modo, sería arbitrario y destructor de la misma libertad: la igualdad consiste en que la ley sea una misma para todos los ciudadanos, sea que castigue

ó que proteja: la propiedad es el derecho que cada uno tiene de gozar y disponer de los bienes que haya adquirido con su trabajo é industria: la seguridad existe en la garantía y protección que da la sociedad a cada uno de sus miembros para que no se viole la posesión de sus derechos, sin que primero se verifiquen aquellas condiciones que están señaladas por la ley para perderla.

Art. 2. Todo hombre gozará de estos derechos en el territorio del Estado, sea ó no ciudadano, sea americano o extranjero.

CAPITULO 3º

DEBERES DEL HOMBRE EN SOCIEDAD

Artº 1º La declaración de los derechos antecedentes contiene la obligación de los Legisladores; pero la conservación de la sociedad, pide que los que la componen, reconozcan y llenen igualmente las suyas.

Art. 2. Los derechos de los otros son el límite moral de los nuestros, y el principio de nuestros deberes relativamente al cuerpo social, ellos reposan sobre dos principios, que ha grabado en todos el Supremo Ser autor de la naturaleza, á saber: *Haz siempre á los otros todo el bien que quisieras recibir de ellos: no hagas á otro lo que no quisieras que te hiciese.*

Art. 3. Son deberes de cada individuo para con la sociedad, vivir sometido á sus leyes, haciendo el bien que ellas prescriben, y huyendo del mal que prohíben; obedecer y respetar á los magistrados y autoridades constituidas como ministros de la ley, y primeros ciudadanos; mantener la libertad y la igualdad de los derechos, contribuir á los gastos públicos, y servir á la Patria cuando ella lo exija, haciéndole el sacrificio de sus bienes, de su vida y de su fama.

Art. 4. Ninguno es hombre de bien, ni buen ciudadano, si no observa las leyes fiel y religiosamente; si no es buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo, y buen padre de familia.

Art. 5. Cualquiera que traspasa las leyes abiertamente, ó que las eluda con astucia, ó rodeos artificiosos y culpables, es enemigo de la sociedad; ofende los intereses de todos, y se hace indigno de la benevolencia pública.

SESION SEGUNDA

CAPITULO 4º

DEBERES DEL CUERPO SOCIAL

Artº 1º La Sociedad afianza á los individuos que la componen el goce de su vida, de su libertad, de sus propiedades, y demás derechos naturales, en esto consiste la garantía

social que resulta de la acción reunida de los miembros del cuerpo, y depositada en la soberanía.

Art. 2. Siendo instituidos los Gobiernos para bien y felicidad común de los hombres, la Sociedad debe proporcionar auxilios á los indigentes y desgraciados, y la instrucción á todos los ciudadanos.

Art. 3. Toda disposición ó estatuto contrario á los principios establecidos en los capítulos antecedentes, es injusto, y debe ser sin ningún efecto.

CAPITULO 5º

DE LA RELIGION

Artº 1º La Religion Católica, Apostólica, Romana, es la Religion del Estado y la única verdadera: su protección, conservación, pureza e inviolabilidad será uno de los primeros deberes de la representación del Estado y de todos sus magistrados, quienes no permitirán en todo el territorio otro culto público, ni enseñar doctrina contraria á la de Jesucristo, enseñada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

Art. 2. Todo hombre deberá respetar el culto público, y la Religion Santa del Estado. La infracción de este artículo, será mirada y castigada como una violación de las leyes fundamentales del Estado.

SESION TERCERA

CAPITULO 6º

DE LA CIUDADANIA

Artº 1º Todo hombre libre, siempre que haya nacido, y resida en la Provincia es Ciudadano; pero no tendrá voto activo hasta la edad de 18 años, ni pasivo, hasta haber cumplido 25 ó ser emancipado, y á mas reúna otras calidades que en su lugar se exigirán.

Art. 2. Todo extranjero de la misma edad que se establezca en el país con ánimo de fijar en él su domicilio, y habiendo permanecido por espacio de 4 años, se haya hecho propietario de un fondo al menos de dos mil pesos, ó en su defecto ejerza arte u oficio útil, gozará de sufragio activo en las asambleas cívicas, con tal que sepa leer y escribir.

Art. 3. A los seis años de residencia, tendrá voto pasivo para los empleos de República, teniendo la indispensable calidad de Americano.

Art. 4. Para gozar ambos sufragios, deberá antes renunciar toda otra ciudadanía.

Art. 5. Los nacidos en el país que desciendan por cualquiera línea de esclavos, tendrán sufragio activo siendo hijos de padres ingenuos, y pasivo para los empleos de República, los que estén fuera del cuarto grado respecto de dichos sus mayores.

Art. 6. Ningun Sacerdote, Médico, Abogado ó Profesor podrá ejercer su ministerio ó facultad sin presentarse previamente en forma ante el Supremo Gobierno y prestar el juramento de defender la Libertad é Independencia Americana, y la causa Santa Nacional de la Federación contra todo poder europeo, ó cualquier otro extranjero que pretendiese invadirla; respetar las autoridades legítimamente constituidas de la Provincia, y obedecer fielmente sus leyes.

Art. 7. Todo extranjero que acredite su decisión por la Libertad é Independencia Americana, y haber prestado á ella y á la causa Nacional de la Federación servicios distinguidos, gozará de la Ciudadanía, obteniendo antes la correspondiente carta.

Art. 8. Los extranjeros que soliciten ser ciudadanos, acreditarán su buena comportación pública, su adhesión y servicios á la sagrada causa de la Independencia y de la Confederacion Argentina, por medio de una información que producirán precisamente ante uno de los Jueces ordinarios en la Ciudad, con audiencia del Síndico Procurador, y en la campaña ante el Juez de Alzada del departamento, asociado de dos vecinos.

Art. 9. Todos ellos prestarán el juramento en la forma que espresa el artículo 6°. El Gobernador de la Provincia podrá comisionar la recepción de este juramento.

CAPITULO 7°

ARTICULO UNICO. Todo Ciudadano es miembro de la Soberanía, y tiene voto activo y pasivo en los casos y forma que designa este Código Constitucional.

SESION CUARTA

CAPITULO 8°

De los modos de perderse y suspenderse la Ciudadanía

Art° 1° La Ciudadanía se pierde, primero: por naturalización en país extranjero. Segundo: por aceptar empleos, pension ó distinciones de nobleza de otra nación. Tercero: por la imposición legal de pena aflictiva ó infamante. Cuarto: por el estado de deudor dolosamente fallido, sino obtiene nueva habilitación después de purgada la nota. Quinto: por rebelión contra las autoridades legalmente constituidas en la Provincia.

Art. 2. La Ciudadanía se suspende, primero: por ser deudor á la hacienda del Estado estando ejecutado. Segundo: por ser acusado de delito, siempre que este tenga cuerpo justificado y por su naturaleza merezca pena corporal, aflictiva ó infamante. Tercero: por ser doméstico asalariado. Cuarto: por no tener una propiedad del valor al menos de cuatrocientos pesos, aunque pertenezcan á la mujer, si fuese casado, y en su defecto, sino tuviese grado ó aprobación pública en una ciencia ó arte liberal, ó algún oficio lucrativo y útil al Pais. Quinto: por el estado de furor o demencia.

Art. 3. Fuera de estos casos cualquiera autoridad que prive a un ciudadano de sus derechos cívicos, incurre en la pena del Talion.

Art. 4. Los jueces que omitan pasar á las respectivas alzas en la campaña, y al juez de Policia en la Ciudad nota de los que deben ser borrados de los registros cívicos por haber sido condenados en forma legal, serán privados de voto activo y pasivo en dos actos consecutivos.

Art. 5. Las calificaciones de propiedad serán en la Ciudad peculiares á una junta compuesta de los dos Alcaldes ordinarios, el Fiscal de Estado, y el Procurador de la Ciudad, que se espedirán con un Escribano de número; y en la campaña á los jueces de alzada, debiendo acompañarse estos con dos jueces pedáneos de su comprensión, y dos vecinos honrados testificar bajo de juramento que lo celebrarán ante dichos jueces, tener los comprendidos en el censo las calidades requeridas por este Código para voto activo y pasivo.

Art. 6. Las juntas de que habla el articulo anterior, llevaran permanentemente un registro cívico de los Ciudadanos aptos para tener voto activo y pasivo en las asambleas primarias y electorales, con espresion de su edad y origen, y por registro separado los que hayan perdido el derecho de Ciudadanía, ó se hallen suspensos de ella, y dichas juntas pasarán á la Policia cada seis meses un tanto de ambos registros, para que en dicho departamento se lleven los registros generales.

CAPITULO 9º

De la elección de Representantes que han de formar el Poder Legislativo de la Provincia

ASAMBLEAS PRIMARIAS

Artº 1º Las Asambleas primarias se compondrán de todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la Provincia, para lo que se formará antes un censo puntual de todos los habitantes del distrito.

Art. 2. En cada sesión darán su voto los sufragantes por tanto número de electores, cuantos correspondan al total de la población: de suerte que resulte un elector por cada cuatro mil habitantes: pero si los departamentos no sufriesen las cuatro sesiones, se hará la votación en un solo lugar.

Art. 3. En cada asamblea primaria habrá sesiones de proporción, y cada ciudadano votará en ella por un elector.

Art. 4. El juez principal del curato, y el Cura con tres vecinos de probidad nombrados por los mismos sufragantes del departamento, se juntarán en casa del primero, ó donde este y el segundo tuvieran á bien acordar, y recibirán los sufragios según fuesen llegando; y dándose por concluido en el término de cuatro días la recepción de votos, procederá la mesa á contar los sufragios y calificará la pluralidad, practicando este acto públicamente.

Art. 5. El sufragio podrá darse de palabra ó por escrito, abierto ó cerrado, según fuere del agrado del sufragante, y en él se nombrará la persona que ha de concurrir á la Asamblea electoral.

Art. 6. Si alguno dedujese en aquel acto ó después, queja sobre cohecho ó soborno, deberá hacerse sin pérdida de instantes justificación verbal del hecho ante los cuatro jueces de aquella sesión, reunidos al efecto el acusador y acusado; y siendo cierto serán privados de voz activa y pasiva por veinte años por la primera vez, y perpetuamente por la segunda el sobornante y sobornado. Los calumniadores sufrirán la misma pena.

Art. 7. La reunión de los vecinos del departamento compone la sesión de número.

Art. 8. El nombramiento del que resultare por mayor número de votos para elector, será con la facultad de sustituir; la mesa le estenderá el correspondiente diploma, y notificará se traslade inmediatamente á la Ciudad á formar con los demás la asamblea electoral.

Art. 9. Inmediatamente de ser nombrados electores, la mesa pasará oficio al P.E. poniendo en su conocimiento las personas elejidas.

Art. 10. Ninguno podrá ser nombrado elector, si á mas de ser reconocido por federal decidido no reuna la calidad de tener una propiedad al menos de quinientos pesos, aun cuando sean de la muger, ó ejerza algún arte o profesión.

CAPITULO 10º

DE LA ASAMBLEA ELECTORAL

Artº 1º Las Asambleas Electorales deberán celebrarse en la Sala de Representantes de esta Ciudad, adonde deberán reunirse los electores el día que fuese señalado por el P.E. sin demora alguna.

Art. 2. El primer acto de los electores será nombrar un Presidente de entre ellos á simple pluralidad de sufragios para guardar el orden. Este acto lo presidirá el P.E. ó su Ministro.

Art. 3. La Asamblea Electoral estenderá sus actas con el Escribano de número que esté de semana, y podrá acordar previamente tan solo aquellas cosas que sean precisas para establecer el buen orden y validez de su elección, sin ocupar en estos actos mas tiempo que el preciso de veinte y cuatro horas.

Art. 4. Procederá inmediatamente á la elección de Representantes que han de formar el Cuerpo Legislativo de la Provincia, y la elección resultará de la simple pluralidad de votos.

Art. 5. Si el empatamiento fuese tal, que repetida hasta tres veces la votación, no resultase ni simple pluralidad, entonces los que tuviesen igualdad de votos entrarán en suerte, y ésta decidirá.

Art. 6. Después de la elección de Representantes procederá la junta electoral á la elección de cinco suplentes, por el mismo método y forma.

Art. 7. En los casos de muerte ó imposibilidad de alguno de los Representantes, la H.R. nombrará de los suplentes el que ha de llenar la falta en cualquier tiempo que uno ú otro accidente se verifique después de la elección.

Art. 8. Ninguno de los electores puede darse el voto á si mismo, y dentro del tercero día debe estar concluida y publicada la elección.

Art. 9. En seguida y con constancia de la acta, todos los electores facultarán al Presidente de la Asamblea Electoral para que á nombre de ella estienda á cada uno de los Representantes su correspondiente diploma, por el cual se le confieran poderes amplios.

Art. 10. El censo será el fundamento para fijar el número de RR. de la Provincia y se arreglará de modo, que por cada seis mil habitantes, se nombre uno.

Art. 11. Si al formarse el arreglo de que habla el artículo anterior, se hallasen algunas fracciones, se observarán las reglas siguientes:

1ª Si en la sesión de número hubiere alguna fracción que llegue á dos mil habitantes, se votará por un Elector por dicha fracción.

2ª Si en el distrito de los doce mil habitantes que debe representar cada diputado, hubiese alguna fracción que llegue á ocho mil habitantes, se nombrará por ella un Representante, como si llegara al número de doce mil.

Art. 12. Los Representantes para el Congreso Gral. de los Estados confederados, serán nombrados por la H.R. de la Provincia en número que puedan sobrellevar los fondos de la Provincia, y que no exceda al de un diputado por cada quince mil habitantes.

SESION QUINTA

CAPITULO 11º

DE LOS REPRESENTANTES

Artº 1º No podrán ser elegidos RR. para formar el Cuerpo Legislativo de la Provincia, los que no tengan siete años de ciudadanía, veinte y cinco de edad, y un fondo de dos mil pesos aun cuando fuesen de su esposa, ó algún empleo, cuya renta equivalga al interés del fondo anterior, ó bien profesen algún arte liberal con aprobación pública de alguna Universidad, y á mas la indispensable calidad de ser decidido en sostén de la Causa Santa Nacional de la Federación.

Art. 2. Las calificaciones de propiedad ó aptitud de los que fueren nombrados Representantes, serán peculiares a la H.R.

Art. 3. La Sala de RR. se renovará por terceras partes completamente cada tres años, y particularmente cada año, siendo los dos primeros tercios removidos por la suerte.

Art. 4. Los SS. RR. no podrán ser molestados en manera alguna por sus opiniones, discursos, ó debates; pero la Honorable Representación podrá reprender á sus miembros

por desórden de conducta, y con el uniforme sufragio de dos terceras partes, espeler á cualquiera de su seno.

SESION SESTA

CAPITULO 12°

Del Poder Legislativo

Art° 1° El Poder Legislativo reside originalmente en el pueblo, y este se espedirá por medio de la H. S. de RR: su ejercicio, modo y términos en la formación de las leyes el que hasta aquí se ha practicado. Su tratamiento será el de Vuestra Honorabilidad en el principio, y el de Honorable Sala en el decurso.

Art. 2. Ningún asunto constitucional quedará sancionado sin la concurrencia de dos terceras partes de sufragios. En los que no fueren de esta naturaleza, pero que fueren de mucha gravedad, será necesario un voto sobre la mitad; y los que no fueren de una ni otra clase, quedarán resueltos por una simple pluralidad.

Art. 3. Quedan en todo su valor, fuerza y vigencia, todos los Códigos Legislativos, Cédulas, Reglamentos, y demás disposiciones generales y particulares del antiguo Gobierno Español, que no estén en oposición directa ó indirecta con la Libertad é Independencia de Sud América, ni con este Código, y demás disposiciones del P.E. de la Provincia.

Art. 4. El Poder Ejecutivo de la Provincia, tribunales, jueces y funcionarios públicos de cualquiera clase y denominación, deberán consultar al Poder Legislativo de la misma, las dudas que les ocurran, en la inteligencia y aplicación de las espresadas leyes, Reglamentos ó disposiciones, siempre que las encuentren en conflicto con los derechos esplicados, y sistema actual de esta Provincia.

CAPITULO 13°

Atribuciones del Poder Legislativo

Art° 1° Al Poder Legislativo corresponde formar la Constitución porque se ha de regir y gobernar la Provincia.

Art. 2. Corresponde al Poder Legislativo imponer para las urgencias del Estado, contribuciones proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Provincia, siempre que lo considere necesario.

Art. 3. Para el objeto puede recibir empréstitos sobre los fondos del Estado.

Art. 4. Corresponde al Poder Legislativo, establecer derechos de importación y exportación.

Art. 5. Puede con la intervención del P.E. formar pactos ó convenios con una ó mas Provincias.

Art. 6. Al Poder Legislativo corresponde arreglar la forma de todos los juicios, crear y erigir los tribunales que estime necesarios para la administración de justicia en todo el territorio de la Provincia.

Art. 7. Crear y suprimir empleos de toda clase.

Art. 8. Formar planes de educación pública, y proveer de medios para el sosten de estos establecimientos.

Art. 9. Conceder á los autores ó inventores de establecimientos útiles á la Provincia, privilegios por tiempo determinado.

Art. 10. Fijar la calidad de la moneda, los pesos y medidas en el territorio de la Provincia.

Art. 11. Recibir del P.E. la cuenta general de las rentas públicas, examinarla y juzgarla.

Art. 12. Al Poder Legislativo corresponde deliberar en los casos de que hablan los artículos 12, Cap. 10: 2, 3 y 4 del Cap. 11, y 1º del Cap. 14: 5 y 12 del Cap. 16: 5 y 6 del Cap. 17.

Art. 13. Al Poder Legislativo corresponde entender y resolver en las renunciaciones que hicieren los Representantes elegidos.

CAPITULO 14º

Del Poder Ejecutivo

Artº 1º El Supremo Poder Ejecutivo reside originariamente en el Pueblo, y será ejercido por el ciudadano que lo creyere digno de tan alto puesto la H.R. de la Provincia: su tratamiento será el de Excelencia.

Art. 2. Un voto sobre la mitad hará elección.

Art. 3. Si después de tres votaciones ninguno obtuviere la espresada mayoría, se publicarán los dos sujetos que hayan obtenido el mayor numero, y por ellos se sufragará en las siguientes votaciones.

Art. 4. Si repetida tres veces la votación, no resultare la espresada mayoría, se sacará por suerte de entre los dos el Gobernador de la Provincia.

Art. 5. Todo esto deberá verificarse acto continuo desde que se dió principio á la elección.

Art. 6. Ninguna persona será elegible para este oficio, sin que sea nacido en la Provincia, y haya residido tres años antes de su elección, aunque haya sido interrumpida por cuatro meses de intervalo, sin que tenga treinta y cinco años de edad, cuatro mil pesos de capital, aunque sean de su esposa, y los demás requisitos que previene el art. 1º del Cap. 11.

Art. 7. Durarán en el mando por el tiempo de seis años desde el día de su recepción, pudiendo ser reelegido tantas cuantas veces la Honorable Representación lo creyere necesario para sostener la tranquilidad pública, la Libertad é Independencia de Sud América, y la Santa Causa Nacional de la Confederación Argentina.

Art. 8. El sueldo que debe disfrutar, es el que actualmente goza de cuatro mil pesos anuales.

Art. 9. No disfrutará de ningún otro emolumento ni derecho bajo cualesquiera pretesto ó causa.

Art. 10. En los casos de ausencia del Gobernador fuera de la Provincia, ó de otro legítimo impedimento que le embarace el ejercicio de sus funciones, delegará el mando en la persona que fuere de su confianza.

Art. 11. En caso de muerte se verificará la elección de Gobernador dentro del preciso término de tercero día.

Art. 12. Su guardia y honores, serán los de Capitán General en la Provincia.

Art. 13. Antes de entrar al ejercicio del cargo, el Gobernador electo de la Provincia, en manos del Presidente de la H.R., y á presencia de todas las Corporaciones, prestará el siguiente juramento.

“Yo N juro por Dios nuestro Señor y estos santos Evangelios, que desempeñaré fiel y legalmente el cargo de Gobernador de esta Provincia que se me confía: que observaré la presente Constitución Provincial: que defenderé, protegeré y conservaré la Religion Católica, Apostólica, Romana, única verdadera, celando su respeto é inviolabilidad: que defenderé la Libertad é Independencia Americana contra todo poder extranjero, y la Causa Santa Nacional de Federación: que sostendré la integridad del territorio de la Provincia y sus derechos contra toda agresión, adoptando cuantas medidas sean convenientes para conservarla”.

CAPITULO 15°

Atribuciones del Poder Ejecutivo

Art° 1° El Poder Ejecutivo de la Provincia, es en ella el órgano inmediato de los negocios que á ella corresponden, y que no están delegados al Encargado general de las R.E., paz y guerra de la Confederación.

Art. 2. El puntual cumplimiento y ejecución de las leyes que actualmente rigen: el vigilar sobre la recta administración de justicia, mediante incitativas á los funcionarios de ella: el mando y organización de las milicias dentro de la Provincia, bajo las disposiciones y ordenanzas que hoy día rigen: la facultad de dirigir y hacer observar la enseñanza de la disciplina ordenada: la nominación de sus respectivos oficiales de Coronel abajo: el sosiego público: la libertad civil: la recaudación y arreglada inversión de los fondos

públicos; y la seguridad real y personal de todos los que residen en el territorio del Estado, son otras tantas atribuciones de la autoridad del Gobernador de la Provincia.

Art. 3. Será órgano de la Provincia, y podrá iniciar, conducir y firmar tratados de comercio con una ó más Provincias, con la anuencia y consentimiento del Poder Legislativo de la Provincia.

Art. 4. Recibirá los enviados, y nombrará por sí solo los que fuesen necesarios enviar fuera de la Provincia, á los efectos de que trata el artículo antecedente.

Art. 5. Vigilará particularmente sobre el aumento de la población, agricultura, comercio y artes, arreglos de caminos secundarios que faciliten la comunicación de los pueblos entre sí, y con las vías generales.

Art. 6. Todos los objetos y ramos de Hacienda, renta de Correos y Policía, los establecimientos científicos, y de todo otro género, formados ó que se formaren, son de la suprema inspección, Superintendencia, y resorte del Gobernador de la Provincia, bajo las leyes, ú ordenanzas que las rigen, ó que en adelante formase el cuerpo Legislativo.

Art. 7. El Gobernador nombrará anualmente una persona práctica ó entendida en el manejo de hacienda, para que haga las veces de Contador Ordenador en las cuentas que presente el Contador de Hacienda.

Art. 8. El Gobernador de la Provincia asistirá por sí, ó por delegación con el Fiscal del Estado á la visita corte y tanteo anual de las Cajas del Estado.

Art. 9. Corresponde al P.E. celar la calidad de la moneda, los pesos y las medidas que se hallen establecidas por el Poder Legislativo de la Provincia, y que en adelante fijare; debiendo hacer aprender tanto á los falsificadores, como á los introductores de moneda que no esté aprobada por el Poder Legislativo, destinándolos al Tribunal competente para ser castigados según la ley.

Art. 10. Egercerá el Patronato Gral. respecto de la Iglesia, beneficios y personas eclesiásticas con arreglo á las leyes vigentes.

Art. 11. Nombrará un solo Ministro que servirá todos los ramos, podrá separarlo por sí, y el electo será responsable de su conducta mientras sirviese el ministerio.

Art. 12. A falta de Ministro por enfermedad, ú otro impedimento legal, mientras se preste este empleo, el P.E. nombrará al Oficial 1º de su Secretaría para que autorice sus resoluciones, y en defecto de este al 2º, ó al que fuese de su confianza.

Art. 13. Concederá los Pasaportes para fuera de la Provincia.

Art. 14. Espedirá las cartas de Ciudadanía bajo las calidades que se prescriben en este Código.

Art. 15. Tendrá facultad de suspender las egecuciones y sentencias capitales, conceder perdón, ó conmutación, previo informe del Tribunal de la causa, cuando poderosos

motivos de equidad lo sugieran, ó cuando algún grande acontecimiento feliz haga plausible la gracia; salvo los delitos que esceptúan las Leyes.

CAPITULO 16º

Límites del Poder Egecutivo

Artº 1º Aconsejado de su Asesor continuará como al presente, ejerciendo las veces del Tribunal superior de apelaciones, mientras tanto se forme la Suprema Cámara de Justicia.

Art. 2. No compulsará, ni suspenderá las causas pendientes ante los Tribunales inferiores, escepto en los casos que disponen las Leyes.

Art. 3. Cuando la urgencia del caso le obligue á arrestar algún ciudadano, deberá ponerlo dentro de tercero día á disposición de los respectivos Magistrados de justicia, con todos los motivos y antecedentes para su juzgamiento.

Art. 4. Se esceptúa el caso en que la causa del arresto sea de tal naturaleza, que por ella se comprometa la seguridad del país, ó el orden y tranquilidad pública, en cuyo evento tendrá al reo de acuerdo con su Asesor y Fiscal, que serán responsables mancomunadamente por el tiempo necesario á tomar medidas de seguridad, haciendo después la remisión á la Justicia.

Art. 5. No podrá imponer pechos, contribuciones, empréstitos ni derecho de género alguno, sin previa resolución de la H.R. de la Provincia.

Art. 6. No podrá por sí solo imponer á ningún individuo pena alguna, si no asociado de su Asesor y su Ministro, ó el Oficial nombrado para autorizar sus resoluciones en sus casos.

Art. 7. No espedira órden, ni comunicación alguna, sin que sea suscripta por su Ministro, ó el Oficial encargado de autorizar sus resoluciones, y no tendrá efecto la que carezca de esta calidad.

Art. 8. No podrá tomar la propiedad de ningún particular, ni corporación, ni turbarle en su posesión, uso y aprovechamiento; mas si en algún caso fuese de urgente necesidad para la Patria, podrá tomar la propiedad de cualquier particular, debiendo al mismo tiempo indemnizarle, y dándole el buen cambio á bien vista de hombres buenos.

Art. 9. No podrá absolutamente en ningún caso, por sí solo interceptar, ni abrir la correspondencia Epistolar, que debe respetarse como sagrada.

Art. 10. En los casos, sin embargo de un fundado temor de traición al país, de subversión al orden público, á juicio del Gobernador de la Provincia, podrá proceder asociado de su Ministro á la apertura y examen de la correspondencia, á presencia del interesado, y en ausencia con asistencia del Síndico Procurador de la Ciudad.

Art. 11. Los que en los puntos mencionados de traición, ó subversión del orden público, resultaren delincuentes por la correspondencia, podrán ser procesados, y asegurados según la inminencia del peligro.

Art. 12. Podrá disponer de los fondos del Estado para gastos extraordinarios hasta la suma de doce mil pesos; y en caso esta no fuese bastante, obtendrá autorización de la H.R. para mayor cantidad.

Art. 13. Se esceptúan los que fueren extraordinarios y egecutivos, que podrá por sí calificar y ordenar, debiendo dar cuenta á la H.R. tan luego que le sea posible para su aprobación.

CAPITULO 17º

Del Poder Judicial

Artº 1º El Poder Judicial reside originariamente en el pueblo; su ejercicio en los Tribunales Superiores, ó inferiores establecidos por la Ley. El Tribunal Superior tendrá en cuerpo el tratamiento de Excelencia.

Art. 2. No tendrá dependencia alguna del P.E., y en sus principios, forma y estención de funciones, estará sugeto á las Leyes de su instituto.

Art. 3. Se elegirán anualmente por el Poder Ejecutivo dos Alcaldes ó Jueces de 1ª Instancia en esta Capital, que entenderán indistintamente asi en los asuntos civiles, como en los criminales de toda la Provincia.

Art. 4. Turnará entre los Escribanos que actualmente sirven, la pensión de los asuntos de pobres según la práctica observada.

Art. 5. Tan luego sea posible, se erigirá un Tribunal de Justicia con el título de Tribunal Superior de Apelaciones.

Art. 6. El sueldo que deberán disfrutar, será asignado por el Poder Legislativo.

Art. 7. El Tribunal de Apelaciones conocerá, no solo de todas las causas y negocios, de que según las leyes y demás disposiciones posteriores conocían las Audiencias en tiempo del Gobierno Español, sino también de la que este Código le designa.

Art. 8. Los recursos de fuerza y competencias entre la jurisdicción ordinaria y mercantil, se decidirán por el Tribunal Superior de Apelaciones.

Art. 9. El Tribunal Superior, conocerá en grado de apelación y primera suplicación de los pleitos sobre contrabando, revisión de cuentas, y demás ramos y negocios de Hacienda, quedando al Contador de esta la primera instancia que corresponde á los Intendentes.

Art. 10. Corresponde al Ministro Contador de Hacienda, la jurisdicción contenciosa que le acuerda la ley 2ª titº 3º libro 8º de las de Indias.

Art. 11. En los recursos de segunda suplicación, nulidad, é injusticia notoria, el Tribunal de Apelaciones terminará la sustanciación del grado.

Art. 12. Hecho esto, el Gobernador con consulta de Asesor nombrará una junta de cinco individuos, debiendo ser letrados tres de ellos por lo menos para que determine, la cual luego de pronunciada la sentencia quedará disuelta.

Art. 13. Corresponderá también al Tribunal de apelaciones, recibir de todos los jueces de 1ª Instancia del territorio avisos puntuales de causas civiles y criminales pendientes en sus juzgados, con espresion del estado de unas y otras, á fin de promover la mas pronta administración de justicia.

Art. 14. Todos los jueces de los tribunales inferiores deberán dar cuenta á la mayor brevedad al Tribunal de apelaciones de las causas que se formen por delitos cometidos en sus territorios.

Art. 15. Deberán igualmente remitir al mismo Tribunal listas generales cada seis meses de las causas civiles, y cada tres de las criminales que pendiesen en sus juzgados con espresion de su estado.

Art. 16. Cuando se forme la Suprema Cámara de justicia, remitirá esta anualmente al Supremo P.E. listas de las causas civiles, y cada seis meses de las criminales, asi fenecidas como pendientes, con espresion del estado en que estas se hallen, incluyendo las que haya recibido de los juzgados inferiores, á efecto de que el Gobierno por medio de incitativas haga se administre sin retardo la justicia.

Art. 17. Los pleitos de cuantía de trescientos pesos ó menos, quedarán concluidos con dos sentencias conformes.

Art. 18. Ningun ciudadano podrá ser juzgado en causas civiles ó criminales, por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley.

Art. 19. Los Eclasiásticos gozarán del fuero de su estado en los términos que prescriben las Leyes, y los militares gozarán también del suyo en los términos que previene la ordenanza.

Art. 20. La administración de justicia en lo civil y criminal seguirá los mismos principios, forma y método que se hallan prescriptos en las leyes generales, que no estén en oposición con nuestras leyes patrias, interin el Poder Legislativo de la Provincia dá un Código judicial.

Art. 21. En lo mercantil, se erigirá un tribunal de comercio, que deberá componerse de un Prior, dos Cónsules, y dos tenientes que reemplazarán las faltas de los anteriores en los casos de impedimento. Deberá también nombrarse un Síndico que promueva los asuntos concernientes al bien general de comercio. Todos los que deberán indispensablemente tener la calidad de federales netos.

Art. 22. La elección de este Tribunal se verificará el día cinco de Enero de cada bienio, y en conformidad á lo dispuesto por la Cédula ereccional del Consulado de Buenos Aires.

Art. 23. El Tribunal elegido nombrará un Asesor que reúna las calidades de honrado ciudadano, federal decidido, y Abogado recibido ante los estrados de algún Tribunal superior, con previa aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 24. El sueldo que disfrutará el Asesor nombrado, será el de seiscientos pesos anuales, que serán pagados de los fondos Consulares.

Art. 25. Se procederá en la sustanciación y decisión de los juicios en conformidad á la Cédula ereccional citada, ordenanzas mercantiles de Vilbao y leyes vijentes.

SESION SETIMA

CAPITULO 18°

Milicias de la Provincia

Art° 1° Todo individuo residente en la Provincia, desde edad de diez y seis años hasta la de cincuenta, será soldado del Estado.

Art. 2. Esceptúanse del art. anterior los extranjeros, cuyas naciones hayan celebrado tratados con la República Argentina, por los que estén exentos de este servicio.

Art. 3. Todo cuerpo de milicias que de órden del Capitan Jeneral de la Provincia marche á campaña, gozará de los mismos privilegios que disfrutaban los cuerpos de línea por las Ordenanzas Jenerales.

Art. 4. Las milicias en actual servicio, serán rejidas por las ordenanzas militares.

Art. 5. Todos los Gefes y Oficiales de los cuerpos de Milicias de la Provincia gozarán del mismo fuero que los de línea.

SESION OCTAVA

CAPITULO 19°

Observancia

Art° 1° Ningun salvaje unitario podrá obtener empleo alguno.

Art. 2. Todos los Jefes de los cuerpos militares y superiores de los establecimientos públicos, que propusieren ó nombraren subalternos para dichos cuerpos y establecimientos que no tuviesen la calidad de ser federales netos, serán responsables ante la Patria.

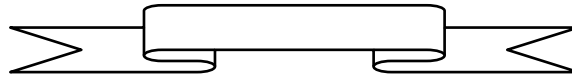
Art. 3. Queda abolido el Reglamento Constitucional provisorio, sancionando en el año de mil ochocientos veinte y uno.

Art. 4. Todo el que atentare contra el presente Código Constitucional, ó prestare medios para ello, será castigado según la gravedad del crimen.

Art. 5. El Poder Legislativo de la Provincia nombrará una comision de tres individuos de su seno, cuyo objeto será velar sobre la observancia de este Código Constitucional, y dar cuenta al Poder Legislativo sobre las infracciones que notáre.

Dado en Córdoba por la H. Junta de Representantes de la Provincia, en su Sala de Sesiones permanentes terminadas el día 1º de Febrero de 1847.-

Calisto M. Gonzalez – Presidente – Inocente Castro – Felis de la Peña – Eusebio Cazaravilla – Francisco Malarin – Miguel Aparicio Rodriguez – Lucas Funes – Nicolas Peñaloza – Carlos Tagle – Casimiro Martinez – José Maria de Allende – Benito de Otero – Lorenzo Villegas – Severo Gonzalez – Eduardo Ramirez de Arellano – Juan Ramon de la Rosa Torres – Secretario.-



¡VIVA LA CONFEDERACION ARJENTINA!

¡Mueran los Salvajes Unitarios!

Constitución para la Provincia de Córdoba de 1855

CONSTITUCIÓN
PARA LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

En el nombre de Dios é invocando su protección y auxilio:

NOS los Representantes de la Provincia de Córdoba, reunidos en Asamblea Constituyente y en ejercicio del poder no delegado al Gobierno Nacional, decretamos y sancionamos la siguiente

CONSTITUCIÓN

SECCIÓN I

De la Provincia, su Territorio y Culto.

Art. 1º La Provincia de Córdoba es parte integrante de la Confederación Argentina, y como tal, sujeta á la Constitución general de 25 de Mayo de 1853 que ha jurado obedecer, y á las leyes y disposiciones que en su conformidad dictaren las Autoridades Nacionales creadas por ella.

Art. 2º El territorio de la Provincia se encierra entre los límites designados por las actas de su fundación del año 1573 y sus posteriores concesiones mientras que el Congreso General conforme al artículo 14 de la Constitución de la República arregle definitivamente los de las Provincias que la componen.

Art. 3º La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la Religión de la Provincia: su Gobierno le prestará la más decidida y eficaz protección, y todos sus habitantes el mayor respeto y la más profunda veneración.

SECCIÓN II

Disposiciones generales.

Art. 4º La Provincia confirma y ratifica el principio de Gobierno republicano representativo, proclamado por la revolución Americana y consagrado por la Constitución general de 1853.

Art. 5° Todos los habitantes de la Provincia de Córdoba gozan en ella de los derechos y garantías que la Carta Fundamental en su parte 1ª, capítulo único, otorga á favor de todos los habitantes de la Confederación, como también están sujetos á los deberes y restricciones que ella les impone.

Art. 6° Las autoridades de la Provincia de Córdoba, quedarán circunscriptas á las autorizaciones y limitaciones contenidas en el título 2° de la Constitución General.

Art. 7° Todas las autoridades de la Provincia son responsables. Todos los funcionarios prestarán juramento de cumplir con las disposiciones de esta Constitución, y de respetar la Constitución y las autoridades generales de la Confederación.

Art. 8° Ninguna autoridad de la Provincia es extraordinaria. Todas son esencialmente limitadas por esta Constitución; y ninguna ley podrá darse que sea contraria ó derogatoria de sus disposiciones.

Art. 9° Cualquier disposición adoptada por las autoridades provinciales en presencia ó á requisición de fuerza armada ó de una reunión de hombres que se atribuya los derechos del pueblo, es nula de derecho y jamás podrá tener efectos.

Art. 10. Todo ciudadano argentino domiciliado en la Provincia, es soldado de la guardia cívica de ella, conforme á la ley con la escepción de diez años que concede á los ciudadanos por naturalización el art. 21 de la Constitución nacional.

Art. 11. No se dará en la Provincia ley ni Reglamento que haga inferior la condición civil del extranjero á la del nacional. Ninguna ley obligará á los extranjeros á pagar mayores contribuciones que las soportadas por los Nacionales, ni á pagar contribuciones forzosas extraordinarias.

Art. 12. Los extranjeros domiciliados en Córdoba, son admisibles á los empleos municipales y de simple administración.

SECCIÓN III

Forma de Gobierno.

Art. 13. La Soberanía provincial reside en el pueblo, y la parte no delegada espresamente á la Confederación, será ejercida por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según las atribuciones que á cada uno designa esta Constitución.

SECCIÓN IV

Del Poder Legislativo.

Art. 14. El Poder Legislativo reside en una Asamblea de 25 Diputados. La elección de estos se hará en las formas siguientes: cuatro por la Ciudad, dos por el Río 2° Abajo, dos por el Río Seco, dos por Tulumba, dos por Pocho, dos por la Punilla, dos por San Javier,

dos por el Río 4º, dos por Calamuchita, uno por Anejos, uno por Santa Rosa, uno por el Tercero Arriba, uno por el Tercero Abajo y uno por Ischilín, cuya elección será directa y en todo conforme á la de los Diputados Nacionales, en tanto que no haya una ley local de elecciones arreglada al censo de la Provincia.

Art. 15. Para ser electo Diputado de la Provincia, se requiere ciudadanía en ejercicio, 25 años de edad y una propiedad ó profesión que asegure una renta anual de 200 pesos al mes.

Art. 16. Para tener voto se requiere ciudadanía en ejercicio y 21 años de edad.

Art. 17. Los Diputados al tomar posesión de su cargo prestarán el juramento de ley en manos de su Presidente, y este en las del Vice-Presidente ó Decano de la Asamblea.

Art. 18. No podrán abrirse las Sesiones sin la concurrencia de uno sobre las dos terceras partes de los miembros electos, pero después de abiertas, podrán funcionar con uno sobre la mitad.

Art. 19. Las Sesiones ordinarias durarán seis meses cada año, á datar desde el 1º de Abril hasta el 1º de Octubre; y serán prorrogables á solicitud del Gobierno de la Provincia, o moción de algún Diputado apoyada por cuatro votos y sancionada por las dos terceras partes de la Asamblea concurrente.

Art. 20. La Asamblea se renovará por mitad todos los años, debiendo hacerse á la suerte la primera renovación y las sucesivas por la ley.

Art. 21. En caso de ser reelectos los que hubieren servido un período de dos años, tendrán derecho á que les sea admitida la renuncia que interpusieren.

Art. 22. La Asamblea podrá ser convocada estraordinariamente á un grave objeto de interés Nacional ó Provincial.

Art. 23. Los Diputados de la Provincia gozarán en ella de los privilegios é inviolabilidad que la Constitución General otorga á los de la Nación en su art. 57.

Art. 24. La Asamblea Provincial dictará su Reglamento interior al que se arreglará la conducta de todos y cada uno de sus Diputados, pudiéndose corregir con dos tercios de votos á cualquiera de sus miembros por desórden de conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta escluirlo de su seno con el voto de tres cuartas partes de la Asamblea íntegra.

Art. 25. La Asamblea será juez en la comprobación de los poderes de sus Diputados y decidirá en la renuncia que hicieren de su cargo.

Art. 26. No pueden ser Representantes del pueblo los empleados á sueldo del Poder Ejecutivo Nacional ó Provincial; mas si un Diputado fuere elegido para desempeñar un empleo cualquiera del Estado ó un empleado lo fuere por el pueblo para Diputado, podrá optar entre uno y otro destino.

Art. 27. Sus Sesiones serán públicas, á menos que un grave interés declarado por la misma Asamblea exigiere lo contrario.

Atribuciones de la Asamblea.

Art. 28. Son atribuciones de la Asamblea Provincial:

1ª Legislar sobre todos los objetos consignados en los artículos 102, 103 y 104 de la Constitución Nacional.

2ª Elegir por votación nominal el Gobernador de la Provincia en el período asignado por la ley; componiéndose la Asamblea para este fin de doble número de Diputados, los que serán elegidos en la misma forma que prescribe el art. 14; no pudiendo verificarse esta sesión sin la presencia de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros y la elección se verificará un mes antes que espire el período gubernativo del que debe cesar.

3ª Organizar el régimen municipal creado por esta Constitución y sobre las bases en ella designadas.

4ª Establecer toda clase de contribuciones para la formación de su tesoro provincial, siempre que no estén en oposición á la Constitución General.

5ª Movilizar todas las milicias ó Guardia Nacional de la Provincia o parte de ellas en el caso de invasión exterior o peligro inminente que no admita dilación, conforme al art. 105 de la constitución de la República y toda vez que lo exigiese ó autorizase el Gobierno Nacional.

6ª Conceder privilegios exclusivos por tiempo determinado á los autores o inventores de nuevas industrias ó establecimientos útiles sin perjuicio de las facultades que la Constitución atribuye al Congreso Nacional en su art. 64, atribución 16.

7ª Pedir al Ejecutivo Provincial en cualquier época del año los datos ó informes necesarios sobre el estado de las rentas provinciales y medios de acrecentarlas, al mejor desempeño de las atribuciones cometidas á la asamblea por esta Constitución.

8ª Legislar sobre todas las oficinas provinciales, determinando las atribuciones y responsabilidad de los funcionarios públicos, y crear y suprimir empleos.

9ª Iniciar la reforma de esta Constitución conforme á lo prescrito en ella.

10. Llamar á su seno al Ministro Secretario de Gobierno para pedirle los informes verbales que estime convenientes.

11. Autorizar al Gobierno provincial ó á la Municipalidad para contraer empréstitos sobre sus respectivas rentas y propiedades.

12. Disponer del uso y enagenación de las tierras provinciales en satisfacción de las deudas de carácter provincial ó para objetos de manifiesta utilidad pública.

13. Fijar cada año el presupuesto general de los gastos administrativos, con vista del que presentare el P.E. Provincial.
14. Aprobar ó desechar la cuenta de inversión de los fondos provinciales.
15. Representar al Gobierno Nacional sobre el arreglo y establecimiento de postas, correos y apertura de caminos en el territorio de la Provincia.
16. Establecer y reglamentar los Tribunales de Justicia Provincial.
17. Admitir ó desechar la renuncia que de su destino hiciere el Gobernador de la Provincia y declarar el caso de proceder á nueva elección.
18. Declarar los casos de imposibilidad física ó mental permanente del mismo, para proceder á nueva elección de gobernador propietario. En el caso de una enfermedad física ó mental súbita que impida al Gobernador propietario hacerla presente, la asamblea podrá nombrar un gobernador interino por el término que ella dure, debiendo concurrir á esta sesión las dos terceras partes del número ordinario de sus miembros.
19. Admitir ó desechar la licencia temporal al Gobernador y permitir su separación de la capital por más de seis días á objeto de servicio público.
20. Conceder ó negar licencia temporal al Gobernador de la Provincia para salir de su territorio, procediendo á nombrar interino en caso de concederla.
21. En caso de ausencia del Gobernador, durante el receso de la asamblea, será subrogado por un ciudadano que aquel eligiere, debiendo terminar la delegación, cuando reunida la asamblea eligiere por sí misma Gobernador Delegado en virtud del inciso anterior.
22. Pedir al Gobierno Nacional la admisión de nuevas órdenes religiosas en el territorio de la Provincia.
23. Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios para poner en ejercicio los Poderes Provinciales y demás establecidos por esta Constitución.
24. Nombrar senadores y suplentes para el Congreso General.
25. Calificar los casos de espropiación por utilidad pública.
26. Legislar sobre Jubilaciones, Monte-píos y recompensas de carácter Provincial.
27. Decretar la ejecución de las obras públicas exigidas por el interés de la Provincia.

SECCIÓN V

De la formación y sanción de las leyes.

Art. 29. Las leyes se inician por proyectos presentados á la asamblea por el P.E. ó por algún miembro de ella.

Art. 30. Aprobado un proyecto de ley por la asamblea pasará al P.E. para su exámen: si lo aprobare lo ratificará y promulgará como ley, sin cuyo requisito no podrá tener efecto alguno.

Art. 31. Se reputa ratificado un proyecto que no ha sido devuelto por el P.E. en diez días útiles desde su remisión.

Art. 32. Si el proyecto fuere observado en todo ó en parte por el E. volverá á la asamblea que lo discutirá de nuevo y si fuere sancionado por segunda vez en su forma primitiva por una mayoría de dos tercios de votos, lo volverá al P.E. para que sea sin mas trámite promulgado como ley.

Art. 33. Si á mérito de las observaciones hechas por el P.E., se reformase el proyecto, sin sujeción á ellas ni á su testo primitivo, se reputará como nuevo proyecto y seguirá sus trámites ordinarios.

Art. 34. En caso que los proyectos fuesen devueltos al terminar ó terminado el período legal de la asamblea, se prorrogará ésta ó se convocará á extraordinaria; ya sea por el Ejecutivo ó por la comisión permanente, según lo exija la naturaleza y la gravedad del caso.

Art. 35. Las leyes pueden ser modificadas por los mismos trámites con que se sancionaron, y explicadas por la asamblea, de cuya exclusiva atribución es resolver las dudas que ocurran sobre su espíritu y testo, oyendo como á colegislador al P.E. de la Provincia.

Art. 36. En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: «Los representantes de la Provincia reunidos en asamblea general sancionan con fuerza de ley».

Art. 37. Ninguna disposición de la asamblea puede tener efecto de ley sin la sanción del P.E. Provincial; pero en ningún caso podrá negar su sanción á las leyes sobre negocios municipales, sobre trabajos de pública utilidad, sobre educación popular é inmigración, sobre cuyos objetos la asamblea estatuye por sí sola.

SECCIÓN VI

De la Comisión permanente.

Art. 38. La Asamblea Provincial antes de su receso nombrará una comisión de su seno compuesta de cinco miembros y dos suplentes que durante aquel tendrán las siguientes atribuciones:

1ª Vigilar la observancia de esta Constitución haciendo al Gobierno las indicaciones convenientes al objeto.

2ª Instruir á la asamblea de lo ocurrido durante su receso en la parte referente á sus atribuciones.

3ª Redactar los proyectos de ley ó reglamentos de que hubiere sido encargada para presentarlos á la asamblea General á la apertura de sus sesiones.

4ª Auxiliar al gobierno en los casos de conflicto por conmoción interior ó ataque exterior é ilustrarlo en caso de consulta sobre la inteligencia y espíritu de las leyes.

5ª Recibir las actas de elecciones y convocar á la asamblea en sesiones preparatorias, para el exámen y calificación de ellas.

6ª Dar cuenta al Ejecutivo de las vacantes naturales que hubiese tenido la asamblea durante su receso para que dicte las órdenes convenientes á su reemplazo.

SECCIÓN VII

Del Poder Ejecutivo.

Art. 39. El P.E. de la Provincia es ejercido por un Gobernador que debe su elección á la Legislatura Provincial, y por uno ó más Secretarios que el Gobernador elije según la ley.

Art. 40. El Gobernador se elegirá por una mayoría de uno sobre la mitad de la asamblea concurrente; si ninguno la obtuviera, se repetirá la votación sobre los dos que hubieren reunido mayor número de votos. En caso de empate, decidirá la suerte; mas no se recurrirá á ésta sin haberse procedido antes á segunda votación.

Art. 41. Para se elegido Gobernador, se requiere la edad de 30 años, la calidad de ciudadano argentino, un capital de 6.000 pesos, aunque sean de la mujer, ó una profesión que le asegure una renta equivalente á la de este capital.

Art. 42. Durará tres años en el ejercicio de sus funciones, y no podrá ser reelecto sino con el intervalo de un período.

Art. 43. Cesará en el Poder en el mismo día en que espire su período legal, aun cuando en el curso de él hubiere sido interrumpido por cualquier evento.

Art. 44. Disfrutará del sueldo que le designe la ley de la Provincia, y sobre el tesoro de ella, no pudiendo ser alterado durante su Gobierno, á menos que lo fuese por una variación general que sancionare la asamblea en el presupuesto de gastos.

Art. 45. Su tratamiento será el de V.S. y su residencia ordinaria la capital de la Provincia, salvo que graves motivos de interés general le demanden ausentarse á cualquier punto del territorio.

Art. 46. No podrá ausentarse del territorio de la Provincia durante el período de su mando, ni tres meses después de su cese, sin licencia de la Asamblea Legislativa.

Art. 47. Al Gobernador le subrogará un interino, ó Delegado en los casos previstos en el art. 28, incisos 17, 18, 19 y 20 durante un período que no pueda pasar de seis meses. Si la ausencia ó imposibilidad excede de este plazo, se reputa vacante la silla del Gobierno y se procede á una nueva elección.

Art. 48. Durante el período gubernativo el Gobernador propietario deberá hacer una visita general de la Provincia para instruirse por sí mismo de las necesidades de ella y de sus habitantes; procurar su remedio, promover la industria, examinar los elementos de prosperidad que encierre, y consultar su progreso en todos los ramos de que sea susceptible.

Art. 49. En caso de vacancia, el puesto del Gobernador será desempeñado interinamente por el que nombrase la Asamblea, y si esta se hallase en receso, lo ocupará el Presidente de la Cámara de Justicia, y en su defecto el de la Municipalidad de la Capital; debiendo en el perentorio término de tres días convocar á la Asamblea Provincial á reunión extraordinaria para el nombramiento de Gobernador propietario.

Art. 50. El Gobernador electo en el acto de su recepción prestará en manos del Presidente de la Asamblea el siguiente juramento. «N.N. juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, ante el pueblo que me ha confiado sus destinos, sostener y cumplir la Constitución de la Provincia y la General del Estado; defender la libertad y derechos garantidos por ambas; proteger y hacer respetar la Religión Católica, Apostólica, Romana; ejecutar y hacer ejecutar las leyes que han sancionado y sancionaren el Congreso General y los Representantes de la Provincia, respetar y hacer respetar las autoridades de ella y de la Confederación.

Art. 51. El Gobernador electo si se hallase ausente fuera de la Provincia, deberá recibirse del mando a mas tardar en el término de tres meses contados desde el día de su elección debiendo en caso contrario, reputarse vacante el puesto.

Art. 52. Son atribuciones del Poder Ejecutivo:

- 1ª. Abrir y cerrar en su período legal las Sesiones de la Asamblea Provincial.
- 2ª. Espedir las instrucciones y reglamentos necesarios á la ejecución de las leyes de cuya formación participa de acuerdo á esta Constitución.
- 3ª. Promulgar y sancionar en el territorio de la Provincia las leyes locales, y publicar las leyes y Decretos del Gobierno Nacional.
- 4ª. Nombrar los Magistrados del Tribunal de Justicia á propuesta de la Asamblea Provincial y los jueces ordinarios á propuesta de la Municipalidad tan luego que ella se establezca.
- 5ª. Indultar, suspender ó conmutar la pena capital por delitos sujetos á la jurisdicción de la Provincia, previo informe del Tribunal competente salvo los casos esceptuados por las leyes.
- 6ª. Conceder jubilaciones, retiros, licencias y monte píos conforme a las leyes de la Provincia.
- 7ª. Es el Agente inmediato y directo del Gobierno Nacional según el art. 107 de la Constitución del Estado.

- 8ª. Nombra y remueve sus Ministros, Oficiales de Secretaría y demás empleados de la Administración, cuyo nombramiento no esté arreglado de otra manera.
- 9ª. Instruye á la Asamblea en la apertura de sus Sesiones del estado de la Provincia, recomendándole la adopción de las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
10. Prorroga las Sesiones ordinarias de la Asamblea y la convoca á extraordinarias en el caso de los arts. 22 y 34.
11. Hace recaudar las rentas de la Provincia y decreta su inversión con arreglo á la ley, ó presupuesto de gastos Provinciales que presentará á la Asamblea al abrir sus Sesiones, lo mismo que un plan de recursos para el año siguiente, y dará cuenta de la inversión anual de sus gastos.
12. Celebra, concluye y firma tratados parciales sobre Administración de Justicia, intereses económicos y trabajos de utilidad común, dando cuenta á la Asamblea Provincial para su ratificación y en oportunidad al Congreso Federal, con arreglo al art. 104 de la Constitución del Estado.
13. Puede pedir á los Jueces de todos los ramos y Departamentos de la Administración Provincial, los informes que crea convenientes, siendo aquellos obligados á darlos.
14. Inicia leyes por proyectos presentados á la Asamblea Provincial.
15. Propone á la Asamblea la derogación ó modificación de las leyes que la experiencia le haya acreditado como irrealizables ó contrarias al bien de la Provincia.
16. Cuida y vela en la pronta y recta Administración de Justicia sin herir la independencia de los Magistrados, y procura que sus resoluciones tengan el debido cumplimiento.
17. Provee interinamente las vacantes de los empleos, cuya provisión esté reservada á otro poder ó requiera su acuerdo, dando cuenta á quien corresponda.
18. Espide títulos y despachos á los empleados cuyo nombramiento le incumba.
19. Propone á la Asamblea la concesión de privilegios exclusivos temporales, indemnización y recompensas en protección de la industria y en favor de los que se hagan acreedores á ellos.
20. Previene las conspiraciones y tumultos por todos los medios que no estén espresamente prohibidos por esta Constitución y Leyes Nacionales y Provinciales.
21. Envía al Congreso Nacional y al Presidente de la República, copias autorizadas de todos los actos que sanciona la Asamblea Provincial, para que examine si son conformes ó contrarios á la Constitución común, a los impuestos Nacionales, á los tratados estipulados con el extranjero, ó á los derechos de las otras Provincias.

- 1ª. No podrá usar de atribución alguna conferida á otro poder por esta Constitución, ó prohibida por la Nacional á las autoridades Provinciales en su art. 105 y 106.
- 2ª. No puede decretar por sí solo, embargo, exigir servicios no autorizados por la ley, ni ordenar arrestos ni destierros sin los requisitos establecidos por la Constitución General y leyes de la Provincia.
- 3ª. Ni acordar sueldos, aumentos de ellos, ó pensiones sino por los títulos y en los casos que determine la ley.
- 4ª. No le es permitido salir de la Provincia sin espreso permiso de la Legislatura, y á objeto de grave interés para aquélla o para la Nación.
- 5ª. No podrá impedir ó retardar la reunión ordinaria de la Legislatura, estorbar sus trabajos, trabar la libertad en las elecciones populares ni retardarlas.
- 6ª. No le es permitido enagenar, ceder ó permutar parte alguna del territorio ni disponer de los demás bienes Provinciales, sin acuerdo de la Legislatura; ocupar la propiedad de individuos ó corporación alguna, ni turbarlos en su uso y dominio, salvo los casos de espropiación por utilidad pública conforme el art. 28, inciso 25.
- 7ª. No podrá intervenir en asunto alguno judicial; ni á pretexto de Policía, Gobierno ó buen orden, privar á ningún individuo de su libertad ni imponerle castigos sin previa condenación del Juez competente, salvo los casos en que el bien y seguridad de la Provincia exijan el arresto de uno ó más individuos y su detención provisional que sólo podrá ejecutarse con la condición de ponerlo á las 24 horas y á mas tardar dentro del tercero día á disposición del Juez conforme á las leyes, prévia notificación al arrestado de la causa que motivó su arresto.

Del Ministro Secretario del despacho.

Art. 53. El Gobernador de la Provincia será auxiliado en el ejercicio de sus funciones por uno ó más Ministros, los que refrendarán y autorizarán las órdenes y decretos del Gobernador en su ramo respectivo, sin cuyo requisito carecen de eficacia.

Art. 54. El Ministro es responsable solidariamente con el Gobernador de todos los actos que autorice contra la Constitución y leyes de la Confederación y de la Provincia: no pudiendo tomar por sí solo resolución alguna sin previo mandato ó consentimiento del Gobernador, si no es en lo concerniente al régimen económico y administrativo del Despacho.

Art. 55. Para ser nombrado Ministro, se requieren las mismas condiciones que para ser elegido Diputado: la ley determinará la compensación debida á sus servicios.

Art. 56. Deberá asistir á las Sesiones de la Asamblea cuando fuere llamado por ella, ó cuando á nombre del Gobierno tuviere que defender algún proyecto introducido por él.

SECCIÓN VIII

Del Poder Judicial.

Art. 57. El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por una Cámara de Justicia y por los Juzgados y Magistrados establecidos por la ley. Dicha Cámara se compondrá de cinco letrados, pero por ahora solo de tres mientras se aumenta la matrícula de esta profesión.

Art. 58. Cuando la Cámara considere que el personal de la matrícula tiene suficiente número para que pueda integrarse, el Tribunal con arreglo al artículo anterior, lo informará á la Autoridad que en seguida se designa para esta lo ejecute.

Art. 59. La primera elección de Ministros se hará por el P.E. á propuesta de un número doble de individuos indicados por la Legislatura de la Provincia; las vacantes en la misma forma á propuesta de terna.

Art. 60. Los jueces ordinarios de 1ª Instancia en lo civil y criminal, lo serán á propuesta en terna de la Municipalidad; y hasta que esta se establezca, serán nombrados como los funcionarios de la Cámara; la compensación de todos estos funcionarios será designada por la ley.

Art. 61. Los miembros de la Cámara de Justicia y Jueces de 1ª Instancia en lo civil y criminal, no podrán ser depuestos de sus destinos, sino por sentencia ejecutoriada, ni suspensos, sino por autos en que se declare haber lugar á formación de causa.

Art. 62. El Poder Judicial se reglará por un reglamento que la Cámara de Justicia en los tres primeros meses de su instalación presentará por conducto del P.E. al exámen y aprobación de la asamblea Provincial, rigiéndose entretanto por las leyes vigentes en la materia.

Art. 63. La Cámara de Justicia tendrá la superintendencia que le corresponde en toda la administración de Justicia, y á mas de los informes que en cualquier tiempo podrá dar el Gobierno y por su conducto á la asamblea sobre todo lo concerniente á las mejoras y reformas en el ramo judicial; deberá cada año elevar á la misma una estadística de la Administración de Justicia en el territorio de la Provincia.

Art. 64. Todos los funcionarios del P. Judicial, son responsables conforme á la ley, no solo de las sentencias que dictaren, sino también de las dilaciones innecesarias y demoras culpables, abusos de autoridad en el curso de los juicios y de toda otra falta que ofenda las garantías judiciales del ciudadano consignadas en esta Constitución y la Nacional.

Art. 65. Pueden ser acusados por cualquier ciudadano por los delitos de cohecho, prevaricato ó procedimientos injustos contra la libertad de las personas, la propiedad y seguridad del domicilio; quedando sujeto el acusado á las penas del falsario y calumniante, siempre que no aprobe su acusación.

Art. 66. Interpuesta acusación contra uno solo de los miembros de la Cámara de Justicia, conocerá de ella la misma Cámara integrada por el Ministro Fiscal y los dos Jueces de 1ª

Instancia y por impedimento de uno ó mas de éstos, serán llamados el agente fiscal y abogados de la matrícula en igual número á todos los impedidos.

Art. 67. Ninguna detención ó arresto se hará en la cárcel pública destinada á los criminales sino en otro local que se designará á este objeto. La ley reputa inocentes á los que aun no ha declarado culpables ó legalmente sospechosos de serlo por auto motivado del Juez competente.

Art. 68. Siendo la correspondencia epistolar un sagrado que nadie puede violar sin hacerse reo contra la seguridad personal y primordiales derechos del hombre, no podrá servir en juicio la correspondencia y papeles sustraídos.

Art. 69. La Cámara decide de las competencias de Jurisdicción ocurridas entre las judicaturas de su inspección y entre éstas y la de los funcionarios del P.E. Provincial.

Art. 70. Sus atribuciones secundarias y manera de proceder serán determinadas por las leyes orgánicas, que tendrán por bases constitucionales la responsabilidad de los jueces, la brevedad de los juicios y las garantías judiciales que la Constitución General consigna en su primera parte.

Art. 71. Toda sentencia debe ser fundada en ley promulgada antes del hecho del proceso.

SECCIÓN IX

Del Poder Municipal.

Art. 72. Quedan restablecidas las Municipalidades ó cabildos en la forma, estención, límites y atribuciones judiciales, administrativas y económicas que les designe una ley especial que dictará la Asamblea Provincial dentro de los seis meses subsiguientes á la jura de esta Constitución.

Art. 73. Para la administración interior, el territorio de la Provincia se divide en departamentos, éstos en pedanías y éstas en cuarteles, haciéndose esta división en virtud de su extensión territorial y no de su población, esta división sirve de base á una jerarquía en la distribución de los agentes del P.E., que será reglada por una ley especial de régimen departamental.

Art. 74. La ley de municipalidades deberá dictarse sobre las bases siguientes:

1ª. La independencia del P. Municipal en sus funciones.

2ª. Su extensión en todo el territorio de la Provincia, debiendo haber en cada departamento una junta comunal compuesta cuando menos de tres vecinos y sin perjuicio de los agentes ó auxiliares que tendrá cada departamento, pedanía o cuartel donde la población lo exigiere.

3ª. La elección de estos funcionarios, será popular y directa por los habitantes de la capital para los municipales de ella, y por los de la campaña para los suyos, y la de uno y otros bajo las formas y condiciones que establecerá la ley de la materia.

4ª. La calidad de extranjero no será obstáculo para ser elegido Municipal.

5ª. La acción de las Municipalidades será directa y exclusiva en los ramos de instrucción primaria de la capital y departamentos, en los establecimientos de beneficencia y caridad, en los de Policía, de orden, moralidad, salubridad, aseo y ornato público, en el número y comodidad de los caminos, construcción de puentes y posadas, y en el nombramiento de los Jueces de Paz y justicia preventiva en la capital y departamentos.

6ª. La participación ó intervención de la Municipalidad de la capital en el nombramiento de los Jueces de 1ª Instancia en lo civil y criminal.

7ª. Garantías de la municipalidad en el ejercicio de sus funciones é inviolabilidad de sus funcionarios en los casos que designa la ley.

8ª. Designación y adjudicación de las rentas que deben componer el Tesoro Municipal, para el desempeño de las funciones propias de este poder y justa compensación de sus funcionarios.

9ª. Su responsabilidad en los términos y casos que designa la ley.

10. La administración esclusiva de los cabildos en sus rentas municipales.

11. Sujeción de las municipalidades á la inspección y disciplina de la Cámara de Justicia en lo relativo á la administración judicial, y á la inspección y vigilancia del P.E. en los ramos de la administración, sin que éste ejerza coto en sus decisiones y solo con el fin de hacer efectiva la responsabilidad á que deben estar sujetos los actos de sus miembros.

SECCIÓN X

De la reforma de esta Constitución.

Art. 75. Ninguna reforma de esta Constitución será admitida en el espacio de diez años y sin que sea aprobada por el Congreso General.

Art. 76. Las que se propongan después de este término, sólo se admitirán cuando se presenten apoyadas por las dos terceras partes de la Legislatura. Declarada la necesidad de la reforma y sancionada como ley, se verificará esta por una convención de 25 Diputados convocada al efecto.

SECCIÓN XI

Disposiciones generales.

Art. 77. Sancionada esta Constitución y firmada por el Presidente y todos los Diputados y refrendada por el Secretario ó Secretarios de la Asamblea, será elevada al Congreso General á los fines espresados en los artículos 5º y 103 de la Constitución Nacional.

Aprobada que sea, se pasará al P.E. de la Provincia para su solemne publicación y juramento en toda ella, debiendo prestarlo individualmente todos los empleados y funcionarios públicos, civiles, militares y eclesiásticos.

Art. 78. Ningún empleado podrá en adelante entrar en el ejercicio de sus funciones sin previo juramento de cumplir y observar fielmente esta Constitución y la General de la República.

Art. 79. Cualquier persona puede aprehender y conducir á la presencia del Juez á todo delincuente tomado infraganti delito y especialmente al que ó los que fueren sorprendidos atentando ó prestando medios de atentar contra la Constitución Provincial ó Nacional, quedando siempre el aprehensor ó aprehensores sujetos á la responsabilidad del acto.

Art. 80. Serán dadas en el espacio de tres años ó antes si fuere posible, las siguientes leyes orgánicas.

1ª Ley reglamentaria sobre la responsabilidad y enjuiciamiento de los funcionarios públicos.

2ª Ley provisoria de elecciones Provinciales.

Art. 81. Quedan derogadas todas las leyes anteriores de la Provincia en cuanto fueren contrarias á la presente Constitución ó á la General de la República.

Sala de Sesiones, Córdoba, Agosto 16 de 1855.

Fernando S. de Zavalía, Presidente – Lucrecio Vázquez, Francisco de Paula Moreno, Luis Rueda, Bernardino Acosta, Vicente de la Peña, Clemente J. Villada, Manuel de la Lastra, Rafael García, Cornelio Moyano, Félix de la Peña, Manuel Antonio Carranza, Martín Ferreyra, Gerónimo Yofre, Donaciano del Campillo, Apelinario Rivas, Wenceslao Funes, Pedro N. Clara, Juan Ramón R. Torres, Calixto de la Torre, José Saturnino de Allende, Pedro Avila, Benjamín de Igarzabal, Diputado Secretario.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ÉDITAS

- ♦ ACTAS CAPITULARES DE CÓRDOBA: 1808-1813 (2010) Ed. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- ♦ AGAMBEN, G. (2003) *Stato di eccezione. Homo sacer, II, i*, Bollati Boringhieri, Torino.
- ♦ AGÜERO, A. (2007a) “Historia del derecho y categorías jurídicas. Un ejercicio de crítica conceptual”, en *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid* (RJUAM), Nro 16, pp. 135-144. Disponible en http://www.uam.es/otros/rjuam/numero_16.html.
- ♦ AGÜERO, A. (2007b) “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en LORENTE, M. (coord.) (2007) Ob. cit., pp. 19-58.
- ♦ AGÜERO, A. (2008a) *Castigar y perdonar cuando conviene a la República. La justicia penal de Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII*, CEPC, Madrid.
- ♦ AGÜERO, A. (2008b) “Herramientas conceptuales de los juristas del derecho común en el dominio de la administración”, en LORENTE, M. (coord.) *La jurisdicción contencioso-administrativa en España. "Una" historia de sus orígenes*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 19-44.
- ♦ AGÜERO, A. (2010a) “Formas de continuidad del orden jurídico. Algunas reflexiones a partir de la justicia criminal de Córdoba (Argentina), primera mitad del siglo XIX”, en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En línea], Debates, 2010. Disponible en <http://nuevomundo.revues.org/59352>
- ♦ AGÜERO, A. (2010b) “La justicia penal en tiempos de transición. La república de Córdoba, 1785-1850”, en GARRIGA, C. (Coord.) *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, Centro de Investigación y docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, México, pp. 267-305.
- ♦ AGÜERO, A. (2011a) “Tradición jurídica y derecho local en época constitucional: El "Reglamento para la Administración de justicia y policía en la campaña" de Córdoba, 1856”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 41, pp. 1-43. Disponible online en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1853-178420110001&lng=es&nrm=iso
- ♦ AGÜERO, A. (2011b) “El testimonio procesal y la administración de justicia penal en la periferia de la Monarquía Católica, Siglos XVII y XVIII”, en *Acta Histriae*, 19, 1-2, pp. 43-56.
- ♦ AGÜERO, A. (2012) “La extinción del cabildo en la República de Córdoba, 1815-1824”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, 3ra Serie, Nro. 37, [en línea]. Disponible en: <http://www.scielo>

[.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S0524-97672012000300002& lng=es&nrm=iso.](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0524-97672012000300002&lng=es&nrm=iso)

- ◆ AGÜERO, A. (2013a) “Law and Criminal Justice in the Spanish Colonial Order: the Problematic Enforcement of the Legality Principle in the Early National Law in Argentina”, en MARTYN, G., MUSSON, A. y PIHLAJAMÄKI, H. (eds.) (2013) *From the Judge's Arbitrium to the Legality Principle. Legislation as a Source of Law in Criminal Trials*, Duncker & Humblot, Berlín, pp. 229-251.
- ◆ AGÜERO, A. (2013b) “La Asamblea del año XIII y la dimensión extraordinaria del orden jurídico tradicional. Reflexiones en torno al juramento e instrucciones del cabildo de Córdoba”, en *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, Nro. 13. Disponible en <http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAn13a11>.
- ◆ AGÜERO, A. (2013c) “Ciudad y poder político en el antiguo régimen. La tradición castellana”, en, TAU ANZOÁTEGUI, V. y AGÜERO, A. (coords.) *El derecho local en la periferia de la Monarquía Hispana. Río de la Plata, Tucumán y Cuyo, siglos XVI-XVIII*, INHIDE, Buenos Aires, pp. 121-184.
- ◆ AGÜERO, A. (2014) “Autonomía por soberanía provincial. Historia de un desplazamiento conceptual en el federalismo argentino (1860-1930)”, en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Nro. XLIII, pp. 341-392.
- ◆ AGÜERO, A. (en prensa) “El constitucionalismo hispano, la eclosión municipal y la supresión de los cabildos en el Río de la Plata, primera mitad del siglo XIX”, en *El Constitucionalismo Hispánico Temprano*, Centro de Estudios en Historia – Universidad del Externado, Bogotá.
- ◆ AGUILAR RIVERA, J. (2000) *En pos de la quimera. Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico*, Centro de Investigación y Docencia Económicas – Fondo de Cultura Económica, México.
- ◆ ALONSO, G. (2009) “Ciudadanía católica: identidad, exclusión y conflicto en la experiencia liberal hispana”, en MOLINA, F. (coord.) *Extranjeros en el pasado. Nuevos historiadores de la España contemporánea*, Universidad del País Vasco, Bilbao.
- ◆ ANDRÉS SANTOS, F. y AMEZÚA, L. (2013) “El multiculturalismo y los derechos colectivos en el primer constitucionalismo iberoamericano”, en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, Nro. XLI.
- ◆ ANNINO, A. (1995b) “Voto, tierra, soberanía. Cádiz y los orígenes del municipalismo mexicano”, en GUERRA, F. (dir.) *Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español*, Editorial Complutense, Madrid.
- ◆ ANNINO, A. (2010), “La ruralización de lo político”, en ANNINO, A. (coord.), *La revolución novohispana, 1808-1821*, México, FCE, pp. 384-464.
- ◆ ANNINO, A. (coord.) (1995a) *Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX: de la formación del espacio nacional*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

- ◆ ARAGÓN REYES, M. (2007) “Derecho electoral: sufragio activo y pasivo”, en NOHLEN, D., ZOVATTO, D., OROZCO, J., y THOMPSON, J. (eds.) *Tratado de derecho electoral comparado de América Latina*, FCE, IIDH, UH, II, TEPJF, IFE, México.
- ◆ ARCHIVO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (1912-1925) Tomos I-VII, La Minerva, Córdoba.
- ◆ ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, Libro de Matrículas de Gramática, Tomo I; Libro de Grados 1; Libro de Exámenes de Filosofía 1794-1856.
- ◆ ARCONDO, A. (1998) *La población de Córdoba según los Censos de 1822 y 1832*, Serie de Estudios Nro. 28, Instituto de Economía y Finanzas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- ◆ ÁVILA, A., DYM, J., GÓMEZ GALVARRIATO, A. y PANI, E. (dir.) (2013), *Declarando Independencias. Textos fundamentales*, El Colegio de México, México D.F.
- ◆ AYROLO, V. (2003) Tesis doctoral dirigida por François-Xavier Guerra y Nicole Lemaitre: "Córdoba: une république catholique. Haut Clergé, gouvernement et politique dans la Province de Córdoba. De l'Indépendance à la Confédération 1810-1852", leída en la Universidad Paris I, Panthéon- Sorbonne, París, en el mes de enero de 2003.
- ◆ AYROLO, V. (2004) “Argumentos y prácticas patronales durante la experiencia de la centralidad política en las Provincias Unidas, 1810-1821”, en *Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”*, Año 4, Nro. 4.
- ◆ AYROLO, V. (2006) “Noticias sobre la opinión y la prensa periódica en la Provincia autónoma de Córdoba: 1820-1852”, en *Quinto Sol*, Nro. 10, pp. 13-46.
- ◆ AYROLO, V. (2007a) *Funcionarios de Dios y de la República: clero y política en la experiencia de las autonomías provinciales*, Ed. Biblos, Buenos Aires.
- ◆ AYROLO, V. (2007b) “La construcción de un sistema político alternativo: Córdoba durante el gobierno de Juan Bautista Bustos, 1820-1829”, en PEIRE, J. (comp.) *Actores, representaciones e imaginarios. Homenaje a François-Xavier Guerra*, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Caseros, pp. 197-218.
- ◆ AYROLO, V. y ROMANO, S. (2001) “Poder y representación política en Córdoba, Argentina, a mediados del siglo XIX”, en *Revista História UNISINOS*, Sao Leopoldo, Brasil, Nro. 4, V. 5, julho-dezembro, pp. 15-49.
- ◆ BARRIERA, D. (coomp.) (2009) *Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la justicia en el Río de la Plata. Siglos XVI-XIX*, Editum, Murcia.
- ◆ BAYLE, C. (1952) *Los cabildos seculares en la América española*, Sapiencia, Madrid.
- ◆ BENTHAM, J. (1991) *Tácticas parlamentarias*, Servicio de Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid.
- ◆ BESABE, N. (2011) “«Derechos del hombre» y «Deberes del ciudadano» en la encrucijada: los lenguajes políticos de la revolución francesa y el abad de Mably”, en *Historia Constitucional*, Nro. 12, págs. 45-98. Disponible en <http://www.historiaconstitucional.com>.

- ◆ BIANCHI, A. (2007) *Historia de la formación constitucional argentina: (1810-1860)*, Lexis Nexis, Buenos Aires.
- ◆ BIDART CAMPOS, G. (1973) “Notas sobre el carácter abierto y eficaz del poder constituyente originario en Argentina”, en *Revista de estudios políticos*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Nro. 188, pp. 261-272.
- ◆ BIDART CAMPOS, G. (1976) *Historia Política y Constitucional Argentina*, Tomo I, EDIAR, Buenos Aires.
- ◆ BIDART CAMPOS, G. (1993) *Tratado elemental de derecho constitucional argentino*, Tomo I, EDIAR, Buenos Aires.
- ◆ BISCHOFF, E. (1968) *Historia de Córdoba*, Tomo I, Geminis, Buenos Aires.
- ◆ BORGES, J. L. (1952) “El idioma analítico de John Wilkins”, en *Otras Inquisiciones*, Sur, Buenos Aires.
- ◆ BRAGONI, B. y MÍGUEZ, E. (coords.) (2010) *Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional, 1852-1880*, Biblos, Buenos Aires.
- ◆ BRAVO LIRA, B. (1986) *Historia de las instituciones políticas de Chile e Hispanoamérica*, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile.
- ◆ CABRERA, P. (1916) *Universitarios de Córdoba. Los del Congreso de Tucumán*, Biblioteca del Tercer Centenario de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- ◆ CALDERÓN, M. y THIBAUD, C. (2010) *La Majestad de los Pueblos en la Nueva Granada y Venezuela 1780-1832*, Taurus, Bogotá.
- ◆ CANSANELLO, C. (2008) “Ciudadano/Vecino”, en GOLDMAN, N. (ed.) *Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850*, Prometeo, Buenos Aires.
- ◆ CASTILLO DE BOBADILLA, J. (1759) *Política para corregidores, y Señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra, y para Jueces eclesiásticos, y Seglares, y de Sacas, Aduanas, y de Residencias, y sus Oficiales; y para Regidores, y Abogados; y del valor de los Corregimientos, y Gobiernos realengos, y de las Órdenes*, Segundo Tomo, Imprenta de Joachin Ibarra, Madrid.
- ◆ CAULA, E. (2010) “Trama de lealtades en torno al gobierno de la casa durante el proceso de disolución del orden colonial en el Río de la Plata”, en IMIZCOZ BEUNZA, J. M Y OLIVERI KORTA O, (eds.) *Economía Doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen*, Editorial Silex Universidad, Madrid.
- ◆ CELESIA, E. (1932) *Federalismo Argentino. Apuntes Históricos: 1815-1821, Córdoba*, 3 Vols., Lib. Cervantes de Julio Suárez, Buenos Aires.
- ◆ CELTON, D. (1996) *Ciudad y campaña en la Córdoba colonial*, Junta Provincial de Historia de Córdoba, Córdoba.
- ◆ CHIARAMONTE, J. (1989a) “Formas de identidad en el Río de la Plata luego de 1810”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani*, Tercera Serie, Nro. 1, pp. 71-92.

- ◆ CHIARAMONTE, J. (1989b) *La Ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura laica durante el Virreinato*, Puntosur, Buenos Aires.
- ◆ CHIARAMONTE, J. (1993) "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX", en CARMAGNANI, M. (comp.), *Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 81-132.
- ◆ CHIARAMONTE, J. (1995a) "¿Provincias o Estados? Los orígenes del federalismo rioplatense", en GUERRA, F. (dir.) *Revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español*, Editorial Complutense, Madrid.
- ◆ CHIARAMONTE, J. (1995b) "Vieja y nueva representación: los procesos electorales en Buenos Aires, 1810-1820", en ANNINO, A. (coord.) *Historia de las Elecciones en Iberoamérica: Siglo XIX, de la formación del espacio político nacional*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- ◆ CHIARAMONTE, J. (1997) *Ciudades, provincias, estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846)*, Emecé, Buenos Aires.
- ◆ CHIARAMONTE, J. (2010) "La antigua constitución luego de las independencias, 1808-1852", en *Desarrollo económico*, Vol. 50, Nro. 199, pp. 331-361.
- ◆ CHUMBITA, H. (2009) *Jinetes rebeldes. Historia del bandolerismo social en la Argentina*, Ediciones Colihue, Buenos Aires.
- ◆ CIMA, A. (1960) "La Constitución de la República Federal de Córdoba", en *Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*, Año XXIV, N° 1-2, Córdoba.
- ◆ CLAVERO, B. (1986) *Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea*, Tecnos, Madrid.
- ◆ CLAVERO, B. (1991) "Vocación católica y advocación siciliana de la constitución española de 1812", en ROMANO, A. (a cura di.) *Alle origini del costituzionalismo europeo*, Presso l'Accademia, Messina, pp. 11-56.
- ◆ CLAVERO, B. (1994) "Espacio colonial y vacío constitucional de los derechos indígenas", en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, Nro. 6, pp. 61-86.
- ◆ CLAVERO, B. (2006) "Bioko, 1837-1876: Constitucionalismo de Europa en África, derecho internacional consuetudinario del trabajo mediante", en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Nro. XXXV, pp. 429-556.
- ◆ CLAVERO, B. (2007) *El orden de los poderes*, Trotta, Madrid.
- ◆ CLAVERO, B. (2012a) "El momento constitucional de una república católica (Cádiz entre Nueva Granada y Nueva Zelanda)", en *Revista española de Derecho Constitucional*, Nro. 96, pp. 329-344.
- ◆ CLAVERO, B. (2012b) "Gracia y derecho. Entre localización, recepción y globalización (lectura coral de las vísperas constitucionales de António Hespanha)", en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Nro. XLI, pp. 675-763.

- ◆ CLAVERO, B. (2013) “Cádiz 1812: Antropología e historiografía del individuo como sujeto de constitución”, en *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Nro. XLII, pp. 201-279.
- ◆ *Compilación de leyes, decretos, acuerdos de la Excma. Cámara de Justicia y demás disposiciones de carácter público dictadas en la Provincia de Córdoba desde 1810 a 1870*, Tomo I, Imprenta del Estado, Córdoba, 1870.
- ◆ CONSTANT, B. (1820) “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, en *Curso de política constitucional*, Tomo III, Imprenta de la Compañía, Madrid.
- ◆ CORVA, M. (2010) “La justicia en la primera década revolucionaria”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 39. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842010000100003.
- ◆ COSTA, P. (2002) *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano.
- ◆ COSTA, P. (2004) “El problema de la representación política: Una perspectiva histórica”, en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, Nro. 8, pp. 15-61.
- ◆ COSTA, P. (2006) *Ciudadanía*, Marcial Pons, Madrid, y (2004) “El problema de la representación política: una perspectiva histórica”, en *La representación en el Derecho*, R. DEL ÁGUILA TEJERINA (coord.), Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Nro. 8, Madrid, pp. 15-61.
- ◆ CRUZ BARNEY, O. (2001) *El Régimen Jurídico de los Consulados de Comercio Indianos: 1784-1795*, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Disponible en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=19>.
- ◆ CRUZ VILLALÓN, P. (1980) *El estado de sitio y la constitución*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- ◆ CRUZ VILLALÓN, P. (1984) *Estados excepcionales y suspensión de garantías*, Tecnos, Madrid.
- ◆ CRUZ VILLALÓN, P. (1989) “Formación y evolución de los Derechos Fundamentales”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, Nro. 25, pp. 35-62.
- ◆ DÍAZ DE MOLINA, A. (1958) “La Constitución cordobesa de 1821 y su influencia institucional”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Nro. 9, pp. 84-96.
- ◆ Diccionario de Autoridades del año 1737. Disponible en la página web de la Real Academia Española: <http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtile?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0>
- ◆ *Documentos relativos a la organización constitucional de la República Argentina* (1911), Facultad de Filosofía y Letras, Sección Historia, Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, Buenos Aires, Tomo I.

- ◆ DUSO, G. (2003), *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*, Franco Angeli, Milano.
- ◆ DYM, J. (2013) “Declarar la independencia: proclamaciones, actos, decretos y tratados en el mundo iberoamericano (1804-1830)”, en HÉBRARD, V. y VERDO, G. (eds.) *Las independencias hispanoamericanas: un objeto de historia*, Casa de Velázquez, Madrid, pp. 81-99.
- ◆ ECHEVERRI, A. (2013) “La independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha, en traducción de Manuel García de Sena (1811)”, en *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Disponible en <http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-independencia-de-la-costa-firme-justificada-por-thomas-pain-e-treinta-anos-ha-en-traducccion-de-manuel-garcia-sena-1811/>
- ◆ ENTIN, G. (2013) “El patriotismo americano en el siglo XVIII. Ambigüedades de un discurso político hispánico”, en HÉBRARD, V. y VERDO, G. (eds.) *Las independencias hispanoamericanas: un objeto de historia*, Casa de Velázquez, Madrid, pp. 19-34, pp. 19-33.
- ◆ FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. (2009) *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850*, Vol. I, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- ◆ FERREYRA, A. (1980) *Mensajes de los Gobernadores de Córdoba a la Legislatura*, Tomo I: 1828-1847, Centro de Estudios Históricos, Córdoba.
- ◆ FIORAVANTI, M. (1996) *Los Derechos Fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones*, Trotta, Madrid.
- ◆ FIORAVANTI, M. (2001) *Constitución: de la antigüedad a nuestros días*, Trotta, Madrid.
- ◆ FIORAVANTI, M. (2010) “Las doctrinas de la constitución en sentido material”, en *Fundamentos. Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional*, Nro. 6, Universidad de Oviedo. Disponible en <http://www.unioviado.es/constitucional/fundamentos/Portada.html>
- ◆ FRADERA, J. (2008) “La Nación desde los márgenes (ciudadanía y formas de exclusión en los imperios)”, en *Revista Illes i imperis*, Nro. 10/11, pp. 9-30.
- ◆ FRADERA, J. (2012) “Situar la Constitución de 1812 en el contexto de las Constituciones imperiales”, en *20/10: El Mundo Atlántico y la Modernidad Iberoamericana 1750-1850*, Vol. 1, Segib, pp. 57-75.
- ◆ FRADKIN, R. (2009b) “¿Misión imposible? La fugaz experiencia de los jueces letrados de primera instancia en la campaña de Buenos Aires (1822-1824)”, en BARRIERA, D. (comp.) Ob. cit., pp. 143-164.
- ◆ FRADKIN, R. (comp.) (2007) *El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del estado en el Buenos Aires rural, 1780-1830*, Prometeo Libros, Buenos Aires.
- ◆ FRADKIN, R. (comp.) (2009a) *La ley es tela de araña. Ley, justicia y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830*, Prometeo Libros, Buenos Aires.

- ◆ FREGA, A. (2001) “El Artiguismo en la Revolución del Río de la Plata. Algunas líneas de trabajo sobre el Sistema de los pueblos libres”, en FREGA y A. ISLAS (coord.) *Nuevas miradas en torno al Artiguismo*, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la universidad de la República, Montevideo.
- ◆ FREGA, A. (2005) “La virtud y el poder. La soberanía particular de los pueblos en el proyecto artiguista”, en GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comp.), *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, 2ª. ed. corregida, Eudeba, Buenos Aires.
- ◆ GARAVAGLIA, J. (2007) *Construir el Estado, Inventar la Nación: el Río de La Plata, Siglos XVIII- XIX*, Prometeo Libros, Buenos Aires.
- ◆ GARRIGA, C. (2004) “Orden jurídico y poder político en el antiguo régimen”, en, *Istor*, Nro. 16.
- ◆ GARRIGA, C. (2006) “Sobre el gobierno de la justicia en Indias”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 34, pp. 67-160.
- ◆ GARRIGA, C. (2007a) “Constitución política y orden jurídico: el efecto derogatorio de la Constitución de Cádiz”, en GARRIGA, C. y LORENTE, M., *Cádiz, 1812... cit.*, pp. 119-168.
- ◆ GARRIGA, C. (2007b) “Constitución, ley, reglamento: el nacimiento de la potestad reglamentaria en España (1810-1814, 1820-1823)” en GARRIGA, C. y LORENTE, M., *Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 169-258.
- ◆ GARRIGA, C. (2007c) “Justicia animada: Dispositivos de la justicia en la Monarquía Católica”, en LORENTE, M. (coord.) *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Cuadernos de Derecho Judicial VI, CGPJ, Madrid, pp. 61-104.
- ◆ GARRIGA, C. (2009) “Gobierno y justicia: el gobierno de la justicia”, en LORENTE (coord.) *La jurisdicción contencioso-administrativa en España. Una historia de sus orígenes*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid.
- ◆ GARRIGA, C. (2010) *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, Centro de Investigación y docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, México.
- ◆ GARRIGA, C. (2012) “Legislación y códigos”, en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coord.) *Manual de Historia del Derecho*, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 407-449.
- ◆ GARRIGA, C. (dir.) (2004) *Historia y derecho, historia del derecho*, *Istor*, Nro. 16.
- ◆ GARRIGA, C. y LORENTE, M. (2007a) "Responsabilidad de los empleados públicos y contenciosos de la Administración (1812-1845). Una propuesta de revisión", en Ídem, *Cádiz, 1812. La Constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 313-369.
- ◆ GARRIGA, C. y LORENTE, M. (2007b) "El juez y la ley: la motivación de las sentencias, (Castilla, 1489 – España, 1855)", en Ídem., *Cádiz, 1812. La Constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 261-312.

- ◆ GARZÓN, I. (1901) *Crónica de Córdoba*, Tomo II, La Minerva, Córdoba.
- ◆ GARZÓN, I. (1902) *Crónica de Córdoba*, Tomo III, La Minerva, Córdoba.
- ◆ GARZÓN, R. (2006) *Juan Bautista Bustos y Bernardino Rivadavia: dos proyectos de país*, Ediciones del Copista, Córdoba.
- ◆ GILETTA, J. (1998) “La Honorable Convención Provincial Constituyente de 1869-1870”, en Cuadernos de Historia, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Nro. 8, pp. 147-169.
- ◆ GILETTA, J. (2000) “Apuntes para una evolución histórica del constitucionalismo en Córdoba (Siglos XIX y XX)”, en Cuadernos de Historia, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Nro. 10, pp. 151-193.
- ◆ GOLDMAN, N. (1993) “Legalidad y legitimidad en el caudillismo. Juan Facundo Quiroga y La Rioja en el interior rioplatense (1810-1835)”, en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, Tercera serie, Nro. 7, pp. 31-58.
- ◆ GOLDMAN, N. (1998) “Los orígenes del federalismo rioplatense (1820-1831)” en, GOLDMAN, N. (dir.) *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, Colección Nueva Historia Argentina, Tomo III, Sudamericana, Buenos Aires.
- ◆ GOLDMAN, N. (2003) “Formas de Gobierno y Opinión Pública o la disputa por la acepción de las palabras, 1810-1827”, en SÁBATO, H. y LETTIERI, A. (Comp.), *La vida política en la Argentina del Siglo XIX. Armas, votos y voces*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 45-56.
- ◆ GOLDMAN, N. (2007) “El concepto de ‘Constitución’ en el Río de la Plata (1750-1850)”, en *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, Vol. 9, Nro. 17, pp. 169-186.
- ◆ GOLDMAN, N. (dir.) (1998) *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, Colección Nueva Historia Argentina, Tomo III, Sudamericana, Buenos Aires.
- ◆ GOLDMAN, N. (ed.) (2008) *Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850*, Prometeo, Buenos Aires.
- ◆ GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comp.) (1998) *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, Eudeba, Buenos Aires.
- ◆ GONZÁLEZ CALDERÓN, J. (1930) *Historia de la organización constitucional*, Lajouane, Buenos Aires.
- ◆ GRASES, P. y HARKNESS, A. (1953) *Manuel García de Sena y la Independencia de Hispanoamérica*, Secretaría General de la Décima Conferencia Interamericana, Caracas.
- ◆ GRAU, L. (2009) *Orígenes del constitucionalismo americano*, corpus documental bilingüe, Vol. 3, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid.
- ◆ GRIMM, D. (2006) *Constitucionalismo y Derechos Fundamentales*, Trotta, Madrid.
- ◆ GUASTINI, R. (1999) *Estudios sobre la interpretación jurídica*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México.

- ◆ GUASTINI, R. (2001) *Estudios de Teoría Constitucional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. Edición en formato PDF disponible online en la página web <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=22>
- ◆ GUERRA, F. (1993) “La Metamorfosis de la Representación en el siglo XIX”, en COUFFIGNAL, G. (comp.) *Democracias posibles. El desafío latinoamericano*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- ◆ GUERRA, F. (1998) “De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía”, en GUERRA, F. y LEMPÉRIÈRE, A. (coord.) *Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX*, Fondo de Cultura Económica, México.
- ◆ GUERRA, F., LEMPÉRIÈRE, A. y Otros (1998) *Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII y XIX*, Fondo de Cultura Económica, México.
- ◆ GUTIÉRREZ ARDILA, D. (2010) *Un nuevo reino: geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno en Nueva Granada, 1808-1816*, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá.
- ◆ GUZMÁN, D. (1934) “Influencia de Córdoba en la organización nacional”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 21, Nros. 9-10, noviembre-diciembre, pp. 115-149.
- ◆ HALPERÍN DONGHI, T. (1982) *Guerra y finanzas en los orígenes del estado argentino (1791-1850)*, Editorial del Belgrano, Buenos Aires.
- ◆ HALPERÍN DONGHI, T. (2005) *Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina Criolla*, Siglo XXI, Buenos Aires.
- ◆ HEBRARD, V. (1996) *Le Venezuela indépendant. Une nation par le discours. 1808-1830*, L'Harmattan, Paris.
- ◆ HÉBRARD, V. y VERDO, G. (eds.) (2013) *Las independencias hispanoamericanas: un objeto de historia*, Casa de Velázquez, Madrid.
- ◆ HESPANHA, A. (1990) “Una historia de textos”, en TOMÁS Y VALIENTE, F. y OTROS, *Sexo barroco y otras transgresiones premodernas*, Alianza Universidad, Madrid, pp. 187-196.
- ◆ HESPANHA, A. (1993a) *La gracia del derecho: Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- ◆ HESPANHA, A. (1993b) “Representación dogmática y proyectos de poder”, en ídem, *La gracia del derecho: Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 61-84.
- ◆ HESPANHA, A. (1993c) “El espacio político”, en ídem, *La gracia del derecho: Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 85-121.
- ◆ HESPANHA, A. (1993d) “De iustitia a disciplina”, en ídem, *La gracia del derecho: Economía de la Cultura en la Edad Moderna*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 203-273.

- ◆ HESPANHA, A. (2002) *Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio*, Tecnos, Madrid.
- ◆ KING, J. (1921) *Veinticuatro años en la República Argentina*, Vaccaro, Buenos Aires.
- ◆ *La Constitución en el Congreso General Constituyente* (1943), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, Buenos Aires.
- ◆ LA TORRE, M. (2010) “Constitucionalismo de los Antiguos y de los Modernos. Constitución y «estado de excepción»”, en *Res publica*, Universidad de Murcia, Nro. 23, pp. 17-35.
- ◆ LACCHÈ, L. (1995) *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Giuffrè, Milano.
- ◆ LANTERI, A. (2011) “Las provincias en un ámbito de poder institucionalizado. El congreso de Paraná en la Confederación, 1854-1861”, en *Estudios Sociales*, Nro. 41, Universidad Nacional del Litoral, pp. 69-95.
- ◆ LEMPERIERE, A. (2000) “La representación política del imperio español a finales del antiguo régimen”, en BELLINGERI, M. (coord.) *Dinámicas de antiguo régimen y orden constitucional: representación, justicia y administración en Iberoamérica, siglos XVIII-XIX*, Otto Editore, Torino, pp. 55-76.
- ◆ LEVAGGI, A. (1982) “El juicio por jurados en la Argentina durante el siglo XIX”, en *Revista de Estudios Histórico Jurídicos*, Nro. VII. Disponible en <http://www.rehj.cl/index.php/rehj/article/viewArticle/94>.
- ◆ LEVAGGI, A. (2000) *Paz en la frontera. Historia de las relaciones diplomáticas con las comunidades indígenas en la Argentina (siglos XVI-XIX)*, Universidad del Museo Social Argentino, Buenos Aires.
- ◆ LEVAGGI, A. (2007) *Confederación y federación en la génesis del Estado argentino*, Facultad de Derecho UBA, Buenos Aires.
- ◆ LLAMOSAS, E. (2015) “La enseñanza jurídica en un contexto de transición: la reforma de José Gregorio Baigorri en la Universidad de Córdoba (1823)”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 48, pp. 97-112. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842015000100004&lng=es&nrm=iso.
- ◆ LOBOS, H. (2011) *Historia de Córdoba*, Tomo IV: La Provincia Autónoma, Ediciones del Copista, Córdoba.
- ◆ LORENTE, M. (1988) *Las infracciones a la Constitución de 1812*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- ◆ LORENTE, M. (2001) *La Voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889)*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- ◆ LORENTE, M. (2007) “El Juramento Constitucional”, en Ídem, *Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 73-118.

- ◆ LORENTE, M. (2010) “El Poder y la Memoria de D. Miguel Ramos Arizpe”, en *La Nación y las Españas. Representación y territorio en el constitucionalismo gaditano*, Ediciones UAM, Madrid, Cap. 4, pp. 109-133.
- ◆ LORENTE, M. (2010) “Esencia y valor del constitucionalismo gaditano (Nueva España, 1808-1821)”, en ANNINO, A. (coord.) *La revolución novohispana, 1808-1821*, FCE, México, pp. 293-383.
- ◆ LORENTE, M. (2012a) “Límites, logros e intersecciones entre historia política e historia jurídica”, en *PolHis*, Año 5, Nro. 10, Segundo Semestre. Disponible en <http://historiapolitica.com/boletin10/>
- ◆ LORENTE, M. (2012b) “Constitucionalismo antiguo y moderno”, en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coord.) Ob. cit., pp. 289-329.
- ◆ LORENTE, M. (2012c) “Orígenes del constitucionalismo en el mundo hispano”, en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coord.) *Manual de Historia del Derecho*, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 331-362.
- ◆ LORENTE, M. (2013) “De las leyes fundamentales de la Monarquía Católica a las constituciones hispánicas, también católicas”, en HÉBRARD, V. y VERDO, G. (eds.) *Las independencias hispanoamericanas: un objeto de historia*, Casa de Velázquez, Madrid.
- ◆ LORENTE, M. (coord.) (2007) *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid.
- ◆ LORENTE, M. (coord.) (2008) *La jurisdicción contencioso-administrativa en España. "Una" historia de sus orígenes*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid.
- ◆ LORENTE, M. y PORTILLO, J. (Eds.) (2012) *El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico (1808-1826)*, Colección Bicentenario de las Cortes de Cádiz, Congreso de los Diputados, Madrid.
- ◆ LOVEMAN, B. (1993) *The Constitution of Tyranny: Regimes of Exception in Spanish America*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh and London.
- ◆ LUQUE COLOMBRES, C. (1958) “Los ejidos de Córdoba y la enfiteusis”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Nro. 9, pp. 97-111.
- ◆ LUQUE COLOMBRES, C. (1984) “En torno a la extinción del cabildo de Córdoba” en *Revista de Historia del Derecho*, Nro. 12, Buenos Aires, pp. 217-228.
- ◆ LYNN, H. (2007) *La invención de los derechos humanos*, Tusquets, Barcelona.
- ◆ MANNORI, L. (2007) “Justicia y Administración entre antiguo y nuevo régimen”, en *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, Nro. 15, pp. 125-146.
- ◆ MARILUZ URQUIJO, J. (dir.) (1995) *Estudios sobre la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata*, INHIDE, Buenos Aires.
- ◆ MARTÍN, S. (2012) “Dilemas metodológicos y percepción histórico-jurídica de la biografía del jurista moderno”, en ESTEBAN CONDE NARANJO (ed.), *Vidas por el derecho*, Dykinson, Madrid, pp. 11-58.

- ♦ MARTÍNEZ PAZ, E. (1983) *La formación histórica de la provincia de Córdoba*, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, Córdoba.
- ♦ MARTÍNEZ PÉREZ, F. (1999) *Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo español (1810-1823)*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- ♦ MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2006) “Visión histórica y constitucional del jurado”, en *Estudios de Derecho Judicial*, Nro. 96, pp. 19-45.
- ♦ MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2011) “Constitucionalismo consultivo”, en *Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico*, Nro. 10, pp. 89-100.
- ♦ MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2012) “Juntas de censura y jurado. La aplicación peninsular de la normativa de libertad política de imprenta (1810-1823)”, en LARRIBA, E. Y DURÁN, F. (eds.) *El nacimiento de la libertad de imprenta. Antecedentes, promulgación y consecuencias del decreto de 10 de noviembre de 1810*, Sílex, Madrid, pp. 325-343.
- ♦ MARTÍNEZ, I. (2013) *Una Nación para la Iglesia argentina. Construcción del Estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX*, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires.
- ♦ MARTIRÉ, E. (2009) *La Audiencia y la administración de justicia en las Indias: del iudex perfectus al iudex solutus*, Perrot, Buenos Aires.
- ♦ MECCARELLI, M. (2009) “Paradigmi dell’eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica”, en *Quaderni Storici*, Año XLIV, Nro. 131, pp. 493-521.
- ♦ MELO, C. (1942) “La escuela jurídico-política de Córdoba”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 29, Nº 1-4, marzo-junio.
- ♦ MELO, C. (1950) *Constituciones de la Provincia de Córdoba*, Imprenta de la Universidad, Córdoba.
- ♦ MINVIELLE PORTE PETIT, J. (1952) “Cabildos abiertos en Hispanoamérica”, en *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, Argentina, Vol. XIV, Nros. 72-73.
- ♦ MITRE, B. (1858) *Historia de Belgrano*, Imprenta de Mayo, Buenos Aires.
- ♦ MOLINA MARTÍNEZ, M (2002) *Los cabildos y la independencia de Iberoamérica*, CEMCI, Granada.
- ♦ MOREA, A. (2012) “El Ejército Auxiliar del Perú y la gobernabilidad del interior, 1816-1820”, en *Prohistoria*, Nro. 18, año XV, pp. 25-48.
- ♦ MORELLI, F. (2005) *Territorio o nación. Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765- 1830*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- ♦ NASIF, D. (2009) “El pensamiento constitucional de José Benjamín Gorostiaga. El olvido de un prócer”, en MANILI, P. (dir.) *El Pensamiento Constitucional Argentino (1810-1930)*, Errepar, Buenos Aires, pp. 257-284.

- ◆ OLCESE, J. (2012) “El Gobernador Bustos y la primera Constitución de la Provincia de Córdoba (1821)”, en *Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba*. Disponible en <http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/institutos/instituto-de-historia-del-derecho/doctrina>
- ◆ ORTEMBERG, P. (2004) “Algunas reflexiones sobre el derrotero social de la simbología republicana en tres casos latinoamericanos. La construcción de las nuevas identidades políticas en el siglo XIX y la lucha por la legitimidad”, en *Revista de Indias*, Vol. 64, Nro. 232, pp. 697-720.
- ◆ PALTI, E. (2005) *La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX. (Un estudio sobre las formas del discurso político)*, FCE, México.
- ◆ PALTI, E. (2007) *El tiempo de la política. Lenguaje e historia en el siglo XIX*, Siglo XXI, Buenos Aires.
- ◆ PASSOLA, A. (1997) “Insaculación en intervención monárquica”, en *La historiografía sobre el municipio en la España Moderna*, Cap. IV, Edicions de la Universitat de Lleida, pp. 93-118.
- ◆ PAVONI, N. (1993) *Córdoba y el gobierno nacional. Una etapa en el proceso fundacional del Estado argentino 1852-1862*, Tomo I, Banco de la Provincia de Córdoba, Córdoba.
- ◆ PEIRE, J. (2000) *El taller de los espejos. Iglesia e imaginario 1767-1815*, Ed. Claridad, Buenos Aires.
- ◆ PEIRE, J. (comp.) (2007) *Actores, representaciones e imaginarios. Homenaje a François-Xavier Guerra*, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Caseros.
- ◆ PEÑA, R. (1974) “Los jueces pedáneos en la Provincia de Córdoba (1810-1856). Algunos aspectos de sus atribuciones”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 2, pp. 121-148.
- ◆ PEÑA, R. (1980) *Juan B. Bustos y el federalismo doctrinario de Córdoba*, Cuadernos de Historia, Junta Provincial de Historia, Córdoba.
- ◆ PEREIRA PINTO, J. (1965) “Un capítulo del Derecho Público Provincial: El nacimiento de las Provincias y sus primeros Estatutos Constitucionales”, en *Jurisprudencia Argentina*, Serie Moderna, Año XXVII, Nro. 2346, pp. 1-5.
- ◆ PITKIN, H. (1967) *The Concept of Representation*, UCP, Berkeley/Los Ángeles [Trad. esp.: *El Concepto de Representación*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1985].
- ◆ PORTELLI, M. (2010) “Universitarios de Córdoba. El centenario de la independencia y la construcción de los relatos históricos locales en la obra de Pablo Cabrera”, en *Revista Electrónica de Fuentes y Archivos del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti"*, Nro. 1. Disponible en <http://www.refa.org.ar/revista.php?idEdicion=1>
- ◆ PORTILLO, J. (1998) *La nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Laboratorio di Storia Costituzionale Antoine Barnave, Manduria.

- ◆ PORTILLO, J. (2000) *Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*, Boletín Oficial del Estado/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- ◆ PORTILLO, J. (2006) *Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana*, Fundación Carolina, Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, Marcial Pons, Madrid.
- ◆ PORTILLO, J. (2007) “De la Monarquía Católica a la Nación de los católicos”, en *Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, Nro. 17, UCM/CEPC/UNED, pp. 17-35.
- ◆ PORTILLO, J. (2010) “La Constitución en el Atlántico Hispano, 1808-1824”, en *Fundamentos*, Nro. 6. Disponible en http://www.uniovi.es/constitucional/fundamentos/sexta/pdfs/03_portillo.pdf
- ◆ PORTILLO, J. (2012) “La historia del primer constitucionalismo entre textualidad y jurisprudencia”, en *PolHis*, Año 5, Nro. 10, Segundo Semestre.
- ◆ PRODI, P. (1992) *Il Sacramento del potere: Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Il Mulino, Bolonia.
- ◆ RAKOVE, J. (1996) *Original meanings. Politics and ideas in the making of the constitution*, Alfred A. Knopf, New York.
- ◆ RAVIGNANI, E. (1939) *Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los textos constitucionales, legislativos y pactos interprovinciales que organizaron políticamente la nación*, Tomo VI, Segunda Parte, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Jacobo Peuser, Buenos Aires.
- ◆ RIVAROLA, R. (1908) *Del régimen federativo al unitario. Estudio sobre la organización política de la Argentina*, Jacobo Peuser, Buenos Aires.
- ◆ RIVIERE, R. (1958) *El Gobernador Juan Bautista Bustos*, Imprenta de la Universidad, Córdoba.
- ◆ ROLDÁN, D. (2003) “La cuestión de la representación en el origen de la política moderna. Una perspectiva comparada (1770-1830)”, en SÁBATO, H. y LETTIERI, A. (comps.) *La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- ◆ ROMANO, S. (2002) *Economía, Sociedad y Poder en Córdoba. Primera mitad del siglo XIX*, Ferreyra Editor, Córdoba.
- ◆ ROMANO, S. (2004) “Instituciones coloniales en contextos republicanos: los jueces de la campaña cordobesa en las primeras décadas del siglo XIX y la construcción del estado provincial autónomo”, en HERRERO, F. (comp.), *Revolución. Política e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810*, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, pp. 167-200.
- ◆ ROMANO, S. (2010) “Las nuevas fuentes de legitimación del poder y sus protagonistas en la configuración del sistema republicano y representativo de la Provincia de Córdoba”, en TCACH, C. (coord) *Córdoba Bicentenario. Claves de su historia contemporánea*. Editorial de la UNC – CEA, Córdoba, pp. 15-35.

- ◆ ROMANO, S. y AYROLO, V. (2000) “¿Corporaciones, Familias o “Partidos”? La conformación de la Legislatura de la Provincia de Córdoba entre 1850-1855”, ponencia presentada en las *Primeiras Jornadas de Historia Regional Comparada*, Porto Alegre.
- ◆ ROMERO, L. (1976) *La feliz experiencia, 1820-1824*, Ed. La Bastilla, Buenos Aires.
- ◆ ROMERO, L. (coord.) (2012) *Dossier. François-Xavier Guerra y las “revoluciones hispánicas”*. Una controversia reciente, Nro. 24. Disponible en <http://historiapolitica.com/dossiers/fxguerra/>.
- ◆ ROSA, J. (1942) “Nos, los representantes del pueblo”, en *Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas*, Nro. 10.
- ◆ ROSA, J. (1943) “Alberdi y las ideas constitucionales del 53”, en *Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas*, Nro. 11.
- ◆ ROSA, J. (1984) *El fetiche de la Constitución*, Ave Fénix, Buenos Aires.
- ◆ ROSANVALLÓN, P. (2004) *El pueblo inalcanzable. Historia de la representación democrática en Francia*, Instituto Mora, México.
- ◆ RUIZ BALLÓN, A. (2013) *Pedro Gómez de la Serna (1806-1871). Apuntes para una biografía jurídica*, Dykinson, Madrid.
- ◆ SÁBATO, H. (1999) “Ciudadanía, soberanía y representación en la génesis del Estado Argentino, 1810-1852”, en SÁBATO, H. (comp.) *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, Fondo de Cultura Económica, México.
- ◆ SÁBATO, H., TERNAVASIO, M. y Otros (2011) *Historia de las Elecciones en la Argentina: 1805-2011*, El Ateneo, Buenos Aires.
- ◆ SAGÜÉS, N. (2006) *Constituciones Iberoamericanas: Argentina*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- ◆ SALAS, R. (1821) *Lecciones de derecho público constitucional para las escuelas de España*, 2 vol., Imprenta de D. Fermín Villalpando, Madrid.
- ◆ SALDÍAS, A. (1878) *Ensayo sobre la historia de la Constitución Argentina*, Imprenta y librería de mayo, Buenos Aires.
- ◆ SALVATORE, R. (1998a) “Expresiones federales: formas políticas del federalismo rosista”, en GOLDMAN, N. y SALVATORE, R. (comp.) *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, Eudeba, Buenos Aires.
- ◆ SALVATORE, R. (1998b) “Consolidación del régimen rosista (1835-1852)”, en GOLDMAN, N. (dir.) *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, Colección Nueva Historia Argentina, Tomo III, Sudamericana, Buenos Aires.
- ◆ SAN MARTINO DE DROMI, M. (1992) *Intendencias y provincias en la historia argentina*, Editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires.
- ◆ SAN MARTINO DE DROMI, M. (1994) *Documentos constitucionales argentinos*, Ciudad Argentina, Buenos Aires.

- ◆ SARTORI, G. (1999) “La ingeniería constitucional y sus límites”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Nro. 3, pp. 79-87. Disponible en <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:TeoriayRealidadConstitucional-1999-3-15800&dsID=PDF>.
- ◆ SEARLE, J. (1995) *The construction of social reality*, The Free Press, New York.
- ◆ SEGRETI, C. (1960) *La Gobernación de José Javier Díaz en 1820*, Cuaderno de Historia N° XXXI, Instituto de Estudios Americanistas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- ◆ SEGRETI, C. (1966) “La Independencia de Córdoba en 1815”, *Separata del Cuarto Congreso Internacional de Historia de América*, Tomo II, Buenos Aires, pp. 468-469.
- ◆ SEGRETI, C. (1970) *Juan Bautista Bustos en el escenario nacional y provincial*, Ediciones Culturales Cordobesas, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba.
- ◆ SEGRETI, C. (1995) *Federalismo rioplatense y Federalismo Argentino (El federalismo de Córdoba en los comienzos de la época independiente, 1810-1829)*, Centro de Estudios Históricos, Córdoba.
- ◆ SERVAN, C. (2012) “De la Constitución al Estado (1814-1914)”, en LORENTE, M. y VALLEJO, J. (coords.) Ob. cit.
- ◆ SILVA, F. (1931a) “Federalismo del Norte y del Centro en 1820”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 18, Nros. 5-6, julio-agosto, pp. 135-295.
- ◆ SILVA, F. (1931b) “Formas federales de Tucumán y Córdoba en 1820”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 18, Nros. 7-8, septiembre-octubre, pp. 217-385.
- ◆ SOLLA, J. (2007) “Justicia bajo administración (1834-1868)”, en LORENTE, M. (coord.) *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 291-324.
- ◆ SOLLA, J. (2011) *La discreta práctica de la disciplina. La construcción de las categorías de la responsabilidad judicial en España, 1834-1870*, Congreso de los Diputados (Colección monografías, 83), Madrid.
- ◆ TAPIA, F. (1966) *El cabildo abierto colonial*, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid.
- ◆ TAU ANZOÁTEGUI, V. (1961) “Las facultades extraordinarias y la suma del poder público en el derecho provincial argentino (1820-1853)”, en *Revista del Instituto de Historia del Derecho*, Nro. 12, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, pp. 66-105.
- ◆ TAU ANZOÁTEGUI, V. (1965) “Gobernados y Gobernantes en Argentina (Época Independiente)”, en *Gouvernés et gouvernants*, Éditions de la Librairie Encyclopédique, Bruxelles.
- ◆ TAU ANZOÁTEGUI, V. (1973) “La administración de justicia en las provincias argentinas (1820-1853)”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 1, pp. 205-249.
- ◆ TAU ANZOÁTEGUI, V. (1977) *Las Ideas Jurídicas en Argentina (Siglos XIX - XX)*, Editorial Perrot, Buenos Aires.

- ♦ TAU ANZOÁTEGUI, V. (1982) “Los comienzos de la fundamentación de las sentencias en Argentina”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 10.
- ♦ TAU ANZOÁTEGUI, V. (1992a) *Casuismo y Sistema*, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires.
- ♦ TAU ANZOÁTEGUI, V. (1992b) “La ley en América hispana, del descubrimiento a la emancipación”, en *Colección del Quinto Centenario del Descubrimiento de América*, Nro. V, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, pp. VII-439.
- ♦ TAU ANZOÁTEGUI, V. (1996) *Formación del Estado Federal Argentino, 1820-1852. El gobierno de Buenos Aires y los asuntos nacionales*, 2da. Ed., Perrot, Buenos Aires.
- ♦ TAU ANZOÁTEGUI, V. (2010) “Acerca de la elaboración y publicación de la ley en el Derecho Indiano”, en *Anuario de Historia del Derecho Español* (AHDE), Nro 80, pp. 133-156.
- ♦ TAU ANZOÁTEGUI, V. y MARTIRÉ, E. (2005) *Manual de Historia de las Instituciones Argentinas*, Séptima Edición Actualizada, Librería Histórica Perrot, Buenos Aires.
- ♦ TELL, S. (2008) *Córdoba rural, una sociedad campesina (1750-1850)*, Prometeo Libros, Buenos Aires.
- ♦ TERÁN, O. (2008) *Historia de las ideas en la Argentina: diez lecciones iniciales, 1810-1980*, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires.
- ♦ TERNAVASIO, M. (2000) “La supresión del cabildo de Buenos Aires: ¿crónica de una muerte anunciada?”, *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, Tercera serie, N° 21, 1er semestre, pp. 33-73.
- ♦ TERNAVASIO, M. (2002) *La Revolución del voto: Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires.
- ♦ TERNAVASIO, M. (2004a) “Construir poder y dividir poderes. Buenos Aires durante la “feliz experiencia” rivadaviana”, en *Boletín del Instituto de Historia Americana y Argentina “Dr. Emilio Ravignani”*, tercera serie, Nro. 26, pp. 7-45. Disponible en <http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/boletin-del-instituto/boletin-coleccion-en-linea#26>
- ♦ TERNAVASIO, M. (2004b) “La división de poderes en los orígenes de la política argentina”, en *Ciencia Hoy*, Vol. 14, Nro. 80.
- ♦ TERNAVASIO, M. (2007a) *Gobernar la Revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
- ♦ TERNAVASIO, M. (2007b) “Poder y poderes en tiempos de revolución. Reflexión para una historia política comparada de la primera mitad del siglo XIX”, en GUERRA, C. MAZZEO Y D. ROUILLON (eds.) *Historias compartidas. Economía, sociedad y poder, siglos XVI-XX*, Actas del primer encuentro de Historia Perú-Argentina, Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto Riva Agüero, Lima;
- ♦ TERNAVASIO, M. (2010) “Limitar el poder: un dilema republicano. Reflexiones sobre el caso rioplatense durante la primera mitad del siglo XIX”, en PALTÍ, E. (org.) *Mito y*

realidad de la “cultura política latinoamericana”, Debates en Iberoideas, Prometeo, Buenos Aires.

- ◆ TERNAVASIO, M. (coord.) (2011) *Dossier. La representación política en sus orígenes. El Río de la Plata en la primera mitad del Siglo XIX*, Nro. 18. Disponible en <http://historiapolitica.com/dossiers/representacionorigenes/>
- ◆ TÍO VALLEJO, G. (2004) *Tras las huellas de la nación: Los pasos perdidos de la historiografía argentina*, Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Ramón Leoni Pinto", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán.
- ◆ TÍO VALLEJO, G. (2008) “La administración de justicia y la experiencia de las autonomías provinciales en el Río de la Plata. El caso de Tucumán”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 36, pp. 365-398.
- ◆ TÍO VALLEJO, G. (2010) “Papel y grillos, los jueces y el gobierno en Tucumán, 1820-1840”, en *Nuevo mundo, nuevos mundos*, Nro. 10.
- ◆ TÍO VALLEJO, G. (coomp.) (2011) *La república extraordinaria. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX*, Prohistoria, Rosario.
- ◆ TORRES, A. (1945) “Antecedentes del Reglamento de 1821”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 32, Nros. 4-5, septiembre-diciembre, pp. 1037-1069; y (1946) Vol. 33, Nros. 3-4, julio-octubre, pp. 891-951.
- ◆ TORRES, A. (1948) “Organización administrativa de Córdoba; sus antecedentes históricos y legales”, en *Revista de la Universidad Nacional de Córdoba*, Vol. 35, Nros. 3-4, pp. 821-874, julio-octubre.
- ◆ TORRES, F. (2012) “Creación de la cátedra de derecho público en la Universidad de Córdoba (1834-1841)”, en *Anuario CIJS*, Nro. XIV, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, pp. 719-731.
- ◆ VALLEJO, J. (1992) *Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1250-1350)*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- ◆ VALLEJO, J. (1994) “Amor de Árbitos. Episodio de la Sucesión de Per Afán de Ribera el Viejo”, en *Fallstudien Zur Spanischen und Portugiesischen Justiz (15. Bis 20. Jahrhundert)*, Vittorio Klostermann, Francfort del Meno, Alemania, pp. 211-269.
- ◆ VALLEJO, J. (1998) "Acerca del fruto del árbol de los jueces. Escenarios de la justicia en la cultura del Ius Commune", en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, Nro. 2, *La Justicia en el Derecho Privado y en el Derecho Público*, UAM, Madrid.
- ◆ VALLEJO, J. (2010) “Paradojas del sujeto”, en GARRIGA, C. (Coord.) *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, Centro de Investigación y docencia Económicas, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, México, pp. 173-199.
- ◆ VALLEJO, J. (2013) “Sujeito e Código na Espanha do século XIX: A "microscópica" Lei de Dissenso de 1862 e as dimensões do poder paterno”, en MARTINS-COSTA, J. y BECK

- VARELA, L. (org.) *Código. Dimensão histórica e desafio contemporâneo. Estudos em homenagem ao Professor Paolo Grossi*, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, pp. 109-129.
- ◆ VARELA, L. (1910) *Historia Constitucional de la República Argentina*, Tomo III, Taller de impresiones oficiales, La Plata.
 - ◆ VATTEL, E. (1822) *El Derecho de Gentes ó Principios de la Ley Natural, aplicados á la conducta, y á los negocios de las naciones y de los soberanos*, Ibarra impresor de cámara de S.M., Madrid.
 - ◆ VERDO G. (1998) "Le règne du provisoire: l'élaboration constitutionnelle au Río de la Plata (1810-1820)" en LEMPÉRIÈRE, ROLLAND, MARTINEZ, LOMNÉ (dir.), *L'Amérique Latine face aux modèles européens: emprunts, adaptations, refus, XIXe-XXe siècles*, L'Harmattan, París, pp. 79-120.
 - ◆ VERDO, G. (2002) "El precio del poder: formas y usos políticos de la representación en la independencia argentina (1810-1821)", en *Revista de Indias*, Vol. LXII, Nro. 225, pp. 385-408.
 - ◆ VERDO, G. (2006a) *L'indépendance argentine entre cités et nation (1808-1821)*, Publications de la Sorbonne, París.
 - ◆ VERDO, G. (2006b) "El dilema constitucional en las Provincias Unidas del Río de la Plata (1810-1819)", en *Historia Contemporánea*, Nro. 33.
 - ◆ VERDO, G. (2009) "La guerre constituyente: Río de la Plata, 1810 -1821", en *Revista de Indias*, Vol. LXIX, Nro. 246, pp. 17-44.
 - ◆ VERDO, G. (2012) "Ciudades en revolución: la independencia en el Río de la Plata", en Encarna GARCIA MONERRIS y Carmen GARCIA MONERRIS (eds.) *Guerra, Revolución y Constitución (1808 y 2008)*, Universitat de València, Valencia, pp. 125-147.
 - ◆ VERDO, G. (2014) "L'organisation des souverainetés provinciales dans l'Amérique indépendante: le cas de la république de Córdoba, 1776-1827", en *Annales HSS*, dossier «Territoire et souveraineté», Vol. 69, Nro. 2, avril-juin 2014, pp. 349-381.
 - ◆ VILE, M. J. C. (2007) *Constitucionalismo y Separación de Poderes*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
 - ◆ VIVAS, M. (2010) "José Miguel Carrera y su invasión a la Provincia de Córdoba (consecuencias políticas y jurídicas)", en *Revista Chilena de Historia del Derecho*, Nro. 22, Tomo II, pp. 1073-1089. Disponible en <http://www.historiadelderecho.uchile.cl/index.php/RCHD/article/viewFile/22152/23470>
 - ◆ WASSERMAN, F. (1997) "La generación de 1837 y el proceso de construcción de la identidad nacional argentina", en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"*, Tercera serie, Nro. 15, Buenos Aires.
 - ◆ WEBER, M. (2014) *Economía y sociedad*, FCE, México.
 - ◆ YANZI FERREIRA, R. (2002) "La enseñanza del derecho público en la Universidad de Córdoba. 1834-1999", en *Cuadernos de Historia*, Nro 12, Instituto de Historia del

Derecho y de las Ideas Políticas “Roberto I. Peña”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, pp. 16-52. Disponible en <http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/institutos/instituto-de-historia-del-derecho/publicaciones>

- ◆ ZAMORA, R. (2012) “La oeconomica y su proyección para el justo gobierno de la república. San Miguel de Tucumán durante el siglo XVIII”, en *Revista de Historia del Derecho*, INHIDE, Nro. 44. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-17842012000200009&script=sci_arttext
- ◆ ZINNY, A. (1920) *Historia de los gobernadores de las Provincias Argentinas*, Vol. 3, Córdoba-Tucumán-Santiago del Estero-San Luis, Administración General Vaccaro, Buenos Aires.
- ◆ ZORRAQUÍN BECÚ, R. (1953) *El federalismo argentino*, La Facultad, Buenos Aires.